A.G.N.

COLECCION DE LEYES

1962
TOMO I

COLECCION
DE
LEYES

TOMO I

1962

A.G.N.

AGN

REPUBLICA DOMINICANA

COLECCION

DE

LEYES, RESOLUCIONES, DECRETOS Y REGLAMENTOS

DE LOS

Poderes Legislativo y Ejecutivo de la República de Enero a Diciembre del año

1962

TOMO I

Primera Parte

Poder Legislativo

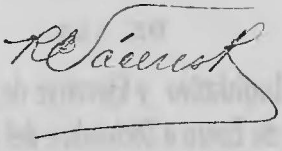
Del No. 5782 al No. 6034

EDICION OFICIAL

1979

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN
BIBLIOTECA

El Suscrito Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo
Certifica que la presente publicación es oficial



Lic. Rafael E. Cáceres Rodríguez

AGN
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
BIBLIOTECA

Ley No.5782, que restablece las disposiciones de los artículos 167, 203 in fine y 282 in fine del Código Penal.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5782

Artículo 1.– Quedan restablecidas las dispociones de los artículos 167, 203 *in fine,* y 282 *in fine* del Código Penal, y en consecuencia, tendrán nuevamente carácter suspensivo los recursos de oposición y apelación contra sentencias dictadas en materia penal que impongan penas de multa, así como los plazos para interponer dichos recursos.

Artículo 2.– Queda derogada la Ley No. 5293, del 22 de enero de 1960, que modificó el artículo 2 reformado por la Ley No. 1128, de fecha 4 de agosto de 1936, de la Ley No. 674, de fecha 21 de abril de 1934.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5783, que restablece el Articulo 1 de la Ley No. 5658, del 28 de octubre de 1961, que restableció el Artículo 1 de la Ley No. 5439 del 11 de diciembre de 1915, sobre Libertad Provisional bajo Fianza

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5783

Artículo 1.– Se restablece el artículo 1 de la Ley No. 5658, de fecha 28 de octubre de 1961, que restableció el artículo 1 de la Ley No. 5439, de fecha 11 de diciembre de 1915, sobre Libertad Provisional bajo Finaza, tal como fué modificado por la Ley No. 197, de fecha 14 de octubre de 1931, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 1.– En materia correccional el procesado deberá ser puesto en libertad provisional tan pronto como preste fianza que garantice su obligación de presentarse en todos los actos del procedimiento y para la ejecución del fallo. En materia criminal, la libertad provisional bajo fianza será facultativa, solamente otorgable por la Corte de Apelación correspondiente, juzgando en primera instancia, la cual hará uso de esta facultad en cualquier estado de la causa, cuando a su juicio haya razones poderosas en favor del pedimento y pudiendo dilatar su otorgamiento hasta la terminación de las gestiones del Juzgado de Instrucción apoderado del caso".

Artículo 2.– En consecuencia, queda derogada la Ley No. 5669, de fecha 15 de noviembre de 1961.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5784, que restablece el Artículo 14 de la Ley No. 344, del 29 de julio de 1943 y deroga la No. 4671, del 13 de abril de 1957

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NÚMERO 5784

Artículo 1.– Se restablece el artículo 14 de la Ley No. 344, de fecha 29 de julio de 1943, que establece un procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado, el Distrito Nacional o los Municipios, cuyo texto original es el siguiente:

"Artículo 14.– Cuando el Estado, los Municipios o el Distrito Nacional decidan enajenar una propiedad que hubieren obtenido por expropiación, por no haber realizado el propósito para el cual la expropiaron, se hará en la Gaceta Oficial un aviso de tal propósito. Los propietarios, personalmente, tendrán el derecho de readquirir la propiedad de que se trate en el mismo precio de la expropiación, siempre que depositaren el precio ya indicado y la petición relativa a la readquisición en un plazo de tres meses a

contar de la fecha de la Gaceta Oficial en que se hubiere publicado el aviso antes indicado".

Artículo 2.- En consecuencia, queda derogada la Ley No. 4671, de fecha 13 de abril de 1957.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No.5785, que confisca y declara bienes nacionales todos los teneres, créditos, acciones y obligaciones que pertenecieron a Rafael L. Trujillo Molina, a sus hijos, esposa, madre y otros familiares.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5785

CONSIDERANDO: que la cuantiosa fortuna acumulada por Rafael L. Trujillo Molina, muerto el 30 de mayo de 1961, así como la de sus familiares y afines, fué el resultado, en unos casos del abuso y en otros de la usurpación del Poder, para enriquecerse a sí mismo o a sus familiares, afines y allegados;

VISTO el artículo 8, ordinal 9, y el 116 (transitorio) de la Constitución de la República,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.–Se confiscan, y en consecuencia se declaran bienes nacionales, todos los bienes de cualquier naturaleza y dondequiera que estén situados, incluyendo créditos y acciones y obligaciones de cualquier compañía o corporación, nacional o extranjera, o de sus subsidiarias, que pertenecían a Rafael L. Trujillo Molina y los pertenecientes a María Martínez Alba Vda. Trujillo, a sus hijos Rafael Leonidas Trujillo Martínez, Rhadamés Trujillo Martínez, María de los Angeles Trujillo de León Estévez, Flor de Oro Trujillo, Odette Altagracia Julia Lourdes Mercedes Bienvenida Trujillo Ricardo, Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, Rafael José Ramón Trujillo Lovatón, Elsa Julia Trujillo Bermúdez y Bernarda Alejandrina Trujillo Pérez.

Art. 2.—Se confiscan, asimismo, y se declaran bienes nacionales todos los bienes de cualquier naturaleza y dondequiera que estén situados, incluyendo créditos y acciones y obligaciones de cualquier compañía o corporación, nacional o extranjera, o de sus subsidiarias, que pertenezcan a Altagracia Julia Molina Viuda Trujillo, Héctor B. Trujillo Molina, Pedro Vetilio Trujillo Molina, J. Arismendi Trujillo Molina, Virgilio Trujillo Molina, Romeo Trujillo Molina, Luis E. Ruíz Monteagudo, Julieta Trujillo Vda. Saviñón, Japonesa Trujillo de Ruíz, Nieves Luisa Trujillo Molina, José García, Marina Trujillo de García, Luis Rafael Trujillo Molina, Alma McLauglin de Trujillo, Candita de Trujillo, Elena Nicolás de Trujillo, Juana Lora de Trujillo, Francisco Martínez Alba, Virgilio García Trujillo, José García Trujillo, Danilo Trujillo Tejeda, Darío Trujillo, Luís Ruíz Trujillo, Francisco Nicolás Saviñón Trujillo, José Rafael Martínez García, Altagracia Saviñón de Martínez, Amable Romeo Trujillo Abreu y Luis José León Estévez.

Art. 3.—La Dirección General de Administración, Control y Recuperación de Bienes podrá devolver con la previa autorización del Consejo de Estado, todos aquellos bienes que las personas indicadas en la presente ley demostraren, por acto auténtico dentro de los 30 días a partir de la publicación de la presente ley, que los adquirieron antes del 16 de agosto de 1930, así como aquellos bienes que los artículos 592 y 593 del Código de Procedimiento Civil declaran inembargables.

Art. 4.—Asimismo, la referida Dirección General tomará todas las medidas necesarias para la ejecución de la presente Ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro días del mes de enero del mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Miembro.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Luís Amiama Tió,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5786, que prorroga por un mes el plazo de gracia a favor de los contribuyentes morosos de impuesto de la Cédula Personal de Identidad

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5786

ARTICULO UNICO.– Queda prorrogado por un mes más, o sea hasta el día 31 de enero de 1962, el plazo de gracia concedido por la Ley No.5625, de fecha 14 de septiembre de 1961, a favor de los contribuyentes morosos del impuesto de la Cédula Personal de Identidad.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5787, que especializa un fondo destinado a ejecutar el Plan de Obras de Emergencia Nacional

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5787

Artículo 1.— Los fondos remanentes de la operación de pago de las obligaciones directas del Estado Dominicano, el Banco de Reservas de la República Dominicana hecha con los fondos confiscados, en virtud de la Ley No. 5785, de fecha 4 de enero de 1962, quedan especializados en un fondo destinado a ejecutar el plan de obras de emergencia nacional.

Artículo 2.— Se autoriza a la Secretaría de Estado de Finanzas a gestionar un préstamo con el Banco de Reservas de la República Dominicana de hasta RD$5,000.000.00 (cinco millones de pesos oro), suma que quedará especializada también para la ejecución del plan más arriba indicado.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera.
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez.
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República,

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de enero del mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99°0 de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No.5788, que crea e integra la Junta Nacional de Planificación.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5788

Artículo 1.- Se crea una Junta Nacional de Planificación y Coordinación que dependerá directamente del Consejo de Estado, y la cual tendrá los siguientes objetivos y atribuciones:

a) Orientar y proyectar el desarrollo económico y social teniendo como normas fundamentales el aprovechamiento integral de los recursos del país y el mantenimiento de la estabilidad monetaria;

b) Coordinar los programas y proyectos de las diversas Secretarías de Estado y de las instituciones estatales, evitando interferencias y duplicaciones de esfuerzos perjudiciales para el cumplimiento adecuado de los fines que se persiguen; y

c) Velar por la ejecución general de los programas y proyectos que el Gobierno autorice e informar al Consejo de Estado por lo menos cada mes sobre el progreso de los mismos.

Artículo 2.- Dicha Junta dará su opinión al Consejo de Estado sobre la conveniencia del establecimiento de nuevas industrias o cultivos, exploraciones y explotaciones mineras, así como cualquier otra actividad de interés para la economía nacional, o sobre la intensificación de las actuales, para lo cual podrá sugerir todas las medidas conducentes a estimular la iniciativa privada, y si fuere necesario, la colaboración del Estado en el desarrollo de éstas, mediante su financiamiento u otro género de cooperación.

Artículo 3.- Asimismo la Junta tendrá a su cargo todo lo relativo a los estudios encaminados a armonizar el desarrollo de los planes del Gobierno con relación a la política monetaria, presupuestal y de crédito público, así como para recomendar al

Consejo de Estado alternativas sobre la política económica que contribuyan a un mayor desarrollo del país, pudiendo hacer propuestas sobre la conveniencia de que se adopten medidas encaminadas al establecimiento de acuerdos económicos con otros países, para fomentar los préstamos y programas de inversiones, así como las importaciones y exportaciones, para promover la recuperación y el desarrollo de la economía nacional.

Artículo 4.– La Junta se ocupará, además, de la preparación, ejecución y revisión periódica de los programas de desarrollo económico y social, y de la adopción de las medidas de acción inmediata y a corto plazo previstas en la "Alianza para el Progreso", conforme aparecen detalladas en el Título 2do. de la Carta de Punta del Este.

Artículo 5.– La Junta adoptará todas las disposiciones que estime adecuadas para la más eficaz coordinación de la asistencia técnica que pueda recibir el país de las organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros e instituciones privadas, así como para la mejor utilización de las becas puestas a disposición del Gobierno Dominicano, con fines a que de tal asistencia se deriva un positivo beneficio nacional.

Artículo 6.– El Estado y sus organismos autónomos no podrán contraer empréstitos con las instituciones internacionales o extranjeras, públicas o privadas, sin el previo dictamen de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación.

Artículo 7.– La Junta Nacional de Planificación y Coordinación estará integrada en la forma siguiente:

Un Consejero de Estado, que la presidirá;
El Secretario de Estado de Industria y Comercio, que actuará como Vicepresidente;
Los Secretarios de Estado de Finanzas, Agricultura, Obras Públicas, y el Gobernador del Banco Central, Miembros.
Los demás Secretarios de Estado participarán en las deliberaciones de la Junta, como miembros de ella, cuando se traten asuntos concernientes a sus respectivos despachos.

Artículo 8.– La Junta tendrá como organismo técnico y ejecutivo una Secretaría General, con las secciones técnicas y el personal que determinen los reglamentos.

Artículo 9.- La Junta podrá solicitar la colaboración de todas las personas capacitadas en el campo de la ciencia, la economía, la industria y el comercio, así como de los organismos oficiales que estime conveniente, y a contratar los servicios de técnicos especializados.

Artículo 10.- El Consejo de Estado dictará la reglamentación que sea pertinente para el eficiente cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 11.- La presente Ley deroga y sustituye la Ley No. 5649, de fecha 25 de octubre de 1961, que crea un Consejo Nacional de Planificación Económica, y la Junta Nacional de Planificación y Coordinación asumirá las atribuciones encomendadas al citado Consejo, según se establecen en el Artículo 1ro. de la Ley No. 5650, para estimular las inversiones de capitales extranjeros, de fecha 26 de octubre de 1961.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5789, que deroga el Artículo 4 de la Ley No. 289, de mayo 26 de 1943, sobre matanza de animales para consumo o industrialización.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5789

ARTICULO UNICO.– Queda derogado el artículo 4 de la Ley No. 289, del 26 de mayo de 1943, sobre matanza de animales para consumo o industrialización, que dispone que los animales que sean propiedad de empresas o personas particulares que se sacrifiquen en los Mataderos Municipales para ser industrializados estarán además sujetos al pago de un impuesto de un centavo por kilogramo.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5790 que deroga Las Leyes No. 5392 y 5130 de 1960, que regula el beneficio de las jubilaciones a los funcionarios de las instituciones autónomas o semiautónomas del Estado

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5790

UNICO.– Quedan derogadas las Leyes No. 5392, de fecha 20 de agosto de 1960, que regula el beneficio de las jubilaciones a los funcionarios y empleados de las instituciones autónomas o semiautónomas del Estado, y 5430, que dispone que las instituciones autónomas o semiautónomas del Estado pueden traspasar los activos de sus respectivos planes de retiro, pensiones y pago en caso de muerte de sus funcionarios y empleados, de fecha 18 de noviembre de 1960.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero del mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5791 que modifica los artículo 1 y 2 de la Ley No. 859 de Impuesto sobre Fósforos del 13 de marzo de 1935, últimamente reformadas por las Leyes No. 4493, 4668 y 5264, y dicta otras disposiciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5791

Artículo 1.— Se modifican los artículos 1 y 2 de la Ley No. 859, de Impuesto sobre Fósforos, de fecha 13 de marzo de 1935, ultimamente reformados por las Leyes Nos.4493 de fecha 13 de julio de 1956, 4668, del 12 de abril de 1957, y 5264, del 11 de diciembre de 1959, para que rijan del siguiente modo:

"Artículo 1.— Impuesto. Todo fabricante de fósforos en la República, deberá pagar un impuesto único, conforme la siguiente escala:

a) Sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de hasta 15 fósforos RD$0.01/3

b) Sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de más de 15 fósforos hasta 30 fósforos ..... RD$0.02/3

c) Sobre una cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de más de 30 hasta 45 fósforos ..... RD$0.01

d) Sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de más de 45 fósforos hasta 60 fósforos ..... RD$0.011/3

e) Sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de 60 fósforos, por cada 60 fósforos o fracción de 60 ..... RD$0.011/3

f) Sobre fósforos no envasados, por cada 60 fósforos o fracción de 60 ..... RD$0.11/3

Artículo 2.— Para el pago del impuesto se aplicará un sello de Rentas Internas de RD$0.01/3 para las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga hasta 15 fósforos. A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga más de 15 fósforos hasta 30, se les aplicará un sello de Rentas Internas de RD$0.02/3. A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga más de 30 fósforos hasta 45 se les aplicará un sello de Rentas Internas de RD$0.01. A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga más de 45 fósforos hasta 60, se les aplicará un sello de Rentas Internas de RD$0.011/3. A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga más de 60 fósforos, se les aplicará por cada 60 fósforos o fracción de 60, un sello de Rentas Internas de RD$0.011/3. Los sellos de Rentas Internas se aplicarán sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase que contenga los fósforos, de tal modo que no pueda ser abierto o los fósforos usados, sin que el sello adherido sea roto.

a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5790 que deroga las Leyes No. 5392 y 5130 de 1960, que regula el beneficio de las jubilaciones a los funcionarios de las instituciones autónomas o semiautónomas del Estado

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5790

UNICO.- Quedan derogadas las Leyes No. 5392, de fecha 20 de agosto de 1960, que regula el beneficio de las jubilaciones a los funcionarios y empleados de las instituciones autónomas o semiautónomas del Estado, y 5430, que dispone que las instituciones autónomas o semiautónomas del Estado pueden traspasar los activos de sus respectivos planes de retiro, pensiones y pago en caso de muerte de sus funcionarios y empleados, de fecha 18 de noviembre de 1960.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo.
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero del mil novecientos sesenta y dos. años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5791 que modifica los artículo 1 y 2 de la Ley No. 859 de Impuesto sobre Fósforos del 13 de marzo de 1935, últimamente reformadas por las Leyes No. 4493, 4668 y 5264, y dicta otras disposiciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5791

Artículo 1.– Se modifican los artículos 1 y 2 de la Ley No. 859, de Impuesto sobre Fósforos, de fecha 13 de marzo de 1935, ultimamente reformados por las Leyes Nos.4493 de fecha 13 de julio de 1956, 4668, del 12 de abril de 1957, y 5264, del 11 de diciembre de 1959, para que riján del siguiente modo:

"Artículo 1.— Impuesto. Todo fabricante de fósforos en la República, deberá pagar un impuesto único, conforme la siguiente escala:

a) Sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de hasta 15 fósforos RD$0.01/3

b) Sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de más de 15 fósforos hasta 30 fósforos ..... RD$0.02/3

c) Sobre una cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de más de 30 hasta 45 fósforos ..... RD$0.01

d) Sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de más de 45 fósforos hasta 60 fósforos ..... RD$0.011/3

e) Sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase de 60 fósforos, por cada 60 fósforos o fracción de 60 ..... RD$0.011/3

f) Sobre fósforos no envasados, por cada 60 fósforos o fracción de 60 ..... RD$0.11/3

Artículo 2.— Para el pago del impuesto se aplicará un sello de Rentas Internas de RD$0.01/3 para las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga hasta 15 fósforos. A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga más de 15 fósforos hasta 30, se les aplicará un sello de Rentas Internas de RD$0.02/3. A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga más de 30 fósforos hasta 45 se les aplicará un sello de Rentas Internas de RD$0.01. A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga más de 45 fósforos hasta 60, se les aplicará un sello de Rentas Internas de RD$0.011/3. A las cajitas, libritos, paquetes o cualquier otro envase que contenga más de 60 fósforos, se les aplicará por cada 60 fósforos o fracción de 60, un sello de Rentas Internas de RD$0.011/3. Los sellos de Rentas Internas se aplicarán sobre cada cajita, librito, paquete o cualquier otro envase que contenga los fósforos, de tal modo que no pueda ser abierto o los fósforos usados, sin que el sello adherido sea roto.

La persona que abra los envases o use los fósforos deberá romper los sellos antes de usarlos".

Artículo 3.— Queda derogada la Ley No. 5781, de fecha 31 de diciembre de 1961.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barreras,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero del mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5792, que modifica el Artículo 4 de la Ley No. 4401 de 9 de marzo de 1956, sobre los Alcaldes Pedáneos

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5792

UNICO.– Queda modificado el artículo 4 de la Ley No. 4401, de fecha 9 de marzo de 1956, sobre los Alcaldes Pedáneos, y Reglamentación de sus funciones, para que rija de la siguiente manera:

"Artículo 4.– Los Alcaldes y los Ayudantes de Alcalde serán designados y removidos por los Ayuntamientos y disfrutarán de sueldo siempre que les sea fijado en la Ley de Gastos Públicos".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No.5793, que denomina en lo adelante "19 de Noviembre", la Fortaleza de Valverde.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5793

Artículo 1.– La Fortaleza "General de Brigada Aníbal J. Trujillo Molina", de Valverde, se denominará en lo adelante Fortaleza "19 de Noviembre".

Artículo 2.– Queda modificada, en cuanto sea necesario, la Ley No. 4891, de fecha 25 de abril de 1958.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero del mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No.5794, que concede sendas pensiones del Estado a las señoras Lucía A. Vda. Malagón y Fresa de Peña Vda. Sicart.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5794

UNICO.– Se conceden sendas pensiones del Estado de RD$100.00 (cien pesos oro) mensuales cada una, a las señoras Lucila A. Vda. Malagón y Fresa de Peña Vda. Sicart.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente.

Eduardo Read Barreras,
Segundo Vicepresidente.

Luís Amiama Tió,
Miembro.

Monseñor Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Miembro.

Antonio Imbert Barreras,
Miembro.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de enero del mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5795 que declara propiedad del Estado Dominicano las acciones al portador emitidas por las compañías designadas por los Decretos Nos. 7347, 7372, 7382, 7433, 7456, 7481 y 7499

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5795

Artículo 1.– Se declara que pertenecen al Estado Dominicano las acciones al portador emitidas por las compañías designadas por los Decretos Nos. 7347, 7372, 7382, 7433, 7456, 7481 y 7499, de fechas 28 de noviembre, 4, 7, 18, 22, 28 y 29 de diciembre de 1961, respectivamente, por haber sido confiscadas dichas acciones por la Ley No. 5785, de fecha 4 de enero de 1962, contra personas mencionadas en esa ley y que evidentemente ejercían una influencia y control preponderantes en la dirección y negocios de dichas empresas, hasta la desaparición y derrumbamiento del régimen político que auspició el funcionamiento de las mencionadas empresas.

Artículo 2.– La Dirección de Administración, Control y Recuperación de Bienes convocará, dentro de los 30 días de la entrada en vigor de esta ley, Juntas Generales de Accionistas de las indicadas compañías para el nombramiento de nuevos funcionarios ejecutivos, directivos y administrativos y designará, en cada caso, la persona que representará al Estado en las Juntas de Accionistas de las compañías mencionadas en los Decretos a que se ha hecho referencia.

Párrafo.– Si los accionistas convocados no concurrieren el día señalado por la convocatoria en número suficiente para integrar el quórum reglamentario, la Dirección de Administración, Control y Recuperación de Bienes procederá a designar los funcionarios a que se refiere el presente artículo.

Artículo 3.– Las disposiciones anteriores se aplicarán también en relación con las acciones de cualquier naturaleza que tengan las personas cuyos bienes fueron confiscados en virtud de la referida Ley No. 5785, del 4 de enero de 1962, en cualquier compañía organizada de acuerdo con las leyes de otros países.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente.

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Nicolás Pichardo,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118^{0} de la Independencia y 99^{0} de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5796 que modifica la parte capital del artículo 3 de la Ley No. 2397, del 27 de mayo de 1950, y el artículo 44 de la Ley de Patentes

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5796

Artículo 1.— Se modifica la parte capital del artículo 3 de la Ley No. 2397, de fecha 27 de mayo de 1950, para que rija con el siguiente texto:

"Artículo 3.— El producto de estos impuestos se distribuirá en la Tesorería de la República como sigue:

24 por ciento para el fondo general (fondo 100) 60 por ciento para los fondos municipales (fondo 6000) 1 por ciento para los gastos y servicios del control oficial sobre el petróleo (fondo 14 14)

15 por ciento para el plan de mejoramiento social y económico, obras públicas y otros fines de interés nacional, según lo disponga el Poder Ejecutivo (fondo 1376) 100 por ciento.

Artículo 2.— Se modifica el artículo 44 de la Ley No. 4456 de Patentes, de fecha 24 de mayo de 1956, modificado por la Ley No. 5690, de fecha 1ro. de diciembre de 1961, para que rija del siguiente modo:

"Artículo 44.—El ochenta por ciento (80 o/o) de las sumas que se recauden en el Distrito Nacional y los Municipios por concepto del Impuesto establecido en la presente Ley, pertenecerá a las entidades que se indican a continuación, en la siguiente forma y proporción: el setenta y tres por ciento (73 o/o) para el Distrito Nacional y los Municipios, y el siete por ciento (7 o/o) para las Cámaras de Comercio establecidas en el país.

Párrafo I.—Después de retener el setenta y tres por ciento (73 o/o) de las sumas que recauden las Tesorerías Municipales, por concepto del impuesto perteneciente al Municipio, los Te-

soreros Municipales respectivos depositarán el veintisiete por ciento (27 o/o) restante en las correspondientes Colecturías de Rentas Internas y Bienes Nacionales. Esta operación se realizará diariamente o en cada día que se opere una recaudación.

Párrafo II.— Las porciones de este impuesto que corresponden al Distrito Nacional y a los Municipios cuya recaudación sea efectuada por las Colecturías de Rentas Internas y Bienes Nacionales, serán reembolsadas en la forma que establezca la Dirección General de Rentas Internas y Bienes Nacionales."

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente.

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Nicolás Pichardo,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No.5797, que castiga con prisión correccional y con multa de RD$25.00 a RD$200.00 sin perjuicio de las penas que puedan aplicarse a los autores de hechos previstos y sancionados por el Código Penal (ataques por dos personas o más a la propiedad ajena).

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5797

Artículo 1.– Se castigará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión correccional y con multa de RD$25.00 a RD$200.00, sin perjuicio de las penas que puedan aplicarse a los autores de hechos previstos y sancionados por el Código Penal, la trama que, ejecutada por dos o más personas, se materialice en forma de ataque por vías de hecho, desde el exterior a edificios, casas, otras construcciones o sus dependencias, urbanos o rurales, que pertenezcan a personas físicas o morales, públicas o privadas; o la comisión de estos mismos hechos en el interior de dichos bienes.

Artículo 2.– Cuando el ataque produzca pérdidas o destrucción de bienes o se realice por vías de hecho contra las personas, se aplicará a los culpables el máximun de la pena que señala el artículo primero.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente.

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente.

Mos. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Nicolás Pichardo,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5798, que exonera de ciertos impuestos las papas importadas en períodos que no sean de cosecha nacional

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5798

Artículo 1.– Las papas frescas que se importen en períodos que no sean de cosecha nacional, o en períodos de escasez, estarán exentas de los impuestos establecidos por las leyes Nos. 634 del 7 de febrero de 1934, 965 del 11 de agosto de 1945, 2568 del 4 de diciembre de 1950, 4456, del 24 de mayo de 1956, y 5048, del 23 de diciembre de 1960, así como de cualquier otro impuesto que grave en la actualidad la importación de papas frescas, excepción hecha del impuesto a que se refiere la Ley No. 5653, de fecha 28 de octubre de 1961.

Artículo 2.– La Secretaría de Estado de Agricultura determinará los períodos de no cosechas o de escasez de papas en el país debiendo publicar un aviso por el cual señale el comienzo y fin de dicho período durante el cual entrarán en vigor las exoneraciones indicadas en el artículo anterior.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Rafael F. Bonnelly,
Primer Vicepresidente.

Eduardo Read Barrera,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Nicólás Pichardo,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

JOAQUIN BALAGUER
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, los trece días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

JOAQUIN BALAGUER

Ley No. 5799, que restablece las disposiciones de la Ley No. 4327 del 11 de noviembre de 1955, que prohíbe exportar o llevar fuera del territorio dominicano, monedas del cuño nacional, y dicta otras disposiciones sobre la materia

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5799

Artículo 1.– Se restablecen las disposiciones de la Ley No. 4327, de fecha 11 de noviembre de 1955, a la cual se agregan las que se consignan más adelante.

Artículo 2.– Queda prohibido exportar o llevar fuera del territorio nacional o importar o introducir en él, la moneda nacional, ya sea ésta en metálico o en billetes emitidos por el Banco Central de la República Dominicana.

Artículo 3,– Sin embargo, el Banco Central de la República Dominicana tendrá facultad para reglamentar la exportación o salida o la importación o introducción de dicha moneda de acuerdo con las disposiciones que al efecto dicte la Junta Monetaria en los siguientes casos: a) cuando fuere necesario para el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Central o de la Ley Monetaria; b) Cuando sea para fines turísticos o numismáticos; y c) cuando convenga al interés nacional.

Artículo 4.– El hecho o la tentativa de exportar o llevar fuera del país o de importar o introducir en el país moneda nacional, con excepción de los casos indicados en el artículo 3 de la presente ley, se castigará con multa ascendente al doble del valor que se haya exportado, o llevado, o intentado exportar o llevar fuera del país o importado o intentado importar o introducir en el país; o con prisión correccional de uno a seis meses, o con ambas penas a la vez.

Artículo 5.– Las disposiciones anteriores regirán por el término de un año, a partir de la publicación de la presente ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominiana, a los veinte días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5800 que dispone la verificación de los pasaportes expedidos con anterioridad al 21 de enero de 1962

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5800

CONSIDERANDO: Que se hace necesario verificar la legalidad de todos los pasaportes expedidos durante el pasado régimen, en razón de que se tiene conocimiento de que muchos de ellos fueron concedidos irregularmente, sin registrarse en la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en la mayoría de los casos, en favor de espías extranjeros a quienes se les atribuía la condición de dominicanos.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Quedan cancelados todos los pasaportes dominicanos expedidos hasta la presente fecha.

Artículo 2.— La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores procederá a la verificación de dichos pasaportes, y validará, sin costo alguno, aquellos que reunan condiciones de legalidad.

Artículo 3.— Asimismo, los Cónsules dominicanos validarán los pasaportes a los dominicanos que se encuentren en el extranjero, previa verificación hecha con la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de que dichos pasaportes fueron expedidos regularmente.

Artículo 4.— Las empresas de transporte que en violación a lo preceptuado anteriormente hagan llevar a territorio nacional personas cuyos pasaportes no hayan sido validados de conformidad con las disposiciones de la presente, serán condenadas al pago de una multa de RD$1,000.00 a RD$10,000.00 por cada infracción.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° e la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5801, que libera de ciertos impuestos, la producción y exportación de azúcares, melazas finales, mieles ricas, siropes y otros productos similares, a partir de la zafra 1961-1962, inclusive.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5801

Artículo 1.—A partir de la zafra del año 1961-1962, inclusive, la producción y exportación de los primeros 600,000 quintales de azúcares crudos o corrientes de cada compañía, así como la producción y exportación de melazas finales, mieles ricas invertidas, siropes y otros productos similares, estarán libres de todo impuesto, sin perjuicio del impuesto establecido por la Ley No. 5705, de fecha 15 de diciembre de 1961, que se liquidará con el 12 por ciento adicional que ha venido rigiendo hasta ahora.

Artículo 2.— En consecuencia de las disposiciones contenidas en el artículo anterior, la producción y exportación de las mieles finales y de los primeros 600,000 quintales de azúcares crudos o corrientes de la fabricación anual de cada compañía del país queda exenta del pago de los impuestos establecidos por las leyes siguientes:

a) Ley No. 227, del 16 de noviembre de 1931, que establece un impuesto sobre documentos aduaneros;

b) Ley No. 715, del 5 de julio de 1934, sobre movimiento de carga y servicio de muelle y almacenaje;

c) Leyes No. 885, del 1º de mayo de 1945, y No. 1067, del 24 de diciembre de 1945, de impuesto especial de exportación (UNRRA);

d) Ley No. 1140, del 21 de marzo de 1946, que establece un impuesto especial sobre exportación de azúcar y melazas de producción nacional;

e) Ley No. 1141, del 22 de marzo de 1946, que modifica el artículo 2 de la Ley No. 595, del 31 de octubre de 1941, sobre tarifa para el servicio de arrimo y manejo de carga;

f) Ley No. 2568, del 4 de diciembre de 1950, de impuesto sobre mercancías;

g) Ley No. 2873, del 5 de mayo de 1951, que crea un impuesto de 1 1/2 centavos por cada 100 libras de azúcar destinadas a la exportación; y

h) Ley No. 4456, del 24 de mayo de 1956, sobre Patentes, en su acápite e) del artículo 43, y Ley No. 273, del 16 de noviembre de 1925, que crea un recargo sobre la misma.

Artículo 3.— Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) Ley No. 424, del 14 de marzo de 1941, de impuestos sobre melazas;

b) Ley No. 4025, de fecha 14 de enero de 1955, que establece un impuesto sobre la exportación de mieles ricas invertidas; y

c) Ley No. 4578, de fecha 31 de octubre de 1956, que establece un impuesto sobre la exportación de mieles finales de producción nacional.

Artículo 4.– La presente ley modifica, en cuanto sea necesario, cualquier disposición que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5802, que autoriza transferencia de fondos en la Ley de Gastos Públicos vigente.

EL CONSEJO DE ESTADO
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5802

ARTICULO PRIMERO: Del Balance no Apropiado correspondiente al Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el años 1962, ascendente a RD$754,147.14, se destina la suma de RD$132,935.61 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS) para efectuar las siguientes apropiaciones:

AL:

CAPITULO I

PODER LEGISLATIVO

10110 SENADO			RD$ 1,800.00
G10110A Servicios Personales	RD$	1,800.00	

CAPITULO V

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10340 OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO			RD$ 1,500.00
G10340A Servicios Personales	RD$	1,500.00	

CAPITULO VII
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10426	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS	RD$	1,200.00
G10426-A	Servicios Personales	RD$	1,200.00

CAPITULO VIII
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION
Y BELLAS ARTES

31503	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y NORMALISTA	RD$	16,500.00
G31503-A	Servicios Personales	RD$	16,500.00
31534	SECCION NACIONAL DOMINICANA DE INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA	RD$	1,200.00
G31534A	Servicios Personales	RD$	1,200.00

CAPITULO X
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD
Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO	RD$	9,367.82
G10499A	Servicios Personales	RD$	9,367.82
31401	HOSPITALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO	RD$	92,000.00

G31401 Mantenimiento y Atenciones RD$ 92,000.00

CAPITULO XII
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA

10210 OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO RD$ 9,267.82
G10210A Servicios Personales RD$ 9,367.82

RD$ 132,935.64

ARTICULO SEGUNDO: Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962:

CAPITULO IV-I

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

10511 JUNTA CENTRAL ELECTORAL RD$ 10,578.25

G10511B Otros Gastos Corrientes. RD$ 10,578.25

CAPITULO VIII-I

UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO

31515 UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO. RD$ 1,878,151.75

G31515A Servicios Personales RD$1,151,380.00
G31515B Otros Gastos Corrientes. RD$ 60,000.00

G31515C	Adquisición de Propiedades	RD$ 8,000.00	
G31515	Atenciones Varias	RD$ 658,771.75	
		RD$1,878,151.75	
31523	INSTITUTO CARTOGRAFICO UNIVERSITARIO		RD$ 111,270.00
G31523A	Servicios Personales	RD$ 91,620.00	
G31523	Atenciones Varias.	RD$ 19,650.00	
		RD$ 111,270.00	
			RD$2,000,000.00

AL: CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10411	DIRECCION DEL SERVICIO DE ECONOMIA Y COORDINACION PARA LOS GASTOS DEL GOBIERNO		RD$2,000,000.00
G10411F	Subvenciones	RD$2.000,000 00	
			RD$2,000,000.00

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Donald J. Reid Cabral
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5803, que modifica el Artículo 3 de la Ley No. 4249, del 13 de agosto de 1961, sobre pasantía profesional de los Ingenieros Arquitectos. Ingenieros Civiles y Agrimensores

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5803

Artículo 1.— Queda modificado el artículo 3 de la Ley No. 4249, de fecha 13 de agosto de 1961, que hace obligatoria la

pasantía profesional de los Ingenieros Arquitectos, Ingenieros Civiles y Agrimensores graduados en la Universidad de Santo Domingo, para la obtención del exequátur y sus modificaciones, para que rija con el siguiente texto:

"Artículo 3.- Los ingenieros topógrafos y los agrimensores graduados en la Universidad de Santo Domingo no podrán obtener el exequátur del Poder Ejecutivo sino después de haber ejercido su profesión durante seis meses al servicio de la Oficina Revisora de Mensuras Catastrales y otros seis meses más al servicio de la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones o en la Dirección General de Recursos Hidráulicos de la Secretaría de Estado de Agricultura, y en la forma en que éstas lo indiquen."

Artículo 2.- En consecuencia, queda modificada en cuanto sea necesario, la Ley No. 5413, de fecha 12 de octubre de 1960.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República y
del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera.
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió.
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5804, que declara Amnistía total de los hechos imputados al señor José Ricardo Roques Martínez

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NÚMERO 5804

UNICO.— Se declara amnistía total de los hechos imputados al señor José Ricardo Roques Martínez, mediante sentencia dictada por la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en atribuciones criminales (en contumacia), de fecha 4 de diciembre de 1947.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5805, que concede pensión del Estado a la señora María Josefa Jiménez

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5805

UNICO.– Se modifica el artículo 1 de la Ley No. 4535, de fecha 15 de septiembre de 1956, para que rija del siguiente modo:

Artículo 1.– Se concede una pensión del Estado de sesenta pesos oro (RD$60.00) mensuales a la señora María Josefa Jiménez, hija del ex Presidente de la República Juan Isidro Jiménez."

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5806 que dispone el retiro, mediante canje durante el plazo de tres días, de los billetes del Banco Central de la República Dominicana, actualmente en circulación, de RD$50.00; RD$100.00; RD$500.00 y RD$1,000.00.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5806

CONSIDERANDO que desde la creación del Banco Central de la República Dominicana ha transcurrido un tiempo suficiente que hace necesario, para la determinación de las verdaderas obligaciones de dicha institución bancaria, que se proceda al retiro de las emisiones de sus billetes actualmente en circulación;

CONSIDERANDO que de acuerdo a comprobaciones hechas por el Banco Central de la República Dominicana las pérdidas y el deterioro causados por el uso y otros motivos han reducido la circulación efectiva de ciertas emisiones, de modo considerable, por debajo de lo que muestran sus libros;

CONSIDERANDO además que existen graves presunciones de que apreciables cantidades de billetes del Banco Central de la República Dominicana se encuentran en poder de las personas

citadas en la Ley No. 5785 de fecha 4 de enero de 1962, respecto de las cuales se dispuso la confiscación y declaración como bienes nacionales "de todos los bienes de cualquier naturaleza y donde quiera que estén situados", pertenecientes a dichas personas;

CONSIDERANDO que con el fin de evitar que sean violadas por medios indirectos las disposiciones de la indicada ley y obviar, al mismo tiempo, los trastornos de carácter monetario que conlleva la falta de una determinación precisa del monto de la verdadera emisión monetaria de los billetes del Banco Central de la República Dominicana, en circulación;

VISTOS los artículos 97 y 98 de la Constitución de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Por la presente se dispone el retiro de las emisiones de billetes del Banco Central de la República Dominicana, actualmente en circulación, de las denominaciones de cincuenta pesos oro (RD$50.00), cien pesos oro (RD$100.00), quinientos pesos oro (RD$500.00) y de mil pesos oro (RD$1,000.00).

Artículo 2.- En un plazo de 3 días a contar de la fecha de la publicación de la presente ley, el Banco Central de la República Dominicana cambiará, directamente o a través de los Bancos comerciales establecidos en el país, los billetes de las denominaciones de un peso oro (RD$1.00), y cinco pesos oro (RD$5.00), diez pesos oro (RD$10.00) y veinte pesos oro (RD$20.00).

Artículo 3.- Transcurrido dicho plazo, los billetes de las denominaciones indicadas en el artículo 1 no podrán ser canjeados por billetes de otras denominaciones ni por monedas metálicas, y dejarán de tener circulación legal y fuerza liberatoria para el pago de las obligaciones públicas y privadas.

Artículo 4.- La Junta Monetaria, propondrá al Poder Ejecutivo, de conformidad con el Artículo 4 de la Ley Monetaria, todo lo concerniente a los billetes que deberán emitirse para sustituir las emisiones retiradas o las que están actualmente en circulación.

Artículo 5.– Vencidos los plazos indicados en los artículos 2 y 3 de la presente ley, la Junta Monetaria dispondrá todo cuanto fuere necesario con el fin de determinar la reducción de las obligaciones del Banco Central resultante del retiro de billetes dispuesto por la presente Ley, así como la incorporación de las ganancias eventuales que el Banco pueda obtener, a las reservas generales del mismo.

Artículo 6.– La presente ley, modifica, en cuanto sea necesario, las disposiciones de los artículos 6 y 7 de la Ley Monetaria, así como de cualquier otra ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada oficialmente en el periódico "El Caribe" y en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de encro de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5807 que declara el 5 de abril como el Día del Periodismo Nacional

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5807

CONSIDERANDO que el 5 de abril del año 1821 apareció el primer periódico dominicano llamado "El Telégrafo Constitucional de Santo Domingo"; que ese órgano de prensa no sólo fué el primero de carácter popular que se publicó en el país, sino que se distinguió por su tendencia liberal y por dar expresión a las aspiraciones del pueblo dominicano en pro de su autonomía, según los propios documentos oficiales de la época; que, por tanto, el 5 de abril es el día más apropiado para ser consagrado al periodismo nacional.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– El 5 de abril de cada año será celebrado como día del Periodismo Nacional. En los años en que ese día coincida con las solemnidades de la Semana Santa, será celebrado el día no feriado que resulte más próximo.

Artículo 2.– El Día del Periodismo Nacional los Periodistas gozarán de franquicia telegráfica y telefónica para intercambiarse mensajes de confraternidad que no excedan, cada uno, de diez palabras.

Artículo 3.— La presente Ley sustituye las disposiciones legales o reglamentarias anteriores acerca de la materia.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5808 que deroga la Ley No. 1312 del 10 de junio 1937, que adoptó el Himno del Ejército Nacional

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5808

UNICO.— Queda derogada la Ley No. 1312, de fecha 10 de junio de 1937, que adoptó como Himno del Ejercito Nacional el compuesto por el entonces Director de la Banda de Música del Ejército. Capitán José D. Cerón, con letra del poeta Emilio A. Morel.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5809 que crea la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5809

Artículo 1.– Se crea la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes, cuyas atribuciones son las que se indican a continuación:

1ro.– Controlará y fiscalizará los intereses del Estado en todas las empresas en las cuales tengan participación los herederos de Rafael L. Trujillo Molina, los familiares, afines y allegados de éste, así como todos los personeros del pasado régimen que se enriquecieron al amparo de la tiranía;

2do.– Asimismo, administrará todos los bienes, muebles e inmuebles urbanos y rurales, que hayan sido y sean confiscados en el futuro a las personas que se mencionan en el ordinal anterior;

3ro.– Perseguirá el cobro de las acreencias que puedan existir en favor de las personas más arriba señaladas;

4to.– Dispondrá todo lo que sea pertinente con el fin de que el Estado tenga un control en las empresas y bienes indicados, para evitar fraudes en su perjuicio; y

5to.— Conocerá de las reclamaciones de los particulares que tengan su origen en los despojos realizados por las personas señaladas precedentemente; establecerá los derechos que deban ser objeto de depuración, la situación jurídica de las reclamaciones, y en fin, propondrá al Consejo de Estado las soluciones que sean de lugar de acuerdo al carácter específico de cada caso.

Artículo 2.— Los asuntos a cargo de la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes serán despachados mediante los siguientes funcionarios y empleados;

1ro. Un Secretario de Estado:

2do. Dos Subsecretarios de Estado, uno de los cuales podrá, a juicio del Secretario de Estado, desempeñar sus funciones en cualquier ciudad del país de acuerdo a las necesidades del servicio;

3ro. Los demás funcionarios, técnicos y empleados requeridos por los asuntos que tiene a su cargo dicha Secretaría de Estado;

Artículo 3.— La Secretaría de Estado creada en virtud de esta ley, tendrá facultad para requerir y obtener por todos los medios que estime convenientes, de los departamentos de la administración pública y de los particulares y corporaciones, las informaciones y comprobaciones necesarias para el fiel cumplimiento de sus atribuciones; y las certificaciones, copias de documentos, datos, informes, libros, planos, etc. que solicite, estarán exentos del pago de toda contribución fiscal o municipal;

Artículo 4.— La Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes dispondrá los medios de identificación para sus técnicos, delegados e inspectores, quienes, en el ejercicio de sus funciones, tendrán libre acceso a todas las oficinas públicas y privadas, a cualquier empresa o inmueble, urbano o rural, en que tenga interés el Estado, ajustándose a las disposiciones legales cuando se trate de moradas o de locales cerrados.

Artículo 5.— Los Gobernadores Provinciales, Síndicos Municipales, Secretarios de los Tribunales, y, en general, toda autoridad nacional, provincial o municipal, así como los administradores y empleados de las empresas mencionadas, están

obligados a prestar a los delegados, técnicos e inspectores de la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes, toda clase de asistencia e información que les sean requeridas. En la misma obligación estarán los administradores y demás personas que en cualquier forma tengan bajo su cuidado los inmuebles urbanos y rurales y los muebles a que se refiere la presente ley.

Artículo 6.– La Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes, tendrá facultad para requerir la comparecencia por ante ella de cualquier persona, sea o no funcionario o empleado del Estado, a los administradores y empleados de las empresas o corporaciones en las cuales tengan éste interés, y a los administradores de los bienes a que se refiere esta ley, cuantas veces sea preciso obtener las informaciones que considere necesarias.

Artículo 7.– El Director General de Administración, Control y Recuperación de Bienes deberá rendir cuenta de su gestión al Consejo de Estado y entregará los archivos y documentos de su oficina bajo inventario, a la persona que sea designada Secretario de la cartera creada por la presente ley.

Artículo 8.– Las violaciones a las disposiciones de esta ley serán castigadas con multa de cien a mil pesos o prisión de uno a seis meses, o con ambas penas en los casos más graves.

Artículo 9.– La presente ley deroga en todas sus partes los Decretos Nos. 7395 de fecha 9 de Diciembre de 1961 y 7566 de fecha 12 de Enero de 1962, así como cualquier otra disposición legal que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en los diarios "El Caribe", "La Nación" y en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

NOTA: La presente Ley fue publicada oficialmente en los diarios nacionales "El Caribe" y "La Nación", el día 31 de enero de 1962

Ley No. 5810 que reduce a un 50% el monto total de las deudas de los Contribuyentes de la Primera Categoría del Impuesto sobre Beneficio, previsto por la Ley No. 3861 del 26 de junio de 1954

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5810

Artículo 1.- A partir de la presente Ley se reduce a un 50 por ciento el monto total de las deudas que tengan pendientes de pago los contribuyentes de la Primera Categoría (inquilinato y arrendamiento de inmuebles), del Impuesto sobre Beneficios, previsto por la ley No. 3861, del 26 de junio de 1954, que se hayan cautado los distintos ejercicios fiscales para el cerrado el 30 de junio de 1961.

Artículo 2.- ,Los pagados a que se refiere el artículo anterior podrán ser realizados por los deudores, libres de los recargos que por concepto de retardos en el pago, prevé la Ley.

Artículo 3.- Se establece un plazo hasta el 30 de mayo de 1962 para el pago del monto que resultare del caso previsto en esta ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treintiun días del mes de enero de mil novecientos sesenta ydos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treintiun días del mes de enero de mil novecientos sesenta y dos, años 118^0 de la Independencia y 99^0 de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5811 que denomina "Premio Anual de la Maternidad" el instituído por la Ley No. 279, del 25 de mayo de 1940 y dicta otras disposiciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5811

Artículo 1.– En lo adelante, el "Premio Julia Molina de la Maternidad", instituído por la Ley No. 279, de fecha 25 de mayo de 1940, se denominará "Premio Anual de la Maternidad", y la

medalla de oro que se otorgue a la madre dominicana que se haga acreedora a dicho premio llevará la imagen de la Virgen María.

Artículo 2.- Se dispone que el número de hijos vivos para aspirar al indicado premio no será menor de 12.

Artículo 3. La presente ley modifica, en cuanto sea necesario, la citada Ley No. 279, del 25 de mayo de 1940.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5812 que restablece el Artículo 33 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5812

Artículo 1.– Se restablece el artículo 33 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 4761, del 1ro. de septiembre de 1957, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 33.– Al militar que sea reincorporado de acuerdo con las disposiciones legales, no se le computará el tiempo que haya pasado fuera de las Fuerzas Armadas".

Artículo 2.– En consecuencia, se deroga la Ley No. 5106 de fecha 10 de abril de 1959.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Anontio Imbert Barrera.
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118^{0} de la Independencia y 99^{0} de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5813 que prohibe la exportación de ganado en pié.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5813

CONSIDERANDO que por ser insuficiente la cantidad de ganado existente actualmente en el país, su exportación iría en detrimento de las necesidades del consumo interno,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Queda prohibida la exportación de ganado en pie a partir de la publicación de la presente Ley, hasta disposición en contrario.

Art. 2.– Las violaciones a lo previsto anteriormente serán castigadas con multa de RD$10.00 a RD$500.00 ó prisión de 10 días a 6 meses, o con ambas penas a la vez.

Artículo 3.– La Secretaría de Estado de Agricultura queda encargada de la ejecución de la presente Ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mon. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5814, que prohíbe la exportación de toda clase de animales de raza

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5814

Artículo 1.– A partir de la publicación de la presente Ley, y hasta disposición en contrario, queda prohibida la exportación de toda clase de animales de raza.

Artículo 2.– Las violaciones a lo previsto anteriormente serán castigadas con multa de RD$10.00 a RD$500.00 o prisión de 10 días a 6 meses, o con ambas penas a la vez.

Artículo 3.– La Secretaría de Estado de Agricultura queda encargada de la ejecución de la presente Ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la Republica
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5815, que concede pensión del Estado a la señora María S. Vda. Cruz

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5815

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Concede una pensión del Estado de cincuenta pesos oro (RD$50.00) mensuales a la señora María S. Vda. Cruz.

Artículo 2.— Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de febrero del mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5816, que confisca todos los bienes propiedad del señor Elías Gadala María

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5816

CONSIDERANDO que como resultado en unos casos del abuso y en otros de la usurpación del Poder, cometidos por Rafael L. Trujillo Molina, se enriqueció a expensas del Estado y del pueblo dominicano, el señor Elías Gadala María, señalado personero del régimen dictatorial y tiránico instaurado por el primer, quien llegó a acumular una cuantiosa fortuna al amparo de operaciones bancarias realizadas en violación de preceptos legales,

CONSIDERANDO que, en casos de abuso o de usurpación del Poder o de cualquier función pública para enriquecerse o enriquecer a otros, la Constitución de la República autoriza a

ordenar por ley la confiscación de bienes, en perjuicio de sus detentadores, con el objeto de reparar los daños morales y materiales causados como resultado de tal abuso o usurpación;

VISTO el Artículo 8, ordinal 9, y el 116 (transitorio) de la Constitución de la República:

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se confiscan, y en consecuencia se declaran bienes nacionales, todos los bienes de cualquier naturaleza, y dondequiera que estén situados, incluyendo créditos, acciones y obligaciones de cualquier compañía o corporación, nacional o extranjera, o de sus subsidiarias, que pertenezcan a Elías Gadala María.

Artículo 2.— La Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes podrá devolver, con la previa autorización del Consejo de Estado, todos aquellos bienes que la persona indicada en la presente ley demostrare, por acto auténtico, dentro de los treinta días a partir de la publicación de la misma, que no los adquirió a expensas del Estado y del pueblo dominicanos, al amparo de la usurpación o del abuso del poder cometido por Rafael L. Trujillo Molina.

Artículo 3.— Asimismo, la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes tomará todas las medidas necesarias para la ejecución de la presente ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de febrero del mil novecientos sesenta y dos, 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "El Caribe" para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de febrero del mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5817, que reforma los párrafos I y III del Artículo 13 de la Ley sobre la Cruz Roja Dominicana

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO: 5817

Artículo 1.– Quedan reformados los párrafos I y III del artículo 13 de la Ley sobre la Cruz Roja Dominicana No. 525, del 19 de febrero de 1944, modificados por la Ley No. 2801, de fecha 9 de abril de 1951, para que rijan del siguiente modo:

"Párrafo I.– El Consejo Superior Directivo estará integrado por un Presidente Director, un Secretario General, un Tesorero General y siete Asesores, estos últimos con carácter honorífico.

"Párrafo III.– Serán Miembros Asesores: un Subsecretario de Estado de Salud y Previsión Social, el Director del Banco Central de Sangre, un Laboratorista y Técnico de dicho Banco, un Pediatra, un miembro de la Iglesia Católica, un Comerciante y un Periodista".

Artículo 2.– Queda modificado el Párrafo V del artículo 13 de la Ley No. 525, del 19 de febrero de 1944, agregado por la Ley No. 2801 del 9 de abril de 1951, para que rija del siguiente modo;

"Párrafo V.– El Presidente, el Secretario, el Tesorero y tres Miembros Asesores constituirán mayoría en el Consejo".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional. Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los dieciseis días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5818, que dispone que las personas entradas al país por los sitios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, del 14 al 20 de junio de 1959, y sobre quienes no se tenga noticias de que vivan, podían ser declaradas judicialmente fallecidas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5818

Artículo 1.— Las personas que formaron parte de las expediciones armadas que vinieron al país y entraron por los sitios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, del 14 al 20 de junio de 1959, y sobre quienes no se tenga noticias de que vivan, podrán ser declaradas judicialmente fallecidas, a petición de todo interesado o del Ministerio Público, por vía de instancia, dirigida a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Artículo 2.— Todos los medios de prueba serán admisibles para los fines de la declaración de fallecimiento, por lo cual se podrán tomar en cuenta publicaciones caracterizadas por su seriedad, comunicaciones oficiales, referencias o datos que se encuentran en sentencias judiciales y de toda otra circunstancia digna de merecer crédito.

El procedimiento se hará en forma sucinta y libre de costas.

Artículo 3.— La sentencia que declare el fallecimiento será transcrita en los registros de cualquier Oficial del Estado Civil del Distrito Nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Donald J. Reid Cabral.
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5819, que declara la existencia de un estado de emergencia nacional

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5819

CONSIDERANDO: que es obvio que los dineros extraídos del Tesoro Nacional por la nefasta tiranía de los Trujillo se ha unido al del comunismo internacional para el desarrollo de planes con el

objeto de crear el clima propicio que les permita –abusando de las libertades que otorga la democracia– desatar una ola de terrorismo que impida la reestructuración de la confianza del crédito nacional e internacional única fórmula de resolver los problemas básicos del pueblo;

CONSIDERANDO que es evidente que existe en el país un estado de intranquilidad que se manifiesta por las continuas manifestaciones de grupos de personas que realizan actos de incitación de las masas populares ante cualquier inconformidad o con motivo de la más ligera crítica a las autoridades;

CONSIDERANDO: que tales actos, provocados por los grupos de agitadores de extrema izquierda o de extrema derecha, están sembrando la zozobra en la población moderada la cual se siente insegura por los ataques e invectivas que tal agitación emplea y contribuye a provocar la desconfianza en el pueblo;

CONSIDERANDO: que tal situación afecta inclusive la necesaria tranquilidad requerida en la fuerza pública para la ejecución de las leyes que protegen la seguridad individual y colectiva, tanto de las personas como de las instituciones y de la propiedad privada y pública;

CONSIDERANDO: que la incitación contra el gobierno, contra su cambio de forma, contra su normal desenvolvimiento, contribuye a ese estado de intranquilidad, ya que el actual Gobierno tiene una duración determinada y está empeñado en que sea substituído por la forma normal que implica el proceso electoral que será realizado conforme a los mandatos de la Constitución;

CONSIDERANDO: que el entorpecimiento del proceso electoral es atentatorio contra la democracia, por cual el Gobierno se cree en la obligación de consolidar su estructura sin limitar los derechos del pueblo, pero ajustándolos a sus marcos legales, en los cuales hay un evidente desenfreno de parte de los sectores de agitación;

VISTO: el inciso 8 del artículo 38 de la Constitución de la República;

Artículo 1.– Se declara que existe un estado de emergencia nacional que reclama de todas las personas a que ajusten sus actos a la moderación necesaria para retornar a la tranquilidad y a que acaten las leyes sin provocar fricciones con las autoridades civiles, policiales y militares.

Artículo 2.– Las autoridades civiles, tanto administrativas como judiciales, las autoridades policiales y militares tienen instrucciones de dar riguroso cumplimiento a las leyes vigentes, especialmente a las de seguridad interna a fin de que el orden público no sea alterado y el país vuelva a la normalidad para permitir que el proceso electoral se lleve a cabo dentro de la moderación que reclama el proceso democrático.

Artículo 3.– Cualquier persona o grupo de personas cuya conducta o actividades sean consideradas peligrosas para la tranquilidad nacional por razón de actividades subversivas o de agitación que entorpezcan el proceso electoral, podrá ser deportada por el Consejo de Estado del territorio nacional hasta tanto cese el estado de emergencia.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid CAbral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "La Nación" para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5820 sobre revisión y depuración de concesiones mineras

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5820

CONSIDERANDO: que al amparo de la tiranía desaparecida, algunas personas físicas o morales, han desviado en su propio beneficio, los propósitos de la Ley, en relación con los yacimientos mineros, realizando especulaciones irritantes, en perjuicio del interés del Estado;

CONSIDERANDO: que corresponde al Estado Dominicano la propiedad de los yacimientos mineros en virtud del Artículo 99 de la Constitución de la República;

CONSIDERANDO: que al amparo de la Ley Minera de la República No. 4550, del 23 de septiembre de 1956; de la Ley No. 4532 del 31 de agosto de 1956, que regula la exploración y

explotación del petróleo, de la Ley No. 5032 del 21 de noviembre de 1958, sobre lavado y extracción del oro, y de sus respectivas modificaciones, particulares interesados y compañías o entidades constituidas para fines mineros, han adquirido derechos de prioridad y preferencia respecto a determinados yacimientos; han presentado denuncias y han obtenido el permiso, el cateo, la concesión o suscrito contratos para la exploración, explotación, uso y aprovechamiento de ciertas substancias minerales en el territorio dominicano, logrando en consecuencia privilegios y prerrogativas en su favor;

CONSIDERANDO: que es preciso determinar si tales derechos, concesiones y contratos son en el fondo verdaderos monopolios en perjuicio del interés nacional y en favor de particulares, si han sido regularmente obtenidos y si los respectivos beneficiarios, concesionarios o cesionarios mantienen las posibilidades que les permitan dar cumplimiento a la finalidad de la Ley;

CONSIDERANDO: que en tal virtud, procede que se haga la revisión y depuración de los registros e inscripciones de denuncias, solicitudes de permisos, cateo, concesiones y contratos, que figuren en trámite o hayan sido otorgados al amparo de la Ley Minera No. 4550, del 23 de septiembre de 1956; de la Ley No. 5032 del 21 de noviembre de 1958 y de la Ley No. 4532 del 31 de agosto de 1956;

VISTO el Artículo 99 de la Constitución de la República y las disposiciones de la Ley No. 4550 del 23 de septiembre de 1956, de la Ley No. 4532 del 31 de agosto de 1956 y la Ley No. 5032 del 21 de noviembre de 1958

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede un plazo de 30 días a partir de la publicación de la presente Ley, para que todas las personas físicas y morales que hayan obtenido permisos de exploración, cateo, concesiones de explotación o suscrito contratos para la exploración, explotación, uso y aprovechamiento de substancias minerales en el territorio dominicano, o cuyas solicitudes figuran en trámite, al amparo de la Ley Minera de la República No. 4550 del 23 de septiembre de 1956; de la Ley No. 4532, del 31 de agosto de 1956, que regula la exploración y explotación del

petróleo; de la Ley No. 5032, del 21 de noviembre de 1958, sobre el lavado y extracción del oro, y de sus respectivas modificaciones, o de leyes anteriores, presenten por ante la Dirección General de Minería de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio,, los documentos justificativos de dichas denuncias, solicitudes, permisos, contratos y concesiones, a fin de ser revisados y depurados, para determinar, en consecuencia, si tales derechos concesiones y contratos son en el fondo verdaderos monopolios en perjuicio del interés nacional y en favor de particulares, si han sido regularmente obtenidos y si los respectivos beneficiarios, concesionarios o cesionarios mantienen las posibilidades que les permitan dar cumplimiento a la finalidad de la Ley.

Artículo 2.— La Dirección General de Minería de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, actuará como oficina de trámite ante la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, organismo éste en el cual se hará la revisión y depuración.

Artículo 3.— Las personas a quienes se les requiera están obligadas a suministrar todos los datos e informaciones que se juzguen necesarios y que estén a su alcance, aún los de carácter técnico.

Artículo 4.— El procedimienó de revisión y depuración no implica paralización alguna de las actividades y del trabajo que actualmente realizan las personas entidades o compañías, beneficiarias, concesionarias o cesionarias.

Artículo 5.— Las personas físicas o morales que no se sometan en el plazo señalado en el Artículo primero de este ley, al procedimiento de revisión y depuración de que se trata, quedarán privadas de todo derecho al respecto.

Artículo 6.— La Dirección General de Minería de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, después de realizada la revisión y depuración correspondiente por la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, procederá a practicar las anotaciones pertinentes en los registros establecidos por la ley, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su decisión.

Artículo 7.— Mientras se realice la revisión y depuración a que se contraen los artículos anteriores, no se concederán nuevos derechos en favor de terceras personas en los terrenos que

abarquen los permisos las concesiones y contratos otorgados o las solicitudes en tramite; pero sí podran realizar. las personas interesadas, los actos que tiendan a la preservación de sus derechos.

Artículo 8.— No se realizarán nuevos contratos, permisos o concesiones mineras, ni se admitirán denuncias o solicitudes, hasta tanto quede realizado el procedimiento de revision y depuración que establece la presente ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5821, que establece las facultades del Secretario de Estado de Recuperación de Bienes, cuando exista un crédito, de cualquier naturaleza en favor de personas cuyos bienes hayan sido confiscados

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5821

UNICO.–Cuando existe un crédito de cualquier naturaleza en favor de las personas cuyos bienes hayan sido o sean confiscados en virtud de una Ley que tenga su fundamento en las disposiciones del artículo 8, ordinal 9, de la Constitución de la República, esto es, por causa de abuso o usurpación del Poder o de cualquier función pública para enriquecerse o enriquecer a otros, contra una empresa en cuyo funcionamiento haya de tenerse en cuenta el interés público, y existan conflictos que puedan poner en peligro el patrimonio de dichas empresas, el Secretario de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes, podrá asumir por sí mismo la administración y dirección de dicha empresa, o designar las personas que deban ejercer esas funciones, hasta tanto los derechos discutidos sean resueltos normalmente por los tribunales competentes. La no exigibilidad del crédito no será un obstáculo para el ejercicio de esa facultad.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Disttrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de febrero de mil

novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid CAbral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "El Caribe" para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5822, que establece las facultades del Secretario de Estado de Recuperación de Bienes, en caso de que el Estado llegue a ser propietario de ciertas acciones a causa de confiscaciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5822

Artículo 1.– Cuando el Estado Dominicano llegue a ser propietario de acciones del capital social sobre compañías establecidas en el territorio nacional, en virtud de confiscaciones autorizadas por la ley, la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes procederá a convocar las Juntas Generales de Accionistas de las Compañías que las hayan emitido, para el nombramiento de nuevos funcionarios ejecutivos, directivos y administrativos.

Artículo 2.– Si a dichas Juntas Generales concurrieren los accionistas en número suficiente para integrar el quorum reglamentario, se designarán para las funciones señaladas a las personas a quienes indique el representante del Estado en dichas Juntas. Si no hubiere quorum, el Secretario de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes procederá a designar los referidos funcionarios.

Artículo 3.– La presente Ley modifica, en cuanto sea necesario, las disposiciones de la Ley No. 5795, del 12 de enero de 1962, así como cualquier otra que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5823, que confisca y declara bienes nacionales los pertenecientes a los señores Félix W. Bernardino, Manuel de Moya Alonzo, Julián Suardí y Miguel A. Santelises.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5823

CONSIDERANDO que al amparo de la usurpación o del abuso del poder cometidos por Rafael L. Trujillo Molina, los señores

Félix W. Bernardino, Manuel de Moya Alonzo, Julián Suardí y Miguel A. Santelises, personeros señalados del régimen dictatorial y tiránico representado por el primero, se enriquecieron a expensas del Estado y del pueblo dominicanos, llegando a acumular cuantiosas fortunas;

CONSIDERANDO que en tales casos, la Constitución de la República autoriza a ordenar por ley la confiscación de los bienes de sus detentadores, con el objeto de reparar los daños morales y materiales causados como resultado del abuso o de la usurpación a que se ha hecho referencia;

VISTO el artículo 8, ordinal 9, y el 116 (transitorio) de la Constitución de la República,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se confiscan, y en consecuencia se declaran bienes nacionales, todos los bienes de cualquier naturaleza, y dondequiera que estén situados, incluyendo créditos, acciones y obligaciones de cualquier compañía o corporación, nacional o extranjera, o de sus subsidiarias, que pertenezcan a los señores Félix W. Bernardino, Manuel de Moya Alonzo, Julián Suardí y Miguel A. Santelises.

Artículo 2.- La Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes podrá devolver, con la previa autorización del Consejo de Estado, todos aquellos bienes que las personas indicadas en la presente ley demostraren, por acto auténtico, dentro de los treinta días a partir de la publicación de la misma, que no los adquirieron a expensas del Estado y del pueblo dominicano, al amparo de la usurpación o del abuso del poder cometido por Rafael L. Trujillo Molina.

Artículo 3.– Asimismo, la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes tomará todas las medidas necesarias para la ejecución de la presente ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5824, que ordena transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962.

EL CONSEJO DE ESTADO
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5824

ARTICULO UNICO.—Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962:

DEL: CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10322	DIRECCION GENERAL DE LA REFORMA AGRARIA		RD$886,297.85
G10322A	Servicios Personales	RD$103,381.85	
G10322B	Otros Gastos Corrientes.	RD$16,000.00	
G10322C	Adquisición de Propiedades	RD$43,666.00	
G10322	Atenciones Varias	RD$723,250.00	
		RD$886,297.85	

10313	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, CONTROL Y RECUPERACION DE BIENES	RD$196,622.00

G10313A	Servicios Personales	RD$145,310.00	
G10313B	Otros Gastos Corrientes	RD$22,800.00	
G10313C	Adquisición de Propiedades	RD$17,312.00	
G10313	Atenciones Varias	RD$11,200.00	
		RD$196.622.00	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20401	AVIACION MILITAR DOMINICANA		RD$23,546.83
G20401B	Otros Gastos Corrientes	RD$23,546.83	
20152	CUERPO MEDICO DEL EJERCITO NACIONAL		RD$194,443.63
G20152A	Servicios Personales	RD$94,443.63	
G20153C	Adquisición de Propiedades	RD$100,000.00	
		RD$194,443.63	

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

10491	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$7,920.00
G10491A	Servicios Personales	RD$7,920.00	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10420	DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS		RD$184,943.70
G10420A	Servicios Personales	RD$184,943.70	
10426	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS		RD$ 1,100.00
G10426A	Servicios Personales	RD$ 1,100.00	
10495	DIRECCION GENERAL DE LA CEDULA PERSONAL DE IDENTIDAD		RD$ 25,355.00
G10495A	Servicios Personales	RD$25,355.00	

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION Y BELLAS ARTES

31503	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y NORMALISTA		RD$ 1,500.00
G31503	Atenciones Varias	RD$ 1,500.00	
31507	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION RURAL		RD$6,730.00
G31507A	Servicios Personales	RD$ 2,530.00	
G31507	Atenciones Varias	RD$ 4,200.00	
		6,730.00	
31504	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA URBANA		RD$. 480.00

G31504A	Servicios Personales	RD$ 480.00	
			1,528,939.01

AL:

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20401	AVIACION MILITAR DOMINICANA		RD$ 23,546.83
G20401E	Construcciones y Mejoras Permanentes	RD$ 23,546.83	
30622	COMANDANCIAS DE PUERTOS, SERVICIOS DE PRACTICOS Y VIGIAS		RD$ 660.00
G30622A	Servicios Personales	RD$ 660.00	
20135	TENICOS DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 4,200.00
G20135A	Servicios Personales	RD$ 4,200.00	

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

10491	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 3,500.00
G10491C	Adquisición de Propiedades	RD$. 3,500.00	
30220	POLICIA NACIONAL		72,000.00
G30220	Atenciones Varias	RD$ 72,000.00	

CAPITULO V
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10340	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 14,025.97
G10340Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 14,025.97	

CAPITULO VII
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 1,100.00
G10415A	Servicios Personales	RD$ 1,100.00	
10425	DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		RD$ 41,690.00
G10425A	Servicios Personales	RD$ 41,690.00	
10423	ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES		RD$193,370.00
G10423A	Servicios Personales	RD$193,370.00	

CAPITULO VIII
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION BELLAS ARTES Y CULTOS

10493	OFICINA DEL ECRETARIO DE ESTADO		RD$ 7,920.00
G10493A	Servicios Personales	RD$ 7,920.00	
31503	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y NORMALISTA		RD$ 1,500.00
G31503A	Servicios Personales	RD$ 1,500.00	

31507	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION RURAL		RD$ 6,730.00
G31507	Atenciones Varias	RD$ 6,730.00	
31520	DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Y EDUCACION FISICA		RD$ 900.00
G31520A	Servicios Personales	RD$ 900.00	
31522	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL		RD$ 16,500.00
G10322A	Servicios Personales	RD$103,381.85	

CAPITULO IX

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 10,975.00
G10497A	Servicios Personales	RD$ 10,975.00	
10322	DIRECCION GENERAL DE LA REFORMA AGRARIA		RD$886,297.85
G31522A	Servicios Personales	RD$ 16,500.00	
G10322B	Otros Gastos Corrientes	RD$16,000.00	
G10322C	Adquisición de Propiedades	RD$43,666.00	
G10322	Atenciones Varias	RD$723,250.00	
		RD$886,297.85	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10494	DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES	RD$ 16,901.36
G10494	Atenciones Varias	RD$ 16,901.36

CAPITULO XIV-I

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION, CONTROL Y RECUPERACION DE BIENES

10421	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO	RD$227,122.00
G10421A	Servicios Personales	RD$175,810.00
G10421B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 22,800.00
G10421C	Adquisición de Propiedades	RD$ 17,312.00
G10421	Atenciones Varias	RD$ 11,200.00
		RD$227,122.00

RD$1,528,939.01

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly.
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Donald J. Reid Cabral,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5825, que denomina "Monsieur Bogaert" el Canal de Regadío Presidente Trujillo, de La Herradura. Santiago

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5825

Artículo 1.— El canal de regadío "Presidente Trujillo", de la Sección La Herradura, del Municipio de Santiago, se denominará en lo adelante "Monsieur Bogaert".

Artículo 2.— En consecuencia, queda derogada la Ley No. 385, de fecha 7 de diciembre de 1940.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5826, que autoriza transferencias de fondos en la Ley de Gastos Públicos vigente

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5826

ARTICULO UNICO.–Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962:

DEL: CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10310 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA RD$7,197.56

G10310A Servicios Personales RD$ 7,197.56

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

29152	CUERPO MEDICO DEL EJERCITO NACIONAL		RD$388.224 84
G29152A	Servicios Personales	RD$ 338,224.84	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10495	DIRECCION GENERAL DE LA CEDULA PERSONAL DE IDENTIDAD		RD$2,194.19
G10495A	Servicios Personales	RD$ 2,194.19	
			RD$397,616.59

AL. CAPITULO II

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$18,167.74
G20101A	Servicios Personales	RD$ 18,167.74	

CAPITULO V

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10340	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$10,272.06
C10340A	Servicios Personales	RD$ 10,272.06	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$2,194.19
G10415A	Servicios Personales	RD$ 2,194.19	

CAPITULO XII

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA

30201	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		RD$11,097.60
G30201A	Servicios Personales	RD$ 11,97.60	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10494	DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES		RD$176,640.00
G10494A	Servicios Personales	RD$ 176.640.00	
32120	ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS		RD$179,245.00
G32120A	Servicios Personales	RD$ 179,245.00	
			RD$397,616.59

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez.
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5827, que denomina "Banco Agrícola de la República Dominicana" el Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la República, y modifica el Título II y los Artículos 5 y 100 de la Ley No. 908 del 1ro. de Junio de 1945.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY.

NUMERO 5827

Artículo 1.— La institución de crédito denominada actualmente Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la República Dominicana, se denominará, en lo adelante, Banco Agrícola de la República Dominicana.

Párrafo.— Dicha institución de crédito tendrá su domicilio principal en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, será de duración ilimitada y estará regida por el texto original de la Ley No. 908, de fecha 1ro. de junio de 1945 —sin las modificaciones que le fueron introducidas antes de la fecha de la presente ley—.

Artículo 2.— Quedan modificados el TITULO II, y los artículos 5 y 100 de la citada Ley No. 908, para que rijan de la siguiente manera:

TITULO II

DE LA ADMINISTRACION

CAPITULO III

Del Gobierno del Banco

Artículo 7.— EL BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA estará regido por el Directorio Superior, por el Directorio Ejecutivo y por el Administrador General.

CAPITULO IV

Del Directorio Superior

Artículo 8.— El Directorio Superior estará integrado por cinco miembros titulares, designados por un período de cinco años así:

BIBLIOTECA NACIONAL

tres miembros serán nombrados por el Poder Ejecutivo y dos por la Junta Monetaria.

Para los casos de falta o impedimento de los titulares se designarán miembros suplentes de igual manera que aquellos.

Los miembros titulares escogerán de entre ellos mismos un Presidente, un Vice–Presidente y un Secretario.

El Directorio Superior se juramentará ante el Gobernador del Banco Central de la República Dominicana.

Artículo 9.– Son atribuciones del Directorio Superior las siguientes:

1) Aprobar las políticas crediticias del Banco en lo relativo a plazos, tipos de interés, garantías y destinos que le sean sometidos por el Directorio Ejecutivo;

2) Aprobar los reglamentos que dicte el Directorio Ejecutivo;

3) Aprobar el presupuesto anual de gastos del Banco formulado por el Directorio Ejecutivo;

4) Revisar el Balance Anual, Cuadro de Ganancias y Pérdidas y Proyecto de Reparto de Utilidades.

El Directorio Superior podrá reunirse ordinariamente en los meses de Febrero y Noviembre, a convocatoria del Administrador General. Tendrá quorum con la concurrencia de la mayoría y producirá resolución con tres votos concordantes.

El Directorio Superior podrá reunirse extraordinariamente cuando sea convocado por iniciativa de su Presidente, a instancia de dos de sus miembros a petición del Administrador General.

CAPITULO V

Del Directorio Ejecutivo

Artículo 10.– El Directorio Ejecutivo ejercerá la administración del Banco, cuyas actividades estarán bajo el cuidado inmediato del Administrador General.

Artículo 11.— El Directorio Ejecutivo estará integrado por el Administrador General y, en su ausencia, por el Sub—Administrador General y cuatro miembros titulares, designados por cinco años, así:

1) Dos por el Poder Ejecutivo;

2) Uno por la Junta Monetaria; y

3) Uno por el Directorio Superior.

Artículo 12.— Para el caso de falta o impedimento de los miembros titulares se designarán miembros suplentes de igual manera que aquellos.

El Directorio Ejecutivo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez a convocatoria del Administrador General. Tendrá quorum con la concurrencia de la mayoría y producirá resolución con tres votos concordantes.

Artículo 13.— El Administrador General, que será nombrado por el Poder Ejecutivo por cinco años, presidirá las reuniones del Directorio Ejectuivo y asistirá con voz pero sin voto a las reuniones del Directorio Superior.

Artículo 14 — No podrán ser miembros del Directorio Ejecutivo del Banco:

1) Las personas de menos de 30 años de edad;

2) Los miembros del Congreso Nacional;

3) Los miembros del Poder Judicial;

4) Los funcionarios o empleados públicos, excepto Secretarios, Sub—Secretarios de Estado y Directores Generales;

5) Las personas que hayan sido declaradas en estado de quiebra y que no hayan sido rehabilitadas un año por lo menos antes de su nombramiento, así como aquellas contra las cuales estén pendientes procedimientos de quiebra; y

6) Las personas que estén sub–júdice o se encuentren cumpliendo condena o que hayan sido condenadas a penas aflictivas o infamantes.

Artículo 15.– Antes de entrar en el desempeño de sus cargos los miembros del Directorio Ejecutivo prestarán juramento ante el Presidente del Directorio Superior de cumplir fielmente los deberes de su cargo.

Artículo 16.–Son obligaciones del Directorio Ejecutivo:

1) Atender la organización interna del Banco y proponer al Directorio Superior los reglamentos que considere necesarios.

2) Proponer al Directorio Superior, para aplicación general, los requisitos y modalidades de las operaciones del Banco, fijar plazos, cuotas de amortización, tipos de interés, descuentos, de acuerdo con las leyes y los reglamentos:

3) Revisar la Memoria Anual, el Balance, el Cuadro de Ganancias y Pérdidas y el Proyecto de Utilidades que el Administrador General prepare para ser sometido al Directorio Superior;

4) Publicar,

a) Un Estado mensual de las condiciones financieras del Banco y cualesquiera otros informes exigidos por la Ley;

b) Detalles relativos a las condiciones generales de los préstamos, indicando los requisitos necesarios para su concesión;

5) Formular el Presupuesto Anual de Gastos del Banco;

6) Cumplir y hacer cumplir la Ley.

Artículo 17.– La ejecución de los negocios del Banco estará a cargo del Administrador General, y, en su defecto, del Sub–Administrador General, quienes serán responsables ante el Directorio Ejecutivo.

Artículo 18.– En caso de ausencia temporal del Administrador General, hará sus veces el Sub–Administrador

General. Este, cuando actúe como tal, desempeñará las funciones que el Administrador General le designe.

Artículo 19.– Serán facultades y atribuciones del Administrador General;

1) Determinar las reglas que deban regir las operaciones cuando dichas reglas no estuvieren previstas en las Leyes, Reglamentos o Acuerdos del Directorio Superior;

2) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Directorio Ejecutivo, pudiendo suspender la ejecución de éstas cuando así lo creyere conveniente, debiendo darle cuenta inmediata de dicha suspensión al Directorio Ejecutivo;

3) Dar cuenta al Directorio Ejecutivo de todos los negocios que celebre, disposiciones que dicte y propuestas que incida sobre asuntos que deban ser del conocimiento de dicho Directorio Ejecutivo o del Directorio Superior;

4) Velar por la buena marcha de los negocios, el orden en las oficinas y la eficiencia en el trabajo del personal, para cuyo efecto todos los empleados del Banco le quedarán subordinados, pudiendo suspenderlos de sus cargos, sometiendo el expediente de lugar al Directorio Ejecutivo;

5) Formular la Memoria Anual, el Balance, el Cuadro de Ganancias y Pérdidas y el Proyecto de Reparto de Utilidades, sometiéndolo a la consideración del Directorio Ejecutivo;

6) Representar al Banco en aquellos asuntos que el Directorio Ejecutivo disponga.

Artículo 20.– El Administrador General y el Sub-Administrador General no podrán hacer negocios propios con el Banco Agrícola de la República Dominicana ni obligar su firma particular para garantizar obligaciones de terceros; tampoco podrán tener cargos directos en ninguna sociedad mercantil sin el consentimiento del Directorio Ejecutivo.

Las solicitudes de crédito en que tengan interés los miembros del Directorio Ejecutivo, así como el cónyuge y los parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, y los parientes por

afinidad hasta el segundo grado, del Administrador General y del Sub-Administrador General, serán tramitados por los funcionarios del Banco que sean ajenos al parentesco. La aprobación de dichos créditos corresponderá a la Junta Monetaria."

Artículo 5.- El capital autorizado del Banco es de RD$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS).

Artículo 100.- El personal del Banco deberá designarse por oposición. El Directorio Ejecutivo nombrará a los Jurados Examinadores para efectuar las pruebas orales y escritas entre los candidatos a los diferentes cargos. El Administrador General publicará los detalles sobre los planes disponibles llamando candidatos a concurso. Todos los cargos deberán darse al que obtenga las mejores calificaciones.

El personal del Banco nombrado mediante oposición no podrá ser removido, salvo por la comisión de faltas o delitos. El Administrador procederá a la formación de expediente del que conocerá el Directorio Ejecutivo. Sobre la resolución de separación el empleado tendrá recurso de apelación ante la Junta Monetaria.

Artículo 3.- Disposiciones transitorias:

I) La cartera del Banco será objeto de un cuidadoso análisis a efecto de determinar el monto de su capital efectivamente pagado;

II) Por lo que falte para completar RD$100,000,000.00 (CIEN MILLONES DE PESOS ORO DOMINICANOS) el Banco recibirá del Estado bonos sin interés, redimibles únicamente en dinero efectivo en un plazo no mayor de cuarenta años.

III) La propiedad del Estado sobre el Banco se hará constar por medio de certificados intransferibles que el Banco entregará al Estado a medida que este último efectúe los pagos de Capital. Dichos certificados quedarán en depósito en el Banco Central de la República Dominicana bajo la responsabilidad de su Gobernador.

IV) Los miembros del Primer Directorio Superior y del Primer Directorio Ejecutivo serán designados por el Consejo de Estado. A efecto de que las renovaciones futuras sean parciales. un miembro de cada Directorio será nombrado por un año, otro por 2 años, otro por 3 años, otro por 4 años y el último por 5 años.

Artículo 4.— La presente ley deroga cualquier ley o parte de ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos. años 118o. de la Independencia y 99 de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral.
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5828, que suprime la insignia del Generalísimo de las Fuerzas Armadas, en las banderas del Ejército Nacional, Fuerza Aérea y de la Policía Nacional

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5828

Artículo 1.- Se suprime la insignia del Generalísimo de las Fuerzas Armadas existente en uno de los cuarteles de las banderas de las instituciones castrenses denominadas Ejército Nacional, Fuerza Aérea Dominicana y Policía Nacional.

Artículo 2. La presente ley modifica, en cuanto sea necesario, el artículo 13 de la Ley No. 360, de fecha 11 de agosto de 1943; el 1, párrafo III, de la Ley No. 3335, del 5 de junio de 1952; y el 11 de la Ley No. 1684, de fecha 15 de abril de 1958.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera.
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5829, que atribuye a la Secretaría de Estado de Comunicaciones y Obras Públicas la fijación de precios de los contratos otorgados sin concurso

EL CONSEJO DE ESTADC
En Nombre de la República

NUMERO 5829

CONSIDERANDO: que hay evidencias de que en la concesión de contratos sin concurso para la ejecución de obras públicas en general han sido considerablemente lesionados los intereses del Estado, con el objeto de alcanzar el enriquecimiento ilícito de personeros de la pasada tiranía;

CONSIDERANDO: que es deber del Gobierno Nacional dictar las medidas legales relacionadas con la ejecución de obras publicas, sin concurso, que permitan salvaguardar los intereses del Estado y a la vez conjurar la posibilidad de que se cometan fraudes en su perjuicio.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– En los contratos para la construcción de obras públicas en general, otorgados sin concurso, regirán, a partir del 1ro. de marzo del presente año, los precios que para cada caso fija el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.

Artículo 2.– La Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciónes queda autorizada a proceder a la revisión de todos los contratos en ejecución. para la construcción de obras públicas en general, sin concurso, con el fin de fijar nuevos precios, cuando se considere que los que rigen actualmente no se ajusen al verdadero valor de la obra en construcción.

Artículo 3.– La presente Ley modifica, en cuanto sea necesario, cualquier disposición legal que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Dominigo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Red Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tío,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "El Caribe", para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos, años 118° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5830, sobre la indisponibilidad durante 60 días, de los beneficios de las compañías controladas y fiscalizadas por el Gobierno

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5830

CONSIDERANDO que la depuración que se está haciendo acerca del enriquecimiento ilícito de los accionistas de las Compañías que se encuentran bajo el control y fiscalización del Gobierno, exige que se tomen medidas adecuadas para la finalidad que se persigue.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

UNICO.– Los beneficios de las Compañías que se encuentren bajo el control y fiscalización del Gobierno Dominicano, de acuerdo con las disposiciones legales dictadas al efecto, quedan indisponibles, durante 60 días, a partir de la publicación de la presente ley, y, en consecuencia, no podrá hacerse ninguna repartición de dividendos durante dicho período entre los accionistas de esas compañías.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de febrero, de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Eduardo Read Barrera,
Primer Vicepresidente.

Nicolás Pichardo,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Donald J. Reid Cabral,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "El Caribe", para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y dos años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5831, que deroga la Ley No. 5744 bis del 30 de diciembre de 1961, sobre Asimilados de las Fuerzas Aramadas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5831

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 5744 bis, de fecha 30 de diciembre de 1961, mediante la cual se asimilan a los miembros de las Fuerzas Armadas todos los individuos que hayan dejado de pertenecer o que en lo adelante dejen de pertenecer a las

mismas, crea un privilegio sin fundamento en favor de esas personas, que no debe ser mantenido,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

UNICO.– Queda derogada la Ley No. 5744 bis, sobre Asimilados a las Fuerzas Armadas, de fecha 30 de diciembre de 1961.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los primer días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en el diario "El Caribe".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los primeros días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5832, sobre declaración judicial del fallecimiento de personas desaparecidas durante la pasada tiranía

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5832

CONSIDERANDO que durante la pasada tiranía desaparecieron, en circunstancias anormales, numerosas personas cuya suerte se presume; pero que no han podido ser declaradas oficialmente fallecidas, por no existir disposiciones legales que así lo permitan;

CONSIDERANDO que es necesario establecer un procedimiento que autorice a declarar judicialmente fallecidas a aquellas personas con el fin de evitar los inconvenientes que tal situación incierta crea en la práctica y que permita, a la vez, regularizar los registros del estado civil correspondientes,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Las personas que durante la pasada tiranía hubiesen desaparecido y sobre las cuales se tengan presunciones serias de que han muerto, podrán ser declaradas judicialmente fallecidas, a solicitud de todo interesado, por vía de instancia,

dirigida al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial en que haya tenido su último domicilio aquel cuya muerte se presume.

Artículo 2.- Para los fines de la declaración de fallecimiento serán admisibles todos los medios de prueba y, de modo particular, la declaración, bajo juramento, que hagan tres personas, pudiendo incluirse entre ellas al solicitante, en donde conste que aquel cuya declaración de fallecimiento se persigue ha desaparecido por motivos imputables a la pasada tiranía, y que han sido infructuosas las diligencias que se han hecho para saber si aun vive, por lo cual su muerte se tiene como un suceso absolutamente cierto.

Artículo 3.- El procedimiento se hará en forma sucinta y libre de costas.

Artículo 4.- La sentencia que declare el fallecimiento será transcrita en los registros del Oficial del Estado Civil del lugar del último domicilio de la persona declarada judicialmente fallecida.

Artículo 5.- Cuando no sea conocido el último lugar del domicilio de una persona presumiblemente fallecida, durante el período senalado en el artículo 1, la instancia en solicitud de fallecimiento será dirigida a la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En este caso, la sentencia que declare el fallecimiento será transcrita en los registros de cualquier Oficial del Estado Civil del Distrito Nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en el diario "El Caribe".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5833, que concede pensión del Estado a la señora Carmen Luisa Vda. Estrella Liz.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5833

VISTO el artículo 9 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959, modificado por la Ley No. 5529, del 22 de abril de 1961;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se concede una pensión del Estado de doscientos pesos oro (RD$200.00) mensuales a la señora Carmen Luisa Cruz Vda. Estrella Liz.

Artículo 2.— Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99ª de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5834, que faculta a la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes, a investigar, depurar y anular toda transferencia de bienes, muebles o inmuebles confiscados, con posterioridad al 30 de mayo de 1961

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5834

UNICO.–La Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes queda facultada para investigar, depurar y anular toda clase de operaciones de transferencia de bienes, muebles o inmuebles, realizadas por personas cuyos bienes hayan sido o sean confiscados por el Estado o puestos bajo el control y estricta fiscalización del Gobierno Dominicano, en virtud de disposiciones legales, con posterioridad al 30 de mayo de 1961.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada oficialmente en el periódico "El Caribe" para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los seis días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5835, que confisca y declara bienes nacionales todos los bienes de cualquier naturaleza, créditos, acciones, etc. pertenecientes a los señores Fernando A. Sánchez hijo, Gilberto Sánchez Rubirosa, Ernesto Sánchez Rubirosa, Marco A. Gómez, Dr. José G. Sobá y Víctor Sued

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5835

VISTO el artículo 8, ordinal 9, y el 116 (transitorio) de la Constitución de la República;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se confiscan, y en consecuencia se declaran bienes nacionales, todos los bienes de cualquier naturaleza, y dondequiera que estén situados, incluyendo créditos, acciones y obligaciones de cualquier compañía o corporación, nacional o extranjera, o de sus subsidiarias, que pertenezcan a Fernando A. Sánchez hijo, Gilberto Sánchez Rubirosa, Ernesto Sánchez Rubirosa, Marco A. Gómez, Dr. José G. Sobá y Víctor J. Sued.

Artículo 2.– La Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes podrá devolver, con la previa autorización del Consejo de Estado, todos aquellos bienes que las personas indicadas en la presente ley demostraren, dentro de los treinta días a partir de la publicación de la misma, que no los adquirieron a expensas del Estado y del pueblo dominicano, al amparo de la usurpación o del abuso del poder cometido por Rafael L. Trujillo Molina.

Artículo 3.– Asimismo, la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes tomará todas las medidas necesarias para la ejecución de la presente ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99 de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral.
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José A. Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "El Caribe", para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los siete días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5836, que confisca y declara bienes nacionales todos los bienes de cualquier naturaleza, créditos, acciones, etc., propiedad de los señores José Ma. Bonetti Burgos, Virgilio Alvarez Pina y Virgilio Alvarez Sánchez.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5836

VISTO el artículo 8, ordinal 9, y el 116 (transitorio) de la Constitución de la República;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se confiscan, y en consecuencia se declaran bienes nacionales, todos los bienes de cualquier naturaleza, y dondequiera que estén situados, incluyendo créditos, acciones y obligaciones de cualquier compañía o corporación nacional o extranjera, o de sus subsidiarias, que pertenezcan a José Ma. Bonetti Burgos, Virgilio Alvarez Pina y Virgilio Alvarez Sánchez.

Artículo 2.– La Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes podrá devolver, con la previa autorización del Consejo de Estado, todos aquellos bienes que las personas indicadas en la presente ley demostraren, dentro de los treinta días a partir de la publicación de la misma, que no los adquirieron a expensas del Estado y del pueblo dominicano, al amparo de la usurpación o del abuso del poder cometido por Rafael L. Trujillo Molina.

Artículo 3.– Asimismo, la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes tomará todas las medidas necesarias para la ejecución de la presente ley.

DADA por el Consejo de Estado. en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José A. Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "El Caribe" para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los siete días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5837, que restringe la libertad de tránsito en el Distrito Nacional y dispone el toque de queda hasta disposición en contrario

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5837

CONSIDERANDO: Que por Ley No. 5819, de fecha 20 de febrero de 1962, ha sido declarado un estado de emergencia debido a que existe en el país un estado de intranquilidad que se manifiesta por continuas manifestaciones de grupo de personas que realizan actos de incitación de las masas populares y por atentados contra las personas y la propiedad poniendo en grave peligro el orden público;

CONSIDERANDO: Que la declaración de un estado de emergencia autoriza, de acuerdo con el inciso 8 del artículo 38 de la Constitución de la República, a suspender los derechos humanos con excepción de la inviolabilidad de la vida;

CONSIDERANDO: Que el recrudecimiento del estado de agitación a que se ha hecho referencia, en el Distrito Nacional, hace necesario que se tomen nuevas medidas para contrarrestar la grave situación que ha surgido.

CONSIDERANDO: Que es procedente que por el momento se restrinja el derecho de libre tránsito estableciendo un toque de queda en el territorio del Distrito Nacional;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Como consecuencia del estado de emergencia legalmente declarado ya, se restringe la libertad de tránsito en todo el territorio del Distrito Nacional, y se dispone el toque de queda y por tanto a partir de hoy, hasta disposición en

contrario, después de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, nadie podrá transitar por el territorio del Distrito Nacional, sin un salvoconducto expedido por las autoridades civiles o militares competentes.

Artículo 2.– La prohibición de que trata el artículo anterior no será aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a los del Ministerio Público, Juecés de Instruccion y demas miembros de la Policía Judicial, a los del Cuerpo de Bomberos Civiles, de la Cruz Roja Dominicana, y a los Médicos, cuya identificación se determinará por medio de un carnet especial expedido por las autoridades civiles o militares competentes, ni tampoco a aquellas personas que estuvieren provistas de un permiso otorgádoles por dichas autoridades.

Artículo 5.– Las violaciones a la presente ley serán sancionadas con multa de RD$10.00 a RD$100.00, o prisión correccional de 6 días a dos años o con ambas penas a la vez.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada oficialmente en el diario "El Caribe", y asimismo que sea difundida por todas las radioemisoras de la localidad, para su conocimiento, cumplimiento y ejecución inmediata.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99 de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5838, que deroga la Ley No. 5837, del 8 de marzo de 1962, y en consecuencia se suspende el toque de queda establecido en el Distrito Nacional.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5838

CONSIDERANDO: Que han desaparecido ya los motivos que determinaron, dentro del estado de emergencia actualmente existente en todo el territorio de la República, el establecimiento del toque de queda en el Distrito Nacional;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

UNICO.— Queda derogada la Ley No. 5837, del 8 de marzo de mil novecientos sesenta y dos, y, en consecuencia, se

suspende a partir de hoy, el toque de queda que se estableció en el territorio del Distrito Nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez.
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea difundida por todas las radioemisoras de la localidad, y publicada oficialmente

en el diario "La Nación", para su conocimiento, cumplimiento y ejecución inmediata.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5839, que declara en vigor los salarios y sueldos que tenían los obreros y empleados de la industria de la harina y del aceite. el día 1ro. de Marzo de 1962

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5839

CONSIDERANDO: que en el país hay actualmente gran número de desempleados, cuya suerte constituye permanente preocupación del Consejo de Estado;

CONSIDERANDO: que las demandas de aumentos de salarios en las empresas bajo control y fiscalización del Estado, de ser admitidas, obligarían al Gobierno a hacer nuevos aumentos en los precios de venta de muchos artículos de primera necesidad;

CONSIDERANDO: que la introducción de nuevos aumentos en los precios de venta de artículos de primera necesidad crearía un estado de inflación, en perjuicio, principalmente, para las familias pobres del país;

CONSIDERANDO: que esta situación específica se contempla en las industrias de la harina y del aceite, en las que recientemente se hicieron aumentos de salarios; y que nuevos aumentos de estos salarios obligaría a elevar el precio de venta de dichos productos, lo cual resultaría demasiado gravoso para los consumidores, en vista de la estrecha situación económica que atraviesa el país;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se declaran en vigor los salarios y sueldos que tenían los obreros y empleados de las industrias de la harina y del aceite, el día primero del mes de marzo de 1962.

Artículo 2.— Se pone a cargo de las Secretarías de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes y de Trabajo, así como de los Directivos de las empresas a que se refiere la presente ley el cumplimiento de sus disposiciones.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada oficialmente en los diarios "El Caribe" y "La Nación" y en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5840, que restablece el Artículo Unico de la Ley No. 5121, del 4 de mayo de 1959, y deroga la No. 5566, del 7 de julio de 1961 (Impuesto sobre los boletos de transporte al exterior)

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5840

Artículo 1.— Se restablece el artículo único de la Ley No. 5121, del 4 de mayo de 1959, que dice así:

"ARTICULO UNICO.— Quedan modificados los artículos 1 y 3 de la Ley No. 3568 del 5 de junio de 1953, cuya última modificación se hizo por la Ley No. 4231, del 31 de julio de 1955, para que rijan del siguiente modo:

Artículo 1.— Se establece un recargo de 10 por ciento sobre todos los boletos de transporte de personas hacia el exterior, comprados en la República Dominicana. Este recargo se aplicará asimismo, a las ventas efectuadas por vía de giros o cablegramas sobre otras agencias en el extranjero para transportación que se origine fuera de la República Dominicana.

Para los fines de la disposición que antecede, el indicado 10 por ciento se calculará sobre el valor del pasaje que cubre el transporte hasta el país de destino, aunque el boleto comprado en el país solo cubra el transporte hasta un punto de escala del viaje, sea por vía marítima o aérea.

Artículo 3.– Las compañías de transporte, agencias o consignatarias, cobrarán en todos los casos el recargo de 10 por ciento que fija la presente ley, a excepción de las exoneraciones más adelante especificadas en dinero efectivo que retendrán para ser depositado, en conjunto, en la Colecturía de Rentas Internas que corresponde al lugar donde se ha producido la recaudación, a más tardar dentro de los primeros diez (10) días del mes subsiguiente.

Los dueños de agencias de viaje o de empresas de transporte o sus dirigentes que ayuden a la persona de que se trate a realizar las gestiones necesarias para efectuar su transporte al extranjero, serán sancionados con multa de RD$500.00 a RD$10,000.00 o prisión de dos meses a 5 años. o ambas penas a la vez, cuando a sabiendas participen en la evasión del pago de recargo previsto en la presente ley".

Artículo 2.– Queda derogada la Ley No. 5566 de fecha 7 de julio de 1961, que había fijado el recargo a que se refiere la presente ley en un 5 por ciento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de marzo del año mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tio
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en el diario "El Caribe" y en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5841, que ordena transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5841

ARTICULO UNICO.—Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962.

DEL:

CAPITULO II
PODER EJECUTIVO

10310	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		RD$ 22,920.12
G10310A	Servicios Personales	RD$ 22,920.12	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20101	OFICINA DEL SECRETARIO ESTADO		RD$ 8,000.00
G20101C	Adquisición de Propiedades	RD$ 8,000.00	
20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS		RD$176,765.09
G20159A	Servicios Personales	RD$ 81,003.32	
G20159B	Otros Gastos Corrientes	22,025.00	

G20159C	Adquisición de Propiedades	RD$ 31,008.17	
G20159	Atenciones Varias	RD$ 42,728.60	
		RD$176,761.09	
20401	FUERZA AEREA DOMINICANA		RD$245,762.90
G20401A	Servicios Personales	RD$230,895.00	
G20401B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 1,772.67	
G20401C	Adquisición de Propiedades	RD$ 13,095.23	
		RD$245,762.90	
20402	VESTUARIO DE LA FUERZA AEREA DOMINICANA		RD$31,575.60
G2042B	Otros Gastos Corrientes	RD$31,575.60	
20403	SUBSISTENCIA DE LA FUERZA AEREA DOMINICANA		RD$39,469.50
G20403B	Otros Gastos Corrientes	RD$39,469.50	
20112	OFICIALES DEL EJERCITO NACIONAL		RD$2,716.67
G20112A	Servicios Personales	RD$2,716.67	
20120	PERSONAL ALISTADO DEL EJERCITO		RD$167,980.00
C20120A	Servicios Personales	RD$187,980.00	
20141	VESTUARIO DEL EJERCITO NACIONAL		RD$18,805.61

G20441B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 18,800.61	
20142	SUBSISTENCIA DEL EJERCITO NACIONAL		RD$32,879.70
G20142B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 32,879.70	
20152	CUERPO MEDICO DEL EJERCITO NACIONAL		RD$143,266.50
G20152A	Servicios Personales	RD$ 710.00	
G20152C	Adquisición de Propiedades	RD$142,556.50	
		RD$143,266.50	

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

31210	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION		RD$279,000.00
G31210	Atenciones Varias	RD$279,000.00	

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y CULTOS

31503	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y NORMALISTA		RD$2,000.00
G31503A	Servicios Personales	RD$ 2,000.00	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

32121	DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE		RD$ 6,000.00
G32121	Atenciones Varias	RD$ 6,000.00	
31802	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS		RD$60.000.00
G31802	Atenciones Varias	RD$ 60,000.00	
32120	ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS		RD$10,000.00
G32120	Atenciones Varias	RD$ 10,000,00	
			RD$1,267,136.69

AL: CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10411	DIRECCION DEL SERVICIO DE ECONOMIA Y COORDINACION PARA LOS GASTOS DEL GOBIERNO		RD$10,113.27
G10411	Para pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 10,113.27	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 8,000.00
G20101	Atenciones Varias	RD$ 8,000.00	
20120	PERSONAL ALISTADOS DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 81,003.32
G20120A	Servicios Personales	RD$ 81,003.32	
20142	SUBSISTENCIA DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 13,041.00
G20142B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 13,041.00	
20141	VESTUARIO DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 9,687.60
G20141B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 9,687.60	
20143	ATENCIONES VARIAAS DEL EJERCITO		RD$ 26,316.87
G20143B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 3,500.00	
G20143	Adquisición de Propiedades	RD$12,437.77	
G20143Z	Para pagar deudas de años anteriores	RD$10,378.90	
		RD$26,316.67	

	20135 TECNICOS DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 8,716.67
G20135A	Servicios Personales	RD$ 8,716.67	
20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS		RD$ 61,289.00
G20159A	Servicios Personales	RD$61,289.00	
20153	MARINA DE GUERRA		RD$ 28,244.00
G20153	Atenciones Varias	RD$ 28,244.00	
30622	COMANDANCIAS DE PUERTOS, SERVICIOS DE PRACTICOS Y VIGIAS		RD$ 74,180.00
G30622A	Servicios Personales	RD$ 70,180.00	
G30622B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 4,000.00	
		RD$ 74,180.00	

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

10492	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD		RD$279,000.00
C10492	Atenciones Varias	RD$279,000.00	

30220	POLICIA NACIONAL		RD$557,178.31
G30220A	Servicios Personales	RD$491,934.20	
G30220B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 1,772.67	
G30220C	Adquisición de Propiedades	RD$ 13,095.23	
G30220	Atenciones Varias	RD$50,376.21	
		RD$557,178.31	

CAPITULO V

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10340	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 12,806.85
G10340A	Servicios Personales	RD$ 12,806.85	

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y CULTOS

31507	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION RURAL		RD$ 1,000.00
G31507A	Servicios Personales	RD$ 1,000.00	
31511	INSPECCIONES DE EDUCACION		RD$ 1,000.00
G31511A	Servicios Personales	RD$ 1,000.00	

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD
Y PREVISION SOCIAL

31372	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		RD$ 19,560.00
G31371A	Servicios Personales	RD$ 13,560.00	
G31372	Mantenimiento y Atenciones	RD$ 6,000.00	
		RD$19,560.00	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10498	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 66,000.00
G10498Z	Para pagar deudas de Años Anteriores	RD$60,000.00	
G10498	Atenciones Varias	RD$ 6,000.00	
		RD$66,000.00	
32120	ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS		RD$ 10,000.00
G32120C	Adquisición de Propiedades	RD$10,000.00	
			RD$1,267,136.69

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de marzo del mil

novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral.
Segundo Vicepresidente,

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de marzo del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No. 5842, que aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y la Unión Panamericana sobre el establecimiento en Santo Domingo de una oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5842

VISTOS los artículos 38, inciso 14, y 116 (transitorio) de la Constitución de la República;

VISTOS el Acuerdo firmado en Santo Domingo, el 2 de marzo de 1962, por el Gobierno de la República Dominicana y la Unión Panamericana, y el Anexo al referido Acuerdo, firmado entre las mismas partes, en la citada fecha 2 de marzo de 1962.

R E S U E L V E :

UNICO.– Aprobar el Acuerdo firmado en Santo Domingo, el 2 de marzo de 1962, por el Gobierno de la República Dominicana y la Unión Panamericana sobre el establecimiento en Santo Domingo de una Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, así como el Anexo al referido Acuerdo firmado entre las mismas partes, en la citada fecha 2 de marzo de 1962, que copiados a la letra dicen así:

"ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA UNION PANAMERICANA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO EN SANTO DOMINGO DE UNA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS."

CONSIDERANDO: Que el Comité Interamericano de Representantes de los Presidentes, en su Recomendación 25 señaló, como uno de los medios de fortalecer la acción de la Organización de los Estados Americanos, para que sea un conducto cada día más eficaz de cooperación entre los Estados Miembros, la conveniencia de estrechar la vinculación entre los países del continente mediante el conocimiento recíproco de sus características culturales, económicas y sociales dentro de la comunidad americana, agregando que es un asunto de interés

vital para el funcionamiento eficaz de la organización contar con la comprensión, el apoyo y la participación del público;

QUE a fin de alcanzar tales objetivos el Comité aconsejó en dicha Recomendación que se dieran los pasos necesarios para establecer, debidamente estructuradas, las Oficinas locales de la Organización en toda la Repúblicas Americanas;

QUE el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, en su Resolución del 3 de junio de 1953, autorizó al Secretario General para establecer Oficinas de la Unión Panamericana en los distintos países Miembros;

QUE el Gobierno de la República Dominicana ha ofrecido a la Unión Panamericana su colaboración para lograr esa aspiración, mediante el establecimiento en Santo Domingo de una Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, y ha ofrecido también las facilidades que se otorgan a los organismos internacionales; y

QUE para estos efectos es necesario formalizar un Acuerdo con el propósito de definir las modalidades de cooperación entre las PARTES y determinar las condiciones, facilidades y prerrogativas que el Gobierno de la República Dominicana acordará a la Unión Panamericana, en relación con el establecimiento de dicha Oficina.

POR TANTO:

El Gobierno de la República Dominicana (denominado en adelante el "Gobierno") representado por Su Excelencia, el seôr Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Lic. José Antonio Bonilla Atiles, por una parte, y

La Unión Panamericana (denominada en adelante la "Unión") representada por el Dr. José A. Mora, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, por la otra parte,

ACUERDAN LO SIGUIENTE:

ESTABLECIMIENTO Y PROPOSITO DE LA OFICINA

ARTICULO 1

El Gobierno autoriza a la Unión para establecer en Santo Domingo una Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO 2

El objeto de la Oficina será servir como centro para promover y coordinar en forma más eficaz las actividades de la Unión. A tal efecto la Unión etudiará la posibilidad de desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: Ampliación de un programa de relaciones públicas; reuniones con la participación de personas destacadas en los diversos campos de actividad interamericana; exposiciones de arte para hacer conocer los valores latinoamericanos; festivales de música; muestras de productos; exhibiciones de películas; fomento de turismo; impresión. promoción y distribución de publicaciones de la Unión.

ARTICULO 3

El Gobierno pondrá a disposición de la Unión el uso del local correspondiente, y le proporcionará anualmente la suma de RD$6,000.00 pesos moneda nacional, para el sostenimiento de la Oficina.

ARTICULO 4

La Unión contribuirá anualmente con los fondos que destina al mantenimiento de la actual Oficina de la Unión Panamericana en Santo Domingo y con los fondos que acuerde asignar de su propio presupuesto para publicaciones o actividades que la Unión desee realizar por medio de las facilidades de la Oficina. Además, la Unión suministrará todo el material de oficina que sea necesario, como útiles de escritorio y equipo.

ARTICULO 5

La Oficina formará parte integrante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

El personal que sea asignado a la misma será nombrado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO 6

La Oficina gozará en el territorio de la República Dominicana, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 103 de la Carta de Organización de los Estados Americanos, de la capacidad jurídica, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos, dentro de los límites que se especifican en este Acuerdo.

CAPACIDAD JURIDICA

ARTICULO 7

La Oficina gozará de personería jurídica en el territorio de la República Dominicana y tendrá capacidad legal para (a) contratar, (b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos, y (c) entablar procedimientos judiciales y administrativos.

LIBERTAD DE ACCION

ARTICULO 8

La Oficina gozará en la República Dominicana de la independencia y libertad de acción que corresponden a los organismos internacionales de acuerdo con la costumbre internacional.

PROPIEDADES, BIENES Y HABERES

ARTICULO 9

La Oficina, así como sus propiedades, bienes y haberes gozarán en la República Dominicana de inmunidad contra procedimientos judiciales y administrativos, a excepción de los casos particulares en que esa inmunidad sea expresamente renunciada por el Director de la Oficina, debidamente autorizado para hacerlo por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO 10

Los locales, dependencias, archivos y documentos de la Oficina serán inviolables.

del que sea acordado por el Gobierno de la República Dominicana a cualquier otro Gobierno, incluyendo sus misiones diplomáticas, en asuntos de prioridades, tarifas y tasas sobre correo, cables, telegramas, radiogramas, teléfonos y otras comunicaciones.

ARTICULO 15

La Oficina tendrá el derecho de despachar y recibir correspondencia por mensajeros o en valijas selladas.

PERSONAL DE LA OFICINA

ARTICULO 16

Los funcionarios de la Oficina gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial respecto de todos los actos que ejecutan y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de sus funciones. Además, estarán exentos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos que les pague la Oficina. Al director y demás funcionarios de la Oficina se les concederá la introducción en franquicia, cada dos años, de un automóvil para su uso personal.

ARTICULO 17

Los funcionarios de la Oficina, que no sean nacionales de la República Dominicana.

a) Gozarán de inmunidad contra todo servicio nacional de carácter obligatorio;

b) Recibirán, tanto ellos como sus esposas y sus familiares dependientes, todas las facilidades compatibles con la ley en materia de inmigración.

c) Podrán importar y exportar en franquicia sus muebles y efectos personales por una sola vez.

ARTICULO 18

El Director de la Oficina, o su representante debidamente autorizado, comunicará al Gobierno los nombres de los

funcionarios y demás miembros del personal en la República Dominicana a quienes correspondan los beneficios enumerados en el artículo 17.

ARTICULO 19

Los privilegios e inmunidades se conceden al Director y funcionarios de la Oficina, exclusivamente en interés de esta. Por consiguiente, el Director de la Oficina debidamente autorizado para tal efecto por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, deberá renunciar a los privilegios e inmunidades de cualquier funcionario en cualquier caso en que, según el criterio del Secretario General, el ejercicio de ellos impida el curso de la justicia y cuando dicha renuncia pueda hacerse sin que se perjudiquen los intereses de la Oficina.

COOPERACION Y SOLUCION DE DISPUTAS

ARTICULO 20

La Oficina cooperará con las autoridades competentes del país para facilitar la administración adecuada de la justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas de policía y evitar que ocurran abusos en relación con los privilegios e inmunidades mencionados en este Acuerdo.

ARTICULO 21

La Oficina tomará las medidas que sean necesarias para la solución adecuada de:

a) Las disputas que se originen en contratos u otras cuestiones de derecho privado en que sea parte la Oficina; y

b) Las disputas en que sea parte cualquier funcionario de la Oficina, respecto de las cuales goce de inmunidad, en caso de que el Director, debidamente autorizado para tal efecto por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, no haya renunciado a tal inmunidad de acuerdo con el Artículo 19.

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 22

Ninguna disposición del presente Acuerdo deberá ser interpretada como impedimento para la adopción de medidas apropiadas de seguridad para los intereses del Gobierno.

ARTICULO 23

Este Acuerdo podrá ser revisado por mutuo consentimiento del Gobierno y de la Unión.

ARTICULO 24

El presente acuerdo deberá ser sometido a la aprobación del Consejo de Estado, en funciones de Congreso Nacional, de conformidad con las disposiciones del inciso 6 del artículo 54 de la Constitución de la República, y entrará en vigor a partir de dicha aprobación.

ARTICULO 25

Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado este Acuerdo dando aviso por escrito a la otra, con un año de anticipación.

En Fe de lo cual, los infrascritos debidamente autorizados para hacerlo, firman el presente Acuerdo.

Hecho en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los dos días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, en dos originales cada uno de los cuales será igualmente auténtico.

Firmado:

Por el Gobierno de la República Dominicana: J. A. Bonilla Atiles, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.

Por la Unión Panamericana: José A. Mora, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

"ANEXO AL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA Y LA UNION PANAMERICANA PARA EL ESTABLECIMIENTO EN SANTO DOMINGO DE UNA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS."

El Gobierno de la República Dominicana representado por Su Excelencia, el señor Secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Lic. José Antonio Bonilla Atiles, por una parte, y

La Unión Panamericana representada por el Dr. José A. Mora, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, por la otra parte,

ACUERDAN:

QUE las dos cláusulas siguientes son parte del "Acuerdo entre la Unión Panamericana y el Gobierno de la República Dominicana sobre el establecimiento en Santo Domingo de una Oficina de la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos", que conjuntamente se firman en la fecha:

"El Gobierno proporcionará a los funcionarios de la Oficina, cuyos nombres le hayan sido comunicados por la misma, un Carnet Especial que certifique su Carácter de funcionarios de la Organización y que gozán de las prerrogativas e inmunidades reconocidas en el presente Acuerdo".

"El Gobierno reconocerá el documento oficial de viaje de la Organización de los Estados Americanos como documento válido para viajar, cuando sea debidamente expedido a los funcionarios de la oficina en Misión Oficial".

En fe de lo cual, los infrascritos debidamente autorizados para hacerlo, firman el presente anexo.

Hecho en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los dos días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, en dos originales cada uno de los cuales será igualmente auténtico.

FIRMADO:

Por el Gobierno de la República Dominicana: J.A. Bonilla Atiles, Secretario de Estado de Relaciones Exteriores.

Por la Unión Panamericana: José A. Mora, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos."

RAFAEL AUGUSTO PINEDO GONZALEZ, Encargado del Departamento Administrativo de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, CERTIFICA: que el documento arriba transcrito es una copia fiel y conforme del Acuerdo y su Anexo, suscrito entre el Gobierno de la República Dominicana y la Unión Panamericana sobre el Establecimiento en Santo Domingo de una Oficina de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Santo Domingo, Distrito Nacional, 15 de marzo de 1962.— (Firmado) Rafael Augusto Pinedo González, Encargado del Departamento Administrativo de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 54, inciso 2° de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Resolución, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5843, que deroga la Ley No. 5257, del 27 de noviembre de 1961, que modificó el artículo 54 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se deroga la Ley No. 5257, de fecha 27 de noviembre de 1959, que modificó el artículo 54 de la Ley

Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 4761, de fecha 1ro. de septiembre de 1957, a fin de que la indicada modificación rija en la siguiente forma:

Artículo 54.– "Los alistados ingresarán en virtud de un contrato de alistamiento, quedando obligados por el mismo a servir por un período de cuatro años, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente Ley".

PARRAFO: "Los alistados que a la fecha de la publicación de la presente ley hayan servido cuatro años del período de seis establecido por la referida Ley No. 5257, serán considerados dados de baja por expiración de alistamiento, siendo facultativo para ellos realistar si así lo desearen y fuere aceptado por el Estado".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República y
del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5844, que incorpora la Sección de Guayacanes a la Provincia de San Pedro de Macorís

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5844

Artículo 1.— La Sección de Guayacanes formará parte en lo adelante del Municipio de San Pedro de Macorís, Provincia del mismo nombre.

Artículo 2.— En consecuencia, quedan modificados en cuanto sea necesario, el Artículo 2 y el Párrafo I del Artículo

18 de la Ley No. 5220, sobre División Territorial de la República Dominicana de fecha 21 de septiembre de 1959.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5845 que modifica los Artículo 7 y 8 de la Ley No. 5788 del 9 de enero de 1962, que crea e integra la Junta Nacional de Planificación y Coordinación

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5845

Artículo 1.— Se modifican los Artículos 7 y 8 de la Ley No. 5788 que crea e integra la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, de fecha 9 de enero de 1962, para que rijan del siguiente modo:

"Artículo 7.— La Junta Nacional de Planificación y Coordinación estará integrada en la forma siguiente:

Un representante del Poder Ejecutivo, que la presidirá; el Secretario Coordinador de la Junta; el Director General de Planificación Integral, y el Director de Economía y Coordinación para los Gastos del Gobierno, Miembros.

Párrafo I.— La Junta tendrá como organismo asesor, un Consejo Consultivo, compuesto por los Secretarios de Estado

de Industria y Comercio, Finanzas, Agricultura, Obras Públicas y el Gobernador del Banco Central, que se reunirá previa convocatoria de la Junta.

Párrafo II.– Los demás Secretarios de Estado participarán en las deliberaciones de la Junta, cuando se traten asuntos concernientes a sus respectivos despachos.

Párrafo III.– Mientras exista el Consejo de Estado, el representante del Poder Ejecutivo que presidirá la Junta, será un Miembro de dicho Consejo de Estado".

"Artículo 8.– La Junta tendrá como organismo técnico y ejecutivo una Secretaría Coordinadora, con las secciones técnicas y el personal que determinen los reglamentos".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eiiseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional. Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5846, que modifica el Artículo 1ro. de la Ley No.4451, del 11 de mayo de 1956.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5846

ARTICULO UNICO.– Se modifica el Artículo 1ro. de la Ley No.4451, de fecha 11 de mayo de 1956, para que en lo adelante rija de la siguiente manera:

"Artículo 1.– Se crea un Comité Nacional de Control de Precios Máximos de Artículos de Primera Necesidad el cual tendrá facultad para determinar los artículos alimenticios y los productos farmacéuticos que serán objeto de control, con el fin de fijar por ordenanzas periódicas, el precio máximo a que los mismos podrán ser vendidos, tanto por los mayoristas como por los detallistas para evitar su encarecimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5847, que extiende hasta el 30 de junio de 1962 los efectos de la Ley No. 5625, del 14 de septiembre de 1961, sobre gracia para la obtención y renovación de ciertas categorías de la Cédula Personal de Identidad no renovadas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5847

ARTICULO UNICO.– Se extienden hasta el treinta de junio del año en curso los efectos de la Ley No. 5625, de fecha 14 de septiembre de 1961, por la cual se concedió una gracia para la obtención y renovación de la Cédula Personal de Identidad en la siguiente forma: RD$1.00, las personas comprendidas de la trigésima segunda a la trigésima quinta categoría; RD$3.00, las personas comprendidas de la décima octava a la trigésima primera categoría; y con el cincuenta por ciento (50%) de lo adeudado, sin recargo, las personas comprendidas en las restantes categorías.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiseis días del mes de marzo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en el diario "El Caribe".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República, a los veintiseis días del mes de marzo del mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

NOTA: La presente Ley fue publicada oficialmente en los diarios "El Caribe" y "La Nación" del 27 de marzo de 1962.

Ley No. 5848 que deroga la Ley No. 5454, del 23 de diciembre de 1960, que dispone que todo trabajador debe proveerse de una autorización de la Secretaría de Estado de Trabajo, previa presentación de Certificados Médicos

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5848

ARTICULO UNICO.– Queda derogada la Ley No. 5454, de fecha 23 de diciembre de 1960, que dispone que todo trabajador debe proveerse de una autorización de la Secretaría de Estado de Trabajo, previa presentación de un certificado médico en general y de un certificado dental, en que conste que es apto para la labor a que está destinado.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos; años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5849, que reforma el Artículo 4 de la Ley Sobre Pasaportes No. 1052, del 3 de diciembre de 1945

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5849

Artículo 1.– Queda reformado el Artículo 4 de la Ley sobre Pasaportes No. 1052, de fecha 3 de diciembre de 1945, modificado últimamente por la Ley No. 5714, de fecha 22 de diciembre de 1961, para que rija con el siguiente texto:

"Artículo 4.– Los pasaportes y los documentos de identificación de que trata el artículo 1ro. de esta Ley, estarán sujetos a un impuesto de veinte pesos oro (RD$20.00), aplicable en sellos de Rentas Internas que se adherirán al propio documento, y serán cancelados por el funcionario expedidor.

AGN

Párrafo I.– Las renovaciones de los indicados pasaportes, las cuales se efectuarán cada dos años, estarán sujetas únicamente al pago de quince pesos oro (RD$15.00).

Párrafo II.– Para fines de expedición de pasaportes no se exigirá el Certificado de Vida y Costumbre".

Artículo 2.– La presente Ley deroga y sustituye cualquiera otra ley o parte de ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de marzo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

osé Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de marzo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

NOTA: La presente Ley fue publicada oficialmente en el diario "La Nación", del 25 de marzo de 1962.

Ley No. 5850 que denomina "Hogares para Menores" el conocido con el nombre de Hogares para Huérfanos y Desamparados

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5850

Artículo 1.– Se modifica el Artículo 1ro. de la Ley No. 4186, de fecha 24 de junio de 1055, en el sentido de que los "Hogares para Huérfanos y Desamparados" se denominen en lo adelante "Hogares para Menores".

Artículo 2.– En toda ley, reglamento, decreto o documento donde se diga "Hogares para Huérfanos y Desamparados", se entenderá que se dice "Hogares para Menores".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de marzo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Monseñor Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5851, que deroga la Ley No. 5779, del 31 de diciembre de 1961, que rebaja a un 4 por ciento el interés de todo préstamo otorgado por el Banco Agrícola de la República Dominicana y dicta otras disposiciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5851

CONSIDERANDO: que la aplicación de la Ley No. 5779, del 31 de diciembre de 1961, resulta lesiva en extremo para los intereses del Banco Agrícola de la República Dominicana;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Queda derogada la Ley No. 5779, de fecha 31 de diciembre de 1961, que rebaja a un 4 por ciento el tipo de interés de todo préstamo otorgado por el Banco Agrícola de la República Dominicana y dicta otras disposiciones.

Artículo 2.— En consecuencia, todos los créditos otorgados por el Banco Agrícola de la República Dominicana volverán a regirse de acuerdo con las estipulaciones contenidas en los respectivos contratos suscritos entre dicho Banco y sus deudores.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la Presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 29 días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º degla Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5852 sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5852

TITULO PRIMERO

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS TERRESTRES

CAPITULO I

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS PLUVIALES

Artículo 1.- Se reputan aguas pluviales para los efectos de esta Ley, las que proceden inmediatamente de las lluvias.

Artículo 2.- Pertenecen al dueño de un predio las aguas pluviales que caen en el mismo, mientras discurren por él. Podrá en consecuencia construir dentro de su propiedad, estanques, pantanos, cisternas o aljibes donde conservarlas al efecto, o emplear cualquier otro medio adecuado, siempre que con ello no cause perjuicios al público ni a terceros.

Artículo 3.- Son del dominio público las aguas pluviales que discurren por barrancos o ramblas, cuyos cauces sean del mismo dominio público.

Artículo 4.- La Secretaría de Estado de Agricultura por intermedio de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, podrá conceder autorización al que lo solicite para construir en terrenos públicos cisternas o aljibes donde se recojan las aguas pluviales. Para dichos fines el interesado deberá someter plano de las obras a ejecutar.

Artículo 5.- Las aguas así recogidas serán utilizadas por el ejecutor de las obras en la forma y condiciones que determine la Dirección General de Recursos Hidráulicos, pudiendo en todo caso dicha Dirección, utilizar los excedentes que puedan resultar después del uso que haga el constructor, en beneficio de terceras personas interesadas.

Artículo 6.- Los dueños de predios contiguos a vías públicas podrán recoger las aguas pluviales que por ellas discurran y aprovecharlas en el riego de sus predios con sujeción a las disposiciones que puedan existir sobre conservación y policías de dichas vías.

Artículo 7.- Los dueños de predios lindantes con cauces públicos de caudal no contínuo, como ramblas, barrancos, y otros semejantes de dominio público, pueden aprovechar en su regadío las aguas pluviales que por ellas discurran y construir al efecto, malecones de tierra y piedra suelta o presas móviles o permanentes, siempre que con ello no perjudique derechos preexistentes de predios inferiores que con anterioridad hubieran construído presas para fines de aprovechamiento de dichas aguas. Para tales obras la Dirección General de Recursos Hidráulicos será debidamente informada con anterioridad, a fin de determinar la prioridad de la utilización.

Párrafo:— La Dirección General de Recursos Hidráulicos en todo caso podrá construír dentro de las tierras del dominio público, presas a fin de recoger las aguas pluviales que discurren por ramblas, barracos o arroyos descontínuos con el objeto de distribución entre los propietarios necesítados de la región.

Artículo 8.— Cuando estos malecones o presas puedan producir inundaciones o causar cualquier otro perjuicio al público, la Dirección General de Recursos Hidrálucos, de oficio o por instancia de parte, comprobado el peligro, ordenará a quien los construyó que los modifique en cuanto sea necesario para desvanecer todo temor o si fuese preciso que los destruya. Si amanezaran causar perjuicios a los particulares, podrán estos reclamar a tiempo ante la autoridad local, y si el perjuicio se realiza tendrán expeditos sus derechos ante los Tribunales de Justicia.

Artículo 9.— Lo dispuesto en los artículos que preceden respecto de las aguas pluviales, es aplicable a la de los manantiales y arroyos discontínuos que sólo fluyen en épocas de abundancia de lluvias.

Artículo 10.— Cuando se intente construir presas permanentes a fin de aprovechar en el riego las aguas pluviales o los manantiales discontínuos que corren por los cauces públicos, será necesaria la autorización de la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

CAPITULO II

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS VIVAS, MANANTIALES Y CORRIENTES

Artículo 11.— Las aguas de los ríos, las aguas que nacen contínua o discontínuamente en terrenos del dominio público; las continuas o discontínuas de manantiales y arroyos que corren por sus cauces naturales, constituyen parte del dominio público de la Nación, y en consecuencia se consideran como disponibles para su distribución para fines agrícolas o industriales sobre cualquier terreno en cuya vertiente sea posible practicar la conducción de las aguas, en la forma y con las condiciones que se establecen en la presente Ley.

Artículo 12.— Tanto en los predios de los particulares como en los de propiedad del Estado, las aguas que en ellos nacen continua o discontínuamente pertenecen al dueño respectivo para su uso o aprovechamiento mientras discurran por los mismos predios.

Cuando las aguas no aprovechadas salen del predio donde nacieron se constituyen en aguas para los efectos de la presente ley. Más, si después de haber salido del predio donde nacen entran naturalmente a discurrir por otro de propiedad privada, el dueño de dicho predio puede aprovecharlas llenando para ello los requisitos exigidos por la Ley, y luego el inmediatamente inferior si lo hubiere y así sucesivamente, previa autorización de la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

Artículo 13.— Todo aprovechamiento eventual de las aguas de manantiales y arroyos en cauces naturales, pueden libremente ponerlo por obra de los dueños de los predios inferiormente situados, siempre que obtenga previamente la autorización correspondiente de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, y que la cantidad de agua por cada uno de ellos consumida no exceda de 10 litros por segundo de tiempo. En tales casos la Dirección General de Recursos Hidráulicos no podrá poner objeción a ello, siempre que dichas obras no perjudiquen a terceros.

Artículo 14.— El orden de preferencia para el aprovechamiento eventual será el siguiente:

1.— Los predios por donde discurran las aguas antes de su incorporación con el río, guardando el orden de su proximidad al nacimiento de las corrientes y respetando su derecho al aprovechamiento eventual en toda la longitud de cada predio.
2.— Los predios fronteros o colindantes al cauce por el orden de proximidad al mismo y prefiriendo siempre los superiores.

Pero se entiende que en estos predios inferiores y laterales, el que se hubiere anticipado en el aprovechamiento, no puede ser privado de él por otro, aunque éste se encuentre situado más arriba en el discurso del agua. Y que ningún aprovechamiento eventual podrá interrumpir ni atacar derechos anteriormente adquiridos sobre las mismas aguas en renglón inferior.

Artículo 15.– Las aguas no aprovechadas por el dueño del predio donde nacen, así como las que sobrasen de sus aprovechamientos, saldrán del predio por el mismo punto del cauce natural acostumbrado, sin que puedan ser en manera alguna desviadas del curso por donde primitivamente se alejaban. Lo mismo se entiende que los predios inmediatamente inferior respecto del siguiente, observándose siempre este orden.

Artículo 16.–Si el dueño de un predio donde brotó un manantial natural no aprovechase más que la mitad, la tercera parte u otra cantidad fraccionaria de sus aguas, el remanente o sobrante será aprovechado por los propietarios de fondos inferiores en la forma determinada en el artículo 7 de la presente Ley.

Cuando el dueño de un predio donde brota un manantial natural no aprovecha más que una parte fraccionaria y determinada de sus aguas, continuará en épocas de disminución o empobrecimiento del manantial usando y disfrutando la misma cantidad de agua absoluta, y la merma será en desventaja y perjuicio de los regantes o usuarios inferiores, cualesquiera que fueren sus títulos al disfrute.

Por consecuencia de lo aquí dispuesto, los predios inferiormente situados, y los lateralmente en su caso, adquieren por el orden de su colocación la opción a aprovechar aquellas aguas y consolidar por el uso no interrumpido de su derecho.

Pero se entiende que en estos predios inferiores o laterales el que se anticipase o hubiese anticipado, no puede ser ya privado de él por otro, aún cuando éste estuviese situado más arriba en el discurso del agua.

Artículo 17.– El dominio de las aguas minerales nazcan o corran en terrenos de propiedad pública o privada, constituyen parte del dominio público y en consecuencia se consideran disponibles para su concesión de conformidad con las condiciones que determine la Dirección General de Recursos Hidráulicos. Al otorgarse concesión sobre estas fuentes tendrá prioridad en igualdad de condiciones el propietario del terreno en donde nazca o corra dicha fuente.

Para los efectos de esta ley se entiende por gauas minerales lar que contienen en disolución sustancias útiles para la industria en general, cualquiera que sea su naturaleza.

Artículo 18.— Se consideran del dominio público las aguas minero—medicinales, pudiendo el Estado hacer concesiones para su explotación o explotarlas directamente, reglamentando en ambos casos la misma. Cuando dichas fuentes nazcan en terrenos privados, el Estado dará prioridad al propietario de los mismos para su explotación, en caso de que no haga directamente la explotación de dichos manantiales.

CAPITULO III

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS MUERTAS O ESTANCADAS

Artículo 19.—Son del dominio público los lagos y lagunas formados por la naturaleza, que ocupan terrenos públicos o que por su magnitud constituyan fuentes de aprovechamiento de comunidades que puedan ser utilizados en sistemas de riegos, embalse de acueductos o cualquier otra obra de utilidad pública.

Artículo 20.— Son de propiedad de los particulares, las lagunas y charcos formados en terrenos propiedad de dichos particulares, y los cuales no entren dentro de la denominación establecida en el artículo anterior.

CAPITULO IV

DEL DOMINIO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS

Artículo 21.— Pertenecen al dueño de un predio en plena propiedad, las aguas subterráneas que en él hubiere obtenido por medio de pozos ordinarios, es decir, de pozos para fines domésticos, abrevaderos de ganados.

Artículo 22.— Todo propietario puede abrir libremente pozos ordinarios para elevar aguas dentro de sus fincas aunque con ello resultasen amenguadas las aguas de sus vecinos. Deberá sinembargo guardarse la distancia de dos metros entre pozo y pozo dentro de las poblaciones y de 15 metros en el campo entre la nueva excavación y los pozos, estanques, fuentes y acequías permanentes de los vecinos.

Artículo 23.— El dueño de cualquier terreno puede alumbrar y apropiarse plenamente por medio de pozos artesianos, pozos profundos y por socabones y galerías las aguas que existen debajo de la superficie de su finca, con tal de que no distraiga o aparte aguas públicas o privadas de su corriente natural.

Artículo 24.— Cuando por consecuencia de las labores del pozo artesiano, pozo profundo, socabón o galería se distraigan o mermen las aguas públicas o privadas destinadas a un servicio público o a un aprovechamiento privado preexistente, con derechos legítimamente adquiridos, los funcionarios de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, tan pronto sea de su conocimiento por cualquier medio, podrán suspender las obras en ejecución.

Artículo 25.— Las labores de que habla el artículo anterior para alumbramientos, no podrá ejecutarse a menor distancia de 40 metros de edificios ajenos, de un ferrocarril o carretera, ni a menos de 100 metros de otro alumbramiento o fuente, río, canal, acequía o abrevadero público, sin la licencia correspondiente de los dueños.

Artículo 26.— Las concesiones de terrenos del dominio público para alumbrar aguas subterráneas por medio de galerías, socabones o pozos artesianos o pozos profundos, se otorgarán por la Dirección General de Recursos Hidráulicos, quedando siempre todo lo relativo al dominio, limitaciones de la propiedad y aprovechamiento de las aguas alumbradas, sujeto a lo que respecto de estos particulares prescribe la presente ley.

Sólo podrán concederse para estos alumbramientos subterráneos terrenos de dominio público cuya superficie o suelo no haya sido concedido para objeto diferente, a no ser que ambos sean compatibles.

Ninguna concesión de esta clase, podrá perjudicar los aprovechamientos preexistentes, bien sean de público interés, bien privados, con derechos legítimamente adquiridos.

CAPITULO V

DE LAS OBRAS DE DEFENSA DE LAS AGUAS PUBLICAS

Artículo 27.— Los dueños de predios lindantes con cauces públicos tienen libertad de poner defensas contra las aguas de sus

respectivas márgenes por medio de plantaciones, estacadas, revestimientos, muros o cualquier otra obra, siempre que los juzguen conveniente, dando de ello oportunamente conocimiento a la Dirección General de Recursos Hidráulicos. Dicha Dirección podrá sin embargo, previo expediente, mandar a suspender tales obras y aún restituír las cosas a su anterior estado, cuando por tales circunstancias amenacen aquellas causar perjuicios a la navegación o flotación de los ríos, desviar las corrientes de su curso natural o producir inundaciones.

Párrafo:— Cuando las obras de defensa consistan en simples muros levantados dentro del ámbito de la propiedad privada y longitudinalmente al curso del río, ningún tercero podrá alegar perjuicio como consecuencia de dicha obra y por tanto la Dirección General de Recursos Hidráulicos no podrá ordenar la destrucción de dichas obras.

Artículo 28.— Cuando las plantaciones y cualquier obra de defensa que se intente, han de invadir el cauce, no podrán ejecutarse sin previa autorización de la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

Artículo 29.— En los cauces donde convenga ejectuar obras poco costosas de defensa. el Director General de Recursos Hidráulicos concederá una autorización general que los dueños de los predios limítrofes, cada cual en la parte de cauce lindante con su respectiva rivera, puedan construirla, pero sujetándose a las condiciones que se fijen en la concesión, encaminadas a evitar que unos propietarios caucen perjuicios a otros.

Artículo 30.— Cuando las obras proyectadas sean de alguna consideración, la Dirección General de Recursos Hidráulicos, a solicitud de los que las promuevan, y previo el estudio de las mismas, podrá obligar a costearlas a todos los propietarios que hayan de ser beneficiados por ellas, siempre que presente su conformidad la mayoría de estos, computada por la parte de propiedad que cada uno represente, y que aparezca cumplida y facultativamente justificada la común utilidad que las obras hayan de producir. En tal caso, cada cual contribuirá al pago según las ventajas que reporte.

Artículo 31.— Siempre que para precaver o contener inundaciones inminentes sea preciso en caso de urgencia, practicar obras provisionales o destruír las existentes en toda

clase de predios, la Dirección General de Recursos Hidráulicos podrá acordarlo.

Artículo 32.– Las obras de interés general, provincial o local necesarias para defender las poblaciones, y para conservar encausados y expeditos los ríos navegables y flotables, se acordarán c ostearán por el Estado.

El exam n y estudio de los proyectos relativos a esta clase de obras, corresponde a la Dirección General de Recursos Hidráulicos, quien por vía del Secretario de Estado correspondiente, someterá al Poder Ejecutivo la necesidad de ejecución de las mismas.

Artículo 33.– Se declaran de utilidad pública los terrenos y las obras que sean necesarios para la construcción, ampliación o mejoramiento de las obras para el aprovechamiento de las aguas públicas, sin perjuicio de las indemnizaciones que sean de lugar, de acuerdo con la Ley.

DE LOS APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LAS AGUAS PUBLICAS

CAPITULO I

DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PUBLICAS PARA VIVEROS Y CRIADEROS DE PECES

Artículo 34.– La Dirección General de Recursos Hidráulicos, por intermedio de la Secretaría de Estado correspondiente, podrá conceder aprovechamientos de aguas públicas para formar lagos, remansos, o estanques destinados a viveros o criaderos de peces, siempre que no se cause perjuicios a la salubridad o a otros aprovechamientos inferiores con derechos adquiridos anteriormente.

Artículo 35.– Para la industria de que habla el artículo anterior, el peticionario presentará el proyecto completo de las obras y el título que acredite ser dueño del terreno donde hayan de construirse, o haber obtenido el consentimiento de quien lo fuere.

Artículo 36.— Los concesionarios de aguas públicas para riegos o establecimientos industriales podrán previa solicitud al efecto, formar en sus canales o en los terrenos contiguos que hubiesen adquirido remansos o estanques para viveros de peces.

Artículo 37.— Las autorizaciones para viveros de peces se darán a perpetuidad. Sin embargo, queda entendido, que si el beneficiario no hiciera uso de su permiso en el plazo que le sea acordado por la Dirección General de Recursos Hidráulicos, si abandona el cuidado y atenciones del vivero por más de dos años, perderá de pleno derecho su concesión.

CAPITULO II

DEL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS PUBLICAS PARA FINES INDUSTRIALES

Artículo 38.— Las aguas de los ríos podrán ser utilizadas para aplicarse a la producción de energía mecánica, directamente, o para la producción de luz y fuerza eléctrica u otros usos industriales, siempre que no ocasione la desviación de las aguas de su curso natural. En tales casos, su establecimiento no podrá entorpecer el libre curso de las aguas ni perjudicar a los predios limítrofes, regadíos o industrias establecidas, incluso la de pesca.

Artículo 39.— Toda persona física o moral que desee practicar estudios para aprovechamiento de aguas públicas destinados a empresas industriales de interés público o privado, deberá dirigir previamente a la Dirección General de Recursos Hidráulicos una solicitud para fines de autorización.

Párrafo.— A la mencionada solicitud, el o los interesados anexarán una relación explicativa del proyecto indicando la fuente de agua que se trate de utilizar, su caudal presumible y los fines de la obra en proyecto.

Artículo 40.— El derecho de utilizar las aguas de los ríos para los fines del artículo 38, podrá ser acordado a las personas o compañías particulares, dominicanas o extranjeras, que lo soliciten del Poder Ejecutivo por intermedio de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, debiendo dicha solicitud contener anexo para su estudio por la Dirección General de Recursos Hidráulicos, lo siguiente:

a) El Proyecto de las obras, compuesto de los planos, memoria descriptiva, presupuestos de gastos y condiciones técnicas y económicas en general;

b) La declaración de acogerse a las estipulaciones de la presente ley.

Artículo 41.– Tanto en los ríos navegables como en los que no lo sean, el Poder Ejecutivo concederá la autorización necesaria para el establecimiento de molinos u otros artefactos industriales en edificios situados cerca de las orillas, a las cuales se conduzca por canales el agua necesaria, y que después se reincorpore a la corriente del río. En ningún caso se concederá esta autorización perjudicándose a la navegación de los ríos y establecimientos industriales existentes.

Para obtener la autorización a que se refiere este artículo, es requisito indispensable de que quien lo solicite sea dueño del terreno donde pretende construir el edificio para el artefacto o estar autorizado para ello de quien lo sea.

Artículo 42.– Cuando un establecimiento industrial comunique a las aguas sustancias y propiedades nocivas a la salubridad, a la vegetación, o a la procreación y vida de los peces, la Dirección General de Recursos Hidráulicos dispondrá que se haga un reconocimiento facultativo, y si resultare cierto el perjuicio, mandará que se suspenda el trabajo industrial hasta que sus dueños adopten el oportuno remedio. Los derechos y gastos del reconocimiento serán satisfechos por el que hubiese dado la queja, si resultare infundada, y en caso contrario por el dueño del establecimiento.

Cuando el dueño o dueños, en el término de seis meses, no hubiesen adoptado el oportuno remedio, se entenderá que renuncia a continuar en la explotación de su industria.

Artículo 43.– Las concesiones de aprovechamiento de aguas públicas para fines industriales, se otorgarán a perpetuidad y a condición de que si en cualquier tiempo las aguas adquiriesen propiedades nocivas a la salubridad, la vegetación o a los peces, por causa de la industria para que fueron concedidas, se declarará la caducidad de la concesión sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 44.— Los que aprovechen las aguas como fuerza motríz en mecanismos o establecimientos industriales situados dentro de los ríos o en sus riberas o márgenes estarán exentos del pago de contribución o tasa alguna durante los diez primeros años de su instalación.

Artículo 45.— Las concesiones para fines industriales, se harán por medio de contratos celebrados por el Poder Ejecutivo, solicitados por conducto de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, la cual será la encargada de examinar los planos y proyectos previstos en la indicada ley. En dichos contratos se estipularán los pagos que deberá hacer el concesionario al Fisco por la utilización de las aguas, según la importancia de las concesiones y teniendo en cuenta la exención contenida en el artículo anterior.

Artículo 46. Se exceptúan de las prescripciones de este artículo, los pequeños caficultores que utilicen las aguas públicas para el lavado del café de su producción, cuando ésta sea en la cantidad, única y exclusivamente, necesaria para una despulpadora movida por fuerza muscular o por fuerza hidráulica, los cuales sólo pagarán un impuesto básico de un peso por cada contrato y un peso anual por el uso efectivo de las aguas.

CAPITULO III

DE LOS TITULOS DE AGUAS

Artículo 47.— Los particulares que deseen utilizar las aguas públicas deberán proveerse previamente de un título de aguas y llenar, para el momento de la utilización efectiva, los demás requisitos que se establecen en esta Ley.

Artículo 48.— Toda solicitud de Títulos de aguas, ya sea para su aprovechamiento con fines agrícolas o industriales u otros usos, deberá dirigirse a la Dirección General de Recursos Hidráulicos, acompañada de un plano del terreno, debidamente levantado. En dicho plano se indicarán las parcelas que constituyen el terreno, si éste está registrado; en caso contrario, se indicarán todas las colindancias del terreno, a fin de que queden determinadas la extensión y la localización.

Párrafo.— Se establece el derecho de prioridad en las solicitudes de títulos de aguas. Esta prioridad no tendrá efecto,

sin embargo, cuando las aguas solicitadas puedan ser interesadas por el Gobierno para utilizarlas en riegos nacionales u otros fines de interés público.

Artículo 49.— Las solicitudes de títulos de aguas deberán hacerse conforme a los formularios preparados al efecto por la Dirección General de Recursos Hidráulicos, y deberán estar suscritos por el propietario del terreno.

Párrafo.— Los arrendatarios de terrenos podrán también solicitar títulos de aguas, cuando estén autorizados por el propietario del terreno, en el entendido de que, si los títulos de aguas son concedidos, constituirán un derecho inherente al terreno y no al arrendatario.

Artículo 50.— Cuando la cantidad solicitada para un título de aguas exceda de cincuenta litros por segundo, deberá acompañarse a la solicitud un plano general y detalles de la obra por cuadruplicado, en escala de 1 por 2,000, diseño de secciones cálculos correspondientes y memoria descriptiva.

Artículo 51.— La Dirección General de Recursos Hidráulicos podrá conceder los títulos de aguas por cantidades menores de las que soliciten, cuando el caudal de la fuente así lo exija, para hacer equitativa su distribución.

Igualmente podrá dicha Dirección General de Recursos Hidráulicos conceder títulos de aguas para ser usados única y exclusivamente en las regiones semi-áridas dedicadas a pastos y otros cultivos; para cuyo fin la Dirección General de Recursos Hidráulicos dispondrá que se haga el estudio de los ríos bajo el punto de vista del mejor régimen y el aforo de sus corrientes, a fin de determinar la cantidad disponible de agua en las diversas épocas del año.

Artículo 52.— Los derechos de aguas obtenidos por la concesión de títulos, formarán parte inseparable de la propiedad correspondiente. Estos derechos consistirán en la facultad de utilizar las aguas para los fines indicados en los títulos, pero con la obligación, a cargo del titular, de solicitar permisos anuales para el uso efectivo de las aguas, cumpliendo los requisitos de esta ley.

Párrafo.— Sin embargo, la Dirección General de Recursos Hidráulicos podrá autorizar, después de un informe técnico que pruebe su justificación, el traspaso de los títulos de aguas de un terreno a otro, caso en el cual el título formará parte inseparable del nuevo terreno.

Artículo 53.— En todos los títulos de aprovechamiento de aguas públicas se fijará la naturaleza de éstos, la cantidad de litros por segundo del agua concedida y si fuera para riego, la extensión en hectáreas del terreno que haya de regarse.

Artículo 54.— Se señala como unidad de agua para fines de distribución, la cantidad de un litro por segundo y por hectárea.

Párrafo.— La Dirección General de Recursos Hidráulicos fijará para cada caso la dotación respectiva de riego, teniendo en cuenta la constitución física del terreno y la clase de cultivos.

Artículo 55.— Las aguas concedidas para un aprovechamiento no podrán dedicarse a otro diverso sin la formación de expediente, como si se tratara de nueva concesión; disponiéndose, sin embargo, que las aguas concedidas para riegos pueden además ser aplicadas en preparación industrial de los productos mismos de la propiedad regada, con tal de que no se aumente el número de litros concedidos, y que las aguas concedidas para mover artefactos y que por consiguiente hayan de ser devueltas al cauce, puedan también ser usadas para cualesquiera otros fines industriales que no las utilicen para poder ser devueltas al cauce.

Artículo 56.— La Dirección General de Recursos Hidráulicos y en consecuencia la Secretaría de Estado correspondiente, no serán responsables de la falta o disminución que pueda resultar en el caudal expresado en el título, ya sea que proceda de error o de cualquier otra causa.

Artículo 57.— Siempre que en las concesiones o títulos de aguas y en los disfrutes de cantidades determinadas de aguas por espacio fijo de tiempo, no se exprese otra cosa, el uso continuo se entiende por todos los instantes; si fuere por día, el día natural se entenderá de 24 horas desde media noche; si fuese durante el día o la noche, se entenderá entre la salida y la puesta del sol; y si fuese por semana, se contarán desde las 12 de la noche del domingo; si fuese por días festivos o con exclusión de ellos, se

entenderan los de preceptos en que no se puede trabajar, considerándose únicamente días festivos aquellos que eran tales, en la época de la concesión o del contrato. La aplicación de estas disposiciones y los pormenores sobre el modo y tiempo del disfrute del agua, queda a cargo de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, la que las pondrá en práctica por intermedio de sus funcionarios.

Artículo 58.– Las concesiones de aprovechamiento de aguas caducarán por falta de cumplimiento de las condiciones y plazos con arreglo a las cuales hubiesen sido otorgadas.

CAPITULO II

DE LA SOLICITUD DE PERMISOS PARA LA UTILIZACION DE LAS AGUAS

Artículo 59.– Para la construcción de canales, estanques para viveros y criaderos de peces, instalaciones industriales, así como para utilizar efectivamente las aguas, los titulares de aguas deberán solicitar y obtener permisos de la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

Párrafo.– Las solicitudes para utilización de aguas podrán ser hechas también por los arrendatarios o usuarios de los terrenos bajo cualquier forma, siempre que los terrenos estén amparados por títulos de aguas.

Artículo 60.– Del 1ro. al 30 de noviembre de cada año, todos los titulares de aguas o los arrendatarios o usuarios que hubieren obtenido permisos para la utilización efectiva de las aguas, deberán renovar sus permisos. Tanto las solicitudes de utilización como las de renovación, se dirigirán a la Dirección General de Recursos Hidráulicos, de conformidad al formulario que al efecto prepare dicha Dirección.

Párrafo.– Quedan excluídos de la renovación anual para utilización de las aguas, las explotaciones industriales que se regirán por los contratos especiales suscritos con el Poder Ejecutivo. Así como también las personas o empresas que utilicen dichas aguas en estanques para viveros de peces, los cuales serán sometidos a una tasa anual determinada en la concesión y aquellos que usan las aguas pluviales y las no continuas, que por su escasez solo permiten la irrigación de pastos.

Artículo 61.— Se establecen las siguientes tarifas para las solicitudes de títulos de aguas, para permisos de construcción de canales privados y para el uso de las aguas:

1.— Solicitudes de Títulos de Aguas:

a) Por el título de aguas para fines industriales, independientemente de las tasas establecidas en los contratos de concesión firmados con el Poder Ejecutivo, cuando la instalación no exceda de RD$2,000.00 RD$25.00

b) Por cada RD$1,000.00 extras de capital invertido en la instalación RD$1.00 .

c) Por el título de aguas para fines de viveros y criaderos de peces RD$25.00 .

d) Por el título de aguas para fines de riego de hasta 5 litros por segundo o menos RD$2.00 .

e) Por cada litro adicional RD$1.00, hasta un máximo de RD$25.00 .

f) Por títulos de aguas para instalaciones de bombas para fines de riego RD$25.00 .

2.— Permisos para la Construcción de Canales Privados:

a) Caneles con capacidad de 5 litros por segundo RD$5.00

b) Canales con capacidad de más de 5 litros por segundo, a razón de RD$1.00 por cada litro o fracción de libro de hasta 50 cl., hasta un máximo de RD$50.00 .

3.— Uso anual de Aguas Públicas.

a) Por el uso anual de las aguas para fines industriales, las tasas que sean fijadas en los contratos suscritos con el Poder Ejecutivo.

b) Por el uso anual de las aguas para fines de viveros de criaderos de peces RD$10.00 .

c) Por cada 5 litros por segundo o fracción usados en riego corriente RD$1.00 .

d) Por el exceso de 5 litros por segundo en adelante. Por cada litro extra RD$1.00

e) En los riegos surtidos por medio de bombas, cuyas instalaciones de bombeo sean propiedad del interesado, se pagará por cada 15 ligros por segundo o fracción, la suma de RD$1.00

f) Por cada litro por segundo extra en exceso RD$0.50

g) Cuando el bombeo sea con fines de riego por aspersión, por los primeros 15 litros por segundo RD$1.00

h) Por cada litro adicional por segundo RD$0.10 .

Párrafo.— En los sitios de riego en donde no se pueda aplicar el sistema de medición por litros, se considerará un litro por segundo y por hectárea para riego corriente y dos litros por segundo por hectárea para riego de arroz.

En los casos de riegos por inundaciones se utilizará el agua a razón de dos litros por segundo y por hectárea y para el riego para frutos menores se utilizará a razón de 1 litro por segundo por hectárea.

La tarifa que antecede se aplicará también a las tierras regadas por los canales privados construidos o que se construyan en el país. Cuando haya tarifas distintas que pagar se pagará de acuerdo con la mayor, en cada parcela.

Párrafo II.— Las instituciones de crédito del Estado no otorgarán préstamos sobre una porción de terreno o sobre cultivos que se fomenten con el uso de las aguas de riego, si no se les presenta, previamente a la concesión del crédito, y en cada caso, el correspondiente permiso anual para el uso de las aguas.

Párrafo III.— A falta de pago en la fecha de su vencimiento, las tarifas se aumentarán en un 5 o/o mensual hasta un máximo de un 50 o/o. Los regantes en faltas perderán el beneficio de las aguas para el próximo período de riego si no han satisfecho el pago anterior.

Párrafo IV.— Las tasas y recargos previstos en esta ley, se pagarán en efectivo en las Colecturías de Rentas Internas y Bienes Nacionales de las respectivas jurisdicciones o en las Tesorerías Municipales en los Municipios donde no existan Colecturías. Los recibos correspondientes se anexarán a las solicitudes que se dirijan a la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

Artículo 62.— Los hateros, criadores y ganaderos en general que tengan sus animales en terrenos donde haya canales o acueductos del Estado, pueden utilizar las aguas de éstos, en las necesidades de su crianza, libres del pago de toda tasa, impuesto o contribución.

Artículo 63.— La utilización deberá ser equitativa entre los interesados y para este efecto, el Poder Ejecutivo tendrá capacidad para regularla por medio de reglamentos o de instrucciones administrativas dirigidas a las autoridades de los canales y acueductos del Estado.

Artículo 64.— Todo permiso para uso de aguas conlleva la obligación por parte del usuario a quien se le otorgue, de hacer uso de la cuota que el permiso determine. En todos los casos que no sean por causas fortuitas o de fuerza mayor en que el usuario no hiciere uso, por un período de dos años, total o parcial de la cantidad que expresa su permiso, la Dirección General de Recursos Hidráulicos podrá otorgarle a quien la solicite. No se otorgarán excensiones de pago por falta de uso de las aguas.

Artículo 65.— Cuando el caudal de la fuente así lo exija, la Dirección General de Recursos Hidráulicos podrá reglamentar el uso de las aguas en turnos entre las personas que tengan los correspondientes títulos de agua.

Párrafo.— No se tomará en cuenta para los fines del pago de la tasa por el uso de aguas públicas, la disposición del artículo anterior relativo a la organización de turnos.

Artículo 66.— En interés general del mejor aprovechamiento de las aguas, la Dirección General de Recursos Hidráulicos dispondrá que se proceda al reconocimiento de los rios y canales de riegos existentes, con la mira de alcanzar que ningún regante desperdicie el agua de su dotación que pudiere servir a otro necesitado de ella, y con la de evitar que las aguas torrenciales se

precipiten improductivas y aun nocivamente en el mar, cuando otras comarcas las desean y pidan para el riego y aprovechamiento estacionales, sin menoscabo de derechos adquiridos.

CAPITULO III

DE LOS DISTRITOS DE RIEGO

Artículo 67.— Constituye un Distrito de Riego la zona de terreno que abarque la distribución de aguas por medio de canales construidos a expensas del Estado o construidos por cuenta de terratenientes interesados en las obras de irrigación y cuyos límites serán fijados por decreto del Poder Ejecutivo.

Artículo 68.— La Administración Pública irá organizando gradualmente Distritos de Riego, a medida que las necesidades de cada región del país lo reclamen, previa recomendación que haga al Poder Ejecutivo la Dirección General de Recursos Hidráulicos, por intermedio de la Secretaría de Estado correspondiente.

Artículo 69.— La creación de una zona de terreno en Distrito de Riego conlleva de pleno derecho la dirección oficial del riego en dicha zona.

Artículo 70.— En los casos en que el Estado construya, a su costo, obras de riego, éstas serán pagadas por los propietarios de los terrenos beneficiados en proporción con la cantidad de agua que dichos propietarios queden en posibilidad de utilizar sea en el momento de la construcción de la obra o ulteriormente.

Párrafo I.— Los propietarios de terrenos que utilicen o queden en posibilidad de utilizar las aguas de un canal construido por el Estado, podrán pagar la parte proporcional que les corresponda en efectivo, o con una cuota parte de sus tierras, en la siguiente forma:

a) Con un 25 por ciento de sus tierras regables cuando estas estén bajo cultivo;

b) Con un 50 por ciento de sus tierras regables cuando estas sean baldías.

En los dos casos, las tierras serán de las que estén al alcance del canal de que se trate, al tiempo de la construcción.

Párrafo II.— Para el fin indicado, tan pronto como se termine un canal, la Dirección General de Recursos Hidráulicos por vía de la Secretaría de Estado correspondiente, lo comunicará al Administrador General de Bienes Nacionales, con indicación del costo y todos los datos pertinentes. El Administrador General de Bienes Nacionales notificará a cada propietario, por medio de un Inspector de su servicio o de las autoridades rurales del lugar, la suma en efectivo o la cantidad de tierras que deberá pagar al Estado. Cada propietario tendrá un plazo de quince días, a contar del día en que reciba la notificación, para dar aviso por escrito al Administrador General de Bienes Nacionales si opta por pago en efectivo o el pago en tierras. En caso de transcurrir los quince días sin darse aviso, se reputará que el propietario ha optado por el pago en tierras.

Párrafo III.— Cuando el propietario opte por el pago en efectivo, el Administrador General de Bienes Nacionales transmitirá el expediente al Colector de Rentas Internas correspondiente. El pago, ante este funcionario, deberá hacerse dentro de los treinta días a contar de la fecha de la opción, salvo cuando el propietario haya obtenido un plazo que no excederá de un año, concedido por el Secretario de Estado de Finanzas siempre que la parte proporcional adeudada no sea más de RD$500.00. En caso contrario, el Colector de Rentas Internas ejercerá contra el deudor el cobro compulsivo según la ley de la materia.

En los demás casos, el Poder Ejecutivo tendrá facultad de conceder plazos para el pago de las sumas o de las cuotas partes de tierras adeudadas y, en circunstancias especiales que él ponderará soberanamente, podrá condonarlos total o parcialmente, sea cual fuere la suma o la cuota parte de tierras adeudadas.

Párrafo IV.— Si el propietario ha optado por el pago en tierras, el Administrador General de Bienes Nacionales, lo citará por medio de un Inspector de su servicio o de la autoridad Rural, para que comparezca dentro de los cinco días del recibo de la citación, ante el Juez de Paz correspondiente, y suscriba ante dicho funcionario, un acto de cesión en favor del Estado, de la cantidad de tierras que le corresponde entregar, indicándose en el

acto la situación del terreno cedido que señalará el propietario dentro del área bajo el alcance del canal. El acto será suscrito por el Juez de Paz, por el propietario, por el Administrador General de Bienes Nacionales o el Inspector a su servicio que delegue, por dos testigos, y en él se hará mención de la notificación y de la citación ya indicadas.

Párrafo V.— En caso de que el propietario no concurriere ante el Juez de Paz en el plazo indicado, se reputará que hace la cesión de tierras en la situación que señale el Administrador General de Bienes Nacionales o su delegado, y se levantará acta de esta cesión legal, en la cual se mencionarán la notificación y la citación a que se refieren los párrafos anteriores, debiendo suscribirla en este caso el Juez de Paz, el Administrador General de Bienes Nacionales o su delegado y cuatro testigos.

Párrafo VI.— La copia del acto, autenticada por el Juez de Paz y su Secretario, constituirá en todos los casos un título de propiedad para el Estado sobre la extensión de tierras a que se refiere para todos los fines legales, incluyendo los de registro o subdivisión por el Tribunal de Tierras, cuando así lo solicitare.

Párrafo VII.— Es entendido que estos pagos son independientes de los que deben hacer los propietarios o arrendatarios tanto para obtener los títulos de agua como para utilizar las aguas, mediante los permisos anuales correspondientes.

Párrafo VIII.— Los canales así construidos y pagados pertenecerán como propiedad indivisa a los terratenientes que hubieren contribuido a su construcción; pero, en su condición de obras de utilidad pública, estarán bajo el control del Estado de acuerdo con esta Ley y no podrán ser enajenados.

Artículo 71.— En los casos en que el Estado construya canales de riego podrá suprimir los canales particulares que se encuentren en la zona regable o aprovechar sus cauces para la ejecución del plan de construcción cuando así lo aconsejen razones técnicas.

Párrafo I.— A las personas a las cuales se les haya suprimido canales de conformidad con el presente artículo, les será servida, exenta de la cuota de construcción, la cantidad de agua que se considere necesaria a juicio de la Dirección General de Recursos

Hidráulicos, para el riego equitativo de la región de que se trate; dichas personas, sin embargo, estarán obligadas a concurrir con la cuota de mantenimiento que les corresponde y a pagar el permiso anual para el uso de las aguas.

Párrafo II.– La persona que sea propietaria de un título de agua y que a pesar de esta circunstancia, se beneficie o tenga posibilidad de beneficiarse de las aguas de un canal construido por el Estado, deberá efectuar el pago proporcional de la cuota parte que le corresponda de conformidad con las disposiciones de esta ley en cuanto al área en exceso regable por el nuevo canal, quedando en consecuencia, excluída el área regada por su viejo canal.

Sin embargo, cuando se determinare que existe un canal particular y que su propietario no utiliza en ninguna forma las aguas del canal del Estado, éste no estará obligado a pagar la cuota parte por concepto de la construcción del canal del Estado.

Párrafo III.– En el informe que el Director General de Recursos Hidráulicos envíe al Administrador General de Bienes Nacionales por intermedio de la Secretaría correspondiente, para los fines del artículo 70, se indicará todo lo que sea de lugar para la exención de la cuota de construcción dispuesta en los párrafos que anteceden, o que sea de lugar conforme a cualquiera otra disposición de la presente ley.

Artículo 72.– El servicio de limpieza y mantenimiento de los canales construidos por el Gobierno con fines de riego, estará a cargo de los que utilicen sus aguas en virtud de los derechos que adquieran de acuerdo con esta ley y será rendido dicho servicio de conformidad a la reglamentación que para cada Distrito, dicte la Secretaría de Estado correspondiente por intermedio de la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

Párrafo.– La proporción de estos servicios, que consistirá únicamente en aporte de braceros, será de acuerdo con la cantidad de agua que utilice cada regante o asociación de regantes.

Artículo 73.– La Oficina de cada Distrito de Riego notificará a cada regante, con 30 días de anticipación, la parte proporcional de contribución que le corresponderá en el período de limpieza

de los canales principales, de acuerdo con la distribución aprobada por la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

Párrafo.— El regante que no aporte su parte proporcional en el tiempo fijado por la Oficina local, perderá sus derechos de hacer uso de las aguas en el próximo período de cosecha, y su porción de cuota de agua podrá prorratearse entre todos los demás regantes que cubran proporcionalmente esta parte.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LOS DISTRITOS DE RIEGO

Artículo 74.— Queda prohibida la crianza libre en toda la zona de terreno que comprenda el Decreto que crea un Distrito de Riego.

Artículo 75.— Se prohibe cruzar los canales de desagues y de regadíos del sistema general de cada Distrito, con animales, carros u otros vehículos, a no ser por los pasos expresamente construidos para tales fines.

Artículo 76.— En todos los canales principales y sus secundarios, construidos por el Estado o a su cargo, habrá una faja de servidumbre para dichos canales, cuya anchura será fijada por la Dirección General de Recursos Hidráulicos; pero que no excederá de ocho metros a ambos lados del canal.

Párrafo.— Se prohibe en esta faja de terreno, construir cercas, habitaciones, bodegas, cultivos, industrias, establos, letrinas y en general todo lo que pueda contaminar las aguas en perjuicio de la salubridad pública y obstruir el tránsito.

Artículo 77.— Se prohibe bañarse, lavar ropa, bañar animales y en general todo lo que pueda contaminar el agua en los canales de riego públicos o privados.

Artículo 78.— La conducción del agua desde el lugar de la entrega hasta la tierra que vaya a regarse, estará al cuidado del interesado quien será responsable de los daños o perjuicios de cualquier índole que ocasione, ya sea por falta de capacidad de dichos canales, por negligencia o torpeza en el manejo del agua.

Artículo 79.– Todo regante estará obligado a mantener sus canales internos, así como también su sistema de drenajes, limpios de yerbas y de fango dentro de los plazos fijados por la Administración Local del Distrito.

Artículo 80.– Antes de empezar el servicio anual de riego, el Encargado Local del Distrito o el Inspector de Aguas, inspeccionará los canales interiores y el sistema de drenaje de cada parcela, y a los que no se encuentren en las condiciones establecidas por el artículo anterior. no se les suplirá agua, hasta que llenen los requisitos legales.

Artículo 81.– Los regantes están obligados a construir en sus boca-tomas, compuertas según el modelo y especificaciones que fije la Dirección General de Recursos Hidráulicos, a fin de controlar el gasto de agua que se hubiere señalado.

Párrafo.– El manejo de estas compuertas estará a cargo exclusivamente del Inspector de Aguas o de su representante, y será considerado como una violación a la presente ley, el hecho de que cualquier otra persona maneje o altere la disposición de dichas compuertas.

Artículo 82.– Los dueños de canales están obligados a la construcción de puentes sólidos a juicio del Encargado del Distrito, cuando estos canales intercepten caminos, y a la construcción de canales de desagues que establezcan el drenaje necesario para evitar estancamientos innecesarios de agua.

Artículo 83.– Cuando en la construcción de un canal, su propietario tenga que interceptar terrenos de otros propietarios, deberá a juicio de la Dirección General de Recursos Hidráulicos colocar empalizadas o cercas firmes en ambos lados del canal, levantar muros, que eviten inundaciones y hacer puentes que permitan la comunicación interna de las propiedades interceptadas, así como también cualquier otra clase de obras necesarias cuando crucen otros canales o drenajes ya establecidos.

Párrafo I.– Los dueños de parcelas interceptadas por canales, en estos casos tienen opción para utilizar el agua en una proporción equivalente para mojar una cantidad igual de tierras que la usada en el canal en compensación de la faja de terreno cedida para construcción del canal, sin perjuicio del pago de la tasa anual correspondiente por el uso del agua.

Párrafo II.– Cuando un propietario de parcela que haya cumplido con el pago estipulado en el artículo 70, en cuanto a la cuota parte correspondiente al Estado por la construcción de un canal, por razones técnicas tenga que atravesar terrenos de particulares para hacer uso de las aguas, éstos estarán en la obligación de dar su consentimiento al paso del lateral por sus respectivas propiedades, quedando a cargo del Director General de Recursos Hidráulicos o del representante que él autorice, determinar el sitio por donde debe pasar el lateral correspondiente.

Artículo 84.– Queda prohibida la construcción de zanjas para riego a una distancia menor de dos metros de un lindero que separe una parcela, de cualquier camino o carretera.

Artículo 85.– Toda persona que por cualquier medio aumente el caudal de los canales de distribución, se hará culpable de robo de agua y castigado con pena de prisión correccional de seis días a dos años o multa de veinticinco a doscientos pesos, o con ambas penas a la vez.

Artículo 86.– Se prohibe levantar "Palenque" u otras cercas atravesando los canales de riego o de desague, que obstruyan el libre curso del agua; tales obras serán permitidas únicamente en los casos que sean autorizadas por la Dirección General de Recursos Hidráulicos, debiendo ser construidas en tales casos a una altura no menor de treinta centímetros sobre la rasante del agua y formando amplios espacios con el material que se emplee, de modo que no puedan constituir obstáculos al canal.

Artículo 87.– Toda persona que levante diques en el canal principal y sus laterales o destruya caidas o altere la organización del régimen del servicio de aguas, será castigada con pena de prisión correccional de seis días a dos años o multa de veinticinco a doscientos pesos, o con ambas penas a la vez.

Párrafo.– Si la persona convicta de tales hechos, es un regante y reincidente, podrá suprimirsele además, temporalmente, el servicio de agua.

CAPITULO V

DE LAS SOCIEDADES DE REGANTES

Artículo 88.– En los aprovechamientos colectivos de aguas públicas para riegos, se formará necesariamente una comunidad o sociedad de regantes sujeta al régimen de sus ordenanzas o reglamentos. Será necesaria la comunidad o sociedad de regantes:

1ro.– Cuando el número de aquellos llegue a diez y no baje de 200 el número de hectáreas regables;

2do.- Cuando a juicio de la Secretaría de Estado de Agricultura lo exigiesen los intereses locales de la agricultura.

Fuera de estos casos, quedará a la voluntad de la mayoría de los regantes de una localidad, la formación de la comunidad o sociedad de regantes.

Artículo 89.– La comunidad o sociedad de regantes tendrá por finalidad la construcción de canales de riegos, en común para la mejor distribución y uso de las aguas, desde la fuente pública hasta determinados puntos donde puedan disponer de las aguas los miembros de las referidas asociaciones, cada uno sobre sus respectivos terrenos.

Párrafo I.– Estas sociedades se regirán por un reglamento aceptado y firmado por todos los socios, en el cual se exprese de un modo claro y preciso, las obligaciones individuales de cada miembro y sus derechos respectivos sobre la cantidad de agua que le pertenece y la forma de su distribución.

Párrafo II.– Una copia de este Reglamento debe ser anexada a la solicitud de construcción requerida por el artículo 59 de la presente Ley.

Artículo 90.– Las sociedades de regantes pagarán los derechos en la siguiente forma:

1.– Los títulos de agua, individualmente por cada miembro;

2.– La solicitud de construcción conjuntamente por todos los miembros;

3.— La solicitud de renovación anual individualmente por cada miembro de la Sociedad, de acuerdo con la cantidad que le pertenezca conforme al reglamento que la rija.

Artículo 91.— Cada miembro de la Sociedad tendrá su canal individualmente derivado del canal principal de la Sociedad o de una derivación de dicho canal y construirá una compuerta en su toma conforme al diseño y especificaciones uniformes adoptados por la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

Artículo 92.— Toda comunidad o Sociedad de Regantes tendrá una Junta Directiva elegida por ella y encargada de la ejecución de las ordenanzas y de los acuerdos de la misma sociedad o comunidad de regantes.

Artículo 93.— El número de los individuos de la Junta Directiva y su elección por la comunidad o Sociedad de Regantes se determinará en las Ordenanzas de la misma. En dichas Ordenanzas se fijarán las condiciones de los electores y elegibles, y se establecerá el tiempo y forma de la elección, así como la duración de los cargos, que siempre serán gratuitos y no podrá rehusarse sino en caso de reelección.

Artículo 94.— En las Juntas Directivas de las Sociedades de Regantes o Comunidades, cuando estas se compongan de varias colectividades, ora agrícola, ora fabriles, directamente interesadas en la buena administración de sus aguas, tendrán todos en la Junta Directiva su correspondiente representación, proporcionada al derecho que respectivamente les asista al uso y al aprovechamiento de las mismas aguas.

Artículo 95.— Serán atribuciones de la Junta Directiva de la Sociedad de Regantes o Comunidad de Regantes:

1.— Vigilar los intereses de la comunidad, promover su desarrollo y defender sus derechos;

2.— Dictar las disposiciones convenientes para la mejor distribución de las aguas, respetando los derechos adquiridos y las costumbres locales;

3.— Proponer a las Juntas las Ordenanzas y el Reglamento o cualquiera alteración que considerase útil introducir en lo existente.

4.– Establecer los turnos rigurosos de agua, conciliando los intereses de los diversos cultivos entre los regantes y cuidando de que en los años de escasez se distribuya del modo más conveniente para los propios intereses.

5.–Dirimir todas las cuestiones internas que se susciten entre los miembros de la Sociedad de Regantes, con motivo de la ejecución de sus reglamentos.

Artículo 96.– En todos los casos en que la Junta Directiva de una Sociedad de Regantes no puedan dirimir las cuestiones internas que se susciten entre sus miembros, con motivo de la ejecución de sus reglamentos, serán dirimidas por el Tribunal de Aguas de sus respectivas jurisdicciones, al cual podrán apoderar tanto cualquier miembro de la sociedad, como el Inspector de Aguas jurisdiccional o quien haga sus veces.

Párrafo.– Los tribunales de Aguas apoderados de cualquier cuestión relativa a Sociedades de Regantes o Comunidades, deberán resolverlas de acuerdo con los reglamentos internos de las mismas, y a falta de previsiones adecuadas al caso en dichos reglamentos, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO VI

DE LA DESECACION DE LAGUNAS Y TERRENOS PANTANOSOS Y DEL DRENAJE DE LOS TERRENOS

Artículo 97.– Se declará de utilidad pública el drenaje de todos los terrenos pantanosos, lagunas y tierras bajo riego.

Artículo 98.– Para tales fines, cuando un propietario de parcelas cuyas tierras se aneguen, o que haya obtenido permiso para uso de agua en riego o que sean tierras pantanosas, o que existan lagunas que se deban desecar, previo estudio verificado por la Dirección General de Recursos Hidráulicos tendrá derecho de atravesar terrenos de particulares para hacer salir el agua necesaria que haga los terrenos de que se trate, aptos para cultivos. Los canales de desague deberán pasar por el sitio que al efecto determine la Dirección General de Recursos Hidráulicos.

Artículo 99.– Los propietarios de predios inferiores podrán oponerse a recibir los sobrantes de aguas de establecimientos

industriales que arrastren o lleven en disolución substancias nocivas introducidas por los dueños de estos.

Artículo 100.— En todos los casos en que las aguas de drenaje atraviesen predios inferiores, los propietarios de éstos podrán aprovecharse eventualmente de dichas aguas si le fueren de utilidad, llenando los requisitos determinados en esta ley. Igualmente los propietarios podrán utilizar los drenajes para desaguar su propiedad o parte de ella, de acuerdo a la capacidad de dichos desagues.

Artículo 101.— Queda prohibida la construcción de zanjas para desagues a una distancia menor de dos metros de un lindero que separe una parcela, de cualquier camino o carretera. El nivel del agua de esas zanajas o drenajes en ningún momento podrán estar a menos de 50 centímetros por debajo de la rasante de la carretera o camino.

Artículo 102.— Los dueños de lagunas o terrenos pantanosos, o encharcadizos que deseen desecarlos o sanearlos podrán extraer de los terrenos públicos. previa la correspondiente autorización de la autoridad a quien competa, la tierra y piedra que consideren indispensables para el terraplen y demás obras.

Artículo 103.— Cuando las lagunas o terrenos pantanosos a desecar o sanear pertenezcan a varios dueños, no siendo posible la desecación parcial pretendan varios de ellos que se efectúe en común, la Secretaría de Estado de Agricultura, por intermedio de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, cuando así lo requiera el interés de la explotación agrícola de la región, podrá obligar a todos los propietarios a que costeen colectivamente las obras destinadas al efecto, siempre que esté conforme la mayoría, entendiéndose por tal los que representen mayores terrenos saneables. Si alguno de los propietarios de dichas tierras resistiese el pago y prefiriese ceder a los demás condueños su parte de propiedad saneable, podrá hacerlo mediante la indemnización correspondiente, la cual será determinada de acuerdo al valor de los terrenos sin tener en cuenta las obras de saneamiento.

Artículo 104.— Cuando una laguna o terreno pantanoso o encharcado sea declarado insaludable por quien corresponda, procede forzosamente su desecación o saneamiento. Si fuese de propiedad privada se hará saber a los dueños la resolución para

AGN

que dispongan el deseque o saneamiento en el plazo que se les indique.

Artículo 105.– Si la mayoría de los dueños se negare a ejecutar la desecación o saneamiento, la Dirección General de Recursos Hidráulicos, previa autorización otorgada por el Poder Ejecutivo, podrá proceder a efectuar las obras necesarias. El terreno saneado pasará a ser propiedad del Estado Dominicano, quien abonará únicamente a los antiguos propietarios la suma correspondiente a la capitalización.

Artículo 106.– Cuando las obras de saneamiento y desecación sean de tal magnitud que constituyan obras de utilidad pública por favorecer el auge y desarrollo económico de una región o la salubridad de una región, dichas obras serán estudiadas y ejecutadas por la Dirección General de Recursos Hidráulicos por cuenta del Estado Dominicano.

CAPITULO VII

DE LA POLICIA DE AGUAS

Artículo 107.– Quedan instituidos como Oficiales de Policía de Aguas, además de los funcionarios de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, los Encargados de Distritos de Riego, los Inspectores y Distribuidores de Aguas.

Corresponde a dichos funcionarios:

a) Ejercer las funciones del Ministerio Público en el Tribunal de Aguas del Municipio en que se hubiere producido la infracción;

b) Hacer cumplir los fallos y disposiciones del Tribunal de Aguas correspondiente;

c) Someter al Tribunal de Aguas de su jurisdicción, las irregularidades que afecten el buen servicio de riego de los Distritos o Municipios a su cargo;

d) Inspeccionar periódicamente los canales y drenajes para exigir que se mantengan dentro de las prescripciones de la Ley

e) Inspeccionar las boca-tomas y compuertas para controlar el caudal que le haya sido asignada a cada uno;

f) Atender a los aforos de los ríos, arroyos y canales dentro de su jurisdicción;

g) Atendera las observaciones meteorológicas.

Artículo 108.– Habrá Inspectores de Aguas en todos los Distritos de Riego y en aquellos Municipios donde la extensión de los cultivos bajo riego, requieran tal funcionamiento.

CAPITULO VIII

DE LOS TRIBUNALES DE AGUAS

Artículo 109.– Quedan investidos los Juzgados de Paz como Tribunales de Aguas para conocer y fallar de todas las cuestiones relacionadas con la ejecución de la presente Ley de Aguas.

Artículo 110.– El Ministerio Público ante los Juzgados de Paz constituidos en Tribunales de Aguas, lo ejercerá el Inspector de Aguas del Municipio correspondiente.

Párrafo.– En los casos en que por cualquier circunstancia el Inspector de Aguas correspondiente no pueda ejercer las funciones de Ministerio Público ante el Juzgado de Paz constituido en Tribunal de Aguas, ejercerá dichas funciones el Fiscalizador de dicho Juzgado de Paz.

Artículo 111.– Apoderado el Juzgado de Paz, el Juez de Paz en el curso de 24 horas a partir de la recepción del acta de sometimiento que haya hecho el Inspector de Aguas, citará al infractor por medio de cédula y por conducto de la autoridad rural correspondiente en el término de un día más el plazo legal de la distancia.

Artículo 112.– Los fallos de los Juzgados de Paz en funciones de Tribunales de Aguas, serán ejecutorios provisionalmente en lo relativo a las multas, no obstante oposición o apelación.

Párrafo.– Todos los fallos de los Juzgados de Paz en funciones de Tribunales de Aguas, serán apelables, por ante el Tribunal de

Primera Instancia del Distrito Judicial correspondiente, el que conocerá del asunto en forma sumaria.

Artículo 113.— Todos los fallos rendidos por los Tribunales de Aguas o por los Juzgados de Primera Instancia en grado de apelación, deberán ser notificados por los Secretarios de dichos Tribunales a la Dirección General de Recursos Hidráulicos, por intermedio del Distrito de Riego correspondiente, en un plazo que no exceda de ocho días.

Artículo 114.— Las actas de contravenciones a las prescripciones de la presente ley que levanten los Agentes de la Policía de Aguas serán creídas hasta inscripción en falsedad.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 115.— En todo río, arroyo u otra fuente de aguas, donde existan boca-tomas de canales pertenecientes a una o diversas personas y cuando esos canales puedan ser unificados, la Dirección General de Recursos Hidráulicos podrá disponer la unificación como canales del Estado.

Artículo 116.— Los trabajos de construcción de canales que no se ejecuten en el tiempo señalado por el permiso de construcción, podrán continuarse, siempre que se haya solicitado y obtenido previamente, una prórroga del Director General de Recursos Hidráulicos. Vencida esta prórroga, sin haberse terminado los trabajos, se declarará sin efecto dicho permiso requiriéndose nueva solicitud conforme al artículo 59 para continuar la obra.

Artículo 117.— Las aguas concedidas para su aprovechamiento, o para la irrigación de una parcela determinada, no podrán aplicarse a otros usos ni otra parcela, sin obtener el permiso correspondiente.

Artículo 118.— Las aguas obtenidas de fuentes públicas no podrán venderse para ningún propósito, sino accesoriamente a la venta de los terrenos a que correspondan los derechos de aguas de que se trate, salvo lo previsto en el artículo 52 de esta ley.

Artículo 119.– Todas las aguas sobrantes de riego procedentes de filtraciones, así como de los drenajes, podrán ser utilizadas por la Administración Pública cuando lo juzgue necesario, y ser servidas a quienes soliciten tales aguas, observándose las prescripciones establecidas en la presente ley.

Párrafo.– En los casos del presente artículo, la Administración Pública no podrá garantizar la permanencia ni el caudal de estas aguas residuales.

Artículo 120.– Los derechos sobre aguas para fines de riego o con fines industriales, no afectarán los derechos de las personas que vivan en las riberas de los ríos y fuentes o de las que aun viviendo a distancia, utilicen sus aguas para fines domésticos o para uso de sus animales.

Artículo 121.– Las obras municipales con fines de utilización de las aguas para el consumo directo de las personas o para la producción de fuerza, tendrán prioridad sobre solicitudes de particulares o de corporaciones con fines análogos.

Artículo 122.– Ninguna persona podrá ensuciar o contaminar las aguas de ríos, arroyos, canales u otras fuentes de aguas públicas, destinadas para algún aprovechamiento autorizado por esta Ley.

Artículo 123.– Los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de la presente ley se aplicarán a los riegos particulares, sin perjuicio de las demás obligaciones que en esta ley establecen para todos los que utilicen aguas públicas para fines de riego.

Artículo 124.– Los terrenos que, a la fecha de la presente ley, estén amparados por títulos de aguas, no necesitarán nuevos títulos.

Artículo 125.– Las excenciones de los derechos de aguas, los pagos estipulados para la utilización de las mismas y todos los demás derechos, obligaciones y limitaciones relativas a la utilización de aguas públicas que fueren objeto de contratos celebrados con particulares por el Poder Ejecutivo, y aprobados por el Congreso Nacional, estarán regidos por los dichos contratos, y no les serán aplicables las disposiciones de esta ley.

Párrafo.- En ningún caso, los contratos suscritos por el Poder Ejecutivo con particulares, podrá perjudicar o extinguir derechos preexistentes.

Artículo 126.- Las infracciones a la presente ley, cuya sanción no esté prevista especialmente, se castigarán separadas o conjuntamente con las siguientes penas:

a) Multa de seis a quinientos pesos;

b) Prisión correccional de seis días a seis meses.

Artículo 127.- La presente Ley deroga y sustituye las Leyes 4916, del 22 de noviembre de 1909, 124, del 14 de noviembre de 1942 y sus modificaciones, así como cualquier otra disposición legal que le sea contratia.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de marzo, de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5853, que establece un impuesto adicional de RD$0.02 por cada 3.785 litros de gasolina importada

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5853

Artículo 1.– Se establece, a partir del 1ro. de abril de 1962, un impuesto adicional de RD$0.02 por cada 3.785 litros de gasolina importada.

Artículo 2.– (transitorio). Las existencias de gasolina en los depósitos (tanques) de abastecimiento de las empresas importadoras, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán gravadas con dicho impuesto y serán determinadas por la Dirección General de Aduanas y Puertos.

Artículo 3.- Queda derogado el Artículo 2 de la Ley No. 5686 del 1ro. de diciembre de 1961.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (tiansitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en el diario "La Nación" y en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5854, que regula las relaciones entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5854

CONSIDERANDO: que la República Dominicana aprobó formalmente el Convenio para crear el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, de acuerdo con la Resolución del Congreso Nacional No. 5236, de fecha 23 de octubre de 1959;

CONSIDERANDO: que el artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Central de la República Dominicana No. 1529, de fecha 9 de octubre de 1947, dispone que el Banco Central deberá actuar de conformidad con los Convenios Monetarios y Bancarios Internacionales suscritos y ratificados por la República;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– El Banco Central de la República Dominicana hará las aportaciones de capital por el valor de la cuota fijada a la República Dominicana como miembro del Banco Interamericano de Desarrollo, de conformidad con el Convenio Constitutivo de dicho organismo financiero internacional.

Artículo 2.– Las aportaciones en divisas extranjeras u oro hechas por el Banco Central de la República Dominicana al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, serán consideradas como parte de la Reserva Monetaria del Banco Central, mencionada en los artículos 35 y 67 de la Ley Orgánica No. 1529, de fecha 9 de octubre de 1947.

Artículo 3.- El Estado Dominicano garantiza al Banco Central de la República Dominicana contra cualquier pérdida que pudiere sufrir a causa de las aportaciones hechas al BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, así como también a causa de cualquier operación que tenga su origen en el cumplimiento del Convenio mencionado en el Artículo 1ro.

Artículo 4.- El Banco Central de la República Dominicana queda asimismo autorizado a emitir los documentos relativos a las obligaciones resultantes del cumplimiento del citado Convenio.

Artículo 5.- El Banco Central de la República Dominicana será el único depositario del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO en la República Dominicana.

Artículo 6.- La Junta Monetaria determinará la política general de la República en sus relaciones con el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, representará a la República en sus negociaciones con dicha institución bancaria, pudiendo hacerlo por intermedio del Gobernador, y actuará en todos los casos en que el Convenio prevé la intervención de los países asociados dentro de las disposiciones legales pertinentes.

Artículo 7.- El Banco Central de la República Dominicana queda designado como la entidad oficial para mantener sus vinculaciones con el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO sobre las materias relacionadas con la ejecución del mencionado Convenio y las disposiciones que anteceden son puramente enunciativas y no limitativas.

Artículo 8.- Para los fines expresados en la presente Ley el Gobernador del Banco Central será a su vez Gobernador de la República Dominicana en el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, y en tal calidad actuará en las reuniones o asambleas de la mencionada institución internacional.

El Vicegobernador del Banco Central será el Gobernador suplente para los mismos fines expresados arriba.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treintiún días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treintiún días del mes de marzo, del año mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5855, que extiende el plazo consignado en el Párrafo IV del Artículo 3 de la Ley No.5651, para las personas incluídas en la Quinta Categoría del Impuesto sobre Beneficios.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5855

ARTICULO UNICO.— Se extiende hasta el día veintiseis (26) de abril del año en curso, el plazo consignado en el párrafo IV del Artículo 3 de la Ley No. 5651, del 28 de octubre de 1961, para que las personas incluidas en la Quinta Categoría del Impuesto sobre Beneficios, que hayan percibido ingresos provenientes del ejercicio de profesiones liberales, del trabajo de funcionarios y empleados y de otras ocupaciones lucrativas, declaren y paguen el impuesto correspondiente.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treintiún días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en el diario "El Caribe" y en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treintiún días del mes de marzo, de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5856, sobre Conservación Forestal y Arboles Frutales

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5856

CONSIDERANDO: que es de interés nacional la defensa y repoblación de todas las áreas forestales del país; que precisa pues, en presencia de la destrucción inconsiderada que se viene haciendo de nuestros bosques, establecer nuevas normas que permitan asegurar la adecuada conservación, el racional aprovechamiento, la restauración y la propagación forestales, así como la utilización de los recursos forestales para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

TITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO

Artículo 1.— La presente Ley, tiene por objeto regular la conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación forestal, el transporte y comercio de los productos que de ella deriven, así como la administración nacional del servicio forestal y desarrollo e integración adecuados de la industria forestal.

Párrafo.— Son aplicables las disposiciones de esta ley a todos los terrenos forestales cualquiera que sea su régimen de propiedad.

Artículo 2.— Se declara de interés nacional la defensa y repoblación de todas las áreas forestales de la República. En consecuencia, es de interés público asegurar la adecuada conservación, el racional aprovechamiento, la restauración y la propagación forestales. También es de interés público regular el aprovechamiento de los recursos forestales para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su conservación evitando la destrucción de los mismos y los daños que puedan sufrir en perjuicio de la sociedad.

Artículo 3.— Se declara que es de utilidad pública:

a) Prevenir y combatir la erosión de los suelos;

b) Proteger las cuencas hidrográficas mediante la conservación, mejoramiento o establecimiento de macizos forestales y la ejecución de obras que influyan en el régimen de las corrientes, para la seguridad de los almacenamientos y la mejor utilización de las aguas;

c) Conservar y embellecer las zonas forestales turísticas o de recreo;

d) Fomentar y preservar las cortinas rompevientos;

e) Facilitar la formación de bosques sobre los eriales y pantanos;

f) Fomentar los macizos forestales para proteger a las poblaciones;

g) Proteger mediante la forestación, las vías generales de comunicación;

h) Establecer industrias forestales estables que aprovechen racionalmente los recursos;

i) Fomentar la construcción de vías de comunicación permanentes en las zonas forestales, integradas en el sistema vial nacional, y

j) En general, conservar e incrementar los recursos forestales y utilizarlos con el máximo beneficio social.

Artículo 4.— La Secretaría de Estado de Agricultura queda facultada para determinar las áreas forestales y dictar las medidas convenientes para su conservación y repoblación.

Artículo 5.— Se declara de urgencia la necesidad de reforestar todas las áreas forestales que hubieren sido desmontadas para el aprovechamiento de la madera o con fines agrícolas. La reforestación de las áreas forestales, de las cumbres de las montañas, riberas de los ríos, zonas vedadas, nacimiento de los ríos y arroyos será realizada por el Estado.

Artículo 6.— La Secretaría de Estado de Agricultura promoverá la cooperación de los habitantes de la República en la conservación, restauración y propagación de la vegetación forestal en los términos de esta Ley.

Artículo 7.— Los propietarios o poseedores de terrenos forestales tienen la obligación de vigilar adecuadamente sus bosques o en su defecto contribuir económicamente para el servicio de esa vigilancia. En todo caso la vigilancia quedará sujeta al control y a las disposiciones que dicte la Secretaría de Estado de Agricultura por intermedio de la Dirección General Forestal.

Artículo 8.— La Dirección General Forestal adscrita a la Secretaría de Estado de Agricultura organizará el Registro Público Nacional de la Propiedad Forestal, de conformidad con las bases que se establezcan en reglamentación que dicte al efecto dicha Secretaría de Estado. Los propietarios y poseedores de títulos de dominio de predios forestales, están obligados a inscribir en el Registro Público Nacional de la Propiedad Forestal sus títulos y todos los actos y contratos que se relacionan con el

aprovechamiento de los Recursos Forestales. La falta de inscripción será causa suficiente para negar la autorización que se solicite para la explotación de los recursos de cada predio.

Artículo 9.– La Secretaría de Estado de Agricultura con la cooperación de otras dependencias del ejecutivo nacional, de los Gobernadores Provinciales y Síndicos Municipales y de la iniciativa privada procederá a formar en todos los lugares del país grupos cívicos-forestales, encargados de realizar los propósitos enunciados en el Artículo 6 de esta Ley, los cuales funcionarán de conformidad con lo que establezca el reglamento que al efecto dicte dicha Secretaría de Estado.

TITULO SEGUNDO

De la Administración, del Fondo y de la Investigación y Educación Forestal.

CAPITULO I

DE LA ADMINISTRACION FORESTAL

Artículo 10.– La Administración Forestal compete, en todos sus aspectos, a la Secretaría de Estado de Agricultura, que realizará estas funciones a través de la Dirección General Forestal.

Artículo 11.– La Dirección General Forestal podrá establecer dentro de la jurisdicción de cada una de las provincias o municipios que juzgue oportuno, Comisiones Forestales, las cuales organizará con la cooperación directa de los Gobernadores Provinciales y Síndicos Municipales, y demás autoridades civiles y militares de la región, teniendo dichas comisiones en caso de su establecimiento, las siguientes facultades:

a) Emitir opinión fundada acerca de las solicitudes para el aprovechamiento industrial, comercial, o forestal que se pretenda realizar en el lugar. Deberán ser informadas oportunamente de los aprovechamientos que se autoricen y de las explotaciones programadas por la Dirección General Forestal.

b) Promover ante la autoridad forestal, fundamentada por escrito, la cancelación, suspensión o modificación de los aprovechamientos forestales autorizados;

c) Participar en la vigilancia, prevención y extinción de incendio; en el control de pastoreo en las zonas boscosas y en la realización de todas las labores de investigación, protección y repoblación que estimen convenientes y necesarias para la conservación de los recursos forestales de la localidad; así como supervisar las que ejecuten los particulares;

d) Participar en el levantamiento del Inventario Forestal;

Artículo 12.– La actividad de las comisiones forestales creadas deberá realizarse respetando los programas de trabajo y lineamientos generales fijados por la Secretaría de Estado de Agricultura.

En el caso de que alguna Comisión Forestal no dé debido cumplimiento a lo que establece esta Ley o los reglamentos que se dicten por la Secretaría de Estado de Agricultura, la Dirección General Forestal podrá ordenar su disolución, instituyendo si lo cree oportuno y necesario una nueva comisión que la reemplace.

Artículo 13.– Cuando sea técnicamente aconsejable que una región forestal comprenda terrenos ubicados en dos o más provincias, o secciones de diversas provincias, la Secretaría de Agricultura establecerá la debida coordinación para la designación de la Comisión Forestal, caso de que considere oportuno la institución de la misma.

Artículo 14.– En la Dirección General Forestal se organizará un cuerpo de técnicos seleccionados, cuya función será supervisar de modo constante el funcionamiento de la Administración de las regiones forestales del país.

Artículo 15.– La vigilancia forestal se ejercerá preferentemente para evitar la destrucción de las regiones boscosas, para promover y conservar la reforestación y para prevenir las violaciones a la legislación forestal, en las cuencas hidrográficas en los bosques de reservas forestales y en las demás regiones de mayor importancia forestal.

Artículo 16.– Los visitadores forestales, los jefes de región y todo el personal técnico y de vigilancia adscrito a la Secretaría de Estado de Agricultura tendrán el carácter de auxiliares de la Policía Judicial, para el solo efecto de dar validez a sus actuaciones en caso de delitos forestales.

Artículo 17.— La Secretaría de Estado de Agricultura por intermedio de la Dirección General Forestal procederá a organizar los trabajos del inventario nacional de los recursos forestales.

CAPITULO II

Del Fondo Forestal

Artículo 18.— Se instituye un fondo forestal que se destinará al incremento de los trabajos de protección, fomento y mejoramiento de los recursos forestales.

Artículo 19.— El fondo forestal se constituirá con:

a) Los productos de aprovechamiento de bosques propiedad del Estado;

b) Las multas administrativas por faltas forestales y sanciones pecuniarias impuestas en sentencias condenatorias por delitos forestales, así como el importe de los daños y perjuicios causados en bosques propiedad del Estado.

c) El importe de los remates de productos forestales y de los objetos e instrumentos decomisados con motivo de delitos forestales;

d) El producto de un impuesto de reforestación que se crea por la presente ley de RD$5.00 por cada millar de pies cuadrados de madera de pino que sea beneficiado en cualquier región boscosa del país; RD$5.00 por cada millar de pies cuadrados de madera de ébano verde que sea igualmente beneficiado en cualquier región boscosa del país; y RD$0.25 por cada árbol de caoba, cedro, caracolí, cabirma, cigua, nogal, almendrillo, guayacán, algarrobo, roble, y cualquier otro árbol de madera preciosa, de construcción o utilizable con fines industriales.

Artículo 20.— El fondo forestal será manejado por la Secretaría de Estado de Agricultura a través de la Dirección General Forestal, de conformidad a los programas y presupuestos anuales. El fondo será destinado precisamente a su objeto bajo la responsabilidad oficial de quienes lo manejen.

Artículo 21.– Los ingresos a que se refieren los apartados a) y d) del Artículo 19 deberán recaudarse por intermedio de las Colecturías de Rentas Internas y los ingresos correspondientes a los apartados b) y c) por los respectivos funcionarios judiciales que intervengan y sean competentes.

Artículo 22.– La Secretaría de Finanzas y el Departamento de Contabilidad de la Secretaría de Agricultura llevará una cuenta especial para el Fondo Forestal.

CAPITULO III

Investigación y Educación Forestal

Artículo 23.– La Secretaría de Estado de Agricultura deberá promover, organizar y fomentar la investigación y enseñanzas forestales en todos sus grados.

Artículo 24.– La Secretaría de Estado de Agricultura directamente o en cooperación con otros sectores de la Administración promoverá la educación cívica en materia forestal.

Artículo 25.– La planeación técnica y la correcta ejecución de los aprovechamientos forestales en el país, deberá fundarse en estudios de profesionistas forestales, por intermedio de la Dirección General Forestal. También debe ser objeto de estudio los pastos y su aprovechamiento en las áreas forestales.

TITULO III

De la Conservación de los Recursos Forestales

CAPITULO I

De los Incendios

Artículo 26.– Se declaran de interés público las medidas que se dicten para prevenir y combatir los incendios de la vegetación forestal.

Artículo 27.– En los terrenos forestales y en sus colindancias, queda prohibido el uso del fuego en forma que pueda propagarse.

Los agricultores, ganaderos, carboneros, arrieros, caminantes y en general quienes tengan necesidad de hacer uso del fuego en el campo deberán sujetarse a las disposiciones que al respecto dicte la autoridad forestal.

Artículo 28.— Se prohibe en los bosques privados y del Estado toda actividad que contribuya a producir incendios, tales como:

a) Hacer quemas incontroladas;

b) Dejar fogatas encendidas;

c) Transitar con teas, dejar tizones en los caminos;

d) Dejar colillas de cigarrillos o cigarros encendidos; y

e) Propender a toda operación que pueda ser causa de propagación de un incendio.

Artículo 29.— Los propietarios, usufructuarios y poseedores, así como los arrendatarios, administradores o encargados, de terrenos cubiertos de vegetación forestal, están obligados a tomar las medidas adecuadas para prevenir y combatir los incendios dentro de dichos terrenos y a cumplir las disposiciones que dicte la Dirección General Forestal. Los propietarios, poseedores o titulares de un aprovechamiento forestal autorizado para su explotación, tienen obligación de contribuir proporcional y equitativamente a la ejecución de las obras que para la prevención de incendios acuerde la autoridad forestal de la zona donde se encuentren ubicados sus predios o la Dirección General Forestal.

Artículo 30.— Cuando por falta de aplicación de medida de protección adecuada, de parte de los propietarios, usufructuarios y poseedores, se produzca un incendio en un predio forestal, el aprovechamiento de las maderas muertas se hará estrictamente bajo la supervisión del servicio oficial y las utilidades que se obtengan de las mismas, se aplicarán íntegramente a tareas de reforestación del propio predio.

Artículo 31.— Las autoridades civiles y militares, las empresas de transporte terrestres y aéreas, están obligadas a comunicar a la oficina o empleado forestal más cercanos, por la vía más rápida, la existencia de los incendios forestales de que tengan

AGN

conocimiento. Las oficinas telefónicas, telegráficas y radiotelegráficas, transmitirán gratuitamente los informes sobre localización de incendios.

Artículo 32.- Las empresas que transporte para sí o para otro, combustibles en general, y utilicen las vías de comunicación de las zonas forestales, están obligadas a tomar las precauciones adecuadas, de acuerdo con los reglamentos, para prevenir y combatir los incendios en las zonas que atraviesen sus rutas o donde tengan sus instalaciones.

Artículo 33.- En casos de incendio de la vegetación forestal, todas las autoridades civiles y particulares, y en general, todos los habitantes físicamente aptos, están obligados a prestar su cooperación con los elementos adecuados de que dispongan para extinguirlos.

Artículo 34.- La Dirección General Forestal podrá todos los años, cuando las condiciones climáticas así lo exijan por causa de la sequía prevaleciente, declarar un Período de Emergencia, cuando se compruebe que hay peligro inminente de que se produzcan incendios.

Artículo 35.- Desde el momento mismo en que sea declarado un Período de Emergencia, automáticamente quedan alertadas todas las autoridades civiles y militares destacadas en el área afectada, y la Dirección General Forestal deberá tomar medidas urgentes para organizar el servicio de prevención y control de incendios en los bosques del área forestal afectada. Todas las actividades de la región quedarán supeditadas al control del siniestro si éste se produjera y podrán ser requisados si el caso lo requiere todos los vehículos de transporte.

CAPITULO II

De los Desmontes y Pastoreo

Artículo 36.- Los desmontes de terrenos cubiertos de vegetación arbórea o arbustiva para abrir nuevas tierras al cultivo agrícola o a la explotación ganadera, sólo se autorizarán por la autoridad forestal cuando la pendiente del terreno no sea superior a veinticinco por ciento y los suelos, por su espesor y calidad, permitan el uso que pretenda hacerse de ellos, en forma permanente y con mayores beneficios económicos que los que

puedan obtenerse con su aprovechamiento forestal, pues en caso contrario, deben permenecer enmontados.

Artículo 37.— Se autorizarán los desmontes previo estudio del terreno para comprobar la concurrencia de los requisitos estipulados en el artículo anterior. Además, deberán realizarse simultáneamente a los desmontes, los trabajos para las nuevas explotaciones agrícolas o ganaderas.

Artículo 38.— Al autorizarse los desmontes se fijarán su forma y los plazos correspondientes. También se determinará la vegetación que haya de respetarse para constituir cortinas rompevientos, proteger los cauces de agua y procurar la conservación del suelo.

Artículo 39.— Es de interés público la limitación y el control del pastoreo para la adecuada conservación y propagación de la vegetación forestal y en su caso la prohibición de pastoreo de determinadas especies de ganado.

Artículo 40.— La autoridad forestal delimitará dentro de la zona boscosa las áreas en que se prohibe o se permite el pastoreo, señalando, en estas últimas, las especies y el número de cabezas que pueden pastar en ellas, para tal efecto, se declaran de utilidad pública la construcción de cercas.

CAPITULO III

De las Plagas y Enfermedades

Artículo 41.— Son de interés público las medidas que sean dictadas por la Dirección General Forestal, para la prevención, el combate y la erradicación de las plagas y enfermedades que afecten la vegetación forestal.

Artículo 42.— Los trabajos de Sanidad Forestal deberán ser ejecutados directamente por los servicios forestales a cargo de la Dirección General Forestal y con cargo al Fondo Forestal.

Artículo 43.— La autoridad forestal determinaŕa qué productos de las cortas de saneamiento deberán incinerarse y cuales pueden aprovecharse fijando en este caso los tratamientos profilácticos a que deben sujetarse. Los productos quedarán a

beneficio de los propietarios de los predios o titulares del aprovechamiento, debiendo satisfacer el costo correspondiente al impuesto del fondo forestal.

CAPITULO IV

De las Zonas Vedadas

Artículo 44.— Cuando las condiciones silvícolas de una zona lo exijan, porque contribuyan a menguar la potencialidad de los recursos hidrológicos o por cualquier otra causa, el Poder Ejecutivo podrá, previo estudio forestal, económico y social por parte de la Dirección General Forestal, declarar vedas parciales, totales, temporales o indefinidas.

Artículo 45.— Al decretarse una veda se precisara el área que comprenda, las especies vedadas y las medidas necesarias para su vigencia.

Artículo 46.— En las zonas vedadas se protegerá la vegetación y se reglamentarán las servidumbres y el aprovechamiento de maderas muertas y las cortas culturales y de saneamiento, las cuales serán realizadas bajo la supervigilancia directa de la Dirección General Forestal.

Artículo 47.— El Poder Ejecutivo, cuando lo estime conveniente y previo los estudios correspondientes podrá modificar los términos de las vedas, o levantarlas total o parcialmente, siempre que previamente se organicen aprovechamientos estables, capaces de explotar racionalmente y conservar en forma adecuada las áreas previamente vedadas, cuando no afecten las fuentes de agua que de ellas dependen.

CAPITULO V

De las Zonas Protectoras y Reservas Nacionales

Artículo 48.— Se consagran como Reservas Forestales de la República;

a) Todos los terrenos del Estado donde existan bosques, o que puedan ser dedicados a la repoblación forestal, sobre los cuales

no existen impedimentos por concesiones legales otorgadas, o derechos originados en alguna ley;

b) Todos los terrenos que pasen a ser en lo adelante propiedad del Estado, donde existan bosques, o que puedan ser dedicados a la repoblación forestal, no siendo adquiridos para fines de cultivo.

Párrafo.– Las Reservas Forestales son inalienables e imprescriptibles, quedando a cargo del Poder Ejecutivo fijar su extensión.

Artículo 49.– Quedan sometidas a las prescripciones de la presente ley, y, por tanto, se prohiben en ello los desmontes, talas, quemas y cultivos, las siguientes zonas:

a) Todas las cumbres de las montañas que constituyen el sistema orográfico de la República;

b) Las riberas de todos los ríos y arroyos, en una faja de treinta metros de ancho a cada lado;

c) Los Nacimientos o fuentes de todos los ríos y arroyos y los manantiales que sirven a alguna comunidad o vecindario, en un radio de ciento cincuenta metros, circunsferenciales, en cada caso;

d) La faja de veinte metros de ancho que rodee todo lago o laguna, dentro o fuera de propiedades privadas;

e) Las cimas y vertientes de las colinas en una extensión que determinará la Dirección General Forestal, y las cimas de las lomas dedicadas a cultivos en una faja de 20 metros por lo menos en cada vertiente;

f) La faja de veinte metros a contar de la zona de los mares en todo el litoral de la República, que no sea zona urbana, a menos que los cultivos constituyan una repoblación arbórea.

g) Los terrenos que tengan más de veinticinco grados de inclinación a menos que los cultivos sean permanentes y de una naturaleza que impida arrastre de la capa vegetal.

Párrafo.– En todas las zonas mencionadas en el presente artículo y de conformidad con permiso previo otorgado al efecto por la Dirección General Forestal, con el asesoramiento de ésta y sin perjuicios de la continuidad de las barreras vegetativas protectoras correspondientes, los bosques no productivos que actualmente existen, en los lugares señalados, podrán sustituirse gradualmente por bosques de frutales, cafetos y demás cultivos que conviertan las selvas en elementos de gran valor económico.

Artículo 50.– Todos los propietarios ocupantes en los terrenos radicados en las fajas vedadas indicadas en el artículo anterior, que estén despoblados de árboles, deberán informar de tal ocurrencia a la Dirección General Forestal repoblarlas de frutales, cafetos, tung, caucho o cualquier otro árbol productor de frutos, cortesas, gomas, resinas, etc., si de conformidad con los estudios que realice la Dirección General Forestal y demás dependencias de la Secretaría de Estado de Agricultura, tales terrenos pueden dedicarse a semejantes cultivos.

Artículo 51.– El Poder Ejecutivo, previo los estudios correspondientes, realizados por los técnicos de la Dirección General Forestal establecerá zonas forestales para proteger el suelo, mantener y regular el régimen hidrológico y mejorar las condiciones de higiene para la población o para cualquier otro fin conveniente, en los terrenos siguientes:

a) Los comprendidos en las cuencas hidrográficas;

b) Los inmediatos a las poblaciones; y

c) Los comprendidos en una faja de 200 metros a ambos lados de las carreteras y caminos locales y vecinales;

Artículo 52.– Podrán efectuarse aprovechamientos en las zonas protectoras, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada predio y dentro de las limitaciones que establezca la disposición respectiva.

Artículo 53.– El aprovechamiento de los bosques que constituyen la reserva nacional forestal, se hará bajo la dirección oficial, previo estudios dasonómicos que se elaboren y con el asesoramiento y control de la Dirección General Forestal.

CAPITULO VI

De los Parques Nacionales

Artículo 54.– El Poder Ejecutivo podrá establecer, para uso público, además de los existentes actualmente, parques nacionales en los terrenos forestales que por su ubicación, configuración topográfica y otras circunstancias, lo ameriten.

Artículo 55.– Es de utilidad pública el establecimiento, la conservación y el acondicionamiento de parques nacionales y monumentos naturales, así como la protección de sus recursos naturales y el incremento de su flora y fauna.

Artículo 56.– Los terrenos comprendidos dentro de los parques nacionales, se considerarán bienes destinados a un servicio público.

Artículo 57.– Cuando al establecer un parque nacional se incluyan terrenos que no sean de propiedad nacional, el Poder Ejecutivo fijará en el Decreto la causa de utilidad pública que fundamente la expropiación de los mismos para que el Estado adquiera su dominio.

Artículo 58.– Dentro del área de los Parques Nacionales la Dirección General Forestal podrá autorizar aprovechamientos forestales bajo la supervigilancia directa de la autoridad forestal.

Artículo 59.– La Administración, conservación vigilancia y acondicionamiento de los parques nacionales corresponde a la Dirección General Forestal.

Artículo 60.– La constitución de alojamiento, centros de recreo, comercios, restaurantes, y en general la realización de cualquier actividad lucrativa dentro de los Parques Nacionales, estará sujeta al permiso previo de la Dirección General Forestal.

Artículo 61.– Los permisos que se otorguen de acuerdo con el artículo anterior especificarán el término por el que se concede, las obligaciones de los permisionarios, las limitaciones a que deben sujetar su actuación y las causas que determinen su cancelación.

Artículo 62.– Los ingresos que se obtengan de los parques nacionales serán destinados a la conservación y mejoramiento de los mismos.

Artículo 63.– Para cada Parque Nacional, cuando el caso lo requiera deberá expedirse el reglamento correspondiente.

CAPITULO VII

De la preservación de maderas y extración y elaboración de Productos Forestales.

Artículo 64.– Queda prohibido el empleo de maderas en usos tales como postes de transmisión, pilotes, puntales, vigas de puentes y otros, materiales para obras portuarias y similares, sin que sean previamente tratadas para su preservación.

Artículo 65.– La Dirección General Forestal determinará las medidas adecuadas, a fin de mejorar los sistemas de aserrío tendientes a disminuir el labrado con hacha y el procedimiento primitivo de elaboración de carbón vegetal, y en general las que tiendan a lograr el aprovechamiento más completo de los productos forestales, reduciendo los desperdicios.

Artículo 66.– Toda persona física o moral que pretenda industrializar o industrialice la materia proveniente de los aprovechamientos de la vegetación forestal, está obligada a solicitar de la Dirección General Forestal del permiso correspondiente para establecer y hacer funcionar sus instalaciones industriales.

Artículo 67.– La Dirección General Forestal fijará el grado mínimo de industrialización que deba darse a cada producto proveniente del aprovechamiento de la vegetación forestal, tomando como fundamento el adelanto alcanzado por las industrias establecidas en el país o las posibilidades de las nuevas.

Artículo 68.– Las autoridades forestales fomentarán la industrialización y preservación de las maderas y la industrialización de los productos no moderables, tales como resinas, goma–resinas, aceites esenciales, frutos, semillas, raíces, rizomas y otros similares.

Artículo 69.- Queda prohibida la extración sin permiso, de gomas, resinas, esencias, raíces, cortezas y cualquier otro sub producto de los bosques cuya obtención conlleve incisiones, cortes, manipulaciones o prácticas que de algún modo pongan o puedan poner en peligro la vida de los árboles.

Artículo 70.- El Poder Ejecutivo previa las recomendaciones de la Dirección General Forestal dictará las Reglamentaciones necesarias a la aplicación del artículo anterior, y la Secretaría de Estado de Agricultura por intermedio de la Dirección General Forestal concederá los permisos que le sean solicitado cuando los planes y sistemas de aprovechamiento que le sometan las personas o corporaciones interesadas en la explotación de bosques, respondan a juicio de los técnicos de dicha Secretaría, a los objetivos de las disposiciones de esta Ley y de las Reglamentaciones mencionadas.

Artículo 71.- No se expedirán permisos para extracción de gomas, resinas, esencias o cortezas en terrenos propiedad del Estado, excepto cuando la persona o corporación interesadas en ello haya adquirido derecho a tales explotaciones por concesiones legalmente otorgadas y haya efectuado el pago correspondiente por la explotación concedida.

TITULO IV

De la restauración y fomento de los recursos forestales

CAPITULO I

Repoblación Forestal

Artículo 72.- Se declaran de utilidad pública los trabajos de repoblación forestal, los cuales serán realizados por la Dirección General Forestal con cargo al fondo forestal.

Artículo 73.- La Dirección General Forestal deberá realizar los trabajos de reforestación en los aprovechamientos forestales, en proporción a los volúmenes o montos de los aprovechamientos. Cuando se determine la urgencia de reforestar terrenos esencialmente forestales, la autoridad forestal deberá realizar la repoblación de manera inmediata.

Artículo 74.- Es obligatoria la reforestación de los siguientes terrenos:

a) Los cubiertos por bosques carentes de renuevo natural;

b) Los correspondientes a las fuentes de alimentación de los ríos, manantiales, corrientes, pozos y otros que abastezcan de agua a las poblaciones;

c) Los comprendidos en las cuencas de alimentación de las obras nacionales de riego y en lo que se originen torrentes que causen inundaciones, y

d) Los cercanos a poblaciones para favorecer la salud pública y la recreación.

Artículo 75.— La Dirección General Forestal determinará la repoblación de especies que mejoren las condiciones del bosque y de aquellos que estén en peligro de extinguirse. Los trabajos de repoblación comprenden la siembra o plantación, así como el cuidado y vigilancia de las mismas por el término prudente que la autoridad forestal determine según las condiciones de cada región.

Artículo 76.— La Dirección General Forestal establecerá viveros para los trabajos de repoblación forestal, para la formación de arboledas y parques. Para este objeto, podrá solicitar la cooperación de autoridades locales y municipales, corporaciones, instituciones y particulares.

Artículo 77.— Los propietarios de terrenos aptos para ser repoblados forestalmente que no se encuentren incluídos en un aprovechamiento forestal, podrán realizar trabajos de repoblación forestal por su cuenta bajo la supervigilancia de la Dirección General Forestal.

Artículo 78.— El Estado establecerá los necesarios estímulos crediticios, fiscales o de cualquier otra índole para los propietarios de predios no sujetos a aprovechamiento, que realicen trabajos de creación o fomento de masas arboledas.

CAPITULO II

Previsiones especiales sobre cafetales, cacaotales y otros árboles frutales y palmeras

Artículo 79.— Se prohibe la destrucción de los cafetos y de cualquier clase de árboles frutales y de todas las especies de palmera y de cana excepto la manacla.

Artículo 80.— Solamente en caso de absoluta justificación podrá ser autorizado el corte de cualesquiera de las especies precedentemente señaladas en el artículo anterior.

Artículo 81.— Queda prohibida la destruccion de los árboles productores del cacao. Sin embargo. la Dirección General Forestal, con la debida aprobación de la Dirección General del Café y del Cacao podrá autorizar la destrucción de cacaotales por causas atendibles y debidamente justificadas.

Párrafo.— La destrucción de árboles de cacao será únicamente justificada:

a) Cuando su rendimiento sea bajo;

b) Cuando las plantas crezcan en un suelo y en un clima inadecuados;

c) Cuando las variedades cultivadas reunan condiciones indeseables;

d) Cuando las plantas tengan un grado avanzado de vejez y no rindan cosecha aceptable;

e) Cuando sufran plagas o enfermedades cuya propagación se considere peligrosa.

f) Cuando tengan la finalidad de entresacar los árboles para darles mayor distancia y permitir un mejor desarrollo de plantío, y

g) Cuando su desarrollo sea defectuoso.

Artículo 82.— Queda prohibido realizar actos o prácticas de cualquier clase tales como descortezamiento del tallo principal o de las ramas, la supresión de la sombra, el envenenamiento de los árboles y cualquier otra operación que pueda provocar directa o indirectamente la muerte de los árboles de cacao.

Artículo 83.– En los casos en que la Dirección General Forestal autorice la destrucción de árboles de cacao, será obligatoria la resiembra de los árboles en igual cantidad que la destruida y en el plazo que indique la Dirección General Forestal de común acuerdo con la Dirección General del Café y del Cacao. La resiembra del cacao deberá hacerse bajo la supervigilancia y dirección de los técnicos de la Dirección General del Café y del Cacao.

Párrafo.– Se excluyen de la obligación de la resiembra del cacao aquellos predios que a juicio de los técnicos de la Dirección General del Café y del Cacao se consideren inapropiados para tales cultivos.

Artículo 84.– La Secretaría de Estado de Agricultura por intermedio de las Direcciones Generales Forestales y de Café y Cacao, respectivamente, podrá ordenar la destrucción y también la resiembra de un cacaotal, cuando lo considere conveniente, aun sin haber recibido para ello solicitud del dueño o encargado del mismo.

Artículo 85.– El Poder Ejecutivo dictará los Reglamentos que considere necesarios para establecer las formas y procedimientos para el cumplimiento de este capítulo.

TITULO V

De los Aprovechamientos Forestales

CAPITULO I

REGLAS GENERALES

Artículo 86.– La administración y cuidado de los terrenos forestales propiedad del Estado estarán a cargo de la autoridad forestal.

Artículo 87.– Para el corte de cualquier árbol maderable o frutal en el territorio de la República es indispensable proveerse de un permiso de la Secretaría de Estado de Agricultura por intermedio de la Dirección General Forestal.

Artículo 88.– Se exceptúa de esta disposición la corta de árboles maderables y frutales con el fin de mejoramiento cultural

de las plantaciones de café o cacao, necesitándose para ello una simple autorización de la Dirección General Forestal.

Artículo 89.- Para conceder la autorización a que se refiere el artículo precedente es indispensable que medie la opinión técnica de la Dirección General de Café y Cacao.

Artículo 90.- En caso de que pretenda aprovechar la madera de estas cortas, es imprescindible el pago del impuesto de reforestación.

Artículo 91.- Para tener derecho a la corta de un árbol es imprescindible probar que se es dueño exclusivo de la tierra en donde crece dicho árbol o éste ha sido plantado por el solicitante. En caso de que el solicitante no sea propietario exclusivo del terreno deberá acompañar a su solicitud una autorización o poder debidamente legalizado, de los demás propietarios del terreno.

Artículo 92.- En los terrenos indivisos el solicitante solo tendrá derecho a cortar árboles en un área igual a los terrenos que les reconocen sus derechos, siempre y cuando el mismo se encuentre en posesión efectiva de la porción debidamente determinada, debiéndose anexar para su comprobación una certificación de la autoridad forestal local que determine la posesión real del terreno.

Artículo 93.- Se prohibe la destrucción de árboles situados en las orillas de los caminos públicos, siempre que estos no perjudiquen la conservación de dichos caminos.

Artículo 94.- De igual manera se prohibe el corte de los árboles de madera preciosa, tales como caoba, sabina, espinillo, ebano, cedro, roble, capá, nogal, granadillo, guazumilla, caobanilla, etc. cuando sea para hacer carbón, leña, postes o traviesas o para cualquier otro fin cuya utilidad no compense la destrucción de dichos árboles.

Artículo 95.- El corte de maderas preciosas, así como su repoblación estarán sujetos a los Reglamentos que se dicten al respecto, debiendo determinar la Dirección General Forestal el diámetro de los mismos y el momento o tiempo en que se verifique el corte, así como su forma de repoblación.

Artículo 96.– Queda prohibido el corte de árboles que produzcan gomas, resinas, o que sus cortezas, raices u hojas tengan uso industrial, sin embargo, la Secretaría de Estado de Agricultura, podrá autorizar estos cortes cuando se compruebe que con ello no se afectan necesidades específicas nacionales.

Artículo 97.– El derribo y trozada de árboles en sitios públicos, sean estos rurales o urbanos requerirá permiso de la autoridad forestal, aún cuando estos sean hechos por personas u organismos oficiales y en interés público. En los predios urbanos de propiedad privada, el derribo no está sujeto a más requisito que el de avisar a la Oficina Forestal de la localidad.

Artículo 98.– Las necesidades domésticas del medio rural se satisfarán preferentemente utilizando maderas muertas. Para construir casas, cercas, corrales, bodegas, implementos de labranza, así como para construcción de escuelas, edificios para las autoridades, puentes, y en general obras de servicio público o de beneficio colectivo para las pequeñas localidades, la autoridad forestal autorizará con carácter urgente los volumentes estrictamente necesarios, debiendo comprobar que los productos se utilicen en la realización de dichos fines.

Artículo 99.– Los árboles que se destinen para leña, traviesas y postes o para la fabricación de carbón, deberán ser cortados a una altura no menor de dos pies del suelo para permitir la repoblación por medio de los retoños.

Artículo 100.– No podrán ser extraidos ni cortados, ni destruidos los brotes o retoños de los troncos que quedan en el terreno como consecuencia de aprovechamientos forestales para la fabricación de carbón o leña, traviesas y postes.

Artículo 101.– Ninguna persona física o moral podrá desmontar bosques para fines de cultivo, a menos que obtenga de la Secretaría de Estado de Agricultura el permiso correspondiente el cual deberá ser solicitado previamente con exposición de motivos, clase de cultivos a los cuales se dedicará el terreno y cualquier otro detalle pertinente.

Párrafo.– Para los desmontes hasta 50 tareas se concederán los permisos exonerados del impuesto de documentos.

Artículo 102.— Este permiso podrá ser negado en el caso en que la Dirección General Forestal considere necesario que dichos terrenos permanezcan como terreno de explotación forestal o en los casos en que los cultivos que se decían efectuar no correspondan a la calidad de las tierras según juicio técnico, o en el caso en que el desmonte resulte un inconveniente para la conservación de la capa vegetal.

Artículo 103.— Cuando la despoblación de bosques se realicen con el propósito de dedicar cualquier cantidad de terreno al cultivo de pasto para ganado, deberán dejarse cuando menos cinco árboles en pleno desarrollo en los terrenos semi áridos y ocho árboles en los terrenos áridos, por cada hectárea.

Artículo 104.— Las personas que desmonten o hubieren desmontado terrenos rurales para fines de cultivo, en calidad de dueños, usufructuarios, arrendatarios, aparceros, o en cualquier otra calidad cualquiera que les confiera el derecho de explotación de los terrenos, estarán obligados a ponerlos y mantenerlos en buenas condiciones de cultivo, de frutos mayores o menores, pastos artificiales o cualesquiera otros cultivos apropiados a la clase de terreno y a su mayor rendimiento, en los plazos que les sean fijados por los encargados de distritos agrícolas, instructores de agricultura o los Agentes Forestales, plazos que en ningún caso serán menores de 60 días, ni mayores de un año.

Párrafo I.— La notificación de esos plazos se hará por escrito, en formularios adecuados, copias de los cuales remitirá inmediatamente el Encargado de Distrito Agrícola, Instructor de Agricultura o Agente Forestal correspondiente a la Secretaría de Estado de Agricultura.

Párrafo II.— Cuando una misma persona hubiese desmontado diversas porciones de terreno para fines de cultivo, se harán tantas notificaciones como porciones desmontadas tuviera, pudiéndose fijar plazos de distinta duración para el acondicionamiento de cada una de las porciones.

Párrafo III.— Las personas notificadas por los Encargados de Distritos Agrícolas, Instructores de Agricultura o Agentes Forestales, podrán apelar al Secretario de Estado de Agricultura, para obtener la extensión de cualquier plazo que le hubiere sido fijado, y el Secretario de Estado podrá extender el plazo,

teniendo en cuenta todas las circunstancias que se justifiquen en la solicitud de extensión.

Párrafo IV.– Cuando el terreno de que se tratare tuviere más de diez hectáreas de superficie, el Encargado del Distrito Agrícola, Instructor de Agricultura o Agente Forestal, o el Secretario de Estado de Agricultura, en caso de que el notificado apelare a él, podrán hacer al propietario tantas notificaciones como porciones de diez hectáreas o fracción de esa superficie contuviere el terreno, fijando plazos distintos para cada división del mismo.

Párrafo V.– Las personas que no acondicionen, con fines de cultivo, sus terrenos desmontados en los plazos que les hubieren fijado los Encargados de Distritos Agrícolas, Instructores de Agricultura, o Agentes Forestales o el Secretario de Estado de Agricultura, en caso de apelación a este funcionario, serán sometidos a la acción de la justicia, quedando obligadas a acondicionar para fines de cultivo los terrenos en falta, en un plazo de noventa días, a contar de la notificación de la sentencia definitiva.

Párrafo VI.– Si dentro del plazo de noventa días a que se refiere el párrafo anterior, la persona condenada a condicionar el terreno para fines de cultivo, se abstuviera de hacerlo, la Dirección General Forestal podrá repoblar el terreno, siendo el propietario responsable frente al Estado de los gastos de repoblación, tan pronto éste haga la misma, y siendo además en todo tiempo, el ocupante o propietario responsable del cuidado de la nueva plantación.

Párrafo VII.– Cuando interviniere fallo definitivo en el caso previso en el párrafo VI, y se tratare de terrenos destinados a frutos mayores como cacao y café o cultivos permanentes, la Secretaría de Estado de Agricultura, queda facultada para ejecutar el acondicionamiento de esos terrenos a expensa de la persona en falta, quedando en ese caso los frutos como garantía de la inversión que se hubiere hecho.

Artículo 105.– Los árboles maderables o sus despojos, que hubieren sido cortados con fines agrícolas podrán aprovecharse pagándose el correspondiente impuesto de reforestación.

CAPITULO II

Normas para el corte y aprovechamiento de los árboles maderables

Artículo 106.– Para autorizar la corta de cualquier árbol maderable o frutal en la República es indispensable que éste sea inspeccionado previamente por un técnico de la Secretaría de Estado de Agricultura o por un Agente Forestal para determinar si procede o no el corte solicitado.

Artículo 107.– Todo árbol maderable o frutal que el técnico de la Secretaría de Estado de Agricultura o el Agente Forestal considere que procede su utilización, deberá ser marcado con pintura u otro signo que recomiende la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 108.– La altura a que deben ser cortados los árboles maderables será indicada por la Secretaría de Estado de Agricultura, pero en los bosques de pino estos lo serán a una altura igual a su diámetro. Los inferiores a un diámetro de 12 pulgadas serán cortados a 12 pulgadas.

Artículo 109.– La trozada de los árboles de pino derribados se hará con una sierra trozadora (corbina). Se prohibe el uso del hacha para esta operación.

Artículo 110.– El largo de las trozas no podrá tener más de tres pulgadas en exceso de su largo nominal.

Artículo 111.– Las tablas aserradas en el aserradero no podrán tener más de 1/16 de pulgada en exceso de su espesor nominal.

Artículo 112.– Los árboles de pino cortados tienen que ser aprovechados hasta un diámetro de 10 pulgadas de la copa; excepto en los casos de un exceso de rama a esta altura.

Artículo 113.– Se prohibe el aserrío de los troncos de pino para la producción de madera sin cantear o en costaneras.

Artículo 114.– Igualmente se prohibe la producción de varas, postes y árboles de navidad en los pinares, a menos que estos sean la consecuencia de entresaques científicamente realizados y bajo la supervigilancia y control de la Dirección General Forestal.

CAPITULO III

De los aprovechamientos ordinarios

Artículo 115.– Los aprovechamientos de plantas herbáceas con fines domésticos o en pequeña escala comercial no estarán sujetos a autorización.

Artículo 116.– Los aprovechamientos de palma real, coquitos de palma, y en general semillas. raices, frutos, y productos similares que no pongan en peligro la conservación de las especies, no requerirán autorizacion de la autoridad forestal. El corte o la recolección quedarán sujetos a las disposiciones que establezca dicha autoridad.

Artículo 117.– El aprovechamiento de cortezas requerirá la previa autorización de la Secretaría de Estado de Agricultura, la cual determinará las condiciones a que debe sujetarse.

Artículo 118.– La extracción de cubierta muerta de los terrenos y de humus o mantillo, se autorizará hasta el límite en que no se dañe la fertilidad del suelo.

Artículo 119.– Los aprovechamientos de masas forestales artificiales, cultivadas con fines comerciales o industriales, serán autorizados con la simple presentación del plan de corte y reforestación.

Artículo 120.– El aprovechamiento comercial, cualquiera que sea su escala, de resinas, goma-resinas y productos similares, de palmas o de agaves silvestres, de Sábila, etc., estará sujeto a autorización previa por parte de la autoridad forestal en los términos que fije el reglamento que se dicte al efecto. La misma norma será aplicable al aprovechamiento de los recursos arbustivos en general. Las autorizaciones para el aprovechamiento antes mencionado, serán expedidas tendiendo preferentemente a proteger la economía de los campesinos que directa y personalmente realizan tal aprovechamiento.

En caso de las resinas, solamente podrán ser objeto de aprovechamiento los árboles debidamente señalados por la Dirección General Forestal y a una altura no menor de 1 metro 40 centímetros de la base del árbol, y que tan pronto sean resinados se destinen al aserrío.

Artículo 121.– Las solicitudes de aprovechamientos comerciales e industriales deberán acompañarse:

a) De los títulos de propiedad de los terrenos, o si no existen títulos de las constancias que acrediten la posesión pacífica, continua y pública a título de dominio;

b) De los planos en que aparezcan deslindadas las áreas forestales cuyo aprovechamiento se solicita y los estudios dasonómicos que fijen las disposiciones reglamentarias.

Artículo 122.– Los permisos se otorgarán por los plazos que la autoridad forestal estime convenientes, dadas las condiciones del predio, y serán prorrogables si el beneficiario demuestra haber cumplido con todas sus obligaciones.

CAPITULO IV

De las suspensiones, cancelaciones y Revocaciones

Artículo 123.– La Secretaría de Estado de Agricultura por intermedio de la Dirección General Forestal está facultada para suspender las explotaciones forestales en los siguientes casos:

a) Cuando se compruebe que los titulares contravienen los preceptos fundamentales de esta Ley y sus reglamentos;

b) Cuando a petición fundada de parte interesada en procedimiento ante autoridad judicial o administrativa, los derechos de posesión o dominio de los predios respectivos se encuentran controvertidos;

c) Por falta de cumplimiento de las fases técnicas y demás estipulaciones establecidas en las autorizaciones de explotación.

La suspensión podrá ser levantada por la Secretaría de Estado de Agricultura, por intermedio de la autoridad forestal, tan pronto desaparezcan las casusas que la motivaron.

Artículo 124.– Cuando para proteger derechos legítimos de terceros, de propietarios o de poseedores de predios en los que se realizan aprovechamientos forestales, los interesados o las autoridades judiciales soliciten de la Secretaría de Estado de

Agricultura la suspensión de los aprovechamientos, ésta podrá disponer que los mismos continúen mediante el depósito, en dinero, del valor de los productos. El depósito antes mencionado deberá efectuarse en la Colecturía de Rentas Internas correspondiente.

Artículo 125.– Son causas de cancelación de las autorizaciones del aprovechamiento forestal:

a) Ceder sin previa aprobación escrita de la Dirección General Forestal, los derechos derivados de dichas autorizaciones;

b) La disolución o liquidación de las sociedades o la quiebra de los titulares;

c) Incurrir en infracciones forestales clasificadas como delito, violando las obligaciones fundamentales establecidas con el propósito de garantizar el racional aprovechamiento de los recursos forestales;

d) Destinar los aprovechamientos a fines distintos de aquellos para los cuales se hayan autorizado;

e) Tratándose de pequeños aprovechamientos, cuando cambien o desaparezcan las causas en que se haya basado el otorgamiento de la autorización;

f) La persistencia de las circunstancias que motivaron la suspensión después del plazo que se hubiere concedido para corregirlas.

Artículo 126.– Si la Dirección General Forestal encuentra que un aprovechamiento fué autorizado, tomando en cuenta datos falsos o erróneos, o contrariando disposiciones de orden público, procederá a revocar la autorización.

TITULO VI

Del Transporte y comercio de los productos forestales

CAPITULO I

Transportación de madera y Confiscación de la misma

Artículo 127.– El transporte de los productos forestales se sujetará a las siguientes normas:

a) Dentro de las zonas que comprende el aprovechamiento podrán transportarse sin documentación alguna; y

b) Cuando salgan de la zona deberán ampararse con la documentación oficial correspondiente.

Artículo 128.– Los transportadores de productos forestales llenarán previamente al inicio de sus actividades los requisitos que fije la autoridad forestal. Están obligados a recabar del remitente la documentación correspondiente expedida por el empleado de la Secretaría de Estao de Agricultura o el Agente Forestal destacado en la zona del aprovechamiento en la cual certifique que la madera transportada está amparada de una autorización legal. En cualquier tiempo deberán informar sobre el volumen, origen y destino de los productos que transporten.

Artículo 129.– La certificación de transporte expedida por el Agente Forestal o empleado de la Secretaría de Agricultura destacado en la zona de la explotación forestal deberá indicar la procedencia del cargamento (sección y municipio), número del permiso, a favor de quien fué expedido, cantidad de pies o trozas que se transportan y su destino.

Artículo 130.– A fin de controlar el transporte de la madera desde las áreas forestales a los centros de consumo, la Secretaría de Estado de Agricultura establecerá las estaciones de control que considere necesarias en las diversas rutas del país.

Artículo 131.– Todo cargamento de madera que no esté proviso de la certificación de transporte en el momento de su inspección en uno cualquiera de los puestos de control o que sea sorprendido sin dicha certificación en cualquier otro lugar por Agentes Forestales o autoridad competente, será incautada por el funcionario que levante el Acta de la infracción

sometiendo a la acción de la justicia al transportador y aplicando las disposiciones de los Artículos 133 y 134.

Artículo 132.- Toda madera que por sentencia de un Tribunal competente se declara que ha sido producida ilegalmente en la República será confiscada en favor del Estado y el producto de su venta por parte de la Dirección General Forestal ingresará al Fondo Forestal.

Artículo 133.- Para iniciar la confiscación consignada en el artículo anterior, el empleado de la Secretaría de Agricultura o el Agente Forestal que sorpenda la infracción, levantará el acta de sometimiento correspondiente y también un acta de incautación de la madera.

Artículo 134.- Toda madera incautada será entregada a un guardián cuyo nombre y dirección figurará en el acta, a fin de custodiar dicha madera hasta el fallo definitivo que ordene su confiscación.

Preferentemente se escogerá para guardián una autoridad rural.

Artículo 135.- Ninguna madera cortada sin un permiso de la Secretaría de Estado de Agricultura podrá ser facturada por Rentas Internas para el pago de los impuestos correspondientes.

CAPITULO II

Comercio de los Productos Forestales

Artículo 136.- El titular de cualquier aprovechamiento forestal está obligado a enviar semanalmente a la Dirección General Forestal una copia de la documentación oficial empleada para la transportación; a rendirle un informe mensual sobre los productos que haya obtenido, indicando los lugares de su procedencia y aquellos en donde se encuentren depositados, así como el tratamiento y transformación que en su caso hayan recibido y las ventas efectuadas.

Artículo 137.- Todo titular de aprovechamientos forestales está en la obligación de llevar libros autorizados por la Dirección General Forestal para registrar sus productos y de informar sobre los nombres de las personas a quienes los venden.

Artículo 138.— Los industriales o comerciantes que empleen madera o productos forestales, están obligados a dar cumplimiento a toda disposición fiscal y de control existente en la actualidad o que en lo adelante se cree, pudiendo ser confiscadas las madera que posean en violación a dichas disposiciones.

CAPITULO III

Comercialización de los Bosques del Estado

Artículo 139.— Todos los bosques del Estado quedan al cuidado y administración de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 140.— Para efectuar cortes de árboles maderables, extracción de residuos y cáscaras de mangle en las áreas boscosas del Estado, es imprescindible obtener una autorización de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 141.— Toda autorización dada por la Secretaría de Estado de Agricultura para el aprovechamiento del área boscosa de la República, por parte de terceras personas interesadas, deberá contener las siguientes indicaciones:

a) Lugar, cantidad de árboles por especie, área de designación o extracción de corteza de mangle.

Para el corte de árboles maderables se seguirán las normas establecidas en el título V de la presente Ley.

Artículo 142.— Toda persona interesada en el corte de árboles maderables, extracción de residuos o corteza de mangle en terreno del Estado, debe hacer una solicitud a la Secretaría de Estado de Agricultura, indicando la cantidad de árboles por especie que desea cortar, los pinos que desea resinar o el área en que desea descortezar el mangle y cantidad de corteza que desea adquirir.

Artículo 143.— La Secretaría de Estado de Agricultura queda facultada para vender de grado a grado los productos de los bosques del Estado incluyendo los pinares de los parques nacionales.

Artículo 144.– La Secretaría de Estado de Agricultura fijará el precio de venta de los distintos productos forestales de acuerdo con informes técnicos en cada cado.

Artículo 145.– El precio de venta de los productos forestales de los bosques del Estado se fijará en la siguiente base:

a) Pino; Ebano Verde y Sabina: El precio deberá establecerse por cada millar de pie cuadrado de madera producida en el aserradero.

b) Madera dura y preciosa; será establecido por cada árbol a cortar de acuerdo al desarrollo del mismo;

c) En la extracción de resinas de pino, el valor a cobrar se establecerá por cada millar de árboles de acuerdo al desarrollo de los mismos.

d) Manglares, el predio a pagar será establecido de conformidad al área a explotar de acuerdo con su densidad y desarrollo vegetativo.

Artículo 146.– Todas las sumas provenientes de la venta de maderas, resinas, cáscaras de mangle y otros productos de las áreas boscosas del Estado, se especializarán al fondo de reforestación creado por la presente Ley.

TITULO VII

De las infracciones y sanciones

CAPITULO UNICO

Artículo 147.– Se impondrán de dos a diez años de prisión y multa de RD$1,000.00 a RD$10,000.00, al que cause incendio intencional en los montes maderables, dañando o destruyendo la vegetación forestal, con especialidad en los pinares de la República, sea cual fuere el régimen de derecho de propiedad de los mismos.

Párrafo.– Queda modificado única y exclusivamente en lo que se refiere a los incendios de los bosques, el inciso 3ro. del artículo 434, del Código Penal y derogado el inciso 4to. del

mismo artículo modificado por el Artículo 13, de la Ley No. 1688, del 16 de abril de 1948, en el sentido de la pena aplicable, la cual es sustituida por la señalada en el presente artículo.

Artículo 148.— Se impondrá de 6 meses a 2 años y multa de RD$200.00 a RD$1,000.00:

a) Al que sin autorización lleve a cabo, en montes maderables, aprovechamientos con volumen superior a doscientos metros cúbicos en rollo;

b) Al que en las explotaciones autorizadas se exceda en más de un diez por ciento sobre las intensidades de corte que con relación al volumen por hectárea se haya fijado o sobre el volumen anual que le haya sido autorizado;

c) Al que sin autorización en montes maderables, efectúe desmontes que aisladamente o conjuntamente abarquen una superficie mayor de cinco hectáreas.

Artículo 149.— Se impondrá de 3 meses a 1 año de prisión y multa de RD$100.00 a RD$500.00:

a) Al que ampare productos forestales con documentación expedida para otros predios;

b) Al que adquiera sin la documentacion forestal correspondiente productos forestales;

c) Al profesionista forestal que asiente datos falsos en los estudios dasonómicos que elabore para regir los aprovechamientos forestales;

d) Al que sin autorización explote más de 100 árboles para extraer resinas, goma-resinas y en general productos cuya obtención no implique la muerte del árbol;

e) A quienes efectúen aprovechamiento de resinas o gomas-resinas sobre más de veinte por ciento del arbolado autorizado, sin respetar los diámetros y el número de caras por categoría diamétrica o escarifique mayor número de árboles que el permitido,y

f) Al que transporte madera cortada ilegalmente o que no esté amparada en su certificación de transporte.

Artículo 150.– Se sancionará con pena de 3 meses a un año de prisión o multa de RD$100.00 a RD$500.00 ó ambas penas según la gravedad del caso:

a) Al que cinche, escarifique, queme, corte, o en cualquier otra forma, hiera de muerte o destruya árboles que arrojen un volumen de más de 25 metros cúbicos en rollo, sin el permiso debido.

b) Al que sin autorización efectúe desmontes aislados o conjuntos afectando una superficie no mayor de 5 hectáreas en montes maderables;

c) Al que sin autorización explote más de 20 hasta 100 árboles para extraer resinas, goma- resinas y en general, productos cuya obtención no implique la muerte del árbol;

d) A quien efectúe aprovechamiento de resinas o goma-resinas sobre más de cinco hasta de veinte por ciento del arbolado autorizado, sin respetar los diámetros, el número de caras por categoría diamétrica o escarifique mayor número de árboles que el autorizado;

e) Al que en un aprovechamiento se exceda en más del cinco por ciento y menos del diez por ciento sobre los volumenes anuales de madera que se le hubieren autorizado o sobre las intensidades de corte que con relación al volumen por hectáreas se le hubiere fijado;

f) Al que transporte productos forestales sin la documentación correspondiente o al que utilice más de una vez en el transporte de tales productos una misma documentación.

Artículo 151.– Se sancionarán con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de RD$100.00 a RD$500.00 según los casos:

a) A los que por imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado proporcionen incendios forestales;

b) Al profesionista que teniendo el carácter de responsable técnico de un aprovechamiento autorizado no vigile directamente la ejecución de los planes de aprovechamiento, si causa por ello graves daños a los recursos forestales. y

c) Al profesionista que formule y presente a las autoridades forestales estudios dasonómicos, sin haber intervenido en los correspondientes trabajos del campo, y si fundados en ellos se concede la autorización de aprovechamiento.

Artículo 152.- Cuando las sanciones previstas en los artículos anteriores se impusieren a un funcionario, agentes o empleados del Servicio Forestal oficial, se destituirá de su cargo o función y se le inhabilitará para trabajar en dicho servicio.

Si la sanción corporal a que se refieren los artículos anteriores se impusieren a un profesionista forestal, se le aplicará la inhabilitación para ejercer la profesión, por un término no mayor al de la sanción corporal impuesta.

Artículo 153.- Cuando con motivo de la comisión de algunos de los delitos previstos en los artículos anteriores, la autoridad judicial tuviere a su disposición maquinaria, equipo de toda índole, instrumentos o productos forestales, la Secretaría de Estado de Agricultura o los interesados legítimos podrán solicitar de la autoridad judicial que se remates para evitar su devaluación o su destrucción.

Si la autoridad forestal hiciere la solicitud y los interesados se opusieren a ella, o viceversa, el Juez resolverá el caso oyendo las razones de ambas partes. El producto del remate quedará a disposición de la autoridad judicial para los efectos legales procedentes. Los interesados legítimos tendrán derecho a intervenir por sí o por su representante en la subasta, o a otorgar fianza para garantizar el precio de los bienes.

Artículo 154.- Son faltas de materia forestal:

a) Derribar o destruir árboles aislados sin el permiso respectivo;

b) No exhibir la documentación que ampare el transporte o la adquisición de productos forestales, a requerimiento de las autoridades del servicio forestal;

c) Carecer de libros de registros de productos o no exhibirlos, así como no rendir los informes en los términos que ordena esta ley y los reglamentos;

d) Formular documentación forestal equivocada;

e) Violar los reglamentos internos de los parques nacionales en los casos en que no esté señalado una sanción específica;

f) Amparar con documentación forestal el transporte de productos excediéndose de los volumentes anotados en la documentación;

g) Traspasar, arrendar o enajenar el permiso de aprovechamiento;

h) Ubicar en los montes enserrados de ganado;

i) El pastoreo de ganado fuera de la zona y época que señale la Autoridad Forestal;

j) En los casos prohibidos, emplear madera en durmiente, postes, pilotes, puntales, vigas, puentes, etc., sin someterlos previamente al proceso adecuado de impregnación para mejorar su durabilidad, ejecutar marqueo contraviniendo las disposiciones reglamentarias y específicas del caso;

k) Formular y presentar los profesionistas forestales a las autoridades respectivas estudios dasonómicos, sin haber intervenido en los correspondientes trabajos de campo, aunque con tales estudios no llegue a otorgarse la autorización de aprovechamiento;

l) Desmontar terrenos para fines de cultivos y abstenerse de acondicionarlos y ponerlos en producción.

m) En general, faltar al cumplimiento de obligaciones o incurrir en la violación de prohibiciones que establezca esta Ley.

Artículo 155.— Las faltas forestales a que se refiere el artículo anterior se castigarán:

a) La comprendida en la fracción a) con multa de RD$5.00 a RD$10.00 por cada árbol, según su tamaño y especie.

Tratándose de árboles ornamentales en las zonas urbanas se aplicará la sanción máxima.

b) Las comprendidas en las fracciones b) y d), según su gravedad con multa de RD$10.00 a RD$100.00;

c) Los comprendidos en las fracciones c), e), h), i). y j), con multa de RD$50.00 a RD$500.00;

d) Las comprendidas en las fracciones f), g) y k) con multa de RD$100.00 a RD$1,000.00;

e) Y las comprendidas en la fracción l) y m) con multa de RD$5.00 a RD$500.00 según su gravedad.

Artículo 156.– De las faltas cometidas y del pago a las multas que se impongan son solidariamente responsables los titulares de los aprovechamientos, con los propietarios, usufructuarios, poseedores y contratistas, los remitentes con los consignatarios y porteadores o transportadores; así como los vendedores con los compradores de productos forestales. La responsabilidad solidaria se exigirá a las personas mencionadas sólo cuando se compruebe que han intervenido en la intervención de los hechos que constituye la infracción.

Artículo 157.– Los instrumentos, equipos de toda índole, vehículos empleados en la comisión de faltas forestales, así como los productos forestales obtenidos, quedarán afectados al pago preferente de las multas. Cuando el infractor sea solvente, podrá nombrársele depositario de los bienes. Si los bienes a que se refiere el párrafo anterior se hallaren en poder de la autoridad forestal, se devolverán previo pago de la sanción impuesta por garantía a satisfacción de dicha autoridad.

Los bienes recogidos por la autoridad, serán rematados cuando los infractores no paguen las multas ni constituyan garantía a satisfacción, o cuando sus propietarios no los reclamen, en un término de 90 días. El producto del remate se ingresará al fondo prestado.

Artículo 158.– La acción única para perseguir las faltas forestales prescriben en un plazo de dos años, que comenzará a computarse a partir de la fecha en que se hubiesen cometido.

La prescripción se interrumpe por cualquier actuación de la autoridad encaminada a esclarecer los hechos, fijar responsabilidades o apuntar las sanciones correspondientes.

Artículo 159.– En todos los casos de reincidencia la sanción aplicable será la máxima que corresponda.

TITULO VIII

Disposiciones Generales

CAPITULO UNICO

Artículo 160.– Las infracciones a esta Ley y sus Reglamentos serán sometidas por ante el Juzgado de Paz correspondiente al lugar donde se haya cometido la infracción, el cual será competente para imponer las penas correspondientes, excepto en los casos previstos en los artículos 147, 148 y 149 de esta Ley, los cuales el sometimiento deberá hacerse al Procurador Fiscal para que este persiga los infractores por ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente.

Artículo 161.– La ejecución de la presente ley estará a cargo de la Secretaría de Estado de Agricultura, con la cooperación de los funcionarios de su dependencia, especialmente de la Dirección General Forestal, de los Agentes y empleados Forestales y de la Policía en general.

Artículo 162.– Mientras el Poder Ejecutivo no expida el reglamento general o los reglamentos particulares de la presente Ley, seguirán aplicándose los Reglamentos existentes de las leyes que se derogan por la presente, en tanto que los mismos no sean contrarios a las prescripciones de la presente Ley.

Artículo 163.– La autoridad forestal ajustará a los términos de la presente Ley, todas las disposiciones existentes constitutivas de parques nacionales, zonas protectoras, reservas y vedas forestales, así como los contratos, concesiones,

autorizaciones y permisos concedidos con anterioridad a la vigencia de esta Ley.

Artículo 164. La presente Ley deroga y sustituye la No. 1688, del 16 de abril de 1948 y sus modificaciones, así como cualquier otra Ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de abril, de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de abril, de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5857, que dispone el toque de queda en todo el territorio de la Provincia de San Cristóbal

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5857

CONSIDERANDO: Que por Ley No. 5819, de fecha 20 de febrero de 1962, ha sido declarado un estado de emergencia nacional, debido a las repetidas manifestaciones de grupos de personas que realizan actos de incitación de las masas populares y que se ha manifestado además por atentados contra las personas y la propiedad, poniendo en grave peligro el orden público;

CONSIDERANDO: Que la declaración de un estado de emergencia autoriza, de acuerdo con el inciso 8 del artículo 38 de la Constitución de la República, a suspender los derechos humanos, con excepción de la inviolabilidad de la vida;

CONSIDERANDO: Que el recrudecimiento del estado de agitación a que se ha hecho referencia, en la Provincia de San Cristóbal, hace necesario que se tomen nuevas medidas para contrarrestar la grave situación que ha surgido;

CONSIDERANDO: Que es procedente que por el momento se restrinja el derecho de libre tránsito, estableciendo un toque de queda en el territorio de la Provincia de San Cristóbal;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Como consecuencia del estado de emergencia legalmente declarado ya, se restringe la libertad de tránsito en todo el territorio de la Provincia de San Cristóbal, y se dispone el toque de queda y por tanto a partir de hoy, hasta disposición en contrario, después de las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, nadie podrá transitar por el territorio de la Provincia de San Cristóbal, sin un salvoconducto expedido por las autoridades civiles o militares competenes.

Artículo 2.- La prohibición de que trata el artículo anterior no será aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a los del Ministerio Público, Jueces de Instrucción y demás miembros de la Policía Judicial, a los del Cuerpo de Bomberos Civiles, de la Cruz Roja Dominicana y a los Médicos, cuya identificación se determinará por medio de un carnet especial expedido por las autoridades civiles o militares competentes, ni tampoco a aquellas personas que estuvieren provistas de un permiso otorgádole por dichas autoridades.

Artículo 3.- Las violaciones a la presente Ley serán sancionadas con multa de RD$10.00 a RD$100.00, o prisión correccional de 6 días a dos años o con ambas penas a la vez.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los dos días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119^{0} de la Independencia y 99^{0} de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea difundida por todas las radioemisoras de la localidad, y publicada oficialmente en el diario "El Caribe", para su conocimiento, cumplimiento y ejecución inmediata.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5858, que modifica el Artículo 1ro. de la Ley No. 5056, del 19 de diciembre de 1958 (Permisos para la Pesca)

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5858

ARTICULO UNICO.- Se modifica el Artículo 1ro. de la Ley No. 5056, de fecha 19 de diciembre de 1958, para que rija de la siguiente manera:

"Artículo 1.— Los permisos para la pesca previstos por la Ley de Pesca No. 1518, del 18 de junio de 1938, serán expedidos por la Secretaría de Estado de Agricultura, la cual deberá informar de la expedición de tales permisos, a los Comandantes de Puerto de la jurisdicción correspondiente, en los puertos habilitados, y a los Comandantes de Destacamentos o Jefes de Puestos del Ejército Nacional, en los puertos no habilitados, para fines del debido control y supervigilancia de las embarcaciones que se hagan a la mar con el propósito de dedicarse a la pesca".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de abril, del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de abril, de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5859, que deroga la Ley No. 5059, del 19 de diciembre de 1958, que crea un Consejo Permanente Superior, para conocer de todas las infracciones cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y restablece el Capítulo Séptimo del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, No. 3483.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5859

Artículo 1.– Queda derogada la Ley No. 5059, de fecha 19 de diciembre de 1958, que crea un Consejo Permanente Superior de Guerra, para conocer todas las infracciones, de cualquier naturaleza, cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Artículo 2.– Se restablece el Capítulo Séptimo (Artículos 79, 80, 81, 82, 83 y 84), del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas No. 3483, de fecha 13 de febrero de 1953, cuyo texto es el siguiente:

"CAPITULO SEPTIMO"

Del Recurso de Casación

Artículo 79.– Las sentencias pronunciadas en última instancia por los Consejos de Guerra, pueden ser recurridas en

casación por las causas y en las condiciones previstas en la Ley de la materia.

Tanto el condenado como el Ministerio Público, tendrán un plazo de cinco días a contar del día en que fué leida o notificada la sentencia, para declarar en la Secretaría del Tribunal que la dictó, que recurren en casación contra la misma. También puede recurrir en casación el defensor del acusado, cuando tenga mandato para ello.

En todos los casos en los cuales se interpusiere recurso de casación contra la sentencia de un Consejo de Guerra, el Secretario de éste deberá remitir todo el expediente a la Suprema Corte de Justicia, dentro de los diez días del pronunciamiento de la sentencia.

Artículo 80.— La Suprema Corte de Justicia conocerá de estos recursos y deberá pronunciar su fallo en el término más corto posible. Todo recurso de casación interpuesto contra sentencia de un Consejo de Guerra se considerará de carácter urgente.

Artículo 81.— Si el recurso de casación es rechazado, el Procurador General de la República, lo comunicará al Fiscal del Tribunal Militar que dictó la sentencia y éste a su vez a la autoridad convocadora.

Artículo 82.— Cuando la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, anule la Sentencia por incompetencia, pronunciará el envío del asunto ante la jurisdicción competente con designación expresa de ésta. Si la anulación es pronunciada por cualquier otro motivo, enviará el asunto al mismo Consejo de Guerra que conoció del caso, a menos que la anulación, haya sido pronunciada por prescripción, por amnistía o porque el echo no constituya crimen ni delito.

Artículo 83.— El Procurador General de la República enviará sin demora el expediente, así como una copia de la sentencia al Fiscal del Tribunal de reenvío.

Artículo 84.— Si la anulación de la sentencia lo ha sido por inobservancia de formas, bien sea en la instrucción o en los debates, el procedimiento se recomenzará y la autoridad

convocadora del Tribunal Militar apoderado del caso, dará de oficio una nueva orden de convocatoria y se comenzará la instrucción de conformidad con las reglas ordinarias a partir del acto anulado",

DADA por el Consejo de Estado. en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la Repúbiica
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en el diario "El Caribe".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5860, que deroga el artículo 1ro. de la Ley No.5455 del 23 de diciembre de 1960, que agregó el párrafo 38-B al Art. 1ro. de la Ley de Impuesto Sobre Documentos.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5860

ARTICULO UNICO.– Queda derogado el Artículo 1ro. de la Ley No. 5455, de fecha 23 de diciembre de 1960, que agregó el Párrafo 38-b) al artículo 1ro. de la Ley de Impuesto sobre Documentos No. 2254, de fecha 14 de febrero de 1950.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO LA PRESENTE Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de abril, de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5861, que modifica el Art. 1 de la Ley No.2335, del 30 de marzo de 1950, que instituyó el premio Trujillo de Alfabetización, para que sea denominado en lo adelante. "Premio de Alfabetización".

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5861

ARTICULO UNICO.– Se modifica el artículo 1 de la Ley No. 2335, de fecha 30 de marzo de 1950, mediante la cual se

instituyó un premio que fué denominado "Premio Trujillo de Alfabetización", para que en lo adelante dicho galardón sea denominado simplemente "Premio de Alfabetización".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de abril, de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5862, que modifica nuevamente el Artículo 18 de la Ley No. 5035, del 21 de noviembre de 1958 (Plan de Retiro, Pensiones, etc., de empleados de Instituciones Autónomas del Estado)

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5862

UNICO.- Se modifica el Artículo 18 de la Ley No. 5035, de fecha 21 de noviembre de 1958, reformado por las Leyes Nos. 5061, de fecha 19 de diciembre de 1958; 5302, del 12 de febrero de 1960; y 5338, de fecha 22 de abril del mismo año, para que rija del siguiente modo:

"Artículo 18.- La presente ley se extiende e incluye en su aplicación a los funcionarios y empleados de las instituciones autónomas del Estado, con exclusión de las que tengan establecidos planes de retiro, pensiones y pago en caso de muerte, y a los de los Ayuntamientos. En los casos previstos en este artículo, los funcionarios pagadores o los Tesoreros Municipales correspondientes, tendrán las atribuciones que confieren al Tesorero Nacional las disposiciones de esta Ley.

Párrafo.- También están incluidos en la aplicación de la presente Ley, los empleados y obreros dependientes de la Dirección General de los Servicios Tecnológicos de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de abril de mil

novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la GAceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5863, que concede sendas pensiones del Estado a las señoras Carmen Rosalía Delgado Vda. Sanz y Lucila Smith Vda. Rivera.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5863

VISTO el Artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se conceden sendas pensiones del Estado de ciento cincuenta pesos oro (RD$150.00) mensuales cada una, a las señoras Carmen Rosalía Delgado Vda. Sanz y Lucila Smith Vda. Rivera.

Artículo 2.– Dichas pensiones serán pagadas con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5864, que reforma el Artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco Central de la República Dominicana. (Integración de la Junta Monetaria)

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5864

Artículo 1.– Se reforma el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco Central de la República Dominicana No. 1529, del 9 de octubre de 1947, modificado últimamente por la Ley No.

5561, de fecha 26 de junio de 1961, para que rija del siguiente modo:

"Artículo 10.– El organismo superior del Banco Central es la Junta Monetaria, a la cual corresponde en virtud del artículo 97 Párrafo tercero de la Constitución de la República, determinar la política monetaria, crediticia y cambiaria de la Nación, cuya ejecución está a cargo del Banco.

La Junta estará integrada por los siguientes miembros:

a) El Gobernador del Banco Central, quien la presidirá;

b) El Secretario de Estado de Finanzas, miembro ex–oficio;

c) El Secretario de Estado de Industria y Comercio, miembro ex–oficio;

d) Una persona de conocimiento y experiencia en materia de banca comercial, con un suplente;

e) Una persona de conocimiento y experiencia en materia comercial e industrial, con un suplente;

f) Una persona de conocimiento y experiencia en materia agrícola o ganadera, con un suplente;

g) Una persona de conocimiento y experiencia en otras actividades o cuestiones económicas, con un suplente.

Párrafo I.– Todos los miembros y suplentes deberán ser de nacionalidad dominicana y serán designados por el Poder Ejecutivo.

Párrafo II.– El primer nombramiento de los miembros y suplentes clasificados en las letras "d" y "e" del presente artículo será por un período de dos años, mientras que el primer nombramiento de los miembros y suplentes clasificados en las letras "f" y "g" del mismo, será por un período tres años. Después de cumplido ese primer período, tales miembros y suplentes durarán en sus funciones tres años".

Artículo 2.– El Vicegobernador del Banco Central de la República Dominicana, actuará como Presidente de la Junta Monetaria en caso de ausencia o impedimento temporal del

Gobernador. Cuando no estuviere presidiendo la Junta, asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.

Artículo 3.– El Secretario de Estado de Finanzas y el Secretario de Estado de Industria y Comercio podrán delegar sus representaciones en un Subsecretario de la misma cartera, cuando ello sea necesario por circunstancia especiales.

Artículo 4.– En consecuencia, la presente Ley deroga la Ley No. 5561, de fecha 26 de junio de 1961.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de abril del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de abril del año mil novecientos sesenta y dos. años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

NOTA: La presente Ley fue publicada oficialmente en los diario "El Caribe", "La Nación", de Santo Domingo, del 13 de abril de 1962.

Ley No. 5865 que dispone que el ingreso de ciertos impuestos pasen al Fondo General de Presupuesto en vigor

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5865

Artículo 1.– Con efectividad el 1ro. de abril de 1962, el producto de los siguientes impuestos ingresará al FONDO GENERAL del Presupuesto en vigor:

Fuentes de Ingresos	Título del Impuesto
71543	Por beneficio de la Lotería Nacional (10%)
74145	Por Impuesto sobre Beneficios (20%)

74658	Por Impuesto sobre Beneficios (5ta. Categoría (20%)
75100	Por Arancel de Aduanas (10%)
75245	Por Impuesto Unificado Importación Ley No. 2397 (15%)
75260	Por Impuesto Unificado, Ley No. 3580 (25%)
75268	Por Impuesto sobre Venta estampillas de cigarrillos (100%)
76180	Por Impuesto sobre Producción de Cervezas (50%)
76720	Por Impuesto para el Consumo Interno (50%)
76860	Por Impuesto sobre Venta de Cigarrillos al por Mayor, Ley No. 5124 (50%)
76950	Por Impuesto Especial sobre Bebidas Alcoholicas (50%)

Artículo 2.– El Tesorero Nacional, los Colectores de Rentas Internas y de Aduanas, y el Contralor y Auditor General de la República, harán los traspasos, ajustes contables y presupuestarios para dar cumplimiento a esta Ley.

Artículo 3.– Esta Ley deroga toda Ley o parte de Ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de abril del año mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5866, que denomina al actual municipio de "Lucas Evangelista de la Provincia de Monte Cristy, "Villa Vásquez".

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5866

VISTO: El Oficio No. 15, de fecha 25 de enero de 1962, suscrito por el Presidente del Ayuntamiento del Municipio de Lucas Evangelista de Peña, mediante el cual informa que ese organismo, interpretando el sentimiento del pueblo que representa, resolvió a unanimidad solicitar del Consejo de Estado, como lo hace por su indicada comunicación, el restablecimiento del nombre de "Villa Vásquez" que anteriormente ostentó dicho Municipio:

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– El actual Municipio de "Lucas Evangelista de Peña", Provincia de Monte Cristi, se denominará en lo adelante "Villa Vasquez".

Artículo 2.– Se modifica, en cuanto sea necesario, el Párraf V del artículo 13 de la Ley No. 5220, sobre división territorial de la República Dominicana, de fecha 21 de septiembre de 1959.

Artículo 3.– Que de derogado el artículo 2 de la Ley No. 5461, de fecha 24 de diciembre de 1960.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY ,

Ley No. 5867, que deroga la Ley No. 4786, que prohibe a los Bancos del Estado y a los particulares a negociar con miembros de las Fuerzas Armadas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5867

ARTICULO UNICO.– Queda derogada la Ley No. 4786, que prohibe a los bancos del Estado y a los participantes negociar

operaciones crediticias con miembros de las Fuerzas Armadas, de fecha 18 de octubre de 1957.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5868, que modifica los artículos 10 y 13 de la Ley No. 3483, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5868

ARTICULO UNICO.– Se modifican los artículos 10 y 13 de la Ley No. 3483, de fecha 13 de febrero de 1953, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, para que rijan de la manera siguiente:

"Artículo 10.– Los Comandantes de Regimientos, los Comandantes de Escuadrillas Aéreas y los Comandantes de Unidades Navales, tendrán facultad para designar un Consejo de Guerra de Primer Grado.

Párrafo I.– En Santo Domingo solamente funcionarán dos Consejos de Guerra de Primer Grado del Ejército Nacional, cuyos asientos serán dispuestos por el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.

Párrafo II.– Los Comandantes de Departamentos de la Policía Nacional, tendrán facultad para designar los Consejos de Guerra de Primer Grado de la Policía Nacional".

"Artículo 13.– Los Comandantes de Brigadas, los Comandantes de Bases Navales y los Comandantes de Escuadrones Aéreos, tendrán facultad para designar los Consejos de Guerra de Segundo Grado.

Párrafo.– El Jefe de la Policía Nacional designará los Consejos de Guerra de Segundo Grado de la Policía Nacional".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5869, que castiga con prisión correccional y multa, a las personas que sin permiso del dueño se introduzcan en propiedades inmobiliarias urbanas o rurales

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5869

Artículo 1.– Toda persona que se introduzca en una propiedad inmobiliar urbana o rural, sin permiso del dueño, arrendatario o usufructuario, será castigada con la pena de tres meses a dos años de prisión correccional y multa de diez a quinientos pesos.

Artículo 2.– Las disposiciones contenidas en la escala 6a. del artículo 463 del Código Penal, podrán ser aplicadas en este caso.

Artículo 3.– La presente ley deroga y sustituye la Número 43, de fecha 15 de Diciembre de 1930.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119º, de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el Diario "El Caribe".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santó Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticuatro días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

NOTA: La presente Ley fue publicada oficialmente en los diarios "El Caribe" y "La Nación", de Santo Domingo.

Ley No. 5870 que agrega los Artículo 3 y 4 a la Ley No. 5797 del 12 de enero de 1962, (Daños ocasionados por las turbas a la propiedad ajena)

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5870

CONSIDERANDO: que se ha venido observando que muy frecuentemente participan menores de edad en los hechos previstos y penados por la Ley No. 5797, del 12 de enero de 1962, con el consentimiento de los encargados de su guarda o a causa de la negligencia de los mismos en el cumplimiento de sus deberes por lo cual se hace necesario incriminar su falta en estos casos, así como también cuando los menores actúen individualmente;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.- Se agregan los artículos 3 y 4 a la Ley No. 5797, del 12 de enero de 1962, a fin de que la misma rija de la siguiente manera:

Artículo 1.- Se castigará con la pena de 3 meses a 1 años de prisión correccional y con multa de RD$25.00 a RD$200.00, sin perjuicio de las penas que puedan aplicarse a los autores de hechos previstos y sancionados por el Código Penal, la trama que, ejecutada por dos o más personas, se materialice en forma de ataque por vías de hecho, desde el exterior a edificios, casas, otras construcciones o sus dependencias, urbanos o rurales, que pertenezcan a personas físicas o morales, públicas o privadas; o a la comisión de estos mismos hechos en el interior de dichos bienes.

Artículo 2.- Cuando el ataque produzca pérdidas o destrucción de bienes o se realice por vías de hecho contra las personas, se aplicará a los culpables el máximun de la pena que señala el artículo primero.

Artículo 3.- Los padres, tutores o encargados de menores de 18 años de edad que consientan en que estos últimos cometan los hechos previstos en los artículos 1 y 2 de esta Ley, o que por su negligencia en el cumplimiento de los deberes derivados de la patria potestad, tutela o guarda den oportunidad a que se cometan los mismos, serán castigados con las penas de seis días a

un mes de prisión correccional o multa de RD$6.00 a RD$30.00, o ambas penas a la vez. En igual pena incurrirán las personas indicadas, cuando en las mismas circunstancias los menores constan individualmente los hechos enunciados.

Artículo 4.— La reincidencia se castigará con el máximun de las penas señaladas en cada caso.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en el diario El Caribe.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

NOTA: La presente Ley fue publicada oficialmente en los diarios "La Nación", de Santo Domingo, del día 25 de abril de 1962.

Ley No. 5871 que libera del pago del impuesto sobre Documentos establecidos por los apartados 3 y 4 del Artículo 1 de la Ley No. 2254 del 14 de febrero de 1950

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5871

Artículo 1.– Quedan exentas del pago del impuesto sobre Documentos establecido por los apartados 3 y 4 del artículo 1ro. de la Ley No. 2254, del 14 de febrero de 1950, tanto las solicitudes como las autorizaciones hechas de conformidad con el artículo 8 de la Ley No. 1406, del 30 de abril de 1947, sobre guarda de menores de catorce años, para que éstos puedan viajar al extranjero cuando no lo hagan en compañía de la persona que esté investida legalmente de su guarda.

Artículo 2.– En consecuencia, queda modificado en cuanto sea necesario, el artículo 3 de la citada Ley No. 2254.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.

a los 24 días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118° (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5872, que modifica el párrafo I del Artículo 4 de la Ley No. 5220, sobre División Territorial de la República Dominicana

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5872

Artículo 1.– Se modifica el Párrafo I del artículo 4 de la Ley No. 5220, sobre división territorial de la República Dominicana, de fecha 21 de septiembre de 1959, para que el Distrito Municipal de Puerto Viejo pase a ser una Sección del Municipio de Azua.

Artículo 2.– En consecuencia, el referido Párrafo regirá en lo adelante con el siguiente texto:

1.– Altagracia, La	(fusión de La Altagracia, Barro Arriba, Barro en Medio y La Vereda)
2.– Amiama Gómez	(fusión de Amiama Gómez, Guanábana, Orégano Chiquito, Sajanoa, Tábara Abajo, Tábara Arriba y Los Toros).
3.– Clavellina	(fusión de Clavellina y los Tramojos, Guayábara y Monte Río)
4.– Estebanía	(fusión de Estebanía, Cañada Cimarrona y Las Charcas)
5.– Hatillo	(fusión de Hatillo, Monte la Guardia y Palmar de Ocoa)
6.– Jovillos, Los	(fusión de Ceiba y Jovillos, Las Barias, La Estancia y Jura)
7.– Lomas, Las	(fusión de Las Lomas, Higüerito, Río Vía y Las Yayitas).
8.– Memizo, El	(fusión de El Memiso, Arroyo Colorado, La China y los Quemados)

9.– Peralta (fusión de Peralta, Carrizal y Puerto y Majagual).

10.– Rancho del Pino

11.– Yayas de Viajama (fusión de Yayas de Viajama, Cortés y Orégano Grande).

12.– Puerto Viejo

13.– Barreras (fusión de Barreras, Galindo y Palmar de Buena Vista).

14.– Pueblo Viejo (fusión de Pueblo Viejo, Guayacanal, Palmarejo, Terreras y La Victoria)

15.– Rosario, El (fusión de El Rosario, Las Auyamas y La Ciénaga)

Artículo 2.– Las Secretarías de Estado de Justicia y de Interior y Policía quedan encargadas de la ejecución de la presente Ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de abril del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 24 días del mes de abril del año mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No. 5873, del Consejo de Estado, que aprueba el Contrato suscrito entre el Estado Dominicano y la Dominican American, C. por A.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5873

VISTO el Contrato suscrito en fecha dieciseis del mes de marzo del año mil novecientos sesenta y dos, entre el Estado Dominicano, representado por el Dr. Ramón Tapia, Secretario de Estado de Industria y Comercio, y la Dominican American, C. por A., representada por su presidente el señor Milton Held;

RESUELVE:

UNICO.— Aprobar el Contrato suscrito en fecha dieciseis del mes de marzo de mil novecientos sesenta y dos, entre el Estado

Dominicano, representado por el Dr. Ramón Tapia, Secretario de Estado de Industria y Comercio, y la Dominican American, C. por A., representada por su Presidente, el señor Milton Held, que copiado a la letra dice así:

"ENTRE:

El Estado Dominicano, representado por el Secretario de Estado de Industria y Comercio, Dr. Ramón Tapia, identificado por la Cédula Personal de Identidad No. 23550, Serie 47, con sello renovado hábil, quien actúa en virtud de PODER otorgádole en esta misma fecha por el Honorable Señor Presidente de la República y del Consejo de Estado, y quien en lo adelante se denominará "EL ESTADO", de una parte; y

La DOMINICAN AMERICAN, C. POR A., sociedad constituida y organizada de acuerdo con las leyes dominicanas, representada por el Presidente de su Consejo de Administración, señor Milton Held, Norteamericano, mayor de edad, casado, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, quien en lo adelante se denominará "LA COMPAÑIA", de la otra parte;

POR CUANTO: se ha constituido la Dominicana American, C. por A., la que tiene por objeto principal comprar todo género de frutas, hortalizas y frutos del país e incrementar la producción de los mismos, proporcionando a los cosecheros toda clase de ayuda y cooperación económica y técnica, en orden a obtener un aumento en las cosechas y a mejorar la calidad de los frutos, primordialmente el guineo;

POR CUANTO: En lo que se refiere al cultivo del guineo, dicha compañía se propone facilitar a los productores no solo ayuda económica y técnica para obtener un aumento de la producción y el mejoramiento de la calidad de la fruta, sino también el cultivo de nuevas variedades resistentes a las enfermedades y a los vientos que afectan a las que actualmente están siendo cultivadas;

POR CUANTO: Es alarmante la propagación del llamado "Mal de Panamá" en la variedad conocida como "Gros Michel", única que se cultiva actualmente en el país, por lo que es urgente, para evitar que desaparezca en nuestro medio el negocio del guineo, que se cultiven otras variedades que no

estén supuestas a sufrir esa enfermedad, así como otras que causan graves perjuicios económicos a los cosecheros;

POR CUANTO: Por otra parte, dados los crecidos gastos inherentes al cultivo de dicha fruta, se hace indispensable que la misma sea pagada a mejores precios, para que de ese modo el producto tenga el incentivo de aumentar la producción y la calidad de la fruta;

POR CUANTO: Para reducir el elevado costo de producción del guieno, es necesario que el cosechero sea beneficiado con la exoneración del equipo, abonos, fungicidas, insecticidas, etc., que normalmente se utilizan para el cultivo de la fruta, de modo que ésta pueda competir en precios y en calidad en el mercado mundial, y asimismo, para que el cosechero obtenga mayores beneficios a base del pago de mejores precios por su fruta;

POR CUANTO: La Dominican American, C. por A., tendrá la obligación de comprar la fruta a sus colonos y de asegurar el mercado para la venta por su cuenta y riesgo, así como el transporte de la misma, para lo cual dispondrá de los barcos de su afiliada "Ecuadorian Import Fruit Company", por lo que no existirá ningún peligro para el productor de que la fruta no sea comprada al precio convenido y en el momento prefijado;

POR CUANTO: Considerando además, que el negocio de guineo y de otras frutas difiere sustancialmente de otras operaciones comerciales sobre productos agrícolas, no solo por la competencia cerrada que existe en el mercado mundial, sino también debido a que la fruta es muy delicada en su cultivo, manipulación y transporte, y, además, tiene necesariamente que ser servida en las condiciones más óptimas y en el momento en que esté de provecho, para evitar que se pierda por madurez u otras causas, razón por la cual debe ser embarcada sin la menor dilación en el momento oportuno;

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte de este contrato, las partes han convenido lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO: "LA COMPAÑIA" se obliga a comprar los guineos a sus colonos durante todo el año y a efectuar embarques semanales, salvo los casos de fuerza mayor,

y siempre que la fruta reuna las condiciones exigidas por el mercado americano;

ARTICULO SEGUNDO: En los cargos que entrañen funciones directivas, técnicas o de confianza, "LA COMPAÑIA" tendrá el derecho de emplear los extranjeros que ella seleccione, siempre y cuando sea dentro de lo establecido por el Código de Trabajo. Al efectó, "EL ESTADO" se compromete a otorgar a esos extranjeros así como a sus familiares inmediatos, los permisos correspondientes de entrada al país y de residencia en él, siempre que dichos extranjeros se ajusten a las leyes dominicanas;

ARTICULO TERCERO: "LA COMPAÑIA" queda autorizada en virtud de este contrato a construir, mantener y explotar por su cuenta y en su provecho, cuando ella lo juzgue conveniente, en cualquier lugar de la costa del país no ocupado anteriormente, muelles y sus accesorios para acomodar no menos 2 (DOS) barcos. Dichos muelles y sus dependencias no podrán ocupar sobre la ribera donde se construyan más de 3,000 (TRES MIL) pies lineales en sentido longitudinal, salvo cuando sea expresamente autorizada por "EL ESTADO". Estos muelles, sus dependencias y accesorios estarán destinados al uso particular de "LA COMPAÑIA"; sin embargo, "EL ESTADO" podrá utilizarlos cuantas veces lo juzgue necesario o conveniente, siempre que no entorpezca el servicio a que lo destine "LA COMPAÑIA", la que tendrá derecho a construir rompe-olas, boyas, faros, tanques para almacenar materias inflamables, almacenes de depósito, oficinas, obras sanitarias y los demás edificios necesarios para el mejor desenvolvimiento de sus actividades. También podrá "LA COMPAÑIA" realizar sondeos y dragados en los alrededores de dichos muelles, así como rellenos y demás trabajos útiles para el mejor funcionamiento de los mismos. Los planos y las especificaciones para la ejecución de estas obras deberán ajustarse a las disposiciones legales vigentes y ser aprobados por las autoridades competenes. Las observaciones y correcciones deberán hacerse en el plazo de 60 (SESENTA) días a partir de la fecha en que sean sometidos los planos correspondientes a la aprobación de "EL ESTADO".

PARRAFO PRIMERO: Antes del inicio de las operaciones de embarque o desembarque, "EL ESTADO" se obliga a designar los funcionarios necesarios, de suerte que los barcos

consignados a "LA COMPAÑIA" puedan entrar y salir, cargar y descargar, de acuerdo con las reglamentaciones que rigen los demás puertos habilitados del país.

PARRAFO SEGUNDO: Los muelles y todas sus dependencias estarán abiertos al libre acceso de las autoridades dominicanas.

PARRAFO TERCERO: "EL ESTADO" tiene derecho a construir muelles para el servicio público en los lugares donde construya sus muelles "LA COMPAÑIA", o de hacer concesiones a otras personas para que construyan muelles similares, siempre que éstos no afecten legal y materialmente los derechos que tenga adquiridos "LA COMPAÑIA".

ARTICULO CUARTO: Previa autorización expresa de "EL ESTADO", "LA COMPAÑIA" podrá abrir al servicio público los muelles que construya o aquella parte de los mismos que ella decida dedicar a tal servicio; pero en el entendido de que "LA COMPAÑIA" tendrá siempre el uso preferente de los mismos y de que podrá en cualquier momento cerrarlos al uso del público, comunicando a "EL ESTADO" su decisión en tal sentido con 3 (TRES) meses por lo menos de anticipación.

PARRAFO: En caso de que "LA COMPAÑIA" decida abrir sus muelles al servicio público, las tarifas correspondientes serán fijadas por mutuo acuerdo entre ésta y "EL ESTADO", sobre la base mínima que éste fije.

ARTICULO QUINTO: Dada la circunstancia de que el guineo es una fruta muy delicada y por consiguiente debe ser aprovechada en el momento preciso para evitar que se madure y se haga inservible, "LA COMPAÑIA" tendrá derecho de preferencia para atracar sus barcos a uno de los lados de cualesquiera de los muelles propiedad de "EL ESTADO" y asimismo podrá utilizar cuantas veces sea necesario, siempre que no interrumpa las operaciones ordinarias de los muelles, los depósitos y almacenes situados en éstos. También l tendrá libre acceso a los muelles en cualquier momento, así como a las carreteras, calles o caminos que conduzcan a los mismos;

ARTICULO SEXTO: "LA COMPAÑIA" queda facultada en virtud de este contrato a introducir reformas y modificaciones en los muelles propiedad de "EL ESTADO", con el objeto de

que los camiones y demás vehículos dedicados al transporte de la fruta puedan acercarse lo más posible a los barcos. Sin embargo, tales modificaciones no podrán ser hechas cuando las mismas afecten sustancialmente el servicio que normalmente deben prestar al público dichos muelles.

ARTICULO SEPTIMO: "LA COMPAÑIA" tendrá derecho a establecer, mantener y hacer funcionar en el territorio de la República, sistemas telegráficos y telefónicos para su uso particular, y a utilizar gratuitamente para fijar y apoyar los postes, alambres y redes, los terrenos del dominio público de "EL ESTADO" no ocupados anteriormente;

ARTICULO OCTAVO: "LA COMPAÑIA" adquiere el derecho, además, de instalar y mantener en el territorio de la República, para el uso exclusivo de sus actividades, estaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas, destinadas a comunicaciones locales e internacionales, marítimas y aéreas. "EL ESTADO" indicará a la compañía a los fines indicados, las ondas y frecuencias correspondientes.

PARRAFO: Queda expresamente convenido que "LA COMPAÑIA" no podrá abrir al uso del público ni de los empleados de ella dichos sistemas de comunicación sin permiso expreso de "EL ESTADO", el cual establecerá en todos los casos las condiciones que deberán imperar. Para instalar y operar las instalaciones y los servicios, "LA COMPAÑIA" deberá acogerse a los requisitos establecidos por las leyes y reglamentos que rigen la materia.

ARTICULO NOVENO: "LA COMPAÑIA" queda autorizada en virtud de este contrato a importar, cuando lo juzgue conveniente, aviones y helicópteros para fines de fumigación de las plantaciones y para controlar las enfermedades de las mismas, propiedad de sus colonos.

ARTICULO DECIMO: Independientemente de las anteriores obligaciones y estipulaciones, las partes contratantes convienen:

1ro.– En que "LA COMPAÑIA" estará exenta, de conformidad con lo permitido por el Artículo 94 de la Constitución de la República, y por el término de este contrato, del pago de todo impuesto, derecho, tasa en dinero o en naturaleza, y de toda obligación impositiva de carácter

fiscal, nacional o municipal, actualmente existentes o que se establecieren en el futuro y que recaigan sobre cualesquiera de los bienes, obras, negocios, actividades, actos o cosas que formen parte o se produzcan en los negocios de "LA COMPAÑIA", siempre que se refieran a la compra, transporte o exportación de guineos u otros frutos u hortalizas, con excepción de los que se indican a continuación, cuando ellos tengan un carácter general y no discriminatorios respecto de "LA COMPAÑIA":

a) Los derechos consulares que gravan la documentación de los barcos que transporten las mercancías que "LA COMPAÑIA" importe al territorio de la República, o de las que se introduzcan al mismo, consignados a ella, de conformidad con la Ley No. 634, sobre Derechos Consulares, de fecha 7 de febrero de 1934, y sus modificaciones;

b) Los derechos de registro de actos judiciales y extrajudiciales que sean de la naturaleza de los ahora regidos por la Ley No. 2334, de Registro de Actos Judiciales y Extrajudiciales, de fecha 20 de mayo de 1885, y sus modificaciones, y los derechos de inscripción, registro y transferencia previstos por la Ley de Registro de Tierras vigente;

c) Los derechos sobre transcripción de actos traslativos de inmuebles y los de inscripción de hipotecas, que sean de la naturaleza de los ahora regidos por la Ley de Registro y Conservación de Hipotecas, de fecha 21 de junio de 1890, y sus modificaciones;

d) Los derechos de matrícula y placa de vehículos y de licencia para los conductores de los mismos, de conformidad con la Ley No. 4809, sobre Tránsito de Vehículos, de fecha 28 de noviembre de 1957, y sus modificaciones;

e) Los derechos por concepto de patentes de navegación sobre los barcos consginados a "LA COMPAÑIA", ahora regidos por la Ley sobre Policía de Puertos y Costas, No. 3003, de fecha 3 de julio de 1951, y sus modificaciones;

f) Los derechos que hayan de pagarse a los prácticos, intérpretes, vigías y de sanidad, sobre los buques consignados a "LA COMPAÑIA", de acuerdo con la mencionada ley sobre Policía de Puertos y Costas, y sus modificaciones;

g) Los derechos por concepto de patentes que amparen los negocios de "LA COMPAÑIA", de conformidad con la Ley de Patentes No. 4456, de fecha 22 de mayo de 1956, y sus modificaciones, en el entendido de que los derechos por concepto de patentes de importación y exportación quedan expresamente excluídos;

h) Los derechos por concepto de registro de marcas de fábrica y patentes de invención, consagrados en las leyes Nos. 1450, sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales, de fecha 30 de diciembre de 1937, y 4994, sobre Patentes de Invención de fecha 26 de abril de 1911, y sus modificaciones; y

i) Las tasas que se cobren mediante sellos, estampillas, o de cualquier otra manera, para el franqueo de correspondencia en el servicio público de correos, o por los mensajes radiográficos, telegráficos o telefónicos en el servicio público de comunicaciones, o por el acarreo de personas o mercancías en los ferrocarriles, barcos, aviones y vehículos de "EL ESTADO", cuando dicho servicio no sea obligatorio para éste.

2.–En que por tanto, se conviene expresamente en que "LA COMPAÑIA" estará exenta del pago de todo impuesto relativo a la compra, transportación y exportación de guineos y otros frutos y hortalizas según lo especifica a continuación:

a) De todo impuesto aduanero, de Rentas Internas, de patentes y de otra cualquier denominación, que tenga su causa en la importación por "LA COMPAÑIA", o por otra persona o corporación para ella, de maquinarias, aviones, helicópteros, artefactos, utensilios, combustibles, ertilizantes, fungicidas, productos o cosas destinadas a ser tilizadas en la empresa o negocio de "LA COMPAÑIA" o en las plantaciones de sus colonos. Las mercancías o cosas así importadas, cuando dejen de ser utilizadas por la "COM-

PAÑIA" o por sus colonos, podrán ser enajenadas por ésta, pagando los impuestos correspondientes;

b) De todo impuesto aduanero, de Rentas Internas, de patentes o de cualquier otra denominación, que tenga su causa en la exportación por "LA COMPAÑIA" o por otra persona o corporación para ella, de guineos u otros frutos, incluyendo hortalizas, o de maquinarias, aviones, helicópteros, artefactos, utensilios, combustibles, fertilizantes, que hayan sido importados para "LA COMPAÑIA" o sus colonos libres de impuesto, salvo solo la obligación que ella asume en este contrato de pagarle a "EL ESTADO" RD$0.02 (DOS) centavos por cada racimo de guineos, o por cada 45 (CUARENTA Y CINCO) kilos netos de ese fruto o de cualquier otro, incluyendo hortalizas, que "LA COMPAÑIA" exporte del territorio de la República;

c) De todo impuesto, derecho, arbitrio, tasa o contribución obligatoria de cualquier clase que tenga su causa en la utilización por "LA COMPAÑIA" o por otras personas o corporación para ella, de muelles, depósitos, lanchas y vías públicas o zonas fluviales o marítimas;

d) De todo impuesto, derecho, arbitrio, tasa o contribución obligatoria que tenga su causa en la utilización de puertos o aguas territoriales por los buques de "LA COMPAÑIA" o a ella consignados;

e) De todo impuesto, derecho, arbitrio, tasa o cualquiera otra contribución obligatoria que tenga su causa en las compras o ventas que haga "LA COMPAÑIA" para los fines de su negocio;

f) De todo impuesto, derecho, arbitrio, tasa o cualquiera otra contribución obligatoria sobre usos o consumo;

g) De todo impuesto sobre capitales, entradas y producción;

h) De todo impuesto de cualquier clase sobre la propiedad; y

i) De todo impuesto de importación de cajas de cartón y de cartón o de cualquier otro material para hacer las cajas de

empacar los frutos y hortalizas, así como de las maquinarias necesarias para efectuar esta labor.

3ro.– En que, como compensación por las exenciones y liberaciones consentidas por "EL ESTADO" en favor de "LA COMPAÑIA", ésta se obliga:

a) A pagar a "EL ESTADO" RD$0.02 (DOS) centavos por cada racimo de guineo o de plátano de cualquier tamaño que exporte del territorio de la República, o que venga a este territorio para ser exportado, o por cada 45 (CUARENTA Y CINCO) kilos netos de esa fruta, y de cualquier otro fruto u hortalizas que exporte desde el territorio nacional; y

o) 'LA COMPAÑIA" estará obligada igualmente a pagar a "EL ESTADO" la contribución que le corresponda de conformidad con la vigente ley de Impuesto sobre Beneficios, bajo el entendido de que cualquier modificación que sea introducida en el futuro a dicha ley que tienda a aumentar las tarifas actualmente vigentes de dicho impuesto en nada afectará a "LA COMPAÑIA".

ARTICULO UNDECIMO: En los casos en que para el ejercicio de algunos de los derechos que "LA COMPAÑIA" adquiere en virtud de este contrato, esta hubiere menester de actos especiales de concesión, franquicia, permiso, exoneración o autorización, cuyo otorgamiento estuviere a cargo de alguna autoridad pública dominicana, "EL ESTADO" se obliga a hacer que dichos actos sean otorgados a "LA COMPAÑIA" por la autoridad pública competente, tan pronto como fuere razonablemente posible;

ARTICULO DUODECIMO: Queda expresamente convenido que los dineros que "LA COMPAÑIA" traiga al país no podrán estar sujetos a ningún cambio especial, sino que su valor será regido por la cotización del peso oro dominicano, de conformidad con las fluctuaciones del mercado mundial.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Este contrato y los derechos y obligaciones que él implican pueden ser libremente transferidos por "LA COMPAÑIA" a una cualquiera de sus compañías asociadas o afiliadas, con previa autorización escrita de "EL ESTADO". La misma autorización será necesaria

cuando el traspaso sea hecho en favor de cualqesquiera otras personas o corporaciones.

ARTICULO DECIMO CUARTO: Este contrato tendrá una duración de 10 (DIEZ) años contados a partir de la promulgación por el Presidente de la República y del Consejo de Estado de la resolución del Consejo de Estado que lo apruebe, y durante este período los derechos y excenciones en él otorgados y los que "LA COMPAÑIA" tenga adquiridos de conformidad con la Constitución y las leyes no serán modificados o cambiados por "EL ESTADO", en forma alguna, sin previo acuerdo con "LA COMPAÑIA".

PARRAFO: Si 1 (UN) año antes del vencimiento de este contrato una de las partes no notifica a la otra, por escrito, su decisión de no renovarlo, se entenderá que el mismo se prorroga por un tiempo igual de 10 (DIEZ) años.

HECHO Y FIRMADO en 5 (CINCO) originales, 2(DOS) para cada una de las partes y otro para ser sometido a la aprobación del Consejo de Estado, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los dieciseis días del mes de marzo del año 1962 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS).

POR EL ESTADO DOMINICANO:
DR. RAMON TAPIA.

POR DOMINICAN AMERICAN, C. POR A. :MILTON HELD.

El abajo firmado, Jack Friedlander, de nacionalidad americana, mayor de edad, casado, comerciante, domiciliado y residente en New York, Estados Unidos de América, quien actúa en nombre y representación de "The Ecuatorian Import Fruit Company", compañía constituida y organizada de acuerdo a las leyes del Estado de New York, Estados Unidos de América, en sus calidades de Vicepresidente y de Gerente General de esta compañía, declara de manera formal y expresa que en el presente contrato interviene la mencionada compañía The Ecuatorian Import Fruit Company para garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que en el mismo contrae la Dominican American, C. por A., bajo el entendido de que cualquier responsabilidad en que ésta incurra por la inejecución de este contrato, obligará solidariamente a ambas compañías a las reparaciones que sean de lugar.

POR THE ECUATORIAN IMPORT FRUIT COMPANY: Jack Friedlander.

Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los dieciseis días del mes de marzo del año 1962 (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS).

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticinco días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 54 inciso 2do., de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticinco días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos. años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

ley No. 5874, que modifica los apartados a) y b) del artículo 21 de la Ley No. 392, del 20 de septiembre de 1943, sobre Porte y Tenencia de Armas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5874

Artículo 1.- Se modifican los apartados a) y b) del artículo 21 de la Ley No. 392, del 20 de septiembre de 1943, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, reformados últimamente por la Ley No. 5403, del 16 de septiembre del año 1960, para que en lo adelante rijan de la siguiente manera:

"a) Cuando se trate de obtener licencias para portar armas de fuego, para la defensa propia o para el servicio de Guardacampestre, el solicitante deberá pagar en la Tesorería Nacional la suma de CINCUENTA PESOS ORO (RD$50.00), por adelantado cada año, como valor de la licencia debiendo hacer efectiva la primera anualidad al solicitar la licencia;

b) Cuando se trate de obtener licencias para uso de escopetas de cartuchos para la caza, el impuesto será de VEINTICINCO PESOS ORO (RD$25.00), por cada escopeta de cualquier calibre.

En caso de expedirse la licencia después de enero, el valor de la misma se calculará a razón de CINCO PESOS ORO

(RD$5.00) para la mencionada en la letra a) y de DOS PESOS CINCUENTA CENTAVOS (RD$2.50) para la mencionada en la letra b) de este artículo, por cada mes o fracción de mes que faltare por transcurrir desde la fecha de solicitud hasta el próximo diciembre inclusive".

Artículo 2.– La presente Ley entrará en vigor a partir del día 1ro. del mes de mayo del año 1962.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinticinco días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veiticinco días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5875, que crea dos Juzgados de Instrucción y una Cámara Penal con jurisdicción nacional y asiento en la Capital de la República

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5875

Artículo 1.– A partir del 1ro. de mayo de mil novecientos sesenta y dos, se crean dos Juzgados de Instrucción, con jurisdicción nacional y asiento en la capital de la República para instruir y calificar exclusivamente, los procesos de que sean apoderados por el Procurador General de la República.

Párrafo.– El Juez de instrucción así apoderado, procederá en sus funciones de igual modo que el Juez de Instrucción a quien hubiera correspondido la instrucción del proceso.

Artículo 2.– Se crea asimismo, con asiento en la capital de la República, pero con la facultad de poder juzgar en cualquier otro lugar de la República, una Cámara Penal para conocer y fallar los procesos que le sean enviados, por los citados juzgados de instrucción creados por esta ley o de los delitos de que pueda ser apoderada por el Procurador General de la República.

Párrafo.– De las apelaciones de estas sentencias conocerá la Corte de Apelación que corresponda al lugar en que la sentencia sea dictada.

Artículo 3.– La Secretaría de Estado de Justicia y el Director General del Presupuesto quedan facultados para tomar las disposiciones que sean de lugar al respecto.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Naci$nal, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5876, que prorroga por 30 días más las previsiones de la Ley No.5830, del 28 de febrero de 1962, que declara indisponibles por 60 días los beneficios de las Compañías puestas bajo el control y fiscalización del Gobierno.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5876

ARTICULO UNICO.– Quedan prorrogadas por 30 días más las previsiones de la Ley No. 5830, de fecha 28 de febrero de 1962, que declara indisponibles durante 60 días, a partir de la publicación de la misma, los beneficios de las compañías que se encuentran bajo el control y fiscalización del Gobierno Dominicano, de acuerdo con las disposiciones legales dictadas al efecto, y dispone que no podrá hacerse ninguna repartición de dividendos durante dicho período entre los accionistas de esas compañías.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5877, que agrega un párrafo al Artículo 194 de la Ley de Registro de Tierras

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5877

ARTICULO UNICO.— Se agrega el siguiente párrafo al artículo 194 de la Ley de Registro de Tierras, número 1542, del 11 de octubre de 1947:

PARRAFO.— Cuando el Estado haya confiscado o confisque inmuebles o derechos inmobiliarios registrados, el Registrador de Títulos correspondiente, a requerimiento de la Secretaría de

Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes procederá a cancelar el Certificado Original en el Libro-Registro y a hacer un nuevo Certificado de Título en favor del Estado en dicho libro, donde conste que los Duplicados de Títulos que se hayan expedido quedan sin ningún valor ni efecto, y procederá, en consecuencia, a expedir un duplicado de este Certificado en favor del Estado.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril, de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99 de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5878, que modifica el artículo único de la Ley No. 330, de 1940, sobre Pensiones del Estado a las señoritas Rogelia y Bertilia Ducoudray

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5878

UNICO.– Se modifica el artículo único de la Ley No. 330, de fecha 21 de septiembre de 1940, en el sentido de aumentar de RD$30.00 a RD$50.00, la pensión de que disfrutan las señoritas Rogelia y Bertilia Ducoudray.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119^{0} de la Independencia y 99^{0} de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley de Reforma Agraria No. 5879

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5879

CONSIDERANDO: que las condiciones actuales de la población agraria de la República, tanto de los agricultores de escasos recursos como de los labriegos o trabajadores agrícolas asalariados, son sumamente precarias;

CONSIDERANDO: que las cifras estadísticas demuestran que el 70 por ciento de la población total del país deriva su subsistencia de las faenas agrícolas, y que las mejores tierras laborables propias para una explotación agrícola de intensidad, han sido concentradas en manos de un reducido número de corporaciones y personas latifundistas;

CONSIDERANDO: que se estima que el 1 por ciento de las fincas existentes cubren casi el 20 por ciento del total del área cultivable;

CONSIDERANDO: que frente al enorme latifundio de la propiedad de las tierras laborables existentes, concentradas en

pocas manos, existe un extenso minifundio en manos de agricultores pobres;

CONSIDERANDO: que aproximadamente el 50 por ciento de todas las fincas existentes en el país en manos del campesino dominicano tiene un área promedio de 15 tareas o menos, lo cual no constituye una finca capaz de producir los más mínimos requisitos para la subsistencia de una familia pequeña;

CONSIDERANDO: que la concentración de las mejores tierras labrantías en manos de limitado número de latifundistas ha estimulado una migración constante hacia las zonas urbanas, como resultado de lo cual los núcleos urbanos del país han tenido un aumento de población en los últimos 10 años que crea graves problemas de tipo socio-económico, tanto en la zona urbana como en la rural;

CONSIDERANDO: que, en general, la traslación de dichos trabajadores hacia los centros urbanos del país ni siquiera les proporciona la estabilidad económica necesaria para el sustento de sus vidas;

CONSIDERANDO: que lo más importante para la vida de la Nación consiste en lograr el arraigo de sus poblaciones campesinas, con el fin de fomentar la creación de centros permanentes de producción que eleven el poder económico de la República;

CONSIDERANDO: que con motivo de la desmedida concentración de las mejores tierras en manos de latifundistas una gran parte de la población campesina en busca del arraigo de sus vidas se movió hacia las áreas montañosas, causando sus actividades considerables daños a la floresta y a la condición de la tierra misma;

CONSIDERANDO: que ese sector de la población campesina. radicada en el área montañosa, ha contribuido a producir una erosión de las colinas y ha sido causa eficiente de la destrucción de los bosques nacionales;

CONSIDERANDO. que en años anteriores, se realizaron programas de colonización, llegándose a establecer en la República unas 37 colonias en las que han sido asentadas 11,600 familias;

CONSIDERANDO: que a pesar de que algunas de esas colonias se encuentran radicadas en tierras excelentes para los cultivos, las familias asentadas en las mismas no han tenido el éxito esperado debido a la falta de planificación y a una localización inadecuada, así como a la falta de servicio de créditos y ayuda técnica;

CONSIDERANDO: que solamente la concepción y ejecución de principios sociales que enmarquen una verdadera revolución económico-social, pacíficamente ejecutada, puede llegar a levantar el nivel de vida de nuestro numeroso sector rural, sacándolo de la miseria en que se debate y conduciéndolo a una vida de trabajo honesto, con la esperanza de una remuneración adecuada que coadyuve el progreso continuo de la familia campesina;

CONSIDERANDO: que en consecuencia urge el establecimiento inmediato de la Reforma Agraria de la Nación;

CONSIDERANDO: que esa Reforma Agraria, que esta ley establece, persigue por medio de sus programas y proyectos el objetivo primordial de mejorar las condiciones de vida y trabajo del sector campesino como un merecido servicio de justicia social;

CONSIDERANDO: que una verdadera Reforma Agraria envuelve mucho más que una mera distribución de tierras a familias pobres;

CONSIDERANDO: que los fracasos de las mal llamadas "Reformas Agrarias", tanto en nuestro país como en otras naciones del mundo, han tenido por causa fundamental el haberse limitado a una mera distribución de tierras;

CONSIDERANDO: que para que tenga probabilidades de buen éxito, toda Reforma Agraria debe contar con diversos factores indispensables tales como distribución y consolidación de tierras en manos de buenos labradores campesinos; construcción de hogares tanto para agricultores como para labriegos asalariados; concesión de crédito barato a estos agricultores no desligado de la ayuda y de los consejos técnicos; educación de los agricultores, obreros agrícolas y sus familiares; instalación de buenos servicios de riego que proporcionen el agua necesaria para sus faenas; electrificación; construcción de

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
BIBLIOTECA
AGN

carreteras y caminos y otras facilidades similares; establecimiento y desarrollo de cooperativas que faciliten las operaciones de las fincas y la educación y el desarrollo de los campesinos para una cada vez mayor participación directa de éstos en el estudio, discusión y solución de sus problemas;

CONSIDERANDO: que es interés primordial del Gobierno que rige los destinos de la Nación establecer por medio de la presente ley, la Reforma Agraria Dominicana, basada en disposiciones adecuadas para acelerar en todo lo posible, el buen éxito de sus programas y la liberación económico-social de nuestras masas campesinas.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY DE REFORMA AGRARIA

CAPITULO I

Creación del Instituto Agrario Dominicano

Artículo 1.— Se crea el Instituto Agrario Dominicano adscrito a la Secretaría de Estado de Agricultura con las atribuciones que se establecen más adelante.

Artículo 2.— El Instituto Agrario Dominicano, queda, por la presente ley, investido de personalidad jurídica, con facultad para contratar, demandar y ser demandado, en su propio nombre y derecho, podrá, además, emitir sus propias obligaciones, con la autorización expresa del Poder Ejecutivo, las cuales en tales casos gozarán de la garantía ilimitada del Estado. Tendrá un patrimonio propio bajo su dependencia directa, integrado principalmente por el conjunto de bienes que sean puestos a su disposición por traspaso que le haga el Poder Ejecutivo de la Nación.

Artículo 3.— El Instituto Agrario estará regido para los fines de las disposiciones de esta Ley, por un Directorio integrado por el Secretario de Estado de Agricultura, quien lo presidirá, el Administrador General del Banco Agrícola, el Secretario de Estado de Finanzas, el Secretario de Estado de Trabajo y tres miembros adicionales que serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Los Secretarios de Estado, Miembros del Directorio podrán ser sustituídos en caso de enfermedad, ausencia o

imposibilidad por los subsecretarios respectivos que sean designados por los titulares.

Artículo 4.– El Instituto Agrario Dominicano tendrá las siguientes facultades, poderes y funciones:

a) Como función primordial llevar a feliz término la Reforma Agraria en todo el territorio de la República;

b) Desarrollar los proyectos específicos que crea necesarios para llevar a efecto los programas a ejecutar;

c) Solicitar del Poder Ejecutivo las propiedades del Estado que sean necesarias para el desarrollo de los programas proyectados;

d) Podrá adquirir por donación, de personas particulares, de entidades jurídicas u organizaciones locales o internacionales, los derechos de propiedades muebles o inmuebles;

e) Igualmente podrá adquirir propiedades, muebles o inmuebles por contratos de compra-venta, de grado a grado, o solicitar de acuerdo a la ley, del Poder Ejecutivo, la expropiación de cualquier propiedad que crea necesaria para los fines de esta ley;

f) Tendrá facultad para adquirir propiedades en arrendamiento;

g) Podrá vender y aun ceder en arrendamiento, total o parcialmente las propiedades, muebles o inmuebles que constituyan el patrimonio bajo su dependencia directa;

h) Tendrá derecho a tomar dinero a préstamo y ofrecer en prenda o garantía las propieades bajo su control;

i) Podrá facilitar propiedades y aun ayudar económicamente a instituciones nacionales o internacionales, para fines de estudios y actividades agropecuarias, cuando juzgue que estas favorezcan los programas en evolución puestos en práctica en el propio instituto;

j) Podrá ceder propiedades muebles o inmuebles a precio reducido y aun donarlas. a instituciones de carácter no

pecuniario, cuando juzgue que estas cesiones o donaciones beneficiarán directamente la población agraria o rural;

k) Podrá igualmente contratar, a los fines de la Reforma Agraria, con entidades autónomas gubernamentales o con particulares;

l) Establecer áreas y oficinas locales de Reforma Agraria con el personal y facilidades necesarios para lograr los fines de esta ley;

m) Podrá efectuar otros actos y transacciones propias de la organización que sean necesarios y convenientes para llevar a cabo las disposiciones de la presente ley;

Artículo 5.— El Directorio del Instituto Agrario tendrá los poderes y funciones que se detallan a continuación:

a) Determinar o autorizar la organización administrativa y personal con que operará el Instituto, seleccionar y nombrar un Director General del Instituto, determinar sus funciones y asignarles sueldos;

b) Delegar en el Director General aquellos poderes y funciones que el Directorio juzgue propios y necesarios para el buen desarrollo de los programas de la Reforma Agraria;

c) Seleccionar, nombrar, asignar las funciones y sueldos a un Secretario del Instituto Agrario y del Directorio;

d) Aprobar los reglamentos que fueren necesarios para regir los destinos del Instituto y de la Reforma Agraria;

e) Dictar las pautas y la política general para el establecimiento y desarrollo de la Reforma Agraria;

f) Aprobar un reglamento interno para regir el funcionamiento del propio Directorio;

g) Reunirse según lo disponga su reglamento, para escuchar las informaciones del Director General del Instituto sobre las actividades desarrolladas y los planes proyectados, debiendo decidir sobre los asuntos no delegados;

h) Aprobar los programas confeccionados para las labores del siguiente año y determinar sobre los presupuestos que tales programas requieran;

i) Aprobar cualquier otro programa o proyecto adicional que el Director General desee someter;

j) Aprobar los reglamentos que le sean sometidos por el Director General que sean necesarios para regir las operaciones de los programas y proyectos a desarrollarse;

k) Podrá intervenir y decidir si así lo desea sobre cualquier detalle y operación del Instituto y de la Reforma Agraria;

l) Desarrollo de las otras funciones propias y necesarias para llevar a feliz término los objetivos trazados en esta ley.

Artículo 6.– El Director General del Instituto Agrario tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

a) Será el Ejecutivo del Instituto Agrario;

b) Tendrá y ejecutará los poderes y funciones que le delegue el Directorio;

c) Pondrá en ejecución las órdenes, instrucciones y autorizaciones del Directorio;

d) A nombre del Instituto instrumentará y firmará los contratos, escrituras y otros documentos que fueren necesarios para ejecutar las acciones delegadas por el Directorio;

e) A nombre del Instituto, emitirá, firmará y otorgará los contratos y documentos propios o necesarios para efectuar las operaciones y transacciones específicamente autorizadas por el Directorio;

f) A nombre del Instituto, emitirá, otorgará y firmará los contratos, documentos, escrituras propias o necesarias para la compra y venta de propiedades muebles o inmuebles en transacciones delegadas o autorizadas expresamente por el Directorio;

g) Preparar presupuesto anual de los programas a ejecutarse el cual someterá a la aprobación del Directorio·

h) Preparar y someter los informes periódicos que le exijan las leyes y los reglamentos;

i) Ejecutar todas las otras actividades y funciones necesarias y propias, para efectuar las funciones que le delegue y ordene el Directorio, y todas las otras funciones necesarias para llevar a feliz término los propósitos de esta ley.

CAPITULO II

Del Fondo de la Reforma Agraria

Artículo 7.— Se instituye un fondo de la Reforma Agraria que se destinará al incremento de los trabajos y programas necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la Reforma Agraria de la República.

Artículo 8.— El fondo de la Reforma Agraria se constituirá con:

a) Fondos y propiedades hasta ahora asignados o de cualquier otro modo adquiridos por la Dirección General de la Reforma Agraria;

b) El producto de la venta de las propiedades muebles o inmuebles asignados por el Estado a la Dirección General de la Reforma Agraria o al Instituto Agrario;

c) Las rentas provenientes de las propiedades y actividades bajo su control.

d) El producto de la venta de los derivados y productos de las propiedades bajo su control;

e) De los préstamos bancarios o de otras instituciones;

f) De las donaciones de personas particulares, de instituciones nacionales e internacionales;

g) De las sumas asignadas en el presupuesto al Instituto Agrario para operaciones e inversiones capitalizables;

h) Del producto de la venta de bonos que el Instituto Agrario emita con la aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo 9.— El fondo de la Reforma Agraria será manejado por la Dirección General de la Reforma Agraria, de conformidad a los programas y presupuestos anuales debidamente aprobados. El fondo será destinado precisamente al objeto de la Reforma Agraria según se prevee y autoriza en esta ley;

Artículo 10.— Hasta que el Directorio disponga otra cosa, los ingresos provenientes de las operaciones que efectúe el Instituto Agrario deberán ser recaudados por intermedio de las Colecturías de Rentas Internas.

Artículo 11.— La Secretaría de Estado de Finanzas llevará una cuenta especial al Fondo de la Reforma Agraria.

CAPITULO III

Metas de la Reforma Agraria

Artículo 12.— En consonancia con la política agraria del Estado, se declara de interés público mejorar las áreas y tierras agrícolas, mediante la reparación y construcción de carreteras y caminos vecinales, sistemas de riego, servicio de electricidad y agua y otras facilidades apropiadas.

Artículo 13.— Las tierras propiedad del Estado deberán ser utilizadas en la forma y manera que más beneficie a las masas trabajadoras rurales, los pequeños agricultores y la Nación en general.

Artículo 14.— El Instituto Agrario establecerá y distribuirá tierras del Estado que le sean asignadas, en tales tamaños y con tales facilidades como para constituir verdaderas unidades familiares en donde serán asentadas familias de agricultores de escasos recursos. Para ese fin, cuando el Estado obtenga grandes fincas particulares, si así lo determina el Instituto Agrario, serán también divididas a agricultores escogidos de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Artículo 15.— Cuando el Instituto lo crea apropiado, las parcelas demasiado pequeñas para ser unidades apropiadas, serán adquiridas y consolidadas para así crear unidades de tamaño adecuado.

Artículo 16.— Como fundamento apropiado para una Reforma Agraria permanente y efectiva, el Instituto Agrario establecerá hogares adecuados para agricultores de escasos recursos y obreros agrícolas.

Artículo 17.— Fomentará y ayudará a establecer y operar servicios de crédito agrícola supervisado para los nuevos parceleros, esto es, crédito a bajo costo acompañado de ayuda y consejos técnicos.

Artículo 18.— Establecerá programas de educación y adiestramiento técnico entre los agricultores y obreros agrícolas y sus familias.

Artículo 19.— Fomentarán facilidades y ayudará a establecer facilidades para la obtención de semillas selectas, materiales y equipo de labranza.

Artículo 20.— Programará y dirigirá los cultivos de modo que los nuevos agricultores inviertan sus energías y su dinero en las cosechas que más puedan beneficiarles.

Artículo 21.— Enseñará y dirigirá la clasificación, almacenamiento y mercadeo de las cosechas, estimulando la creación de cooperativas para estas funciones a la mayor brevedad posible.

Artículo 22.— Promoverá y estimulará a establecer y desarrollar industrias agrícolas que puedan utilizar las cosechas de los agricultores.

Artículo 23.— Fomentará y dirigirá el desarrollo y operación de facilidades y servicios de la comunidad.

Artículo 24.— Fomentará y cooperará con el desarrollo y mejoramiento de otros factores de la población, de modo que aúmente su poder adquisitivo y mejore así las oportunidades en el mercadeo para los productos agrícolas.

Artículo 25.— Para alcanzar los anteriores objetivos, el Instituto Agrario desarrollará y operará con carácter de urgencia los programas autorizados por esta ley.

CAPITULO IV

Inventario y Clasificación de las Propiedades del Estado

Artículo 26.– El Instituto, con la cooperación de la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes y la Administración General de Bienes Nacionales, determinará y confeccionará un censo clasificado de la propiedad del Estado. Dicho censo establecerá la extensión y colindancias de cada una de las propiedades del Estado, incluyendo una información detallada sobre los usos a que esté dedicada la tierra y estado de explotación de las mismas. El inventario deberá incluir información detallada de los edificios y otras mejoras existentes en dichas tierras.

Artículo 27.– De igual manera, el Instituto procederá a inventariar cualquier otra propiedad o industria agrícola del Estado que pueda ser de utilidad para futuros programas de la Reforma Agraria.

Artículo 28.– Al proceder a la confección del censo clasificado de la propiedad del Estado, el Instituto deberá estudiar con detenimiento los títulos de las propiedades agrícolas del Estado a fin de comprobar si están amparadas por un título fehaciente de dichas propiedades.

Artículo 29.– En consecuencia de lo expresado en el artículo anterior, el Instituto queda facultado para resolver cualquiera reclamación que afecte el derecho de la propiedad del título que ampara determinada finca, siempre y cuando la misma le haya sido asignada por el Poder Ejecutivo para los programas de la Reforma Agraria, pudiendo convenir de grado a grado y transaccionalmente cualquier arreglo y suscribir cualquier documento que sanee definitivamente el título de propiedad de dicha finca.

Artículo 30.– En caso de que las propiedades del Estado que les sean asignadas para los programas no estén definitivamente saneadas catastralmente, el Instituto tendrá facultad para solicitar la mensura catastral de dichas tierras, determinando el área y colindancias de éstas, y obteniendo un título saneado que evite futuras reclamaciones injustificadas.

Artículo 31.— El Instituto deberá efectuar un estudio de todas las tierras propiedad del Estado que hayan sido objeto del censo efectuado en cuanto a la adaptabilidad del suelo, para los distintos cultivos, abastecimientos de agua, características físicas de la tierra, características económicas y los demás factores necesarios para establecer las bases para su operación en la forma más apropiada para beneficio de los trabajadores agrícolas y agricultores, así como para la comunidad.

CAPITULO V

Aparcelamiento de Tierras en Unidades Familiares

Artículo 32.— Como un medio para alcanzar las metas de la Reforma Agraria, el Instituto podrá, y por la presente se le autoriza a ello, dividir las tierras que se le asigne o adquiera, en parcelas de tal tamaño que sea suficiente no sólo para producir las necesidades del agricultor y su familia, sino que tenga capacidad productiva que permita un continuo y progresivo desarrollo de la familia.

Artículo 33.— En aquellas tierras del Estado, asignadas o adquiridas por el Instituto, en las cuales se hayan establecido por su cuenta familias de escasos recursos, el Instituto queda autorizado a dar a estas familias permisos temporarios o de cultivos hasta tanto recojan sus cosechas, o hasta tanto las fincas sean divididas en unidades familiares adecuadas, a discreción del Instituto.

Artículo 34.— El Instituto podrá construir en las parcelas que vayan a ser distribuidas casas para residencias de los agricultores, construcciones para las cosechas y otras facilidades agrícolas.

Artículo 35.— Igualmente el Instituto podrá, de creerlo más conveniente, desarrollar comunidades agrícolas, edificando las casas en un conglomerado dentro de un área cercana a las parcelas objeto del programa de distribución. Estas comunidades podrán incluir facilidades tales como escuelas, centros de salud, edificios para ceremonias religiosas y centros para reuniones sociales y educativas.

Artículo 36.— Como consecuencia del establecimiento de las comunidades agrarias, el Instituto Agrario podrá establecer

facilidades de riego, drenaje, energía electrica, agua y medios de transportación y comunicación.

CAPITULO VI

Distribución de Parcelas y Selección de Candidatos

Artículo 37.— El Instituto queda autorizado a distribuir las unidades o parcelas familiares entre agricultores de escasos recursos de la vecindad, de conformidad con las disposiciones de esta ley y los reglamentos que de acuerdo con la misma se promulguen.

Artículo 38.— La distribución de parcelas, se hará a los solicitantes en la forma que más adelante se prevee, por medio de contrato de venta condicional y el precio, período de pago y condiciones que el Instituto crea más razonable y en la forma que dispongan sus reglamentos.

Artículo 39.— El contrato de venta condicional antes indicado deberá incluir restricciones de modo que el parcelero no pueda vender, arrendar, hipotecar, o de cualquier otro modo disponer o gravar la parcela cedida sin el consentimiento previo y por escrito del Instituto. Estas restricciones cesarán tan pronto el parcelero haya obtenido el dominio completo sobre su parcela.

Artículo 40.— Cualquier parcela que de cualquier modo sea cedida, entregada o vendida a un agricultor dentro de los planes de la Reforma Agraria, lo será libre de todo gravamen, y en consecuencia cualquier reclamación contraria que afecte el derecho de propiedad de dicha parcela será resuelto por el Estado en forma pecuniaria sin afectar el título de propiedad de dicha parcela.

Artículo 41.— Cualquier parcelero beneficiado podrá posteriormente solicitar tierras adicionales y el Instituto tendrá autoridad para asignarlas si las razones alegadas justifican tal asignación adicional. Además de cualesquiera otras que el Instituto crea propio añadir, las condiciones para asignar tierras adicionales deberán incluir:

a) Si el parcelero tiene un número crecido de familia y dépendientes, capaces de trabajar en la parcela;

b) Si la parcela original no es suficiente para satisfacer las necesidades de su familia;

c) Si el parcelero solicitante demuestra haber operado eficientemente la parcela original.

Artículo 42.— Si antes de haber obtenido el título o dominio absoluto de su parcela, un parcelero muere, sus herederos tendrán derecho a continuar en la posesión y administración de la misma como una unidad y deberán seguir cumpliendo las disposiciones del Contrato de Venta Condicional. Sin embargo, si sus herederos no pudieren ponerse de acuerdo en cuanto a la operación en común de la parcela, el Instituto podrá recuperar la parcela para utilizarla o redistribuirla en la forma que más crea apropiada de acuerdo con las disposiciones de esta ley. En tales casos el Instituto compensará a los herederos por el valor, al momento de la muerte, de las tierras y sus mejoras, luego de haberse reducido cualquiera deuda que con el Instituto u otras dependencias estatales hubiera contraido el causante o sus herederos.

Artículo 43.— El Instituto podrá revocar los derechos concedidos en relación con una parcela, por las siguientes razones:

a) Utilizar dicha parcela para fines incompatibles con la Reforma Agraria.

b) Abandono injustificado de la parcela o de la familia por parte del parcelero. En este último caso el Instituto podrá adjudicar la finca a la esposa o al hijo, que en opinión del Instituto tenga la mayor capacidad y habilidad para cumplir los requisitos establecidos en esta ley, y cumplir con el contrato.

c) Negligencia manifiesta del beneficiario, probada por su incapacidad para operar la finca, permitiendo el aniquilamiento de sus recursos y la destrucción de sus mejoras.

d) Incumplimiento sin justificación de las obligaciones contraídas en el contrato de venta condicional.

Artículo 44.— Para efectuar la revocación del contrato suscrito referente a determinada parcela concedida, el Instituto deberá notificar previamente al parcelero su propósito sin que éste haya atendido a dicha notificación. En los casos de revocación de

concesiones, el parcelero recibirá pago por el valor actual de la parcela y las mejoras levantadas, menos cualquier deuda o gravamen a favor del Instituto o de otras dependencias de la Administración Pública, pendientes de pago, relativos a dicha parcela o a cualquier servicio de la Reforma Agraria.

Artículo 45.– Las deudas incurridas por los parceleros en la compra de semillas, animales de trabajo, material, equipo y otras necesidades de la finca, con individuos o entidades particulares, sin la previa autorización oficial del Instituto Agrario, no podrán ser adjudicados como gravamen contra la finca.

Artículo 46.– Para poder obtener la asignación de una parcela, el solicitante deberá llenar los siguientes requisitos:

a) Comprometerse a trabajar y administrar la finca personalmente o con la ayuda de su familia inmediata.

b) No tener o poseer otras tierras o propiedades o ingresos o en caso contrario. que éstos no sean suficientes para proveer el sostenimiento adecuado del solicitante y su familia;

c) Ser mayor de 18 años y menor de 50.

Artículo 47.– Entre los solicitantes que reunan las condiciones del artículo anterior se dará prioridad a los siguientes:

a) Arrendatarios, medianeros, colonos, agregados y obreros que estén cultivando la tierra que va a distribuirse o estén trabajando en la misma;

b) Personas desplazadas de sus tierras como resultado de programas de Reforma Agraria;

c) Agricultores con experiencia, interés y habilidad en la clase de cultivo que se proponga realizar;

d) Los jefes de familia, no mayores de 40 años, con familias y dependientes con potencial productivo;

e) Personas que sepan leer y escribir o por lo menos dispuestas a alfabetizarse;

f) Personas deseosas de participar en actividades educacionales, en la formación de cooperativas y en el desarrollo de la comunidad.

Artículo 48.– En todas las tierras parceladas para fincas de distribución, de acuerdo con los programas en ejecución de la Reforma Agraria, el Instituto Agrario deberá tomar en consideración aquellas personas desplazadas que tengan pendientes reclamaciones por dichas tierras, cuando con ello se solucionen las reclamaciones pendientes y queden totalmente saneados los títulos de propiedad.

Artículo 49.– La distribución de parcelas entre las personas que reunan las condiciones necesarias para ser calificadas con capacidad para ocupar parcelas, se efectuará por medio de un sistema de rifas en que se numeren las parcelas que van a ser distribuidas entre todos los participantes.

Artículo 50.– Las personas calificadas aptas para recibir parcelas, que en la rifa de un área determinada no hayan recibido parcela alguna, recibirán una nueva oportunidad de participar en las distribuciones subsiguientes que se hagan en áreas cercanas.

CAPITULO VII

Crédito Agrícola y Cooperativas

Artículo 51.– El Instituto Agrario gestionará con el Banco Agrícola las facilidades de crédito para los agricultores y organizaciones incluidos dentro de un programa de desarrollo. Este crédito deberá ser supervisado, esto es, crédito a un tipo bajo de interés, acompañado de asesoramiento técnico adecuado para producción y consumo, y de ser posible, deberá efectuarse a través de cooperativas agrícolas.

Artículo 52.– Si la operación del servicio de crédito supervisado produjera u ocasionare algún déficit al Banco Agrícola, dicha cantidad será incluida en la asignación para la Reforma Agraria en el presupuesto general de la Nación para ser reembolsada al Banco Agrícola.

Artículo 53.– El Instituto Agrario fomentará por todos los medios y ayudará a organizar cooperativas de crédito, de

consumo y mercadeo entre los parceleros y entre los trabajadores agrícolas.

Artículo 54.– El Instituto Agrario cooperará con las entidades interesadas para que el crédito que concedan las cooperativas a sus miembros, mientras sea posible, sea en materiales y equipo, antes que efectivo.

CAPITULO VIII

Comunidades de Obreros Agrícolas

Artículo 55.– El Instituto Agrario, cuando lo creyere apropiado, creará comunidades de obreros cerca de industrias o empresas agrícolas tales como centrales azucareras, industrias del sisal y otras.

Artículo 56.– Las casas de las comunidades de obreros agrícolas estarán instaladas en pequeños solares, pero con un área suficiente para un pequeño huerto, un gallinero familiar y otras facilidades.

Artículo 57.– El Instituto Agrario construirá las casas en la forma que resulte más apropiada, bien en cooperación con el Departamento de Obras Públicas, o bien por administración, por contratos con contratistas privados, o aun con los propios beneficiados a quienes se suplirá dirección y materiales, o bien de cualquier otro modo que resulte práctico y económico.

Artículo 58.– La selección de los candidatos o solicitantes será reglamentada por el Instituto Agrario. A los obreros seleccionados para vivir en determinada comunidad, se les entregará la propiedad a base de un contrato de venta condicional, a precio de costo, para ser pagadas a plazos mensuales cómodos, por el número de años que se determine razonable. Igual que en caso de las parcelas, la selección será por medio de rifa.

CAPITULO IX

Educación y Adiestramiento

Artículo 59.– El Instituto Agrario fomentará y pondrá en práctica programas de adiestramiento para administradores de proyectos, empleados de oficinas centrales, técnicos especializados en suelos, personas para ayudar en la organización y supervisión de cooperativas, técnicos en administración de

fincas, agentes de extensión y otros. Para la conducción de este programa el Instituto Agrario podrásolicitar la cooperación de los diversos departamentos de la Secretaría de Estado de Agricultura, del Banco Agrícola y otras dependencias de la Administración Pública

Artículo 60.– Igualmente efectuará dicho Instituto seminarios y actividades educativas, en todo el ámbito de la República, para beneficio del cuerpo directivo de la organización. utilizando también si es necesario, programas y actividades educacionales en otros países, para beneficio del referido personal y de estudiantes dominicanos. Además, podrá llevar a efecto programas y actividades educacionales para directores y agricultores de determinadas localidades. A este fin, se formularán planes de adiestramiento y se desarrollarán programas especiales debidamente fiscalizados por el Instituto Agrario, bien independientemente, o en cooperación con las diversas dependencias de la Secretaría de Estado de Agricultura y del Banco Agrícola.

CAPITULO X

Artículo 61.– En los casos que el Instituto crea más conveniente y beneficioso, podrá operar las tierras o las otras propiedades o industrias agrícolas bajo su control, como una sola unidad, distribuyendo entre los trabajadores, además de su sueldo, la parte de los beneficios netos, si los hubiere, que crea razonable, luego de hacer las debidas reservas para depreciación, mejoras, expansión y contingencias.

Artículo 62.– El Instituto Agrario podrá fomentar, establecer y operar aquellos otros programas agropecuarios que crea propios a los fines de la Reforma Agraria.

CAPITULO XI

Disposiciones Generales

Artículo 63.– En tanto quede definitivamente organizado el Instituto Agrario Dominicano, con todas sus dependencias y facultades, el Secretario de Estado de Agricultura queda investido de todos los poderes consignados en la presente ley, de modo que pueda darle curso, con los empleados y facilidades de la Secretaría, así como con las facilidades actuales de la Administración de la Reforma Agraria a los programas y proyectos de la Reforma Agraria.

Artículo 64.– Por la presente se asigna al Instituto Agrario Dominicano, para ser utilizado para los fines y del modo que en esta ley se autoriza, la cantidad de RD$2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS).

Artículo 65.– La presente ley deroga y sustituye cualquier otra ley, decreto o reglamentación que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril, de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de abril de 1962, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5880, que establece penas contra las alabanzas al pasado régimen tiránico y Antidemocrático de Trujillo

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5880

CONSIDERANDO, que durante todo el período de la nefasta tiranía de los Trujillo, fueron conculcados inexorablemente los más elementales derechos de la persona humana;

CONSIDERANDO, que el pueblo dominicano al liberarse de esa sangrienta tiranía, tiene el legítimo derecho a defender y preservar el estado de libertad y dignidad que disfruta, de los residuos y resabios de ese pasado luctuoso, que pudieran conspirar contra su tranquilidad;

CONSIDERANDO, que cualquier acto o manifestación tendiente a evocar, exaltando, en la forma que fuere, el pasado vergonzoso e incalificable de esa tiranía, puede y debe considerarse como una contribución o participación a estimular a los personeros de dicha tiranía, a promover por medios subversivos el retorno de aquel régimen tiránico y despótico en pugna con el sistema democrático que vive ahora el pueblo dominicano;

CONSIDERANDO, que es deber del Estado legislar, en el sentido de erradicar, del ambiente nacional esas peligrosas e inciviles actuaciones que alteran el orden público y, además, producen confusión en las mentes de niños y jovenes;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o su régimen tiránico, en alta voz, o por medio de gritos, discursos, escritos públicos o epistolares, dibujos, impresos, grabados, pinturas o emblemas se considerará y juzgará como autor de delito contra la paz y la seguridad públicas y será castigada con prisión de diez días a un año o multa de diez a quinientos pesos oro o con ambas penas a la vez.

Párrafo.– En iguales penas incurrirán los que formen parte de grupos o reuniones destinados a los fines arriba indicados o los

que hagan circular rumores relativos al posible restablecimiento del régimen de los Trujillo, por estar éste en pugna con el sistema democrático establecido por la Constitución de la República.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "La Nación" para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de mayo, de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5881, que exonera de impuestos la importación de abonos naturales o artificiales, los insecticidas, yerbicidas y las materias para su preparación

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5881

CONSIDERANDO: Que la agricultura constituye la base principal de la economía nacional y es además una de las principales fuentes para proporcionar trabajo y bienestar a los habitantes de la República;

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley No. 4480, de fecha 21 de junio de 1956, se declara de interés nacional el empleo de fertilizantes en todos los cultivos que sean básicos de la economía nacional, como medio de aumentar el rendimiento y calidad de las cosechas y, en consecuencia, abaratar el costo de producción de las mismas;

CONSIDERANDO: que la adopción de prácticas modernas de cultivos para un mejor aprovechamiento de las tierras constituye un deber ineludible de las instituciones del Estado, y en consecuencia deben dictarse medidas que tiendan en todo sentido al mejoramiento y defensa de nuestra producción agrícola;

CONSIDERANDO: Que entre esas medidas está la protección contra los insectos, roedores y las enfermedades que atacan los cultivos agrícolas en mengua de su rendimiento y calidad;

CONSIDERANDO: Que conviene al interés nacional, por las razones ya dichas, adoptar medidas conducentes a lograr una producción agrícola efectivamente beneficiosa, mediante el empleo generalizado de fertilizantes insecticidas, yerbicidas, fungicidas, raticidas y cualquier otro producto que propenda a un mayor auge de la producción agrícola nacional;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se exoneran de todos los derechos e impuestos de importación, los abonos naturales o artificiales, las sustancias insecticidas, los yerbicidas y las materias para prepararlos, así como también los fungicidas y raticidas.

Artículo 2.– Para los fines de la exoneración prevista en el artículo anterior, el importador de los abonos y materias exoneradas deberá presentar al Colector de Aduana, conjuntamente con el manifiesto correspondiente, una declaración jurada de que las sustancias o abonos han sido importados para ser usados exclusivamente en la agricultura, declaración que será enviada luego por la Aduana, con muestras del producto, a la Secretaría de Estado de Agricultura.

Las mencionadas muestras serán sometidas a un análisis en los laboratorios de la mencionada Secretaría de Estado si el producto importado no está amparado por análisis oficiales del país de origen del mismo. Si el resultado del análisis es satisfactorio, dicha Secretaría expedirá el certificado de calidad correspondiente en el cual se hará constar que las sustancias importadas corresponden a las indicadas en el artículo 1ro. de esta Ley.

El certificado así expedido o el certificado oficial de análisis del país de origen del producto importado bastarán y serán suficientes para que el importador pueda retirar los abonos y sustancias importadas.

Artículo 3.– La presente Ley deroga la Ley No. 5668, del 10 de noviembre de 1961 y cualquier ley o parte de ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de mayo del año mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Dr. Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento, y en el diario "La Nación."

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de mayo del año mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5882, que concede pensión del Estado al señor Eduardo B. Báez

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5882

VISTO el Artículo 8 de la Ley sobre Pensiones Civiles del Estado No. 5185, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede una pensión del Estado de cien pesos oro mensuales (RD$100.00) al señor Eduardo B. Báez.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de mayo, del año mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5883, que concede pensión del Estado al Lic. Víctor J. Castellanos Ortega

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5883

VISTO el artículo 8 de la Ley sobre Pensiones Civiles del Estado No. 5185, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede una pensión del Estado de doscientos treinta y cinco pesos oro mensuales al Lic. Víctor J. Castellanos Ortega.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capit ' de la República Dominicana, a los tres días del mes de mayo, del mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley Electoral No. 5884

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ELECTORAL

NUMERO 5884

TITULO I

DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE ELEGIR

Artículo 1.– El derecho de elegir que la Constitución confiere a los ciudadanos será ejercido de conformidad con las normas establecidas en la misma y en la presente ley.

TITULO II

DE LOS ORGANOS DE DIRECCION Y DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL

Capítulo I

De la Junta Central Electoral

Artículo 2.– Atribuciones.– Corresponden a la Junta Central Electoral, además de las que le confiere la Constitución, las atribuciones siguientes:

1.– Conocer de las impugnaciones y recusaciones de miembros de la propia Junta Central Electoral, Provinciales o Municipales Electorales, de conformidad con lo que dispone esta ley; suspender en el ejercicio de sus funciones a los miembros que sean objeto de tales impugnaciones o recusaciones, hasta cuando se haya decidido definitivamente respecto de las mismas, en los casos de notoria urgencia y gravedad.

2.– Nombrar inspectores electorales con el objeto de asegurar el regular funcionamiento de las Juntas Electorales y la correcta aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

3.– Crear las Mesas Electorales que estime necesarias para cada elección, determinando su ubicación y jurisdicción territorial; disponer el traslado, la refundición o la supresión de Mesas Electorales cuando lo juzgue necesario o conveniente.

4.– Dictar los reglamentos e instrucciones que considere pertinentes para asegurar la recta aplicación de las disposiciones de la Constitución y las leyes en lo relativo a elecciones y el regular desenvolvimiento de éstas; responder a las consultas que le sometan las Juntas inferiores y hacer las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias o útiles o que les sean solicitadas por éstas con el mismo fin.

5.– Disponer todo lo relativo a la adquisición, la preparación y el suministro del equipo y los impresos, materiales y útiles de todo género que sean necesarios para la ejecución de la presente ley y para el buen funcionamiento de las Juntas y Mesas Electorales.

6.- Reglamentar el horario que deba observarse en sus propias oficinas y en las de las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales Electorales.

7.– Velar por que las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales Electorales se reunan con la frecuencia necesaria para el cabal cumplimiento de sus atribuciones.

8.– Resolver en última instancia acerca de la nulidad de las elecciones en una o más Mesas Electorales. cuando esa nulidad haya sido pronunciada por las respectivas Juntas Municipales Electorales o por la Junta Electoral del Distrito Nacional.

9.– Ordenar la celebracion de nuevas elecciones cuando hubieren sido anuladas las que se hayan celebrado en determinadas Mesas Electorales, siempre que la votación en dichas Mesas Electorales sea susceptible de afectar el resultado de la elección.

10.– Dictar dentro de los plazos señalados al efecto la proclama por medio de la cual se anuncia la celebración de elecciones.

11.– Convocar a elecciones extraordinarias cuando proceda de conformidad con la Constitución y la Ley, dictando al efecto la correspondiente proclama.

12.– Formular, a la vista de las relaciones hechas por las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales Electorales, y dentro del plazo que esta ley determina, la relación general del resultado de cada elección, consignando en ella los datos que la ley requiere; y hacerla publicar en la Gaceta Oficial.

Artículo 3.– Sesiones: Quorum y Mayoría.– La Junta Central Electoral celebrará sesiones con la frecuencia que juzgue necesaria para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas.

No podrá constituirse en sesión ni deliberar válidamente sin que se encuentren presentes todos sus miembros, titulares o sustitutos, y sin que haya constancia de que han sido debidamente convocados los delegados de partidos políticos reconocidos acreditados ante ella y sus respectivos sustitutos.

En caso de que faltare un miembro titular y sus dos sustitutos, llenará la vacante uno cualquiera de los suplentes de los miembros titulares.

Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

CAPITULO II

De las Juntas Departamentales Electorales

Artículo 4.– Atribuciones.– Corresponden a las Juntas Departamentales Electorales, además de cualesquiera otras que les confieran la Constitución y la Ley, las atribuciones siguientes:

1.– Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdicción, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que les conciernan, así como las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral.

2.– Verificar el cómputo de las relaciones de la votación formuladas por las Juntas Provinciales Electorales de su jurisdicción en cada elección, de conformidad con lo que se dispone en otra parte de la presente Ley.

3.– Formular, a la vista de las relaciones mencionadas en el párrafo que antecede, la relación de la votación en todo el departamento, observando para ello las formalidades que en otro lugar de la presente ley se determinan.

4.– Formular, de acuerdo con el resultado de la votación determinado según antes se ha dicho, la relación de los candidatos que resulten elegidos para los cargos de Senadores y Diputados al Congreso Nacional.

5.– Expedir a cada uno de los candidatos que resultaren elegidos para los cargos de Senadores y Diputados al Congreso Nacional, en su jurisdicción el correspondiente certificado de elección, y proceder a su proclamación.

Artículo 5.– Sesiones.– Las Juntas Departamentales Electorales celebrarán sesiones ordinarias conforme lo determinen los reglamentos que al efecto dicte la Junta Central Electoral. Celebrarán, además, sesiones extraordinarias cuantas veces fuere menester para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 6.– Quorum y Mayoría.– Las Juntas Departamentales Electorales no podrán constituirse en sesión ni deliberar válidamente sin la asistencia de todos sus miembros o de sus sustitutos, ni sin que haya constancia de haber sido debidamente convocados los delegados de partidos políticos

reconocidos aacreditados ante ellas, así como sus respectivos sustitutos. Los acuerdos serán adoptados por el voto afirmativo de tres de sus miembros, por lo menos.

CAPITULO III

De las Juntas Provinciales Electorales

Artículo 7.– Atribuciones.– Corresponden a las Juntas Provinciales Electorales, además de cualesquiera otras que les confieran la Constitución y la Ley, las atribuciones siguientes:

1.– Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdicción, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que le conciernan, así como las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral.

2.– Verificar el cómputo de las relaciones de la votación formuladas por las Juntas Municipales Electorales de su jurisdicción en cada elección, de conformidad con lo que se dispone en otra parte de la presente ley.

3.– Formular, a la vista de las relaciones mencionadas en el párrafo que antecede, la relación de la votación en toda la provincia, observando para ello las formalidades que en otro lugar de la presente ley se determinan.

4.– Formular, de acuerdo con el resultado de la votación determinado según antes se ha dicho, la relación de los candidatos que resulten elegidos para cargos de elección por la provincia.

5.– Expedir a cada uno de los candidatos que resultaren elegidos para cargos provinciales en su jurisdicción el correspondiente certificado de elección, y proceder a su proclamación.

Artículo 8.– Sesiones.– Las Juntas Provinciales Electorales celebrarán sesiones ordinarias conforme lo determinen los reglamentos que al efecto dicte la Junta Central Electoral. Celebrarán, además, sesiones extraordinarias cuantas veces fuere menester para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 9.– Quorum y Mayoría.– Las Juntas Provinciales Electorales no podrán constituirse en sesión ni deliberar válidamente sin que se encuentren presentes todos sus miembros, titulares o sustitutos, y sin que haya constancia de que han sido debidamente convocados los delegados de partidos políticos reconocidos acreditados ante ellas y sus respectivos sustitutos.

En caso de que faltare un miembro titular y sus dos sustitutos, llenará la vacante uno cualquiera de los suplentes de los miembros titulares.

Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

CAPITULO IV

De la Junta Electoral del Distrito Nacional

Artículo 10.– Atribuciones.– Corresponden a la Junta Electoral del Distrito Nacional, independientemente de las que resulten de otras disposiciones de la Constitución y de la Ley, las siguientes:

1.– Formar y mantener el Registro Electoral;; conocer y resolver sobre las solicitudes de inscripción, oposiciones, correcciones, cambios y exclusiones del mismo.

2.– Formular la lista de los electores a quienes corresponda votar en cada Mesa Electoral, de su jurisdicción, de conformidad con lo que en otro lugar se dispone.

3.– Nombrar los miembros y Secretarios de las Mesas Electorales que deban funcionar en su jurisdicción, así como los respectivos sustitutos, y los escribientes y sustitutos de éstos.

4.– Gestionar los locales donde deban funcionar las Mesas Electorales de su Jurisdicción.

5.– Velar por la distribución adecuada y oportuna del equipo, los materiales, boletas. sobres de votación,, sobres para boletas protestadas, útiles e impresos necesarios para el buen funcionamiento de las Mesas Electorales de su jurisdicción.

6.– Verificar el cómputo de la votación efectuada en cada elección en el Distrito Nacional, a la vista de las relaciones formuladas por las Mesas Electorales y de conformidad con las disposiciones que al efecto establece en otro lugar la presente ley.

7.– Formular, basándose en el cómputo efectuado según se ha dicho en el párrafo anterior, la relación general de la votación en el Distrito Nacional, así como la relación expresiva de los candidatos para cargos de elección por el Distrito Nacional que hubieren resultado elegidos, de conformidad con lo que en otra parte de la presente ley se dispone.

8.– Expedir los correspondientes certificados de elección a los candidatos que hubieren resultado elegidos para los cargos de elección por el Distrito, y proclamarlos.

9.– Anular las elecciones realizadas en una o más Mesas de su jurisdicción, cuando hubiere lugar a ello.

10.– Una vez terminada una elección, tomar las disposiciones pertinentes a la conservación del equipo y mobiliario utilizado en ella, de conformidad con lo que en otro lugar se dispone.

11.– Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdicción, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que le conciernan, así como las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral.

12.– Ejercer, en general, las atribuciones que correspondan a las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales Electorales, en cuanto concierne al Distrito Nacional.

Artículo 11.– Sesiones: Quorum y Mayoría.– La Junta Electoral del Distrito Nacional celebrará sesiones ordinarias conforme lo determinen los reglamentos que al efecto dicte la Junta Central Electoral. Celebrará, además, sesiones extraordinarias cuantas veces fuere menester para el cumplimiento de sus atribuciones.

No podrá constituirse en sesión ni deliberar válidamente sin que se encuentren presentes todos sus miembros, titulares o sustitutos, y sin que haya constancia de que han sido debidamente convocados los delegados de partidos políticos reconocidos acreditados ante ella y sus respectivos sustitutos.

En caso de que faltare un miembro titular y sus dos sustitutos, llenará la vacante uno cualquiera de los suplentes de los miembros titulares.

Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

CAPITULO V

De las Juntas Municipales Electorales

Artículo 12.– Atribuciones.– Corresponden a las Juntas Municipales Electorales, además de las que resulten de otras disposiciones de la Constitución y de la Ley, las atribuciones siguientes:

1.– Formar y mantener el Registro Electoral: conocer y resolver sobre las solicitudes de inscripción; oposiciones, correcciones, cambios y exclusiones del mismo.

2.– Formular la lista de los electores a quienes corresponda votar en cada Mesa Electoral de su jurisdicción, de conformidad con lo que en otro lugar se dispone.

3.– Nombrar los miembros y secretarios de las Mesas Electorales que deban funcionar en su jurisdicción, así como los respectivos sustitutos, y los escribientes y sustitutos de éstos.

4.– Gestionar los locales donde deban funcionar las Mesas Electorales de su jurisdicción.

5.– Velar por la distribución adecuada y oportuna del equipo, los materiales, boletas, sobres de votación, sobres para boletas observadas, útiles e impresos necesarios para el buen funcionamiento de las Mesas Electorales de su jurisdicción.

6.– Verificar el cómputo de la votación efectuada en cada elección en el municipio, a la vista de las relaciones formuladas por las Mesas Electorales y de conformidad con las disposiciones que al efecto establece en otro lugar la presente ley.

7.– Formular, basándose en el cómputo efectuado según se ha dicho en el párrafo que antecede, la relación general de la votación en el municipio, así como la relación expresiva de los

candidatos que hubieren resultado elegidos para cargos municipales, de conformidad con lo que en otra parte de la presente ley se dispone.

8.– Expedir los correspondientes certificados de elección a los candidatos que hubieren resultado elegidos a cargos municipales, y proclamarlos.

9.– Anular las elecciones realizadas en una o más Mesas de su jurisdicción, cuando hubiere lugar a ello.

10.– Una vez terminada una elección, tomar las disposiciones pertinentes a la conservación del equipo y mobiliario utilizado en ella, de conformidad con lo que en otro lugar se dispone.

11.– Cumplir y hacer cumplir, dentro de su jurisdicción, las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que les conciernen, así como las disposiciones emanadas de la Junta Central Electoral.

Artículo 13.– Sesiones: Quorum y Mayoría. Las Juntas Municipales Electorales celebrarán sesiones ordinarias conforme lo determinen los reglamentos que al efecto dicte la Junta Central Electoral. Celebrarán, además, sesiones extraordinarias cuantas veces fuere menester para el cumplimiento de sus atribuciones.

No podrán constituirse en sesión ni deliberar válidamente sin que se encuentren presentes todos sus miembros, titulares o sustitutos, y sin que haya constancia de que han sido debidamente convocados los delegados de partidos políticos reconocidos acreditados ante ellas y sus respectivos sustitutos.

En caso de que faltare un miembro titular y sus dos sustitutos, llenará la vacante uno cualquiera de los suplentes de los miembros titulares.

Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

Capítulo VI

De las Mesas Electorales

Artículo 14.– Creación, traslado, fusión y supresión.– La Junta Central Electoral creará con 30 días de anticipación, las

Mesas Electorales que juzgue necesarias para cada elección, determinará los lugares donde deban situarse haciéndolo de conocimiento público, y señalará la demarcación territorial que haya de abarcar cada una. Para ello tomará en consideración las distancias y el número de electores inscritos en el Registro de cada barrio o sección, de modo que las votaciones puedan efectuarse con regularidad. En ningún caso se asignarán más de trescientos electores a una Mesa Electoral. Podrá también, conforme lo requieran las circunstancias, disponer el traslado o la fusión de dichas Mesas Electorales.

Podrá crearse más de una Mesa Electoral para un barrio o sección cuando así lo requiera el número de electores inscritos en el Registro Electoral, ubicándolas en lugares que faciliten el acceso a los electores.

Nunca podrán agruparse en la demarcación de una misma Mesa Electoral barrios, secciones o lugares que no colinden entre sí.

Artículo 15.— Designación y numeración.— Las Mesas Electorales se designarán por el nombre del barrio o sección, el municipio y la provincia a que pertenezcan, y se distinguirán entre sí por un número de orden, comenzando por el número uno en cada municipio.

Artículo 16.— Composición.— Cada Mesa Electoral se compondrá de un presidente, dos vocales y un secretario, con sus respectivos sustitutos, que serán nombrados por la respectiva Junta Municipal Electoral.

Para ser miembro o secretario, titular o sustituto, de una Mesa Electoral es preciso ser elector y tener su residencia en el municipio al cual corresponda ésta.

Artículo 17.— Escribientes.— Para cada Mesa Electoral se designarán por lo menos dos escribientes, con sus respectivos sustitutos, todos los cuales deberán reunir las mismas condiciones que exige el artículo que antecede para ser miembro o secretario de las Mesas Electorales.

Artículo 18.— Nombramientos.— Cada Junta Municipal Electoral procederá al nombramiento del personal de las Mesas Electorales que hayan de funcionar en su jurisdicción, por lo menos quince días antes de la fecha en que deban celebrarse las elecciones.

Las credenciales expresarán el nombre de la persona designada, el cargo, la designación de la Mesa Electoral, el lugar donde estará situada, la fecha en que hayan de celebrarse las elecciones, y el nombre del sustituto o del titular correspondiente, según el caso. Serán firmadas por el presidente y el secretario de la Junta Municipal Electoral y llevarán estampado el sello de ésta.

Las credenciales deberán ser entregadas a los designados a más tardar ocho días antes de la fecha de las elecciones, ya sea personalmente o por mediación del Síndico Municipal.

Si por cualquier causa legal la persona designada para un cargo en una Mesa Electoral no pudiere desempeñarlo, deberá tan pronto como reciba la credencial correspondiente o sobrevenga la causa que le impida servir, ponerlo en conocimiento de la correspondiente Junta Municipal Electoral por escrito, expresando la causa y acompañando la prueba que la justifique, para que dicha junta resuelva en consecuencia.

Capítulo VII

Disposiciones comunes a todas las juntas electorales

Sección I

De los miembros y secretarios de los organismos electorales

Artículo 19.- Residencia.- Para ser miembro o secretario titular o sustituto, de la Junta Central Electoral o de cualquier Junta Electoral se requiere, además de satisfacer las condiciones requeridas por la Constitución, tener o fijar su residencia en el municipio donde tenga su asiento el cuerpo electoral a que pertenezca.

Artículo 20.- Parentesco o afinidad.- No pueden ser miembros ni secretarios de un mismo órgano electoral personas que tengan vínculos de parentesco o afinidad hasta el tercer grado inclusive, ya sea entre sí o con candidatos o con miembros de órganos directivos o con delegados, que actúen en la jurisdicción del cuerpo electoral a que pertenezcan.

Cuando no sea posible integrar una Junta Departamental, Provincial o Municipal Electoral con personas respecto de quienes no existan los vínculos de parentesco o afinidad indicados en este artículo, la Junta Central Electoral podrá resolver el caso prescindiendo de este requisito.

De igual facultad estarán investidas las Juntas Municipales Electorales en lo que se refiere al nombramiento del personal de las Mesas Electorales.

Artículo 21.– Antecedentes penales.– Están incapacitadas para ser miembros o secretarios de las Junta Electorales, titulares o sustitutos, las personas que se encuentren subjudice o hayan sido condenadas por infracción a la Ley electoral, por crimen en general, por delito contra la propiedad, por soborno o cohecho, por falsificación o por malversación de fondos públicos.

Artículo 22.– Afiliación política.– Al designar los miembros y secretarios de las Juntas Electorales y sus respectivos sustitutos se deberá tratar de designar a individuos que no estén afiliados a ningún partido político; y si ésto no fuere posible, se deberá nombrar afiliados de los diversos partidos que concurran a la elección, de tal modo que éstos queden en lo posible equilibrados; y especialmente se tratará en todos los casos de que el presidente y el secretario, así como sus respectivos sustitutos, pertenezcan a partidos políticos opuestos.

Artículo 23.– Carácter obligatorio y gratuito.– Los cargos de miembros de Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales y de Mesas Electorales, tanto titulares como sustitutos, son de aceptación obligatoria. Aquellos que fueren nombrados para desempeñarlos no podrán rehusarlos ni abstenerse de ocuparlos y ejercerlos, ni renunciar a ellos, a no ser por motivos graves, debidamente justificados.

El presidente y el secretario y los miembros de la Junta Central Electoral disfrutarán de sueldos permanentes que se consignarán en la Ley de Gastos Públicos, también disfrutarán de iguales sueldos los suplentes de dichos funcionarios cuando sean llamados a reemplazar los titulares en el ejercicio de sus funciones.

Los secretarios de las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales recibirán sueldos, que podrán ser permanentes o pagaderos durante determinados períodos, según lo disponga la Junta Central Electoral.

Serán asimismo remunerados con sueldos permanentes o temporales, según lo disponga la Junta, los empleados auxiliares de ésta o de las Juntas dependientes de aquella.

Los cargos de presidente y vocales, tanto titulares como sustitutos, de las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales Electorales serán ejercidos gratuitamente, salvo disposiciones legales en otro sentido.

Artículo 24.– Impugnaciones y recusaciones.– La designación de un miembro o de un secretario, titular o sustituto, de una junta electoral permanente podrá ser impugnada por medio de un escrito motivado que será dirigido a la Junta Central Electoral dentro de los 10 días siguientes a la designación. La Junta Central Electoral, dentro de veinticuatro horas, enviará copia por secretaría de ese escrito a los partidos políticos reconocidos, y celebrará una sesión a más tardar ocho días después, a fin de conocer de la impugnación formulada. Esta será resuelta dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la sesión, sin que esa decisión pueda ser objeto de recurso alguno.

Igual procedimiento e iguales normas regirán para el caso de recusación de los miembros de las juntas electorales.

Cuando la impugnación o la recusación fueren de urgencia y de notoria gravedad, la Junta Central Electoral podrá suspender en el ejercicio de su cargo a la persona impugnada o recusada.

En el caso de que fueren impugnados o recusados uno o más miembros de la Junta Central Electoral, conocerá de la impugnación o recusación la misma Junta, completada o integrada por los sustitutos correspondientes.

Cuando la impugnación o recusación se refiera a miembros o secretarios de las Mesas Electorales, el escrito será dirigido, dentro de los tres días siguientes a la designación, a la Junta Municipal correspondiente, la cual, después de haberlo comunicado a los partidos políticos reconocidos dentro de las

veinticuatro horas de recibido, conocerá del caso y lo decidirá dentro de los tres días siguientes. Estas decisiones no serán susceptibles de recurso alguno.

No se admitirán por ninguna causa impugnaciones o recusaciones dirigidas contra la totalidad de los miembros y sustitutos de la Junta Central Electoral o de una misma Junta, ni contra un número de miembros y sustitutos que impida la integración regular de la misma.

Cuando sea admitida por la Junta Central Electoral la impugnación de uno de sus propios miembros, titulares o suplentes, éste cesará de inmediato en el ejercicio de sus funciones, y se dará conocimiento del caso al presidente del Senado a fin de que éste promueva la elección por la Asamblea Nacional de la persona que deba llenar la vacante, en la forma que la Constitución establece.

Cuando la Junta Central Electoral admita la impugnación de uno o más miembros, titulares o suplentes, de una Junta Departamental Provincial o Municipal, éstos cesarán inmediatamente en el ejercicio de sus funciones, y la Junta Central Electoral procederá a designar la o las personas que deban reemplazarles.

Cuando se admita una recusación, la persona que hubiere sido objeto de ella quedará impedida de actuar en el asunto o en el caso a que se refiera la recusación.

Artículo 25.— Funciones de los sustitutos. Los sustitutos de los miembros de la Junta Central Electoral y de las Juntas Electorales reemplazarán a éstos temporalmente en los casos de recusación, así como en los de excusa legítima, o cuando sin ella dejaren de concurrir a integrar las juntas a la hora señalada para una sesión. En caso de renuncia, muerte o inhabilitación, les reemplazarán hasta cuando se haya hecho nueva designación por quien corresponda.

Comenzada una sesión con asistencia de uno o más sustitutos, éstos continuarán en ella hasta terminarla.

Sección II

De los delegados de partidos políticos.

Artículo 26.- Designación. Condiciones.- Todo partido político reconocido que haya declarado su propósito de concurrir a una elección y de presentar candidaturas podrá designar un delegado, con el sustituto correspondiente, ante la Junta Central Electoral y ante cada Junta y Mesa Electoral.

Estos nombramientos, así como la remoción de los designados, pueden ser hechos libremente y en todo tiempo por el organismo directivo del partido que representen dentro de la jurisdicción de la Junta ante la cual sean acreditados.

No podrán ser nombrados delegados de partidos políticos, ya sean titulares o sustitutos, los parientes o afines hasta el tercer grado inclusive de cualquiera de los miembros titulares o sustitutos de la Junta ante la cual sean acreditados o del secretario titular o sustituto de la misma.

Los delegados ante una Junta Electoral permanente y sus sustitutos deben residir en la ciudad o villa donde tenga su asiento la junta ante la cual sean acreditados.

Artículo 27.- Sustitutos de delegados.- Los sustitutos de los delegados reemplazarán temporalmente a éstos en los casos de excusa, ausencia o impedimento temporal; y en caso de renuncia, muerte o inhabilitación, ejercerán sus funciones hasta cuando el organismo a quien corresponda haya hecho nueva designación.

En ausencia de un delegado y de su sustituto, podrá desempeñar sus funciones un candidato del partido que aquel represente.

Artículo 28.- Caso de falta de designación.- Cuando un partido que tenga el derecho de hacerlo de conformidad con esta ley no hubiere nombrado su delegado ante una Junta Electoral, o el designado hubiere cesado y no hubiere sido reemplazado ésta podrá constituirse válidamente sin su participación hasta cuando lo hiciere.

Artículo 29.- Funciones de los delegados.- Además de las atribuciones que por ésta u otra ley les sean conferidas, corresponde a los delegados, en sentido general, la representación de los partidos que les hayan designado ante los respectivos organismos electorales. Toda comunicación,

notificación, exposición, petición, reclamación, protesta, impugnación o recurso podrán ser presentados por mediación de dichos delegados, a menos que una disposición legal establezca un procedimiento distinto. Todas las comunicaciones, notificaciones, citaciones o avisos de cualquier género que las Juntas Electorales deben dirigir a los partidos reconocidos serán hechas válidamente en la persona o a la dirección postal del correspondiente delegado, a menos que la ley determine otro procedimiento para ello.

Los delegados deben ser convocados a todas las sesiones que celebren las Juntas ante las cuales estén acreditados, del mismo modo y al mismo tiempo que los miembros de dichas Juntas. Participarán en dichas sesiones con voz, pero sin voto. Están en el deber de firmar todas las minutas, actas, relaciones y demás documentos oficiales que emanen de la Junta; pero si dejaren de hacerlo por cualquier motivo, esta circunstancia no invalidará el documento de que se trate, y de ello se hará mención en acta, con expresión del activo.

Sección III

Del funcionamiento de los organismos electorales

Artículo 30.— Sesiones: Publicidad y frecuencia. Tanto la Junta Central Electoral como las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales Electorales, celebrarán sus sesiones públicamente en los locales que les sean destinados, y con la frecuencia que fuere menester para el cabal ejercicio de las atribuciones que les corresponden.

Además de las sesiones ordinarias que se establezcan por disposiciones reglamentarias que al efecto dictará la Junta Central Electoral, celebrarán sesiones extraordinarias siempre que el interés público lo exija, por disposición del presidente, o cuando lo pidieren dos de sus miembros.

Artículo 31.— Convocatorias.— Para la celebración de las sesiones el presidente ordenará que sean convocados los vocales y sus sustitutos, así como los delegados de partidos políticos y sus respectivos sustitutos. El secretario enviará la convocatoria por un propio o por cartas certificadas, por lo menos cuarenta y ocho horas antes de la señalada para la

sesión, expresando siempre el día, la hora y el objeto de la reunión. En caso de urgencia el presidente podrá ordenar que la convocatoria sea hecha con menos tiempo de anticipación; pero deberá hacer constancia por escrito de que todas las personas a quienes vá dirigida han sido notificadas con antelación suficiente para concurrir.

Artículo 32.– Minutas y actas.– El secretario anotará brevemente en un libro de minutas los acuerdos y particulares de la deliberación que sean necesarios para el acta de cada sesión, y aprobados que fueren o hechas las oportunas observaciones o aclaraciones, serán firmados por todos los miembros y por todos los delegados de partidos políticos presentes. El secretario procederá bajo su responsabilidad a extender, conforme dichas notas, el acta correspondiente, en un libro bien encuadernado. Este libro, lo mismo que el de minutas a que se ha hecho referencia en este artículo, será autorizado en la primera y última páginas por el presidente y el secretario y foliado y sellado debidamente. En cada acta se consignarán los nombres del presidente, los vocales y los delegados de partidos políticos o de sus respectivos sustitutos que asistieren.

Cuando hubiere discrepancia en alguna materia, se harán constar los votos favorables y contrarios, y los fundamentos del acuerdo votado.

Después de extendidas las actas en el libro correspondiente, serán firmadas por el presidente y el secretario, antes de que, con arreglo a esta ley, se fije copia de las mismas en la tablilla de publicaciones. Firmadas las actas y fijadas sus copias en la tablilla no podrán ser objeto de enmiendas, tachas o entrelíneas, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las correcciones por errores sufridos en la redacción de las actas se harán en el libro destinado a éstas, mediante acuerdo de la Junta Central Electoral o de las Juntas, haciendo constar en éste la página en que se hubiere cometido el error, y consignando en ella, por nota marginal, el acuerdo contentivo de las rectificaciones o enmiendas.

Artículo 33.– Tablillas de publicaciones.– Tanto la Junta Central Electoral como cada Junta Departamental, Provincial o Municipal Electoral harán fijar en la parte exterior del local

donde tengan sus oficinas una tablilla de tamaño adecuado, nunca menor de cincuenta centímetros por cada lado, situada de tal manera que los avisos que se fijen en ella estén, en cuanto sea posible, a cubierto de la intemperie y puedan ser leídos comodamente.

Si fuere necesario cambiar de sitio la tablilla, se hará fijar en el sitio donde antes se encontraba un aviso que indique el lugar adonde haya sido trasladada. Este aviso deberá permanecer fijado por un término no menor de quince días después del traslado.

Siempre que en la presente ley se disponga la publicación de actas, avisos u otros documentos, sin determinarse el modo de publicación, se entenderá que ésta debe hacerse por medio de la fijación en las tablillas antes mencionadas.

Artículo 34.– Publicación de actas.– A más tardar el día que siga a aquel en que se hubiere celebrado sesión, el secretario fijará en la tablilla una copia fiel del acta, autorizada con su firma y con el sello de la Junta Central Electoral o de las Juntas.

Artículo 35.– Sello.– Tanto la Junta Central Electoral como cada una de las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales Electorales tendrán un sello, en el cual aparecerá su denominación y jurisdicción territorial, y que será estampado en todas sus actas, registros y documentos oficiales. Este sello estará bajo la custodia y responsabilidad del secretario.

Las Mesas Electorales serán provistas de sellos que llevarán las palabras "Mesa Electoral", seguidas del número que le corresponda, y del nombre del municipio.

Artículo 36.– Personal auxiliar.– Tanto la Junta Central Electoral como cada Junta Departamental, Provincial o Municipal Electoral nombrarán los empleados que les fueren necesarios para su servicio, en el número, por el tiempo y con la remuneración que disponga la Junta Central Electoral con cargo a las apropiaciones de fondos que se hicieren para tal fin.

Sección IV

Atribuciones de los Secretarios

Artículo 37.- Atribuciones Generales.- El secretario deberá estar presente en todas las sesiones, y no tendrá voz ni voto. Además de las atribuciones que le sean conferidas por otras disposiciones de esta ley, tendrá a su cargo el sello, los registros y los archivos de la Junta Superior Central Electoral o de las Juntas a que pertenezca, que deberá conservar en las oficinas de la misma o en cualquier otro lugar en que por acuerdo de dicha Junta Central Electoral o Juntas se le ordene; dará cuenta sin demora al Presidente de todas las comunicaciones que se reciban dirigidas a éste o a la Junta Electoral o a las Juntas o al secretario, así como de todos los documentos que se presenten; llevará la correspondencia y las cuentas; tendrá bajo su dirección inmediata al personal auxiliar, y cumplirá todo lo que por la Junta Electoral o las Juntas o su Presidente se le encomendare.

El secretario deberá residir en la localidad en que tenga su asiento el organismo electoral a que pertenezca.

Artículo 38.- Recepción y entrega de documentos.- Salvo lo que para los casos especiales se disponga por esta ley, todos los documentos que se presentaren a la Junta Central Electoral o a una Junta Departamental, Provincial o Municipal Electoral serán entregados al secretario de la misma quien hará constar al dorso o al margen de cada uno el día hora y minutos en que lo recibiere y el nombre del organismo en que actúe, estampando el sello de éste y su firma; y entregará a la persona que lo hubiere presentado un recibo fechado, firmado y sellado por él, en el que expresará el día, hora y minutos de la presentación y los fines para los cuales fué entregado dicho documento.

No. 1.- De todo documento que entregare el secretario, percibirá igual recibo, explicando la naturaleza del documento, el número de páginas de que conste, y hasta donde fuere posible su contenido.

No. 2.- Los secretarios registrarán en libros destinados al efecto los documentos que recibieren o entregaren. En cada asiento se hará constar el día, hora y minutos de la entrega o recibo, el nombre de la persona que la haga o a quien se haga, con relación concisa del objeto de cada documento o notificación y de la persona o personas cuyos derechos afectare el documento de que se trate. Los asientos correspondientes se harán en el registro el mismo día del recibo o de la entrega, y de ser posible en el mismo momento.

No. 3.– En la misma forma procederá el secretario con respecto a la correspondencia que se dirija a la Junta Superior Electoral o a las Juntas o a los presidentes de ellas.

TITULO III

DEL REGISTRO ELECTORAL

Capítulo I

De la formación del registro electoral

Artículo 39.– Normas a que está sujeto.– La inscripción de los electores será hecha en cada municipio por la Junta Municipal Electoral correspondiente, en el Registro Electoral, de conformidad con las disposiciones de la presente ley y con las que al efecto dictare la Junta Central Electoral.

Artículo 40.– Libros de que se compone.– Cada Junta Municipal Electoral llevará dos libros, uno que se denominará Registro Electoral Cronológico, y otro que se denominará Registro Electoral Alfabético. Ambos llevarán el nombre del municipio y el de la provincia a que correspondan, salvo los del Distrito Nacional, que llevarán el nombre de éste.

Artículo 41.– Registro Electoral Cronológico.– El Registro Electoral Cronológico se destinará a inscribir a los electores por orden numérico a medida que la Junta Municipal Electoral autorice la inscripción. En la inscripción se hará constar el número de orden que le corresponda, comenzando en cada municipio con el número uno y continuando sin interrupción indefinidamente; los apellidos y nombres del lector, el nombre del barrio o de la sección donde resida, su sexo, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, si está o nó capacitado para votar sin ayuda, y en este último caso la causa de la incapacidad; y la fecha de la inscripción.

Artículo 42.– Registro Electoral Alfabétido.– El Registro Electoral Alfabético estará compuesto de tantas partes cuantos sean los barrios y secciones que integren el municipio. En cada parte se asentarán por orden alfabético de la primera letra de los apellidos, y precedidas del mismo número de orden que les haya correspondido en el Registro Electoral Cronológico, las

inscripciones de los electores, tan pronto como hayan sido hechas en el Registro Electoral Cronológico y consignando en ellas los mismos datos contenidos en éste.

Artículo 43.– Forma de los libros de registro.– Todos los libros del Registro Electoral estará fuertemente encuadernados. Cuando el Registro Electoral Cronológico requiera por su extensión el uso de varios libros, éstos serán numerados en orden consecutivo, y también lo serán las páginas de que consten, comenzando con el número uno en cada libro.

Las páginas de la parte del Registro Electoral Alfabético que corresponda a cada barrio o sección serán numeradas en serie consecutiva, comenzando con el número uno y continuando indefinidamente, aunque dicha parte conste de varios libros, caso en el cual la numeración de las páginas de cada uno comenzará con el número que siga a aquel en que terminó el anterior; y en cada libro se indicarán las letras iniciales de los apellidos de electores a que esté destinado.

A fin de consignar todos los datos en forma de tabla, las páginas de los libros que formen el Registro Electoral estarán rayadas formando columnas para estos datos, y a la derecha se agregarán cuatro columnas, dos de ellas destinadas a asentar la fecha y la causa de la exclusión cuando ocurra, y las otras dos a asentar la fecha del cambio de residencia del elector dentro del mismo municipio y el barrio o sección adonde la hubiere trasladado.

Artículo 44.– Fuerza probatoria.– Los asientos que se hagan tanto en el Registro Electoral Cronológico como en el Registro Electoral Alfabético, llevados regularmente, harán fé del hecho de la inscripción y de los datos consignados en ella. En el caso de discrepancia entre las menciones contenidas en uno y otro registro, se tendrán por ciertas hasta prueba en contrario las que aparezcan en el Registro Electoral Cronológico.

Tanto en el Registro Electoral Cronológico como en el Alfabético se hará una inscripción en cada línea horizontal, y no se dejarán líneas en blanco ni valdrán las inscripciones entre líneas.

Cuando se haya llenado la penúltima hoja de un libro del Registro Cronológico se pondrá en la última hoja una

certificación firmada por el presidente y por el secretario, así como por los delegados de partidos que estén presentes y deseen hacerlo, la cual expresará el número total de electores inscritos en dicho tomo, y que se han hecho en forma legal todos los asientos prescritos por la ley. Si la inscripción hubiere de continuarse en otro libro, se hará constar así en la certificación, expresando el número del libro en que prosiga.

En los libros destinados al Registro Electoral Alfabético se destinará para cada letra espacio bastante amplio para asentar un número mayor de inscripciones que aquél en que se estime el de los electores del barrio o la sección a que corresponda cuyos apellidos comiencen con esa letra.

Capítulo II

De las solicitudes de inscripción

Artículo 45.– Quienes pueden solicitar la inscripción.–
La inscripción puede ser requerida personalmente por cada interesado, o por los organismos oficiales de los partidos en el Municipio donde se solicite la inscripción.

Artículo 46.– Solicitud individual de inscripción.–
Todo dominicano de uno u otro sexo, mayor de diez y ocho años, o que sea o hubiere sido casado aunque no haya cumplido esa edad, y que no haya perdido los derechos de ciudadano por alguna de las causas previstas por la Constitución, puede solicitar su inscripción como elector en todo –tiempo, salvo en los últimos quince días que preceden a una elección, siempre que no estuviere ya inscrito y que no tenga conocimiento de que su nombre figura en alguna solicitud de inscripción presentada por un partido.

Artículo 47.– Solicitud de inscripción por partidos.–
Cualquier partido político reconocido puede requerir de una Junta Municipal Electoral la inscripción de ciudadanos de una misma sección o barrio que sean aptos para ser inscritos como electores de conformidad con la Constitución y con esta Ley y que no lo hubieren sido anteriormente; para lo cual enviará a dicha Junta una nómina de las personas cuya inscripción pida, con expresión de todos los datos requeridos por esta ley. Si las personas comprendidas en la solicitud o algunas de ellas hubieren sido inscritas anteriormente en el Registro Electoral

de otro municipio, se anexarán los correspondientes certificados de exclusión.

No. 1.– Las solicitudes de inscripción pueden ser hechas por los partidos en todo tiempo, salvo en los últimos treinta días precedentes al de una elección.

No. 2.– No podrán incluirse en una misma solicitud personas que residan en barrios o secciones distintos.

No. 3.– Las solicitudes deberán estar firmadas por el Presidente y el Secretario del organismo municipal, provincial, departamental, o nacional del partido en cuyo nombre sean hechas.

No. 4.– Para los fines de este artículo los partidos políticos podrán actuar aisladamente aunque hubieren concertado alianzas o coaliciones.

Artículo 48.– Requisito de residencia en el Municipio. Para que una persona pueda ser inscrita deberá tener, en el momento en que se solicite su inscripción, por lo menos tres meses de residencia en el municipio. Para los efectos de esta disposición los períodos de residencia se contarán por meses cumplidos, y la prueba se hará, en caso de objeción, por certificación del Síndico o de la autoridad rural del lugar o por el testimonio de dos o más personas residentes en él.

Artículo 49.– Contenido de la solicitud.– En toda petición de inscripción se consignarán todos los datos que conforme a las disposiciones que anteceden han de ser consignados en ésta, así como la fecha de la petición y el tiempo que la persona cuya inscripción se solicite tenga de residencia en el municipio, y los municipios donde haya residido desde tres meses antes de la última elección. Se expresará además el municipio en que se hubiere hecho la última inscripción de su nombre en el Registro Electoral, o la declaración de que no ha sido inscrito anteriormente en ningún municipio.

Cuando haya habido inscripción anterior en algún municipio, deberá acompañar a la solicitud un certificado de exclusión autorizado por el secretario de la Junta Municipal Electoral correspondiente.

Artículo 50.– Solicitud de inscripción de naturalizados.– Cuando se solicite la inscripción de una persona que no sea dominicano de nacimiento se indicarán en la solicitud el número y la fecha de la Gaceta Oficial o el tomo y la página de la Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones en que se hubiere publicado el juramento requerido por la ley.

Artículo 51.– Examen preliminar, publicación y comunicación de las solicitudes. Inmediatamente después que el secretario de una Junta Municipal Electoral reciba una petición de inscripción, ya sea ésta presentada personalmente por el interesado o por un partido político, procederá a examinarla para verificar si han sido consignados en ella todos los datos y si está acompañada de todos los documentos que la ley requiere, comunicándolo sin demora en caso contrario al solicitante a fin de que la complete.

Dentro de los cinco días después de depositada o de completada la solicitud, la Junta Municipal Electoral procederá a verificar si las personas cuya inscripción se solicita aparecen o no inscritas con anterioridad en el registro electoral a su cargo.

Una vez hecha esta comprobación, la Junta hará publicar la solicitud en la tablilla y enviará una lista de las personas que no aparezcan inscritas ya en el registro, a todos los partidos políticos reconocidos en lo que se refiere a las solicitudes individuales, y a los demás partidos políticos reconocidos de las inscripciones solicitadas por un partido, a fin de que éstos puedan investigar si las personas cuya inscripción como electores haya sido solicitada tienen o no el tiempo de residencia en el municipio requerido por la ley, y si se encuentran o no incursos en alguno de los casos de pérdida o privación temporal del derecho de elegir que la Constitución y las leyes establecen.

Artículo 52.– Conocimiento y decisión de las solicitudes. Transcurridos diez días de publicada y comunicada cada solicitud de inscripción según se dispone por el artículo precedente, la Junta Municipal Electoral conocerá de ella y ordenará o no la inscripción, según proceda, después de decidir respecto de las objeciones que se hubieren producido.

Si transcurridos los plazos precedentemente establecidos la Junta Municipal Electoral no hubiere decidido respecto de una

solicitud, a menos que esté pendiente alguna oposición, la Junta Central Electoral, a requerimiento de parte interesada, conocerá del caso y ordenará o nó la inscripción.

Capítulo III

De las oposiciones a la inscripción

Artículo 53.– Forma, procedimiento y decisión. Toda oposición será presentada por el representante de un partido político o por cualquier otra persona o entidad que tenga interés en ello, hasta 5 días antes de la fecha fijada para las elecciones, mediante escrito motivado entregado al secretario de la junta municipal electoral, quien dará recibo. Copia de dicho escrito será fijada inmediatamente en la tablilla de publicaciones de la junta y será comunicado tanto a los representantes de los partidos políticos reconocidos como a las personas cuya inscripción haya sido impugnada, y se les citará a comparecer ante la junta para el día y hora que ésta indicará y que deberá ser dentro de los tres días siguientes a la oposición, a fin de examinar el caso después de oir, si comparecieron, al oponente, a los representantes de los partidos políticos, y a las personas cuya solicitud de inscripción haya sido impugnada, debiendo resolverlo dentro de las veinticuatro horas siguientes.

CAPITULO IV

De la Inscripción

Artículo 54.– Publicación de inscripciones acordadas.– Dentro de las veinticuatro horas que sigan a toda reunión de la Junta Municipal electoral en la que se hubieren acordado inscripciones, el Secretario de la Junta procederá a asentarlas en el Registro Electoral Cronológico y en el Alfabético, y fijará en la tablilla de publicaciones una lista o relación de las mismas, agrupándolas por barrios o secciones y en el orden alfabético de la primera letra de los apellidos. En el curso de cuarenta y ocho horas más hará fijar en cada barrio o sección las listas de las inscripciones acordadas de personas que pertenezcan a dicho barrio o sección. Para tal fin el secretario entregará al síndico Municipal las listas que deban ser fijadas en los barrios y secciones de su jurisdicción, y este funcionario las hará fijar por medio de tablillas en los lugares que hayan sido indicados por

la Junta, debiendo preferirse las puertas de las casas escuelas, si las hubiere, o las puertas de la casa de la autoridad rural correspondiente. La Junta Municipal Electoral podrá ordenar que se envíe el número de copias que considere útiles para el mejor difusión en aquellos barrios o secciones cuya extensión territorial lo requiera. De cada entrega el secretario deberá percibir un recibo bien especificado.

CAPITULO V

De las correcciones en el Registro Electoral y de las Exclusiones del mismo

Artículo 55.– Correcciones.– Todos aquellos que de conformidad con la presente ley tienen calidad para solicitar la inscripción de un ciudadano en el Registro Electoral la tendrán también para pedir a la Junta Municipal Electoral correspondiente la corrección del nombre o de cualquier otro de los particulares a él referentes que hubieren sido consignados erróneamente en dicho registro; y en este caso la junta procederá, probado el error, a enmendar la inscripción, poniendo sus iniciales al márgen el presidente y el secretario, de todo lo cual se dará constancia en el acta correspondiente.

Artículo 56.– Cambios de residencia.– Cuando un ciudadano inscrito en el Registro Electoral de un municipio haya trasladado su residencia de un barrio o sección a otro barrio o sección del mismo municipio, aquellos que de conformidad con la ley están facultados para solicitar su inscripción deberán pedir a la Junta Municipal Electoral correspondiente la anotación del cambio, anotándose la fecha y el nombre del barrio o la sección adonde se hubiere trasladado

Artículo 57.– Peticiones de exclusión.– Cualquier ciudadano puede en todo tiempo, salvo en los últimos quince días precedentes a una elección, pedir por escrito a la correspondiente Junta Municipal Electoral, que se excluya su nombre del Registro Electoral, consignando concretamente los hechos que justifiquen la exclusión. En la petición se consignará, además, el actual domicilio y dirección postal del solicitante. Igual solicitud podrán hacer los partidos políticos reconocidos hasta treinta días antes de la elección.

Artículo 58.— Tramitación de peticiones de exclusión de otros.— Dentro de las tres horas de haber recibido una petición de exclusión que no esté suscrita por la misma persona cuya exclusión se solicite, el secretario de la Junta Municipal Electoral fijará en la tablilla de publicaciones de ésta un aviso de haberla recibido, y dentro de las veinticuatro horas siguientes la Junta hará comunicar la petición tanto a los representantes de los partidos políticos reconocidos como a las personas cuya exclusión se solicite. Las notificaciones a estas personas serán hechas por correo certificado, dirigiéndolas tanto a la residencia indicada en el Registro Electoral como a la dirección postal o residencia actual que se consigne en la petición de exclusión. Al mismo tiempo la Junta citará al peticionario, a los representantes de los partidos políticos reconocidos y a las personas de cuya exclusión se trate, para que comparezcan ante ella en el día y la hora que indicará y que deberá ser dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la petición. Después de oir a los que comparezcan la Junta examinará el caso y lo resolverá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Cuando se demuestre que una persona cuya exclusión se haya solicitado no tiene derecho a permanecer en el Registro Electoral, la Junta ordenará que sea excluida del mismo.

Artículo 59.— Relaciones de personas privadas del derecho de elegir.— Dentro de los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año las Secretarías de Estado bajo cuya dependencia se encuentren las fuerzas armadas y los cuerpos de policía remitirán a la Junta Central Electoral una relación de los ciudadanos que en el trimestre anterior hubieren entrado a pertenecer a las fuerzas armadas y a los cuerpos de policía, con expresión de sus nombres y apellidos y el número y serie de sus cédulas personales de identidad.

En los mismos plazos la Secretaría de Estado de Justicia remitirá a la Junta Central Electoral una relación de las personas respecto de quienes hayan adquirido autoridad de cosa juzgada durante el trimestre precedente sentencias que conlleven la pérdida de los derechos de ciudadano de conformidad con la Constitución. En dichas relaciones se expresarán, respecto de cada una de las personas comprendidas en ellas, los nombres y apellidos y el número y serie de la cédula personal de identidad.

En los plazos anteriormente señalados los Oficiales del Estado Civil remitirán a la Junta Central Electoral relaciones de las inscripciones de actas de defunción de personas mayores de diez y ocho años que hubieren hecho en los registros a su cargo durante el trimestre precedente. En ellas se consignarán los nombres y apellidos y el número y serie de la cédula personal de identidad de cada una de las personas comprendidas en las mismas.

La Junta Central Electoral remitirá a su vez, sin demora, a cada Junta Municipal Electoral copia de las relaciones más arriba indicadas. Al recibo de cada una de dichas copias, la Junta Municipal Electoral la fijará inmediatamente en su tablilla de publicaciones y entregará copia a los representantes de los partidos políticos reconocidos.

Si transcurridos quince días contados de la fecha en que sean remitidas dichas copias no se hubiere producido objeción, la Junta Municipal procederá a excluir del Registro Electoral a las personas que conforme a las relaciones antes dichas resulten haber perdido el derecho de elegir. Si en el término de quince días señalado más arriba se opusiere a la exclusión alguna de las personas que aparezcan en las relaciones antes mencionadas o algún partido político reconocido, la Junta Municipal Electoral, después de oir al oponente y de examinar las pruebas que le fueren presentadas o que ella requiere, decidirá el asunto dentro de las cuarenta y ocho horas de haber conocido del mismo.

Sin embargo, cada Junta Municipal Electoral procederá de inmediato y sin más tramitación a excluir del Registro Electoral a aquellos ciudadanos inscritos en dicho Registro que aparezcan en las relaciones a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Artículo 60.– Anotación de las exclusiones.– En todos los casos de exclusión se asentará ésta en la casilla correspondiente del Registro Electoral, enunciándose brevemente la fecha y la causa de la exclusión.

Artículo 61.– Suspensión de las decisiones sobre oposición o exclusión mientras puedan ser impugnadas.– Las decisiones de las Juntas Municipales Electorales que se refieran a oposiciones, a inscripciones en el Registro Electoral o a exclusiones del

mismo, no serán ejecutadas sino después de transcurrido el plazo legal para impugnarlas o de haber sido confirmadas.

CAPITULO VI

De la revisión del Registro Electoral

Artículo 62.- Revisión decenal.- El Registro Electoral será revisado cada diez años, para lo cual la Junta Central Electoral dictará las disposiciones que considere de lugar.

Artículo 63.- Otras revisiones.- La Junta Central Electoral podrá también disponer la revisión del Registro Electoral de uno o más municipios o de toda la República en cualquier época, cuando a su juicio fuere necesario o conveniente.

TITULO IV

DE LOS PARTIDOS POLITICOS

CAPITULO I

Del reconocimiento de los partidos políticos

Artículo 64.- Condiciones para el reconocimiento.- Podrá ser reconocida como partido político toda agrupación de ciudadanos que se organice de conformidad con las disposiciones de la Constitución y las leyes con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular.

Artículo 65.- Forma de la solicitud.- El reconocimiento deberá ser solicitado de la Junta Central Electoral por los organizadores, quienes deberán presentar al efecto los siguientes documentos:

a) La exposición, siquiera sumaria, de los principios, propósitos y tendencias que sustentará el partido.

b) Nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo un directorio, comité o junta directiva nacional provisional, con sede en la capital de la República, cuyo

Presidente será el representante legal del partido en formación ante la Junta Central Electoral.

c) Constancias de la denominación y el lema del partido, que sintetizarán en lo posible las tendencias o propósitos que animen a sus fundadores, sin incluir nombres o palabras alusivas a personas o prefijos que indiquen actitudes contratias o en pro de prácticas, sistemas o regímenes, presentes o pasados, nacionales o extranjeros; ni ser susceptibles de inducir a confusión con los de otros partidos.

d) Dibujos contentivos del símbolo, emblema o bandera, con la forma y los colores que deberán distinguir al partido de cualesquiera otros ya existentes. A los símbolos, emblemas o banderas se aplicarán las mismas reglas que a los nombres o lemas. Además, no deberán consistir en todo ni en parte en el escudo o la bandera de la República, ni en ningún símbolo, imagen o emblema religioso.

e) Una declaración firmada por los organizadores, de que el partido cuenta con un número de afiliados no menor de tres por ciento del número de electores que hubiere concurrido a la elección general inmediata anterior.

Disposición transitoria.– Se dará reconocimiento provisional a los partidos existentes a la fecha de la promulgación de la presente ley. Esta disposición transitoria y el reconocimiento quedarán sin efecto tan pronto se celebren las próximas elecciones a la Constituyente.

Artículo 66.– Constitución del partido.– Si la Junta Central Electoral encontrare que los principios y propósitos que sustentará el partido no están en conflicto con la Constitución y las leyes y que los documentos presentados con la solicitud se amoldan en su esencia y forma a las prescripciones legales, lo comunicará así a los organizadores, quienes podrán entonces proceder a su constitución formal. Al efecto deberán promover la celebración de la asamblea constituyente, que estará integrada por delegados de cada uno de los municipios donde tenga órganos directivos y de los directorios provisionales. Corresponderá a la asamblea constituyente votar los estatutos, elegir los miembros de los cuerpos directivos y consultivos definitivos para el primer período que los estatutos determinen.

Los estatutos deberán disponer la reunión periódica de convenciones ordinarias, en las cuales residirá la autoridad del partido.

Artículo 67.– Formalidades complementarias y expediente del reconocimiento.– Una vez celebrada la asamblea constituyente, el directorio nacional elegido por los delegados que a ella hubieran concurrido completará la documentación enviada a la Junta Central Electoral con un ejemplar o copia certificada por funcionario competente, de las actas de las sesiones de dicha asamblea, en las que deberán constar los nombres de los delegados, los acuerdos y resoluciones adoptados, los resultados de la elección del directorio nacional del partido y el texto completo de los estatutos, tal como hubieren quedado aprobados.

La Junta formará con los documentos sometidos según antes se ha dicho el expediente del partido, que podrá ser libremente consultado. A dicho expediente serán incorporadas las resoluciones de carácter general que dicten las asambleas, las cuales, para su obligatoriedad, deberán ser autenticadas por la Junta con la leyenda: "Es conforme con la legislación electoral". Al expediente serán también incorporados todos los documentos que se relacionen con alianzas o conjunciones concertadas por el partido o con la extinción de éste por cualquiera de las causas previstas por la ley.

Las diferencias que surgieren entre la Junta y los representantes legales de los partidos, en lo atinente a sus resoluciones, serán resueltas mediante procedimiento sumario que será establecido previamente por la Junta.

Artículo 68.– Efectos del reconocimiento.– Actos de Carácter político.– Todo partido político reconocido de conformidad con la presente ley estará en libertad de realizar todos los actos propios de ese género de instituciones que no le estén prohibidos por la Constitución y las leyes, debiendo ceñirse a las disposiciones legales y a las que emanen de la Junta Central Electoral

Se prohibe a los partidos toda actividad que tienda o tenga por resultado suprimir, desconocer, disminuir o adulterar los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías individuales y sociales que la Constitución consagra; predicar, poner en práctica teorías o doctrinas que pugnen con la forma

civil, republicana, democrática y representativa del gobierno; promover o propiciar la alteración del orden jurídico; escoger sus integrantes por razón de raza o religión; influir por medio de violencia, amenazas o engaños sobre los ciudadanos para obtener votos en favor de sus candidatos o en contra de los otros partidos; imponer o aceptar exacciones o deducciones de salarios a los empleados públicos o a las empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuentas o donativos voluntarios; y usar, en cualquier forma y a cualquier título, los bienes del Estado, las provincias y los municipios, o los fondos públicos en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados. Se prohibe igualmente a todo funcionario o empleado del Estado o de los municipios poner a disposición de cualquiera agrupación o partido político o de cualquier candidato, o permitirle el uso, en cualquier forma y a cualquier título, de tales bienes o fondos.

A mas tardar sesenta días antes de la fecha de cada elección ordinaria cada partido deberá presentar a la Junta Central Electoral una relación pormenorizada de sus ingresos y gastos durante las últimas elecciones. La Junta tendrá facultad para disponer el examen de los documentos relativos a los ingresos y gastos por intermedio de auditores de su elección. La junta podrá disponer, según lo jusitíquen a su juicio las circunstancias y el interés público, que este examen se verifique a expensas del Estado.

A más tardar tres meses depués de cada elección ordinaria los partidos enviarán a la Junta Central Electoral informes pormenorizados de sus ingresos y egresos, con el objeto de establecer que sus fondos no provienen de fuentes que la ley prohiba y que han sido invertidos en actos lícitos de organización, proselitismo y propaganda.

Artículo 69.– Personalidad jurídica.– Todo partido político reconocido estará investido de personalidad jurídica y podrá, en consecuencia, ser sujeto activo y pasivo de derechos y realizar todos los actos jurídicos que fueren necesarios o útiles para los fines que le son propios. Será representado de pleno derecho por el Presidente de su órgano directivo central o por quien haga las veces de éste, salvo cuando hubiere otorgado regularmente mandato a otra u otras personas o entidades para tal representación.

Artículo 70.– Fuentes de ingreso.– Todos los actos de cooperación, asistencia o contribución económica a los partidos son función exclusiva de las personas naturales. Por tanto, sólo se considerará como ingresos lícitos de los partidos los donativos o contribuciones que provengan de esas personas naturales, y será lícita la intervención directa o indirecta del Estado, de cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos, de los ayuntamientos o de entidades dependientes de éstos, de gobiernos extranjeros, o de personas jurídicas oficiales o privadas, en el sostenimiento de los partidos o el financiamiento de sus campañas. Tal intervención, sea cual fuere la forma en que se produzca, constituye presunción irrefutable de entendimiento con los partidos o sus candidatos en beneficio de los interesados de esas entidades o de sus propietarios, socios, accionistas, beneficiarios, directores o representantes, y en tal virtud queda absolutamente prohibida.

CAPITULO II

De la extinción de los partidos

Sección I

Causas de extinción

Artículo 71.– Los partidos políticos se extinguen: por acto voluntario adoptado en asamblea general del mismo partido, ordinaria o extraordinaria; por fusión con otros partidos; por no haber alcanzado en alguna elección los sufragios requeridos o no obtener representación en el Congreso, y por no participar en alguna elección de carácter general.

Sección II

De la extinción por acto voluntario

Artículo 72.– Comunicación a la Junta Central Electoral.– Todo acto voluntario por virtud del cual quede extinguido un partido político debe ser comunicado sin demora a la Junta Central Electoral por el directorio nacional o por representantes designados al efecto por la asamblea que lo hubiere acordado, remitiendo un ejemplar o copia, certificada por funcionario competente, del acta correspondiente. La Junta, previa

verificacion de la regularidad de la documentación presentada, dictará una resolución por medio de la cual declarará extinguido el partido y ordenará que su expediente sea clausurado y archivado, después de incorporar en él la referida documentación.

Sección III

De las fusiones, alianzas o coaliciones de partidos

Artículo 73.– Los partidos políticos una vez constituidos, pueden fusionarse, aliarse o coaligarse, mediante el procedimiento establecido por la presente ley y por los reglamentos que decretará la Junta Central Electoral.

Las fusiones, alianzas o coaliciones deberán ser aprobadas por mayoría de votos de los delegados a las convenciones nacionales que a ese efecto celebre cada uno de los partidos, y cuyas actas deberán ser sometidas al examen de la Junta Central Electoral, ante la cual podrán reclamar los disconformes con la fusión, la alianza o la coalición, dentro de las cuarenta y ocho horas después de aprobada ésta por las convenciones de los partidos; pero dichas reclamaciones deberán, en todo caso, fundarse en transgresiones de orden moral o legal bien definidas.

Es potestativo de la Junta denegar de plano las reclamaciones contra las fusiones, alianzas o coaliciones de partidos, o conocer de ellas contradictoriamente, en forma sumaria.

Artículo 74.– De la fusión.– La fusión determina la extinción de la personería de todos los partidos que intervengan en ella, subsistiendo únicamente la de aquel que personifique la fusión.

Artículo 75.– De la alianzas y coaliciones.– La alianza o coalición de partidos tendrá siempre un carácter transitorio y dentro de ella cada uno de los partidos aliados o coaligados conserva su personería, limitada por el pacto de alianza o coalición a su régimen interior, a la conservación de sus cuadros directivos y a la cohesión de sus afiliados. Para la postulación de candidatos comunes y cualesquiera otros acuerdos serán los partidos aliados o coaligados una sola entidad, con una

representación común, igual a la de los otros partidos, en las Juntas Electorales.

La alianza o coalición quedará disuelta al término de la campaña electoral que la hubiere motivado, salvo acuerdo en contrario. Para los efectos de la conservación de la personería legal de cada partido aliado o coaligado, los partidos votarán por los candidatos comunes, pero con las boletas de votación de cada uno de ellos cuando se use una boleta distinta para cada partido que concurra a la elección.

En las nóminas comunes de candidatos de cualquier alianza o coalición de partidos se indicará al pie o a continuación del nombre de cada candidato la sigla del partido al cual pertenezca, con el objeto de que la Junta Central Electoral pueda computar el número de votos obtenidos y los cargos de elección popular que hubiere conquistado en las urnas cada partido, para los fines que la presente ley determina.

Sección IV

De la extinción por no alcanzar suficientes votos o representación legislativa

Artículo 76.– Después de cada elección general, si de conformidad con los resultados del cómputo nacional que deberá verificar la Junta Central Electoral de acuerdo con la presente ley, y que habrán de constar en la relación general que dicha Junta deberá formular y hacer publicar, algún partido hubiere obtenido menos de tres por ciento de los votos emitidos, o hubiere quedado sin representación en el Congreso Nacional, la Junta, mediante resolución singular detallada, declarará extinguida la personería legal de dicho partido, cerrará el expediente y ordenará su depósito en el archivo de la Junta.

Disposición transitoria.– Este artículo se aplicará a partir de las segundas elecciones generales después de la fecha de promulgación de la presente ley.

Contra esta decisión de la Junta Central Electoral el Partido afectado podrá interponer recurso de revisión y revocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación.

y dispondrá de treinta días para sustentarlo por escrito y enunciar las pruebas que contradigan la resolución. Inmediatamente después de interpuesto el recurso, la Junta activará su tramitación, y cumplidos los trámites, fijará fecha para la audiencia pública del caso.

La resolución de la litis, que es definitiva e inapelable, versará únicamente sobre la existencia o inexistencia del partido.

Sección V

Liquidación

Artículo 77.– Cuando un partido quedare extinguido, excepto en el caso de fusión, su patrimonio será liquidado de conformidad con disposiciones que para tal fin deberán contener sus estatutos o documentos constitutivos, bajo la fiscalización de la Junta Central Electoral.

TITULO V

DE LOS CANDIDATOS

Capítulo I

De los candidatos de partidos

Sección I

De la nominación

Artículo 78.– Derecho de proponer candidatos.– Todo partido político que esté reconocido de conformidad con la presente ley tiene el derecho de proponer candidatos a cualesquiera cargos electivos que hayan de cubrirse, siempre que se ciña a los requisitos, formalidades y plazos que para ello se establecen más adelante.

Artículo 79.– Nominación de los candidatos.– La nominación de los candidatos a cargos electivos que hayan de ser propuestos por un partido político reconocido e inscrito deberá ser hecha por el voto afirmativo de la mayoría de los delegados a convenciones regular y públicamente convocadas y

celebradas. Dichas convenciones deberán estar constituidas de conformidad con las disposiciones que a ese respecto habrán de contener sus estatutos.

Corresponderá a la convención nacional designar los candidatos para Presidente y Vicepresidente de la República. La nominación de candidatos para los cargos de Senadores y Diputados al Congreso Nacional será hecha por convenciones departamentales y por convenciones de delegados del Distrito Nacional. Corresponde a las convenciones provinciales nominar los candidatos para los cargos de gobernadores provinciales, y a las convenciones municipales y del Distrito Nacional, según el caso, la nominación de los candidatos para los cargos de regidores y síndicos y sus suplentes.

Sección II

De las propuestas

Artículo 80.– Forma de las propuestas.– Las propuestas de candidatos serán formuladas por el organismo directivo central o por los respectivos organismos directivos departamentales, provinciales, municipales o del Distrito Nacional, según los casos, de conformidad con las designaciones hechas por las convenciones correspondientes y serán presentadas por medio de escrito que se entregará al Secretario de la Junta Central Electoral o de la correspondiente Junta Electoral.

1.– Toda propuesta deberá expresar:

1ro.– El nombre del partido que la sustente;

2do.– La fecha o el lugar en que se hubiere celebrado la convención que haya hecho la nominación de los candidatos comprendidos en ella;

3ro.– El nombre, la edad, la profesión, el domicilio y la residencia de cada uno de los candidatos comprendidos en la propuesta; así como el cargo para el cual se le propone, la división territorial a que corresponde, y el período durante el cual deberá ejercerlo;

4to.– La indicación del emblema o la enseña con que será distinguida la candidatura, si no se encontrare ya depositado en ocasión del reconocimiento del partido que haga la propuesta.

2.– A la propuesta deberán acompañar:

a) Un ejemplar, o copia debidamente certificada por funcionario competente, del acta de la convención que hubiere acordado la designación de los candidatos comprendidos en ella;

b) Una declaración firmada por cada uno de los candidatos designados, de que acepta su nominación.

3.– Ninguna propuesta deberá contener más de un candidato para cada uno de los cargos que deban ser cubiertos por elección.

Artículo 81.– Plazos.– Las propuestas, para que puedan ser admitidas, deberán ser presentadas a más tardar cuarenta y cinco días antes de la fecha en que deba celebrarse la elección cuando se trate de elección ordinaria. Cuando se trate de elección extraordinaria, la Junta Central Electoral determinará el plazo dentro del cual deben presentarse las propuestas.

Artículo 82.– Publicación y comunicación.– En el mismo día de la presentación de la propuesta de candidatos, o a más tardar a las diez horas de la mañana del día siguiente, el Secretario de la Junta Central Electoral o de la Junta Electoral a quien le hubiere sido entregada fijará copia en la tablilla de publicaciones y dará cuenta de ella al Presidente de la Junta, quien ordenará que sea comunicada dentro de las veinticuatro horas siguientes a las Juntas de su dependencia, a fin de que a su vez procedan a hacer publicar la propuesta en igual forma, y que se remita copia a cada una de las demás agrupaciones y partidos reconocidos.

Artículo 83.– Corrección de defectos ó irregularidades.– El Secretario deberá notificar a la Junta Central Electoral o a la Junta, a los representantes de los partidos y agrupaciones que las hubieren presentado y a los candidatos comprendidos en ellas los defectos e irregularidades de que adolezcan las propuestas, los cuales pueden ser corregidos en la secretaría por cualquier representante debidamente autorizado del organismo

que las hubiere presentado, hasta el momento en que la Junta Central Electoral o la Junta Electoral a la cual hayan sido sometidas hubiere conocido de dichas propuestas.

Artículo 84.– Conocimiento y decisión.– La Junta Central Electoral o la Junta Electoral a la cual haya sido sometida una propuesta de candidatos deberá reunirse dentro de los cinco días que sigan a su presentación, y declararla admitida cuando compruebe que se ajusta a todas las disposiciones pertinentes de la Constitución y de las leyes, rechazándola en caso contrario. La resolución que intervenga deberá ser comunicada al organismo directivo de la agrupación o partido que hubiere presentado la propuesta, dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 85.– Apelación o revisión.– De las resoluciones que dicten la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales de conformidad con el artículo precedente se podrá recurrir en apelación o en revisión ante la Junta Central Electoral, según que la resolución emane de alguna Junta Provincial o Municipal o de la propia Junta Central Electoral, dentro de los tres días de haber sido comunicada. La Junta Central Electoral fallará sumariamente dentro de los cinco días de haber recibido el expediente. El fallo que dictare será comunicado inmediatamente a los interesados, así como a la Junta Electoral de quien emane la disposición impugnada cuando se tratare de una apelación.

Artículo 86.– Resoluciones de admisión de candidaturas.– La Junta Central Electoral y las Juntas Departamentales y Provinciales Electorales comunicarán a las Juntas de su dependencia las candidaturas que hubieren sido admitidas por aquellas para los efectos de publicación.

Admitida una candidatura, no podrá ser retirada ni rectificada por el partido o la agrupación que la hubiere presentado, salvo el caso de que uno o varios de los candidatos comprendidos en ella renunciaren, fallecieren, quedaren incapacitados o fueren rechazados. En estos casos, la nueva propuesta podrá ser hecha por el organismo directivo correspondiente del partido o la agrupación que sustente la propuesta, y la Junta Central Electoral o la Junta Electoral correspondiente conocerá de ella en forma sumaria y sin lugar a recurso alguno.

Si la muerte, renuncia, inhabilitación o rechazamiento de uno o más candidatos ocurriere cuando ya no fuere posible imprimir en las boletas los nombres de los candidatos designados para reemplazarlos, los votos que sean emitidos en favor de los candidatos muertos, renunciantes, inhabilitados o rechazados serán computados en favor de los nuevos candidatos propuestos. La Junta Central Electoral o la Junta Electoral, una vez que haya aceptado la nueva propuesta lo comunicará a las Juntas y Mesas Electorales correspondientes, a fin de que se proceda en la forma que se indica en este párrafo.

Capítulo II

De las candidaturas independientes

Artículo 87.– Declaración.– Podrán ser propuestas candidaturas independientes de carácter nacional, departamental, provincial o municipal, que surjan a través de agrupaciones políticas accidentales en cada elección. Al efecto, las agrupaciones que se propongan sustentarlas deberán declararlo previamente a la Junta Central Electoral; y a partir de la fecha de esa declaración podrán acreditar delegados o representantes ante dicha Junta Central Electoral y ante las Juntas Departamentales Provinciales y Municipales y Mesas Electorales donde desearen hacerlo.

Artículo 88.– Requisitos.– Para sustentar candidatura independiente para la presidencia de la República se requiere una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en toda la República y un programa de gobierno definido para el período en que hayan de presentarse.

Las candidaturas para los cargos de Senadores, Diputados al Congreso Nacional y Gobernadores Provinciales deberán ser sustentadas por la misma organización de cuadros directivos fijada para los partidos, pero limitada a la demarcación electoral respectiva.

Las candidaturas para cargos de elección popular en los municipios deberán presentar a la Junta Central Electoral una organización municipal completa y un programa a cumplir durante el período a que aspiren los candidatos.

Serán aplicables a las candidaturas independientes y a las agrupaciones que las sustenten las mismas disposiciones que establece la presente ley en lo que se refiere a los partidos y a las candidaturas sustentadas por éstos con las adaptaciones a que hubiere lugar y de acuerdo con las disposiciones de la Junta Central Electoral.

Artículo 89.– Candidaturas municipales en elecciones sucesivas.– Las agrupaciones que sustenten candidaturas independientes para cargos electivos en los municipios podrán mantener sus organizaciones locales e intervenir en elecciones sucesivas, siempre que se trate de los mismos candidatos originalmente propuestos y que con anterioridad a la apertura del proceso electoral lo notifiquen a la Junta Central Electoral; pero si dichas organizaciones modificaren sus nóminas de candidatos deberán hacer una nueva declaración, aun cuando mantengan los mismos cuadros y programas de acción municipal.

TITULO VI

DE LAS ELECCIONES

Capítulo I

Disposiciones preliminares

Artículo 90.– Clasificación.– Se entiende por elecciones ordinarias aquellas que se verifican periódicamente, en fechas previamente determinadas por la Constitución.

Se denominan elecciones extraordinarias las que se efectúan por disposición de una ley o de la Junta Central Electoral, en fechas no determinadas de antemano por preceptos constitucionales, ya sea para llenar vacantes ocurridas en cargos electivos, o para proveer los correspondientes a divisiones territoriales nuevas o modificadas, o cuando sea necesario por haber sido anuladas las elecciones anteriormente verificadas en determinadas demarcaciones de acuerdo con la ley, o para cualquier otro fin.

Se entenderá por elecciones generales las que hayan de verificarse en todo el territorio de la República y por elecciones

parciales las que se limiten a una o varias divisiones de dicho territorio.

Artículo 91.– Proclamas.– Toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral.

La proclama enunciará la clase de elección, la extensión territorial que ha de abarcar, las disposiciones constitucionales o legislativas en virtud de las cuales deba verificarse, la fecha en que tendrá lugar, los cargos que hayan de ser provistos, el período para el cual han de serlo, y cualesquiera otros particulares que se estimen necesarios o útiles.

La proclama por la cual se anuncie una elección ordinaria deberá ser publicada a más tardar dos meses antes de la fecha en que deba celebrarse. La que se refiere a una elección extraordinaria deberá publicarse dentro de los cinco días que sigan a la publicación de la ley de convocatoria, cuando ésta haya sido dispuesta por ese medio; y por la propia resolución de la Junta Central Electoral que disponga la celebración de tal elección, cuando le haya sido otorgada a dicha Junta Central la atribución de convocatoria.

Capítulo II

Del período electoral

Artículo 92.– Comienzo y terminación.– El período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama, y concluirá el día en que sean proclamados los candidatos elegidos.

Artículo 93.– Seguridad personal.– Durante los ocho días que precedan a una elección y en el día en que ésta se celebre no podrán ser privados de su libertad, salvo en caso de crimen flagrante:

a) Los candidatos;

b) Los miembros, secretarios y escribientes de las Juntas Electorales, y sus sustitutos;

c) Los representantes acreditados ante las Juntas Electorales por las agrupaciones y partidos políticos reconocidos, y sus sustitutos; y

d) Los miembros de los organismos directivos de las agrupaciones y partidos políticos debidamente reconocidos.

1.— Las personas comprendidas en la enumeración que antecede podrán acreditar su identidad por medio de certificaciones que a su solicitud les serán expedidas por la Junta Central o la Junta Electoral permanente a que pertenezcan o ante la cual estén acreditados o por la cual hayan sido designados.

2.— Si en violación de esta prohibición una persona fuere privada de su libertad, cualquiera otra persona podrá requerir por medio de escrito a un Juez de Paz o a un Juez de Primera Instancia para que ponga inmediatamente en libertad a la persona a quien se hubiere privado de ella; y si el requerido no lo hiciere en el término de una hora se recurrirá a la Junta Central Electoral para que decida sin demora.

Artículo 94.— Libertad de reunión.— Las reuniones públicas de ciudadanos para fines electorales pueden celebrarse sin licencia, o permiso y no podrán ser entorpecidas por ningún funcionario o autoridad.

Artículo 95.— Libertad de tránsito.— La libertad de tránsito de los dirigentes, candidatos y delegados de los partidos y agrupaciones reconocidos no podrá ser restringida por parte de las autoridades públicas durante el período electoral, con excepción de los casos de delito flagrante o de orden escrita y motivada de Juez competente fundada en ley.

Queda prohibido a los ayuntamientos y a toda autoridad administrativa o judicial o a cualquier miembro de la policía o de la fuerza pública tomar disposiciones de cualquier naturaleza que puedan entorpecer el libre tránsito de los electores en sus respectivos municipios desde que queda abierto el proceso electoral, o dificultar por cualquier medio el ejercicio del sufragio. Son nulas de pleno derecho las disposiciones que se hubieren dado en tal sentido.

Artículo 96.– Protección de los bienes de Agrupaciones y partidos.– Los locales de las agrupaciones y partidos políticos reconocidos, sus bienes muebles e inmuebles, y en general todo cuanto constituya su patrimonio, no podrá ser en ningún caso objeto de persecución, embargo, secuestro, expropiación o desposesión total o parcial, ni por parte de las autoridades públicas ni de particulares durante el período electoral.

Artículo 97.– Inviolabilidad de la correspondencia y documentos.– La correspondencia, los documentos, registros, papeles y archivos pertenecientes a las agrupaciones y partidos políticos y que se encuentren en sus locales, oficinas y dependencias, no podrán ser ocupados ni registrados por las autoridades públicas durante el período electoral, salvo en los casos de delito flagrante o por orden escrita y motivada de juez competente fundada en la ley.

Artículo 98.– Igualdad de acceso a medios de divulgación.– Todas las agrupaciones o partidos políticos deberán disfrutar de posibilidades iguales para la utilización de los medios de divulgación durante el período electoral. En consecuencia:

a) Se prohibe a las empresas o servicios de divulgación, tales como los periódicos y revistas, servicios de prensa, radio, televisión, cinematógrafos y otros, y a los de correos, transporte o distribución de correspondencia, teléfonos, telégrafos u otros servicios de telecomunicaciones, negar o restringir injustificadamente el uso de sus instalaciones o servicios a ninguna agrupación o partido político, reconocido o en formación, que esté dispuesto a pagar las tarifas acostumbradas para utilizarlo.

b) Se prohibe a los abastecedores de papel en general, papel de periódico o papelería de oficina, así como a las imprentas, talleres de litografía o de otras artes gráficas, negar o restringir injustificadamente el suministro de sus materiales o servicios a ninguna agrupación o partido político reconocido o en formación, que esté dispuesto a pagar los precios acostumbrados para la obtención de esos materiales o servicios.

c) Durante el período electoral la Junta Central Electoral podrá ejercer fiscalización sobre la propaganda que realicen las agrupaciones o partidos políticos por medio de la radio y la televisión, deberá tomar disposiciones que aseguren a cada

agrupación o partido el acceso equitativo al uso con fines de propaganda de esos medios de difusión y a tal fin la Junta Central Electoral estará investida durante el período electoral de las mismas atribuciones que normalmente confieren las leyes al Poder Ejecutivo para aplicar sanciones a las empresas o servicios de comunicaciones, debiendo actuar siempre a instancia de las autoridades nacionales de las agrupaciones o partidos políticos.

Capítulo III

De las boletas

Artículo 99.- Fecha en que debe disponerse la impresión.- Tan pronto como las Juntas Electorales a las cuales se hayan sometido propuestas de candidatos se hayan pronunciado respecto de su admisión o su rechazamiento; de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, o cuando haya recaido decisión sobre los recursos de apelación o de revisión que hubieren sido interpuestos, la Junta Central Electoral ordenará la impresión de las boletas que deban utilizarse para la votación, a fin de ponerlas en tiempo oportuno a disposición de las Juntas que hayan de intervenir en la elección.

Artículo 100.- Cantidad.- Las boletas serán impresas en la cantidad que la Junta Central Electoral estime necesaria para cada municipio, de acuerdo con la población electoral.

Artículo 101.- Forma.- Las boletas se imprimirán con tinta negra, en cartulina o pepel grueso que no sea transparente. Serán de dos tamaños: unas pequeñas para las candidaturas nacionales y otras mucho más grandes para las demás candidaturas. Las de cada municipio serán de la misma calidad.

Se utilizarán boletas del color, o las combinaciones de colores, reconocidas a cada partido para las candidaturas que éste sustente y por tanto cada candidatura tendrá boletas separadas.

Se utilizará una boleta separada para cada candidatura nacional. En el encabezamiento se imprimirá el nombre "República Dominicana", el nombre del departamento, de la provincia y el municipio a los cuales corresponda; la clase y la fecha de la elección. A continuación se imprimirá el nombre y

el símbolo o emblema del partido o de la candidatura, y en seguida el nombre de cada cargo para el cual se haya hecho propuesta,y debajo de éste el nombre del candidato si fuere uno solo, o los nombres de los candidatos, si fueren varios, en este último caso en el mismo orden en que figuran en la propuesta correspondiente. Los diversos cargos que hayan de cubrirse serán colocados en orden desde arriba hacia abajo: los cargos de elección nacional en la boleta correspondiente; los de elección provincial y municipal en la boleta para tales candidaturas. Las boletas destinadas a utilizarse en el Distrito Nacional serán impresas observando las disposiciones que anteceden con las adecuaciones a que hubiere lugar.

En todos los casos, la Junta Central Electoral dictará las disposiciones que estime de lugar para hacer del conocimiento general, con la mayor antelación que sea posible, la forma y el contenido de las boletas que habrán de emplearse en la elección, y para que los electores puedan familiarizarse debidamente con dichas boletas y con el procedimiento de la votación.

Capítulo IV

Locales, Materiales y útiles para las Mesas Electorales

Sección I

Locales

Artículo 102.— Obtención.— A más tardar quince días antes de la fecha en que deba celebrarse una elección, la Junta Electoral del Distrito Nacional y las Juntas Municipales Electorales escogerán los locales en que hayan de funcionar las Mesas Electorales correspondientes a sus respectivas jurisdicciones, cuya obtención deberán gestionar con arreglo a las disposiciones de la presente ley y a las órdenes e instrucciones que al efecto dicte la Junta Central Electoral.

Artículo 103.— Requisitos.— Las Mesas Electorales deberán instalarse con preferencia en casas escuelas de los barrios o secciones a que correspondan. A falta de casas escuelas se instalarán en edificios públicos; y si tampoco los hubiere, se alquilarán locales apropiados.

Nunca deberá funcionar una Mesa Electoral en un local que esté habitado el día de las elecciones.

Siempre que sea posible se utilizarán los mismos locales donde hayan funcionado las Mesas Electorales en elecciones anteriores.

Las Mesas Electorales se situarán en casas adecuadas que permitan la fácil entrada y salida de los electores. Estas deberán tener, por lo menos, dos puertas a fin de que los electores entren y salgan de la sala de votaciones por puertas distintas, que serán previamente señaladas por el Presidente de la Mesa Electoral.

Artículo 104.– Anuncio.– El local donde funcionará cada Mesa Electoral será anunciado por lo menos con una semana de antelación a la fecha de las elecciones, y no se cambiará después sin el consentimiento expreso de la Junta Central Electoral y por alguna causa que impidiere su uso para fines electorales. Si hubiere necesidad de cambiar el local destinado a una Mesa Electoral, la Junta Municipal Electoral lo decidirá, y se procederá instalarla en otro que quede lo más cerca del anterior que sea posible, anunciándose el cambio por medio de edictos en sitios adecuados y por cualesquiera otros medios que fuere posible.

Artículo 105.– Distribución y mobiliario.– En el local donde funcione cada Mesa Electoral se colocará una barandilla que separe la parte destinada al personal de la Mesa Electoral del resto del local.

En esta última parte habrá por lo menos tres casetas o compartimientos en los cuales los electores puedan preparar sus boletas sin ser observados. En casa caseta o compartimiento habrá una mesa o una tablilla horizontal en la que puedan colocarse las boletas.

Las casetas o compartimientos se colocarán de manera que los miembros de la Mesa Electoral puedan ver si más de una persona entra en cualquiera de ellos al mismo tiempo.

Si no fuere posible proveer las casetas o compartimientos ya dichos, se habilitará una habitación que esté en comunicación inmediata y directa con aquella donde se encontrare instalado

el personal de la Mesa Electoral, y que esté cerrada, con una sola puerta utilizable para comunicar con el local de votación; la demás aberturas deberán clausurarse, lacrándolas y sellándose por el presidente y el secretario de la Mesa, en presencia de los delegados de las agrupaciones y partidos políticos si quisieran asistir a esa diligencia. Los sellos no podrán quitarse hasta la terminación del acto eleccionario.

Detrás de la barandilla se colocarán dos mesas, distantes una de otra ocho pies si fuere posible, una de las cuales será ocupada por el Presidente y uno de los vocales, quienes estarán encargados de la urna y los sobres de votación y de boletas observadas, y la otra por el otro vocal, el secretario y los escribientes, que tendrán a su cargo la lista de electores, y llevarán el libro de votación.

Sección II

Urnas, materiales y útiles

Artículo 106.– Urnas.– La Junta Central Electoral dispondrá que se provea a cada Mesa Electoral de una urna con capacidad para no menos de quinientas boletas. La urna estará provista de dos candados con llaves diferentes.

Artículo 107.– Materiales y útiles.– La Junta Central Electoral hará llegar a la Junta Electoral del Distrito Nacional y a cada una de las Juntas Municipales Electorales, con antelación suficiente al día de las elecciones, las boletas, sobres de votación y sobres para boletas observadas, impresos para declaraciones de protesta, los efectos de escritorio, lápices, impresos, libros para actas y registros y cualesquiera otros materiales y útiles que fueren necesarios para el cabal cumplimiento de las atribuciones que corresponden a las Mesas Electorales. La Junta Electoral del Distrito Nacional y las Juntas Municipales Electorales darán recibo a la Junta Central Electoral por dichos materiales y útiles en detalle, y serán responsables de su conservación hasta cuando hayan hecho entrega de los mismos a las Mesas Electorales.

Artículo 108.– Entrega. Responsabilidad.– Con no más de cuatro ni menos de dos días de antelación a la fecha de una elección el Presidente y el Secretario de cada Mesa Electoral se presentarán en la secretaría de la Junta Municipal Electoral de

su jurisdicción y recibirán del secretario de la misma los materiales para uso de la Mesa Electoral, así como las boletas y copias certificadas de la lista de los electores a quienes corresponda votar en ella, la que será extractada del Registro Electoral, expidiendo el secretario de la Junta Municipal el recibo correspondiente; y a partir de ese momento serán responsables de su debida conservación y uso. El Presidente de la Mesa Electoral quedará especialmente encargado de la conservación y el uso del sello de la Mesa Electoral, del cual no deberá desprenderse a no ser para entregarlo a quien legalmente le sustituya en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 109.— Libros de votación.— Los libros de votación estarán provistos de un espacio en cada página para anotar el nombre del departamento, el de la provincia, el municipio, el barrio o sección, la Mesa Electoral, y la fecha de la elección. Cada página estará dividida en columnas verticales con los siguientes encabezamientos impresos:

a) Número de orden;

b) Apellidos y nombres del elector;

c) Número y serie de su cédula personal de identidad;

d) Número de su inscripción en el Registro Electoral, que se tomará de la lista correspondiente a la Mesa; y

e) Constancia de que el elector ha votado, una vez que lo haya hecho.

Artículo 110.— Instrucciones a las Mesas Electorales.— Las Juntas Municipales Electorales deberán reunir el personal de las Mesas Electorales de su jurisdicción por lo menos dos días antes de las elecciones con el fin de instruirlo en lo concerniente al ejercicio de las atribuciones que le corresponden. Al efecto, le harán entrega de las cartillas, circulares y cualesquiera otros medios de instrucción; le enseñarán muestras de las boletas que vayan a ser utilizadas, de los libros de votación, de los pliegos destinados a la formulación de relaciones, y de libro de actas; y le explicarán cuidadosamente el uso de cada uno de los registros y formas impresas y de los materiales y útiles, indicándole las disposiciones de esta ley a las cuales habrán de ajustar sus

actuaciones. Las Juntas Municipales Electorales deberán responder en todo momento a las consultas que se les hicieren y dar explicaciones respecto al cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Capítulo V

Disposiciones destinadas a asegurar el libre ejercicio del derecho de elegir

Artículo 111.– Carácter no laborable del día de elección.– El día en que se celebren elecciones de cualquier clase no será laborable en el territorio en que hayan de efectuarse. Cuando se trate de trabajos que no puedan ser suspendidos, los patronos estarán obligados a disponer cuanto sea necesario para que todos los empleados y trabajadores hábiles para votar que tengan a su servicio dispongan del tiempo que fuere menester para hacerlo, sin que por ese motivo sufran ninguna merma en sus salarios u otros derechos que les correspondan.

Artículo 112.– Libertad individual.– Ninguna autoridad podrá detener o reducir a prisión o privar en cualquiera otra forma de su libertad a un ciudadano hábil para votar, durante las veinticuatro horas anteriores a la clausura de la votación, slavo en caso de flagrante delito o en virtud de orden escrita y motivada de Juez competente.

Artículo 113.– Libertad de tránsito.– En ningún caso podrá estorbarse el tránsito de los electores hasta los lugares de votación durante el tiempo necesario para trasladarse a ellos con el fin de ejercer este derecho y para regresar a sus domicilios o puntos de partida.

Artículo 114.– Prohibición de espectáculos y manifestaciones.– Durante el día de la elección no podrán celebrarse espectáculos públicos, ya sea en local abierto o cerrado; ni desde veinticuatro horas antes podrán llevarse a efecto manifestaciones o reuniones públicas de carácter político.

Artículo 115.– Prohibición del expendio de bebidas.– Desde veinticuatro horas antes de la elección no podrá expenderse ni distribuirse a ningún título bebidas alcohólicas, hasta tres horas después de terminada la votación.

Artículo 116.– Prohibición de ingerencia u ostentación de fuerzas armadas.– Queda prohibida la aglomeración de tropas y toda ostentación de fuerza armada durante el día de la elección. Las fuerzas armadas en general, con excepción de las de policía indispensables para mantener el orden durante el acto eleccionario y cuya actuación estará sujeta a lo que se dispone en la presente ley, deberán permanecer acuarteladas durante todo el día en que aquel se realice.

Los jefes u oficiales de las fuerzas armadas y autoridades policiales no podrán encabezar grupos de ciudadanos durante la elección, ni hacer valer la influencia de sus cargos para coartar la libertad del sufragio, ni tampoco hacer reuniones con el propósito de influir en forma alguna en los actos electorales.

El personal retirado de las fuerzas armadas, cualquiera que fuere su jerarquía, no podrá concurrir vistiendo uniforme a ningún acto político electoral.

Sólo los agentes de la policía que estén al servicio de las autoridades electorales pueden penetrar armados en los locales en donde se efectúen las inscripciones y las votaciones, cuando fueren requeridos.

Artículo 117.– Amparo.– Todo elector afectado en sus inmunidades, libertad o seguridad, o privado del ejercicio del sufragio, podrá solicitar amparo por sí o por intermedio de cualquiera otra persona, por escrito o verbalmente, denunciando el hecho a cualquier juez o autoridad.

Artículo 118.– Independencia de acción del personal de las Mesas Electorales.– Los miembros y secretarios de las Mesas Electorales, así como los delegados de agrupaciones o partidos políticos que actúen en ellas, y sus respectivos sustitutos, obrarán con entera independencia de toda autoridad, y no estarán obligados a obedecer ninguna orden que les impida el ejercicio de sus funciones. Serán inviolables mientras permanezcan en ese ejercicio, y no podrán ser privados en forma alguna de su libertad, salvo en caso de flagrante delito o por orden escrita, y motivada de juez competente.

Capítulo VI

De las votaciones

Artículo 119.— Votación en un solo día.— Toda votación se realizará en un sólo día, comenzando a las seis de la mañana y terminando a las seis de la tarde.

Artículo 120.— Instalación de las Mesas Electorales.— Los miembros del personal de cada Mesa Electoral, así como sus sustitutos, están en la obligación de presentarse en el local donde ésta deba actuar, a más tardar media hora antes de la señalada para el comienzo de la votación.

Si a la hora de iniciarse la votación no se hubiere presentado el presidente, o uno de los dos vocales, ni sus sustitutos, a ocupar sus puestos en una Mesa Electoral, el miembro o los miembros que se encuentren presentes escogerán a uno o dos ciudadanos que reunan las condiciones requeridas para ser electores, según que faltaren uno o dos de los miembros de la Mesa Electoral, para que sustituyan a aquellos hasta cuando se presentaren. Si quien falta fuere el presidente, presidirá el acto el primer vocal, y si éste también faltare, presidirá el segundo vocal. Si faltaren el secretario y su sustituto, el presidente o quien haga sus veces designará a un ciudadano capaz para desempeñar tales funciones hasta cuando se presentare uno de aquellos.

Si a la hora de comenzar la votación no se presentare ninguno de los miembros titulares ni sus sustitutos, la votación comenzará cuando se hubieren presentado todos, si llegan juntos, o cuando alguno de ellos se presentare y diere cumplimiento a las prescripciones consignadas más arriba.

De todas estas circunstancias se hará mención en el acta correspondiente.

Artículo 121.— Acuerdos y acta.— Todas las actuaciones que se realicen en cada Mesa Electoral se consignarán en un acta, que será firmada por todos los miembros de la misma y por el Secretario, así como por los representantes, titulares o sustitutos, de agrupaciones o partidos políticos que hubieren tomado parte en tales actuaciones, si desearen hacerlo.

Artículo 122.– Apertura de las votaciones.– Antes de comenzar la votación el presidente de la Mesa en presencia de las personas allí reunidas, abrirá la urna, y después de mostrar, volviéndola hacia abajo, que se halla vacía, invitará a los concurrentes para que la examinen. Luego procederá a cerrarla, reteniendo una de las llaves, y el secretario retendrá la otra. Se sellará la urna con lacre. El presidente o quien haga sus veces entonces hará estampar el sello de la Mesa Electoral en la esquina superior derecha de cada una de las boletas que hayan sido entregadas a dicha Mesa por la Junta Municipal Electoral; y una vez selladas las hará c[illegible]ar sobre mesas que serán instaladas al efecto en las casetas o compartimientos o en el cuarto cerrado, distribuyéndolas adecuadamente y de modo que queden en paquetes separados las correspondientes a cada candidatura, cuando se utilicen boletas separadas para cada una. Seguidamente, el presidente anunciará que empieza la votación, y depositará su voto, conforme el procedimiento establecido en esta ley, siguiéndole los demás miembros, el secretario y los escribientes de la Mesa, y los delegados de agrupaciones o partidos políticos presentes, así como sus respectivos sustitutos, aun cuando no figuren en la lista de electores correspondiente a esa Mesa; después de lo cual continuará la votación hasta la hora señalada por esta ley. Los miembros del personal de la Mesa y los representantes y sustitutos que no estuvieren presentes al comenzar la elección, votarán en el turno que corresponda a su llegada al local de la Mesa.

Los votos del personal de la Mesa Electoral y de los delegados de partidos que actúen en ella se considerarán observados, y en tal virtud los sobres de votación que contengan dichas boletas serán colocados en sobres para boletas observadas antes de ser depositados en la urna.

Artículo 123.– Identificación de los electores.– Una vez abierta la votación los electores entrarán al local que ocupe la Mesa Electoral uno a uno, en el orden de su llegada; para lo cual el Presidente dispondrá con el auxilio del personal de la Mesa y de los agentes policiales destinados a su servicio, si fuere necesario, que los electores se coloquen en fila a medida que vayan llegando. Podrá ordenar que a cada elector le sea entregada al entrar al local una tarjeta numerada que indicará el turno en que le corresponderá votar.

Cada elector presentará su cédula personal de identidad a fin de que sea confrontada con la lista de los electores correspondientes a la Mesa y se compruebe si su nombre aparece en ella.

No se permitirá votar en una Mesa Electoral a ninguna persona cuyo nombre no figure en la lista de electores correspondientes a la misma, con excepción del personal de la Mesa y de los representantes de las agrupaciones y partidos políticos y sus sustitutos.

Tampoco se p permitirá que voten en la Mesa Electoral en cuya lista de electores aparezcan inscritos los miembros del personal de otra Mesa o los representantes ante otra Mesa de las agrupaciones o partidos políticos y sus sustitutos.

Comprobado que el nombre de elector aparece en la lista y comprobado también que no ha votado anteriormente en la misma elección mediante el examen de su cédula personal de identidad y del libro de votaciones, el elector tomará un sobre de votación de la caja que los contenga. Se anotará entonces en el libro de votación los apellidos y nombres del elector, número y serie de su cédula personal de identidad y número de su inscripción en el registro electoral, que se tomará de la lista correspondiente a la Mesa. Inmediatamente se instruirá al votante para que pase al compartimiento o cuarto secreto a fin de que allí escoja una boleta de votación y prepare su voto.

Artículo 124.— Protestas.— Cualquier miembro de la Mesa Electoral o el representante de cualquier agrupación o partido político que tenga propuesta admitida podra oponerse a que vote cualquiera persona que se presente con el propósito de hacerlo, fundándose en que no es la persona que alega ser, o en que no tiene el derecho de elegir por alguna de las causas que la Constitución establece; para lo cual hará una declaración de protesta en una forma impresa que le será suministrada por la Mesa, con expresión del motivo.

De toda protesta se hará mención en el acta indicándose el nombre del que protesta y el del objetado.

Si el objetado sostuviere ser la persona que alega, o negare el motivo invocado por quien hubiere hecho la protesta, se hará constar así en el acta. El presidente le entregará entonces un

sobre especial de color distinto y más amplio que el sobre de votación, que se denominará "sobre para boleta observada", dentro del cual colocará el votante el sobre de votación en que haya introducido su boleta, cerrándolo y entregándolo al presidente de la Mesa, y en el que se escribirán los nombres y apellidos del votante, el número y serie de la cédula personal de identidad y el número con que aparezca en la lista de electores de la Mesa, y la palabra "Observada", firmando el presidente y el secretario y estampándose el sello de la Mesa Electoral.

El Presidente advertirá al objetado y al autor de la objeción que quedan citados a comparecer ante la Junta Municipal Electoral a las ocho de la mañana siguiente, con las pruebas que deseen hacer valer, a fin de que dicha Junta decida acerca de la admisión o el rechazamiento de la protesta.

Si el objetado no sostiene su identidad o reconoce el hecho en que se haya fundado la protesta, no será admitido a votar y se le perseguirá por infracción a esta ley según se dispone en otro lugar, para lo cual se identificará y se hará constar su verdadero nombre en el acta, si fuere posible.

Todos los procedimientos relativos a las protestas aquí previstos se llevarán a efecto con la mayor rapidez posible, y en ningún caso deberán retardar el curso de la votación.

No se permitirá ninguna otra objeción ni impugnación ni discusión en la Mesa durante el proceso de la votación, siendo el presidente responsable de cualquier perturbación que ocurriere.

Artículo 125.– El votante, ya dentro del compartimento o cuarto secreto, tomará una boleta pequeña (candidatura nacional) y otra grande (candidatura provincial y municipal) que contengan las respectivas candidaturas por la cual quiera dar su voto.

Antes de salir de la caseta o compartimiento o del cuarto donde lo haya hecho, el votante las colocará dentro del sobre de votación. Luego saldrá y lo depositará en la urna.

Una vez que el votante haya depositado su voto arrojará el resto de las boletas no votadas en un recipiente destinado a tal propósito.

Finalmente el presidente estampará en la casilla que corresponde de su cédula personal de identidad un sello indeleble con la palabra "votó" y la fecha de la elección, y hará una marca discreta con tinta indeleble en el último dedo de la mano izquiera, y en el libro de la votación se hará constar que ha votado.

Artículo 126.– Electores incapacitados para votar sin ayuda.– Cuando un elector esté incapacitado para votar sin ayuda, podrá, con autorización del Presidente de la Mesa Electoral, valerse de un individuo de su confianza que le acompañe a la caseta o compartimiento o al cuarto cerrado y le prepare su boleta, sin que se permita que ninguna otra persona esté bastante cerca para ver u oir lo que se haga y diga mientras se prepare dicha boleta.

Artículo 127.– Secreto del voto. El secreto del voto es a la vez un derecho y un deber para el elector. A nadie le es lícito, bajo ningún pretexto, excepto a la persona que le ayude a prepararlo cuando así lo permita esta ley, averiguar por cuales candidatos o en que sentido ha votado. Tampoco le está permitido al elector exhibir de modo alguno la boleta con que vote, ni hacer ninguna manifestación que signifique violar el secreto del voto.

Artículo 128.– Preservación del orden.– Toda persona que perturbe el orden en una Mesa Electoral, y requerido por el presidente insistiere, será expulsado del local. No podrán formarse grupos de personas a menos de cincuenta metros de los locales donde se realicen las votaciones.

Artículo 129.– Servicio de Policía.– El presidente de la Mesa podrá requerir el auxilio de la policía o de la fuerza pública cuando fuere necesario para mantener el orden y el curso regular de la votación. Para tal fin se dispondrá el servicio de los agentes de manera que puedan atender prontamente a este requerimiento. Sin embargo, ningún miembro de la fuerza pública podrá acercarse a menos de cincuenta metros del local que ocupe una Mesa Electoral, excepto cuando fuere requerido como antes se ha dicho.

Artículo 130.– Cierre de la votación.– A las seis de la tarde, el Presidente de la Mesa ordenará que no se permita la entrada a nadie más, y sólo podrán emitir sus votos los electores que se hallen dentro del local.

Inmediatamente después de votar el último de los presentes se declarará cerrada la votación. Los miembros de la Mesa y los delegados de agrupaciones y partidos que lo deseen firmarán en el libro de votación, trazándose una raya al pie del último asiento que se hubiere hecho en éste.

Capítulo VII

Del escrutinio de las Mesas Electorales

Artículo 131.— Atribución de la Mesa Electoral.— Terminada la votación se procederá al escrutinio de los votos, el cual estará a cargo de cada Mesa Electoral, sin que ésta pueda en ningún caso delegar o encomendar sus operaciones a persona extraña a ella, ni suspenderlas.

Artículo 132.— Procedimiento de escrutinio.— Se abrirá la urna y se sacarán de ella los sobres que hubieren sido depositados, contándolos para confrontar su número con el de electores que hubieren votado según el libro de votación. Después se pondrán aparte los sobres que contengan boletas protestadas, y se verificará si el número de éstos coincide con el número de declaraciones de protestas que hayan sido presentadas y con las anotaciones hechas al respecto en la columna de observaciones del libro de votación. Los sobres que contengan boletas protestadas serán empaquetados sin abrirlos. Luego, el secretario abrirá los demás sobres uno por uno y extraerá de cada uno de ellos la boleta que contenga, leyendo en alta voz la denominación de la agrupación o partido a que corresponda la boleta y pasando ésta al presidente, quien la examinará y la exhibirá a los demás miembros y delegados presentes.

Artículo 133.— Rechazamiento de boletas anulables. Si aparecieren boletas anulables según esta ley, serán rechazadas, poniéndolas en grupo aparte y anotándolas con la firma del presidente y del secretario, así como con las de los demás miembros y de los representantes políticos que desearen hacerlo. Se consignará en seguida en el acta el número de votos válidos, el de boletas protestadas y el de boletas rechazadas. Seguidamente se contará y comprobará el número de votos que hubiere alcanzado cada candidato.

Artículo 134.– Boletas nulas.– Si en algún sobre de votación aparecieren dos o más boletas iguales, solamente valdrá una de ellas, siendo nulas las demás. Si las boletas fueren de distintos partidos o candidaturas, todas serán nulas.

También serán nulas las boletas que tengan enmiendas, tachaduras, borraduras o nombres o palabras agregados, o que no correspondan a las boletas autorizadas por la Junta Central Electoral.

Artículo 135.– Boletas con manchas o imperfecciones.– No será anulable ninguna boleta por tener manchas, ni tampoco porque presente alguna imperfección en la preparación, siempre que se pueda determinar con certeza a favor de qué candidatos se ha querido votar.

Artículo 136.– Diferencia entre las boletas computadas y el libro de votación.– Si el número de boletas por las cuales se hubieren computado votos excediere del de las personas que hayan votado en la Mesa, según aparezcan en el libro de votación, se certificará esta circunstancia, haciendo constar en el acta y en la relación de boletas votadas el número exacto del exceso que resultare.

Artículo 137.– Boletas de más o de menos.– Cuando al hacer el escrutinio aparezcan boletas de más en la urna, la elección podrá ser anulada, si el resultado de ella dependiere de esa circunstancia.

Si se establece que en una Mesa Electoral en que aparezcan boletas de menos hubo fraude, la elección es anulable.

Artículo 138.– Derecho de verificación.– Cualquier representante de agrupación o partido político que haya sustentado candidatura podrá verificar, en presencia de la Mesa, cuando así lo solicita, el contenido de una boleta que haya sido leída.

Artículo 139.– Desaparición de las boletas.– Si desaparecieron las boletas usadas, en su totalidad o en parte, los miembros de la Mesa serán condenados de acuerdo con esta ley.

Artículo 140.– Consignación en el acta del escrutinio.– De las operaciones del escrutinio se dará constancia en el acta de la

Mesa Electoral, consignándose, el número total de sobres encontrados en la urna y su coincidencia o disparidad con el número de votantes que muestre el libro de votación; el número de sobres para boletas observadas correspondientes al personal de la Mesa y a representantes políticos y sus sustitutos que hayan votado en la Mesa y que no figuraron en la lista de electores de la misma; el número de sobres para boletas observadas por causa de protesta; el número de boletas anuladas por cualquier causa prevista en esta ley; el número de votos válidos obtenidos por cada partido o agrupación; y la constancia de haberse dado cumplimiento al procedimiento prescrito por esta ley para el escrutinio. El acta deberá ser firmada por el presidente, por el secretario y por los vocales de la Mesa, y podrá serlo por los representantes políticos que deseen hacerlo. Los miembros de la Mesa y los representantes de las agrupaciones y partidos políticos y sus sustitutos que hayan sustentado candidatura podrán formular al pie del acta las observaciones que les merezcan las operaciones del escrutinio firmando dichas observaciones con el presidente y el secretario.

Artículo 141.– Relaciones de votación.– Terminado el escrutinio y una vez consignadas en el acta las operaciones correspondientes al mismo, se formarán dos relaciones por quintuplicado, una para los cargos de elección nacional, departamental y provincial, y otra para los cargos de elección municipal. En ellas se hará constar el título de cada cargo que haya de cubrirse y los nombres de las personas que figuran como candidatos, expresándose con palabras y en guarismos el número de votos alcanzados por cada candidato para cada cargo. También se expresará en dichas relaciones, con palabras y guarismos:

a) el número total de las boletas rechazadas por algún motivo legal;

b) el número total de sobres de boletas observadas;

c) el número total de boletas por las que se hayan contado votos;

d) el número total de boletas encontradas en la urna;

e) el número total de votantes que conste en el libro de votación; y

f) la diferencia, si la hubiere, entre el total del apartado "d" y el apartado "e".

Firmarán cada pliego de las relaciones el presidente, los vocales y el secretario de la Mesa Electoral, así como los representantes de agrupaciones o partidos políticos acreditados ante la misma, o sus respectivos sustitutos, certificando que las relaciones son completas, exactas y conforme con el acta, y estampando en cada pliego el sello de la Mesa. Si algún representante de agrupación o partido político no quisiere firmar se hará constar esta circunstancia.

A cada representante de agrupación o partido político se le expedirá un extracto en el que conste el número de votos que alcanzó cada candidatura.

Después de leerse en alta voz, se fijará un ejemplar de cada relación en el exterior del local en que se haya celebrado la elección, junto a la puerta del mismo.

Artículo 142.– Distribución de las relaciones de votación.– Sendos ejemplares de las relaciones de votación a que se refiere el artículo que antecede serán remitidos bajo sobre sellado a la Junta Central Electoral, a la Junta Departamental Electoral, a la Junta Provincial Electoral y a la Junta Municipal Electoral correspondiente.

La remisión a la Junta Municipal Electoral se hará por medio de una comisión compuesta por el presidente o quien haga sus veces, y los dos vocales o sus respectivos sustitutos. Cualquier representante de agrupación o partido político podrá acompañar a la comisión, cooperar a la custodia y vigilancia de los paquetes y presenciar el acto de entrega.

Artículo 143.– Entrega de urnas y documentos.– Junto con las relaciones de votación se enviarán a la Junta Municipal Electoral correspondiente cuatro paquetes sellados y respectivamente marcados, conteniendo los siguientes documentos: 1ro. las boletas válidas; 2do. las boletas rechazadas; 3ro. los sobres de boletas observadas; 4to. el libro de votación, el acta de la Mesa, el pliego o pliegos de escrutinio, la lista de electores de la Mesa, las credenciales de los miembros de la Mesa y las de los representantes de agrupaciones o partidos políticos, la del secretario y las de los

escribientes que hayan funcionado o votado en la Mesa y todos los demás documentos pertenecientes a la misma. Dichos paquetes se reunirán en uno sólo que se sellará con lacre en presencia de todos los miembros de la Mesa. En la cubierta del paquete se indicarán los documentos contenidos en el mismo, con la firma del presidente y del secretario, de los miembros de la Mesa y de los delegados que desearen hacerlo.

Además, en sobre aparte, también sellado con lacre y firmado por el presidente y el Secretario, que llevará estampado el sello de la Mesa Electoral, se enviará y se entregará a la Junta Municipal Electoral uno de los ejemplares certificados de la lista de electores de la Mesa, en el cual se indicarán todos los electores comprendidos en dicha lista que no hubieren votado. Este ejemplar de la lista de electores será certificado por el presidente y por el secretario y firmado además por los demás miembros de la Mesa, así como por los representantes políticos que desearen hacerlo.

Al recibir la documentación, la Junta Municipal Electoral le dará un recibo a la comisión, en el cual constará el barrio o sección de la Mesa de donde proceda la documentación, los nombres de los representantes de agrupaciones o partidos que presenciaren la entrega, el estado de la documentación y la hora y minutos de la entrega.

En el caso de que la entrega de todo lo que acaba de expresar no fuere efectuada dentro de un tiempo razonable adecuado para hacer un viaje desde el sitio donde esté situada la Mesa Electoral, contando desde las doce de la noche del mismo día de la elección, la Junta Municipal Electoral tomará las providencias que estime pertinentes para averiguar la causa de la demora.

Con el fin de recibir la urna y la documentación, la oficina de la Junta Municipal Electoral, desde las cuatro pasado meridiano del día en que se celebren las elecciones, estará abierta a todas horas, permaneciendo en ella todos los miembros de la Junta en sesión permanente, inclusive los representantes de agrupaciones o partidos políticos si lo desearen, hasta que se reciban las urnas y los documentos de todas las Mesas Electorales de su jurisdicción. En esta sesión permanente de la Junta Municipal se irán recibiendo las comisiones de las Mesas Electorales con los expedientes, y a

medida que llegue una comisión se conocerán las relaciones, se contarán los votos de los paquetes y se irán anotando los resultados en el libro de actas, expidiendo recibos a los comisionados.

Capítulo VIII

Del cómputo y las relaciones del municipio

Artículo 144.– Plazo para efectuarla.– El día siguiente a aquel en que se hubieren efectuado las elecciones cada Junta Municipal Electoral comenzará el cómputo de las relaciones de votación formuladas por las Mesas Electorales de su jurisdicción como el resultado de los escrutinios que hubieren verificado. Dicho cómputo se continuará sin interrupción cada día desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde por lo menos, y deberá quedar terminado dentro de un período no mayor de tres días, a menos que ello no fuere posible por causas insuperables, caso en el cual se hará constar la causa en el acta correspondiente. Tanto la Junta Central Electoral como la Junta Departamental y la Junta Provincial correspondientes podrán enviar uno o más comisionados con encargo de hacer una investigación acerca de las causas del retardo.

Artículo 145.– Procedimiento.– La Junta Municipal Electoral efectuará el cómputo públicamente, en su propio local, debidamente citados los presidentes, secretarios y escribientes de las Mesas Electorales y los representantes de agrupaciones o partidos políticos. Tras una reja que el presidente de la junta hará fijar podrán presenciar el cómputo y demás operaciones los candidatos o sus respectivos apoderados y los electores que lo deseen y que quepan cómodamente en el local, a juicio del presidente. Durante esta operación el local permanecerá abierto, pero podrá ser cerrado por mandato del presidente en caso de desorden, permaneciendo en el interior solamente los candidatos o sus apoderados y los electores presentes que se condujeren correctamente. Los causantes del desorden serán desalojados. Al restablecerse el orden el local será nuevamente abierto.

Los presidentes, secretarios y escribientes de las Mesas Electorales podrán retirarse una vez terminado el examen de los

documentos correspondientes a la Mesa en que hubiere actuado cada uno de ellos; debiendo consignarse esta circunstancia en el acta.

Los sobres que contengan las copias certificadas de listas de electores en las que conste cuáles son los electores que no votaron en las mesas respectivas, serán abiertos, y con dichas copias se formará un legajo, que será consultado por la Junta Municipal al hacer el cómputo de relaciones, con el fin de verificar si los miembros del personal de alguna mesa y los representantes de agrupaciones y partidos políticos ante la misma que hubieren votado en ella se abstuvieron o no de votar en las mesas en cuyas listas de electores figuraban.

Las cubiertas de los paquetes o sobres que contengan las relaciones sólo se romperán por la Junta Municipal Electoral estando ésta en sesión pública y en presencia de las comisiones que los entreguen. En el acta se hará constar, al relatar el hecho de la apertura, el estado de las cubiertas y de los sellos.

Artículo 146.— Boletas anuladas por las Mesas Electorales.— La Junta Municipal Electoral examinará una por una las boletas que hubieren sido anuladas por cada Mesa Electoral, y confirmará o revocará, según proceda, la decisión adoptada en cada caso por dicha Mesa. Los votos que la Junta Municipal Electoral declare válidos serán agregados al cómputo de la Mesa Electoral de que se trate, haciéndose una anotación al respecto al margen del acta de la Mesa Electoral y de la relación de votación correspondiente. Las decisiones de la Junta Municipal Electoral se harán constar en el acta de ésta.

Artículo 147.— Examen de boletas observadas.— La junta Municipal Electoral procederá en seguida a conocer de las boletas observadas, para lo cual procederá del modo siguiente:

Serán examinados en primer lugar los sobres de boletas observadas correspondientes a los miembros de la Mesa Electoral y a los delegados de agrupaciones o partidos políticos que hubieren votado en ella estando incluídos en la lista de electores correspondiente a otra Mesa. La Junta Municipal Electoral verificará, mediante el examen de las copias certificadas de las listas de electores que no hubieren votado en cada Mesa Electoral, si dichos miembros del personal y delegados políticos de la misma se abstuvieran de votar en la

Mesa Electoral en cuya lista de electores figuraban. En caso afirmativo, los correspondientes sobres de boletas observadas serán abiertos, y los sobres de votación que de ellos sean extraídos se mezclarán con los demás sobres de votación que se encuentren en el mismo caso y con todos aquellos otros respecto de los cuales las objeciones fueren rechazadas.

La Junta Municipal Electoral pasará en seguida a conocer de las boletas protestadas por otras causas. Oídas las partes que habrán debido ser citadas por la Mesa Electoral correspondiente y que se encontraren presentes, y vistos los documentos y oídos los testigos presentados por dichas partes, decidirá sobre la admisión o rechazamiento de las protestas. Si la protesta fuere admitida, el voto será anulado. Si fuere rechazada, el sobre de boleta observada será abierto y se extraerá de él el sobre de votación, mezclándolo con los demás sobres de votación extraídos de sobres de boletas observadas.

Se procederá entonces a mezclar todos los sobres de votación extraídos de sobres para boletas observadas de conformidad con las disposiciones que anteceden, de tal manera que no sea posible identificar el que hubiere sido depositado por cada votante. Luego serán extraídos de dichos sobres de votación las boletas que contengan, y los votos que de ellas resulten se agregarán al cómputo de la Mesa Electoral correspondiente, salvo que hubieren de ser anulados por otras causas legales, y se haran las mismas anotaciones al margen del acta y de la relación de votación de la Mesa Electoral correspondiente que en el caso de boletas anuladas.

Los procedimientos prescritos en los párrafos que anteceden serán cumplidos con respecto a cada una de las Mesas Electorales, en el orden en que hubieren entregado las urnas y los documentos de elección y escrutinio correspondientes.

Las decisiones de la Junta Municipal Electoral en los casos a que se refiere el presente artículo se consignarán en el acta correspondiente, y serán susceptibles de apelación ante la Junta Central Electoral en la forma y en los plazos que se establecen en otra parte de la presente ley.

Artículo 148.– Reparos.– Durante el cómputo de una Junta Electoral cualquier representante de agrupación o partido político que hubiere sustentado candidatura, o cualquier

candidato o su apoderado, podrá indicar los reparos que desee oponer a los procedimientos que se sigan en la práctica de dicho cómputo, y la Junta Electoral tomará con motivo de tales reparos los acuerdos que sean de lugar.

Artículo 149.— Relación General de la votación, en el municipio.— Terminado el cómputo, la Junta Municipal Electoral formará una relación general de la votación de todo el municipio para los cargos que figuren en las boletas, con la suma de los resultados contenidos en las relaciones de las diferentes Mesas Electorales, completadas, si fuere necesario, con el resultado de las decisiones tomadas por la Junta Municipal sobre las boletas anuladas por las Mesas Electorales y sobre las boletas observadas y con el contenido de las actas pliegos de escrutinio y otros documentos, con excepción de las boletas remitidas por las Mesas, las cuales no podrán ser examinadas por la Junta Municipal al verificar el cómputo de relaciones a menos que fuere necesario. Tal necesidad podrá apreciarla la junta, de oficio, o a solicitud de un representante de agrupación, o de partido. Si la junta desestimare esta solicitud, se hará constar en el acta.

Artículo 150.— Relación de candidatos elegidos a cargos municipales.— La Junta Municipal Electoral formulará igualmente una relación expresiva de los candidatos a cargos de elección municipal que hubieren resultado elegidos.

Artículo 151.— Formalidades comunes a ambas relaciones.— Tanto la relación general de la votación como la relación de los candidatos elegidos para cargos municipales serán redactadas en quintuplicado. Cada hoja será firmada por el presidente y el secretario, así como por cada uno de los representantes de las agrupaciones o partidos políticos, debiendo expresarse en el acta, en el caso de no estar alguno dispuesto a firmar, el motivo en que funde su negativa. En cada copia de las relaciones se extenderá una certificación declarando que es fiel y completa, y expresando el día y hora de su formación, y se estampará en ella el sello de la junta.

Artículo 152.— Relación provisional.— En el caso de que la Junta Municipal Electoral anulare las elecciones de una o más Mesas Electorales, extenderá una relación provisional expresiva de los votos emitidos en las mesas donde no hubieren sido anuladas a favor de cada uno de los candidatos que figuren en

las boletas, y consignará en ella las mesas en que las elecciones hayan sido anuladas.

Artículo 153.– Publicación y distribución de las relaciones. Inmediatamente después de formuladas las relaciones de votación y de candidatos elegidos a que se refieren los artículos precedentes, el presidente de la Junta Municipal Electoral hará publicar en la tablilla un ejemplar de cada una de dichas relaciones durante cuatro días por lo menos; otro ejemplar lo enviará inmediatamente, en sobre cerrado y sellado, al presidente de la Junta Provincial Electoral respectiva; otro a la Junta Departamental, y otro a la Junta Central Electoral; y el quinto lo archivará el secretario.

Al delegado de cada agrupación o partido político que haya sustentado candidatura se le extenderá un ejemplar o copia o extracto certificado de dichas relaciones, si así lo solicitare.

Artículo 154.– Remisión de documentos.– Inmediantamente después de las operaciones prescritas en los artículos anteriores, la Junta Municipal Electoral empaquetará nuevamente, bajo cubierta cerrada y sellada, todos los documentos que hubieren sido abiertos, y enviará por correo, bajo sobre certificado, la documentación de cada mesa, con excepción de las boletas oficiales, a la Junta Provincial Electoral correspondiente. En la cabecera de la provincia la documentación será entregada personalmente al secretario de la Junta Provincial Electoral por el presidente de la Junta Municipal Electoral.

Capitulo IX

De la anulación de las elecciones

Sección I

De la anulación de oficio

Artículo 155.– La Junta Municipal Electoral, de oficio, por resolución motivada, podrá anular las elecciones de una o varias mesas en totalidad o con respecto a uno o varios cargos, en los casos siguientes:

1ro.– Cuando conste de manera concluyente, por el sólo examen de los documentos, prescindiendo del examen de las

boletas, que existe alguna de las causas de nulidad previstas en esta ley;

2do.– Cuando conste haberse declarado elegida una persona que no fuera elegible para el cargo en el momento de su elección; y

3ro.– Si le es imposible a la Junta Municipal Electoral determinar, con los documentos en su poder, cuál de los candidatos municipales ha sido elegido para determinado cargo.

Sección II

De la impugnación

Artículo 156.– Motivos de impugnación.– Las elecciones pueden ser impugnadas por cualquiera de las causas siguientes:

1ro.– Por error, fraude o prevaricación de una Junta Electoral, o de cualquiera de sus miembros, que tuviere por consecuencia alterar el resultado de la elección;

2do.– Por haberse admitido votos ilegales o rechazado votos legales, en número suficiente para hacer variar el resultado de la elección;

3ro.– Por haberse impedido a electores, por fuerza, violencias, amenazas o soborno, concurrir a la votación en número tal que de haber concurrido hubieran podido variar el resultado de la elección;

4to.– Por cualquier otra irregularidad grave que sea suficiente para cambiar el resultado de la elección.

También podrá impugnarse la elección por haberse declarado elegida una persona que no fuere elegible para el cargo en el momento de la elección.

Artículo 157.– Procedimiento.– Las acciones que se intenten con el fin de anular elecciones serán incoadas por el presidente de la Junta Municipal de la agrupación o el partido interesado, o quien haga sus veces, por ante la Junta Municipal Electoral correspondiente.

Estas acciones deben intentarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación del resultado del cómputo general a las agrupaciones y a los partidos políticos que hubieren sustentado candidaturas, o dentro de los cinco días siguientes a la condenación por fraudes electorales que hayan influído en el resultado de la elección.

Se introducirán por medio de escrito motivado, acompañado de los documentos que le sirvan de apoyo. Dicho escrito se entregará, junto con los documentos, bajo inventario por duplicado, al secretario de la Junta que deba decidir, quien dará cuenta inmediatamente al presidente de la misma y a la Junta Central Electoral.

El Presidente de la Junta Municipal, de una agrupación o partido político que intente la acción, o quien haga sus veces, deberá notificarla, con copia de los documentos en que la apoya, a los presidentes de los organismos correspondientes de los otros partidos y agrupaciones que hubieren sustentado candidatura.

Artículo 158.— Conocimiento y fallo.— La Junta Electoral apoderada conocerá de la acción dentro de los cinco días de haberse introducido, pero nunca antes del tercero, y fallará dentro de los cuatro días de haber conocido de ella. El fallo será fijado en la tablilla de publicaciones y notificado por oficio a los interesados y a la Junta Central Electoral, debiendo obtener el secretario, quien hará la notificación, constancia de la misma.

Sección III

De las apelaciones

Artículo 159.— Forma y plazo.— De las decisiones de las Juntas Municipales Electorales se podrá apelar ante la Junta Central Electoral dentro de los cinco días de su notificación. La apelación se interpondrá por ante el secretario de la Junta Electoral contra cuyo fallo se recurra, por medio de escrito que contenga los motivos en que se funde y al que se anexarán todos los documentos en su apoyo, bajo inventario por duplicado.

El secretario de la junta de cuya decisión se apele redactará acta, fijará un aviso en la tablilla de publicaciones, y dará cuenta a la junta, la que se reunirá y notificará inmediatamente por oficio a los candidatos de haberse intentado la apelación.

Dicho secretario enviará al de la Junta Central Electoral todo el expediente, incluyendo el acta del recurso, el fallo apelado, y todos los documentos que la junta hubiere tenido a la vista para dictarlo, así como los documentos recibidos con el recurso.

Las réplicas se harán por escrito, y a ellas se anexarán los documentos en apoyo. Se entregarán mediante recibo al secretario de la Junta Central Electoral, o se le remitirán por correo certificado.

Artículo 160.– Conocimiento y fallo.– Cuando el secretario de la Junta Central Electoral haya recibido un expediente de apelación lo comunicará inmediatamente al presidente, quien dentro de los quince días siguientes, y nunca antes del quinto, fijará la audiencia en que se conocerá públicamente del recurso.

El apelante comparecerá sólo o asistido por abogado, o representado por éste. Los candidatos cuya elección se impugne podrán comparecer de igual modo. Si el apelante o los candidatos no comparecieren se conocerá sin su presencia. La Junta Central Electoral fallará la apelación centro de los ocho días que sigan al de la última audiencia.

Las decisiones de la Junta Central Electoral serán publicadas por fijación de la tablilla y comunicadas por secretaría a todos los interesados y a la junta electoral que hubiere pronunciado la decisión impugnada. No serán susceptibles de ningún recurso.

Artículo 161.– Relaciones definitivas.– Tan pronto como le sea notificado el fallo de apelación, la junta que hubiere hecho el cómputo a que ella se refiere extenderá en forma definitiva la relación general de la votación en su territorio y la de los candidatos elegidos, de acuerdo con lo resuelto por la Junta Central Electoral, y procederá con los ejemplares de dichas relaciones en la forma que se determina precedentemente.

Sección IV

De la nueva elección en caso de anulación

Artículo 162.– Disposiciones que debe dictar la Junta Central Electoral.– Una vez que haya llegado a ser irrevocable el fallo por el cual se anule una elección, ya sea por no haberse interpuesto apelación cuanto emane de una Junta Municipal Electoral, o por haber sido confirmado dicho fallo por la Junta Central Electoral, ésta dispondrá que vuelva a efectuarse la elección en la Mesa o las Mesas en las cuales hubiere sido anulado, en la fecha que al efecto señale por la correspondiente proclama de convocatoria y que deberá estar comprendida dentro de los treinta días siguientes.

En este caso la Junta Central Electoral dictará las disposiciones que fueren necesarias para que la nueva elección pueda llevarse a efecto. Los nombramientos expedidos por las Juntas Municipales Electorales respectivas para integrar el personal de las Mesas Electorales en las que haya de verificarse la nueva elección se considerarán válidos para los fines de ésta, procediendo únicamente las Juntas Municipales Electorales a llenar las vacantes que se hubieren producido.

Capítulo X

Del cómputo y las relaciones provinciales

Artículos 163.– Del cómputo provincial.– La junta provincial electoral hará el cómputo provincial, que comprenderá el resumen de todos los cómputos verificados por las juntas municipales electorales de su jurisdicción, en cuanto a los candidatos provinciales, departamentales y nacionales. Este cómputo provincial se efectuará públicamente, en el local de la junta provincial, en la misma forma que los cómputos verificados por las juntas municipales electorales. Comenzará inmediatamente después de haberse recibido la relación general y la documentación precedente de cada una de dichas juntas municipales, y continuará diariamente desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, pudiendo suspenderse los trabajos durante dos horas solamente, y terminándose dentro de un período no mayor de tres días.

Los presidente de las Juntas Municipales electorales podrán asistir al cómputo provincial, y en este caso tendrán voz en las discusiones que puedan suscitarse al realizarse el examen de los documentos correspondientes a la Junta que presidió cada uno, pudiendo retirarse a mediados que termine dicho examen. Esta circunstancia se consignará en el acta.

Artículo 164.— Relación general de la votación en la provincia.— Terminado por la Junta Provincial Electoral el cómputo de las relaciones generales de los municipios de su jurisdicción, la Junta Provincial Electoral hará una relación general, por cuadruplicado, de la votación efectuada en su territorio para todos los cargos provinciales, departamentales y nacionales, mostrando el resultado en cada municipio. En la preparación de esa relación general de Junta Provincial Electoral podrá, de oficio o a solicitud de los representantes de agrupaciones o partidos políticos, o de los candidatos o de sus apoderados, examinar todos los documentos procedentes de las Juntas Municipales o de las Mesas Electorales.

Artículo 165.— Certificación del candidato elegido al cargo de Gobernador Provincial.— La Junta Provincial Electoral expedirá también una certificación por triplicado por la que conste cuál ha sido el candidato que ha resultado elegido para el cargo de Gobernador Provincial, en el caso de que no hubiere sido anulada la elección en una o más Mesas Electorales.

Artículo 166.— Relación provisional.— En el caso de que una o más Juntas Municipales Electorales hayan anulado la elección en una o más Mesas Electorales de su jurisdicción, y siempre que esa anulación afecte el resultado de la elección para cargos provinciales, departamentales y nacionales, la Junta Provincial Electoral correspondiente, después de determinar su cómputo, formulará una relación provisional expresiva de los votos emitidos en las Mesas donde no hubieren sido anuladas, a favor de cada uno de los candidatos a cargos provinciales, departamentales, y nacionales, consignando en ella las Mesas en que las elecciones hayan sido anuladas.

Artículo 167.— Formalidades comunes.— Cada hoja de las relaciones y de la certificación a que se refieren los artículos que anteceden será firmada por el presidente y el secretario de la Junta Provincial Electoral, así como por los representantes

acreditados ante la misma de agrupaciones o partidos políticos que hubieren sustentado candidaturas, consignándose su negativa y el motivo de ello en caso contrario. Se estampará en cada hoja el sello de la Junta Provincial Electoral.

Artículo 168.– Publicación y distribución.– Los cuatro ejemplares de relación general de votación se distribuirán del modo siguiente: un ejemplar se publicará en la tablilla de la Junta Provincial Electoral durante un período de seis días por lo menos; otro se enviará, bajo sobre sellado y certificado, a la Junta Departamental Electoral; otro a la Junta Central Electoral, y el último ejemplar se archivará en la Junta Provincial Electoral.

Un ejemplar de la certificación del candidato elegido al cargo de Gobernador provincial será fijado en la tablilla de publicaciones durante seis días por lo menos, otro será remitido bajo sobre sellado y certificado a la Junta Central Electoral, y el tercero será archivado por la Junta Provincial Electoral.

Al delegado de cada agrupación o partido político que haya sustentado candidatura se le expedirá un ejemplar o copia o extracto certificado de la relación y de la certificación mencionadas, si así lo solicitare.

Capítulo XI

Del cómputo y las relaciones departamentales

Artículo 169.– Del cómputo departamental.– La Junta Departamental Electoral hará el cómputo departamental, que comprenderá el resumen de todos los cómputos verificados por las Juntas Provinciales Electorales de su jurisdicción, en cuanto a los candidatos departamentales y nacionales. Este cómputo departamental se efectuará publicamente, en el local de la Junta Departamental Electoral, en la misma forma que los cómputos verificados por las Juntas Municipales Electorales, inmediatamente después que se haya recibido la relación general y la documentación procedente de cada una de las Juntas Provinciales Electorales.

Los presidentes de las Juntas Provinciales Electorales podrán asistir al cómputo departamental, y en este caso tendrán voz en las discusiones que puedan suscitarse al realizarse el examen de

los documentos correspondientes a la Junta que hubiere presidido cada uno, pudiendo retirarse a medida que termine dicho examen. Esta circunstancia se consignará en el acta.

Artículo 170.– Relación general de la votación en el departamento.– Terminado por la Junta Departamental Electoral el cómputo de las relaciones generales de las provincias de su jurisdicción, la Junta Departamental Electoral hará una relación general por triplicado de la votación efectuada en su jurisdicción para los cargos departamentales y nacionales, que muestre el resultado en cada provincia. En la preparación de esa relación general la Junta Departamental Electoral podrá, de oficio o a solicitud de los representantes de agrupaciones o partidos políticos, o de los candidatos o de sus apoderados, examinar todos los documentos procedentes de las Juntas Provinciales o de las Mesas Electorales.

Artículo 171.– Relación de candidatos elegidos a cargos de Senadores y Diputados.– La Junta Departamental formulará una relación por quintuplicado expresiva de los candidatos a los cargos de Senadores y Diputados que hayan resultado elegidos, en los casos en que no hubieren sido anuladas las elecciones en ninguna Mesa.

Artículo 172.– Relación provisional.– En el caso de que una o más Juntas Municipales Electorales hubieren anulado la elección en una o más Mesas Electorales de su jurisdicción, y siempre que esa anulación afecte el resultado de la elección para los cargos de Senadores y Diputados o para los cargos de elección nacional, la Junta Departamental Electoral formulará una relación provisional expresiva de los votos emitidos en las Mesas donde no hubieren sido anuladas las elecciones, a favor de cada uno de los candidatos a cargos de Senadores y Diputados y a cargos nacionales, consignando en ella las Mesas Electorales en las cuales haya sido anulada la elección.

Artículo 173.– Formalidades comunes.– Cada hoja de las relaciones a que se refieren los artículos que anteceden será firmada por el presidente y el secretario de la Junta Departamental Electoral y por los representantes acreditados ante la misma de agrupaciones o partidos políticos que hubieren sustentado candidaturas, consignándose su negativa y el motivo de ella en caso contrario. Se estampará en cada hoja el sello de la Junta Departamental Electoral.

Artículo 174.— Publicación y distribución.— De los tres ejemplares de la relación general de la votación en el departamento uno será fijado en la tablilla de publicaciones de la Junta Departamental Electoral durante no menos de seis días; otro será remitido bajo sobre sellado y certificado a la Junta Central Electoral, y el tercero será archivado por la Junta Departamental Electoral.

Los cinco ejemplares de la relación de candidatos elegidos serán distribuídos del modo siguiente: uno será fijado en la tablilla de publicaciones de la Junta Departamental Electoral durante seis días por lo menos; otro será remitido bajo sobre sellado y certificado a la Junta Central Electoral dos se enviarán en igual forma a los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente; y el quinto será archivado por la Junta Departamental Electoral.

Al delegado de cada agrupación o partido político que haya sustentado candidatura se le expedirá un ejemplar o copia o extracto certificado de cada una de las relaciones mencionadas, si así lo solicitare.

Capítulo XII

Del cómputo y las relaciones nacionales

Artículo 175.— Del cómputo nacional.— Con la suma de los resultados que muestren las relaciones formuladas por las Juntas Departamentales Electorales y por la Junta Electoral del Distrito Nacional, la Junta Central Electoral efectuará el cómputo general de la votación en toda la República para los cargos de elección nacional. Este cómputo se hará en sesión pública. Se iniciará inmediatamente después de recibidas dichas relaciones cuando no haya sido anulada la elección en ninguna Mesa Electoral; en caso contrario, el cómputo se llevará a efecto después que se haya verificado la nueva elección en las Mesas donde haya sido anulada la primera.

Artículo 176.— Relación general del resultado de la elección.— Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la elección, o a la mayor brevedad posible después de transcurrido este plazo, tan pronto como el resultado de la elección en todos los municipios sea definitivamente conocido, la Junta Central Electoral deberá formular una relación general en la

que se consignará, por cada municipio, por el Distrito Nacional, por cada provincia, por cada Departamento y para toda la República, el total de votos emitidos y el total de votos computados en pro y en contra de cada candidatura; así como el candidato a los candidatos que hubieren resultado elegidos para todos los cargos.

Capítulo XIII

Determinación de los candidatos elegidos

Artículo 177.— Caso en que no haya lugar a representación proporcional.— Cuando no haya lugar a la representación proporcional de las agrupaciones y partidos, se considerará elegido para cada cargo el candidato que hubiere obtenido la mayoría, entendiéndose por tal el mayor número de votos emitidos para ese cargo.

Artículo 178.— Empate.— Cuando dos o más candidatos a un mismo cargo obtuvieren igual número de votos se resolverá el empate por la suerte, del modo siguiente: se inscribirán en tarjetas distintas los nombres de los candidatos empatados. El presidente de la Junta Electoral correspondiente, en presencia de los miembros de ésta y de los representantes de agrupaciones o partidos políticos que hubieren sustentado candidaturas, pero no del secretario, colocará cada una de las tarjetas dentro de un sobre blanco, que cerrará. Tanto los sobres como las tarjetas serán de clase, forma y aspecto iguales. Acto continuo el presidente colocará los sobres así dispuestos dentro de un receptáculo, y cada uno de los vocales de la junta, sucesivamente, a la vista del presidente, pero no de los demás vocales, revolverá dichos sobres dentro del receptáculo. En seguida, el secretario, en presencia de la junta, sacará un sobre, y el nombre que éste contenga, y que será leído de inmediato en alta voz por el presidente de la junta, será el del candidato elegido.

Artículo 179.— Representación proporcional.— Para la representación proporcional solamente serán tomados en consideración las agrupaciones y partidos políticos reconocidos.

1.— Para estos fines se tendrán en cuenta el factor de representación, que será el cociente sin fracción de la división

de la cantidad total de votos por el número de candidatos a elegir, y el residuo que resulte de esa división.

II.— Cuando se haya de elegir a tres o más candidatos, el cociente de la división de la cantidad de votos de cada partido o agrupación por el factor de representación determinará el número de candidatos electos por cada partido o agrupación que haya cubierto el factor de representación; pero si el número de candidatos electos así obtenido es menor que el de los candidatos a elegir, se tendrá por elegido un candidato más de cada uno de los partidos o agrupaciones que hayan cubierto el factor de representación, en el orden decreciente de sus respectivos residuos, hasta completar el número de los candidatos a elegir.

III.— Cuando hayan de elegirse dos candidatos se tendrán por elegidos los postulados por el partido o agrupación que haya obtenido un número de votos igual o mayor que el factor de representación, a menos que otro partido o agrupación no haya alcanzado 75 por ciento de dicho factor, caso en el cual se considerará elegido un candidato por cada uno de dichos partidos o grupos.

Capítulo XIV

De los certificados de elección y de la proclamación de los candidatos elegidos

Artículo 180.— Certificados de elección.— A todo candidato a un cargo electivo que hubiere resultado elegido de acuerdo con las normas establecidas por la presente ley le será expedido el correspondiente certificado de su elección por la Junta Municipal Electoral si se trata de cargo de elección municipal; por la Junta Provincial Electoral cuando se trata del Gobernador provincial, por la Junta Departamental si se trata de los cargos de Diputados y Senadores al Congreso Nacional, y por la Junta Central Electoral cuando se trate de cargos de elección nacional.

Todo certificado de elección expresará el nombre y la jurisdicción del organismo que lo expida, el lugar y la fecha de su expedición, los nombres y apellidos del funcionario elegido, el nombre del partido o de la agrupación que sustentó su candidatura, la clase y la fecha de la elección, el número de

votos que haya obtenido, el título del cargo, y el período durante el cual debe ocuparlo.

Los certificados serán autorizados con las firmas del presidente y el secretario del organismo que los expida, y llevarán estampado el sello de éste.

Serán entregados personalmente y mediante recibo por el Secretario de dicho organismo, o remitidos por carta certificada.

Artículo 181.— Duplicados de los certificados de elección.— Al mismo tiempo que el original se extenderá un duplicado de todo certificado de elección, el cual se remitirá por carta certificada o por un propio al Presidente del Ayuntamiento correspondiente cuando se trate de certificados de elección para cargos municipales; al Presidente de la República cuando se trate de certificado de elección para el cargo de Gobernador provincial; y a los Presidentes de las Cámaras Legislativas si se trata de certificado de elección a los cargos de Senador y de Diputado al Congreso Nacional. Los duplicados de los certificados de elección para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República serán remitidos al Presidente del Senado.

Artículo 182.— Proclamación.— Corresponde a los mismos organismos que hayan expedido los certificados de elección según antes queda dicho la proclamación de los candidatos elegidos para los diversos cargos; salvo la del Presidente y Vicepresidente de la República, que será hecha por la Asamblea Nacional.

TITULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 183.— Franquicia de comunicaciones.— Toda la correspondencia oficial postal, telefónica, telegráfica, radiotelegráfica o por cualquier otra vía de comunicación, procedente de la Junta Central Electoral, de las Juntas Electorales o de los Inspectores Electorales, gozará de franquicia absoluta y será en consecuencia trasmitida sin costo alguno por las vías y servicios pertenecientes al Estado o a los municipios o administrados por éstos.

BIBLIOTECA GENERAL DE LA NACION

Artículo 184.— Exención de impuestos y derechos sobre documentos.— Todas las certificaciones, declaraciones, solicitudes, reclamaciones, peticiones, y cualesquiera otros documentos que hubieren de ser dirigidos a los organismos y funcionarios electorales o emanaren de éstos, y que se relacionen con asuntos electorales, estarán exentos de todo género de impuestos, derechos, tasas o contribuciones nacionales o municipales.

En los casos en que sea necesaria la presentación de la cédula personal de identidad para cualesquiera fines relacionados con el derecho de elegir y con la aplicación de la presente ley en general, no será requisito indispensable que dicha cédula se encuentre al día en cuanto al pago de los impuestos y derechos fiscales a que estuviere sujeto la obtención o la renovación de la misma.

TITULO VIII

INFRACCIONES Y PENAS

Artículo 185.— Serán castigados por el tribunal correccional con prisión de seis meses a dos años y con multa de doscientos a mil pesos las personas que en una solicitud de inscripción de partido hagan declaración falsa respecto del número de sus afiliados.

Artículo 186.— Serán castigados con prisión correccional de tres meses a un año o con multa de cien a quinientos pesos, o con ambas penas a la vez:

1.— Los que inscribieren e intentaren inscribir como electores a personas imaginarias.

2.— Los que se inscribieren o trataren de inscribirse como electores con cualquier nombre que no sea el suyo.

3.— Los que hicieren que se les inscriba o permitieren a sabiendas ser inscritos como electores más de una vez.

4.— Los que hicieren su inscripción o la de otra persona como electores en cualquier lugar, con conocimiento de que no es el lugar donde les corresponde hacerlo.

5.– Los que firmen con nombre distinto del suyo un documento de propuesta.

6.– Los que falsificaren un documento de propuesta.

7.– Los que firmen un documento de propuesta no siendo electores en la división política a que dicho documento corresponda.

8.– Los que firmen más de un documento de propuesta para un mismo cargo, a no ser que todos los anteriormente firmados hubieren sido retirados o declarados nulos.

9.– Los que presentaren un documento de propuesta a sabiendas de que contiene alguna firma falsa o de que está firmado por alguno que no sea elector de la división política a la que corresponda, o que es fraudulento en cualquiera de sus partes.

10.– Los que votaren sin tener derecho para hacerlo.

11.– Los que votaren más de una vez en una misma elección.

12.– Los que a sabiendas depositaren dos o más boletas.

13.– Los que votaren usando cualquier nombre que no sea el suyo.

14.– Los electores que directa o indirectamente solicitaren dádivas o presentes para votar a favor de cualquier candidato o grupo de candidatos en una elección.

15.– Los que mediante soborno o de otra manera procuraren que una persona investida por la ley de un cargo oficial en relación con las elecciones deje de cumplir o se niegue a cumplir los deberes que éste le impone.

16.– Los que mediante soborno o por cualquier otro medio procuraren que una persona investida por la ley con un cargo oficial en relación con las elecciones cometa o permita a otra persona cometer algún hecho que constituya infracción a las disposiciones legales relativas a la elección.

17.— Los que amenazaren o cometieren excesos de poder en relación con las materias electorales.

18.— Los delegados de partidos ante Mesas Electorales a quienes les fueren rechazadas diez o más propuestas o impugnaciones contra electores.

19.— Los que indujeren o auxiliaren a otro a cometer cualquiera de los hechos expresados en este artículo.

Artículo 187.— Serán castigados con prisión correccional de seis meses a dos años o con multa de doscientos a mil pesos, o con ambas penas:

1.— Los que inscribieren o hicieren inscribir a cualquier persona como elector de alguna división política, a sabiendas de que no tiene derecho a ello.

2.— Los que se negaren, a sabiendas, a inscribir o permitir que se inscriba cualquier elector que legalmente deba ser inscrito.

3.— Los que aceptaren definitivamente un documento de propuesta con conocimiento de que es ilegal o fraudulenta en su totalidad o en parte.

4.— Los que se negaren a admitir una propuesta presentada en el tiempo y la forma debidos, con arreglo a las prescripciones de esta ley.

5.— Los que incluyeren en las boletas oficiales para cualquier elección los nombres de personas que no deban figurar en ellas.

6.— Los que se negaren a incluir o dejaren de incluir en las boletas oficiales para cualquier elección el nombre de algún candidato que deba figurar en ellas.

7.— Los que permitieren otar a cualquier persona, a sabiendas de que el voto de ésta no debe recibirse.

8.— Los que maliciosamente se negaren a admitir el voto de cualquier persona que tuviere derecho a que se admita.

9.— Los que ilegalmente agregaren o permitieren que otro agregue alguna boleta a las legalmente votadas.

10.- Los que sacaren o permitieren que otros saquen alguna boleta de las legalmente votadas.

11.– Los que sustituyeren una boleta por otra.

12.– Los que incluyeren o permitieren que otro incluya en el libro de votación el nombre de una persona que no hubiere votado.

13.– Los que maliciosamente dejaren de incluir en el libro de votación el nombre de alguna persona que hubiere votado.

14.– Los que hicieren o permitieren que otro haga un escrutinio o relación fraudulentos de los votos emitidos.

15.– Los que firmaren un certificado de elección a favor de persona que no tenga derecho a ello.

16.– Los que se negaren o dejaren de firmar un certificado de elección a favor de cualquier persona que tenga derecho al mismo.

17.– Los que falsificaren, desfiguraren, destruyeren, suprimieren, sustrajeren, o dispusieren ilegalmente de todo o parte de cualquier lista o registro electoral, documento de propuesta, boleta, libro de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección o cualquier otro documento de los que se exigen por esta ley.

18.– Los que solicitaren dádivas o accedieren al soborno en los casos previstos por disposiciones anteriores.

19.– Los miembros de las mesas electorales en las cuales desaparecieren las boletas y no se hubiere podido determinar el culpable.

20.– Los que careciendo de atribuciones para ello actuaren o pretendieren actuar con el carácter de funcionarios autorizados por esta ley.

21.– Los funcionarios administrativos o judiciales que se mezclaren en los actos electorales usando de su influencia oficial para las elecciones.

22.— Los individuos de cualquier cuerpo de policía o de la fuerza pública que intimidaren a cualquier elector o ejercieren presión en su ánimo para impedir el ejercicio de las atribuciones y prerrogativas que le estén acordadas por la Constitución y por esta ley, o se inmiscuyeren de cualquier modo en cualquier elección o en el resultado de la misma.

23.— Los que amenazaren, prometieren o acordaren, directa o indirectamente, separar o rebajar de su categoría o sueldo a un funcionario o empleado público, o procurar que se le separe o se le rebaje de categoría o sueldo, con el propósito de ejercer influencias sobre las determinaciones de dicho funcionario o empleado en el ejercicio de su derecho electoral.

24.— Los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otra persona a cometer cualquiera de los hechos previstos por este artículo.

Artículo 188.— Serán castigados con prisión correccional de un mes a un año, o con multa de treinta a trescientos pesos, o con ambas penas:

1.— Los que dejaren de cumplir con alguno de los deberes o de ejercer alguna de las funciones que esta ley les señale.

2.— Los que abandonaren sin permiso o autorización el cargo, comisión o función que de acuerdo con esta ley se les hubiere encomendado.

3.— Los que no cumplieren las obligaciones o deberes que la ley les señale, dentro del término que en ella se establece; y si la demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión del delito previsto en el inciso 14 del artículo 187, incurrirán en las penas señaladas para dicho delito en el citado artículo.

4.— Los que obstaculicen a cualquier elector en el acto de votar o al dirigirse o retirarse de las Mesas Electorales.

5.— Los que intimidaren o cohibieren en cualquier forma a un elector en el ejercicio de su derecho.

6.— Los que intervinieren indebidamente en el ejercicio de los deberes oficiales que la ley electoral imponga a cualquier persona o corporación.

7.- Los que sin facultad para ello se mezclaren en las operaciones legales de cualquier elección, o en la determinación del resultado de la misma.

8.- Los que a favor o en contra de cualquier candidato realizaren actos de agencia electoral a distancia menor de cincuenta metros de cualquier Mesa Electoral en día de elecciones.

9.- Los que, siendo miembros de cualquier Junta Electoral, hicieren propaganda electoral el de las elecciones.

10.- Los que exhibieren algún cartel político que no esté previsto por la ley, dentro del local de la Mesa Electoral.

11.- Los que ilegalmente retiraren cualquier boleta oficial del lugar de votación.

12.- Los que mostraren su boleta mientras la estuvieren preparando o después de preparada para votar, a cualquier persona, dándole conocimiento de su contenido, o en cualquier otra forma dieren a conocer el sentido en que han votado o se proponen votar, a no ser con el propósito y en ocasión de obtener el auxilio autorizado por la ley en la preparación de su boleta.

13.- Los que marcaren de alguna manera la boleta o hicieren en ella alguna señal de la que pudiere colegirse que contiene el voto a favor o en contra de una candidatura determinada.

14.- Los que por cualquier medio descubrieren o trataren de descubrir en favor de cuál candidatura ha dado o se propone dar su voto un elector.

15.- Los que votaren con alguna boleta que no hubieren recibido debidamente de la Mesa Electoral.

16.- Los que siendo miembros de la Mesa Electoral recibieren de algún elector la boleta ya preparada para votar.

17.- Los que extrajeren fuera del recinto de la Mesa Electoral cualquier boleta.

18.– Los que desobedecieren cualquier orden legal de una Junta o Mesa Electoral.

19.– Los que al auxiliar a un elector para la preparación de la boleta, llenaren ésta de manera distinta de los deseos expresados por aquel, o después de auxiliar a un elector revelaren el contenido de la boleta.

20.– Los que en algún caso no previsto por la ley abrieren cualquier paquete sellado que contenga boletas, libros de votación, pliegos de escrutinio, relaciones de votación o cualquier otro documento determinado por esta ley.

21.– Los que cometieren algún hecho que infringiere la presente ley y que no esté penado de otro modo por ella.

Artículo 189.– Serán castigados con la pena de multa, no menor de diez ni mayor de doscientos pesos, o con prisión correccional de seis días a seis meses, o con ambas penas, los que, teniendo a sus órdenes o a su servicio empleados, trabajadores u otros individuos con derecho de elegir, incurrieren en cualquiera de los hechos siguientes:

1.– negarle a cualquiera de ellos el permiso de presentarse a la hora y lugar señalados para inscribirse o para votar.

2.– despedir o amenazar con despedir a cualquiera de éstos por ejercer libremente el derecho de inscribirse o de votar.

3.– imponer o amenazar con imponer a cualquiera de ellos una pena o rebaja de salario o de jornal o de otra prestación que le sea debida, por el hecho de ejercer el derecho de inscribirse o de votar.

Artículo 190.– Serán castigados con la pena de reclusión:

1.– los que sustrajeren, desfiguraren, suprimieren, destruyeren o falsificaren todo o parte de cualquier lista, registro electoral, libro de votación, documento de propuesta, boleta de votación, pliego de escrutinio, certificado de elección, acta de Mesa Electoral, credenciales de funcionarios electorales, o cualquier otro documento que se exija por la ley electoral.

2.– los que indujeren, auxiliaren u obligaren a otro a cometer cualquiera de los actos previstos en el párrafo anterior.

3.– los que ordenaren o hicieren indebidamente impresión de boletas oficiales u otros impresos que pudieren ser confundidos con las mismas, o los que las distribuyeren o las utilizaren.

4. –los que ordenaren o fabricaren sellos iguales o que pudieren ser confundidos con los sellos oficiales de las Mesas o Juntas Electorales, y los que los distribuyeren o los utilizaren.

5.– los que utilizaren o distribuyeren a sabiendas cualquier documento que imite cualquier otro documento de los requeridos por esta ley.

6.– los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada.

Artículo 191.– Incurrirán en delito de falsedad y serán castigados con multa no menor de quinientos ni mayor de dos mil pesos, o con prisión correccional de seis meses a dos años o con ambas penas los que hicieren cualquier afirmación o declaración falsa con motivo de cualquier acto electoral.

Artículo 192.– La tentativa de cualquiera de los delitos previstos en esta ley será castigada como el delito mismo.

Artículo 193.– Las disposiciones del artículo 463 del Código Penal son aplicables a las infracciones previstas en esta ley.

Artículo 194.– Los delitos previstos en esta ley prescribirán a los seis meses de haberse cometido.

Artículo 195.– Las disposiciones contenidas en las leyes penales respecto de los crímenes o delitos cometidos en ocasión de las elecciones quedan vigentes en cuanto no hayan sido derogadas o modificadas por la presente ley.

Artículo 196.– Quedan derogadas la Ley No. 386, del 1ro. de abril de 1926, y todas las leyes modificativas de la misma; así como la Ley No. 1208, del 29 de junio de 1946, y cualesquiera otras disposiciones legales que estuvieren en contradicción con la presente ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 199° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de mayo, de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5885

ARTICULO UNICO.— Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962.

DEL:

CAPITULO I
PODER LEGISLATIVO

10120	CAMARA DE DIPUTADOS		33,600.00
G-10120-A	Servicios Personales:	33,600.00	

CAPITULO II
PODER EJECUTIVO

10310	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		5,057.96
G-10310-A	Servicios Personales	5,057.96	

CAPITULO III
SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20124	PERSONAL MILICIANO DEL EJERCITO NACIONAL		114,786.27
G20124-A	Servicios Personales	85,284.00	
G20124- B	Otros Gastos Corrientes	29,502.27	
		114,786.27	

20143	ATENCIONES VARIAS DEL EJER CITO NACIONAL		300,000.00
G-20143-E	Construcciones y Mejoras Permanentes	300,000.00	
20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS		87,262.50
G-20159-A	Servicios Personales	62,100.00	
G-20159	Atenciones Varias	25,162.50	
		87,262.50	
20401	FUERZA AEREA DOMINICANA		11,486.76
G-20401-B	Otros Gastos Corrientes	11,486.76	

CAPITULO IV
SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

30230	POLICIA RURAL		690,000.00
G-30230-A	Servicios Personales	690,000.00	

CAPITULO VII
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRE TARIO DE ESTADO		186,755.78
G-10415	Atenciones Varias	186,755.78	

CAPITULO X
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

31401	HOSPITALES, SANA TORIOS Y MATERNI DADES DEL ESTADO		7,450.00
G-31401	Atenciones Varias	7,450.00	

CAPITULO XI
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO

10435	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		7,000.00
G-10435	Atenciones Varias	7,000.00	

CAPITULO XI—I
SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

31471	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		5,400.00
G-31471-A	Servicios Personales	5,400.00	
			1,448,799.27

CAPITULO I
PODER LEGISLATIVO

1020	CAMARA DE DIPUTADOS		214.79
G-10120-Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	214.79	

CAPITULO III
SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		14,395.50
G-20101-A	Servicios Personales	6,975.00	
G-20101-	Atenciones Varias	7,480.50	
		14,395.50	

20111	ESTADO MAYOR GENERAL		8,775.00
G-20111-A	Servicios Personales	8,775.00	
20112	OFICIALES DEL EJERCITO NACIONAL		4,950.00
G-20112-A	Servicios Personales	4,950.00	
20152	CUERPO MEDICO EJERCITO NACIONAL		5,625.00
G-20152-A	Servicios Personales	5,625.00	
20120	PERSONAL ALISTADO DEL EJERCITO NACIONAL		65,475.00
G-20120-A	Servicios Personales	65,475.00	
20143	ATENCIONES VARIAS DEL EJERCITO		7,600.00
G-20143-B	Otros Gastos Corrientes	5,600.00	
G-20143	Atenciones Varias	2,000.00	
		7,600.00	
20160	INTENDENCIA GENERAL DEL MATERIAL BELICO DE LAS FUERZAS ARMADAS		26,000.00
G-20160	Atenciones Varias	26,000.00	
20401	FUERZA AEREA DOMINICANA		32,486.76
G-20401-B	Otros Gastos Corrientes	21,000.00	
G-20401-B	Construcciones y Mejoras Permanentes	11,486.76	
		32,486.76	
G-20153	MARINA DE GUERRA		52,300.00

G-20153-B	Otros Gastos Corrientes	30,300.00	
G-20153-	Atenciones Varias	22,000.00	
		52,300.00	

CAPITULO IV
SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

10491	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		22,200.00
G-10491-Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	3,000.00	
G-10491-	Atenciones Varias	19,200.00	
		22,200.00	

30220	POLICIA NACIONAL		576,894.66
G-30220-A	Servicios Personales	503,785.80	
G-30220-B	Otros Gastos Corrientes	2,000.00	
G-30220-C	Adquisición de Propiedades	36,500.00	
G-30220	Atenciones Varias	34,608.86	
		576,894.66	

CAPITULO V
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10340	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		5,057.96
G-10340-A	Servicios Personales	5,057.96	

CAPITULO VI
SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

30101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO	3,660.00

G-30101-A	Servicios Personales	3,660.00	
30105	EMBAJADAS Y LEGACIONES		107,225.00
G-30105-A	Servicios Personales	18,325.00	
G-30105-	Atenciones Varias	88,900.00	
		107,225.00	
30106	CONSULADOS		39,000.00
G-30106-A	Servicios Personales	22,200.00	
G-30106-	Atenciones Varias	16,800.00	
		39,000.00	

CAPITULO VII
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO-		7,912.42
G-10415-A	Servicios Personales	7,912.42	
10416	TESORERIA NACIONAL		900.00
G-10416-	Servicios Personales	900.00	
10427	SERVICIO DE RECAUDACION DE LA CEDULA PERSONAL DE IDENTIDAD		592.26
G-10427-A	Servicios Personales	592.26	

CAPITULO IX
SECRETARIO DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		23,379.52

G-1097-A	Servicios Personales	23,379.52	

CAPITULO X
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		2,085.00
G-10499-A	Servicios Personales	2,085.00	
31372	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		1,125.00
G-31372	Servicios Personales	1,125.00	
31470	SERVICIO NACIONAL DE PREVISION Y ASISTENCIA SOCIAL		2,475.00
G-31470-A	Servicios Personales	2,475.00	
31401-	HOSPITALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO		363,915.00
G-31401-A	Servicios Personales	199,865.00	
G-3140I	Mantenimiento y Atenciones	164,050.00	
		363,915.00	

CAPITULO XI
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO

10435	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		7,000.00
G-10435-B	Otros Gastos Corrientes	5,000.00	
G-10435-C	Adquisición de Propiedades	2,000.00	
		7,000.00	

CAPITULO XIII
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES

31802	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS		32,555.40
G-31802-A	Servicios Personales	2,025.00	
G-31802	Atenciones Varias	30,530.40	
		32,555.40	

CAPITULO XIV–I
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION,
CONTROL Y RECUPERACION DE BIENES

10421	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		40,000.00
G-10421-A	Servicios Personales	40,000.00	
			1,448,799.27

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY.
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5886, que reduce hasta el 20 de mayo de 1962 el plazo establecido por la Ley No.5772 del 31 de diciembre de 1961, para el pago de cotizaciones del Seguro Social.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5886

Artículo 1.– Se reduce hasta el 20 de mayo de 1962, el plazo de un año establecido por la Ley No. 5772, de fecha 31 de diciembre de 1961, en beneficio de los comerciantes e industriales amnistiados para el pago de todas las cotizaciones patrono-laborales que adeudaren al 31 de diciembre de 1961.

Artículo 2.— La presente Ley modifica, en cuanto sea necesario, el artículo 4 de la Ley arriba citada.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons.Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, así como en los diarios "El Caribe" y "La Nación".

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de mayo de mil

novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5887, sobre intervención del Poder Ejecutivo en cuanto al transferimiento de inmuebles ubicados en los Barrios de Mejoramiento Social, constituidos en Bien de Familia

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5887

ARTICULO UNICO.— En lo sucesivo el Poder Ejecutivo podrá delegar en la persona del funcionario público que el determine la facultad que le confiere el párrafo IV del Artículo 4 de la Ley No. 3105, del 9 de octubre de 1951, sobre Barrios de Mejoramiento Social, en el sentido de autorizar a los particulares a transferir los inmuebles que les han sido vendidos o donados por el Estado en tales barrios, los cuales se encuentran constituidos en Bien de Familia.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5888, que modifica el Artículo 1 de la Ley No. 3516, del 11 de abril de 1953, en el sentido de fijar el día 2 de junio de cada año como "Día de las Cámaras de Comercio, Agricultura e Industria

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5888

ARTICULO UNICO.– Se modifica el Artículo 1 de la Ley No. 3516, del 11 de abril de 1953, que instituye el 17 de julio de cada año como "Día de las Cámaras de Comercio, Agricultura e Industria de la República", para que en lo adelante rija del siguiente modo:

"Artículo 1.– Se fija el día 2 de junio de cada año como "Día de las Cámaras Oficiales de Comercio, Agricultura e Industria de la República".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imber Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los cinco días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5889, que modifica el párrafo 168 del artículo 9, de la ley que establece el Arancel de Importación y Exportación No. 1488 (aforo sobre alambre de puas, etc.)

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5889

Artículo 1.– Se modifica el p...rafo 168 del artículo 9 de la Ley que establece el Arancel de Importación y Exportación No. 1488, de fecha 26 de julio de 1947, modificado por las Leyes Nos. 5048, de fecha 11 de diciembre de 1958 y 5091, del 14 de febrero de 1959, para que rija del siguiente modo:

"168.– Alambre esté o no galvanizado P.B. Kilo RD$0.005

a) Alambre de púas de cualquier grueso que sea P.B. Kilo RD$0.06

b) Alambre tejido para cercas,o alambre en forma de malla para cercas, incluso puertas y postes para las mismas P.B. Kilo RD$0.02"

Artículo 2.– Asimismo, queda modificado el Párrafo 9° del artículo 1° de la Ley No. 5412, que establece un impuesto interno de consumo, sobre diversos artículos importados y exportados, de fecha 8 de octubre de 1960, para que rija con el siguiente texto:

"9° Alambre de púas de un grueso menor que el número 15 LIBRE".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los siete días del mes de mayo del año mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° e la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de mayo del año mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° e la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5890, que autoriza la transferencia de la suma de RD$2,719,215.75, en la Ley de Gastos Públicos vigente.

República Dominicana
EL CONSEJO DE ESTADO

En Nombre de la República
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5890

ARTICULO UNICO.—Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962:

DEL: CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10310	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		RD$ 76,277.44
G10310A	Servicios Personales	RD$76,277.44	
10506	CONSULTORIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO		RD$ 78,361.56
G10506A	Servicios Personales	RD$50,265.66	
G10506	Atenciones Varias	RD$28,095.90	
		RD$78,361.56	
10411	DIRECCION DEL PRESUPUESTO		RD$444,431.50
G10411F	Subvenciones	RD$444,131.50	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20152	CUERPO MEDICO DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 74,482.02
G20152A	Servicios Personales	RD$24,482.02	
G20152C	Adquisición de Propiedades	RD$50,000.00	
		RD$74,482.02	
20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS		RD$ 71,817.50
G20159B	Otros Gastos Corrientes	RD$22,475.00	
G20159	Atenciones Varias	RD$49,342.50	
		RD$ 71,817.50	
20120	PERSONAL ALISTADO DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 81,000.00
G20120A	Servicios Personales	RD$81,000.00	
20142	SUBSISTENCIA DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 14,437.50
G20142B	Otros Gastos Corrientes	RD$14,437.50	
20141	VESTUARIO DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 8,255.36
G20141B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 8,255.36	

20143	ATENCIONES VARIAS DEL EJERCITO		RD$ 849.00
G20143	Adquisición de Propiedades	RD$ 849.00	
20401	FUERZA AEREA DOMINICANA		RD$ 4,782.50
G20401B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 4,782.50	
20410	COMPAÑIA CUERPO MEDICO Y SANIDAD MILITAR		RD$ 17,620.00
G20410B	Otros Gastos Corrientes	RD$17,620.00	
30622	COMANDANCIAS DE PUERTOS, SERVICIO DE PRACTIGOS Y VIGIAS		RD$ 1,500.00
G30622B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 1,500.00	

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

30230	POLICIA RURAL		RD$539,265.84
G30230A	Servicios Personales	RD$305,350.00	
G30230	Atenciones Varias	RD$233,915.84	
		RD$539,265.84	

CAPITULO V

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10340	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO	RD$ 12,609.74
G10340	Atenciones Varias	RD$12,609.74

CAPITULO VI

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

30106	CONSULADOS	RD$128,611.00
G30106A	Servicios Personales	RD$65,895.00
G30106	Atenciones Varias	RD$ 62,716.00
		RD$128,661.00

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO	RD$789,510.32
G10415T	Terrenos e Intereses en Terrenos	RD$144,975.48
G10415	Atenciones Varias	RD$644,534.84
		RD$789,510.32

CAPITULO IX

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO	RD$ 10,989.75
G10497	Atenciones Varias	RD$ 10,989.75

30460	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRAULICOS		RD$ 20,000.00
G30460	Atenciones Varias	RD$20,000.00	
10322	DIRECCION GENERAL DE LA REFORMA AGRARIA		RD$200,040.60
G10322A	Servicios Personales	RD$ 4,000.00	
G10322	Atenciones Varias	RD$196,040.60	
		RD$200,040.60	

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$136,674.96
G10499	Atenciones Varias	RD$136,674.96	
31365	DIVISION DE MALARIOLOGIA		RD$ 6,000.00
G31365	Atenciones Varias	RD$ 6,000.00	

CAPITULO XI

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO

10435	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 1,999.16
G10435B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 1,999.16	
			RD$2,719,215.75

se les den por la Sección de Piscicultura de dicha Secretaría de Estado.

CAPITULO VIII

Fomento de la Piscicultura

Artículo 41.- Con el fin de utilizar la iniciativa privada en beneficio del abastecimiento nacional de pesca fluvial, la Secretaría de Estado de Agricultura, a través de la Sección de Piscicultura, podrá concertar con entidades y particulares interesados, consorcios y convenios para el establecimiento de piscifactorías y viveros de tipo industrial, previa la concesión por la Dirección General de Recursos Hidráulicos de las aguas que se necesiten derivar.

Las condiciones técnicas y económicas de estos consorcios y convenios serán reguladas por disposiciones complementarias debidamente aceptadas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 42.- La Secretaría de Estado de Agricultura promoverá y estimulará por todos los medios a su alcance:

a) La mejor organización de la pesca y de la piscicultura en aguas fluviales y lacustres;

b) El incremento de la industria para la elaboración y conservación de los productos y sub-productos de la pesca fluvial;

c) El perfeccionamiento de la fabricación nacional de artes, aparejos y demás útiles empleados en la pesca.

CAPITULO IX

Sanciones

Artículo 43.- El producto de la pesca deportiva no podrá ser objeto de comercio en ningún caso y a los contraventores de la presente disposición les será cancelado el permiso y decomisado el producto de su pesca.

30622	COMANDANCIAS DE PUERTOS, SERVICIO DE PRACTICOS y VIGIAS		RD$ 1,500.00
G30622C	Adquisición de Propiedades	RD$ 1,500.00	

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR

Y POLICIA

10491	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 3,752.50
G10491C	Adquisición de Propiedades	RD$ 3,752.50	
30220	POLICIA NACIONAL		RD$781,984.86
G30220A	Servicios Personales	RD$624,091.50	
G30220C	Adquisición de Propiedades	RD$106,500.00	
G30220	Atenciones Varias	RD$51,393.36	
		RD$781,984.86	
30225	BANDA DE MUSICA DE LA POLICIA NACIONAL		RD$ 3,200.00
G30225A	Servicios Personales	RD$ 3,200.00	

CAPITULO V

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10340	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 92,687.18
G10340A	Servicios Personales	RD$80,077.44	

G10340B	Otros Gastos Corrientes.	RD$ 4,601.25	
G10340C	Adquisición de Propiedades	RD$ 8,008.49	
		RD$92,687.18	
10506	CONSULTORIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO		RD$ 74,361.56
G10506A	Servicios Personales	RD$46,265.66	
G10506	Atenciones Varias	RD$28,095.90	
		RD$ 74,361.56	

CAPITULO VI

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

30101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$15,000.00
G30101A	Servicios Personales	RD$15,000.00	
30105	EMBAJADAS Y LEGACIONES		RD$ 744,473.00
G30105A	Servicios Personales	RD$421,125.00	
G30105	Atenciones Varias	RD$323,348.00	
		RD$744,473.00	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 44,534.84
G10415B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 34,534.84	

G10415C	Adquisición de Propiedades	RD$10,000.00	
		RD$44,534.84	
10426	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS		RD$ 56,400.00
G10426A	Servicios Personales	RD$56,400.00	
10425	DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS		RD$ 17,400.00
G10425A	Servicios Personales	RD$17,400.00	
10423	ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES		RD$ 840.00
G10423A-	Servicios Personales	RD$ 840.00	

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y CULTOS

31524	CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA Y DECLAMACION		RD$ 4,240.00
G31524A	Servicios Personales	RD$ 4,240.00	

CAPITULO XI

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$81,934.75
G104497A	Servicios Personales	RD$ 3,162.50	
G104497B	Otros Gastos Corrientes	RD$45,989.75	

G10497	Atenciones Varias	RD$32,782.50	
		RD$81,934.75	

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$134,674.96
G10499B	Otros Gastos Corrientes	RD$114,674.96	
G10499C	Adquisición de Propiedades	RD$ 20,000.00	
		RD$134,674.96	
31365	DIVISION DE MALARIOLOGIÀ		RD$ 8,000.00
G31365C	Adquisición de Propiedades	RD$ 8,000.00	
10412	SUPERVISION GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES		RD$ 1,100.00
G10412A	Servicios Personales	RD$ 1,100.00	

CAPITULO XI

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO

10435	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 2,000.00
G10435C	Adquisición de Propiedades	RD$ 2,000.00	

CAPITULO XII

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA

10210	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 15,000.00
G10210C	Adquisición de Propiedades	RD$ 15,000.00	
30203	PROCURADURIAS FISCALES		RD$ 8,320.00
G30203A.	Servicios Personales	RD$ 8,320.00	
10204	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA		RD$ 10,400.00
G1024A	Servicios Personales	RD$ 10,400.00	
10205	JUZGADOS DE INSTRUCCION		RD$ 14,400.00
G10205A	Servicios Personales	RD$14,400.00	
30208	ABOGADOS DE OFICIO		RD$ 1,200.00
G30208A	Servicios Personales	RD$1,200.00	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

31802	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS		RD$ 1,350.00

G3182A	Servicios Personales	RD$ 1,350.00	
30802	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		RD$ 1,852.50
G30802A	Servicios Personales	RD$ 1,852.50	
			RD$2,719,215.75

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

2.— Los que el día de la elección se encuentren a más de cien kilometros del sitio en que deban votar.

3.— Los que estuvieren enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, debidamente comprobada, que les impida concurrir al comicio.

Párrafo II.— Los que no ejerzan el derecho del voto, sin estar exentos, ni presentar razones suficientes que justifiquen su omisión, serán castigados con la pena de multa, no menor de diez ni mayor de doscientos pesos.

Artículo 2.— Las elecciones se harán, con inscripción previa de los electores, por voto directo y secreto y con representación de las minorías cuando haya de elegirse más de un candidato.

Artículo 3.— La dirección, organización y vigilancia de las elecciones y la administración de justicia en lo que a ellas se refiere corresponde a la Junta Central Electoral y a las Juntas Electorales que la Constitución establece,las cuales son independientes en el ejercicio de sus funciones. Sus miembros son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por la Constitución y las leyes.

Artículo 4.— La Junta Central Electoral tiene su asiento en la ciudad capital y su jurisdicción se extiende a toda la República.

Se compone de un presidente y dos jueces, cada uno de los cuales tendrá dos suplentes, todos nombrados por la Asamblea Nacional, con el voto de los dos tercios del número total de miembros de ésta, escogiéndolos de ternas que serán propuestas para cada uno de dichos cargos por el más alto organismo nacional de cada uno de los partidos políticos reconocidos.

Párrafo.— (Transitorio) Para dirigir y organizar las elecciones para miembros de la Asamblea Revisora de la Constitución, previstas por el Artículo 123 (transitorio) de la Constitución, así como para las elecciones generales a que se refiere el Artículo 124 (transitorio) de la Constitución de la República, los nombramientos de miembros titulares y de suplentes de la Junta Central Electoral los hará el Consejo de Estado, en

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5891, que dispone la obligatoriedad para todos los ciudadanos del ejercicio del sufragio, con ciertas excepciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5891

Artículo 1.— Es obligatorio para todos los ciudadanos ejercer el sufragio con las siguientes excepciones:

1.— Los que hayan perdido los derechos de ciudadano por virtud del artículo 15 de la Constitución;

2.— Los pertenecientes a las fuerzas armadas y cuerpos de policía.

Párrafo 1.— Quedan, además, exentos del sufragio obligatorio:

1.— Los electores mayores de setenta años;

funciones de Asamblea Nacional. Estos durarán en sus funciones hasta la instalación del Congreso Nacional que surja de las próximas elecciones generales ordinarias.

Artículo 5.— Para ser miembro, titular o suplente de la Junta Central Electoral, se requiere ser dominicano por nacimiento, estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en derecho, con 8 años de graduado por lo menos.

Artículo 6.— Cada miembro, titular o suplente, de la Junta Central Electoral permanecerá en el ejercicio de sus funciones por el término de doce años; pero este ejercicio se escalonará de manera que terminen un miembro titular y sus dos suplentes cada cuatro años. Para este fin la Asamblea Nacional, al hacer los primeros nombramientos, señalará cual de los tres miembros titulares, con sus suplentes, ha de cesar al terminar los primeros cuatro años, y cual al terminar los primeros ocho años de ejercicio.

Artículo 7.— En su condición de funcionarios públicos elegidos para un período determinado, los miembros de la Junta Central Electoral, ya sean titulares o suplentes, están sujetos a ser juzgados por el Senado por mala conducta o falta en el ejercicio de sus funciones, previa acusación formulada por la Cámara de Diputados. Pueden ser removidos de sus cargos por razón de confianza o motivos de índole similar, por el voto de dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Nacional, cuando así lo proponga un tercio de los miembros de la misma Asamblea o lo soliciten los más altos organismos nacionales de dos, por lo menos, de los partidos políticos reconocidos.

Párrafo (transitorio).— Mientras las Cámaras Legislativas permanezcan en receso los miembros de la Junta Central Electoral, ya sean titulares o suplentes, en el caso previsto por el artículo anterior, serán juzgados por los demás miembros de la Junta Central Electoral, la cual se integrará en estos casos llamando a todos los suplentes, y actuará como Ministerio Público uno de los suplentes. La acusación podrá formularla el más alto organismo nacional de cualquiera de los partidos políticos reconocidos.

Artículo 8.— La Junta Central Electoral tendrá un Secretario, nombrado por ella, que permanecerá en ejercicio

por tiempo indefinido y podrá ser removido por la misma Junta sin expresión de causa.

Para ser Secretario se requiere ser dominicano, estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado o doctor en derecho.

Artículo 9.— Corresponde exclusivamente a la Junta Central Electoral, independientemente de las demás atribuciones que le confiera la Ley Electoral:

1.— Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Constitución y de las leyes en cuanto concierna a elecciones.

2.— Disponer cuanto fuere de lugar para la organización y celebración de elecciones y la verificación y depuración de los resultados de ésta, de conformidad con la Constitución y con la Ley Electoral.

3.— Nombrar por mayoría y en votación secreta los miembros de las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales Electorales; aceptar o rechazar sus renuncias, y removerlos.

4.— La dirección y vigilancia administrativa, técnica y económica de todas las Juntas y funcionarios electorales.

5.— Disponer todo lo concerniente a la formación, depuración y conservación del registro de electores.

6.— Conocer y decidir en última o en única instancia, según fuere el caso, de las impugnaciones, recusaciones, apelaciones, protestas, reclamaciones u otros recursos que se produzcan en materia electoral.

7.— El conocimiento y la decisión, ya sea en única o en última instancia, de todo cuanto se relaciona con los actos y procedimientos electorales y sobre la validez de toda elección.

8.— Conocer en instancia única de las causas contra los funcionarios judiciales, administrativos, de la fuerza pública o militares que intervengan indebidamente en actividades electorales. El procedimiento correspondiente sólo podrá iniciarse mediante querella o denuncia promovida por la

autoridad nacional de una agrupación o partido político. Las penas aplicables por la Junta Central Electoral en estos casos sólo serán la de destitución y la de inhabilitación por un período no mayor de cinco años para el desempeño de funciones públicas, o la primera de estas penas solamente. Esta jurisdicción de la Junta Central Electoral no excluye la competencia de los tribunales penales ordinarios en los casos en que el hecho constituya además infracción electoral prevista por ley.

Artículo 10.— Habrá una Junta Departamental Electoral para cada departamento, con su asiento en la ciudad cabecera de éste, y cuyas atribuciones serán las que la ley determine.

Se compondrá de un presidente y cuatro vocales, con dos suplentes cada uno, que serán elegidos por la Junta Central Electoral, la cual podrá también aceptarles sus renuncias y removerlos. Permanecerán en sus funciones por el término de cuatro años y podrán ser reelegidos.

Para ser miembro, titular o suplente de una Junta Departamental Electoral se requieren las mismas condiciones que para ser Senador.

Artículo 11.— Habrá una Junta Provincial Electoral para cada provincia, con asiento en la ciudad cabecera y cuyas atribuciones serán las que la Ley Electoral determine.

Se compondrá de un presidente y cuatro vocales, con dos suplentes cada uno, que serán elegidos por la Junta Central Electoral, la cual podrá también aceptarles sus renuncias y removerlos. Permanecerán en sus funciones por el término de cuatro años y podrán ser reelegidos.

Para ser miembro, titular o suplente, de una Junta Provincial Electoral se requieren las mismas condiciones que para ser Gobernador Provincial.

Artículo 12.— Habrá una Junta Municipal Electoral en cada municipio, con su asiento en la cabecera del mismo y cuyas atribuciones serán determinadas por la Ley Electoral.

Se compondrá de un presidente y dos vocales, con dos suplentes cada uno, que serán elegidos por la Junta Central

Electoral, la cual podrá también aceptarles sus renuncias y removerlos. Permanecerán en sus funciones por el término de cuatro años y podrán ser reelegidos.

Para ser miembro, titular o suplente, de una Junta Municipal Electoral, se requieren las mismas condiciones que para ser Regidor.

Párrafo (Transitorio).– Los miembros de las Juntas Departamentales, Provinciales y Municipales elegidos para dirigir, organizar y vigilar las elecciones para miembros de la Asamblea Revisora de la Constitución de la República, previstas por el artículo 123 (transitorio) de la Constitución de la República y las elecciones generales a que se refiere el artículo 124 (transitorio) de la misma, durarán en sus funciones hasta la instalación del Congreso que surja de estas elecciones generales ordinarias.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en el diario "El Caribe" para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5892, que crea el Instituto Nacional de la Vivienda

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5892

CONSIDERANDO: Que disponer de una vivienda digna es una necesidad y un derecho básico del hombre;

que dar facilidades a cada ciudadano para la obtención de una vivienda higiénica y adecuada es y debe ser preocupación fundamental del Gobierno de la República;

que la falta de habitaciones obliga a gran parte de la población del país a vivir en condiciones de hacinamiento y promiscuidad inaceptables;

que para superar la situación existente se requiere un esfuerzo nacional intenso y sostenido;

que únicamente se alcanzará buen éxito en tal empresa si al empeño para lograrlo concurren, no sólo el Gobierno, sino todos y aun los más modestos ciudadanos;

que orientar, apoyar y dirigir la contribución que significan las numerosas viviendas temporales que el pueblo levanta en diversos puntos de la República, hará posible que este aporte se traduzca en resultados de mayor significado;

que el aporte de su obra de manos, mediante programas organizados, permite a los grupos más pobres obtener una vivienda adecuada, dentro de las posibilidades de su capacidad de pago y que este esfuerzo en común genera comunidades dinámicas, capaces de hacer frente a sus propios problemas;

que la ayuda a tales iniciativas y la posterior orientación de las nuevas comunidades es una labor de primera importancia, que el Estado debe apoyar;

que la limitación de los recursos disponibles hace necesario considerar cuidadosamente su más adecuado empleo, por lo que la construcción de viviendas debe desarrollarse en forma coordinada con los demás programas tendientes al desarrollo económico y social del país, que elabore la Junta Nacional de Planificación;

que al proyectar y construir las nuevas habitaciones deben tomarse en debida consideración el total de necesidades de la comunidad que deberá habitarlas, constituyendo para ello conjuntos orgánicos que hagan posible el desarrollo de una sana actividad social y cultural;

que la creación de una entidad especializada, que tenga a su cargo la promoción de la actividad constructora de viviendas por métodos adecuados y económicos, permitirá alcanzar menores costos y un consiguiente aumento del número de viviendas construidas con determinados recursos;

que una permanente actividad de construcción de viviendas creará un mercado estable que permitirá el establecimiento de nuevas industrias y la ampliación de las existentes, generando nuevas fuentes de trabajo.

que una acción nacional dirigida a proporcionar vivienda adecuada a los ciudadanos de más modestos recursos debe tomar en cuenta las necesidades de las diversas regiones del país, y dar especial atención a la habitación campesina;

que la magnitud y urgencia de la tarea que se debe emprender justifica la creación, para abordarla, de una entidad especializada, que actúe con la mayor eficacia técnica y con la debida consideración del profundo sentido social y humano que debe orientar su labor;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se crea el Instituto Nacional de la Vivienda, con carácter autónomo, sujeto a las prescripciones de esta ley y a las de los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 2.— El Instituto Nacional de la Vivienda queda investido de personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes a tal calidad y su domicilio queda fijado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del territorio nacional que considere pertinentes a sus fines.

Artículo 3.— El Instituto Nacional de la Vivienda tendrá por objeto la realización de los fines expuestos en los motivos contenidos en el preámbulo de esta ley, con absoluta sujeción a las normas y determinaciones de la Junta Nacional de Planificación, organismo que tiene a su cargo la programación integral del desarrollo del país para lo cual:

a) Formulará el plan general de viviendas, en sus aspectos rural y urbano;

b) Tendrá a su cargo la ejecución de dicho plan, dentro del marco de sus actividades;

c) Promoverá la contribución privada al desarrollo del plan;

d) Dará, a través de sus diversos departamentos, especialmente del correspondiente a los Programas Sociales, orientación, asesoramiento y ayuda técnica, en la magnitud que fuere necesaria, a toda persona o grupo de personas, principalmente a las constituidas en cooperativas, de hecho o de derecho, que así lo soliciten y dentro de las posibilidades económicas del Instituto.

e) Promoverá el desarrollo de programas de viviendas urbanas y rurales mediante la colaboración de los futuros ocupantes de

las viviendas, siguiendo los principios de esfuerzo propio y ayuda mutua;

f) Señalará al Poder Ejecutivo los casos en los cuales deberá proceder a expropiaciones por causa de utilidad pública necesarias para la ejecución de los programas de viviendas, en conformidad con las leyes sobre expropiaciones; y

g) Coordinará las demás actividades relacionadas con sus fines.

Artículo 4.– El Instituto Nacional de la Vivienda podrá realizar todas aquellas operaciones o negocios jurídicos necesarios para la consecución de sus fines.

Artículo 5.– El Instituto Nacional de la Vivienda tendrá como recursos de financiamiento, las contribuciones que al mismo hará el Estado Dominiano a través del Presupuesto Nacional, las asignaciones especiales que fijen las leyes,las cuotas hipotecarias, en principal e intereses, provenientes de sus operaciones o negocios y, por último, cualesquiera otros que les sean señalados por las leyes o por los particulares.

Artículo 6.– El Instituto Nacional de la Vivienda será dirigido y administrado: a) por un Director General y b) por un Consejo de Directores.

Artículo 7.– El Director General será el Presidente del Consejo de Directores, su órgano ejecutivo y su representante legal.

Artículo 8.– El Director General nombrará el personal del Instituto Nacional de la Vivienda. Sin embargo, para el nombramiento y remoción de los Jefes de Departamentos y de Secciones, deberá obtener la aprobación del Consejo de Directores.

Artículo 9.– El Consejo de Directores deberá trazar la política a seguir por el Instituto Nacional de la Vivienda para el logro de los objetivos y propósitos del mismo; deberá aprobar el presupuesto anual del Instituto Nacional de la Vivienda y sus modificaciones, y fijará las remuneraciones de sus empleados y funcionarios, excepto los que de manera especial se fijen por

esta misma ley. Asímismo, deberá autorizar todos y cada uno de los actos, operaciones o negocios que deba realizar el Instituto Nacional de la Vivienda a través de su Director General.

Artículo 10.— El Consejo de Directores deberá dictar el Reglamento Interno del Instituto Nacional de la Vivienda.

Artículo 11.— El Consejo de Directores tendrá a su cargo el formular a los organismos correspondientes las recomendaciones de legislación tributaria que contribuyan a estimular la construcción de viviendas para personas de escasos recursos y que inversamente gravan las habitaciones de lujo. El Reglamento de esta ley definirá ambos conceptos.

Artículo 12.— El Conejo de Directores se compondrá de cinco miembros, que se denominarán Directores, incluyendo el Director General. Se reunirá por lo menos una vez al mes, a solicitud del Director General o por iniciativa de por lo menos dos de sus miembros. Para que el Consejo de Directores pueda deliberar válidamente se requerirá un quórum de tres de sus miembros. En caso de que la votación resulte empate, decidirá el voto del Director General, que es su Presidente.

Los miembros del Consejo de Directores, a excepción del Director General, durarán en sus funciones tres años.

Artículo 13.— Los miembros del Consejo de Directores serán nombrados por el Poder Ejecutivo, quien tratará en lo posible, que en el Consejo estén debidamente representados los diferentes sectores geográficos del país.

Artículo 14.— La remuneración del Director General será fijada por el Poder Ejecutivo y no podrá ser inferior a la del ejecutivo máximo de cualquier otra entidad autónoma del Estado Dominicano. Las remuneraciones de los demás miembros del Consejo de Directores será de veinte y cinco pesos oro (RD$25.00) por cada asistencia a sesión del Consejo, más los gastos de transportación correspondientes.

Artículo 15.— Los negocios jurídicos de cualquier género que sobre inmuebles realice el Instituto Nacional de la Vivienda, así como los documentos relativos a dichos negocios, estarán exentos de todo impuesto, gravamen, tasa o arbitrio.

Artículo 16.— Cuando el Instituto Nacional de la Vivienda así lo requiera, los empleadores o patronos incluyendo al Estado Dominicano y sus organismos autónomos, deberán actuar como sus agentes de retención.

Artículo 17.— La Secretaría de Estado de Finanzas, a través de su Contraloría General de la República, supervisará la contabilidad propia que deberá llevar el Instituto Nacional de la Vivienda y certificará los balances, los cuales se harán una vez al año por lo menos.

Artículo 18.— El Instituto Nacional de la Vivienda contratará, por el sistema de concursos, la ejecución de las obras que debe realizar, de acuerdo con las normas que dicte el Reglamento de la presente ley. Excepcionalmente, por disposición del Consejo de Directores, podrá ejecutarlas directamente.

Artículo 19.— El Instituto Nacional de la Vivienda podrá ejercer cuando los deudores de cuotas periódicas no las satisficieren en los plazos fijados, el procedimiento ejecutorio del embargo inmobiliario y tendrá los mismos privilegios que confiere el Título VI, Capítulo 20 de la Ley No. 908 y sus modificaciones, publicada en la Gaceta Oficial No. 6269, del 9 de junio de 1945, al Banco Agrícola de la República Dominicana, relativos a la seguridad y reembolso de los préstamos en la expropiación y venta que persiga en la ejecución de los mismo, y por lo tanto dichas disposiciones se aplicarán a los procedimientos que para tales fines realice el Instituto Nacional de la Vivienda. Las reglas establecidas en los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley No. 908, y sus modificaciones, publicada en la Gaceta Oficial No. 6269, de fecha 9 de junio de 1945, relativas a la inscripción provisional y sus efectos de que tratan dichos artículos, regirán para el Instituto Nacional de la Vivienda.

Concedido un préstamo por el Instituto Nacional de Vivienda, los bienes dados en garantía no serán embargables por créditos personales posteriores a la constitución de la hipoteca. Esta inoponibilidad producirá efecto a contar de la fecha de anotación a que se refieren los artículos de la Ley No. 908 de 1945, antes citados. El Instituto Nacional de la Vivienda podrá proponer esta inoponibilidad en todo estado de causa.

Asimismo, en los casos arriba señalados, el Instituto Nacional de la Vivienda podrá solicitar por medio del procedimiento establecido en los artículos 806, 807 y 808, del Código de Procedimiento Civil, que el Tribunal ponga la administración del inmueble hipotecado, a cargo del Instituto Nacional de la Vivienda. La sentencia no estará sujeta a ningún recurso ordinario o extraordinario. Dichas rentas no podrán ser cedidas ni embargadas en perjuicio del Instituto Nacional de la Vivienda. En consecuencia, los embargos y cesiones de esos valores sólo se aplicarán a los balances que resulten a favor del beneficiario.

A partir de la fecha de la notificación de la sentencia el deudor y a los inquilinos, las rentas quedarán inmovilizadas en favor del Instituto Nacional de la Vivienda, el cual podrá exigir a los inquilinos el pago directo de los alquileres, pagos que serán aplicados al servicio de las cuotas e intereses vencidos.

Esta situación cesará tan pronto como el deudor haya pagado al día el servicio de la obligación hipotecaria, bien por imputación de las cuotas insolutas de los frutos de la administración, o por pago efectuado directamente. Dentro de las mismas diligencias el Instituto Nacional de la Vivienda rendirá cuenta de su administración.

Artículo 21.— (Transitorio).— El Poder Ejecutivo dictará, dentro de los noventa días que sigan al nombramiento del Director General, el reglamento de aplicación de esta ley.

El Poder Ejecutivo, al nombrar al Director General, podrá nombrar, con carácter interino, a los demás miembros del Consejo de Directores, quienes podrán ser ratificados en sus funciones o sustituidos por los definitivos correspondientes, dentro del plazo impartídole por esta ley para la promulgación de su reglamento. Los miembros definitivos del primer Consejo de Directores serán nombrados dos de ellos por un término de dos años y los dos restantes por tres años.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

AGN

Ley No. 5893, que restablece el Consejo Nacional de Educación

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5893

CONSIDERANDO: que es conveniente restablecer el Consejo Nacional de Educación como principal órgano legislativo y de dirección de la educación dominicana;

CONSIDERANDO: asimismo, que el citado organismo no respondía por su constitución anterior, ni por su funcionamiento, a los intereses de la educación nacional en su actual etapa de evolución democrática, y a los fines que instituciones similares tienen asignados en otros países, propugnados por la moderna política educativa, la cual estima que un Consejo Nacional de Educación debe ser un órgano vivo, dinámico y representativo de todos los sectores nacionales interesados en sus proyecciones sociales y en el progreso educativo de la Nación;

CONSIDERANDO: además, por otra parte, que las modernas orientaciones tanto en el campo educativo como en los diversos sectores de la vida de un país, recomiendan y exigen la creación de Comisiones técnicas Nacionales, encargadas de planear cientificamente y coordinar las actividades que tienden a lograr objetivos concretos de manera integral en períodos fijos, con el menor esfuerzo y el máximo rendimiento, eliminando la improvización, y en consecuencia, resultados parciales, antieconómicos y desalentadores;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se restablece como órgano de dirección y cuerpo legislativo, el Consejo Nacional de Educación, el cual tendrá las siguientes atribuciones, que ejercerá mediante las Ordenanzas reglamentarias que dictará en cada caso:

a) Reformar el actual sistema educativo nacional de manera que responda, con sentido realista, a las más avanzadas normas pedagógicas, a los principios democráticos, y a los ideales dominicanistas, inspirados a su vez, en las normas de absoluto respeto de la personalidad del alumno y del maestro y de los

derechos humanos en general, y de los sentimientos panamericanistas y de comprensión internacional;

b) Propiciar la elevación del nivel cultural del pueblo dominicano; la aplicación del principio de una educación primaria de seis años, universal, gratuita y obligatoria; la erradicación del analfabetismo, y la educación cívica de todos los ciudadanos;

c) Fijar la extensión de las distintas ramas de la educación, con excepción de la universitaria

d) Establecer los planes de estudios relativos a las distinta ramas de la educación, y los programas que deben seguirse en la enseñanza de cada asignatura. auspiciando al mismo tiempo la diversificación de la educación secundaria, con la creación de planteles de enseñanza técnica media o vocacional, de acuerdo con las necesidades regionales del país;

e) Determinar las pruebas a que deben someterse las personas que aspiren a títulos o certificados oficiales y reglamentar todo lo referente a esas pruebas y el tiempo en que deban celebrarse.

f) Reglamentar todo lo relativo a los títulos o certificados exigibles para desempeñar cargos docentes en las distintas ramas de la educación; a las pruebas escolares y a los exámenes y concursos de oposición, y al régimen disciplinario de las escuelas;

g) Preparar el Estatuto Administrativo del Magisterio el cual asegure la dignificación y estabilidad del maestro;

h) Asesorar al Secretario de Estado del ramo en la adecuada distribución del presupuesto del departamento;

i) Autorizar las equivalencias de estudios hechos en el extranjero con los nacionales correspondientes, excepto cuando se trate de estudios universitarios;

j) Declarar adecuados para la enseñanza los libros de texto que juzgue más convenientes;

k) Resolver cuantas cuestiones no especificadas en los apartados anteriores, que por su índole tengan relación con el

progreso de la educación y la cultura, y el desarrollo de las artes.

Artículo 2.– El Consejo Nacional de Educación estará integrado por los siguientes miembros, todos con voz y voto:

a) El Secretario de Estado, quien lo presidirá;

b) El Subsecretario de Estado, como Vicepresidente;

c) Los Directores Generales de Educación Primaria Urbana; rural; Secundaria y Normalista; Vocacional; Instituto Técnico Pedagógico; Plan de Capacitación y Perfeccionamiento del Magisterio; Bellas Artes, Educación Física y Deportes; Campaña Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos, y Servicio Médico Escolar;

d) Tres representantes de la Federación de Asociaciones de Maestros;

e) Un representante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de la Iglesia Católica, que representará a los Colegios dependientes de la Autoridad Eclesiástica.

Párrafo: El Oficial Mayor de la Secretaría de Estado actuará como Secretario del Consejo, con voz pero sin voto.

Artículo 3.– Para facilitar y asegurar la continuidad de la labor del Consejo Nacional de Educación, evitar interrupciones ocasionadas por cambios ministeriales, y dotar al citado cuerpo de un órgano complementario de asesoramiento y trabajo, se crea con carácter permanente, la Comisión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación, que tendrá las siguientes funciones:

a) Planificar el sistema educativo dominicano de manera que tenga unidad de propósitos, organización y realizaciones;

b) Preparar planes y programas de acción educativa a corto, medio y largo plazo;

c) Elaborar los proyectos que le soliciten el Consejo Nacional de Educación y el Secretario de Estado;

d) Coordinar todos los servicios técnicos para que el funcionamiento y planes de trabajo de los mismos tengan unidad, respetando las prioridades de mayor urgencia;

e) Sugerir al Consejo y al Secretario de Estado cuantas iniciativas propendan al mejoramiento de nuestro sistema educativo;

Artículo 4.— Para hacer posible la acción planificadora con la técnico-administrativa y ejecutiva, tanto con respecto al Consejo Nacional de Educación como en relación a su viabilidad a través de la Secretaría de Estado del ramo, la Comisión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación estará constituida de la forma siguiente:

a) Un equipo de técnios en las distintas especialidades de la educación seleccionados por la Secretaría de Estado del ramo, del personal del Servicio Técnico y otras personas no pertenecientes al mismo con capacidad y experiencia educativas, en el número que se estime necesario. Dicho equipo preparará proyectos y programas de acción, y actuará como comisión o grupo de trabajo con carácter permanente para la planificación general;

b) Los coordinadores de grupo que facilitarán la integración del trabajo programado con las posibilidades de adaptación y realización anual progresiva. Actuarán en tal calidad, los Directores Generales de Educación Primaria Urbana; Rural; Secundaria y Normalista; Vocacional; Instituto Técnico Pedagógico; Plan de Capacitación y Perfeccionamiento del Magisterio; Alfabetización y Educación de Adultos; Servicio Médico Escolar; Bellas Artes; Educación Física y Deportes, y encargados de las Secciones de Pagos y Servicios y de Estadística Escolar.

Párrafo.— El Secretario de Estado tendrá personalmente a su cargo, la dirección de este organismo.

Artículo 5.— El Consejo Nacional de Educación y la Comisión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación dictará sus propios reglamentos internos.

Artículo 6.— Quedan derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a la presente ley, en particular las de la

Ley Orgánica de Educación No. 2909, de fecha 5 de junio de 1951, y el Decreto No. 3382, de fecha 15 de diciembre de 1955.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA Por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99°0 de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley Orgánica del Banco Nacional de la Vivienda No. 5894

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY ORGANICA
DEL BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA

NUMERO 5894

Artículo 1.— Por la presente ley se crea el Banco Nacional de la Vivienda, que tendrá personalidad jurídica y administración autónoma y que cumplirá las siguientes funciones:

1.— Complementar los recursos de las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda y demás entidades organizadas sin ánimo de lucro para financiar la adquisición y construcción de vivienda familiar o mixta, de carácter económico, incluyendo edificaciones de condominio, según la Ley No. 5038, de 1958.

2.— Estimular la creación y funcionamiento de asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda en las regiones donde el número de habitantes y la demanda de habitación lo justifiquen:

3.— Ejercer todas las facultades y cumplir todas las obligaciones que le confiere la presente ley con el fin de desarrollar una política de dirección y reglamentación del crédito hipotecario de las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda. Las demás personas y entidades autorizadas

para recolectar ahorros a cualquier título y destinarlos a vivienda estarán sometidas a las reglamentaciones que sobre préstamos hipotecarios dicte el Banco Nacional de la Vivienda.

4.—Dictar sus propios reglamentos o Estatutos.

5.— Asegurar las cuentas de ahorro que se abran en las asociaciones de ahorros y préstamos que él autorice hasta la suma que fije dicho Banco y asimismo queda facultado para proveer un seguro a las hipotecas que originen dichas asociaciones. A ese efecto el Banco proveerá los medios y creará los instrumentos o entidades que fueren necesarias afiliados o no al Banco.

6.— Actuar como agente financiero del INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, y proveer seguros para las hipotecas que origine dicha institución y dentro de las normas que para tales efectos acuerden ambas instituciones. Para estos fines, el Banco mantendrá las cuentas que fueren necesarias.

Artículo 2.— El Banco tendrá su domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo. Por decisión de su Consejo de Administración podrá establecer sucursales y agencias en otras localidades del país, sin necesidad de aprobación del Superintendente de Bancos. El Banco podrá nombrar corresponsales y fundar agencias en las ciudades del exterior donde su Consejo de Administración lo considere necesario, sin necesidad de aprobación del Superintendente de Bancos.

Artículo 3.— La duración del Banco será indefinida.

Artículo 4.— El Capital Autorizado del Banco será la suma de diez millones de pesos oro (RD$10,000,000.00), susceptible de aumentos de acuerdo con lo dispuesto por esta ley. Las acciones serán nominativas, tendrán un valor nominal de mil pesos oro (RD$1,000.00), suscritas exclusivamente por el Estado Dominicano a nombre del Tesorero Nacional y por las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda y no podrán ser enajenadas a Gobiernos extranjeros ni a particulares.

Para iniciar las operaciones del Banco el Estado Dominicano suscribirá dos mil acciones que pagará integramente de contado, o sea la cantidad de RD$2,000,000.00.

El Banco podrá determinar que toda asociación de ahorros y préstamos para la vivienda estará obligada a suscribir y pagar íntegramente de contado acciones del Banco Nacional de la Vivienda por una suma no superior al 2 por ciento del principal no pagado de la totalidad de los créditos hipotecarios que tenga en su cartera a la fecha de la suscripción. Para este efecto durante los dos primeros años de existencia del Banco las acciones se computarán por su valor nominal, y después de dichos dos años el precio de las acciones será fijado por el Consejo de Administración del Banco de acuerdo con su valor en libros. El monto del principal no pagado de los créditos hipotecarios de cada asociación se fijará anualmente por el Banco Nacional y las asociaciones quedarán autorizadas para aumentar o disminuir el número de sus acciones ajustándolo al 2 por ciento de la fijación periódica.

El Banco podrá determinar la inversión que deben hacer las asociaciones en el momento de su fundación en acciones del Banco Nacional de la Vivienda. Las asociaciones podrán en cualquier momento adquirir y poseer acciones por valor en exceso del dos por ciento antes mencionado. El valor en libros arriba mencionado es el que resulte de dividir el capital, fondo legal de reserva y utilidades sin repartir del banco al tiempo de la venta, por el número de las acciones.

El Consejo de Administración del Banco tendrá facultad para variar el porcentaje antes indicado, de acuerdo con la situación de cada asociación.

Una vez que expire el décimo año de operaciones del Banco, el 50 por ciento de las acciones que suscriban y paguen las asociaciones serán emitidas con cargo al capital autorizado del Banco y el otro 50 por ciento por venta de las acciones del Banco propiedad del Estado Dominicano, conforme decisión del Consejo de Administración.

Las asociaciones poseedoras de acciones del Banco no podrán constituirlas en prenda u otra forma de garantía a favor de personas distintas del Banco Nacional de la Vivienda.

Todo aumento del capital del Banco será decretado por el voto de la mayoría del Consejo de Administración. El capital del Banco será aumentado siempre que sea necesario para proveer a las asociaciones de las acciones requeridas por este artículo para fines de su afiliación.

Artículo 5.— Para aprobar la solicitud de organización de las asociaciones el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda tendrá en cuenta:

1.— Que su objeto sea la financiación de la vivienda familiar o mixta; de carácter económico;

2.— Que sus préstamos tengan garantía hipotecaria y plazos no menores de cinco años ni mayores de veinticinco años;

3.— Que sus sistemas de operación y proyecciones financieras sean tales que les permitan recibir depósitos de ahorros sin riesgos para el público y realizar préstamos en condiciones de seguridad;

4.— Que sus directores, gerentes y demás administradores sean solventes e idóneos y que no persigan en las operaciones interés personal directo o indirecto.

5.— Declaración jurada de los solicitantes de que la Asociación cumplirá con las normas que dicte el Banco, conforme se establece en el artículo 13.

Artículo 6.— En cualquier momento en que una asociación dejare de cumplir los requisitos del precedente artículo será desafiliada e intervenida mediante resolución del Consejo de Administración del Banco. La asociación desafiliada queda en la obligación de cumplir las medidas que el Consejo de Administración del Banco adopte en cuanto a las acciones de éste que aquella posea, pero en ningún caso a venderlas por un precio inferior al valor nominal. La asociación así desafiliada deberá disolverse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la resolución del Banco y liquidar sus negocios.

Dicha liquidación será realizada en la forma prevista en el artículo 36 de la Ley General de Bancos, No. 1530, publicada en la Gaceta Oficial No. 6599, de fecha 13 de octubre de 1947.

Artículo 7.— El Banco estará facultado para realizar los actos y operaciones y celebrar los contratos que sean necesarios o conducentes al logro de sus funciones.

Artículo 8.— El Banco podrá conceder préstamos a cualquier asociación afiliada. Estos préstamos estarán sujetos a las siguientes limitaciones:

1.— Se destinarán exclusivamente a la financiación de construcción, adquisición o mejora de la vivienda familiar, salvo lo previsto en el numeral 6 de este artículo;

2.— Si el préstamo se garantiza con créditos hipotecarios que a su vez se encuentren garantizados por el Estado Dominicano o por uno o más establecimientos bancarios, su cuantía podrá ser por el total del saldo no pagado del principal de la hipoteca o hipotecas dadas en garantía, y deberá ser amortizado en un plazo no mayor de diez años mediante cuotas trimestrales iguales;

3.— Si el préstamo se garantiza con obligaciones hipotecarias sobre vivienda o edificación mixta dedicada a vivienda y comercio, de amortización gradual en plazos no menores de cinco años ni mayores de veinticinco años, su cuantía podrá ser hasta por el noventa por ciento 90 o/o del saldo no pagado del principal de la hipoteca o hipotecas dadas en garantía, y deberá se amortizado en un plazo no mayor de diez años mediante cuotas trimestrales iguales;

4.— El plazo de los préstamos otorgados por el Banco no excederá en caso alguno de los plazos de las obligaciones hipotecarias constituidas en garantía;

5.— Si la asociación de ahorros y préstamos no tiene otra obligación contraida, salvo los depósitos el préstamo podrá hacerse mediante un pagaré sin garantía específica, reembolsable en un plazo máximo de doce meses y cuyo monto no podrá exceder del diez por ciento 10 o/o del activo de la asociación;

6.— Los préstamos destinados a cubrir el retiro de los depósitos cuando las circunstancias lo justifiquen para mantener la confianza en las asociaciones, podrán otorgarse sin garantía, y en las condiciones que el Consejo de Administración del Banco estime prudente.

7.— Los créditos hipotecarios constituidos como garantía de préstamos del Banco tendrán pleno efecto en favor del Banco

sin necesidad de notificación al deudor. El servicio de dichos créditos continuará haciéndose a la asociación, pero si ésta incurriere en mora o en otra forma incumpliera sus obligaciones, podrá el Banco intervenir la asociación.

8.— El Banco podrá condicionar sus préstamos a una asociación a la obligación por parte de ésta de suscribir y pagar de contado acciones del Banco por un monto no superior al uno por ciento (1) del principal; y

9.— El Banco se reserva el derecho de exigir a las asociaciones prestatarias, cuando lo considere necesario por razones de seguridad, la constitución de garantías adicionales o la sustitución de las existentes.

Artículo 9.— En virtud de decisión del Consejo de Administración podrá el Banco constituir depósitos a la vista o a término en las asociaciones afiliadas. El plazo no podrá exceder de cinco (5) años, pero puede pactarse que el reembolso del depósito, vencido el plazo, se realice por cuotas periódicas que en ningún caso podrán ser inferiores al 20 o/o anual. Estos depósitos se ajustarán a las mismas normas que rigen para los depósitos individuales a término y causarán un interés inferior en un punto al que paguen las asociaciones a los depositantes de ahorros.

Artículo 10.— El Banco podrá tomar dinero a préstamo con o sin garantía, en las condiciones que establezca el Consejo de Administración.

Podrá emitir letras y otorgar pagarés, endosarlos y descontarlos. Por acuerdo de su Consejo de Administración y con aprobación de la Junta Monetaria, podrá emitir cédulas hipotecarias nominativas o al portador, pagaderas en el país o en el exterior en moneda nacional o extranjera, y en las condiciones que se consideren convenientes en cada caso. Estas cédulas estarán especialmente garantizadas por las obligaciones a favor del Banco y a cargo de las asociaciones afiliadas, garantizadas con hipoteca conforme a los numerales 2 y 3 del artículo 8, o adquiridas conforme el artículo 16 de esta Ley. El monto de las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco no podrá exceder en ningún momento del valor del capital no pagado de las mencionadas obligaciones vigentes a favor del Banco, más el valor del capital no pagado de los créditos

hipotecarios en poder del Banco, incluyendo para todos estos fines las hipotecas originadas por el Instituto Nacional de la Vivienda.

La amortización de los títulos de la deuda se hará por medio de sorteos periódicos que fijará el Consejo de Administración. En cada sorteo deberá amortizarse el número de títulos necesario para que el valor nominal de los que hayan de quedar en circulación no exceda del capital no pagado de las obligaciones y créditos mencionados en el precedente inciso.

Los requisitos de los títulos de la deuda los determinará el Consejo de Administración con la aprobación de la Junta Monetaria en los reglamentos que se promulguen para la ejecución de esta ley.

Artículo 11.– El deterioro, la destrucción y la pérdida o extravío de una o varias cédulas se regirán por lo dispuesto por los reglamentos que se dicten para la ejecución de la presente ley.

Artículo 12.– El conjunto de las obligaciones del Banco para con terceros no podrá exceder, en ningún tiempo, de doce veces el importe de su capital pagado y reserva legal, ambos saneados.

Artículo 13.– El Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda, con el voto favorable de la Junta Monetaria, podrá:

1.– Dictar normas de carácter general, obligatorias para las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda, sobre los métodos y el procedimiento que deban seguir en sus operaciones. Dicha reglamentación podrá extenderse a la composición de los activos de las asociaciones, a la determinación de las márgenes de garantía de los préstamos de las asociaciones, dentro de lo estatuido por la presente y por la ley sobre asociaciones para casos especiales; y, con iguales limitaciones, a los plazos de los diferentes préstamos de las asociaciones y a los requisitos previos que deben llenar los solicitantes;

2.– Fijar periódicamente un cupo ordinario de crédito para préstamos a las asociaciones, teniendo en cuenta principalmente la política que considere más aconsejable de acuerdo con las

necesidades y planes generales y locales sobre vivienda. También tendrá en cuenta el monto de los activos de la respectiva asociación y el número de acciones del Banco que ésta posea;

3.— Señalar un cupo extraordinario de crédito para casos de emergencia (artículo 8, numero 6to.), y con carácter temporal;

4.— Fijar y varia las tasas de interés para las operaciones de préstamo a las asociaciones afiliadas, pudiendo establecer tasas diferentes para el estímulo de los planes de vivienda que merezcan especial desarrollo.

5.— Señalar las tasas máximas de interés que las asociaciones afiliadas pueden cobrar a su clientela sobre préstamos destinados a la adquisición, construcción y mejora de viviendas familiares y edificaciones mixtas. Ninguna asociación podrá obtener préstamos en el Banco Nacional de la Vivienda si cobrare en operaciones de la índole indicada una tasa mayor de la autorizada;

La asociación responsable quedará obligada a restituir el exceso cobrado; sin perjuicio de las sanciones que pueda el Banco aplicar en esos casos.

6.— Fijar y variar, el encaje legal de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, ajustándose a las siguientes normas:

a) El encaje sobre las exigibilidades a la vista o antes de treinta (30) días, no podrá ser menor del 7 por ciento del valor de tales exigibilidades;

Para los depósitos a término mayor de 30 días el encaje legal no será menor del 3 por ciento.

b) Para los efectos del encaje no se computarán las exigibilidades de las asociaciones por razón de los préstamos que les hiciere el Banco Nacional de la Vivienda;

c) El encaje señalado deberá mantenerse en dinero efectivo o en depósitos disponibles constituidos en el Banco Nacional de la Vivienda, conforme lo disponga el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda.

7.— Determinar los montos máximos de los préstamos que una asociación puede otorgar a una persona para fines de vivienda familiar o edificaciones mixtas de carácter económico y los montos máximos de los préstamos para financiación de planes colectivos de vivienda familiar.

8.— Dividir el país si lo juzga necesario, en regiones o zonas geográficas, para que dentro de la respectiva región ejerza sus actividades las asociaciones en ella establecidas. Las asociaciones no podrán establecer sucursales sino dentro de la zona en donde funciona la casa principal;

9.— Disponer y reglamentar el seguro de los depósitos de ahorros en las asociaciones y de los préstamos otorgados por ellas dentro de los límites fijados por la Ley;

10.— Autorizar el establecimiento de sucursales a solicitud de las asociaciones.

Párrafo I.— Las resoluciones que dicte el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda, serán obligatorias para las asociaciones de ahorro y préstamo para la vivienda.

Párrafo II.— El Superintendente de Bancos y el propio Banco Nacional de la Vivienda, vigilarán el cumplimiento, por parte de las Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, de las disposiciones que dicte el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda en ejercicio de las facultades conferidas en el presente artículo.

Para tales efectos los representantes de ambas instituciones tendrán libre acceso a toda la documentación, caja y cartera de las asociaciones, sin restricción de ninguna especie.

Artículo 14.— El Banco podrá aceptar depósitos de las instituciones afiliadas, del Estado Dominicano, de sus organismos autónomos, de los municipios y de otras entidades públicas o privadas, de las instituciones bancarias autorizadas a operar en la República, los depósitos de garantía en favor de entidades nacionales de Derecho público, y pagar intereses sobre dichos depósitos.

Artículo 15.— La Junta Monetaria puede autorizar al Banco Central a constituir depósitos en el Banco Nacional de la Vivienda.

Artículo 16.– El Banco Nacional de la Vivienda podrá invertir sus fondos en obligaciones del Gobierno, siempre que dichas obligaciones se hayan emitido bajo la firma solidaria del Instituto Nacional de la Vivienda, para financiar planes de vivienda familiar o edificaciones mixtas de carácter económico.

Artículo 17.– Con el fin de promover un mercado de hipotecas o de cubrir la emisión de títulos hipotecarios podrá también el Banco adquirir de las asociaciones créditos destinados a vivienda familiar o a edificaciones mixtas de carácter económico garantizados con hipoteca de inmuebles situados en la República Dominicana, y enajenarlos en el país o en el exterior.

Artículo 18.– El Banco destinará un 10 por ciento de sus utilidades líquidas de cada ejercicio a constituir y mantener un fondo de reserva legal. Solo cuando dicho fondo ascienda al 20 por ciento o más de su capital pagado podrá el Banco reducir la destinación al 5 por ciento de sus utilidades líquidas.

El fondo de reserva legalno podrá ser reducido a menos del 20 por ciento del capital del Banco sino para atender a pérdidas en exceso de utilidades no repartidas.

Artículo 19.– El encaje sobre los depósitos recibidos en el Banco Nacional de la Vivienda y el de los títulos de deuda favorecidos en sorteos, se fijarán por la Junta Monetaria, lo mismo que la composición de dichos encajes.

Artículo 20.– Las facultades y poderes que le confiere la presente ley al Banco Nacional de la Vivienda, serán ejercidos por un Consejo de Administración compuesto de cinco miembros, que durarán en sus funciones cuatro años cada uno de los cuales tendrá su suplente. La integración del Consejo de Administración se realizará en la siguiente forma.

Miembro ex oficio.– El Director General del Instituto Nacional de la Vivienda. suplente. El Miembro que designe el Consejo de Directores del Instituto.

Cuatro miembros y sus suplentes, designados por el Poder Ejecutivo en la siguiente forma: dos de sendas ternas que a su requerimiento le proveerán el Secretario de Estado de Finanzas y la Junta Monetaria, y dos escogidos libremente.

El Poder Ejecutivo designará libre y expresamente cual de los miembros presidirá el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda.

Habrá un Gerente General, nombrado conforme se indica más adelante, cuyas atribuciones serán fijadas por los reglamentos internos del Banco.

El Consejo de Administración podrá designar uno o más subgerentes y otros funcionarios y fijar sus atribuciones.

El control del Banco estará en manos del Consejo de Administración y las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda afiliadas no tendrán derecho a votar sino para la elección de dos miembros del Consejo de Administración y de sus suplentes, cuando se cumplan las condiciones dispuestas en el artículo 21 de esta ley, en cuyo caso sustituirán a los miembros designados por el Poder Ejecutivo. Para ser miembro del Consejo de Administración del Banco se requiere ser ciudadano dominicano.

El Consejo de Administración fijará la dieta de los miembros del Consejo y la remuneración del Gerente General y demás empleados del Banco. Deberá reunirse por lo menos quincenalmente y podrá ser convocado por el Gerente cuando lo considere necesario, o a solicitud de dos de sus miembros.

El quórum será tres (3) miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo que esta Ley o los estatutos para casos especiales exigieren determinado número de votos. En caso de empate se repetirá la votación y si el empate persistiere se considerará negado el asunto.

Las vacantes en el Consejo de Administración serán llenadas por el Poder Ejecutivo para el resto del período , en la forma dispuesta en el artículo 20.

El Consejo de Administración podrá delegar en el Gerente General las funciones que corresponden al manejo diario de las operaciones del Banco y el gerente será responsable ante el Consejo por dicho manejo.

Artículo 21.– Una vez que las asociaciones de ahorros y préstamos para la vivienda posean acciones del Banco Nacional

de la Vivienda, computadas a su valor nominal, por un millon de pesos oro (RD$1,000,000.00) cuando menos, tendrán derecho a elegir uno de los miembros del Consejo de Administración del Banco y un suplente de dicho miembro del Consejo. Cuando las asociaciones en conjunto tengan la propiedad del 40 por ciento de las acciones del Banco, tendrán derecho a elegir otro miembro del Consejo de Administración, y su suplente.

Cada asociación afiliada tendrá derecho a un voto en dicha elección, la que será reglamentada por el Consejo de Administración del Banco. Lo mismo que el período del o de los miembros elegidos por las asociaciones.

La elección de dichos miembros deberá ser informada al Poder Ejecutivo.

Artículo 22.— Las prohibiciones y las incompatibilidades de los miembros del Consejo del Banco Nacional de la Vivienda; las del gerente, y las de sus respectivos suplentes, serán aquellas que se establezcan en los reglamentos. Los miembros del Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda no podrán ser directores, gerentes o administradores de otros establecimientos de crédito públicos o privados.

Artículo 23.— El gerente del Banco y los sub-gerentes que determine el estatuto serán elegidos por el Consejo de Administración.

El Gerente General será el representante legal del Banco, en tal virtud representará al Banco, como demandante o demandado y en todos los actos de su vida jurídica.

Artículo 24.— Toda sucursal del Banco Nacional de la Vivienda será manejada por un "Gerente de Sucursal" nombrado por el Consejo de Administración de dicho Banco. El gerente de sucursal será miembro y presidirá el Comité de Dirección de la misma, que se compondrá de cuatro (4) miembros, además del gerente, designados por el Consejo de Administración del Banco. El gerente de sucursal y el Comité de Dirección de la misma tendrán únicamente las facultades que le confiera el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda dentro de las prescripciones legales y las de los estatutos.

Artículo 25.- El Banco Nacional de la Vivienda podrá adquirir y poseer bienes raíces para los siguientes fines únicamente:

1.- Los necesarios para el acomodo de sus negocios, los que puede emplear en la parte razonable no necesaria para su propio uso para obtener una renta; pero deberá enajenarlos dentro de un plazo de dos años si fueren desvinculados del servicio;

2.- Los que le sean traspasados en pago de deudas previamente contraidas en el curso de sus negocios.

3.- Los que se le adjudiquen en subasta pública por razón de hipotecas constituidas a su favor o de que sea cesionario.

El Banco no podrá conservar por más de dos años los bienes raíces que adquiera conforme a los numerales 2) y 3) del presente artículo.

Artículo 26.- El Banco estará obligado a dar al Superintendente de Bancos los informes que éste le exija, y a someterse a la inspección de dicho funcionario, en la forma que el mismo lo solicite, en armonía con lo establecido en las leyes.

El Banco estará sujeto al pago de las contribuciones para el sostenimiento de la Superintendencia de Bancos, sobre las mismas bases en que deben hacerlo los demás bancos del país.

Salvo disposición legal en contrario el Banco estará sujeto a las prescripciones de las leyes relativas a la revisión, informes y sanciones por infracción de la ley o de decretos y disposiciones reglamentarias.

El Banco tendrá un Auditor que será nombrado por el Consejo de Administración. Las facultades y deberes del Auditor serán en lo pertinente, las mismas que las leyes atribuyen a los Comisarios de las Sociedades Anónimas.

Artículo 27.- El Banco Nacional de la Vivienda queda autorizado a conceder préstamos dentro de un plazo que no exceda de 5 años con el propósito de proveer financiamiento a empresas privadas que se dediquen a la construcción de planes

colectivos de vivienda familiar o mixta, de carácter económico, que se destinen a la venta al público, incluyendo edificaciones en condominio de conformidad con la Ley No. 5038, de 1958, publicada en la Gaceta Oficial No. 8308, de fecha 29 de noviembre de 1958, hasta el límite del 70 por ciento del valor comercial de los inmuebles ofrecidos en garantía, siempre que los créditos que se otorguen con estos fines sean garantizados con hipotecas de primer rango, y que los planes hayan sido aprobados en su aspecto técnico por el Instituto Nacional de la Vivienda, pero no podrá invertir para este objeto sumas que excedan del 20 por ciento de sus recursos.

Artículo 28.— Los Bancos comerciales quedan autorizados a conceder préstamos dentro del plazo, límite y en la proporción de sus recursos que determine la Junta Monetaria, con el propósito de proveer financiamiento a empresas privadas que se dediquen a la construcción de planes colectivos de vivienda familiar o mixta, de carácter económico, que se destinen a la venta al público, incluyendo edificaciones en condominio de conformidad con la Ley No. 5038, de 1958, publicada en la Gaceta Oficial No. 8308, de fecha 29 de noviembre de 1958, siempre que los créditos que se otorguen con estos fines sean garantizados con hipotecas en primer rango.

La Junta Monetaria tomará en cuenta en cada caso las recomendaciones que sobre dichos planes dará en su aspecto técnico el Instituto Nacional de la Vivienda.

Artículo 29.— Toda Compañía extranjera de seguros deberá invertir un 10 por ciento adicional a los porcentajes indicados en el artículo 17 de la Ley No. 3788, sobre Compañías de Seguros, publicada en la Gaceta Oficial No. 7672, de fecha 24 de marzo de 1954, en cédulas hipotecarias que emita el Banco Nacional de la Vivienda, de conformidad con la presente ley, o en hipotecas aseguradas originadas por las Asociaciones de Préstamos y Ahorros para la Vivienda. Un 10 por ciento de las inversiones que conforme al artículo 16 de la citada ley deberán hacer las compañías nacionales de seguros, deberá hacerse en la forma antes descrita.

Artículo 30.— Las cédulas del Banco Nacional de la Vivienda y sus intereses, estarán especialmente garantizadas: a) por los créditos hipotecarios otorgados a favor del Banco y originados por las Asociaciones que le hayan sido traspasados; b) por el capital y fondo de reserva del Banco; c) por la responsabilidad subsidiaria e ilimitada del Estado.

Artículo 31.— Los créditos hipotecarios del Banco Nacional de la Vivienda no serán embargables sino por los tenedores de las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco.

Artículo 32.— La garantía hipotecaria de las cédulas es colectiva. El conjunto de los créditos hipotecarios otorgados a favor del Banco y originados por las asociaciones, que le hayan sido traspasados, garantiza la totalidad y cada una de las cédulas puestas en circulación por el mismo Banco.

Artículo 33.— Las cédulas hipotecarias emitidas por el Banco Nacional de la Vivienda y los intereses y primas que represente, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos, tasas, recargos, arbitrios, honorarios o cualquier otra contribución pública. Esta exención alcanza el impuesto sobre sucesiones y donaciones y, en consecuencia, dichas cédulas y sus accesorios ~~no~~ serán computados en la determinación del valor de la trasmisión sucesoral o de la donación sujeto a impuesto, ni estarán sometidos a indisponibilidad por causa del mismo, pudiendo ser objeto de toda clase de operaciones sin necesidad de permiso ni autorización.

Artículo 34.— Las reglas relativas a la emisión, custodia, fiscalización, redención, cancelación, forma, interés, plazos, sorteos de las cédulas hipotecarias que emita el Banco Nacional de la Vivienda, y cualquier otra reglamentación que no haya sido específicamente hecha en la presente Ley, serán establecidas por el reglamento que para la ejecución de la presente Ley dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 35.— Toda persona natural o jurídica de derecho privado que habitualmente se dedique al negocio de construir por cuenta ajena o de vender viviendas, pagaderas en plazos que excedan de dos años y mediante cuotas periódicas, deberá registrarse en el Banco Nacional de la Vivienda y quedará sometida tanto a las reglamentaciones que éste dicte para seguridad del público, como a la vigilancia técnica del Instituto Nacional de la Vivienda.

Artículo 36.— El Banco no estará sujeto a impuestos o derechos con motivo de su constitución y organización, y asimismo a cualquier otro impuesto, tasa o contribución, nacionales o municipales, inclusive el impuesto sobre beneficios, en ninguna de las categorías establecidas en la Ley No. 3861, y

sus modificaciones, publicada en la Gaceta Oficial No. 7713, de fecha 29 de junio de 1954. Todos sus actos, contratos y los títulos que emita o documentos que suscriba, estarán también exentos de impuestos nacionales y municipales.

Artículo 37.- El Banco tendrá los mismos privilegios que confiere el Título VI, Capítulo 20, de la Ley No. 908, y sus modificaciones, publicada en la Gaceta Oficial No. 6269, del 9 de junio de 1945, al Banco Agrícola de la República Dominicana, relativos a la seguridad y reembolso de los préstamos en la expropiación y venta que persigan en ejecución de los mismos, y por lo tanto dichas disposiciones se aplicarán a los procedimientos que para tales fines realice el Banco Nacional de la Vivienda.

Quedará además subrogado de todas las cláusulas y condiciones que el contrato confiera a las asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda.

El Banco Nacional de la Vivienda tendrá los mismos privilegios que otorgue la Ley a dichas asociaciones.

Artículo 38.- El Consejo de Administración queda facultado para formular los reglamentos que fueren necesarios para la debida ejecución de la presente ley los que deberán ser sometidos a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Artículo 39.- La presente ley deroga toda otra ley o parte de ley, y reglamento o parte de reglamento que le sea contrario.

Artículo 40.- (Disposiciones transitorias).- Mientras se dicta el reglamento para la ejecución de la presente ley, el Consejo de Administración queda facultado para poner en vigor las pautas y normas que fueren necesarias para su mejor funcionamiento y las mismas serán acatadas por las Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119°, de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional y en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos; años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5895, que libera a los apartados postales del pago del impuesto establecido por el artículo 2 de la Ley No.5734, del 31 de diciembre de 1961.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5895

ARTICULO UNICO.— El arrendamiento de apartados postales no estará sujeto al pago del impuesto adicional a que se refiere el artículo 2 de la Ley No. 5734. del 31 de diciembre de 1961 (Presupuesto de Ingresos y Egresos para 1962). o de las que la sustituyan.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO La presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5896, que restablece el apartado b) del párrafo 15 del Art. 9 de la Ley que establece el arance de Importación y Exportación. (a favor del cemento Roman Portland y análogos).

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5896

Artículo 1.— Se restablece el apartado b) del Párrafo 15 del artículo 9 de la Ley que establece el Arancel de Importación y Exportación, No. 1488, del 26 de julio de 1947, para que rija con el texto anterior a la modificación que le fué introducida por la Ley No. 1803, de fecha 19 de septiembre de 1948, o sea de la manera siguiente:

"b) Cemento Romano Portland y análogos.....P.B. kilo RD$0.002"

Artículo 2.— En consecuencia queda derogada la Ley No. 1803 del 19 de septiembre de 1948.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil

novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5897

LEY SOBRE ASOCIACION DE AHORROS Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA

Artículo 1ro.—Se autoriza la organización y funcionamiento de asociaciones de ahorros y préstamos para la Vivienda, como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objeto será promover y fomentar la creación de ahorros destinados al otorgamiento de préstamos para la construcción, adquisición y mejoramiento de la vivienda.

Para los fines de esta ley y salvo que de su contexto se desprenda un significado diferente, se entenderá por Asociaciones, las Asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda.

Artículo 2do.— Cinco o más personas podrán organizar una Asociación, que deberá ser autorizada por el Banco Nacional de la Vivienda conforme el artículo 4to. de esta ley, previo estudio del prospecto de organización interna y de operaciones de la asociación. Al efecto extenderán y firmarán por triplicado un acta de organización. Para esto fines los interesados elevarán una solicitud ante el Banco Nacional de la Vivienda en la que expresarán:

1— El nombre que ha de llevar la Asociación y su objeto;

2— La ciudad donde la Asociación iniciará sus negocios y tendrá su domicilio;

3— El nombre, domicilio y nacionalidad de los otorgantes y la cantidad de dinero que deposita cada uno de ellos con destino al capital de la asociación;

4.— El número de directores de la Asociación que no será menor de cinco (5) ni mayor de catorce (14); y el nombre de

los que inicialmente hayan de tener la cantad de directores, el del comisario y sus respectivos suplentes, hasta cuando se elijan, por quién corresponda, los que hayan de desempeñar esas funciones en propiedad;

5– Las facultades o atribuciones que se reservan a la Asamblea General de depositantes o de asociados;

6– El nombre, domicilio, profesión y nacionalidad de la persona que vaya a ejercer las funciones de gerente o representante legal provisional, mientras se hace el nombramiento en propiedad, por quién corresponda, conforme a los estatutos.

7– El monto del capital inicial, que ha de estar integramente depositado en un establecimiento de crédito, a la orden de los organizadores, dentro de un plazo no mayor de dos meses contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud.

8– La estipulación, conforme a la cual toda persona natural o jurídica podrá asociarse mediante la inversión, a título de depósito de una suma mínima de tres pesos oro (RD$3.00) en las condiciones que fije el estatuto de la Asociación. Se considera efectuada la inversión una vez abierta la cuenta individual de ahorros;

9.– La persona autorizada para girar sobre la cuenta del capital depositado, en el caso previsto en el inciso 6 del artículo 2 de esta ley;

10– Un proyecto de sus estatutos;

11– Copia del acta de la asamblea constitutiva;

12– Original de la declaración de que trata el inciso 5 del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de la Vivienda.

Artículo 3ro.–El Consejo de Administración se cerciorará por cualesquiera investigaciones que estime conducentes de que el carácter, la responsabilidad y la idoneidad de las personas expresadas en la solicitud son tales que inspiran confianza y de que el bienestar público y la economía general serán fomentados con la asociación proyectada.

Artículo 4to.– Si el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda se hubiere convencido conforme el artículo anterior de que conviene autorizar el funcionamiento de la asociación proyectada y de que su capital se halla íntegramente depositado en un establecimiento de crédito, podrá aprobar la solicitud y expedir la franquicia correspondiente para operar la asociación. Si la decisión del Consejo de Administración fuere la de no autorizar la asociación proyectada, así lo comunicará a los solicitantes y ordenará el archivo del expediente.

Artículo 5to.– Cuando el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda haya impartido su aprobación al acta constitutiva, empezará la existencia legal de la asociación con plena capacidad de ejercer derecho y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente, de acuerdo con sus estatutos.

La decisión del Banco Nacional de la Vivienda expedida en virtud del artículo 4to., será publicada en la Gaceta Oficial, y en un diario de circulación nacional con un extracto de los datos enumerados en el artículo 2do. de la presente ley, y se efectuará además el depósito de los documentos indicados en el artículo 42 del Código de Comercio.

El Superintendente de Bancos será notificado de la concesión de la franquicia o su denegación por el Consejo de Administración.

Los gastos de organización e instalación no excederán del 10 por ciento del capital inicial y podrán ser amortizados dentro de los diez (10) primeros años, sin que en cada ejercicio el porcentaje de amortización sea inferior al 5 por ciento del monto total de éstos gastos.

Artículo 6to.–Si el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda, rehusara su aprobación a la solicitud, los fondos recibidos en depósito por los organizadores deberán ser devueltos a los respectivos depositantes, y con éste fin podrá girarse sobre la cuenta abierta a nombre de los organizadores, previa autorización del Superintendente de Bancos, quien vigilará las devoluciones.

Artículo 7mo.– Las certificaciones que expida el Banco Nacional de la Vivienda sobre la existencia legal de las

asociaciones y sobre las personas que ejercen la representación de las mismas, formarán plena prueba de éstos hechos.

Artículo 8vo.- Cada año, por lo menos se celebrará una asamblea general de Depositantes dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio de la asociación.

Las siguientes facultades corresponden privativamente a la Asamblea General de depositantes o Asociados;

a) Reformar los estatutos y [illegible]eterlos a la aprobación del Banco Nacional de la Vivienda.

b) Examinar y aprobar los balances de fin de ejercicio y las cuentas e informes que deben rendir los administradores, y el o los comisarios.

c) Elegir los directores y sus respectivos suplentes personales, el o los comisarios, y fijarles su remuneración. Para cada director se elegirán dos suplentes.

En caso de que no se celebre la asamblea dentro de ese término, el Banco Nacional de la Vivienda convocará a la Asamblea.

Artículo 9no.- En las decisiones de la Asamblea General de depositantes o de Asociados y en las votaciones que ésta realice, cada depositante tendrá derecho a un (1) voto por cada cien pesos oro (RD$100.00) que haya mantenido depositado o como promedio en la cuenta de ahorros durante el último ejercicio. Pero ningún depositante tendrá derecho a más de cincuenta (50) votos cualquiera que sea el monto de su depósito o de su cuenta de ahorros.

Sin embargo en la asamblea general de Depositantes, Constitutiva, ningún depositante tendrá derecho a más de diez (10) votos.

Artículo 10.- Las asociaciones serán administradas por una Junta de Directores compuesta por no menos de cinco (5) y no más de catorce (14) personas, que podrán ser o no depositantes.

Artículo 11.- Los directores serán elegidos por un período de tres (3) años y podrán ser re-elegidos indefinidamente. Los

estatutos podrán determinar que la renovación sea parcial. Los directores deberán permanecer en su puesto hasta cuando sus sucesores sean elegidos, excepto cuando sean removidos o inhabilitados. Caso de que la elección de directores no se hiciere en la oportunidad señalada por los estatutos, el Banco Nacional de la Vivienda tendrá la obligación de convocar inmediatamente la Asamblea General de Depositantes o Asociaciones para que realice la elección.

El Suplente de un director no ocupará el lugar del principal sino cuando éste haga saber a la asociación que dejará de asistir a las sesiones por lapso contínuo que exceda de un mes, o cuando de hecho no asistiera por igual tiempo. La ausencia de un director por un lapso contínuo mayor de tres meses producirá la vacante del cargo y en su lugar, ocupará el puesto el respectivo suplente, por el resto del período.

Artículo 12.— La Junta de Directores tendrá las siguientes facultades y deberes:

1— Administrar los negocios de la asociación con plenas facultades, sin perjuicio de las reservadas por la ley a la Asamblea General de Depositantes o Asociados;

2— Autorizar la apertura de cuentas de ahorros, previa calificación del depositante, y fijar el límite del monto máximo de los depósitos que una persona natural o jurídica puede mantener en la asociación;

3— Acordar los préstamos y sus modalidades, previa calificación del deudor;

4— Elegir al Gerente de la Asociación, los gerentes de las sucursales y los suplentes de cada uno de los gerentes, cuando los estatutos no lo determinen, el Secretario y el Contador de la asociación;

5— Convocar la Asamblea General de Depositantes o Asociados;

6— Adoptar y presentar la memoria, las cuentas y el balance de cada ejercicio que deberán someterse a la Asamblea General de Depositantes o Asociados;

7– Decretar los dividendos que juzgue apropiados según el saldo de las utilidades líquidas de cada ejercicio que no deban ser trasladadas a fondos de reserva, que se distribuirán a los depositantes.

8– Delegar en el gerente de la Asociación o en comités compuestos por un número plural de directores y el gerente u otro funcionario, algunas de las facultades administrativas que le corresponden. Dichos gerentes o comités deberán informar en cada reunión de la Junta de Directores sobre el uso de las facultades delegadas;

9– Preparar y promulgar, con la aprobación del Banco Nacional de la Vivienda, los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la asociación;

10– Decidir sobre la apertura de sucursales y someter el acuerdo a la aprobación del Banco Nacional de la Vivienda.

Artículo 13.– La persona que ejerza la gerencia de una asociación o de una sucursal de la misma, sea como gerente principal o como suplente de éste, tendrá la representación legal de la Asociación para todos los efectos.

Siempre que quien ejerza tal gerencia proceda en cualesquiera actuaciones o diligencias, como gerente de la asociación o de una sucursal, obligará a la asociación para con terceros, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir para dicha asociación, si hubiere procedido sin facultad suficiente cuando ha debido tenerla.

La Asamblea General de Depositantes o Asociados podrá crear el cargo de Presidente de la Asociación y asignarle funciones.

Artículo 14.– Las prohibiciones a los directores y gerentes, sus incompatibilidades, y las reglas sobre préstamos a los empleados y funcionarios de las asociaciones, serán las mismas establecidas en la legislación bancaria para directores y gerentes de bancos y demás establecimientos de crédito.

El Comisario de una asociación tendrá las facultades, incompatibilidades, deberes y prohibiciones que este mismo funcionario tiene en las sociedades anónimas.

Artículo 15.— Se entenderá por capital de una asociación las sumas de dinero que la asociación reciba a título de depósito de ahorros de los organizadores y de los asociados.

No podrán establecerse asociaciones o sucursales con un capital íntegramente pagado menor de RD$15,000.00 para las asociaciones o sucursales que hayan de funcionar en poblaciones que no excedan de cuarenta mil habitantes;

RD$25,000.00 para las asociaciones o sucursales que hayan de funcionar en poblaciones de más de cuarenta mil y menos de sesenta mil habitantes;

RD$40.000.00 para las asociaciones o sucursales que hayan de funcionar en poblaciones de más de sesenta mil y menos de cien mil habitantes;

RD$75,000.00, para las asociaciones o sucursales que hayan de funcionar en poblaciones de más de cien mil y menos de ciento cincuenta mil habitantes;

RD$125,000.00, para las asociaciones o sucursales que hayan de funcionar en poblaciones de más de ciento cincuenta mil habitantes.

Toda Asociación de Ahorros y Préstamos para la Vivienda deberá constituir un fondo de reserva legal mediante el traspaso de utilidades no distributivas. Al cerrarse un ejercicio financiero la asociación transferirá a dicho fondo no menos de la décima parte de las utilidades líquidas hasta cuando el fondo ascienda a la quinta parte del capital de la asociación. El fondo de reserva legal solo podrá ser reducido a menos de dicha quinta parte del capital para atender a pérdidas en exceso de utilidades no distribuidas.

Artículo 16.- Las asociaciones podrán recibir depósitos en cuentas individuales de ahorros de toda clase de personas naturales o jurídicas conforme a la presente ley.

Artículo 17.- Con autorización del Banco Nacional de la Vivienda, las asociaciones podrán recibir depósitos de ahorros a término, cuya participación en los dividendos será diferente a la de las cuentas ordinarias. Los titulares de estos depósitos tendrán los derechos y obligaciones que fije el respectivo reglamento.

Artículo 18.- Los tutores, albaceas, agentes fiduciarios, apoderados y otras personas que manejen bienes ajenos, podrán depositar los fondos de dinero o de valores de que son responsables en las asociaciones y con este depósito se entenderá cumplida la obligación legal de administrar prudente y diligentemente los bienes.

Artículo 19.- El Estado Dominicano y los establecimientos públicos autónomos de carácter nacional o municipal podrán constituir depósitos en las asociaciones.

Estas, además quedan autorizadas para recibir los depósitos de garantía a favor de entidades nacionales de derecho público.

Artículo 20.- Sólo tendrán derecho a dividendos las cuentas de ahorros cuyo monto exeda de veinte pesos oro (RD$20.00).

Artículo 21.- Los depósitos de ahorros podrán ser a la vista o a plazos y todos devengarán intereses.

En los depósitos en cuenta de ahorros, el depositante tiene derecho a verificar remesas en efectivo para abono en su cuenta y disponer total o parcialmente de la suma depositada, mediante cobros a la vista. Los depósitos de dinero a la vista, se entenderán constituídos en cuenta de ahorros, a menos que se pacte lo contrario. Para que el depositante pueda hacer abonos en cheques se requerirá autorización del depositario.

En circunstancias especiales, y con aprobación del Banco Nacional de la Vivienda, la Junta de Directores de la Asociación podrá determinar que, durante el tiempo que se juzgue conveniente, ningún depósito de ahorros será exigible hasta sesenta días después de la fecha en que el depositante haya avisado su propósito de cobrarlo.

Si pasados quince (15) días desde el vencimiento del plazo de preaviso no se hubiere cobrado el depósito, se exigirá al depositante un nuevo término de treinta (30) días para el retiro y así sucesivamente, mientras dure la vigencia de esta condición

Ninguna asociación podrá renunciar de antemano, en los reglamentos y contratos, a la facultad de establecer el preaviso de que trata este artículo.

Artículo 22.— No se admite el giro de cheques contra depósitos de ahorros.

Artículo 23.— El depósito en cuenta de ahorros y sus abonos y cargos se comprobarán mediante anotaciones en la libreta especial que las asociaciones deberán proporcionar gratuitamente a los depositantes.

Artículo 24.— Las libretas de ahorros tienen la calidad de título ejecutorio, sin necesidad de reconocimiento previo.

Artículo 25.— Los ahorros que depositante haya mantenido en las asociaciones durante un año o los integrados durante el mismo lapso mediante consignaciones parciales, son inembargables hasta la cantidad global de mil pesos oro (RD$1,000.00).

Artículo 26.— Los depósitos de ahorros a favor de un beneficiario distinto del depositante serán de libre disposición de éste mientras no haya sido aceptado el depósito por el beneficiario. Pero si el depósito de ahorros así constituído se sujetare a plazo o condición aceptados por la asociación, la disposición por parte del beneficiario sólo podrá tener lugar

una vez que el plazo expire o que se realice la condición; y entre tanto, podrá el depositante disponer libremente del depósito.

Artículo 27.— El menor que haya cumplido catorce (14) años podrá efectuar directamente depósitos de ahorros y disponer de ellos libremente. También podrá disponer libremente de los que se hagan o hayan hecho a su nombre en cualquier tiempo. Pero los depósitos de ahorros hechos por los padres o tutores a nombre del hijo menor o del pupilo sólo pueden ser retirados, durante el ejercicio de la patria potestad o de la guarda, por el padre o por el tutor, siempre que estas modalidades se hagan constar en el contrato.

Artículo 28.— Los depósitos de ahorros recibidos a nombre de dos o más personas podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aún en caso de muerte, a menos que se pacte que el retiro deba hacerse conjuntamente.

Los representantes de sociedades cooperativas, mutualistas, profesionales o filantrópicas, las escuelas y otras entidades similares, podrán también obtener la apertura de cuentas colectivas de ahorros para recoger los ahorros de sus miembros. Los depósitos y los retiros se efectuarán por los miembros autorizados de dichas entidades. En la declaración para la apertura de la cuenta se determinará quienes serán las personas autorizadas, y cualquier cambio deberá ser notificado debidamente a la asociación, por escrito.

Artículo 29.— La restitución de un depósito de ahorros a la persona a cuyo nombre haya sido abierta la cuenta, descarga a la asociación de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de ésta Ley.

El depósito de ahorros constituído a nombre de un menor de catorce (14) años podrá ser restituído a su representante legal cuando así lo autorice expresamente el contrato, o en caso de necesidad apreciada por la Junta de Directores de la Asociación.

En los casos en que el depositante no sepa firmar, la restitución será liberatoria para la Asociación si ésta ha obtenido descargo del depositante mediante la impresión de las huellas digitales y las firmas de dos testigos puestas ante un Notario Público que dé constancia en el comprobante de ellas. No estará sujeta a la aplicación de sellos de Rentas Internas, ésta clase de actos.

Artículo 30.) Si el depositante muriere dejando una cuenta de ahorros, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la Ley No. 2850, publicada en la Gaceta Oficial No. 7284 de fecha 12 de Mayo de 1951.

La Junta Directores, o el funcionario en quien delegue ésta atribución podrá sinembargo, autorizar a los sucesores un retiro no mayor de RD$300.00, si éstos prueban debidamente que éste valor se destinara a los gastos de enterramiento.

Artículo 31.— Las asociaciones invertirán los recursos provenientes de los depósitos de ahorros y de cualquiera otras fuentes en los siguiente fines únicamente:

1.— En préstamos de garantía hipotecaria de primer grado destinados a la adquisición, construcción, ampliación o reparación de la vivienda familiar o mixta de caracter económico incluyendo edificaciones en condominio de acuerdo con la Ley No. 5038 de 1958, o a la cancelación de gravámenes existentes sobre la misma, cuando se justifique y con la aprobación del Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda.

El monto de la inversión por unidad, la cuantía máxima y los plazos de los préstamos a cada persona para fines de vivienda familiar y de construcciones mixtas de carácter económico, se determinarán conforme al reglamento que dicte el Banco Nacional de la Vivienda; y

2.— En préstamos contra cuentas de ahorros a los asociados, éstos préstamos quedarán garantizados con las sumas de dinero que el asociado tenga depositadas a la fecha en que se realice la

operación. El límite del préstamos no será superior al 90 por ciento de la garantía, y el prestatario se obligará a no retirar el depósito mientras no hayan saldado el préstamo.

Artículo 32.— Las asociaciones no harán ningún préstamos con garantía hipotecaria conforme se estipula en el inciso 1 del artículo anterior, a los directores, oficiales o agentes de las mismas.

La tasa de interés anual de los préstamos, los márgenes de la garantía, otras condiciones de los préstamos y los requisitos que deben llenar los solicitantes se determinarán conforme al reglamento que dicte el Banco Nacional de la Vivienda.

Los préstamos hipotecarios destinados a vivienda familiar conforme al acápite 1ro. del artículo 31 se reembolsarán mediante el pago de cuotas periódicas fijas o variables que incluyan la amortización de capital y el servicio de intereses.

Artículo 33.—Ninguna persona natural o jurídica, distinta de las asociaciones autorizadas por el Banco Nacional de la Vivienda y de los bancos autorizados para mantener una sección de ahorros, o de personas a quienes la ley expresamente haya concedido dicha facultad podrá solicitar o recibir del público depósitos de ahorros, ni usar en cualquier idioma las palabras ahorros y préstamos en sus negocios, prospectos y propaganda. Las entidades que infrijan las anteriores disposiciones serán posibles de multa de RD$50.00 a RD$10,000.00, y las personas culpables de la infracción, que no se hallaren sujetas a mayor pena por las disposiciones del Código Penal, serán castigadas con la misma multa o con prisión de seis meses a cinco años o con ambas penas a la vez, según el monto y la naturaleza de cada caso, que serán apreciadas soberanamente por los Jueces. Las mismas penas se aplicarán a las violaciones de las normas que dentro del límite de las atribuciones que le acuerda la presente ley, dicte el Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda. Solo el Superintendente de Bancos con la aprobación del Consejo de Administración del Banco Nacional de la Vivienda, podrá iniciar ante las autoridades judiciales competentes las

acciones legales correspondientes, sin perjuicio de su liquidación conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley General de Bancos No. 1538, publicada en la Gaceta Oficial No. 6699, de fecha 13 de octubre de 1947, cuando el Superintendente de Bancos comprobara que las asociaciones están infringiendo las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 34.— Con aprobación del Banco Nacional de la Vivienda de la Junta de Directores podrá autorizar la compra de créditos hipotecarios otorgados por cualquier asociación de ahorros y préstamos para la vivienda. Las condiciones del negocio deberán ser previamente aprobadas por dicho banco.

Artículo 35.— Las asociaciones no estarán sujetas a impuestos o derechos con motivo de su constitución u organización, y asimismo de cualquier otro impuesto, tasa o contribución, inclusive el impuesto sobre beneficios en ninguna de las categorías establecidas por la Ley No. 3861, y sus modificaciones, publicada en la Gaceta Oficial No. 6713, de fecha 29 de junio de 1954. Todas sus autorizaciones, contratos y los títulos que emitan o documentos que suscriban estarán también exentos de impuestos nacionales y municipales.

Los beneficiarios de los préstamos hipotecarios concedidos para las asociaciones, pagarán por todo impuesto, establecido para esas clases de transacciones, conforme a la suma envuelta en la operación hipotecaria, de acuerdo a la siguiente escala;

Hasta RD$3,000.00	LIBRE
De RD$3,001.00 a RD$5,000.00	RD$17.50
De RD$5,001.00 a RD$8,500.00	RD$25.00

En caso de venta por las asociaciones o por las empresas constructoras registradas conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de la Vivienda, regirá la misma escala.

Artículo 36.— Cuando los deudores de cuotas periódicas no las satisfacieren en los plazos fijados, las asociaciones podrán ejercer el procedimiento ejecutorio del embargo inmobiliario y

tendrán los mismos privilegios que conforme el Título VI, Capítulo 20, de la Ley No. 908, y sus modificaciones, publicada en la Gaceta Oficial No. 6269, del 9 de junio de 1945, al Banco de Crédito Agrícola e Industrial de la República Dominicana, relativos a la seguridad y reembolso de los préstamos en la expropiación y venta, que persiga en la ejecución de los mismos, y por lo tanto dichas disposiciones se aplicarán a los procedimientos que para tales fines, realicen las asociaciones. Las asociaciones no concederán préstamos hipotecarios sin previa solicitud de la parte interesada hecha en la forma y con los datos que para cada caso exijan las Juntas de Directores de las Asociaciones, la Ley Orgánica del Banco Nacional de la Vivienda y sus reglamentos, y las disposiciones de carácter general dictadas por el Consejo de Administración de dicho Banco Nacional de la Vivienda. Las reglas establecidas en los artículos 53, 54, 55, 56 y 57 de la Ley No.908, y sus modificaciones, publicada en la Gaceta Oficial No.6269, de fecha 9 de junio de 1945, realtivas a la inscripción provisional y sus efectos de que tratan dichos artículos, regirán para las asociaciones de préstamos y ahorros para la vivienda, con la variación de que las facultades concedidas por dichos artículos al Comité Agrícola e Hipotecario o a la Comisión Ejecutiva, serán ejercidas por la Junta de Directores de la asociaciones y por los Comités en los cuales dicha Junta de Directores delegue esas atribuciones.

Concedido un préstamo por las asociaciones, los bienes dados en garantía no serán embargables por créditos personales posteriores a la constitución de la hipoteca. Esta inoponibilidad producirá efecto a contar de la fecha de anotación a que se refieren los artículos de la Ley No.908, de 1945, antes citados. Las asociaciones podrán proponer esta inoponibilidad en todo estado de causa.

Asimismo, en los casos arriba señalados, las asociaciones podrán solicitar por medio del procedimiento establecido en los artículos 806, 807 y 808, del Código de Procedimiento Civil, que el Tribunal ponga la administración del inmueble hipotecario, a cargo de dichas asociaciones. La sentencia no estará sujeta a ningún recurso ordinario o extraordinario. Dichas rentas

no podrán ser cedidas ni embargadas en perjuicio de las asociaciones. En consecuencia, los embargos y cesiones de esos valores sólo se aplicarán a los balances que resulten a favor del beneficiario.

A partir de la fecha de la notificación de la sentencia al deudor y a los inquilinos las rentas quedarán inmovilizadas en favor de las asociaciones, quienes podrán exigir a los inquilinos el pago directo de los alquileres, pagos que serán aplicados al servicio de las cuotas e intereses vencidos.

Esta situación cesará tan pronto como el deudor haya puesto al día el servicio de la obligación hipotecaria, bien por imputación de las cuotas insolutas de los frutos de la administración, o por pago efectuado directamente. Dentro de las mismas diligencias las asociaciones rendirán cuenta de su administración.

Artículo 37.— Las asociaciones serán vigiladas por el Superintendente de Bancos quien tendrá al efecto las mismas facultades y obligaciones que la Ley le confiere en relación con los Bancos y con sus directores y administradores, sin perjuicio de las que corresponden al Banco Nacional de la Vivienda conforme a su Ley Orgánica y a la presente ley.

Podrá además el Banco Nacional de la Vivienda, previa audiencia del interesado, decretar la remoción o la suspensión de cualquier director, gerente u otro funcionario, cuando realice violaciones de la presente ley, de sus reglamentos o de otras leyes aplicables a las asociaciones de los estatutos de la asociación, o practique operaciones no autorizadas o inseguras.

Artículo 38.— Las asociaciones contribuirán para los gastos de sostenimiento de la Superintendencia en la forma y proporción prevista para los restantes establecimientos bancarios.

Artículo 39.— Cuando el Banco Nacional de la Vivienda, después de intervenir una asociación, considere que ésta no puede continuar sus negocios resolverá lo siguiente:

1.- Declarar disuelta la asociación, expresado la causa, y, en consecuencia, cancelar la autorización a que se refiere el Artículo 4to. de esta ley;

2- Proceder a que su liquidación se practique por el Banco Nacional de la Vivienda, que será realizada en la forma prevista en el artículo 36 de la ley general de Bancos, No. 1530, publicada en la Gaceta Oficial No. 6699, de fecha 13 de octubre de 1947.

3- Separar de la administración a los directivos y gerente;

4- Prevenir al público de que los bienes de la asociación no podrán ser embargados desde la fecha de la resolución y hasta cuando la liquidación haya terminado.

De la resolución se expedirán dos ejemplares, uno de los cuales será archivado en las oficinas del Superintendente de Bancos, y el otro, en el Banco Nacional de la Vivienda. La resolución se publicará en uno o más diarios de la ciudad donde funcione la oficina principal de la asociación.

Para los efectos del numeral 4to. de este artículo, si se decretare un embargo durante el lapso de la liquidación, el Juez de la causa procederá de plano a levantarlo tan pronto como se lo exija el liquidador.

Artículo 40.- La disolución voluntaria de una asociación será decretada por la Asamblea General de Depositantes o Asociados con el voto de las dos terceras partes de los concurrentes y su liquidación practicada por la persona que ésta designe. Estas determinaciones serán comunicadas al Banco Nacional de la Vivienda, al Superintendente de Bancos y publicadas en forma similar a la prevista en el Artículo 5to. de esta Ley. Si existe causa legal, este último podrá disponer que la liquidación se practique por el Banco Nacional de la Vivienda.

Artículo 41.- Las asociaciones podrán fusionarse entre sí por acuerdo de sus respectivas Asambleas de Depositantes o Asociados, aprobado por el Banco Nacional de la Vivienda, quien cancelará la autorización otorgada a la asociación absorbida.

La asociación absorbente se hará cargo del pasivo de la absorbida y asumirá, por este hecho, las responsabilidades propias de un liquidador respecto de los acreedores de ésta.

Artículo 42.– Los depósitos de ahorro hasta la suma de RD$3,000.00 y sus intereses, estarán exentos de todo gravamen o impuesto.

Artículo 43.– Todos los estados financieros, estados de situación y balances generales, documentos que deberán ser presentados a la Asamblea General de Depositantes de las Asociaciones de Préstamos y Ahorros para la Vivienda, deberán ser verificados por un Contador Público Autorizado, y llevarán la certificación exigida por el artículo 6 de la Ley No. 633 de fecha 16 de junio de 1944, modificada por la Ley No. 3530, publicada en la Gaceta Oficial No. 7558, de fecha 2 de mayo de 1953. Dicha certificación se expedirá libre de impuesto.

Artículo 44.– La presente Ley deroga toda otra ley o parte de ley, y reglamento o parte de reglamento que les sean contrarios.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
MIembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO La presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA Por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5898, que deroga la Ley No. 5094, del 5 de marzo de 1959, y dicta otras disposiciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5898

ARTICULO UNICO.– Queda derogada la Ley No. 5094, de fecha 5 de marzo de 1959, a fin de que el artículo 373 del Código Penal rija como antes de la modificación que le introdujo dicha ley, o sea de la manera siguiente:

"Artículo 373.– Para que tengan aplicación las disposiciones anteriores, ha de concurrir la circunstancia de la publicidad de la difamación o de la injuria. La injuria que no tenga el doble carácter de publicidad y de imputación de un vicio determinado, se castigará con penas de simple policía."

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5899, que agrega un párrafo IV al Artículo 57 de la Ley No. 3003 sobre Policía de Puertos y Costas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5899

ARTICULO UNICO.– Se agrega un párrafo IV al artículo 57 de la Ley No. 3003, sobre Policía de Puertos y Costas, de fecha 12 de junio de 1951, modificado por la Ley No.5618, de fecha 7 de septiembre de 1961, para que rija del siguiente modo:

"Párrafo IV.– Los siguientes títulos que expida la referida Comisión deberán adherírseles sellos de Rentas Internas, de acuerdo con la siguiente tarifa:

Títulos para Capitán	RD$25,00
Títulos para Patrón de Altura	RD$15.00
Títulos para Segundo Oficial	RD$10.00
Títulos para Tercer Oficial	RD$ 5.00
Títulos para Patrón de Cabotaje	RD$ 3.00

PARA OFICIALES DE MAQUINAS Y SUS ASISTENTES:

Títulos para Jefe de Máquinas	RD$20.00
Títulos para Primer Asistente	RD$15.00
Títulos para Segundo Asistente	RD$10.00
Títulos para Tercer Asistente	RD$ 5.00

Los duplicados de los citados títulos estarán sujetos a la aplicación de un sello de Rentas Internas del tipo de RD$2.00.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo, de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5900, que deroga la Ley No. 5445, del 2 de diciembre de 1960, que autoriza la donación de animales sin dueños

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5900

CONSIDERANDO que la disposición legal que establece que sean distribuidos entre agricultores de escasos recursos

económicos los animales que se declaren sin dueño conocido, crea problemas en la práctica a los Síndicos y ocasiona gastos a los Ayuntamientos, como consecuencia de la guarda y mantenimiento de dichos animales, mientras se dispone la entrega de los mismos;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Queda derogada la Ley No. 5445, de fecha 2 de diciembre de 1960, que autoriza la donación de animales sin dueños conocidos a personas de escasos recursos.

Artículo 2.– Se restablece el Artículo 84 de la Ley de Policía No. 4984, del 12 de abril de 1911, reformado por la Ley No. 653, del 18 de julio de 1921, para que rija de la siguiente manera:

"Artículo 84.– Cuando se encontrare en un municipio un animal cuyo dueño no sea conocido, el propietario o encargado del terreno en donde se hallare el animal dará parte de ello al Alcalde Pedáneo del lugar para que éste lo participe al Juez de Paz del municipio, quien dejará el animal al cuidado del mismo pedáneo o de otra persona que éste le indique y en seguida se pondrá aviso en uno de los periódicos o en la Gaceta Oficial, designando en dicho aviso, con claridad, la clase, color, señales, estampas y marcas particulares del animal. Si transcurrido un mes después de la publicación del primer aviso, no se hubiere presentado su dueño, el animal será puesto en venta pública en presencia del Síndico o de un representante del Ayuntamiento y con su producido se pagará los gastos que se hubieren ocasionado en el cuidado del animal, y el sobrante se depositará en la Tesorería Municipal a disposición del dueño si apareciese en el término de tres meses, y si no, la suma ingresará en la Caja Municipal como propiedad del Municipio".

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5901, que agrega un párrafo al Artículo 386 (modificado) del Código Penal

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5901

Artículo 1.– Se agrega un párrafo al Artículo 386 del Código Penal, modificado por la Ley No. 461, del 17 de mayo de 1941, con el siguiente texto:

"Párrafo.– En el caso del inciso 3, si las cosas robadas no pasan de treinta pesos, y se acogen circunstancias atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta dos meses de prisión".

Artículo 2.– Se modifica el inciso 3 del Artículo 463 del Código Penal, para que en lo adelante se lea con el siguiente texto:

"3º.– Cuando la Ley imponga al delito la de trabajos públicos, que no sea el máximum, los tribunales podrán rebajar la pena a la de reclusión, o de prisión correccional cuya duración no podrá ser menos de un año, salvo que la ley permita una reducción de la prisión a menor tiempo.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5902, que agrega un párrafo al Artículo 18 de la Ley No. 3788, del 19 de marzo de 1954, sobre Compañías de Seguros

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5902

ARTICULO UNICO.— Se agrega el siguiente párrafo al Artículo 18 de la Ley No. 3788, de fecha 19 de marzo de 1954, sobre Compañías de Seguros:

PARRAFO.— Para que una persona extranjera pueda obtener permiso para actuar como Agente Solicitador de Seguros, es necesario que demuestre haber residido en el país durante el término del año que precede a la fecha de la correspondiente solicitud.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

BIBLIOTECA GENERAL DE LA NACION

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5903, que deroga la Ley No. 5085, del 12 de febrero de 1959, que creó la Dirección General de Control de Multas

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5903

ARTICULO UNICO.- Queda derogada la Ley No. 5085, de fecha 12 de febrero de 1959, modificada por la Ley No. 5355, del 14 de mayo de 1960, que creó la Dirección General de

Control de Multas, bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Justicia.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J.Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República·

PROMULGO La presente Ley y mando que se publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5904, que pone bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas la Dirección General del Catastro Nacional

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5904

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado de Finanzas debe tener la supervigilancia y control no sólo de las oficinas recaudadoras, sino también de aquellas que suministren datos esenciales para la localización de los contribuyentes y determinación de los impuestos;

CONSIDERANDO: Que para el logro de tal objetivo debe tener bajo su dependencia a la Dirección General del Catastro Nacional

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— A partir de la publicación de la presente ley, la Dirección General del Catastro Nacional funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas.

Artículo 2.— La presente ley modifica cualquier otra disposición que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5905, que agrega un párrafo II al Artículo 118 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 4761

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5905

ARTICULO UNICO.— Se agrega el siguiente párrafo II al artículo 118 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 4761, de fecha 1ro. de septiembre de 1957, para que rija con el siguiente texto:

"Párrafo II.— Los Oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que hubiesen sido cancelados, y los alistados de

estas instituciones que hubiesen sido dados de baja, con anterioridad a la publicación de la presente ley, que a su solicitud, y por el tiempo de servicios que prestaron, fuesen favorecidos con el beneficio del retiro con pensión, no recibirán la bonificación en dinero establecida en el presente artículo".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República,
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA Por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5906, que modifica varios artículos de la Ley No. 5096, de Estadística y Censos Nacionales

EL CONSEJO DE ESTADO

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5906

UNICO.– Se modifican los artículos 13, 14, 15 y 17 de la Ley No. 5096, de Estadística y Censos Nacionales, del 6 de marzo de 1959, para que rijan con los siguientes textos:

CAPITULO IV

Comisiones de Estadísticas

"Artículo 13.– En cada Municipio o Distrito Municipal habrá una Comisión de Estadísticas con la atribución de reunir, analizar, computar y remitir a la Dirección General de Estadísticas y Censos los datos que le sean solicitados por ésta.

Cada Comisión estará integrada por el Síndico Municipal o Encargado del Distrito Municipal, según el caso, quien la presidirá; el o los Inspectores de Educación con asiento en la cabecera del Municipio o del Distrito, o en su defecto, el Director de la escuela oficial de mayor categoría; y por el empleado de la Sindicatura, del Ayuntamiento o de la Oficina del Distrito Municipal que señale el Síndico correspondiente. El empleado así designado hará las veces de Secretario.

Párrafo.– En cada Sección Municipal se designarán tantos Comisionados de Estadísticas como fueren necesarios para la eficacia de este servicio, de acuerdo con el número de poblados y parajes".

"Artículo 14.– Los miembros de las Comisiones de Estadísticas así como los Comisionados Seccionales tendrán carácter honorario y gratuito.

Párrafo.– Los Comisionados Seccionales serán nombrados por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Director General de Estadísticas y Censos".

"Artículo 15.– Las Comisiones de Estadística celebrarán sesión ordinaria una vez al mes, por lo menos, y extraordinaria cuando lo juzgue necesario el presidente o dos o más miembros. El Secretario de la Comisión enviará a la Dirección General con un memorándum, en forma sintética, una relación de los asuntos discutidos y resueltos en la sesión, a más tardar, cinco días después de celebrar la misma".

Artículo 17.– Las Comisiones y Comisionados de Estadísticas serán organismos dependientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos y prestarán sus servicios ciñendose a las instrucciones que les fueren comunicadas por dicha Dirección.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No. 5907, del Consejo de Estado en funciones de Asamblea Nacional, que nombra los miembros de la Junta Central Electoral

EL CONSEJO DE ESTADO
EN FUNCIONES DE ASAMBLEA NACIONAL

NUMERO 5907

VISTO el párrafo transitorio del artículo 4 de la Ley No. 5891 de fecha 8 de mayo de 1962;

RESUELVE:

Artículo 1.– Hacer las siguientes designaciones de miembros de la Junta Central Electoral y de sus respectivos suplentes:

Lic. Emilio de los Santos, Presidente de la Junta Central Electoral;

Lic. Eduardo Read Barreras, Primer Suplente de Presidente;

Lic. Fernando A. Chalas, Segundo Suplente de Presidente;

Lic. Julio A. Cuello, Miembro de la Junta;

Lic. Julio Hoepelmán, Primer Suplente;

Dr. Froilán Tavares hijo, Segundo Suplente;

Lic. Abigail Delmonte, Miembro de la Junta;

Lic. Manuel Vicente Feliú, Primer Suplente;

Dr. Lupo Hernández Rueda, Segundo Suplente.

Artículo 2.– Los miembros así designados durarán en sus funciones hasta la instalación del Congreson Nacional que surja de las próximas elecciones generales ordinarias.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, , para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5908, que deroga la Ley No. 5314, del 4 de marzo de 1960, que establece un impuesto gradual sobre las construcciones de edificios

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5908

ARTICULO UNICO.– Queda derogada la Ley No. 5314, de fecha 4 de marzo de 1960, que establece un impuesto gradual sobre las construcciones de edificios, ampliaciones o reparaciones en los mismos, cuyo costo exceda de RD$5,000.00.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley Orgánica de la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ORGANICA DE LA CORPORACION DE FOMENTO INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

NUMERO 5909

CAPITULO I

Organización, Objeto, Capital y Dependencias

Artículo 1.– Se crea una Corporación autónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente y duración ilimitada, con todos los atributos inherentes a tal calidad, la cual será una institución orgánica de carácter público y plena capacidad para contratar y adquirir derechos y contraer obligaciones, actuando libremente bajo la denominación de Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana, con domicilio en Santo Domingo, Distrito Nacional. Se la llamará en lo adelante en el texto de esta Ley, la Corporación.

Artículo 2.– Esta Corporación tiene por objeto fomentar el desarrollo industrial de la República Dominicana, estimulando los sectores productivos de la economía nacional, con exclusión de lo agropecuario y de la industria azucarera, promoviendo a esos efectos nuevas industrias y el desarrollo de las existentes, con vistas a lograr la mayor diversificación y sistematización de las actividades económicas del país y a elevar el nivel de vida de su población.

Se entiende por empresa industrial a los fines de esta ley, las que se dediquen a una actividad de transformación de las Materias primas y aquellas que sean complementarias o conexas de esa actividad, como son las mineras o extractivas y las de transporte, hoteles y otros servicios que promuevan la industria propiamente dicha.

Artículo 3.– El capital autorizado de la Corporación es de cincuenta millones de pesos oro dominicanos (RD$50,000,000.00).

El capital pagado de la Corporación se integrará mediante efectivo, valores y bienes que el Estado aporte conforme a este ley y el numerario o bienes que la misma obtenga por otras aportaciones o por la realización de activos y la capitalización de ganancias.

La Corporación tendrá una cuenta de reservas y llevará en fondo separado las operaciones no autoliquidables.

Artículo 4.– La Corporación podrá establecer o suprimir sucursales, agencias y otras dependencias dentro o fuera del territorio nacional y nombrar agentes o corresponsales. Igualmente podrá contratar la prestación de servicios técnicos y de representación o funcionales, con los organismos internacionales de que forme parte la República Dominicana.

Capítulo II

GOBIERNO

Sección Primera

Del Presidente

Artículo 5.– El Presidente es la máxima autoridad de la Corporación y su representante legal, tendrá a su cargo la ejecución de los negocios y operaciones de la misma con plenas facultades para actuar en el ejercicio de dicha representación y contratar la adquisicón de derechos u obligaciones y exigir unos y otras ante toda clase de funcionarios y personas naturales o jurídicas.

Artículo 6.– El Presidente será designado por el Poder Ejecutivo por un término de cinco años y podrá ser siempre designado para un nuevo período.

Artículo 7.– El Presidente deberá ser un ciudadano dominicano de reconocida capacidad en las actividades económicas y que goce de solida reputación moral sin que le comprenda inhabilitación legal alguna o incompatibilidad por el desempeño de otro cargo o función pública o privada.

Artículo 8.– En caso de imposibilidad o ausencia temporal del Presidente, lo sustituirá el funcionario de la Corporación que éste designe con la aprobación de la Junta de Directores.

Si la imposibilidad o ausencia fueren definitivas se hará un nuevo nombramiento por el Poder Ejecutivo por término de cinco años.

Sección Segunda

De la Junta de Directores

Artículo 9.– La Junta de Directores estará integrada por siete miembros en la siguiente forma:

a) El Presidente de la Corporación lo será también de la Junta, ejercerá las funciones propias de esa presidencia incluso la decisión de su voto será preponderante en caso de empate;

b) El Secretario General de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación;

c) El Secretario de Estado de Finanzas;

d) El Secretario de Estado de Industria y Comercio;

e) El Gobernador del Banco Central; y

f) Dos miembros escogidos entre los directores de empresas privadas, quienes serán designados por el Poder Ejecutivo. Podrán siempre ser designados para un nuevo período.

Artículo 10.– Los miembros ex-oficio serán sustituidos en caso de imposibilidad, impedimento o ausencias temporales, por los respectivos funcionarios que los sigan en orden jerárquico. Si hay varios de la misma categoría lo sustituirá el que tenga más tiempo en su cargo.

Artículo 11.– Los miembros escogidos entre los directores de empresas privadas tendrán sustitutos que serán designados por el Poder Ejecutivo conjuntamente con aquellos y por igual término. Unos y otros deberán reunir los requisitos que se exigen para ser Presidente de la Junta de Directores. No obstante podrán desempeñar funciones privadas que no colidan con los intereses de la Corporación.

Artículo 12.– No podrán pertenecer a un mismo tiempo a la Junta de Directores los que sean parientes entre sí, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Las incompatibilidades se resolverán por prioridad de tiempo y mientras existan actuará el sustituto correspondiente.

Tampoco podrán ser nombrados como funcionarios o empleados de la Corporación los parientes en iguales grados de los miembros de la Junta de Directores.

Artículo 13.- El Presidente y los miembros de empresas privadas y los sustitutos de uno y otros desempeñarán sus cargos por el término señalado en esta ley y hasta que tomen posesión los que se designen para sustituirlos. Solamente podrán ser removidos mediante decisión de la Suprema Corte de Justicia y únicamente en los casos siguientes:

a) Cuando surgiere alguna inhabilitación legal o incompatibilidad;

b) Cuando fueren responsables de actos u operaciones fraudulentas, ilegales o evidentemente opuestas a los fines e intereses de la Corporación; y

c) Por condenación irrevocable en materia criminal o correccional. En caso de prisión, quedarán inhabilitados temporalmente para el ejercicio del cargo y serán sustituidos también temporalmente.

El procedimiento de remoción se iniciará por denuncia ante el Procurador General de la República, quien someterá el caso a la Suprema Corte de Justicia. La Corte comisionará inmediatamente a uno de sus jueces para que instruya el asunto en forma sumaria en un plazo no mayor de quince días y le rinda informe incluyendo los descargos del interesado y el escrito de defensa si lo hubiere. El expresado plazo podrá extenderse diez días más si hubiere que practicar pruebas y en ese caso se incluirá el resultado de las mismas en el informe. La Suprema Corte de Justicia podrá practicar nuevas pruebas; pero en todo caso decidirá si acoge o desestima la remoción, en un plazo no mayor de treinta días a partir del recibo del informe. La decisión de la Suprema Corte de Justicia no será objeto de recurso y se comunicará al interesado y a la Corporación dentro de los tres días de su fecha.

Artículo 14.- Las funciones de Presidente, serán retribuidas; las de los demás miembros serán honoríficas.

Artículo 15.- La Junta de Directores se reunirá en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes, para conocer de los asuntos que le sean sometidos por el Presidente o que alguno de los miembros propusiere y de cuanto se relacione con las atribuciones y deberes de la misma. A tales efectos, el Presidente hará la debida convocatoria.

Igualmente se convocará a sesión extraordinaria siempre que lo estime necesario el Presidente o lo soliciten dos de los miembros, expresando en uno y otro caso el motivo y objeto de la convocatoria.

Artículo 16.— El quorum en primera convocatoria quedará integrado por la asistencia de cuatro miembros siempre que uno de ellos sea el Presidente.

Si no se integrare el quorum en la primera convocatoria, el Presidente convocará nuevamente, con no menos de veinticuatro horas de antelación, haciendo constar dicha circunstancia y la sesión se efectuará en segunda o ulteriores convocatorias, si asistieren el Presidente y dos miembros o cuatro miembros sin el Presidente.

Artículo 17.— En las sesiones extraordinarias solamente podrán tratarse los asuntos incluidos en la orden del día objeto de la convocatoria.

Artículo 18.— Los acuerdos se tomarán por mayoría de los presentes y se harán constar en el libro de actas que firmarán todos los que integraren el quorum.

Artículo 19.— Son atribuciones y deberes de la Junta de Directores los siguientes:

a) Atender la organización interna de la Corporación y dictar los reglamentos que considere necesarios;

b) Fijar la política de crédito y los requisitos y modalidades de las operaciones señalando las actividades que deberán atenderse preferentemente y estableciendo los lineamientos generales de asignaciones, plazos, cuotas de amortización, tipo de interés y descuentos correspondientes. La Junta de Directores deberá aprobar todas las operaciones que excedan de cien mil pesos oro (RD$100,000.00). Las operaciones menores de esa suma y mayores de cincuenta mil pesos oro podrán ser aprobadas por los comités por delegación de la Junta de Directores. El Presidente, por delegación podrá aprobar las operaciones menores de cincuenta mil pesos;

c) Determinar los límites y directrices de las operaciones a realizar con cargo al fondo de operaciones no autoliquidables;

d) Votar el presupuesto anual y ejecutarlo, comprobando el balance general y el estado de ganancias y pérdidas dentro de los sesenta días de terminado el ejercicio económico. El año económico coincidirá con el año calendario.

e) Redactar la memoria anual y someterla junto con el balance general, el estado de ganancias y pérdidas y la ejecución del presupuesto, a la consideración del Poder Ejecutivo.

f) Determinar la aplicación de las ganancias, destinando no menos de un diez por ciento a vas. Según sea conveniente y de tiempo en tiempo, la Junta de Directores podrá efectuar transferencias de la cuenta de reservas al fondo de operaciones no autoliquidables o a la cuenta de capital; y del fondo de operaciones no autoliquidables, a la cuenta de reservas;

g) Fiscalizar el funcionamiento de la Corporación y disponer su inspección por lo menos una vez al año.

h) Crear los comités y los demás organismos necesarios para el ejercicio de las funciones de la Corporación y señalarles sus deberes y el límite de las facultades que les atribuya;

i) Aprobar los nombramientos de los funcionarios y altos empleados propuestos por el Presidente y otorgar los poderes y representaciones que sean necesarios;

j) Conocer anualmente los nombramientos de empleados hechos por el Presidente que no estén comprendidos en la facultad de aprobación prevista en la letra i) de este artículo y hacer las observaciones del caso;

k) Contratar técnicos nacionales o extranjeros y la prestación de los servicios señalados en el artículo 4 de esta ley;

l) Ejercer las demás facultades que no sean incompatibles con las funciones del Presidente y con las atribuciones hechas por el propio Presidente o por la Junta de Direcotres a los Comités y funcionarios ejecutivos.

Sección Tercera

Del Secretario

Artículo 20.– El Secretario tendrá a su cargo los libros de actas de la Junta de Directores y la custodia del sello de la Corporación. Firmará, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones que la corporación deba expedir y ejercerá las demás funciones propias del cargo y las que en él delegue el Presidente o la Junta de Directores.

El Secretario será nombrado y removido libremente por la Junta de Directores.

Capítulo III

Operaciones

Artículo 21.– La Corporación podrá hacer las operaciones siguientes:

a) Conceder préstamos directamente o por medio de bancos u otras entidades públicas o privadas, siempre que el importe del préstamo se destine a operaciones que contribuyan al fomento industrial del país, incluyendo la adquisición de bienes, refinanciación de deudas y gastos de operaciones de empresas industriales, que sean necesarios o convenientes a los fines de dicho fomento.;

b) Suscribir o adquirir acciones, obligaciones, bonos, participaciones y cualesquiera otros títulos o certificados de empresas industriales que favorezcan el desarrollo del país, y garantizar en todo o en parte y sin limitaciones de forma, las obligaciones, bonos y otros títulos emitidos por dichas empresas;

c) Actuar como fiduciario en la emisión de valores de empresas industriales, con o sin el aval de la Corporación y también en la de participaciones o certificados de sus propios activos y segregar a esos efectos o integrar los que no estuvieren previamente gravados o gravarlos conjuntamente o separadamente y pasarlos o no de garantía, mediante la creación de fideicomisos, fundaciones o fondos individualizados o no, limitando, reconociendo o ampliando la responsabilidad real o personal de la Corporación;

d) Emitir bonos de inversión, cédulas hipotecarias o prendarias y otros valores, con garantía o sin ella;

e) Descontar y redescontar o pignorar documentos de crédito, valores y bienes y obtener anticipos mediante obligaciones personales o con garantía;

f) Emitir certificados de participación nominativos o al portador, sobre la propiedad de bienes, valores o títulos propios o que reciba con ese objeto y tenga en su poder, cuidando de que cada certificado represente una parte alícuota en el conjunto de bienes, valores o títulos que constituya en fideicomiso o fundación a los fines y a los términos y condiciones de cada emisión;

g) Encargarse de la emisión, suscripción, negociación, adquisición pago y aseguramiento o agencia de acciones, obligaciones, bonos, participaciones y cualesquiera otros títulos o certificados de empresas industriales y asumir o no la representación de los tenedores de esos documentos o de cualesquiera otros emitidos o colocados por la Corporación;

h) Fomentar empresas industriales y participar en la creación de las mismas con aportaciones de capital, crédito o ambas cosas y ejercer o no la administración de esas u otras empresas industriales;

i) Conceder préstamos o créditos para desarrollo industrial no autoliquidables en principio y hacer aportaciones o concesiones de dinero, bienes o valores para la instalación y operación de plantas pilotos;

j) Adquirir activos de empresas industriales o aún las mismas empresas y disponer de unos y otras mediante el traspaso de acciones o certificados o la constitución de nuevas compañías o subsidiarias o por operaciones directas de venta, locación o colocación no gratuita;

k) Recibir, tomar en alquiler o comprar inmuebles, equipos, maquinarias, derechos y demás bienes que contribuyan al desenvolvimiento industrial y vender los mismos, darlos en alquiler o cederlos mediante cualquier otro contrato a título oneroso;

l) Recibir asignaciones o aportaciones que no envuelvan cargas a que estén compensadas con el importe de la donación;

m) Establecer, dirigir o patrocinar servicios destinados a la investigación, estudio y experimentación o divulgación de cuestiones relacionadas con la industria y crear o colaborar en la creación de establecimientos o laboratorios que sean útiles a esos fines o en la realización de estudios técnicos para el desarrollo de nuevas industrias; y

n) Cualesquiera otras operaciones que concuerden con el objeto de fomento industrial de la Corporación.

Artículo 22.— En la concesión de los préstamos la Corporación se abstendrá a estas reglas;

a) Si el plazo no fuere mayor de un año, el préstamo deberá comprobarse por escritura pública, o bajo firma privada en letra cambiaria o pagaré comercial.

b) Si el plazo fuere mayor de un año, el préstamo deberá tener garantía bastante de carácter prendario, con o sin desapoderamiento y la hipotecaria de todos los inmuebles comprendidos en la producción industrial de que se trate o de un fideicomiso total de la empresa que reciba el préstamo. Se considera suficiente la garantía cuando el préstamo no exceda del setenta por ciento (70%) del valor de la totalidad de las mismas o de los límites más estrictos que dentro del expresado máximo de un setenta por ciento (70%) se establezcan por la Junta de Directores.

c) La Corporación no podrá prestar a plazo mayor de veinte años, a no ser que existan circunstancias muy excepcionales de ventajas para el fomento industrial que aconsejen prescindir de dicho límite y nunca a más de treinta años.

Artículo 23.— A la Corporación le está prohibido hacer préstamos a una sola persona que excedan del diez por ciento (10%) del capital pagado y reservas de la Corporación, a no ser que el deudor establezca un fideicomiso de la empresa o la operación se haga mediante, la adquisición de bonos u obligaciones a colocar por la Corporación;

También le estará prohibido hacer préstamos al Presidente y a los demás miembros de la Junta de Directores o a compañías de que ellos formen parte y en general a todos los funcionarios y empleados de la Corporación.

Artículo 24.— No podrán ser admitidos como garantías de préstamos, los siguientes bienes:

a) Los que estuvieren gravados, a no ser que la Corporación obtuviere preferencia para el cobro por subrogación o consentimiento de los otros acreedores;

b) Los bienes proindivisos, a menos que todos los que tengan derecho consientan en el gravamen;

c) Los bienes en que la propiedad esté sujeta a condición resolutoria;

d) Los bienes litigiosos; y

e) Los bienes dados en usufructo, salvo concurrencia del nudo propietario y del usufructuario a la constitución de la garantía.

Artículo 25.— Toda obligación, contraída en favor de la Corporación llevará implícita la condición de que el préstamo se dará por vencido y será exigible en cualquiera de los casos siguientes:

a) Si la Corporación comprobare en cualquier momento falsedad de las informaciones proporcionadas por el deudor al formular la solicitud de préstamo;

b) Si el deudor se opusiere a la inspección de los bienes dados en garantía o se negare a proporcionar los informes que la Corporación le pida en relación con los mismos;

c) Si el deudor dejare transcurrir quince días sin dar aviso a la Corporación de los deterioros sufridos por los bienes dados en garantía, o de cualquier otro hecho susceptible de disminuir su valor, perturbar su posesión o comprometer su propiedad;

d) Si el deudor hubiere ocultado cualquier causa de resolución o rescisión de sus derechos o cualquier gravamen oculto sobre los bienes dados en garantía, en perjuicio de los derechos de la Corporación;

e) Si el deudor no satisface al vencimiento cualquiera de los pagos de capital o de intereses estipulados en el contrato de préstamo;

f) Si el deudor enajena en todo o en parte los bienes dados en garantía o constituye hipoteca, usufructo, anticresis, servidumbre, arrendamiento u otros derechos en favor de terceros, sobre los mismos, sin el consentimiento de la Corporación;

g) Si los bienes dados en garantía hubieren perecido o experimentado deterioro en tal manera que hayan venido a ser insuficientes para la garantía de la Corporación. Estas circunstancias se determinarán por peritos designados por la Corporación y el informe que ellos rindan deberá ser notificado al deudor para que en un plazo de quince días constituya un suplemento de hipoteca o una nueva garantía, a satisfacción de la Corporación. La referida notificación deberá expresar que el préstamo se tendrá por vencido si el deudor dejare transcurrir el plazo sin atender la misma.

h) Si el deudor destinare la cantidad recibida a fines diferentes de los indicados en el contrato o distrajere su importe, total o parcialmente, para otro objeto, o

i) Si resultare exigible y no fuere pagada cualquier otra obligación que el deudor tuviese con la Corporación.

Artículo 26.– En la adquisición de acciones y participación de empresas, la Corporación se atendrá a estas reglas:

a) Los Estatutos y Reglamentos sociales deberán ajustarse a los modelos aprobados por la Corporación y no podrán modificarse, sin la concurrencia y el voto favorable de la Corporación que también será necesario para las decisiones que impliquen alteraciones del capital o que afecten la cuantía y distribución de utilidades, o la constitución de reservas de la empresa;

b) En los casos en que la Corporación no tenga la mayoría de acciones o de participaciones, los accionistas o participantes mayoritarios deberán establecer por sí o a través del Estado, un fideicomiso de voto en favor de la Corporación o conferirle un control de la administración y de los demás órganos de actuación de la empresa que asegure la estabilidad estatutaria y de decisiones previstas en el inciso a) de este artículo;

c) La administración se ejercerá por la Corporación o por personas o entidades que ella o los otros accionistas o participantes designen sujetos a revocación por la Corporación;

Artículo 27.– Las ventas o disposiciones a cualquier título de empresas industriales y de las acciones o participaciones en las mismas que la Corporación efectúe, deberán ser identificadas e individualizadas de modo que no produzcan situaciones monopolísticas o de concentración de riqueza en pocas manos.

La Corporación establecerá formulas para la adquisición de participaciones por los obreros como dueños en las industrias de interés nacional, con igual objeto de evitar el factor de concentración arriba indicado y de contribuir por demás a la estabilidad político–social del país.

Artículo 28.– La colocación de acciones de compañías industriales será siempre nominativa y los tenedores sólo podrán disponer de ellas por título de herencia o legado o acudiendo a la Corporación para que las compre o las sustituya por certificados de participación en el capital de dichas compañías, a elección de la Corporación.

Artículo 29.– El monto de las emisiones que representen una acreencia contra la Corporación no podrá exceder los activos contra los cuales se emiten o los fondos generales o especiales a que las mismas se contraen. Dichas emisiones sumadas a los valores emitidos por terceros y avalados por la Corporación, tampoco podrán exceder los expresados activos o fondos y tendrán además un límite de veinte veces el capital y reservas de la Corporación.

Artículo 30.– Los bonos de inversión y demás valores que emita la corporación tendrán por sí la garantía específica de la Nación y sus intereses y los documentos que los representen están exentos de toda clase de impuestos, arbitrios, tasas o contribuciones.

Artículo 31.– Las cantidades que por razón del impuesto sobre beneficio, debieran pagar las empresas que forman parte del patrimonio de la Corporación o que ésta posea por medio de subsidiarias sin que su capital esté divido en menos de terceros, o en que éstos tengan menos de un cincuenta por ciento (50%) de dicho capital, serán retenidas o traspasadas a la Corporación e ingresados por ésta al fondo de operaciones no autoliquidables.

Artículo 32.– Las utilidades generales de la Corporación se determinarán al cierre de cada ejercicio económico y estarán

exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios, tasas o contribuciones.

Artículo 33.– La Corporación podra importar libre de derechos arancelarios, derechos consulares y cualquier recargo o tasa, los útiles, materiales, equipos y maquinarias que sean necesarios para su servicio. Las empresas que formen parte del patrimonio de la Corporación o que esta posea por medio de subsidiarias sin que su capital esté dividido en manos de terceros, también estarán exentas de derechos arancelarios, derechos consulares y de cualquier recargo o tasa, pero deberán ingresar o pagar una cantidad equivalente al importe de los mismos, en beneficio del fondo de operaciones no autoliquidables de la Corporación.

Artículo 34.– La Corporación gozará de franquicia telegráfica y postal tanto ordinaria como de certificados.

Capítulo IV

Inspección y Auditoría

Artículo 35.– La Corporación queda sujeta a la Inspección del Poder Ejecutivo que podrá efectuarla a traves de la Contraloría del Estado.

Artículo 36.– La Corporación tendrá un Auditor Encargado de la comprobación y fiscalización internas. El Auditor informará al Presidente y a la Junta de Directores sobre los resultados de su labor, por lo menos una vez al mes. Tambien podrá hacerlo directamente al Poder Ejecutivo, si lo estimare necesario.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.– Las disposiciones de la Ley Orgánica del Banco Agrícola de la República Dominicana sobre cédulas hipotecarias y formalidades para la concesión de los créditos hipotecarios serán aplicables a la Corporación, en cuanto no se opongan a lo establecido en esta ley.

Segunda.– Los préstamos de la Corporación gozarán de los privilegios legales, acordados al Banco Agrícola para la seguridad y reembolso de sus préstamos.

Tercera.– Las disposiciones generales de la Ley Orgánica del Banco Agrícola de la República Dominicana se entenderán extendidas a la Corporación, excepto en lo relativo a la retención de bienes raíces o al nombramiento de personal que pueda estimarse de confianza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.– Al objeto de integrar el capital de la Corporación, el Estado aportará a título gratuito, los bienes, empresas industriales, intereses y acciones de sociedades comerciales que sean o que lleguen a ser propiedad del Estado y que la Corporación le reclame por ser útiles a su objeto.

Segunda.–A igual finalidad el Banco Agrícola de la República Dominicana segregará de sus activos y transmitirá a título gratuito a la Corporación los bienes, empresas industriales, intereses y acciones de sociedades comerciales que sean de la propiedad del Banco y que la Corporación reclame por ser útiles a su objeto.

Tercera.– Las aportaciones y traspasos a que se contraen las dos disposiciones transitorias anteriores, se harán por los valores reales de los bienes aportados o traspasados previa liberación de los gravámenes que pesen sobre los mismos y el saneamiento y ajuste de los valores de libros. El Estado compensará los créditos y débitos entre instituciones públicas sobre dichos bienes y ordenará el pago de las acreencias legítimas exigibles, emitiendo valores públicos nacionales a perpetuidad y sin intereses, en la cuantía necesaria a tales efectos y a los de saneamiento y ajuste de los activos correspondientes. Una comisión formada por el Presidente de la Corporación, el Secretario General de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación, el Secretario de Estado de Finanzas, el Gobernador del Banco Central y el Administrador General del Banco Agrícola intervendrá la susodichas operaciones y fijará la cuantía de la emisión de valores y el monto de los mismos a percibir por el Banco Central y el Banco Agrícola de la República Dominicana, a los fines anteriormente señalados.

Cuarta.– La primera designación de los miembros de la Junta de Directores escogidos entre los directores de empresas privadas se hará nombrando a uno de ellos y a su sustituto por término de dos años, a fin de escalonar los sucesivos nombramientos.

Quinta.– La Corporación entregará al Estado el cincuenta por ciento (50%) de los dividendos a pagar durante el presente año económico, por razón de operaciones de las empresas aportadas por el propio Estado, hasta una cantidad no mayor de dos millones de pesos oro (RD$2,000.000.00).

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos años 119° de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauracion.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No.5910, del Consejo de Estado, sobre la enajenación de las parcelas Nos. 32, 33 y 48 del Distrito Catastral No.3, del Distrito Nacional.

EL CONSEJO DE ESTADO

NUMERO 5910

VISTO el artículo 14 de la Ley No. 344, del 29 de julio de 1943, restablecido por la Ley No. 5784, de fecha 3 de enero de 1962;

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 54 y 116 (transitorio) de la Constitución de la República,

RESUELVE

Artículo 1.— Enajenar las parcelas Nos. 32, 33 y 48 del Distrito Catastral No. 3 del Distrito Nacional, por no existir ya el motivo por el cual fueron expropiadas según lo dispuso el Decreto No. 8410, del 19 de julio de 1952, que declaró de utilidad pública dichas parcelas.

Artículo 2.— En consecuencia, se autoriza al Administrador General de Bienes Nacionales para que, en nombre y en representación del Estado Dominicano, publique el aviso correspondiente en la Gaceta Oficial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley No. 344, del 29 de julio de 1943, restablecido por la Ley No. 5784, de fecha 3 de enero de 1962.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

POR EL CONSEJO DE ESTADO:

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

NUMERO 5911

CAPITULO I

Sujeto y Objeto del Impuesto

Artículo 1.– Se establece un impuesto anual sobre las rentas obtenidas en la República Dominicana por toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país.

Artículo 2.– A los fines de la presente ley se establecen las siguientes categorías:

Primera Categoría: Renta proveniente de inquilinato y arrendamiento de inmuebles.

Segunda Categoría: Renta proveniente de capitales mobiliarios.

Tercera Categoría: Renta del ejercicio del comercio, la industria, la minería, la agricultura,la pecuaria, la explotación forestal y de toda otra actividad cuyo fin sea el de obtener lucro o beneficio.

Cuarta Categoría: Renta proveniente del ejercicio de profesiones liberales, artes y oficios y otras profesiones lucrativas.

Quinta Categoría: Rentas del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia.

Párrafo I.– Toda empresa que además de rentas de la tercera categoría involucre en sus negocios los de cualesquiera otras, se considerará contribuyente únicamente de la tercera categoría, declarando como de ésta la totalidad de sus rentas.

Párrafo II.- Todas las rentas obtenidas por las sociedades de capital se considerarán comerciales, y por consiguiente se regirán de acuerdo con la tercera categoría.

Párrafo III.- Las sociedades constituidas en el extranjero se presumirán, salvo prueba en contrario, como compañías por acciones, y las que se demuestre que no tienen este carácter se considerarán, por afinidad o similitud, dentro de la clasificación establecida en nuestro Código de Comercio, y estarán regidas, por tanto, por las disposiciones respectivas de la presente ley.

CAPITULO II

Fuente de las Rentas

Artículo 3.- En general, y sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, son renta de fuente dominicana aquellas que provienen de capitales, bienes o derechos situados, colocados o utilizados económicamente en la República Dominicana; las obtenidas en la realización en el país de actividades comerciales, industriales, agropecuarias, mineras y similares o del trabajo personal, ejercicio de profesiones u oficios, así como de préstamos en general, inquilinato y arrendamiento, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio o residencia de la persona, entidad, empresa, dueños u otras partes que intervengan en las operaciones ni el lugar de celebración de los contratos.

Párrafo.- Están también sujetas a este impuesto en la categoría correspondiente, las rentas provenientes de actividades realizadas ocasionalmente en el país, y las provenientes de actividades ocasionales realizadas en el extranjero por personas residentes en la República.

Artículo 4.- Son igualmente de fuente dominicana las rentas del trabajo personal, como sueldos, remuneraciones y toda clase de emolumentos que el Estado pague a sus representantes oficiales en el extranjero o a otras personas a quienes se encomienden funciones fuera del país.

Artículo 5.- Las rentas derivadas de créditos garantizados con derechos reales serán consideradas como producidas en la República Dominicana si los bienes afectados están ubicados en el territorio nacional.

Artículo 6.– Los intereses de bonos se considerarán íntegramente como producidos en la República Dominicana cuando la entidad emisora esté constituida o radicada en la República, sin tener en cuenta el lugar en que estén ubicados los bienes que garanticen el préstamo.

Artículo 7.– El contribuyente o responsable está obligado a probar el origen de las transferencias de fondos del o al exterior cuando se considere necesario para la liquidación o fiscalización del impuesto. Si la prueba presentada por el contribuyente o responsable no es satisfactoria, la Dirección podrá considerar que existe vinculación económica y que los fondos provienen de beneficios de fuente dominicana.

Artículo 8.– La determinación de las rentas que se deriven de la exportación e importación, se regirá por las siguientes disposiciones:

a) Las rentas provenientes de la exportación de mercancías producidas, manufacturadas, semimanufacturadas, o adquiridas en el país, se reputarán totalmente producidas en la República Dominicana, aunque tales operaciones se realicen por medio de filiales, sucursales, representante, agentes de compra u otros intermediarios de personas o entidades del extranjero. La renta neta se determinará en este caso deduciendo del precio de venta al por mayor en el lugar de destino, el costo de tales mercancías, los gastos de transporte y seguro hasta dicho lugar, la comisión y gastos de venta y los gastos efectuados en la República en cuanto sean necesarios para obtener las rentas gravadas. Cuando no se fijare precio o el declarado fuere inferior al precio de venta al por mayor vigente en el lugar de destino, se reputará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación económica entre el exportador del país y el importador del exterior. En este caso, a los efectos de determinar el valor de los productos exportados, se tomará por base el precio al por mayor en el lugar de destino.

b) Las rentas que obtienen los exportadores del extranjero por la simple introducción de sus productos en la República, se considerarán de fuente extranjera.

Sin embargo, cuando el precio de venta para el comprador del país sea superior al precio al por mayor vigente en el lugar de origen, más los gastos de transporte y seguro hasta el territorio nacional, se reputará, salvo prueba en contrario, que existe

vinculación economica entre el comprador del país y el exportador del exterior. En este caso la diferencia entre ambos precios constituirá una renta de fuente dominicana de cuyo impuesto el comprador y el exportador serán solidariamente responsables.

En los casos en que de acuerdo con la disposición anterior, corresponda aplicar el precio al por mayor vigente en el lugar de origen y éste no fuere de público y notorio conocimiento o existieran dudas sobre si corresponde a igual o análoga mercadería que la importada o cualquiera otra circunstancia que dificulte la comparación, se tomará como base para el cálculo de las utilidades de fuente dominicana, los coeficientes de resultados obtenidos por empresas independientes que se dediquen a idéntica o similar actividad. A falta de idéntica o similar actividad, la Dirección aplicará el porcentaje neto que la misma establezca a base de negocios que presenten analogías con aquel de que se trate.

Artículo 9.– Las rentas que obtengan las compañías de transporte constituidas en el país serán consideradas como originadas en la República cualesquiera que sean los puertos entre los cuales se efectúe el tráfico.

Artículo 10.– Se presumirá que las rentas netas mínimas que obtengan las compañías de transporte en operaciones efectuadas desde esta República a otros países, son de fuente dominicana y equivalentes al 10 o/o (diez por ciento) del monto bruto a que alcancen los fletes por pasajes y cargas.

Párrafo.– Los agentes o representantes en la República de tales compañías serán solidariamente responsables con ellas del pago del impuesto y estarán obligados a presentar declaración jurada y otras informaciones en la forma y plazo que establezcan la ley y los reglamentos o la Dirección.

Artículo 11.– Se presumirá que las compañías de seguros radicadas o no en el país obtienen un beneficio neto mínimo de fuente dominicana, equivalente al 10 o/o (diez por ciento) de las primas brutas cobradas por ellas para el seguro de personas, bienes o empresas radicadas en el país.

Artículo 12.– Las compañías nacionales de transporte o de seguro, sólo serán objeto de las presunciones establecidas en los

artículos 10 y 11 de esta ley, cuando no se pudiere determinar la renta neta obtenida.

Artículo 13.— Para los fines de la presente ley se presumirá que la renta neta mínima de fuente dominicana obtenida por los productores, distribuidores o intermediarios, de películas cinematográficas extranjeras exhibidas en el país, son equivalentes al 15 o/o (quince por ciento) del precio que les sea pagado, cualquiera que sea la forma en que se opere la retribución.

Artículo 14.— Para los fines de la presente Ley se presumirá que la renta neta mínima de fuente dominicana que obtengan las empresas de comunicaciones son equivalentes a un 10 o/o (diez por ciento) del monto de sus ingresos brutos.

CAPITULO III

De la determinación de la renta neta
Normas Generales.

Artículo 15.— Para determinar la renta neta de cualquiera de las categorías, sin perjuicio de lo establecido en cada una de ellas, se restarán de la renta bruta los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla y conservarla, en la forma dispuesta por esta Ley y los Reglamentos.

Artículo 16.— No se restarán los gastos ordinarios por entradas, ingresos o rentas no sujetas a este impuesto, ni los gastos, salidas o egresos que constituyan inversiones de capital o se originen en éstas, salvo cuando se computen como costo de un bien al ser éste enajenado.

Artículo 17.— Cuando se incurra en gastos con el fin de obtener, mantener o conservar rentas gravadas y exentas, la deducción se hará en la proporción respectiva en que se hubiere efectuado tales gastos. Dichos gastos deducibles deberán ser efectivamente realizados y no exceder de lo que usualmente corresponda.

Artículo 18.— La determinación del valor de los bienes en existencia, en las categorías que proceda, se computará de conformidad con uno de los siguientes métodos:

a) Costo de producción o de adquisición; o

b) Precio de venta menos gastos de venta.

Párrafo I.— Cuando se trata de inmuebles, el valor de éstos se inventariará al precio de compra o valor de construcción efectivamente pagado.

Párrafo II.— Otros métodos de evaluación distintos a los expresados pueden ser aceptados por la Dirección, siempre que estén acordes con las modalidades del negocio y no ofrezcan dificultades para la fiscalización. El método elegido no podrá ser cambiado sin expresa autorización de la Dirección a partir de la fecha que ésta fije.

Párrafo III.— En la valoración de los inventarios no se admitirán deducciones en forma global, acordadas para hacer frente a cualquier contingencia.

Artículo 19.— La renta neta obtenida en la venta de bienes se determinará deduciendo del precio de venta el precio de compra, el importe de las mejoras efectuadas para conservar o aumentar su valor y el de los gastos necesarios, siempre que no hubieren sido deducidos ya en anteriores ejercicios fiscales. En todos los casos, al precio de costo se le restarán los importes deducidos en dichos ejercicios fiscales por concepto de depreciación.

Artículo 20.— Las rentas provenientes de revalorizaciones de bienes del activo o de cualquiera otra naturaleza, no están sujetas a este impuesto. De la misma manera, no se admitirán las pérdidas que tengan su origen en devaluaciones.

Artículo 21.— Las pérdidas extraordinarias que por causas fortuitas, de fuerza mayor o por delitos sufran los bienes productores de rentas, serán deducibles en cuanto no estuvieren cubiertos por seguro o indemnización. El costo de las pérdidas se determinará deduciendo del valor de los bienes el monto de las depreciaciones que se hubiesen efectuado.

Artículo 22.— No serán deducibles las sumas empleadas en adquisición de bienes y mejoras de carácter permanente, y demás gastos vinculados con dichas operaciones, tales como costas judiciales, impuestos y tasas, derechos sobre documentos, registros y transcripciones, y otros análogos, que entren a formar

parte del costo del bien, salvo cuando las mismas se computen como costo de éste al ser enajenado.

Artículo 23.– No se admitirá ninguna deducción cuando no existan documentos o comprobantes fehacientes, salvo que por su naturaleza resulte obvia la realización del gasto.

Artículo 24.– La deducción de los gastos se efectuará de la renta bruta del bien que los origina. En ningún caso se admitirá la imputación contra un bien determinado de otra categoría, si dicha erogación no tuvo por objeto obtener, mantener o conservar rentas del referido bien.

CAPITULO IV

Imputación de Rentas y Gastos al Año Fiscal

Artículo 25.– Los contribuyentes de este impuesto imputarán sus rentas al año fiscal que comienza el 1ro. de enero y termina el 31 de diciembre. En lo que respecta a la tercera categoría regirán las siguientes normas:

a) Cuando su ejercicio termine en fecha distinta al 31 de diciembre, las rentas obtenidas se imputarán al año fiscal correspondiente al cierre de dicho ejercicio;

b) Cuando no se contabilicen las operaciones se reputará que el ejercicio coincide con el año fiscal, salvo disposición contraria de la Dirección, la cual podrá, teniendo en cuenta la naturaleza de la explotación u otras circunstancias especiales, fijar la fecha del cierre del ejercicio;

c) La imputación de las rentas obtenidas en el año fiscal se hará sobre la base del método seguido habitualmente por la empresa, explotación o negocio; ya sea el de lo percibido o el de lo devengado, el cual no podrá ser cambiado sin expresa autorización de la Dirección, previa solicitud del interesado hecha tres (3) meses antes, por lo menos, de la fecha en que haya de efectuarse el cambio.

No obstante lo expresado, la Dirección, en los casos en que lo estime conveniente, y tomando en consideración la naturaleza de

las actividades de la empresa, podrá establecer otros métodos de imputación.

Párrafo I.– Para la imputación de los gastos regirán también las disposiciones anteriores.

Párrafo II.– Ninguna empresa podrá efectuar el cambio de la fecha de cierre de su ejercicio comercial sin una autorización expresa de la Dirección General, la cual deberá ser solicitada por escrito un (1) mes antes, por lo menos de dicha fecha de cierre.

Artículo 26.– Las demás rentas se imputarán al año fiscal en que hubieren sido percibidas, excepto las correspondientes a la primera categoría, los cuales se imputarán al año fiscal en que hubieran sido devengadas.

CAPITULO V

Declaraciones Juradas.

Plazos, Forma y Pago

Artículo 27.– Las personas naturales contribuyentes de este impuesto presentarán la declaración del conjunto de las rentas obtenidas en el ejercicio fiscal anterior, y pagarán el impuesto correspondiente a más tardar el 31 de marzo de cada año.

Artículo 28.– Las empresas o explotaciones que realicen actividades gravadas en la tercera categoría deberán presentar su declaración jurada de conformidad con las siguientes normas:

a) Las compañías por acciones, en comandita por acciones, sociedades de capital constituidas en el extranjero cualquiera que sea su denominación, dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la fecha del cierre de su ejercicio anual;

b) Negocios de único dueño, sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, de hecho y en participación, sucesiones indivisas, que tengan contabilidad organizada y practiquen balances anuales en forma comercial, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de cierre de su ejercicio anual;

c) En el caso de que los mismos no tengan contabilidad organizada ni practiquen balances anuales en forma comercial, a más tardar el 15 de marzo de cada año.

CAPITULO VI

Excenciones Generales

Artículo 29.– No estarán sujetas a este impuesto:

a) Las rentas del Estado, del Distrito Nacional, de los Municipios, de los Distritos Municipales, y de los establecimientos públicos.

b) Las rentas de las Cámaras de Comercio, Agricultura e Industria;

c) Las rentas que obtengan las personas físicas o jurídicas que se dediquen a editar libros dentro del territorio nacional, tanto en la producción, cuanto en la distribución y venta de las publicaciones que editen;

d) Las rentas percibidas por autores, por derechos de esta calidad, así como las que provengan de libros editados dentro del territorio nacional, siempre que sus obras estén registradas en el Registro de la Propiedad Intelectual;

e) Las rentas y utilidades de las entidades mutualistas y cooperativistas.

f) Las rentas de las instituciones religiosas, cuando se obtengan por razón directa del culto;

g) Las rentas que obtengan las entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, educación, y los centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y de cultura física, estética e intelectual, siempre que tales rentas y el patrimonio social se destinen a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los asociados.

Quedan excluidas de esta excención aquellas entidades organizadas jurídicamente como compañías por acciones u otra forma comercial así como aquellas que obtienen sus recursos, en todo o en parte, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;

h) Las rentas de las asociaciones deportivas y de cultura física y de los inmuebles de su propiedad en que funcionan sus campos

de deportes e instalaciones inherentes a sus propósitos, siempre que tales asociaciones no persigan fines de lucro o exploten o autoricen juegos de azar;

i) Los beneficios de cualquiera naturaleza que obtengan la Cruz Roja Dominicana, la Liga Dominicana contra el Cáncer y otras instituciones similares;

j) Los beneficios de los títulos públicos, bonos, cédulas, etc que por leyes especiales gozaren de excención;

k) Los beneficios o ingresos de los representantes diplomáticos o consulares extranjeros acreditados en el país, de acuerdo a la reciprocidad o a los tratados internacionales;

l) Las ganancias de capital;

ll) Los intereses percibidos por concepto de cuentas de ahorros y depósitos a plazo fijo en Bancos Comerciales, de ahorro y otras instituciones de crédito radicadas en la República Dominicana siempre y cuando no sobrepasen de un seis por ciento anual.

CAPITULO VII

Primera Categoría

Rentas Provenientes de Inquilinato y Arrendamientos de Inmuebles

Artículo 30.— Están sujetas al pago del impuesto en esta categoría, salvo las excepciones establecidas en la presente Ley, las rentas netas totales que toda persona física o jurídica obtenga de operaciones de alquiler y arrendamiento de inmuebles.

Párrafo.— Las rentas de las sucesiones indivisas serán consideradas como obtenidas por una sola persona mientras dure el estado de indivisión. Sin embargo, si hubiere acuerdo entre el cónyugue superviviente, los herederos y legatarios, éstos, podrán, previo aviso a la Dirección, declarar individualmente las rentas que les corresponden de la sucesión indivisa, conjuntamente con sus otras rentas.

Artículo 31.— Se considerarán rentas gravadas en esta categoría, sin que esta enumeración signifique limitación alguna:

a) El producto, en dinero o en especie, de la locación y sublocación de inmuebles urbanos y rurales;

b) El valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios e inquilinos, que constituyen un beneficio para el propietario, en la parte en que éste no estuviere obligado a resarcir;

c) Las contribuciones que gravan al propietario y las reparaciones efectuadas en los inmuebles, que haya tomado a su cargo el inquilino o arrendatario;

d) El importe pagado por los inquilinos y arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que administre el propietario;

e) El valor locativo de los inmuebles cedidos en uso, habitación o usufructo, gratuitamente o a un precio no determinado, siempre que la cesión no se haga a ascendientes o descendientes directos. Tampoco estará gravado dicho valor locativo cuando la indicada cesión sea de inmuebles rurales, hecha a campesinos o agricultores sin recursos;

f) Cualquier renta en dinero o en especie que obtengan los inquilinos o arrendatarios de los inmuebles urbanos o rurales que subalquilen o subarrienden;

g) El producto de arrendamientos de terrenos rurales;

h) Cualesquiera otras rentas, utilidades, ganancias, etc., no exceptuadas expresamente por esta Ley, que se originen en operaciones o actividades relacionadas con el inquilinato y arrendamiento de inmuebles.

Artículo 32.– Los que perciban arrendamientos en especie delcararán como renta el valor de los productos recibidos. Este valor será aquel en que se vendan dichos productos en el año fiscal, o en su defecto, el precio de plaza al final del mismo. En este último caso la diferencia entre el precio de venta y el precio de plaza citado, se computará como renta o pérdida del año en que se realizare la venta.

Artículo 33.– Los compradores de inmuebles a plazos aun cuando no hubiesen obtenido el título definitivo se considerarán propietarios para los efectos de esta ley.

Artículo 34.— En los casos de inmuebles cedidos gratuitamente o por un precio inferior al arrendamiento que rija en la zona en donde los mismos estén ubicados, la Dirección podrá estimar de oficio la renta correspondiente.

Artículo 35.— De las rentas derivadas en la explotación de inmuebles se admitirá deducir:

a) Un diez por ciento (10 o/o) de la renta bruta de los mismos, equivalente a los gastos presuntos, en los que se consideran incluidos los de mantenimiento por todo concepto (reparaciones, gastos de administración, primas de seguro, etc.);

b) Un dos por ciento (2 o/o) del valor de los inmuebles en concepto de depreciación. El poder Ejecutivo podrá autorizar la deducción de depreciaciones aceleradas, cuando esa medida contribuya a promover la construcción de viviendas; y

c) Los intereses de deudas concertadas para construir, reconstruir o mejorar inmuebles productores de rentas.

No obstante, en los casos de edificios de apartamientos, en los cuales se presten servicios colectivos a los inquilinos, tales como servicios de ascensores, conserjes, agua, luz u otros, la Dirección General, previa comprobación, podrá admitir la deducción de gastos a base de comprobantes, más los gastos señalados en las letras b) y c) de este artículo.

Artículo 36.— Los alquileres que se hubiesen declarado por su condición de devengados y que al hacer la declaración del año siguiente hayan resultado incobrables, se deducirán en tal declaración.

Artículo 37.— No están sujetas al impuesto de esta categoría:

a) Las rentas que provengan de inmuebles cuyo avalúo en conjunto, incluyendo mejoras, no exceda de RD$1,000.00. Si el avalúo excediere de dicha suma, el impuesto se pagará sobre la totalidad de la renta que corresponda a los referidos inmuebles.

b) Las rentas derivadas del valor locativo del inmueble utilizado personalmente por su propietario.

Art. 38.– Se instituyen como Agentes de Retención, sin perjuicio de los que la dirección o Reglamentos de esta Ley señalen, cuando sea oportuno, las personas o entidades que acrediten o giren a terceros radicados en el extranjero sumas constitutivas de rentas, provenientes de operaciones o actividades relacionadas con el inquilinato o arrendamiento de inmuebles, o que las perciban por cuenta de dichos terceros. Si éstos no tienen apoderados o Administrador General en la República, los Agentes deberán retener y pagar el impuesto correspondiente.

Artículo 39.– El impuesto de esta categoría se liquidará y pagará con una tarifa de un seis (6 o/o) por ciento.

Artículo 40.– Cuando la persona natural titular de renta correspondiente a la Primera Categoría resida habitualmente en el extranjero, pagará el impuesto correspondiente a base de una tarifa única de un quince por ciento (15 o/o).

Se presume que el contribuyente reside habitualmente en el extranjero, cuando en los tres últimos años fiscales, incluido el año correspondiente a la declaración que se formula, hubiese permanecido fuera de la República, continuada o alternativamente, más de dieciocho (18) meses contados desde el día posterior al de su salida hasta el día anterior al de su regreso.

No serán aplicables las precedentes disposiciones a las personas ausentes de la República en funciones diplomáticas o consulares o en misión por disposición del Gobierno Dominicano o detenidas por causa de fuerza mayor debidamente justificada.

Párrafo I.– Cuando el propietario de inmuebles rurales tenga su domicilio o resida en el extranjero, el arrendatario queda obligado a declarar el monto del arrendamiento y a retener y pagar el impuesto correspondiente el cual se establece para estos casos exclusivamente en un (50 o/o), por ciento único, en metálico y no en productos, sobre el monto de dichos beneficios.

CAPITULO VIII

Segunda Categoría

Rentas de Capitales Mobiliarios

Artículo 41.– Están sujetas al pago del impuesto en esta Categoría las rentas netas totales que toda persona física o jurídica obtenga de las siguientes operaciones:

a) Las resultantes de los intereses de préstamos garantizados con derechos reales;

b) Las resultantes de los intereses de los capitales invertidos en las empresas comerciales, industriales, agropecuarias y forestales, siempre y cuando no provengan del capital de aportación a los fines de constitución, de instalación o de ampliación de dichas empresas, ni correspondan a préstamos que escedan al capital suscrito y pagado;

c) Los intereses de títulos públicos, cédulas, bonos, letras o vales de tesorería, fianzas y créditos en dinero, y de valores privilegiados o quirografarios, consten o no en escritura pública, así como toda suma que sea el producto de la locación o depósito del capital, cualquiera que fuere su denominación o forma de pago;

d) Las rentas que provinieren de la locación de cosas muebles y derechos, las regalías y los subsidios periódicos;

e) Los ingresos que se perciban por concepto de transferencia de marca de fábrica, patentes de invención, derechos de autor y otros derechos similares;

f) Las sumas recibidas en pago de obligaciones de no hacer, y por el abandono o no ejercicio de una actividad. Sin embargo, cuando la obligación sea de no ejercer las actividades a que se refiere la Tercera Categoría, las rentas o ingresos estarán gravados conforme a las disposiciones de esta última;

g) Las derivadas de acciones u otros títulos similares de sociedades constituidas en la República Dominicana, cualquiera que sea la denominación de esas acciones o títulos sin tener en cuenta el origen de los fondos con que se efectúe su pago.

consistan éstos en reservas anteriores, rentas exentas de impuesto u otras. Se entiende por dividendos para los efectos de esta Ley, cualquier distribución que aun sin denominarse dividendo sea hecha por una empresa a sus accionistas o asociados a base de beneficios, tales como anticipos concedidos por la empresa y devoluciones a los accionistas de valores que recibiera la empresa a título de préstamos hechos por los socios en cuenta corriente. No se considerarán dividendos, ni serán gravables por este concepto, las distribuciones hechas a los socios hasta el monto de sus aportaciones con motivo de la liquidación de la sociedad, ni los llamados "Dividendos" de las compañías de seguro que respondan a un simple ajuste de las primas pagadas.

Artículo 42.— También estarán gravadas en esta Categoría, las rentas obtenidas por las sucesiones indivisas, mientras dure el estado de indivisión. Sin embargo, si hubiese acuerdo entre el cónyuge superviviente, los herederos y legatarios, éstos podrán, previo aviso a la Dirección General, declarar individualmente las rentas que les correspondan de la sucesión indivisa, conjuntamente con sus otras rentas.

Artículo 43.— Cuando no se determine en forma expresa la existencia del interés, o al tipo de éste, se presumirá el diez por ciento (10 o/o) anual.

Artículo 44.— Los gastos deducibles son aquellos realmente necesarios para obtener, mantener o conservar la renta gravada. Estas deducciones, debidamente comprobadas, no podrán exceder del diez por ciento (10 o/o) del monto total de los ingresos anuales.

Artículo 45.— El impuesto de esta categoría se liquidará y pagará con una tarifa de un ocho por ciento (8 o/o). Sin embargo, cuando la renta gravada en esta categoría sea girada o acreditada al exterior será gravada con una tarifa única de un dieciocho por ciento (18 o/o) sujeto a retención.

CAPITULO IX

Renta del ejercicio del comercio, la industria, la minería, la agricultura,

la pecuaria, la explotación forestal y
de toda otra actividad cuyo fin sea el
de obtener lucro o beneficio.

Artículo 46.– Son rentas de la tercera categoría:

a) Las derivadas del comercio, de la industria, la agricultura, la pecuaria, la explotación forestal, la minería y las de toda otra actividad cuyo fin sea la obtención de beneficio o lucro;

b) Las derivadas de actividades de comisionistas, rematistas, consignatarios u otras actividades similares;

c) Las participaciones en los beneficios de cualquiera clase de sociedades que tengan por objeto la realización de algún lucro.

Cuando se ejerca alguna actividad comercial que involucre el ejercicio de una profesión liberal, como clínica, farmacia, empresa de construcción u otras explotaciones o establecimientos similares, las rentas que se obtengan se considerarán de esta categoría.

Artículo 47.– Cuando una persona o empresa, o grupo de personas, realicen su actividad al través de sociedades o empresas de las gravadas en la tercera categoría y las operaciones de unas y otras sean conexas y estén controladas o financiadas por aquellas, podrá considerarse existente un Conjunto Económico. En el caso de que éste sea determinado, y para los fines de esta ley se reunirán en una sola declaración los resultados de las distintas empresas o explotaciones.

A estos fines la empresa o persona que en último análisis resulte ser propietaria del capital en una magnitud tal que le permita disponer todos los movimientos entre sociedades, al influjo de una voluntad única, será la titular del conjunto económico representado por las diversas empresas en que el capital se haya invertido.

Artículo 48.– Las empresas que habitualmente se dediquen a la compra y venta de inmuebles, determinarán la renta proveniente de sus operaciones de la siguiente manera:

Del valor que se atribuya al inmueble cuando se enajena, se deducirá el valor del inmueble al entrar en el patrimonio del

contribuyente, aumentando en el costo de las mejoras introducidas y disminuido en el monto a que ascienden las amortizaciones, a base de un dos por ciento (2 o/o) anual del valor de las mejoras, a partir de la fecha de adquisición o construcción de dicho inmueble.

Del resultado así obtenido sólo se gravará la proporción correspondiente al período comprendido entre el 1ro. de enero de 1951 y la fecha de enajenación del inmueble.

Párrafo.— Cuando no fuere posible determinar el monto de los beneficios netos de las personas o empresas que se dediquen a las actividades agropecuarias y forestales, el impuesto se pagará con base a la estimación que conforme a la producción, precios y otros indices generales obtenga al efecto la Dirección General. Si no fuere posible obtener esos elementos de juicio, se presumirá que son equivalentes a un diez por ciento (10 o/o) del valor de los inmuebles, incluyendo mejoras y contenencias. Este avalúo será el que hubiere determinado el Catastro Nacional, o en su defecto el que la Dirección General u otro organismo oficial determine como más ajustado a la realidad.

Artículo 49.— Se admitirá deducir en concepto de amortización de edificios y construcciones, durante el tiempo que éstos sean aprovechables el dos por ciento (2 o/o) del valor de los mismos. Sin embargo, los reglamentos podrán establecer otros tipos de depreciación más acordes con la naturaleza de los inmuebles.

Artículo 50.— En el caso de empresas de construcción y otras similares, en que las operaciones generadoras de la renta afectan más de un período fiscal, el resultado bruto de las mismas deberá ser declarado de conformidad con alguno de los siguientes métodos, a opción del contribuyente.

a) Asignando a cada período fiscal la renta bruta que resulte de aplicar sobre los importes cobrados el porcentaje de ganancia bruta previsto por el contribuyente para toda la obra. Este porcentaje podrá ser modificado para la parte correspondiente a ejercicios aún no declarados, en casos de evidente alteración de lo previsto al contratar. Estos porcentajes estarán sujetos a la aprobación de la Dirección.

b) Asignando a cada período fiscal la renta bruta que resulte de deducir del importe a cobrar por todos los trabajos

realizados en el mismo, los gastos y demás elementos determinantes del costo de tales trabajos. Cuando la determinación de la renta en esta forma no fuere posible o resultare dificultosa, podrá calcularse la utilidad bruta contenida en lo construido, siguiendo el procedimiento indicado en el inciso a) u otro análogo.

Párrafo I.– En el caso de una obra que afecte dos períodos fiscales, pero cuya duración total no exceda de un año, el resultado podrá declararse en el ejercicio en que se termina la obra. La Dirección, si lo considerare justificado, podrá autorizar igual tratamiento para aquellas obras que duraren más de un año, cuando tal demora sea motivada por circunstancias especiales, como huelga, falta de material y otras similares.

Párrafo II.– En los casos previstos en los incisos a) y b) la diferencia de más o de menos que se obtenga en definitiva, resultante de comparar la utilidad bruta final de toda la obra con la establecida mediante alguno de los procedimientos indicados en dichos incisos, deberá computarse en el año en que la obra sea concluida.

Párrafo III.– Elegido un método, deberá ser aplicado a todas las obras y trabajos que el contribuyente realice, y no podrá ser cambiado sin previa autorización expresa de la Dirección, la que determinará a partir de qué período fiscal futuro podrá cambiarse el método elegido.

Artículo 51.– Se admite la deducción de los gastos, debidamente comprobados, que efectúen las empresas para obtener, mantener y conservar las rentas gravadas. Cuando se incurra en los gastos con el fin de obtener, mantener y conservar rentas gravadas y exentas, la deducción se hará en la proporción respectiva en que se hubiesen hecho tales gastos.

Párrafo I.– Las pérdidas que sufrieren las empresas en los ejercicios económicos que se inicien a partir de la vigencia de la presente ley serán deducibles de la utilidades obtenidas en los ejercicios inmediatos siguientes al de las pérdidas, sin que esta compensación se extienda más allá de tres ejercicios.

Párrafo II.– La compensación de pérdidas admitida en el párrafo anterior sólo se aceptará cuando las mismas no se hubiese deducido de otras rentas netas obtenidas por el

contribuyente en el mismo ejercicio, a los efectos de la determinación de la renta neta global gravable por el impuesto complementario.

Artículo 52.– Se consideran incluidos en los gastos previstos en el artículo anterior y serán por tanto deducibles:

a) Los intereses de deudas y los gastos que ocasionen la constitución, renovación o cancelación de las mismas;

b) Los impuestos y tasas que graven los bienes que producen rentas. Cuando los impuestos y tasas considerados como gastos necesarios para obtener, mantener y conservar las rentas gravadas se hayan pagado con recargos, éstos serán también deducibles;

c) Las primas por seguros que cubran riesgos sobre bienes que producen beneficios;

d) Los daños extraordinarios que, por causas fortuitas, de fuerza mayor o por delitos de terceros, sufran los inmuebles productores de beneficios, se considerarán perdidas, pero éstas deberán ser disminuidas hasta el monto de los valores que por concepto de seguros o indemnización perciba el contribuyente;

e) Las donaciones al Estado, al Distrito Nacional, a los Municipios, a los Distritos Municipales, a los organismos autónomos del Estado y de los Municipios y a otras instituciones de interés social;

f) Las amortizaciones por desgaste y agotamiento y las pérdidas por desuso, justificables, de la propiedad utilizada en la explotación según fijen los reglamentos.El Poder Ejecutivo podrá autorizar métodos de depreciación acelerada para inversiones destinadas a promover el desarrollo económico.

g) Las pérdidas provenientes de malos créditos, en cantidades justificables, según se establece en los Reglamentos;

h) Los gastos de organización. Estos gastos se amortizarán en un plazo no menor de cinco (5) años.

i) Los gastos en favor del personal por asistencia médica, ayuda escolar, subsidios, o sociedades deportivas, y en general,

todo gasto de asistencia a sus empleados y obreros. También se deducirán los aguinaldos y otras erogaciones semejantes, siempre que sean razonables, y que se paguen al personal dentro de los plazos en que deba presentarse la declaración jurada correspondiente al ejercicio;

Sin embargo, cuando se haga partícipe de los beneficios de las empresas al personal de las mismas, la suma a distribuir por ese concepto deberá deducirse después de hecha la provisión para cubrir el Impuesto sobre la Renta.

j) Las pensiones y jubilaciones que se paguen a empleados, siempre y cuando a juicio de la Dirección sean justificadas y obedezcan a un plan establecido por la empresa en provecho de aquellos;

k) Los intereses de los capitales invertidos por los accionistas en la empresa, siempre y cuando no provengan del capital de aportación a los fines de constitución, de instalación o de ampliación de dicha empresa y no correspondan a préstamos en exceso al capital suscrito y pagado de la sociedad de capital.

Artículo 53.— No podrán hacerse las siguientes deducciones:

a) Los gastos personales del dueño, socio o representante;

b) Las sumas retiradas por el dueño, socio o accionista a cuenta de ganancias, o en calidad de sueldo, remuneraciones, gratificaciones u otras compensaciones similares; ni las remuneraciones o sueldos del cónyuge o pariente del dueño, socio o accionista.

Sin embargo, si en el caso de los accionistas o del cónyuge o pariente del dueño socio o accionista, se demuestra una real prestación de servicios, se admitirá la deducción por una retribución que no sea mayor de la que se pagaría a terceros por servicios similares;

c) Las remuneraciones pagadas a Directivos, oficiales o empleados en los casos en que no exista una efectiva prestación de servicios;

d) Las remuneraciones pagadas a oficiales o empleados cuando excedan de las que usualmente se pagan por servicios

similares, o por no justificarse su monto conforme a la naturaleza o importancia de la empresa, o porque no guarden relación con las utilidades obtenidas por la misma;

e) Las remuneraciones o sueldos que se paguen a miembros de directorios, consejos y otros organismos directivos o administrativos que actúen en el extranjero, y los honorarios y otras remuneraciones pagadas por asesoramiento técnico, financiero o de otra índole prestados desde el extranjero;

f) Las utilidades del ejercicio se destinan al aumento de capitales o reservas de empresas, cuya deducción no está admitida expresamente por esta Ley o los Reglamentos;

g) Las pérdidas provenientes de operaciones ilícitas;

h) El impuesto que establece esta ley y sus recargos, así como los impuestos, tasas y derechos incurridos para adquirir, mantener o conservar bienes de capital, como el impuesto sobre sucesiones y donaciones, las contribuciones a las obras públicas que beneficien terrenos particulares y otros impuestos que gravan las rentas de capital o cualquier otro, salvo cuando los mismos se computen como parte del costo al ser enajenado el bien de que se trate.

Artículo 54.– Estarán exentos de este impuesto:

a) La persona natural, sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, de hecho y en participación y las sucesiones indivisas que ejerza actividades gravadas en esta categoría cuya renta neta no exceda de RD$1,500.00. No obstante, cuando se obtengan rentas por encima de esa suma se gravará la totalidad de las mismas:

b) Los beneficios provenientes de las operaciones en aguas territoriales de la República de los barcos mercantes de aquellos países extranjeros que por leyes o tratados hagan la misma concesión tributaria en relación con los buques dominicanos;

c) Están exonerados del pago del impuesto cubierto por esta categoría las personas que se dediquen a las actividades agropecuarias y forestales cuyos inmuebles incluyendo mejoras y contenencias no excedan en su valor de RD$25,000.00.

Artículo 55.– Las rentas netas anuales de las compañías por acciones constituidas en el país, las de las sociedades en comandita por acciones, las sociedades de capital constituidas en el extranjero cualquiera que sea su denominación, que tengan en el país un establecimiento comercial, industrial, agrícola, pecuario, forestal, minero o de otro tipo, pagarán el impuesto de esta categoría conforme a la siguiente escala:

Diez por ciento (10 o/o) sobre el monto de los beneficios netos imponibles comprendidos entre RD$0.01 y RD$5,000.00.

Trece por ciento (13 o/o) sobre el monto de los beneficios netos imponibles comprendidos entre RD$5,000.01 y RD$ 10,000.00.

Diez y Seis por ciento 16 o/o) sobre el monto de los beneficios netos imponibles comprendidos entre RD$10,000.01 y RD$20,000.00;

Diez y nueve por ciento (19 o/o) sobre el monto de los beneficios netos imponibles comprendidos entre RD$20,000.01 y RD$30,000.00;

Veintidos por ciento (22 o/o) sobre el monto de los beneficios netos imponibles comprendidos entre RD$30,000.01 y RD$40,000.00;

Veintisiete por ciento (27 o/o) sobre el monto de los beneficios netos imponibles comprendidos entre RD$40,000.01 y RD$50,000.00;

Treinticuatro por ciento (34 o/o) sobre el monto de los beneficios netos imponibles comprendidos entre RD$50,000.01 y RD$60,000.00;

Treintiocho por ciento (38 o/o) sobre el monto de los beneficios netos imponibles desde RD$60,000.01 en adelante.

Párrafo.– La anterior tarifa progresiva se aplicará en forma gradual de manera que los porcentajes sólo graven la porción de beneficios comprendida entre las cantidades que siguen a dichos porcentajes.

Artículo 56.– Las rentas que las personas naturales obtuvieren del ejercicio de las actividades gravadas en esta categoría, a través de sociedades en nombre colectivo, en comandita simple, de hecho, y en participación, de sucesiones indivisas o de su propio negocio, estarán gravadas con un cinco (5) por ciento sobre la renta neta.

CAPITULO X

Cuarta Categoría

Renta proveniente del ejercicio de profesiones liberales, artes y oficios y otras profesiones lucrativas.

Artículo 57.– Están sujetas al pago del impuesto en esta categoría, las rentas siguientes:

a) Las provenientes del ejercicio de profesiones liberales, de artes y oficios de la prestación de servicios y de toda otra profesión u ocupación lucrativa de cualquier naturaleza o denominación; y

b) Las provenientes del desempeño de funciones de albacea, síndico, mandatario y gestor de negocio.

Artículo 58.– De las rentas brutas de esta categoría, son deducibles los gastos inherentes a consultorios, bufetes, estudios o de cualquier otra denominación, indispensables para el trabajo de los que ejerzan profesiones liberales u otras ocupaciones lucrativas, sin que la deducción por esos conceptos pueda en ningún caso pasar del quince por ciento (15 o/o) de los ingresos brutos.

Artículo 59.– Las rentas obtenidas por las personas correspondientes a esta categoría cuyo monto no fuere posible establecer por carecer de comprobantes y otros elementos de juicio, pagarán este impuesto bajo la presunción de que dichas rentas son por lo menos equivalentes a tres veces la suma anual que pagan por concepto de alquileres del local que ocupen para sus actividades y como casa habitación. La Dirección podrá utilizar otros procedimientos de apreciación, cuando lo juzgue conveniente.

Artículo 60.– No estarán sujetas al impuesto de esta categoría las rentas que no excedan de RD$1,200.00. Si excediere de esa suma, el impuesto se pagará sobre la totalidad de las rentas que se obtenga.

Artículo 61.– El impuesto de esta categoría se liquidará y pagará con una tarifa de un dos por ciento (2 o/o).

CAPITULO XI

Rentas del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia

Artículo 62.– Estarán sujetas al pago del impuesto en esta categoría las rentas siguientes:

a) Las provenientes del desempeño de director, gerente, administrador u oficial de sociedades comerciales; y los de presidente, administrador, director de compañía por acciones, administrador de bienes inmuebles u otras funciones similares;

b) Las remuneraciones percibidas por los directivos accionistas de empresas;

c) Los sueldos de funcionarios y empleados públicos y privados; salarios y emolumentos que se perciban regular o eventualmente;

d) Las regalías, gratificaciones, donaciones y cualesquiera otras asignaciones similares o compensaciones, en dinero o en especie que aumenten la remuneración pagada por la prestación de servicios personales;

e) Las correspondientes a los agentes de seguro;

f) Los importes que se reciban por jubilaciones, pensiones, retiros, rentas vitalicias y subsidios de cualquier especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal.

Artículo 63.– No estarán sujetas al impuesto de esta categoría las rentas que no excedan de RD$1,200.00. Si excediere de esa suma, el impuesto se pagará sobre la totalidad de las rentas que se obtengan.

Artículo 64.– El impuesto de esta categoría se liquidará y pagará con una tarifa de un dos por ciento (2 o/o).

CAPITULO XII

El impuesto complementario

Artículo 65.– Se crea, en adición a los impuestos establecidos en cada una de las categorías de la presente Ley, un impuesto complementario que se liquidará y pagará sobre la totalidad de la renta neta imponible anual de cada persona, de conformidad con la siguiente escala:

Tres por ciento (3 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$0.01 y RD$2,000.00;

Cinco por ciento (5 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$2,000.00 y RD$4,000.00;

Siete por ciento (7 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$4,000.00 y RD$6,000.00;

Nueve por ciento (9 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$6,000.00 y RD$8,000.00;

Doce por ciento (12 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$8,000.00 y RD$12,000.00;

Quince por ciento (15 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$12,000.00 y RD$16,000.00;

Diez y ocho por ciento (18 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$16,000.00 y RD$ 20,000.00;

Veinticinco por ciento (25 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$20,000.00 y RD$ 25,000.00;

Treinta por ciento (30 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$25,000.00 y RD$30,000.00;

Treinta y cinco por ciento (35 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida entre RD$30,000.00 y RD$ 40,000.00;

Cuarenta por ciento (40 o/o) sobre el monto de la renta neta imponible comprendida desde RD$40,000.00 en adelante.

La anterior tarifa progresiva se aplicará en forma graduada de manera que los porcentajes solo graven la porción de renta comprendida entre las cantidades que siguen a dichos porcentajes.

Artículo 66.– Se entenderá por renta neta imponible a los efectos del impuesto complementario, la renta neta global computada de acuerdo con el artículo 65, menos las deducciones admitidas por los artículos 68 y 70.

Artículo 67.– La renta neta global del contribuyente comprende la suma de las rentas netas obtenidas por los siguientes conceptos:

a) Las rentas netas gravadas por las categorías 1ra., 2da., 4ta., y 5ta., de esta Ley.

b) La participación que corresponde al socio, participe o heredero en las rentas netas de las sociedades colectivas, en comanditas simples, de hecho y en participación o sucesiones indivisas, cuando tales rentas estuviesen gravadas conforme a la 3ra. categoría, y las rentas netas derivadas de los negocios de único dueño.

Para establecer la renta neta global se compensarán todas las rentas netas obtenidas en el año fiscal dentro de cada una y entre las distintas categorías de rentas.

Artículo 68.– Toda persona natural residente en el país tendrá derecho a rebajar de su renta neta global, una exención personal de RD$1,200.00. Igualmente, todo contribuyente tendrá derecho a deducir de su renta neta global los gastos médicos y de asistencia dental, hasta la suma de RD$400.00 anuales. Además las siguientes sumas, en concepto de cargas de

familia, siempre que las personas que se indican más adelante residan en el país, estén a su cargo y no tengan en el año rentas netas, periódicas o eventuales, superiores a dichas sumas: a) RD$ 800.00 anuales por el cónyuge. Si los cónyuges viven separados sólo se permitirá esta deducción a aquel a cuyo cargo esté la manutención del otro. En el caso de que los cónyuges pagaren el impuesto separadamente por entas independientes, la deducción podrá ser hecha por cualquiera de ellos o prorrateadas entre ambos; b) RD$500.00 por cada descendiente legítimo menor de edad o incapacitado para el trabajo; y por cada ascendiente.

En el caso de que los descendientes o hijastros estuvieren cursando estudios universitarios dentro o fuera del país habrá derecho a la deducción hasta que obtengan su grafo universitario, siempre que su edad no exceda de 25 años.

Párrafo.– La reducción a la renta bruta no podrá exceder en ningún caso de RD$7,000.00 anuales.

Artículo 69.–Para los fines del impuesto complementario, en lo relativo a la renta de los cónyuges regirán las reglas establecidas en la letra g) del artículo 71 de la presente ley.

Artículo 70.– El contribuyente tendrá derecho a los siguientes créditos que se deducirán del monto de la contribución a pagar en el impuesto complementario:

Las cantidades que hubiere pagado por la aplicación del impuesto de las segunda categoría en las rentas netas definidas en la letra g) del artículo 41 de esta ley.

CAPITULO XIII
De los obligados a presentar declaraciones juradas

Artículo 71.– Deberán presentar declaración jurada ante la Dirección General y pagar, en la form que prescriben los Reglamentos, el impuesto correspondiente:

a) Las personas físicas y los dueños de empresas, explotaciones o negocios que originen las rentas gravadas por esta ley;

b) Los administradores o representantes legales de los menores y de los interdictos, en cuanto a las rentas que correspondan a las empresas o explotaciones de sus representados;

c) Los apoderados o los administradores generales, en cuanto a las rentas de las empresas explotaciones de sus apoderantes;

d) Los presidentes, directores, gerentes, administradores y demás representantes de personas jurídicas y de toda otra entidad, o patrimonio, en cuanto a las rentas de éstos;

e) Los síndicos de quiebras, los representantes de las sociedades en liquidación y los secuestrarios en cuanto a las rentas de empresas o explotaciones bajo secuestro;

f) Los administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge superviviente y los herederos, en cuanto a las rentas de empresas o explotaciones que pertenecieron al de cujus, ya las rentas correspondientes a la sucesión, provenientes de dichas empresas o explotaciones;

g) El marido, excepto en los casos de separación de bienes en cuanto a los bienes comunes y propios. Sin embargo, cuando la esposa ejerza una profesión, oficio, empleo, comrcio o industria, de conformidad con lo dispuesto por la Ley, se liquidarán como ingresos propios de ella, los que obtuviere en el ejercicio de la actividad a que se dedique, y los que provienen de bienes adquiridos con el producto de dicha actividad, siempre que haya hecho constar en la escritura de adquisición que el dinero proviene de los indicados conceptos y este no sea impugnado. Las rentas respectivas de los esposos casados bajo el régimen de separación de bienes se liquidarán como propias de cada uno; esta disposición también se aplicará en el caso de separación judicial de bienes.

Artículo 72.–Las personas que están obligadas a presentar las declaraciones por las rentas obtenidas y sujetas a la aplicación del presente impuesto, deberán presentar las pruebas de las calidades en que actúan, cuando así lo requiera la Dirección.

Artículo 73.– La forma en que deberán ser presentadas las declaraciones juradas y sus anexos, así como todo lo relativo a los sistemas de contabilidad y documentación probatoria para facilitar la verificación de las rentas gravables, serán prescritos por los Reglamentos.

Artículo 74.–La Dirección podrá exigir declaraciones juradas o cualquiera otra información, en las formas y en los plazos que al efecto fije, a los contribuyentes u otros obligados por la Ley, a los bancos y otras entidades públicas o privadas, y a los terceros que intervienen en el pago, movimiento, destino o aplicación de la renta de un contribuyente dado, cuando lo juzgue necesario para la mejor fiscalización de la situación de éste en relación con el impuesto.

CAPITULO XIV

De la cesación de negocios

Artículo 75.– En caso de cesación de negocios o terminación de explotaciones por venta, liquidación, permuta u otra causa, se considerará finalizado el ejercicio corriente. El contribuyente deberá presentar, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de los hechos especificados antes, una declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio, y pagar el impuesto adeudado.

Artículo 76.– Las empresas en liquidación, mientras no efectúen la liquidación final, continuarán sujetas a las disposiciones de esta ley y los reglamentos. Al hacerse la distribución definitiva de lo que se obtuviere en la liquidación, se cumplirá lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPITULO XV

De la recaudación en la fuente-agentes de retención e información

Artículo 77.– La Dirección podrá instituir, conforme a las normas establecidas en los Reglamentos, agentes de retención y percibir en la fuente el impuesto adeudado.

Artículo 78.– Las personas o entidades obligadas a efectuar la retención informarán a la Dirección del monto de los impuestos que hubieren retenido y pagarán estos por cuenta de los contribuyentes respectivos en la forma y en el plazo que indiquen los Reglamentos.

Artículo 79.– Los agentes de retención deberán entregar a los contribuyentes por cuya cuenta paguen el impuesto, una prueba de la retención efectuada, en la forma que indiquen los Reglamentos.

Artículo 80.– Las personas o entidades que acrediten o giren a personas físicas o empresas radicadas en el extranjero, sumas de dinero que constituyan rentas sujetas al gravámen de esta Ley, deberán retener el impuesto correspondiente, si aquellos no tienen apoderado o administrador general en la República.

El monto del impuesto se calculará sumando el valor que se gire o acredite, los valores que se hubieren girado, acreditado o pagado al contribuyente durante el año, aunque al efectuarse estas operaciones éste hubiere residido en el país, y se aplicarán al total obtenido las tarifas correspondientes. Del importe en esta forma establecido se restará el monto de las retenciones ya efectuadas en el año.

Artículo 81.– Las personas o empresas instituidas en Agentes de Retención por esta ley, los Reglamentos o la Dirección General deberán presentar anualmente a la Dirección General y en la forma y fecha que ésta disponga, una declaración jurada de las retenciones operadas durante el año calendario anterior.

Párrafo I.– Asimismo dichos Agentes de Retención estarán obligados a informar a la Dirección General las sumas de dinero que giren o acrediten a beneficiarios del exterior aun cuando dichas sumas sean inferiores a los mínimos gravables establecidos en esta ley.

Párrafo II.– Cuando sean varios los agentes de Retención de una misma persona o empresa, la Dirección General, al finalizar el año realizará una liquidación anual a base de los ingresos totales del beneficiario, y si hay diferencias a pagar el valor correspondiente se exigirá al Agente de Retención que la Dirección indique.

Artículo 82.– Los reglamentos establecerán todas las demás disposiciones necesarias para la aplicación de este sistema de cobro del impuesto.

Artículo 83.– Los administradores de inmuebles están en la obligación de suministrar a la Dirección General dentro del mes de enero de cada año, la información que ésta les requiera en relación con dichos inmuebles.

Artículo 84.– En los casos en que se disponga el pago del impuesto por vía de retención, el hecho de que no existiere el Agente de Retención, o de que éste no efectuare la retención debida, no eximirá a los contribuyentes de la obligación de pagar el impuesto. Sin embargo, en todo caso será igualmente responsable del pago el Agente de Retención.

Artículo 85.– Cuando el contribuyente no hubiere retenido el impuesto de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo y en los Reglamentos, la Dirección podrá impugnarle al determinar su balance imponible, el gasto que originó dicho impuesto.

CAPITULO XVI

De las prórrogas de plazos

Artículo 86.– La Dirección podrá, a solicitud motivada de parte interesada, prorrogar hasta por treinta (30) días el plazo para la presentación de las declaraciones juradas y el pago del impuesto o del anticipo de la tercera categoría.

Si el interesado necesitare una nueva prórroga, deberá solicitarla al Secretario de Estado de Finanzas, quien podrá conceder una segunda y última prórroga no mayor de treinta (30) días.

CAPITULO XVII

Verificación de las declaraciones

Artículo 87.– La determinación y percepción del impuesto se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago del gravamen en la forma y plazos previstos en esta ley y en los Reglamentos. Dichas

AGN

declaraciones juradas estarán sujetas a la verificación administrativa, y, sin perjuicio del impuesto que en definitiva determine la Dirección, hacen responsables a los declarantes por el que de ellas resulte, cuyo monto no podrá deducirse por declaraciones posteriores, salvo errores de cálculo, sin expresa autorización de la Dirección General.

Artículo 88.— Con el objeto de verificar la exactitud de las declaraciones o de obtener las informaciones necesarias, cuando éstas no hubieren sido presentadas, la Dirección podrá examinar los libros de contabilidad y los papeles del contribuyente, de su representante o de cualquiera otra persona obligada por la Ley a presentar declaración en todo lo que se relacione con la renta o ingreso, declaración de éstos y la determinación del impuesto.

CAPITULO XVIII

De la estimación de oficio

Artículo 89.— Cuando el contribuyente u otro obligado por la Ley y los Reglamentos no presentare la declaración de renta, o la presentare incompleta, o con datos inexactos, o cuando carezca de los libros o comprobantes exigibles, o cuando se negare, en cualquier forma, al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o la verificación de las declaraciones juradas, la Dirección procederá a estimar de oficio la renta neta e intimar el pago del impuesto correspondiente.

Artículo 90.— La estimación de oficio se hará en la forma en que la Dirección lo juzgue más conveniente.

Artículo 91.— Esta estimación se hará sobre la base del capital invertido de las transacciones de períodos anteriores, de las compras afectadas, de las existencias de mercaderías, del volumen y clase del negocio, u otros datos o elementos de juicio que la dirección obtuviere.

CAPITULO XIX

De la reconsideración

Artículo 92.— Los contribuyentes u obligados por la Ley que consideren incorrecta o injusta la estimación o

determinación de oficio que se hiciere de sus rentas, y del impuesto o de los ajustes que les sean practicados a sus declaraciones, podrá solicitar a la Dirección, que reconsidere su decisión. Esta solicitud deberá hacerse por escrito dentro de los veinte (20) días siguientes al de la fecha de recepción de la notificación de dicha decisión, y deberá contener los alegatos y documentación en que el contribuyente fundamente su solicitud. La interposición de este recurso, cuando fuere regular y conforme a la Ley, suspenderá la obligación de efectuar el pago de los impuestos y recargos determinados, hasta que intervenga decisión sobre los mis-

En vista de dicha solicitud, el Director General notificará al reclamante su resolución al respecto y le intimará a efectuar el pago de los impuestos y recargos a que hubiere lugar.

El plazo para ejercer este derecho de reconsideración se establece a pena de caducidad.

Artículo 93.— Los contribuyentes u obligados por la Ley que no estuvieren conformes con la resolución de la Dirección, podrán recurrir ante el Secretario de Estado de Finanzas, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de dicha resolución, agregando al escrito que contenga su recurso los documentos y argumentos que creyere útiles a la prueba o defensa de sus pretensiones.

CAPITULO XX

De los pagos a cuenta

Artículo 94.— Los Reglamentos establecerán la obligación a cargo de los contribuyentes de hacer durante el año pagos a cuenta del impuesto que finalmente recaiga sobre los beneficios o ingresos que obtenga en dicho período. Estos pagos a cuenta podrán alcanzar hasta un 60 por ciento del monto del impuesto liquidado en el ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de lo que se establezca en el cobro por retención.

CAPITULO XXI

De los reembolsos

Artículo 95.— Cuando por los pagos hechos de conformidad con las disposiciones de esta Ley quedare un balance en favor

del contribuyente, o si un contribuyente hubiere pagado impuesto indebidamente, la Dirección establecerá el crédito correspondiente. Este crédito se imputará a la categoría que corresponda y podrá compensar deudas futuras dentro de dicha categoría. Si el contribuyente reclamare el reembolso, la Dirección procederá a la tramitación del mismo.

CAPITULO XXII

De la prescripción

Artículo 96.– Prescriben a los tres años:

a) Las acciones del Fisco para exigir las declaraciones juradas, impugnar las efectuadas, requerir el pago del impuesto y practicar la estimación de oficio;

b) Las acciones por violación a la presente Ley; y

c) Las acciones contra el Fisco en repetición del impuesto.

Párrafo.– El punto de partida de las prescripciones indicadas en el presente artículo será la fecha de vencimiento del plazo establecido en esta Ley para presentar declaración jurada y pagar el impuesto, sin tenerse en cuenta la fecha de pago del impuesto o la de la presentación de la declaración de beneficios.

Artículo 97.– La prescripción señalada en el artículo anterior se interrumpirá:

a) Por la notificación de los ajustes practicados por fiscalización o verificación;

b) Por la notificación de la resolución de estimación de oficio, o por la resolución dictada sobre solicitud de reconsideración;

c) Por el reconocimiento en forma expresa o tácita de la deuda fiscal;

d) Por renuncia al término transcurrido de la prescripción en curso; y

e) Por todo acto administrativo o judicial encaminado a obtener el pago de lo adeudado.

Artículo 98.— Los ajustes practicados o la resolución de estimación de oficio serán notificados al contribuyente mediante comunicación certificada con aviso de recibo, o mediante notificación del formulario de ajuste o de la resolución de estimación de oficio o de la que recaiga sobre solicitud de reconsideración. Estas últimas notificaciones serán hechas por delegado de la Dirección General en la persona o en el domicilio del contribuyente. En caso de negativa de recepción y firma de los documentos expresados, el funcionario actuante levantará acta consignando esta circunstancia, la cual valdrá notificación.

Artículo 99.— Suspenderán la prescripción de las acciones del Fisco, sin que esta suspensión dure más de dos años:

a) La iniciación de la fiscalización o verificación administrativa, o en su defecto, el levantamiento de acta por parte del funcionario o empleado actuante;

b) La no presentación de la declaración jurada exigida por la Ley;

c) Cualquiera irregularidad que emane del contribuyente o responsable, cualquiera causa fortuita o de fuerza mayor que impida ejercer la acción del Fisco.

CAPITULO XXIII

De las sanciones y las responsabilidades

Artículo 100.— Los contribuyentes u obligados por la Ley, que fraudulentamente presentaren en una declaración jurada, datos o documentos falsos o incompletos, serán condenados a prisión de un mes a dos años, o al pago de una multa de RD$25.00 a RD$500.00 o ambas penas a la vez, según la gravedad del hecho y el monto del impuesto dejado de pagar.

Artículo 101.— La rebeldía para impedir la verificación de las declaraciones juradas, el examen de los libros, documentos y papeles, o para suministrar informes requeridos por la

Dirección, se castigará con las mismas penas establecidas en el artículo anterior.

Artículo 102.– El contribuyente o responsable que no presentare declaración jurada y no pagare el impuesto dentro de los plazos establecidos en esta Ley y en los Reglamentos, pagará recargo sobre el monto del impuesto liquidado, en la forma siguiente:

Hasta un mes de retardo : 10 por ciento

Más de un mes y hasta dos meses : 20 por ciento

Más de dos meses y hasta tres meses : 30 por ciento

Más de tres meses y hasta cuatro meses : 40 por ciento

Más de cuatro meses : 50 por ciento

Artículo 103.– La falta de pago del impuesto determinado mediante ajuste o estimación de oficio de la Dirección General, se hará con un 10 por ciento (10 o/o) de recargo sobre el valor adeudado, si éste no es pagado en el plazo que la Dirección General establezca.

Artículo 104.– Cuando una persona obligada a presentar declaración jurada de rentas no lo hiciere dentro del plazo fijado para ello, y no le corresponda la aplicación de los recargos previstos en el artículo anterior, será condenada al pago de una multa de RD$10.00 a RD$200.00.

Artículo 105.– El contribuyente que habiendo presentado declaración jurada de sus rentas y pagado el impuesto correspondiente, estuviere luego obligado a pagar diferencias de impuesto surgidas como consecuencia de la verificación ordenada por la Dirección, en la cual compruebe falta de veracidad por error grosero, o dolo, hará efectivas dichas diferencias con un recargo de 25 por ciento (25 o/o) sobre las mismas.

Párrafo.– Este recargo será también aplicable sobre el monto del impuesto determinado correspondiente a la renta declarada, al contribuyente que cambie el método de imputación de la renta de su empresa, explotación o negocio, o que cambie la forma de cierre de su ejercicio comercial, sin autorización expresa de la Dirección General.

Artículo 106.– Serán responsables del cumplimiento de la presente Ley y de los Reglamentos, las personas obligadas a efectuar las declaraciones juradas de rentas, o a pagar el impuesto y los terceros que, sin estarlo, contribuyeren a facilitar su evasión por negligencia o culpa.

Artículo 107.– Los actos de los representantes de las persons jurídicas culpables de infracción a la presente Ley y a los Reglamentos, obligan a sus representadas, las cuales serán responsables solidariamente con ellos del pago del impuesto y de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.

Párrafo.– Las penas de prisión que establece la presente Ley se ejecutarán en las personas de los representantes de las empresas obligadas por la misma.

Artículo 108.– Se castigará con pena de prisión de seis (6) días a tres (3) meses, o a multa de diez (RD$10.00) a doscientos pesos (RD$200.00) o ambas penas a la vez, a los Agentes de Retención que no ingresaren el impuesto por ellos retenidos dentro de los plazos establecidos por los Reglamentos.

Artículo 109.– Se castigará con pena de un día a un mes de prisión o multa de diez a cien pesos, o ambas penas a la vez, al Agente de Retención que, sin motivos justificados y atendibles, se negare a actuar en tal calidad, y estará obligado, solidariamente al pago del impuesto que dejare de retener.

Artículo 110.– Toda violación a la presente Ley o a sus Reglamentos, no prevista especialmente, será castigada con multa de diez pesos (RD$10.00) y con el doble de esta suma en caso de reincidencia.

Artículo 111.– Se establecen las siguientes sanciones y responsabilidades:

1) A partir de la publicación de la presente Ley, los Notarios Públicos o quienes hagan sus veces, no instrumentarán ningún acto traslativo, declarativo, ni de cualquier otro modo concerniente a propiedades urbanas o rurales sometidas al pago de este impuesto, incluyendo participaciones y liquidaciones de cualquier naturaleza, enajenaciones, comunidades, sucesiones,

AGN

arrendamientos, hipotecas, constituciones de anticresis y aportaciones si no se les muestra el recibo del último pago del impuesto sobre la renta, que acredite que el impuesto relativo al año fiscal en curso, al momento del acto, ya se ha pagado. En ningún caso los Notarios o quienes hagan sus veces, retendrán para ningún fin el recibo de pago del impuesto, y se limitarán a dejar constancia en los actos que instrumenten, del número y fecha de los recibos.

2) Cuando se lleve a cabo la venta en pública subasta, de propiedades urbanas productoras de rentas sometidas al pago de este impuesto, los funcionarios públicos ante quienes se efectúe la subasta, solicitarán al Director General del Impuesto sobre la Renta, una certificación de que el impuesto correspondiente sobre la renta ha sido pagado; y en caso de que no lo haya sido, el monto de la deuda por tal concepto será agregado al precio de la venta, y no se expedirán títulos ni copias de las adjudicaciones , sino cuando, previo pago del impuesto, se hayan obtenido el o los recibos de saldo, a fin de hacer mención de estos recibos en los títulos o en las copias de la adjudicación.

3) Los Conservadores de Hipotecas y los Registradores de Títulos no transcribirán ni inscribirán, ni registrarán actos o derechos relativos a propiedades urbanas o rurales productoras de rentas sometidas a este impuesto si no se les presenta el recibo que pruebe que ha sido pagado el impuesto, el certificado de exención de pago, o una autorización de la Dirección General, circunstancias de las cuales se hará mención al terminar la nota de su transcripción, inscripción o registro que dejen asentados en sus libros.

4) Los Registradores de Títulos no expedirán el duplicado del certificado de título de una propiedad urbana o rural, a la persona a quien corresponda el derecho según el Decreto de Registro, a menos que se cumpla cualquiera de los requisitos anteriormente expresados, de lo cual se hará mención al margen del certificado y del duplicado. En lo adelante, después del primer registro, los Registradores de Títulos no aceptarán ningún documento que contenga traspaso del dominio absoluto de una propiedad urbana o rural, o la constitución de una hipoteca o su cancelación, a la constitución de cualquier derecho, cargo o gravamen, sobre una propiedad urbana o rural

registrada, productora de rentas gravadas por esta Ley, si no se les presenta el recibo de pago del impuesto.

5) Ninguna sentencia que confiere derechos sobre inmuebles sujetos al impuesto establecido en esta Ley, podrá ser ejecutada si no se ha satisfecho previamente el impuesto.

6) Serán condenados al pago de una multa de RD$10.00 a RD$200.00, o a prisión de seis días a tres meses, o a ambas penas a la vez:

a) Los Notarios que a partir de la publicación de la presente Ley instrumenten actos relativos a propiedades productoras de rentas gravadas por esta Ley, sin tener a la vista el recibo de pago o que habiéndolo tenido no hagan la mención correspondiente en el acto que instrumenten.

b) Los Conservadores de Hipotecas y los Registradores de Títulos que, después de publicada la presente Ley, no se ajustaren a las previsiones de este artículo.

c) Los funcionarios administrativos que hagan en sus actos menciones fraudulentas relativas a esta Ley, quienes podrán además ser perseguidos y juzgados como autores de falsedad en escritura pública.

d) Los funcionarios administrativos que a partir de la publicación de la presente Ley intervengan en cualquier acto traslativo o declarativo de propiedad y que no lo notifiquen a la Dirección General del Impuesto sobre la Renta dentro de los treinta (30) días de la fecha en que su gestión se haya realizado.

7) Ninguna oficina de venta de pasajes para el exterior expedirá pasajes a la persona, nacional o extranjera, que no le entregue una constancia expedida por la Dirección de que ésta no tiene objeción que hacer a su salida del país, por no adeudar la persona de que se trata el impuesto que establece la presente ley.

El certificado de no objeción que será expedido libre de todo impuesto o derecho será válido por el tiempo que determine la Dirección, el cual se expresará en el mismo, y que no será mayor de un año.

Estas disposiciones no se aplicarán a los turistas, pero si éstos realizan en el territorio dominicano actividades civiles o comerciales, o trabajo personal que les produzcan rentas, dichos turistas quedarán sujetos al requisito del certificado de no objeción para poder salir del país.

CAPITULO XXIV

Disposiciones generales

Artículo 112.– Las compensaciones de pérdidas y beneficios, provenientes de distintos bienes o actividades, serán admisibles únicamente en la categoría a que correspondan.

Artículo 113.– Las personas y empresas que están obligadas a presentar declaración en un año cualquiera, deberán seguirla presentando en los años siguientes, aún cuando no obtuvieren rentas e ingresos imponibles, salvo en el caso de cesación de las actividades del negocio.

Artículo 114.– Las declaraciones de los contribuyentes o de sus representantes, deberán presentarse acompañadas de las copias de los recibos expedidos por la Colecturía de Rentas Internas o por la Tesorería Municipal, según el caso, en prueba de que se ha hecho el pago del impuesto correspondiente.

Artículo 115.– En los casos en que el impuesto establecido por esta ley sea sustituído por contratos suscritos por el Poder Ejecutivo, con la aprobación del Congreso Nacional, la percepción y liquidación del mismo se hará de conformidad con el procedimiento estipulado en dichos contratos.

Artículo 116.– En todos los casos que se presenten en la aplicación de esta ley, para los cuales no haya disposiciones expresas para resolverlos, se aplicarán las regulaciones de la Ley Orgánica de Rentas Internas y todas las disposiciones legales referentes a impuestos que sean de carácter general.

Artículo 117.– El Secretario de Estado de Finanzas podrá ordenar las medidas que fueren necesarias para facilitar o simplificar la ejecución de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en los Reglamentos que emita el Poder Ejecutivo, siempre que fueren compatibles con el espíritu de dichas disposiciones.

Artículo 118.— La Dirección General, en la interpretación de esta Ley y de los Reglamentos, atenderá al fin de los mismos y a su significación económica. Sólo cuando no sea posible fijar, por la letra o por su espíritu, en el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones en ellos contenidos, podrá recurrirse a las normas, conceptos, y términos del Derecho Privado.

CAPITULO XXV

Régimen de aplicación y administración del impuesto de la Dirección General

Artículo 119.— Se establecerá una Dirección General del Impuesto sobre la Renta con asiento en Santo Domingo, dependiente de la Secretaría de Estado de Finanzas, que tendrá a su cargo todo lo relativo a la aplicación de la presente Ley y de los Reglamentos.

Párrafo I.— Se podrán instituir las Agencias Locales que fueren necesarias, dependientes de la Dirección General, y tendrán las atribuciones que establezcan los Reglamentos.

Párrafo II.— Las Colecturías de Rentas Internas, o las Tesorerías Municipales donde no existen aquellas, recibirán el pago del impuesto en sus jurisdicciones respectivas.

Párrafo III.— En los lugares donde no haya Agencias de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, las Colecturías de Rentas Internas y las Tesorerías Municipales funcionará como Agentes especiales de dicha Dirección General y estarán sujetas a las instrucciones y disposiciones que en lo relativo a la aplicación de este impuesto emanen de la Dirección General.

Artículo 120.— El Director General tendrá, además de las otras atribuciones expresamente acordadas por esta Ley, las siguientes:

a) Dirigir y vigilar el trabajo de los funcionarios y empleados de la Dirección General, en las Agencias Locales de la misma, de las Colecturías de Rentas Internas y de las Tesorerías Municipales, en cuanto atañe a la aplicación de la Ley y a la percepción del impuesto;

b) Instituir, de acuerdo con el Contralor y Auditor General de la República, un sistema de contabilidad adecuado para los ingresos producidos por el impuesto;

c) Someter al Secretario de Estado de Finanzas un informe anual de la labor de la Dirección General, con las recomendaciones que juzgue procedentes para la buena marcha del servicio, y rendir a dicho funcionario las cuentas e informes que éste le requiera.

Artículo 121.– El Director General, sus representantes o agentes, y demás funcionarios o empleados de la Dirección, no podrán divulgar en forma alguna la cuantía o fuente de entradas o beneficios, las pérdidas, gastos o cualesquiera datos que figuren en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes o relativas a tales datos, no permitirán que éstas o sus copias o libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas, sean vistos por persona alguna, salvo en cuanto fuere necesario para dar cumplimiento a las disposiciones de la presente Ley y los Reglamentos, o para obtemperar a solicitudes de funcionarios competentes para ser utilizados en fines fiscales, judiciales o simplemente administrativos.

CAPITULO XXVI

Disposiciones Especiales

Artículo 122.– El impuesto adicional del doce (12) por ciento que establece la Ley de Gastos Públicos y Presupuesto de Ingresos no se cobrará a los impuestos de la presente Ley.

Artículo 123.– El Estado tiene un privilegio para el pago de los impuestos instituidos por la presente Ley.

CAPITULO XXVII

Disposiciones Transitorias

Art. 124.– La presente Ley comenzará a regir el 1ro. de julio de 1962 y gravará exclusivamente las rentas que se obtuvieren a partir de esa fecha.

Art. 125.– Las rentas correspondientes a ejercicios económicos iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente Ley y terminados con posterioridad a la misma, se prorratearán proporcionalmente cuando no pudiere establecerse el período en que fueron efectivamente obtenidos.

Art. 126.– Las rentas netas obtenidas entre el 1ro. de julio y el 31 de diciembre de 1962, por los contribuyentes cuyo ejercicio económico esté comprendido en el 1ro. de enero y el 31 de diciembre de 1962, se les aplicará el 50 o/o de la tarifa progresiva establecida en el III Categoría. Asimismo sólo se aplicará el 50 o/o de la tarifa progresiva establecida en el impuesto complementario a las rentas netas obtenidas entre el 1ro. de julio y el 31 de diciembre de 1962, haciéndose un ajuste similar a las cargas de familia y a las otras deducciones que determinen la Ley los Reglamentos.

Art. 127.– Las rentas netas que obtuvieren las empresas gravadas por la III Categoría, en ejercicios iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley pero que terminen con posterioridad a la misma, liquidarán su gravámen sobre las rentas que correspondan al período transcurrido entre el 1ro. de julio de 1962 y la fecha de cierre de su ejercicio comercial, conforme a las tarifas establecidas en la presente Ley, en la proporción correspondiente.

Art. 128.– Los beneficios por los cuales aún no se haya liquidado definitivamente el impuesto y que hubiesen estado gravados en las Categorías I, II y III de la Ley No.3861, liquidarán su gravamen en proporción a los meses a que correspondan tales beneficios.

Art. 129.– Los saldos que resultaren a favor del contribuyente por la liquidación del impuesto sobre los beneficios obtenidos hasta el 30 de junio de 1962, constituirán un crédito en contra de las contribuciones establecidas en la presente Ley.

CAPITULO XXVIII

Destino del Impuesto y Derogación

Artículo 130.– Las entradas que perciba el fisco por concepto de este impuesto ingresarán al Fondo General de la Nación.

Artículo 131.– A partir del 1ro. de julio de 1962 quedan sin efecto las Leyes Nos. 3861 del 26 de junio de 1954, 4026 del 14 de enero de 1955, 4025 del 11 de febrero de 1955, 4855 del 17 de enero de 1956, 5236 del 18 de noviembre de 1959. 5460, del 24 de diciembre de 1960, el Artículo 1ro. de la Ley No. 5705 de fecha 15 de diciembre de 1961, así como cualesquiera otras leyes o disposiciones que les sean contrarias.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F BONNELLY

Ley No. 5912 que deroga la Ley No. 5651 del 28 de octubre de 1961, que establece las categorías Cuarta y Quinta en la Ley de Impuestos sobre Beneficios, No. 3861 y dicta otras disposiciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5912

Artículo 1.– A partir del 1ro. de julio de 1962, quedan derogadas las disposiciones de la Ley No. 5651, del 28 de octubre de 1961, que establece, en adición a las categorías contenidas en el párrafo I del Artículo 2 de la Ley No. 3861, de Impuestos sobre Beneficios, de fecha 26 de junio de 1954, las Categorías Cuarta y Quinta.

Artículo 2.– El pago del impuesto de la Cuarta y Quinta Categoría, correspondientes al año 1962, se ajustará en proporción al término de vigencia de la Ley No. 5651, del 28 de octubre de 1961, en el referido año de 1962. Los contribuyentes que ya hubiesen pagado el impuesto de las

referidas Categorías correspondientes al año 1962, conforme a la indicada Ley No. 5651, tendrán derecho a un crédito contra otras contribuciones del Estado.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No. 5913, que designa al Lic. José Joaquín Pérez Páez, Segundo Suplente del Lic. Julio A. Cuello, Miembro de la Junta Central Electoral

EL CONSEJO DE ESTADO

EN FUNCIONES DE ASAMBLEA NACIONAL

NUMERO 5913

VISTA: la renuncia presentada en esta misma fecha por el Dr. Froilán Tavares hijo;

VISTO el párrafo transitorio del artículo 4 de la Ley No. 5891, de fecha 8 de mayo de 1962;

RESUELVE

ARTICULO UNICO.- El Lic. José Joaquín Pérez Páez, queda designado Segundo Suplente del Lic. Julio A. Cuello, Miembro de la Junta Central Electoral, en sustitución del Dr. Froilán Tavares hijo.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley de Pesca No. 5914

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5914

CONSIDERANDO: que es deber del Estado reglamentar la pesca, no sólo para procurar la conservación y propagación de

las especies, sino su aprovechamiento en beneficio de la economía nacional y de la dieta alimenticia de la población;

CONSIDERANDO: que no existe una legislación adecuada sobre la explotación de la riqueza marítima y fluvial, siendo necesario dictar normas que la regulen asegurando los fines expresados en el anterior Considerando;

CONSIDERANDO: que es deber del Gobierno Nacional el desarrollar los recursos naturales con que cuenta el país, para que éste y sus habitanes se beneficien debidamente de ellos;

CONSIDERANDO: que la República cuenta con extensos mares, de una riqueza ictiológica privilegiada, la cual no es debidamente aprovechada;

CONSIDERANDO: que de igual manera el país cuenta con fuentes considerables de ríos, lagos, lagunas y demás fuentes privilegiadas para la propagación y conservación de las especies y para una debida explotación de la riqueza ictiológica;

CONSIDERANDO: que la República Dominicana no ha salido aún de la fase inicial del desarrollo de la pesca, cuando su explotación debe constituir una de las riquezas primordiales de su economía y ser fuente de trabajo, prosperidad y bienestar del pueblo dominicano;

CONSIDERANDO: que es urgente y necesario el controlar las riquezas de nuestros mares y fuentes fluviales, con el fin de evitar la merma o el agotamiento de algunas especies;

CONSIDERANDO: que el Gobierno Nacional, en cumplimiento de sus deberes, se haya empeñado en desarrollar, tecnificar e industrializar esta rama de la economía nacional, para beneficio de la Nación y de su pueblo.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY
DE PESCA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

AGN

Artículo 1.– La presente ley tiene por objeto proteger y fomentar la crianza de peces, regular la pesca con el fin de obtener su aumento y desarrollo en aguas de la República Dominicana. Se considera actos de pesca, y, por tanto, sujeto a las disposiciones de esta ley, todos aquellos que, realizándose en aguas de la mar territorial y en las aguas fluviales de la República, tienen por finalidad obtener ejemplares de especies o elementos biológicos cuyo medio natural de la vida es el agua. En consecuencia, la pesca incluirá la captura, pesca o matanza de peces, moluscos o crustáceos.

Artículo 2.– La pesca tanto marítima como fluvial puede considerarse:

a) De explotación, cuando se persigan fines de lucro:

b) De consumo doméstico, cuando se realizan con el único objeto de proveer las necesidades familiares;

c) Mixta;

d) Deportiva, cuando se ejecuten con fines de esparcimiento;

e) De carácter científico, cuando esté orientada por razones de investigación, estudio o enseñanza.

Artículo 3.– La pesca de explotación puede ser comercial, cuando los ejemplares son destinados a ser enajenados, sin que antes de serlo medie otro proceso que no sea el de su conservación; o industrial, cuando las especies capturadas se sujetan antes de venderse a un proceso de transformación total o parcial.

Artículo 4.– Se consideran propiedad del Estado, de dominio común y uso público, todas las especies de peces, moluscos, crustáceos, mamíferos acuáticos, y todas las especies que comprendan la fauna marítima, lacustre y fluvial del dominio público. Podrán ser pescadas, extraídas, aprovechadas y comercializadas libremente con sujeción a las restricciones de esta ley y de su reglamento.

Artículo 5.– Las personas que verifiquen labores de pesca estarán obligadas a:

a) Capturar solamente las especies permitidas y en las épocas o períodos hábiles de explotación, los que serán fijados por la Secretaría de Estado de Agricultura;

b) Observar todas las restricciones y regulaciones que la Secretaría de Estado de Agricultura emita con respecto al tamaño y peso de las especies de pesca, así como de los otros vertebrados o invertebrados que sean capturados en las aguas marítimas, lacustres o fluviales;

c) Comprobar la procedencia legal de los productos de la pesca, vedados que se posean;

d) Traer al puerto los productos de la pesca que sean comestibles y que llenen los requisitos exigidos en los apartados a) y b) de este artículo;

e) Devolver al agua los ejemplares capturados que no se deseen utilizar, siempre que tengan vida; y

f) Cumplir con las demás disposiciones de esta ley y en general con todas las medidas que se adopten para la explotación científica de la pesca.

Artículo 6.— Se prohibe a las personas que verifiquen pesca o caza marítima o fluvial:

a) Abandonar en las playas o riberas, o tirar al agua en las zonas que se fijarán por disposiciones especiales reglamentarias dictadas por la Secretaría de Estado de Agricultura, productos o desperdicios de la pesca;

b) Verter o dejar correr a las aguas donde existan especies de pesca, materias tóxicas o nocivas a la misma;

c) Pescar o cazar en cualquier extensión de agua en donde se hayan establecido vedas temporales para proteger el desarrollo y el valor comercial de las especies, y vedas generales para proteger la conservación de las mismas;

d) Usar explosivos o substancias venenosas tales como dinamita, cal, cianuro, barbasco, etc., y cualquier otra substancia que produzca la muerte o aletargamiento de los peces y demás especies de la fauna acuática;

e) Adquirir productos de pesca o caza con fines comerciales, sin cerciorarse de la procedencia legal de los mismos;

f) Comerciar con productos de pesca vedados o que no reunan los requisitos sanitarios o legales correspondientes;

g) No manifestar, en los términos que se señalarán oportunamente, las existencias de productos de pesca que tengan en su poder al entrar en vigor alguna veda o alguna disposición que afecte esas existencias;

h) Capturar y matar cualquier tortuga que se encuentre en la playa y que esté poniendo huevos o preparando su nido;

i) Matar, destruir, poseer o vender cualquier langosta en gestación (con huevos adheridos), en cualquier época del año;

j) Ejecutar la pesca entorpeciendo la navegación o curso de las aguas y su utilización;

k) Usar redes y demás aparatos de arrastre que perjudiquen especies sedentarias, en zonas que se darán a conocer por la Secretaría de Estado de Agricultura;

l) Usar como base de operaciones un sitio distinto al estipulado en la licencia, con fines de evitar el control de sanidad o de cualquier autoridad competente;

m) Usar trampas, aparatos, artefactos o máquinas de pesca que no hayan sido aprobados por la Secretaría de Estado de Agricultura;

n) Usar permiso de embarcación que no corresponda a la nave que se encuentre en operaciones.

Las prohibiciones contenidas en los apartados a), b), f) y g), son también extensivas a cualquier otra persona, aunque ésta no se encuentre dedicada a la pesca.

Artículo 7.— La Secretaría de Estado de Agricultura queda autorizada por esta Ley para dictar reglas, que una vez aprobadas y promulgadas por el Poder Ejecuhivo, tendrán fuerza de Ley para:

a) Establecer períodos de veda para la pesca de camarones, langostas, careyes, ostiones, almejas, tortugas y otros peces de concha;

b) Establecer períodos de veda para la pesca de cualquier clase o variedad de peces, bien sea en el mar, o en los lagos, lagunas, caños y ríos de la República;

c) Establecer límite de tamaño para la pesca de cualquier especie de pez, crustáceo, molusco o mamífero acuático;

d) Regular el temaño de las mallas o espacio de las redes y demás artefactos de pesca para el mar, ríos, lagos, lagunas y caños de la República;

e) Preparar modelos de las licencias para pescadores y embarcaciones, de acuerdo con esta Ley, y otorgar las mismas;

f) Regular y prohibir la pesca si lo creyere conveniente en los lagos y lagunas artificiales o naturales de la República y en los ríos y demás corrientes de agua dulce, en los caños, bahías o brazos de mar, por el tiempo que fuere necesario para proteger la pesca o bien evitar la pesca en aguas contaminadas;

g) Requerir el registro y licencia cuando creyere conveniente para el uso o posesión de cualquier aparato de pesca que se utilice en la pesca comercial;

h) Denegar y prohibir el uso de cualquier chinchorro, trasmallo, o cualquier otro aparato de pesca, cuando a su juicio, dicho aparato o el sitio donde se usa esté perjudicando los intereses de la pesca u otros intereses.

CAPITULO II

Registro de Pescadores, Embarcaciones y Aparatos de Pesca

Artículo 8.– La Secretaría de Estado de Agricultura establecerá, por intermedio de la Sección de Piscicultura, un registro de pescadores, empresas de explotación pesquera, embarcaciones y aparatos de pesca.

Artículo 9.– Ninguna persona o entidad podrá dedicarse a la pesca, ni ninguna embarcación ni ningún aparato de pesca podrá ser dedicado a la pesca en la República Dominicana, si previamente no se hubieren inscrito en el registro que al efecto y de conformidad con las reglas que dicte la Secretaría de Estado de Agricultura, se llevará en la Sección de Piscicultura de dicha Secretaría de Estado.

Artículo 10.– Antes de verificarse la inscripción en el registro a que se refiere el artículo anterior, las personas físicas o morales o las embarcaciones dedicadas a la pesca de explotación, deberán obtener, las primeras, los correspondientes permisos o licencias mediante solicitud hecha por escrito a la Secretaría de Estado de Agricultura y poseer además, las segundas, las matrículas otorgadas en virtud de las disposiciones de la Ley sobre Policía de Puertos y Costas.

CAPITULO III

De las Embarcaciones Pesqueras

Artículo 11.– Toda embarcación dedicada al ejercicio de la pesca de explotación o de la pesca de deportes o a cualquier otra clase de pesca, deberá estar provista de un permiso especial otorgado por la Comandancia del Puerto correspondiente, en virtud del cual la embarcación podrá verificar el tipo y clase de pesca que corresponda, siempre y cuando su propietario esté provisto del Permiso de Pesca correspondiente otorgado por la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 12.– El Permiso de Embarcación o su renovación deberá solicitarse por escrito acompañado de los siguientes documentos:

a) Certificación de la Licencia de Pesca concedida por la Secretaría de Estado de Agricultura;

b) Matrícula y patente de navegación emitida por la Marina de Guerra; y

c) Certificado de inspección otorgado por la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social.

Artículo 13.— El Permiso de Embarcación será otorgado por la Secretaría de Estado de Agricultura independiente de la matrícula y patente de navegación emitido por la Marina de Guerra, Permiso de Embarcación que será intransferible y particular de cada embarcación. Dicho permiso será válido por el término de un año y podrá ser renovado por períodos iguales a solicitud del interesado, quien deberá solicitarlo a la Secretaría de Estado de Agricultura dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento.

CAPITULO IV

Pesca de Explotación

Artículo 14.— La pesca y caza de explotación, tanto marítima como fluvial estará sujeta a un Permiso o Licencia de Pesca, el cual será expedido por la Secretaría de Estado de Agricultura, por períodos de un año y mediante solicitud del interesado. Sólo podrán obtener el Permiso o la Licencia de Pesca a que se refiere el presente artículo, las personas naturales o jurídicas domiciliadas en la República Dominicana.

Artículo 15.— Toda persona interesada en obtener una Licencia o Permiso de Explotación de Pesca, deberá solicitarla por escrito a la Secretaría de Estado de Agricultura, formulando una declaración, que expresará:

a) Nombre, denominación o razón social del solicitante;

b) La nacionalidad y domicilio;

c) El plazo dentro del cual se proponga iniciar las actividades de explotación;

d) El capital con que iniciará sus operaciones, y si se tratare de compañías mercantiles, la especificación de los aportes de cada socio;

e) La denominación, clase, tonelaje, calado, escola y número de matrícula de las embarcaciones;

f) El tipo de pesca a que habrá de dedicarse;

g) El tipo de equipos con los cuales se verificará la pesca;

h) La base de las operaciones.

Artículo 16.- La solicitud ,deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la nacionalidad y domicilio del solicitante o de los socios;

b) La matrícula de las embarcaciones; y

c) La escritura social debidamente inscrita, si se tratare de sociedades mercantiles.

Artículo 17.- La Licencia o Permiso de Explotación contendrá:

a) El nombre, denominación o razón social del solicitante;

b) El plazo de su vigencia;

c) El plazo dentro del cual habrán de iniciarse las actividades de explotación;

d) El tipo de pesca a que podrá dedicarse;

e) El tipo de equipo con el cual se verificará la operación;

f) La base de las operaciones.

Artículo 18.- Las personas naturales o jurídicas que deseen dedicarse a la pesca y caza marítima y fluvial, con fines de explotación, estarán obligadas a dar prioridad en las ventas de sus productos, al abastecimiento del consumo interno.

Artículo 19.- Cuando se trate de personas jurídicas, deberán además de cumplir con la obligación consignada en el artículo anterior, someterse a las siguientes condiciones:

a) Organizarse en forma de Sociedades Mercantiles de acuerdo con las leyes de la República Dominicana;

b) Tener permanentemente el cincuenta por ciento (50 o/o) por lo menos, de capital dominicano. Cuando se trate de Sociedades Anónimas, las acciones de propiedad de dominicanos gozarán de los mismos derechos que las adquiridas por extranjeros y sin que ninguna acción pueda ser obtenida o poseída por Gobiernos de otros países o sus dependencias.

Artículo 20.– Las Licencias de pesca o caza, marítima o fluvial, con fines de explotación se concederán teniendo en cuenta la capacidad de los recursos pesqueros y procurando la conservación de las especies por medio de una explotación metódica y racional.

Artículo 21.– El derecho de la pesca deberá ejecutarse sin impedir la libre navegación, el curso natural de las aguas, la utilización de la misma y sin perjudicar los derechos de terceros adquiridos legalmente.

Artículo 22.– Las personas naturales o jurídicas dedicadas a la pesca podrán exportar el producto obtenido siempre y cuando dicha exportación no perjudique al consumo interno de dichos productos y el interesado pague como impuesto al Estado el veinticinco por ciento (25 o/o) del valor de los productos exportados.

Párrafo.– En caso de que los productos de la pesca sean debidamente industrializados en el país el impuesto antes señalado dejará de cobrarse siendo la exportación del producto debidamente industrializado, libre de impuesto.

CAPITULO V

De la Pesca de Consumo Doméstico, Mixta, Deportiva y Científica

Artículo 23.– No se exigirá licencia alguna a los pescadores de consumo doméstico, pudiendo usar embarcaciones o caña de pescar o cordel y anzuelo.

Artículo 24.– Las personas naturales que se dediquen a la pesca de consumo doméstico, pero que el excedente adquirido de la pesca lo dedican a la venta a particulares, haciendo de esta actividad una pesca mixta, deberán proveerse de los

Permisos correspondientes señalados en el Capítulo IV de la presente Ley.

Artículo 25.— A las embarcaciones usadas puramente para el placer o recreo o para la pesca de productos marinos para uso de familia solamente, y a las personas que se dediquen a la pesca de deportes con caña de pescar o cordel y anzuelo, no se le exigirá licencia alguna.

Artículo 26.— Cualquier organización científica, la Sección de Piscicultura de la Secretaría de Estado de Agricultura y cualquier otra organización, con el permiso o consentimiento de la Secretaría de Estado de Agricultura, podrá pescar o hacer que se pesque con propósito científico o educacionales o con fines de dedicarlos para la crianza, cualquier pez y organismo marítimo, en cualquier momento o en cualquier río, lago, laguna, caño, o cualquier otra corriente de agua o mar de la República Dominicana, pudiendo vender o hacer que se venda toda la pesca o parte de la pesca que haya sido cogida y que no sea necesaria para la crianza e investigación científica o educacional.

CAPITULO VI

Conservación y Fomento de las especies

Artículo 27.— Se restituirán a las aguas públicas y privadas, acto seguido de extraerse de las mismas, los ejemplares de la fauna acuática, cuyo tamaño sea inferior a los que determine por reglamento la Sección de Piscicultura de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Queda terminantemente prohibido la circulación, venta y consumo en todo tiempo, de aquellos ejemplares cuyo tamaño sea igual o inferior a los determinados en los reglamentos por la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 28.— La Secretaría de Estado de Agricultura a propuesta del servicio de Piscicultura y previo informe de la Dirección General de Recursos Hidráulicos, acordará la desaparición de los obstáculos naturales o su modificación para facilitar la circulación de los peces a lo largo de las corrientes de agua, muy especialmente en los ríos trucheros, o cuando

esto no sea posible, el empleo de los medios sustitutivos que aseguren la riqueza piscícola en los distintos tramos del río.

Queda prohibido alterar arbitrariamente la condición de las aguas con residuos de industria o verter en ellas, con cualquier fin, materiales o substancias nocivas a la población fluvial, quedando obligados los dueños de las instalaciones industriales a montar los dispositivos necesarios para anular los daños que a la riqueza piscícola pudiera causarse.

Artículo 30.– Para modificar la composición de la vegetación arbustiva de matorral o herbácea de las orillas y márgenes en sus zonas de servidumbres de las aguas públicas, embalses de los pantanos, cauces de derivación y canales de riego, así como para extraer plantas acuáticas, se necesitará contar con autorización de la Sección de Piscicultura de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Asimismo se prohibe terminantemente levantar y sacar fuera de los cauces las piedras existentes en los mismos, en cantidad susceptible de perjudicar la capacidad biogénica del medio.

La Sección de Piscicultura marcará los tramos en que por su naturaleza, procede prohibir el aprovechamiento de gravas y arenas de sus fondos sin causar perjuicios a la riqueza piscícola, a fin de que sea proscrito el mismo.

No se consentirá desviar el curso natural de las aguas del dominio público, embalses de pantano, cauces de derivación y canales de riego, para el aprovechamiento de sus pescas, sin estar el que trata de ejecutar tales desviaciones autorizado al efecto por la Sección de Piscicultura de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 31.– Serán especialmente protegidos los lugares deonde las especies piscícolas suelen efectuar la freza, prohibiéndose en absoluto toda alteración en los suelos y en la flora de los mismos, salvo las que sean realizadas por la Sección de Piscicultura con la finalidad de mejorarlo, siendo misión fundamental de ésta la localización de la zona de freza en las masas de aguas fluviales.

Artículo 32.– En toda obra de toma de agua como canales, acequia y cauces de derivación para el abastecimiento de

poblados, riegos o usos industriales, así como a la salida de los canales de fábrica y molinos o de las turbinas, los dueños y concesionarios están obligados a colocar y mantener en buen estado de conservación, compuestas de rejillas que impidan el acceso de la población ictícola a dicha corriente de derivación, sean públicas o privadas. La Sección de Piscicultura de la Secretaría de Estado de Agricultura, será la encargada de fijar el emplazamiento y características de las referidas instalaciones.

Artículo 33.—A propuesta de la Sección de Piscicultura, el Secretario de Estado de Agricultura podrá prohibir la permanencia de patos, gansos y demás aves acuáticos en estado de domesticidad, en aquellos lugares donde puedan ocasionar daños a la riqueza acuícola.

CAPITULO VII

Repoblación de las aguas fluviales y lacustres

Artículo 34.— La Sección de Piscicultura de la Secretaría de Estado de Agricultura procederá al estudio hidrobiológico de las aguas fluviales y lacustres de la República, dedicando especial preferencia a los ríos trucheros, y adoptará las medidas más convenientes para el fomento de esta riqueza, estableciéndose para la repoblación artificial de las aguas lo mismo públicas que privadas, piscifactorías y laboratorios que sirvan, con los existentes, para realizar todos los años campañas de repoblación, según lo aconsejen las necesidades y lo permitan los recursos presupuestarios.

Artículo 35.— Las personas naturales o jurídicas de interés privado, dueñas de aguas privadas que comuniquen con otras públicas, estarán obligadas a repoblarlas por su cuenta, en el plazo y con sujeción a las instrucciones que la Sección de Piscicultura imparta en cada caso.

Si transcurrido el plazo señalado no se hubiese cumplido la obligación expresada, la Sección de Piscicultura procederá a su repoblación, sustituyendo al propietario en dicha obligación con los recursos propios del Servicio de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 36.– Una vez efectuada la repoblación por la Sección de Piscicultura de los mencionados medios acuáticos señalados en el artículo anterior, los dueños de éstos podrán recobrar su derecho sobre la riqueza piscícola creada, previo pago a la Secretaría de Estado de Agricultura del importe de las mejoras efectuadas y de sus intereses legales. Hasta tanto esta redención no se haya efectuado por el propietario de las aguas, la propiedad de la riqueza piscícola creada corresponderá a la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 37.– La Secretaría de Estado de Agricultura por intermedio de la Sección de Piscicultura, en todos los casos, dará a las personas y entidades particulares las mayores facilidades para la repoblación de sus aguas, con el asesoramiento técnico y suministro de gérmenes y alevinos, siendo por cuenta de los mismos los gastos correspondientes.

Artículo 38.– Las concesiones para establecer viveros de peces y estaciones de fecundación artificial en aguas públicas, destinados a la repoblación, se otorgarán con arreglo a la presente ley y a la legislación de agua, así como a cuantas disposiciones reglamentarias se dicten quedando obligados los concesionarios a no cultivar más especies o variedades que las señaladas en cada caso por la Sección de Piscicultura, debiendo sujetarse la obra a proyecto suscrito por un Ingeniero y aprobado por la Dirección General de Recursos Hidráulicos, previo informe de la Sección de Piscicultura de la Secretaría de Estado de Agricultura, a la que se reserva la inspección de la misma. Se podrá igualmente autorizar trabajo y construcciones costeados por Corporaciones, entidades y particulares que deseen contribuir al fomento de esta riqueza, debiendo sujetarse las obras a los mismos requisitos que se consignan en el párrafo anterior.

Artículo 39.– Queda prohibido destruir los gérmenes de peces, enturbiar las aguas en que estén sumergidos, arrojar materias que los perjudiquen y cultivar especies que no se hallen autorizadas.

Artículo 40.– La Secretaría de Estado de Agricultura estudiará y pondrá en práctica los medios adecuados para extirpar todos los seres que se consideren perjudiciales, debiendo las Corporaciones, entidades y particulares en sus aguas coadyuvar a esta campaña con arreglo a las normas que

se les den por la Sección de Piscicultura de dicha Secretaría de Estado.

CAPITULO VIII

Fomento de la Piscicultura

Artículo 41.— Con el fin de utilizar la iniciativa privada en beneficio del abastecimiento nacional de pesca fluvial, la Secretaría de Estado de Agricultura, a través de la Sección de Piscicultura, podrá concertar con entidades y particulares interesados, consorcios y convenios para el establecimiento de piscifactorías y viveros de tipo industrial, previa la concesión por la Dirección General de Recursos Hidráulicos de las aguas que se necesiten derivar.

Las condiciones técnicas y económicas de estos consorcios y convenios serán reguladas por disposiciones complementarias debidamente aceptadas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 42.— La Secretaría de Estado de Agricultura promoverá y estimulará por todos los medios a su alcance:

a) La mejor organización de la pesca y de la piscicultura en aguas fluviales y lacustres;

b) El incremento de la industria para la elaboración y conservación de los productos y sub—productos de la pesca fluvial;

c) El perfeccionamiento de la fabricación nacional de artes. aparejos y demás útiles empleados en la pesca.

CAPITULO IX

Sanciones

Artículo 43.— El producto de la pesca deportiva no podrá ser objeto de comercio en ningún caso y a los contraventores de la presente disposición les será cancelado el permiso y decomisado el producto de su pesca.

Artículo 44.– La pesca deportiva y de consumo doméstico sólo podrán efectuarse con anzuelos y cañas, curricanes y demás artes de pesca transportables por el propio pescador.

Artículo 45.– Queda prohibido:

a) Pescar en los lugares y épocas de veda determinados por el Poder Ejecutivo;

b) Pescar por métodos, con instrumentos y artes de pesca prohibidos por los reglamentos;

c) Pescar en las zonas de reserva para cultivos especiales o para la explotación, que ameriten la protección del Estado, y hayan sido señalados en los reglamentos dictados al efecto;

d) Perseguir, herir, capturar y matar el ..aití en todas las aguas de la República e introducir sus despojos en la misma;

e) Pescar y vender langostas que no alcancen 16 (dieciseis) centímetros medidos desde la altura de los ojos al arranque de las aletas terminales de la cola;

f) Utilizar toda clase de redes y nasas en los puertos, ríos, desembocaduras de los mismos, haciéndose extensiva esta prohibición hasta 200 (doscientos) metros a cada lado de la desembocadura de los ríos;

g) Usar redes de mallas con lado menor de dos y medios centímetros en sus copos y embases; y

h) Pescar con substancias venenosas y explosivas.

Artículo 46.– En los parques artificiales o en los bancos y criaderos que el Gobierno pueda construir o reservarse mediante simple aviso de la Secretaría de Estado de Agricultura, no se permitirá la pesca de ejemplares de las especies a que estén destinados, ni el tránsito por los mismos.

Artículo 47.– Se impondrá la pena de multa de seis a cien pesos, o la de prisión de seis días a tres meses, a toda persona que incurra en una de las infracciones siguientes:

a) Dedicarse a la pesca sin haber obtenido el permiso correspondiente, cuando éste sea exigido;

b) Dedicarse a la pesca con determinada clase de embarcaciones, cuando la autorización obtenida y los derechos pagados corresponden a otras embarcaciones de menor importancia;

c) Pescar en tiempo de veda, o especies prohibidas, o en lugares prohibidos; o capturar peces de medidas mayores o menores que las señaladas por la Ley o los Reglamentos;

d) Utilizar métodos, instrumentos y artes de pesca prohibidos por la Ley o los Reglamentos;

e) Dar, prestar, facilitar o transferir en cualquier forma a otra persona el permiso de pesca;

f) Hacer uso de un permiso de pesca que pertenezca a otro; y

g) Cualquier otra infracción a la presente Ley o a los Reglamentos.

Artículo 48.— Se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses y multa de seis a cien pesos, a toda persona que incurra en una de las infracciones siguientes:

a) La tenencia de explosivos con fines de pesca en las proximidades de las masas de aguas nacionales o el uso de los mismos para la aprehensión de peces y demás especies;

b) El envenenamiento de aguas con gordolobo, torvisco, coca, beleño, cloruro, carburo o cualquier otra sustancia tóxica;

Artículo 49.— En caso de reincidencia se ordenará además la cancelación del permiso de pescada expedido al infractor, y la confiscación de las embarcaciones, instrumentos, y aparatos usados para la pesca, y el producto de ésta.

Artículo 50.— La violación de cualquiera de las disposiciones de los reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo para la aplicación de la presente Ley, se castigará con la pena que en ella se establecen.

Artículo 51.– Las personas condenadas por infracciones a esta Ley responderán civilmente de los daños y perjuicios que, con el hecho punible, hubieran ocasionado. Por los menores responderán sus padres o tutores y por los criados o dependientes sus amos o superiores, si aquellos ejecutaren el acto en funciones de su servicio.

Artículo 52.– La presente Ley deroga y sustituye la No. 1518, del 18 de junio de 1938 y sus modificaciones, así como cualquier otra Ley o parte de ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5915 que establece sanciones para las huelgas ilegales

EL CONSEJO DE ESTADO

NUMERO 5915

CONSIDERANDO: que en su marcha incesante hacia una total recuperación económica el país viene confrontando una situación difícil, debido a la serie ininterrumpida de huelgas que se producen constantemente, como consecuencia, en unos casos de conflictos económicos entre empleadores y trabajadores y en otros de un mal entendido y exagerado espíritu de solidaridad;

CONSIDERANDO: que cuando las huelgas no se realizan en los casos y mediante las formalidades señaladas por la ley desnaturalizan los propósitos perseguidos por el legislador y producen una alteración del orden público con detrimento de las actividades laborales;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se consideran ilegales para los fines de la presente ley:

1ro.– Las huelgas que tengan por fundamento causas políticas;

2do.– Las que se funden en razones de pura solidaridad con otros trabajadores;

3ro.– Las que se promuevan sin cumplir las formalidades del Artículo 374 del Código de Trabajo.

Artículo 2.– Los que hayan iniciado las huelgas que se indican precedentemente o hayan formado parte de la mismas, serán condenados con la pena de quince días a seis meses de prisión o con multa de treinta pesos (RD$30.00) a quinientos pesos (RD$500.00), o con ambas penas a la vez.

Artículo 3.– El Juzgado de Primera Instancia será competente para conocer de dichas infracciones.

Artículo 4.– Quedan derogadas las disposiciones del Código de Trabajo o de cualquier otra ley que sean contrarias a la presente.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5916, que crea el Instituto Nacional de la Ganadería como organismo independiente para formular y llevar a ejecución los programas que en ella se expresan.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5916

CONSIDERANDO: Que la ganadería constituye uno de los principales sectores primarios o generadores de la economía nacional, a cuyo futuro desarrollo están básicamente vinculados los niveles o metas económico sociales hacia la consecución de las cuales deben aplicarse todos los recursos de la nación;

CONSIDERANDO: Que es perentorio y de gran interés para el país la revitalización enérgica e inmediata de ésta fuente económica, no solo por el aporte que le corresponde a ella ofrecer al desarrollo integral de la República, sino por la

importancia que la producción de carne, leche y demás alimentos derivados de la ganadería tiene para los coeficientes per cápita de alimentación requeridos por la población;

CONSIDERANDO: Que dada la trascendencia de los problemas envueltos o relacionados con la ganadería, es recomendable la creación de un organismo especializado independiente que tenga a su cargo la responsabilidad y dirección de todos los estudios necesarios a los fines de formular y poner en ejecución los programas adecuados a una Planificación completa de éste sector económico, que produzca como resultado una verdadera [illegible]oblación ganadera en el país y la subsecuente disponibilidad de sus productos para satisfacer las necesidades actuales y futuras del consumo nacional, así como para asegurar el mantenimiento de los mercados exteriores como estímulo a la expansión de esa actividad de la riqueza pública y beneficio a la situación económica del país en su balanza de pagos;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se crea como organismo independiente el Instituto Nacional de la Ganadería, el cual tendrá a su cargo el estudio de los aspectos fundamentales y de índole económica de la ganadería dominicana, la formulación de los programas de Planificación Pecuaria cuyos objetivos inmediatos sean la expansión de éste importante sector económico de la nación en consonancia con las necesidades del crecimiento de población, los requerimientos dietéticos recomendables, y la necesidad de mantener su contribución al desarrollo de nuestro comercio exterior.

Artículo 2.– El Instituto Nacional de la Ganadería estará integrado por los siguientes miembros:

a) Un Director Ejecutivo, quien lo presidirá;

b) El Secretario de Estado de Agricultura, miembro ex oficio;

c) Un miembro de la Junta Nacional de Planificación, miembro ex oficio;

d) El Director General de Ganadería de la Secretaría de Estado de Agricultura, miembro ex oficio;

e) El Presidente de la Asociación Dominicana de Ganaderos, miembro ex–oficio;

f) Dos ganaderos de la región Este del país;

g) Dos ganaderos de la región Norte del país;

h) Dos ganaderos de la región Sur del país;

i) Dos ganaderos de la región Noroeste del país;

Los miembros indicados en las letras f), g), h) e i) tendrán cada uno un suplente designado asimismo por el Poder Ejecutivo.

Estos suplentes cuando actúen en lugar del titular tendrán sus mismas funciones y prerrogativas.

Párrafo I.– La integración del Instituto Nacional de la Ganadería se completará con un Secretario General quien ejercerá las funciones de Jefe de Oficinas, y quien en las sesiones que celebre el Instituto tendrá voz pero no voto.

Párrafo II.– El Secretario de Estado de Agricultura podrá delegar su representación en un Subsecretario de la misma cartera, cuando ello sea necesario por circunstancias especiales.

Artículo 3.– Todos los miembros y funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo.

Párrafo: El nombramiento del Director Ejecutivo, así como el de los miembros clasificados en las letras f), g), h) e i) será por un período de dos años.

Artículo 4.– El cargo de Secretario General será remunerado, el de Director Ejecutivo tendrá una remuneración mensual de Un Peso Oro moneda de curso legal, (RD$1.00), y los demás miembros serán honoríficos.

Párrafos: Los miembros que residan fuera de la ciudad capital tendrán una dieta de RD$25.00 para gastos de viaje por

cada sesión a que asistan; el Director Ejecutivo y los miembros que realicen viajes a otras regiones del país al de sus respectivos asientos en desempeño de sus funciones recibirán una dieta diaria de RD$15.00 durante los días que realicen dichos viajes.

Artículo 5.– Todos los Organismos y Departamentos del Gobierno están en la obligación de prestar su más amplia colaboración al Instituto Nacional de la Ganadería creado por la presente Ley, quedando su Director Ejecutivo autorizado a realizar los contactos y hacer las gestiones necesarias frente a los organismos e instituciones internacionales similares o afines, en beneficio de las funciones que le han sido confiadas.

Artículo 6.– El Instituto Nacional de la Ganadería deberá someter al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días de su creación un presupuesto general de gastos, lo cual deberá continuar haciendo anualmente antes del día treinta y uno de Diciembre de cada año. Al mismo tiempo deberá presentar al Poder Ejecutivo una Memoria Anual de las actividades realizadas, sin limitar ésto la facultad de que queda investido de presentar cualquier informe relativo a los problemas de pecuaria nacional y las soluciones recomendadas.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5917, que concede una pensión del Estado al señor Emil Boyrie de Moya.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5917

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado de fecha 31 de julio de 1959.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede una pensión del Estado de trescientos pesos oro (RD$300.00) mensuales al señor Emil Boyrie de Moya.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los veintidós días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5918, que suprime el Art. 167 de la Ley No.1474, del 22 de febrero de febrero de 1938, sobre Vía de Comunicación.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5918

CONSIDERANDO: Que el artículo 167 de la Ley No. 1474, sobre Vías de Comunicación, sirvió en la época de la pasada tiranía de fundamento legal para que en las oficinas de correos existieran secciones especializadas destinadas a la censura de la correspondencia;

CONSIDERANDO: Que en un régimen de libertades públicas como el que actualmente rige en el país no se justifica la vigencia de un texto legal que ha dado lugar a medidas como las arriba señaladas, en contradicción con los principios que consagra la Constitución de la República;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.– Se suprime el artículo 167 de la Ley No. 1474, del 22 de febrero de 1938, sobre Vías de Comunicación.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral.
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5919, que deroga la Ley No.3812, del 30 de abril de 1954, que declara inembargables e inagenables los bienes donados por Rafael L. Trujillo Molina.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5919

ARTICULO UNICO.– Se deroga la Ley No. 3812, de fecha 30 de abril de 1954, que declara inembargables e inagenables los bienes donados por Rafael L. Trujillo Molina.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de mayo de mil novecientos

sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresiente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5920, que restablece los artículos 10 y 11 de la Ley No.2873, del 3 de mayo de 1951, que instituye la Comisión de Defensa del Azúcar y Fomento de la Caña.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5920

Artículo 1.– Se restablecen los artículos 10 y 11 de la Ley No. 2873 del 3 de mayo de 1951, que instituye la Comisión de Defensa del Azúcar y Fomento de la Caña, los cuales copiados textualmente dicen así:

"Artículo 10.– Los fondos provenientes del impuesto a que se contrae el artículo anterior se ingresarán en un fondo especial cuyos egresos se efectuarán según lo disponga el Poder Ejecutivo".

"Artículo 11.– Con la previa aprobación del Presidente de la República la Comisión de Defensa del Azúcar y Fomento de la Caña formulará su presupuesto anual, incluyendo los sueldos de sus funcionarios y empleados, los cuales serán fijados por el Poder Ejecutivo".

Artículo 2.– En consecuencia, queda derogada la Ley No. 3465, del 27 de diciembre de 1952, así como cualquier otra disposición legal que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Moñs. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;,

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5921, que concede el beneficio de la jubilación al Sr. Lic. Heriberto Núñez.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5921

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede el beneficio de la jubilación al señor Lic. Heriberto Núñez, y se le asigna una pensión del Estado de ciento cincuenta pesos oro (RD$150.00) mensuales.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado. en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5922, que prohibe la importación de toda clase de sustancias explosivas, y dicta otras disposiciones.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5922

Artículo 1.– Se prohibe la importación de toda clase de substancias explosivas. y de aquellas substancias que sin ser directamente explosivas puedan utilizarse en la fabricación de explosivos.

Artículo 2.– La presente ley deroga, en cuanto sea necesario, la Ley sobre Substancias Explosivas No. 262, de fecha 17 de abril de 1943, así como cualquier ley o parte de ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 23 días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5923, que jubila con pensión del Estado al señor Pedro Augusto Rojas Pérez.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5923

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede el beneficio de la jubilación al señor Pedro Augusto Rojas Pérez, y se le asigna una pensión del Estado de ciento veintiseis pesos oro (RD$126.00) mensuales.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119o de la Independencia y 9co de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos sesenta dos, años 119o de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No.5923-bis, del Consejo de Estado, que autoriza a los señores Lic. Rafael F. Bonnelly y Antonio Imbert Barrera, Presidente de la República y del Consejo de Estado y Miembro del Consejo de Estado, respectivamente, a ausentarse del país, durante cuatro días.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5923–Bis

VISTOS los artículos 117 y 120 (transitorio) de la Constitución de la República,

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:

Artículo 1.– Se autoriza al Lic. Rafael F. Bonnelly Presidente de la República y del Consejo de Estado, y al señor Antonio Imbert Barrera, Miembro del Consejo de Estado, a ausentarse del país, durante cuatro días, a partir de esta fecha.

Artículo 2.– Mientras dure la ausencia del Presidente de la República desempeñará las funciones de Presidente del Consejo de Estado, el Primer Vicepresidente de dicho Consejo, Dr. Nicolás Pichardo.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez.
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero.
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 990 de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5924, sobre Confiscación General de Bienes

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5924

LEY SOBRE CONFISCACION GENERAL DE BIENES

CAPITULO I

Artículo 1.– Toda persona que haya cometido o cometiere abuso o usurpación del Poder o de cualquier función pública para enriquecerse o para enriquecer a otros, será declarada culpable de enriquecimiento ilícito y condenada a la pena de la confiscación general de sus bienes.

En igual pena incurrirá toda persona que se haya enriquecido al amparo o como consecuencia del abuso o usurpación del Poder cometido por otro.

Dicha pena será aplicable a las personas morales.

Artículo 2.– Tan pronto como la jurisdicción competente declare la confiscación, todos los bienes presentes del condenado, de cualquier naturaleza que sean, muebles o inmuebles, serán propiedad del Estado, salvo las exclusiones que puedan acordarse en virtud de esta misma ley.

Artículo 3.– Los bienes confiscados quedarán a cargo de la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes.

Artículo 4.– La pena de la confiscación general de bienes es independiente de cualquier otra pena a que puedan dar lugar los hechos castigados en el artículo 1ro., no siendo aplicable, en consecuencia, el principio del no cúmulo de penas.

CAPITULO II

Tribunal de Confiscaciones

Artículo 5.– Se crea un tribunal de jurisdicción nacional con asiento en la Capital de la República que se denominará Tribunal de Confiscaciones, el cual formará parte del Poder Judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Constitución.

Este Tribunal tendra las atribuciones penales y civiles que se le confieren en la presente ley.

Artículo 6.– El Tribunal de Confiscaciones se compondrá de 3 Jueces elegidos de conformidad con los artículos 24 y 116 de la Constitución, y al ser elegidos se dispondrá cual de ellos ocupará

la presidencia del Tribunal, así como el primer y segundo sustitutos. No podrá funcionar sin la presencia de sus tres miembros, y sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos. En caso de ausencia, inhibición o impedimento de uno cualquiera de los jueces del Tribunal de Confiscaciones, los dos jueces restantes tendrán facultad para completar el mismo llamando a uno cualquiera de los Jueces de la Corte de Apelación de Santo Domingo.

Artículo 7.– El Tribunal de Confiscaciones tendrá un Secretario y los Alguaciles y demás empleados que sean necesarios.

Artículo 8.– El Ministerio Público ante el Tribunal de Confiscaciones será ejercido por un funcionario denominado Fiscal del Tribunal de Confiscaciones, quien estará encargado de investigar y perseguir las infracciones previstas en esta ley y tendrá dentro de todo el territorio nacional en este sentido las mismas funciones y atribuciones que las leyes confieren a los Procuradores Fiscales.

El Fiscal del Tribunal de Confiscaciones tendrá los ayudantes que sean necesarios, de los cuales el de mayor edad sustituirá al Fiscal en caso de inhibición, impedimento o ausencia de éste.

Además, el Fiscal del Tribunal de Confiscaciones tendrá un Secretario y los demás empleados que sean necesarios.

Artículo 9.– Para ser Juez o Fiscal del Tribunal de Confiscaciones se requieren las mismas condiciones exigidas en el artículo 68 de la Constitución de la República para los jueces de las Cortes de Apelación.

Los Ayudantes del Fiscal deberán reunir las mismas condiciones que éste.

Artículo 10.– Se extienden las disposiciones de la Ley de Organización Judicial y sus modificaciones a los miembros, funcionarios y empleados del Tribunal de Confiscaciones, salvo en caso de incompatibilidad o contradicción con los términos de la presente ley.

CAPITULO III

Competencia y Procedimiento en Materia Penal

Artículo 11.– El Tribunal de Confiscaciones será el único competente para conocer, en sus atribuciones penales, de todas las infracciones previstas en esta ley.

La causa se instruirá y juzgará como en materia correccional, en la medida que ello sea compatible con la presente ley.

Artículo 12.– En esta jurisdicción penal no se conocerá de reclamaciones civiles.

Las sentencias dictadas en defecto por el Tribunal de Confiscaciones serán susceptibles de oposición,la cual se hará en todos los casos dentro de los 10 días a partir de la notificación de la sentencia si el condenado tiene domicilio o residencia conocidos en el país o de la publicación de un extracto de ésta en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, si el condenado no tiene domicilio o residencia conocidos.

El recurso de apelación no se permitirá en esta materia.

Artículo 13.– El recurso de casación será admisible, pero sólo cuando se trate de sentencias contradictorias.

Este recurso se intentará por declaración en la Secretaría del Tribunal de Confiscaciones dentro de los 5 días del pronunciamiento de la sentencia y será motivado, a pena de nulidad.

El Secretario del Tribunal de Confiscaciones enviará el expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los diez días siguientes al pronunciamiento del fallo.

Artículo 14.– Serán aplicables en esta materia las disposiciones que sobre la materia penal establece la Ley sobre Procedimiento de Casación, en la medida que no sean incompatibles con el procedimiento establecido en la presente ley.

Si la sentencia es casa se procederá como se indica en el Artículo 23.

Toda sentencia que ordene la confiscación será ejecutoria no obstante cualquier recurso.

Artículo 15.– De toda sentencia definitiva que pronuncie la confiscación de bienes se publicará un extracto en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional a diligencia del Fiscal del Tribunal de Confiscaciones.

Artículo 16.– (transitorio) Las personas que han sido condenadas por la Ley a la pena de confiscación general de bienes, como consecuencia del abuso o usurpación del Poder cometido durante la pasada tiranía, podrán hacer sus impugnaciones ante el Tribunal de Confiscaciones, en atribuciones penales, en el plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, a pena de caducidad.

Estas impugnaciones se harán por acto motivado, notificado al Fiscal del Tribunal, quien lo participará al Presidente del Tribunal para los fines de fijación y conocimiento de la causa.

El Tribunal, en todo caso, al conocer de estas impugnaciones juzgará el fondo y decidirá acerca de la existencia o no de la infracción y en consecuencia, sobre la procedencia o no de la pena de confiscación general de bienes. Esta decisión no será susceptible de ningún recurso.

Artículo 17.– Las confiscaciones ordenadas por ley que no hayan sido impugnadas dentro del plazo arriba indicado producirán los mismos efectos que las confiscaciones pronunciadas por el Tribunal de Confiscaciones.

CAPITULO IV

Competencia en materia civil

Artículo 18.– En materia civil, dicho tribunal será competente de una manera exclusiva para conocer:

a) De todas las contestaciones que se originen o tengan por objeto bienes confiscados aun cuando estén estos registrados o en curso de saneamiento catastral;

b) De todas las acciones intentadas por el Estado tendientes a la recuperación de bienes que pertenecen o han debido entrar en el patrimonio confiscado;

c) De todas las decisiones tomadas por el Secretario de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes en relación con las empresas o compañías oficialmente intervenidas por tener en ellas interés alguna de las personas cuyos bienes hayan sido confiscados;

d) De todas las controversias que surjan en relación con la propiedad de las acciones de las sociedades oficialmente intervenidas, ya sean dichas acciones al portador, nominativas o de otra forma;

e) De la liquidación y partición de los bienes de los esposos casados bajo el régimen de la comunidad y de los bienes que se encuentren en estado de indivisión entre el condenado a la confiscación general de bienes y cualquiera otra persona;

f) De las acciones intentadas contra los adquirientes o causahabientes de las personas cuyos bienes hubiesen sido confiscados; y

g) De las acciones intentadas por personas perjudicadas por el abuso o usurpación del Poder, contra los detentadores o adquirientes.

CAPITULO V

Procedimiento en materia civil

Artículo 19.— Cuando se trate de una demanda intentada por el Estado o por cualquier interesado, en materia civil, el Tribunal de Confiscaciones quedará apoderado del caso por instancia depositada en la Secretaría del Tribunal, copia de la cual deberá ser notificada a la parte contra quien se persigue la acción, dentro de los cinco días siguientes al del depósito.

Las partes deberán hacer elección de domicilio en la ciudad de Santo Domingo, y en caso de no hacerlo los actos podrán ser notificados en la Secretaría del Tribunal de Confiscaciones.

La demanda intentada contra el Estado será notificada al Secretario de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes, quien previa consulta con el Presidente de la República, designará la persona que asumirá la representación del Estado en la litis.

Dentro de 30 días del depósito de la instnacia, la parte demandada o su abogado, si lo constituye, depositará en la misma Secretaría del Tribunal su contestación a dicha instancia y la notificará a la parte adversa o a su abogado, si lo ha constituido. A petición de la parte más diligente el Tribunal fijará una audiencia para conocer del caso. Igual petición podrá hacer la parte demandante si la parte demandada no contesta la instancia dentro del plazo que le ha sido acordado.

Las partes o sus representantes, se oirán en audiencia y el Tribunal podrá concederles un plazo moderado, si así lo solicitan, para replicar y contrarreplicar.

Artículo 20.– El Tribunal de Confiscaciones podrá ordena todas las medidas de prueba que juzgue convenientes. Los informativos se harán en forma suscinta y en todos los casos se procederá de modo que sea asegurado el derecho de defensa.

También podrá el Tribunal ordenar que sean puestas en causa las personas que deberán ser incluidas en la solución del caso.

Artículo 21.– Los actos de procedimientos no estarán sujetos al pago del impuesto establecido por la Ley sobre Documentos y las costas podrán ser compensadas en todos los casos.

CAPITULO VI

Vías de recurso en materia civil

Artículo 22.– Las sentencias en defecto del Tribunal de Confiscaciones podrán ser recurridas en oposición. La oposición se hará por instancia motivada dirigida al Tribunal dentro de los cinco días de la notificación de la sentencia y el oponente dará copia de esa instancia al recurrido dentro de los cinco días siguientes. A petición de la parte más diligente, el Tribunal fijará una audiencia para conocer de la oposición. No serán susceptibles del recurso de apelación.

Artículo 23.– Las sentencias dictadas por el Tribunal de Confiscaciones en materia civil serán susceptibles del recurso de casación, en el plazo de un mes a partir de la notificación de la sentencia.

En el recurso se observará el procedimiento señalado por la Ley sobre Procedimiento de Casación, en materia civil, en la medida que sea compatible con la presente ley. Si la sentencia es casada, el asunto se enviará al mismo Tribunal de Confiscaciones, el cual estará constituido para el efecto, por su Presidente y por los dos jueces de la Corte de Apel[illegible]ón de Santo Domingo que él llame para integrarlo.

Las costas se podrán compensar en todos los casos.

CAPITULO VII

Plazos para la reclamación de bienes confiscados

Artículo 24.– Toda reclamación referente a bienes confiscados deberá ser presentada en la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes, en un plazo de 60 días a partir de la publicación en el periódico del extracto de la sentencia de confiscación a que se refiere el Artículo 15 de esta ley, si se trata de una confiscación ordenada por el Tribunal de Confiscaciones.

Cuando se trate de confiscaciones ya ordenadas por ley, se concede, igualmente, un plazo de 60 días para hacer dichas reclamaciones el cual comenzará a partir del momento en que la pena de confiscación quede irrevocable.

Las personas que hayan presentado su reclamación a la mencionada Secretaría de Estado en relación con dichos bienes no tendrán que renovarla.

Las decisiones adoptadas por el Secretario de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes en relación con estas reclamaciones podrán ser recurridas en la forma ya expresada ante el Tribunal de Confiscaciones.

CAPITULO VIII

Obligaciones de los detentadores y deudores

Artículo 25.–Todo detentador a un título cualquiera, todo gerente de bienes muebles o inmuebles pertenecientes directa, indirectamente o por personas interpuestas, a personas cuyo patrimonio sea confiscado, todo deudor de sumas, valores u objetos de cualquier naturaleza hacia las mismas personas por cualquier causa que sea deben hacer una declaración a ese respecto en el plazo de 30 días a partir de la publicación en el periódico del extracto de la sentencia de confiscación a que se refiere el artículo 15 de esta ley.

Cuando la persona cuyos bienes han sido confiscados por ley haya incurrido en la caducidad del artículo 16, el plazo de 30 días a que se refiere el párrafo anterior comenzará a correr a partir del vencimiento del plazo acordado por el citado artículo 16 de la presente ley.

Deben ser principalmente declaradas las acciones, obligaciones y de una manera general, toda participación a todo interés en las sociedades, casas de comercio, empresas o explotaciones cualesquiera; la obligación de la declaración incumbe en las sociedades a todo asociado designado nominativamente, gerente, director o administrador.

La obligación de declarar se extiende a todos los actos y convenciones que afecten el patrimonio confiscado.

Ella incumbe igualmente a toda persona que tiene conocimiento de la retención de los bienes en el caso en que ella los ha depositado o hecho depositar en poder de los detentadores.

Si varias personas tienen calidad a cualquier título que sea para hacer una misma declaración, ellas están conjuntamente obligadas, salvo si convienen eventualmente en no efectuar más que una sola y misma declaración.

Artículo 26.– La declaración deberá ser hecha en la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes

en el plazo arriba indicado y deberá ser acompañada, si hay lugar, de todos los documentos útiles.

Artículo 27.– Las infracciones y la tentativa de infracciones, sometidas de mala fé, a las disposiciones del artículo 25 de la presente ley, serán castigadas con prisión de dos meses a dos años o multa de RD$100.00 a RD$1,000.00 o con ambas penas a la vez. Serán castigados con la misma pena aquellos que, a sabiendas de que los bienes pertenecen a un patrimonio confiscado, hayan, a un título o por un medio cualquiera, facilitado o intentado facilitar la sustracción, ocultación o apropiación de dichos bienes a las medidas de confiscación o participado en estos actos.

CAPITULO IX

Disposiciones sobre la Confiscación

Artículo 28.– Todo acreedor hipotecario, privilegiado o quirografario de una persona cuyos bienes sean confiscados deberá declarar el monto de sus créditos a la Secretaría de Estado de Administración, Control y Recuperación de Bienes y suministrará todas las justificaciones necesarias para su comisión en el pasivo de los bienes confiscados dentro de 30 días de la publicación de la sentencia de confiscación en la forma prevista por el artículo 15.

Artículo 29.– Salvo prueba en contrario, que puede ser hecha por todos los medios, se presumen fraudulentos o simulados todos los créditos que no sean anteriores al abuso o usurpación del Poder, o al enriquecimiento ilícito obtenido como consecuencia del abuso o usurpación del Poder.

Se exceptúan de esta disposición los créditos otorgados en favor del Estado o de una institución del Estado.

Artículo 30.– Si el condenado a la confiscación general de bienes es casado bajo el régimen de la comunidad se procederá, si se solicita, a la liquidación y partición de los bienes presentes, lo que se hará de acuerdo con las reglas del derecho común.

Sin embargo, si los bienes atribuibles a la esposa tienen su origen en el abuso o usurpación del Poder, dichos bienes no serán objeto de liquidación y partición y quedarán confiscados.

Artículo 31.– Del mismo modo, si algún bien de los que formen parte del patrimonio confiscado ha sido constituido en bien de familia, podrá ser excluido de la confiscación, si se estima que dicho bien no ha tenido su origen en el enriquecimiento ilícito que sanciona esta ley.

Artículo 32.– Serán exluidas de la confiscación general de bienes los bienes adquiridos por el condenado antes del abuso o usurpación del Poder, así como los bienes declarados inembargables por los ordinales 2do., 3ro., 4to., 6to., 7mo. y 8vo., del artículo 592 del Código de Procedimiento Civil.

CAPITULO X

Efectos del abuso o usurpación del Poder

Artículo 33.– Cuando se trate de una acción que tenga su fuente en el enriquecimiento ilícito, como consecuencia del abuso o usurpación del Poder, el Tribunal de Confiscaciones podrá declarar no oponible la prescripción y abiertas las vías de recurso contra las decisiones judiciales que hayan intervenido y anular la convención litigiosa por vicio de consentimiento fundándose en los efectos jurídicos que conforme el derecho común, produce la fuerza mayor.

En este sentido se admitirá como un caso típico de fuerza mayor el abuso o usurpación del Poder que imperó durante la pasada tiranía.

El Tribunal de Confiscaciones podrá, en consecuencia, si se trata de derechos registrados anular las sentencias, decretos y resoluciones emanados del Tribunal de Tierras, así como los certificados de títulos que sean necesarios para la solución del litigio y ordenar lo que sea procedente.

CAPITULO XI

Régimen de compensación

Artículo 34.– Cuando se trate de una demanda en reinvindicación de un inmueble que se encontraba en el momento de la confiscación en nombre de la persona cuyos bienes han sido

confiscados, si se acoge la demanda se podrá restituir dicho inmueble al demandante, sin derecho a indemnización alguna.

Artículo 35.– Si el inmueble ha sido adquirido por el condenado a la pena de confiscación en virtud de una convención y el precio de adquisición es igual al valor que tenía el inmueble en el momento de la convención, el Tribunal de Confiscaciones deberá desestimar la demanda.

Artículo 36.– Si el precio de adquisición del inmueble es inferior al valor que tenía el inmueble en el momento de la convención, el Estado tendrá la facultad de quedar dueño del mismo pagando la diferencia entre estos valores y de no ejercer el Estado dicha facultad, el reclamante podrá adquirir el inmueble devolviendo el precio que ha pagado la persona condenada a la confiscación de sus bienes. En caso de que no se ejerzan ninguna de esas facultades, el Tribunal podrá acordar al reclamante una compensación que no exceda del monto de la diferencia ya indicada entre el valor del inmueble y el precio pagado por el comprador.

Artículo 37.– Si el inmueble reclamado forma parte de una explotación agrícola, industrial o comercial, o si en él se han levantado edificios públicos o construcciones valiosas, o esté o pueda ser destinado a fines de utilidad pública o de interés social, el Tribunal no podrá ordenar en ningún caso la restitución o devolución del inmueble, pero declarará, cuando proceda, que el demandante tiene derecho a una compensación y enviará a las partes para que se pongan de acuerdo ante el Juez que comisione el Tribunal, de su mismo seno, respecto del monto y de las modalidades de la compensación. El representante del Estado tendrá plenos poderes para pactar con el demandante, y en caso de no acuerdo el Juez comisionado así lo informará al Tribunal para que éste fije la reparación que corresponde.

Artículo 38.– Si el inmueble que se reclama como consecuencia del abuso o usurpación del Poder se encuentra en poder de un tercero, se presume, hasta prueba en contrario, que éste es de mala fé y se restituirá el inmueble, con todas sus mejoras y sin compensación alguna, al demandante que ha obtenido ganancia de causa.

Artículo 39.– Si el tercero demuestra su buena fé, podrá conservar el inmueble pagando al reclamante una suma

equivalente o la mitad del valor que tenía dicho inmueble en el momento en que se cometió el abuso o usurpación del Poder.

Artículo 40.– Si el adquiriente es el Estado o una institución autónoma del Estado o un municipio el caso será regido por las disposiciones de los artículos 34, 35, 36 y 37 de la presente ley.

Artículo 41.– Para fijar las compensaciones a que puedan tener derecho las partes, el Tribunal podrá tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, pero la compensación o restitución que se ponga a cargo del Estado no podrá exceder, en ninguna de las situaciones expresadas, del valor que tenía el inmueble en el momento de la usurpación o de la convención que operó el transferimiento del derecho de propiedad.

El Tribunal podrá además acordar que las compensaciones puestas a cargo del Estado sean pagadas en plazos periódicos, ya trimestrales, semestrales o anuales, durante un término máximo de diez años, cuando se trate de compensaciones elevadas y que el Estado así lo solicite.

CAPITULO XII

Disposiciones finales

Artículo 42.– Todos los asuntos que se encuentren pendientes de fallo ante otros Tribunales que sean de la competencia del Tribunal de Confiscaciones, serán declinados a este Tribunal por vía de Secretaría, para los fines de conocimiento y fallo. El Tribunal llevará a conocimiento de las partes la declinatoria y éstas últimas podrán pedir nueva discusión del asunto.

Artículo 43.– La presente ley deroga toda ley o parte de Ley que le sea contraria y entrará en vigor el 15 de junio del año en curso.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiseis días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiseis días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5925, que declara el 30 de mayo día de fiesta nacional

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5925

CONSIDERANDO que el 30 de mayo de 1961 ha pasado a la historia de la República como una de sus fechas más gloriosas,

porque en ese día cayó decapitada la tiranía imperante para abrir el camino a una nueva orientación que se caracteriza por el disfrute de la libertad, el respecto a los principios democráticos y la implantación de las normas conducentes a la realización de la justicia social;

CONSIDERANDO que es deber del Consejo de Estado, haciéndose así intérprete del sentimiento nacional, darle a la hazaña heroica de ese día el sitial que le corresponde, ya que él representa un hito trascendental en la lucha por la libertad;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.– Se declara día de fiesta nacional, y por tanto no laborable, el 30 de mayo de cada año.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiseis días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tío
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiseis días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5926, que denomina "San Fernando" la Fortaleza del Ejército Nacional de Montecristi

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5926

CONSIDERANDO: que el Patrón de la ciudad de Monte Cristi es San Fernando;

CONSIDERANDO: que todas las clases sociales de la ciudad de Monte Cristi han solicitado que la Fortaleza del Ejército Nacional en aquella localidad sea denominada con el nombre de su Patrón;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– La Fortaleza del Ejército Nacional, de Monte Cristi, se denominará en lo adelante Fortaleza "San Fernando".

Artículo 2.– Queda modificado, en cuanto sea necesario, la Ley No. 4891, de fecha 25 de abril de 1958.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5927, que deroga la Ley No.5459, del 21 de diciembre de 1960, que autoriza la libre circulación del dólar canadience en el territorio nacional.

República Dominicana
EL CONSEJO DE ESTADO

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5927

ARTICULO UNICO.– Queda derogada la Ley No.5459, de fecha 21 de diciembre de 1960, que autoriza la libre circulación del dólar canadiense en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de l Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de mayo del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5928, que prorroga nuevamente, por 30 días más, las previsiones de la Ley No. 5830, del 28 de febrero de 1962, que declara indisponibles durante 60 días los beneficios de las compañías bajo control y fiscalización del gobierno

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5928

ARTICULO UNICO.– Quedan nuevamente prorrogadas por 30 días más las previsiones de la Ley No. 5830, de fecha 28 de febrero de 1962, que declara indisponibles durante 60 días a partir de la publicación de la misma, los beneficios de las compañías que se encuentren bajo el control y fiscalización del Gobierno Dominicano, de acuerdo con las disposiciones legales dictadas al efecto, y establece que no podrá hacerse ninguna repartición de dividendos durante dicho período entre los accionistas de esas Compañías.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5929, que deroga el artículo 1, de la Ley No. 5690, del 1ro. de diciembre de 1961 (Certificado previsto en la Ley de Patentes)

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5929

CONSIDERANDO que las facilidades auspiciadas por el Gobierno para importar mercancías y la mayor demanda de numerosos productos de consumo interno han favorecido notablemente las ventas del comercio nacional, que de seguro alcancen este año niveles superiores, y que debido a esa circunstancia un considerable número de industrias nacionales están elaborando a plena capacidad sus productos para abastecer las necesidades del mercado;

CONSIDERANDO que este bienestar que ha experimentado el comercio y la industria nacionales sólo podrá mantenerse asegurando la estabilidad económica del país, a lo cual contribuye la creación y ejecución de presupuestos bien balanceados:

CONSIDERANDO que, en tal virtud, se requiere entre otras medidas, el restablecimiento del monto total de ciertas tasas impositivas, como las relativas al certificado que se expide de conformidad con la Ley de Patentes;

CONSIDERANDO que el propósito perseguido se justifica más si se tiene en cuenta que está encaminado a establecer un fondo especial para cubrir los aumentos de sueldos hechos recientemente a los Maestros de Escuelas al servicio del Estado, quienes por su noble esfuerzo en la formación cultural de las generaciones presentes son merecedores de una remuneración adecuada:

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– A partir del 1ro. de junio del año en curso queda derogado el artículo 1 de la Ley No. 5690, de fecha 1ro. de diciembre de 1961, en cuanto dispone que toda persona física o moral, obligada a proveerse de un certificado, de acuerdo con la Ley de Patentes No. 4456, de fecha 24 de mayo de 1956, solamente estará sujeta como único pago, al cincuenta por ciento

(50 o/o) del impuesto que figura en la Tarifa contenida en las Secciones I, II, III, IV y V del Capítulo 8o. de la misma.

Párrafo I.– El producto total del cincuenta por ciento (50 o/o) del Impuesto sobre Patentes que como consecuencia de lo dispuesto por este artículo en nada afectan las previsiones de los artículos 7, de la citada Ley No.5690, y 44 de la referida Ley de Patentes No.4456, últimamente modificado por aquella.

Párrafo II.– Queda entendido que las disposiciones del presente artículo en nada afectan las previsiones de los artículos 7. de la citada Ley No. 5690, y 44 de la referida Ley de Patentes No. 4456, últimamente modificado por aquella.

Artículo 2.– Asimismo, quedan derogados los artículos 4, 9 y 10 de la Ley No. 5690, del 1ro. de diciembre de 1961.

Artículo 3.– El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo que fuere necesario para la fiel aplicación de esta Ley.

Artículo 4.– La presente ley deroga cualquier otra disposición legal que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintinueve días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5930, que suprime la Gobernación Civil del Distrito Nacional, y dicta otras disposiciones

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5930

Artículo 1.– Queda suprimida la Gobernación Civil del Distrito Nacional.

Artículo 2.– Se modifica el artículo 1 de la Ley sobre Certificados de Buena Conducta No. 255, del 10 de abril de 1943, reformado por la Ley No. 5383, del 4 de agosto de 1960, para que rija del siguiente modo:

"Artículo 1.- Los Certificados de Vidas y Costumbres (Certificados de Buena Conducta) serán expedidos en el Distrito Nacional exclusivamente por la Secretaría de Estado de Interior y Policía, en los Municipios cabeceras de provincia exclusivamente por los Gobernadores Civiles y en los demás Municipios exclusivamente por los Síndicos Municipales respectivos."

Artículo 3.- Queda derogada la Ley No. 5383, de fecha 4 de agosto de 1960, así como cualquier otra ley o disposición en cuanto sean contrarias a las prescripciones de la presente ley.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEFL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 5931, que jubila con pensión del Estado al Lic. Manuel Gatón Richiez

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5931

VISTO el Artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede el beneficio de la jubilación y se le asigna una pensión del Estado de ciento setenta y cinco pesos oro (RD$175.00) mensuales al Lic. Manuel Gatón Richiez.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jublaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo d eEstado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5932, que jubila con pensión del Estado al señor Augusto Saladín T.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5932

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se concede el beneficio de la jubilación al señor Augusto Saladín T., y se le asigna una pensión del Estado de doscientos pesos oro (RD$200.00) mensuales.

Artículo 2.— Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119º de la Independencia y 99º de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119° de la Independencia y 99° de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5933, que regula la concertación de arrendamientos de terrenos rurales.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5933

CONSIDERANDO: Que a causa de los inconvenientes que experimenta la producción agrícola y de los trastornos derivados de la pasada tiranía, el pequeño agricultor dominicano se ve sometido muchas veces a ejecuciones judiciales de sus propiedades, las cuales constituyen los recursos económicos de sus familias y el bienestar social de la región donde radican;

CONSIDERANDO: Que una vasta extensión de las tierras laborales del país se encuentran en explotación agrícola o con asiento de crianza o de industrias rurales, bajo la forma de arrendamiento;

CONSIDERANDO: Que los arrendatarios rurales generalmente no están en condiciones de hacer una justa estimación de las ganancias que puedan obtener como resultado de sus faenas, ni de las cargas y obligaciones que asumen al contratar los arrendamientos, todo lo cual determina frecuentemente que su trabajo resulta improductivo frustratorio, creando así un desaliento para el trabajo de los campos que a la postre perjudica tanto a los propios arrendatarios como a los propietarios de las tierras;

CONSIDERANDO: Que los sistemas usados en el crédito agrícola ha perjudicado el pequeño agricultor dominicano en tal

forma, que no les permite solventar sus deudas de una manera normal y regular, dando ello origen a las frecuentes pérdidas de sus propiedades rurales;

CONSIDERANDO: Que es deber del Gobierno dictar toda medida que prevenga las posibles causas de trastornos sociales y debilitamiento de la economía nacional, de la cual forma parte esencial el trabajo de los campos por la familia campesina;

CONSIDERANDO: Que es necesario hacer que el campesino dominicano se arraigue a su tierra y vea en ella la fuente de producción y el fundamento esencial de la evolución social de su familia;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— A partir de la entrada en vigor de la presente Ley no será valido ningún contrato de arrendamiento de terrenos rurales que no se haya hecho por escrito y en el cual conste la aprobación de la Secretaría de Estado de Agricultura.

La aprobación estará a cargo del Secretario de Estado de Agricultura o de los funcionarios a los cuales dicho Secretario de Estado delegue esa atribución. En caso de disconformidad de los arrendadores y arrendatarios, éstos podrán en todo caso solicitar la aprobación personal del Secretario de Estado.

La aprobación personal del Secretario de Estado será indispensable siempre y cuando se trate de arrendamiento de porciones de terrenos de 1,200 tareas o más.

Artículo 2.— Estarán bajo el alcance de esta Ley no solamente los arrendamientos que sigan las pautas del Código Civil sino todos los otros contratos que habitualmente se estipulan en las regiones rurales como equivalente a arrendamientos.

Artículo 3.— La aprobación no será otorgada sino cuando en el contrato se estipule un precio de arrendamiento o un pago del mismo razonablemente favorable para el campesino arrendatario o arrendador, y una duración del contrato que resulte adecuada para el buen éxito del género de trabajo que se ha de continuar o emprender en el terreno.

Artículo 4.— Es entendido que la aprobación de un contrato de arrendamiento por la Secretaría de Estado de Agricultura no constituirá ninguna prueba ni perjuicio acerca del derecho de propiedad de terreno o de la legitimidad de los derechos del arrendador.

Artículo 5.— Los precios de arrendamiento o los pagos que se fijen en virtud de esta ley se reputarán como los ingresos que reciben los arrendadores correspondientes por ese concepto, para todos los fines legales.

Artículo 6.— Los contratos de arrendamientos aprobados en virtud de esta Ley por la Secretaría de Estado de Agricultura no estarán sujetos al impuesto sobre documentos, en lo que respecta al hecho de esa aprobación.

Artículo 7.— Asimismo, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley ningún acreedor podrá ejecutar judicialmente las acreencias de cualquier naturaleza que tenga frente a agricultores si previamente no ha solicitado la intervención de la Secretaría de Estado de Agricultura.

PARRAFO I.— La Secretaría de Estado de Agricultura en presencia del agricultor deudor y del acreedor, o de sus representantes, tratará por todos los medios de buscar una fórmula equitativa para la solución de los problemas existentes, a fin de evitar la desposesión del agricultor deudor, garantizando al acreedor el pago de su acreencia en la forma y condiciones convenidas o determinadas por la Secretaría de Estado de Agricultura como justa fórmula para evitar los perjuicios y las pérdidas de los fondos asiento de la familia campesina.

PARRAFO II.— El incumplimiento por parte del agricultor de la fórmula propuesta por la Secretaría de Estado de Agricultura y aceptada por aquel, permitirá a los acreedores obtener de la mencionada Secretaría de Estado una certificación que determine el incumplimiento de tal obligación, pudiendo, en consecuencia, el acreedor incoar las acciones judiciales que crea oportuna para el resguardo de sus derechos.

PARRAFO III.— La Secretaría de Estado de Agricultura, en caso de fuerza mayor debidamente reconocidos por dicho Departamento, podrá determinar moratorias para el pago de

cualquier deuda de un agricultor, siempre y cuando establezca garantías privilegiadas en favor de los acreedores, en todos los casos en que ello sea posible.

Artículo 8.– El Secretario de Estado de Agricultura, por medio de Resoluciones que deberán ser aprobadas por el Consejo de Estado, podrá dictar regulaciones detalladas para la ejecución de esta ley, las cuales serán publicadas en la Gaceta Oficial o en cualquier periódico de amplia circulación nacional, y las mismas serán obligatorias después de los quince días de su publicación.

Artículo 9.–Toda infracción a esta ley o a las regulaciones previstas anteriormente se castigará con prisión correcional de un mes a dos años, o multa de RD$10.00 a RD$50.00, o con ambas penas a la vez en los casos graves.

Artículo 10.– La presente ley deroga cualquier disposición legal que le sea contraria o incompatible.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5934, que deroga la Ley No.5180, del 27 de julio del 1959, que creó la Dirección y Control de Drogas Narcóticas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5934

Artículo 1.– Queda derogada la Ley No. 5180, de fecha 27 del mes de julio de 1959, que creó la Dirección y Control de Drogas Narcóticas.

Artículo 2.– Se restablecen los artículos 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 (Capítulo II) del Código de Salud Pública (Ley No. 4471 del 3 de junio de 1956), cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 128.– La producción agrícola o industrial, elaboración, importación o exportación, transporte, distribución

en cualquier forma, comercio, compra, posesión, prescripción médica, uso, consumo y en general todo acto relacionado con el tráfico o suministro de drogas narcóticas de sus derivados o de cualquier producto reputado como tal, queda sujeto a lo establecido en los tratados y Convenios Internacionales suscritos por el país sobre esta materia, a las disposiciones de este Código y a las demás leyes vigentes".

"Artículo 129.- Se prohibe sembrar o cultivar o cosechar en el país cualquier planta o especie de las cuales puedan extraerse drogas narcóticas o elementos constitutivos de los mismos".

"Artículo 130.- Un Reglamento dictado por el Presidente de la República regulará en detalle todo lo relacionado con el tránsito y comercio de las drogas narcóticas en el territorio nacional y las destinadas a otros países, de acuerdo con los compromisos internacionales contraídos por el Gobierno, así como también todas las demás fases mencionadas en el artículo 128".

Artículo 131.- Sólo podrán prescribir drogas narcóticas los medicos, los veterinarios y los dentistas debidamente registrados, los cuales deberán especificar en cada caso el empleo que darán a dichas sustancias y las demás informaciones que especifique el Reglamento respectivo.

Los farmacéuticos no podrán despachar las recetas que no estén formuladas de acuerdo con las especificaciones del reglamento respectivo".

"Artículo 132.- Sin perjuicio de los artículos 128, 129, 130, 131 la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social tendrá a su cargo todos los aspectos del control de las drogas narcóticas, sus derivados y productos similares".

"Artículo 133.- El Presidente de la República reglamentará todo lo relativo a los certificados de inscripción de drogas narcóticas así como los derechos que se deben pagar por dicho concepto".

"Artículo 134.- Para facilitar el cumplimiento de las atribuciones, funciones y obligaciones establecidas en esta Ley en relación con el control de los productos indicados en este capítulo los dueños o encargados de las empresas o

establecimientos destinados a la importación, fabricación, envase, almacenamiento, distribución y venta de dichos productos, tendrán la obligación de permitir a los funcionarios o empleados de la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social, debidamente acreditados, el libre acceso a sus locales, y la inspección de las instalaciones, maquinarias, talleres, equipos, utensilios, vehículos y existencias y a entregar o facilitar las muestras que sean necesarias de acuerdo con las leyes y Reglamentos vigentes.

Las muestras se retirarán bajo recibo, dejando contra muestras selladas, asimismo, los funcionarios o empleados de la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social podrán retirar de la Aduana las muestras que fuere necesario examinar"

Artículo 3.— A partir de la presente ley todo lo relacionado con Drogas Narcóticas estará bajo la dirección y supervigilancia de la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social.

Artículo 4.— El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo relacionado con la materia objeto de esta Ley.

Artículo 5.— La presente Ley deroga y sustituye toda ley, reglamento o parte de ley que, le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Ca minero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5935, que designa con el nombre de "Dr. Robert Reid Cabral" el hospital infantil María Trinidad Sánchez, de la ciudad de Santo Domingo.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5935

CONSIDERANDO que el Dr. Robert Reid Cabral consagró su juventud a la ciencia, distinguiéndose como Pediatra de reconocida capacidad y como profesional dotado de elevados y nobles sentimientos altruistas;

CONSIDERANDO que a sus relevantes virtudes profesionales unió la de su amor a la Patria y a los principios democráticos

hasta llegar al sacrificio de su vida, tras haber ofrecido protección y asilo a algunos de los hombres comprometidos en la gesta heróica del 30 de Mayo, que culminó con el ajusticiamiento del tirano;

CONSIDERANDo que ninguna ocasión es más propicia para materializar el homenaje de agradecimiento a que se ha hecho acreedor tan distinguido galeno que la fecha en que se cumple el primer aniversario de su sentida pérdida, ni ningún centro hospitalario es más apropiado para grabar definitivamente su recuerdo, ostentando su nombre, que aquél en que él dió notaciones constantes de su saber y de humanitario desprendimiento;

CONSIDERANDO: por otra parte, que la Asociación Médica Dominicana, Inc., ha solicitado del Consejo de Estado que se tribute en memoria del Dr. Robert Reid Cabral el referido homenaje:

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se designa con el nombre de DR. ROBERT REID CABRAL el centro hospitalario infantil María Trinidad Sánchez, de la ciudad de Santo Domingo.

Artículo 2.– Queda derogado el artículo 4 de la Ley No. 5573, del 7 de julio de 1961.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Read Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional y en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los cinco días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5936, que deroga el Art. 1ro. de la Ley No.5194, del 20 de agosto de 1959, que establece la obligación de inscripción en un registro, de iguales recibidas por trabajos profesionales.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5936

CONSIDERANDO que la disposición contenida en la Ley No. 5194, de fecha 20 de agosto de 1959, votada durante el régimen de la pasada tiranía, que establece la obligación de

inscripcion en un registro especial de parte de los profesionales que presten sus servicios mediante el pago de una remuneración a base del sistema llamado de iguala, tiende a controlar con fiens políticos el libre ejercicio profesional de la República;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.— Queda derogado el artículo 1ro. de la Ley No. 5194 de fecha 20 de agosto de 1959, que establece la obligación de inscripción en un registro especial que se llevará en la Secretaría de Estado de Justicia tanto para los profesionales que presten sus servicios mediante el pago de una remuneración a base del sistema llamado de iguala, como para los asesores, consultores o empleados técnicos o jurídicos permanentes que estén igualado a base de un sueldo fijo o por casos o consultas determinados.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de junio de mil novecientos esenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la Re pública
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral.
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez.
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5837, que agrega un párrafo al Art. 245 del Código Penal.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5937

ARTICULO UNICO.– Se agrega el siguiente párrafo al artículo 245 del Código Penal, para que rija con el texto que indica a continuación.

"Párrafo.– Las evasiones o tentativas de evasión, efectuadas por los presos, sin auxilio extraño, burlando la vigilancia de sus custodias, conductores o guardianes, serán castigadas con la pena de un mes a seis meses de prisión correccional. Estas penas las sufrirán los fugitivos inmediatamente después de cumplida su condena o después que se les descargue de los hechos a que dió lugar la imputación del crimen o delito que motivó su prisión".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la Rc pública
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No.5938, del Consejo de Estado, que nombra al Lic. Quirico Elpidio Pérez Segundo Suplente del Lic. Abigail Delmonte, Miembro de la Junta Central Electoral.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5938

VISTA: la renuncia presentada por el Dr. Lupo Hernández Rueda;

VISTO: el Párrafo transitorio del artículo 4 de la Ley No. 5891, de fecha 8 de mayo de 1962;

RESUELVE:

ARTICULO UNICO.– El Lic. Quírico Elpidio Pérez, queda designado Segundo Suplente del Lic. Abigail Delmonte, miembro de la Junta Central Electoral, en sustitución del Dr. Lupo Hernández Rueda.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imber Barreras,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5939, sobre la prolongación de la Jornada normal de trabajo en empresas industriales o comerciales.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5939

CONSIDERANDO: que es de urgente necesidad en nuestro país, dada la gran cantidad personas desocupadas, el que se dicten medidas encaminadas a eliminar, de manera gradual, tan lamentable realidad;

CONSIDERANDO: que frecuentemente las empresas tienen la necesidad de utilizar trabajadores para la realización de horas

extras de trabajo, y que es universalmente aceptado que uno de los medios con que cuentan los gobiernos para aliviar el problema social derivado del desempleo es obtener que las personas desocupadas sean utilizadas en esas labores;

CONSIDERANDO: que, sin embargo, no puede desconocerse el hecho de que la puesta en vigencia de medidas de esta naturaleza podría ocasionar perjuicios económicos a las empresas como consecuencia de la falta de experiencia del personal nuevo que tengan la obligación de utilizar, razón por la cual se hace necesario brindarles protección durante el tiempo que se considere indispensable para la adquisición por los trabajadores nuevos de los conocimientos y adiestramiento necesarios para la mejor realización de las labores a su cargo;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– En los casos de prolongación de la jornada normal de trabajo, los patronos estarán en la obligación de emplear un personal nuevo, distinto al que regularmente utilizan en su empresa, sea esta industrial o comercial.

Artículo 2.– Para los fines de esta ley, se considerará personal adicional, sujeto a las regulaciones que en ella se establecen, todos los trabajadores que se utilicen fuera de la jornada normal diaria establecida por la empresa o industria en sus carteles de horario.

Artículo 3.– En los casos en que las empresas utilicen personal adicional, de acuerdo con las prescripciones de esta ley, dicho personal recibirá como salario, durante los primeros quince (15) días de trabajo, el importe de la mitad del salario normal.

Artículo 4.– Las horas de trabajo rendidas por el personal adicional utilizado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, se considerarán como extraordinarias, y el pago de las mismas se hará conforme al artículo 195 del Código de Trabajo, modificado por la Ley No. 5360, de fecha 20 de mayo de 1960, y al Reglamento No. 6127, de fecha 11 de octubre de 1960.

Artículo 5.– Los trabajadores adicionales utilizados en virtud de la presente ley estarán exentos del pago de las cotizaciones

del Seguro Social obligatorio y de sus beneficios, por el término de un año; estarán exentos, también por el término de un año, de los beneficios del preaviso, auxilio de cesantía y vacaciones pagadas.

Artículo 6.— La presente ley no será aplicable a los trabajadores del arrimo, ni a los trabajadores ocupados en la carga y descarga de buques que trabajen a base de un sistema de turnos rotativos.

Artículo 7.— La presente ley entrará en vigor treinta (30) días después de su publicación, con la finalidad de que las empresas puedan hacer los ajustes necesarios en su personal.

Artículo 8.— Los trabajadores adicionales a quienes se refiere esta ley gozarán de los beneficios del Seguro Social obligatorio y de preaviso, auxilio de cesantía y vacaciones proporcionales en aquellos casos en que por las necesidades de la empresa se conviertan en trabajadores fijos.

Artículo 9.— La violación a la presente ley en que incurran los empleadores será castigada con multa de treinta a quinientos pesos oro, o con prisión de quince días a seis meses, o con ambas penas a la vez. En los casos en que el empleador sea una persona moral la pena de prisión se impondrá al administrador o gerente de la empresa en falta.

Artículo 10.— Serán competentes para conocer de las violaciones a la presente ley los Juzgados de Primera Instancia correspondientes.

Artículo 11.— La presente ley deroga o modifica, durante el término de su vigencia, en cuanto sea necesario, las disposiciones del Código de Trabajo sobre la materia, así como cualesquiera otras disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 12.— La duración de la presente ley es por el término de un año a partir de su entrada en vigencia.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de junio del mil novecientos

sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Jose Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la RepúblicA Dominicna

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5940 que agrega dos párrafos al Art. 109 de la Ley No.3483 que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5940

Artículo 1.– Se agregan los siguientes párrafos al Artículo 109 de la Ley No. 3483, de fecha 13 de febrero de 1953, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas:

Párrafo I.– Los militares que valiéndose de falsas noticias o de falsos rumores tratasen de quebrantar la moral y la disciplina, o hacer creer la existencia de un estado de cosas que afecte la seguridad o la tranquilidad de las tropas, serán condenados a la pena de reclusión.

Párrafo II.– Si la seguridad de las Fuerzas Armadas se comprometiera, serán condenados en la pena de 3 a 10 años de trabajos públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Re pública Dominicana, a los seis días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los seis días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No.5941, del Consejo de Estado, que aprueba un Contrato suscrito entre el Estado Dominicano y el Servicio Social Cristiano de Iglesias Dominicanas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5941

VISTOS los artículos 38, inciso 20, y 116 (transitorio) de la Constitución de la República;

VISTO el contrato suscrito entre el Estado Dominicano y el Servicio Social Cristiano de Iglesias Dominicanas, en fecha doce de mayo de mil novecientos sesenta y dos;

RESUELVE:

UNICO.— Aprobar el Contrato suscrito en fecha doce de mayo del mil novecientos sesenta y dos, entre el Estado Dominicano y

el Servicio Social Cristiano de Iglesias Dominicanas, que copiado a la letra dice así:

"Artículo I

Servicio Social Cristiano en representación de las siguientes asociaciones religiosas establecidas de acuerdo con las leyes de la República Dominicana: Asamblea de Dios, Bíblica Cristiana, Iglesia Episcopal Dominicana, Iglesia Evangélica Dominicana, Iglesia Evangélica Sureña, Iglesia Libre Medodista, Iglesia Metodista Episcopal, Misión Evangélica de las Antillas y otras, desarrollará un programa de servicio social en el país destinado a servir a la Comunidad Dominicana, sin discriminación de credo o raza. Para estos fines obtendrá de sus iglesias hermanas en varios países del mundo embarques de varias clases de artículos que se designan en otro ordinal del presente contrato.

Artículo II

Estos artículos obtenidos en la forma precedentemente indicada, serán distribuídos gratuitamente por los Comités Locales dentro del programa de Servicio Social Cristiano o a personas morales que esta organización designará, laborando en cooperación con "Church World Service" de los Estados Unidos de Norteamérica y con organizaciones similares de otros países del mundo.

Artículo III

Estos artículos consistirán entre otros en medicinas, ropas usadas, comestibles, semillas, herramientas agrícolas, molinos de vientos, máquinas de coser y ganado, pero esta enumeración no es limitativa, sino puramente enunciativa, siempre bajo la condición de que serán usados exclusivamente para el programa establecido por Servicio Social Cristiano.

Artículo IV

Estos artículos vendrán al país consignados al

SERVICIO SOCIAL CRISTIANO
De Iglesias Dominicanas
Emiliano Tejera 6A
Santo Domingo, República Dominicana

Atención: Secretario Nacional
(Representante del "Church World Service")

Artículo V

El Estado Dominicano conviene en permitir el trabajo del Servicio Social Dominicano en todo el país.

Artículo VI

El Estado Dominicano conviene en permitir a Servicio Social Cristiano importar los artículos mencionados en Artículo III del presente contrato, libre del pago de los derechos, impuestos, tarifas, muellaje o cargos que rijan en el país a la llegada de los mencionados artículos; así mismo el Estado Dominicano pagará el costo de almacenaje o arrimo de Aduana, el transporte de estos artículos desde la Aduana hasta el almacén del Servicio Social Cristiano en la Capital de Santo Domingo, y de dicho almacén a los puntos regionales de distribución.

Párrafo I

En el programa de Servicio Social Cristiano se usarán nueve puntos regionales de distribución: Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Dajabón, San Pedro de Macoris, La Romana, Barahona y San Juan de la Maguana.

Párrafo II

Los Comités Regionales establecidos dentro del programa de Servicio Social Cristiano serán responsables a los gastos ocasionados para el almacenaje y del cuidado de los artículos en estos puntos, así como de la distribución hecha desde estos puntos.

Artículo VII

La distribución será realizada después de estudios cuidadosos de la naturaleza de las necesidades, a veces por instituciones, a veces por equipos de expertos y a veces directamente a los necesitados. Servicio Social Cristiano solicitará información técnica a los distintos organismos del Estado Dominicano, pero siempre la distribución estará a cargo de Servicio Social Cristiano.

Artículo VIII

Este contrato entrará en vigor tan pronto como esté firmado por las dos partes y tendrá vigencia hasta que una de las partes informe a la otra su deseo o intención de disolverlo o rescindirlo, dentro de un término de seis meses.

Fecha: 12 de mayo de 1962

Lugar: Santo Domingo, D. N.

Presidente de la República
y Presidente del Consejo de
Estado

Presidente de Servicio Social
Cristiano de Iglesia Dominicana"

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de Junio del año mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5942, que modifica nuevamente el Art. 2 de la Ley No.595 de octubre 31 de 1941, relativo a la tarifa para el Servicio de Arrimo y Manejo de Cargas en los puertos nacionales.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5942

CONSIDERANDO que como consecuencia del aumento de los salarios que percibían los trabajadores del Servicio de Arrimo y Manejo de Carga en los puertos nacionales, se hace necesario modificar la tarifa existente en relación con dicho servicio;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

UNICO.– El Artículo 2 de la Ley No. 595, del 31 de octubre de 1941 relativo a la tarifa para el Servicio de Arrimo y Manejo de Cargas en los puertos nacionales, modificado por las leyes Nos. 683, 568, 1141, 3544, 4387 y 5148, de fechas 11 de febrero de 1942, 22 de abril de 1944, 22 de marzo de 1946, 9 de mayo de 1953, 9 de noviembre de 1953, 18 de febrero de 1956 y 12 de junio de 1959, respectivamente, queda modificado para que a partir de la fecha de su promulgación, se lea de la siguiente manera:

"Artículo 2.— Dicho servicio será cobrado de acuerdo con la siguiente tarifa:

IMPORTACION:

Carga General	RD$4.00 los 1,000 kilos
Maderas	RD$3.00 los 1,000 kilos
Carbón,	RD$1.50 los 1,000 kilos
Reses, caballos, etc.	RD$0.25 cada uno

EXPORTACION

Carga General	RD$1.20 los 1,000 kilos
Reses, caballos, etc.	RD$0.25 cada uno
Azúcar,	RD$0.0125 por cada saco de 45.36 kilos
Azúcar,	RD$0.022 por cada saco de 113.40 kilos
Azúcar,	RD$0.025 por cada saco de 145.15 kilos

CABOTAJE

Carga General,	RD$0.35 los 1,000 kilos
Maderas,	RD$0.30 los 1,000 kilos
Traviesas,	RD$0.015 cada una
Maíz,	RD$0.15 los 1,000 kilos

CABOTAJE EN TRANSITO

La mitad de los derechos señalados anteriormente para Cabotaje.

TRANSITO DEL EXTERIOR Y PARA EL EXTERIOR:

A la entrada,	RD$1.25 los 1,000 kilos
A la salida,	RD$1.25 los 1,000 kilos

Párrafo I.— Cuando se trate de arrimo de guineos y siempre que la manipulación de los mismos así lo exija, se cobrará un derecho adicional de un cuarto de centavo (RD$0. 0025) por cada racimo.

Párrafo II.— El pago de este servicio deberá ser hecho a la Aduana correspondiente, por el agente, consignatario, capitán o

dueño del buque, dentro de los diez días siguientes a la entrega de la liquidación, que deberá ser hecha mediante acuse de recibo. Vencido este plazo, se cobrará un recargo de un cinco por ciento (5 o/o) por el primer mes o fracción de mes y un diez por ciento (10 o/o) por cada mes o fracción de mes subsiguiente."

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la Presenta Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5943, que establece un impuesto especial de medio centavo sobre cada galón de Diesel Oil

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5943

Artículo 1.— Se establece un impuesto especial de medio centavo sobre cada galón de Diesel Oil que sea importado al país, el cual será liquidado y recaudado por las aduanas al mismo tiempo y bajo el mismo régimen legal de los demás impuestos de importación.

Párrafo.— Este impuesto no podrá ser traspasado al consumidor.

Artículo 2.— No se concederá ninguna exoneración relativa al impuesto establecido por la presente ley.

Artículo 3.— Queda derogada la Ley No. 5671, de fecha 15 de noviembre de 1961, y la Ley No. 5599, de fecha 11 de agosto de 1961, en cuanto se refiera al Diesel Oil.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional Capital de la República Dominicana, a los ocho días del mes de junio de mil

novecientos sesenta y dos, años 119no. de la independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5944

CONSIDERANDO: Que es preciso determinar la jurisdicción territorial y el asiento de las Juntas Departamentales Electorales, instituídas por la vigente Ley Electoral;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.- Las Juntas Departamentales Electorales tendrán los asientos y jurisdicciones territoriales que se indican a continuación:

a) Junta Departamental Electoral de San Juan, con asiento en la ciudad de San Juan de la Maguana, y con jurisdicción en las provincias de San Juan y Elías Piña;

b) Junta Departamental Electoral de Barahona, con asiento en la ciudad de Barahona, y con jurisdicción en las provincias de Barahona, Baoruco, Independencia y Pedernales;

c) Junta Departamental Electoral de Peravia, con asiento en la ciudad de Baní, y con jurisdicción en las Provincias de San Cristóbal, Peravia y Azua;

d) Junta Departamental Electoral de Santiago, con asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y con jurisdicción en las Provincias de Santiago, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón y Monte Cristi;

e) Junta Departamental Electoral de San Pedro de Macorís, con asiento en la ciudad de San Pedro de Macorís, y con jurisdicción en las Provincias de San Pedro de Macorís, El Seibo y La Romana;

f) Junta Departamental Electoral de La Vega, con asiento en la ciudad de La Vega, y con jurisdicción en las Provincias de La Vega, Sánchez Ramírez, Salcedo, Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República y del
Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5945, que exonera de todo impuesto la importación de semillas destinadas a la siembra y explotación agrícola.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5945

Artículo 1.– A partir de la publicación de la presente Ley, queda exonerada de todo impuesto la importación de semillas destinadas a la siembra y explotación agrícola.

Artículo 2.– Previamente a la importación de cualquier partida de semillas para los fines indicados, el importador deberá solicitar a la Secretaría de Estado de Agricultura, un permiso para tales fines indicando el uso al cual van a ser destinadas.

Artículo 3.– Cuando las semillas importadas lo sean para fines de especulación mercantil, dichas semillas no podrán se. vendidas al agricultor que vaya a hace. uso de ellas con un beneficio mayor del 10 por ciento del costo de las mismas.

Artículo 4.— Cualquier violación a la presente Ley, será castigada con multas de RD$10.00 a RD$500.00, o prisión de uno a seis meses o ambas penas a a la vez, según la magnitud de la infracción.

Artículo 5.— La Secretaría de Estado de Agricultura queda encargada del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 6.— La presente Ley deroga y sustituye cualquier otra disposición legal que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99 no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5946, que prohibe la importación de productos agrícolas en períodos de cosecha nacional de los mismos.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5946

CONSIDERANDO: Que es deber del Estado velar porque el productor agrícola pueda colocar en los mercados internos las cosechas que adquiere;

CONSIDERANDO: Que en virtud de las disposiciones de la Ley No. 4990, sobre Sanidad Vegetal, la importación de plantas, frutos. semillas bulbos, risomas, flores y cualquier parte de vegetales vivos o muertos, está prohibida en la República, y la Secretaría de Estado de Agricultura está facultada para conceder los permisos correspondientes para la importación en el país, de vegetales o partes de estos;

CONSIDERANDO: Que desde el punto de vista económico y de bienestar social para las masas campesinas es necesario

garantizar a esas masas campesinas la segura venta de sus productos, a los precios normales de los mercados internos;

CONSIDERANDO: Que la práctica del comercio importador, de introducir en las épocas de cosecha nacional productos extranjeros similares a los productos nacionales, permite a estos constreñir al productor nacional a venderle a precios ruinosos por debajo del precio de los importados;

CONSIDERANDO: Que tal práctica perjudica grandemente al cosechero nacional, quien las más de las veces se ve constreñido a vender sus productos a un precio ruinoso e inferior a costo de producción.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– La importación de productos agrícolas en períodos de cosecha nacional de los mismos, queda absolutamente prohibida.

Artículo 2.– La Secretaría de Estado de Agricultura determinará los períodos de cosechas de los diversos productos agrícolas, debiendo publicar un aviso por el cual señale el comienzo y el fin de dicho período, durante el cual quedará absolutamente prohibida la importación de los mismos al territorio nacional.

Artículo 3.– Toda importación de vegetales o productos agrícolas, deberá ser autorizada previamente por la Secretaría de Estado de Agricultura, la cual negará los permisos correspondientes en los períodos de cosecha nacional.

Artículo 4.– Ninguna compañía marítima o aérea, o de transporte terrestre, permitirá en sus naves y vehículos la transportación de vegetales o productos agrícolas que no estén debidamente amparados por la certificación o permiso de la Secretaría de Estado de Agricultura. Estos permisos deberán ser solicitados antes de la colocación del pedido de estos vegetales o productos agrícolas.

Artículo 5.– El permiso consignado en la presente Ley, que sea otorgado por la Secretaría de Estado de Agricultura para la importación de vegetales o productos agrícolas, no exime al importador del cumplimiento de las disposiciones de la Ley No. 4990, sobre Sanidad Vegetal.

Artículo 6.– Cualquier violación a la presente Ley será castigada con multas de RD$10.00 a RD$500.00, o prisión de uno a seis meses, o ambas penas a la vez, según la magnitud de la infracción, debiendo quedar los productos importados en violación a esta Ley, a disposición del importador, para los fines de su exportación.

Artículo 7.– La Secretaría de Estado de Agricultura queda encargada del cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 8.– La presente Ley deroga y sustituye cualquier otra disposición que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez.
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

y No.5947, que modifica el Art. 5 de la Ley No.3351 del 3 de agosto de 1952, que crea la Orden del Mérito Aéreo.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5947

Artículo 1.– Se modifica el artículo 5 de la Ley No. 3351, del 3 de agosto de 1952, que crea la Orden del Mérito Aéreo, para que en lo adelante rija del siguiente modo:

"Artículo 5.– La insignia consistirá, en su anverso, en una cruz de malta, con brazos de 38 mm. de largo; en el centro de

la cruz habrá un círculo de 20 mm. de diámetro con la insignia de la FAD; alrededor de la cruz, formando un círculo de 49 mm. de diámetro, irán dos ramas, una de palma y otra de laurel, enlazadas en su base inferior; en la parte superior irán las alas, insignia de la aviación, con la longitud de 49 mm. y en su centro el escudo nacional".

Artículo 2.– Se modifica el artículo 7 de las antes citada Ley, en el sentido de suprimir del reverso de la insignia la grabación en círculo de la inscripción "El Generalísimo Dr. Rafael L. Trujillo Molina".

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5948, que deroga la Ley No.5338 del 8 de abril de 1960 que dispone que serán constituídas en bien de familia los bienes donados por Rafael L. Trujillo o por el Estado Dominicano de conformidad con el Decreto No.5518 del 9 de febrero de 1960, así como que estas serán intransferibles e inembargables.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5948

ARTICULO UNICO. Se deroga la Ley No. 5336, de fecha 8 de abril de 1960, por medio de la cual se dispone que se considerarán constituídos en bien de familia los bienes mobiliarios e inmobiliarios donados por Rafael L. Trujillo Molina o por el Estado Dominicano, de conformidad con el Decreto No. 5518, del 9 de febrero de 1960, así como que éstos serán instransferibles e inembargables.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional. Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5949, que deroga la Ley No.4178 del 15 de junio de 1955, que establece la Comisión para el Desarrollo y Embellecimiento de Santo Domingo.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5949

CONSIDERANDO que actualmente ha sido reorganizada la Dirección de Planificación Urbana del Ayuntamiento del Distrito Nacional, por una parte, y por otra, ha sido estructurada la Junta Nacional de Planificación, la que cuenta con la División de Planificación Urbana, que tiene un campo de acción nacional, y que ambos organismos disponen de personal técnico especializado que están en verdaderas condiciones de apreciar y aportar adecuadas soluciones a los problemas que crea el desarrollo de la ciudad de Santo Domingo.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Queda deroga la Ley No. 4178, de fecha 15 de junio de 1955, que restablece la Comisión para el Desarrollo y Embellecimiento de Santo Domingo.

Artículo 2.— La presente ley deroga cualquier otra disposición que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5950, que apropia y transfiere en la Ley de Gastos Públicos para 1962 las sumas de RD$3,349,892.73 y RD$1,664,385.55, respectivamente.

República Dominicana
EL CONSEJO DE ESTADO

En Nombre de la República
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5950

ARTICULO PRIMERO.— Del Balance no Apropiado correspondiente al Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962, se destina la suma de RD$3,349,892.73 (TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS) para efectuar las siguientes apropiaciones:

AL: CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20101	OFICINA DEL SECRETARIo DE ESTADO		RD$ 25,110.40
G20101	Atenciones Varias	RD$ 5,110.40	
20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS		RD$ 6,775.00
G20159A	Servicios Personales	RD$ 6,755.00	
20401	FUERZA AEREA DOMINICANA		RD$ 44,184.31
G20401E	Construcciones y Mejoras Permanentes	RD$ 43,434.31	
G20401	Atenciones Varias	RD$ 750.00	
		RD$ 44,184.31	

20153	MARINA DE GUERRA		RD$162,829.82
G10153B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 30,660.00	
G20153C	Adquisición de Propiedades	RD$ 66,000.00	
G20153Z	Pagar Pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 15,448.40	
G20153	Atenciones Varias	RD$ 50,721.42	
		RD$ 162,829.82	

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

10491	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 18,200.00
G10491B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 17,000.00	
G10491C	Adquisición de Propiedades.	RD$ 1,200.00	
		RD$ 18,200.00	

30220	POLICIA NACIONAL		RD$142,813.20
G30220A	Servicios Personales	RD$ 22,950.00	
G30220C	Adquisición de Propiedades	RD$ 92,463.20	
G30220E	Construcciones y Mejoras Permanentes	RD$ 25,000.00	
G30220	Atenciones Varias	RD$ 2,400.00	
		142,813.20	

CAPITULO IV-I

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

10511	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	RD$600,000.00

G10511A	Servicios Personales	RD$ 200,000.00
G10511B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 50,000.00
G10511	Atenciones Varias	RD$ 350.000.00
		RD$. 600,000.00

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10428	COMISION AL BANCO DEPOSITARIO DESIGNADO DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO	RD$250,000.00
G10428F	Para cubrir los gastos de comisión al Banco depositario de los fondos del Gobierno.	RD$ 250,000.00

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y PREVISION SOCIAL

31470	SERVICIO NACIONAL DE PREVISION Y ASISTENCIAL SOCIAL	RD$480,000.00
G31470	Mantenimiento y Atenciones	RD$ 480,000.00

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10498	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO	RD$580,000.00

G10498Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 420,000.00	
G10498	Atenciones Varias	RD$ 160,000.00	
		RD$ 580,000.00	
31802	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS		RD$1,040,000.00
G31802	Atenciones Varias	RD$1,040,000.00	
			RD$3,349,892.73

ARTICULO SEGUNDO:– Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962:

DEL:

CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10310	PODER EJECUTIVO		RD$ 70,778.83
G10323	Asociación de Cooperativas de Choferes	RD$ 70778.83	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS.		RD$ 34,817.52
G20159B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 34,817.52	
20401	FUERZA AERE. DOMINICANA		RD$. 3,820.00

G20401B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 3,820.00

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

10424	DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL		RD$ 67,958.62
G10424A	Servicios Personales	RD$ 65,730.00	
G10421	Atenciones Varias	RD$ 2,228.62	
		RD$ 67,958.62	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

50515	APORTE DE CAPITAL		RD$1,000,000.00
G50515	Atenciones Varias	RD$1,000,000.00	

CAPITULO IX
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 6,650.00
G10497A	Servicios Personales	RD$ 6,650.00	
10322	DIRECCION GENERAL DE LA REFORMA AGRARIA		RD$300,000.00
G10322	Atenciones Varias	RD$ 300,000.00	

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD
Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 32.174 58
G10499	Atenciones Varias	RD$32,174.58	
31401	HOSPITALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO		RD$ 29,215.00
G31401	Mantenimiento y Atenciones	D$ 29,215.00	

CAPITULO XIII
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES

30802	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		RD$ 2,100.00
G30802A	Servicios Personales	RD$ 2,100.00	
20157	SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL		RD$ 4,000.00
G20157	Atenciones Varias	RD$ 4,000.00	
32120	ADMINISTRACION GENERAL DE CC RREOS		RD$ 800.00
G32120	Atenciones Varias	RD$ 800.00	

CAPITULO XIV

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO

31600	DIRECCION GENERAL DE TURISMO		RD$ 12,500.00
G31600	Atenciones Varias	RD$ 12,500.00	
30402	DIRECCION GENERAL DE MINERIA		RD$ 99,571.00
G30402	Atenciones Varias	RD$ 99,571.00	
			RD$1,664,385.55

AL:

CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10310	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		RD$ 15,103.33
G10310A	Servicios Personales	RD$ 15,103.33	
10411	DIRECCION DEL PRESUPUESTO		RD$1.000,000.00
C10411F	Subvenciones	RD$1,000,000.00	
30536	COOPERATIVAS DE INDUSTRIAS ARTESANALES		RD$ 35,000.00
G30506	Atenciones Varias	RD$ 35,000.00	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS		RD$ 34,817.52
G20159C	Adquisición de Propiedades	RD$ 4,290.00	
G20159Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 30,527.52	
		RD$ 34.817.52	

20401	FUERZA AEREA DOMINICANA		RD$ 3,820.00
G20401A	Servicios Personales	RD$ 3,820.00	

CAPITULO V

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10340	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 4,680.50
G10340C	Adquisición de Propiedades	RD$ 4,680.50	

CAPITULO VI

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

30101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 37,360.00
G30101A	Servicios Personales	RD$ 37,360.00	
30105	EMBAJADAS Y LEGACIONES		RD$ 15,000.00
G30105A	Servicios Personales	RD$ 15,000.00	
30106	CONSULADOS		RD$ 40,000.00
G30106A	Servicios Personales	RD$. 20,000.00	
G30106	Atenciones Varias	RD$ 20,000.00	
		RD$ 40,000.00	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10421	DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL		RD$. 67,958.62

G10424A	Servicios Personales	RD$ 65,730.00	
G10424	Atenciones Varias	RD$ 2,228.62	
		RD$ 67,958.62	

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION. BELLAS ARTES Y CULTOS

31532	ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES		RD$ 1,000.00
G31532A	Servicios Personales	RD$ 1,000.00	

CAPITULO IX

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$130,000.00
G10497	Atenciones Varias	RD$ 130,000.00	
30460	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRAULICOS		RD$170,000.00
G30460	Atenciones Varias	RD$ 170,000.00	

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 37,774.58
G10499A	Servicios Personales	RD$ 5,600.00	
G10499B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 32,174.58	
		RD$ 37,774.58	

31372	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		RD$ 7,850.00
G31372A	Servicios Personales	RD$ 7,850.00	
31401	HOSPITALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO		RD$ 23,615.00
G31401A	Servicios Personales	RD$ 23,615.00	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10498	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 2,100.00
G10498A	Servicios Personales	RD$ 2,100.00	
30802	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		RD$ 1,085.00
G30802A	Servicios Personales	RD$ 1,085.00	
10429	SECCION DE MUELLES Y PUERTOS		RD$ 800.00
G10429A	Servicios Personales	RD$ 800.00	
20157	SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL		RD$ 4,000.00
G20157C	Adquisición de Propiedades	RD$ 4,000.00	
32121	DIRECCION GENERAL DE EQUIPO Y TRANSPORTE		RD$ 2,400.00
G32121A	Servicios Personales	RD$ 2,400.00	

CAPITULO XIV

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

31600	DIRECCION GENERAL DE TURISMO		RD$ 12,500.00
G31600B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 12,500.00	
30402	DIRECCION GENERAL DE MINERIA		RD$ 17,521.00
G30402B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 12,521.00	
G3042C	Adquisición de Propiedades	RD$ 5,000.00	
		RD$ 17,521.00	
			RD$1,664,385.55

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5951, que transfiere a título devolutivo, en la Ley de Gastos Públicos vigente, la suma de RD$1,750,000.00

EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

NUMERO 5951

Artículo 1.— Para dar cumplimiento a varias obligaciones contraídas por el Gobierno se transfiere, a título devolutivo,

del Fondo General al Fondo Especial No. 1549 (Confiscaciones de Fondos Intervenidos), la suma de RD$1,750,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ORO).

Artículo 2.– El balance no utilizado de esta suma será devuelto al Fondo General.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5052, que regula el pago de salarios a los trabajadores de la Industria Azucarera Nacional, y dicta otres disposiciones.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5952

CONSIDERANDO: Que algunas personas impulsadas por espíritu demagógico o por evidente incomprensión de los problemas que afectan al trabajador dominicano y a las empresas azucareras radicadas en el país, se vienen dedicando a la tarea de crear incesantes problemas en perjuicio del normal desenvolimiento de la vida económica y social del país;

CONSIDERANDO: Que a la fecha la industria azucarera ha concedido sustanciales aumentos de salarios, en unos casos en cumplimiento de la ley y en otros, por su propia iniciativa, mediante acuerdos intervenidos con los trabajadores, aumentos de salarios que representan en la mayor parte de los casos un 150 por ciento sobre el nivel en que se mantuvieron hasta la zafra de 1961;

CONSIDERANDO: Que es necesario que el Estado se valga de todos los recursos a su alcance para que la industria azucarera pueda cubrir las cuotas de importación que la han sido asignadas por países extranjeros, a fin de asegurar la estabilidad presente y futura de nuestra economía;

CONSIDERANDO: Que es de interés nacional que la presente zafra no se interrumpa y se lleve a cabo de una manera completa, ya que en caso contrario se registraría una sensible y perjudicial pérdida de divisas: que para resolver dicho problema se impone en consecuencia, establecer la fijación de los salarios a pagar por la industria azucarera en niveles económicos razonables:

CONSIDERANDO: Por último, que el Gobierno, interesado en el establecimiento de una tarifa científica de salarios para la industria azucarera ha dispuesto el envío de técnicos competentes, del Departamento de Trabajo, al extranjero, para hacer un estudio completo que permita hacer un reajuste de salarios, previa revaluación de funciones, para procurar una justa remuneración de la labor rendida por cada un trabajador de la industria azucarera, pero que es imposible cumplir esta tarea de manera que sus resultados puedan aprovecharse en la tarifa a aplicar durante la presente zafra:

VISTA La Ley No. 5819, de fecha 20 de febrero de 1962, que declara la existencia de un estado de emergencia nacional;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— A partir de la fecha de la presente ley, todos los salarios que deba pagar la industria azucarera nacional, así como los salarios que deban pagar las industrias derivadas de ésta o que elaboren subproductos de la caña, tendrán por nivel máximo las sumas respectivas que constan en las tarifas vigentes o en los acuerdos obrero patronales efectuados a la fecha.

Párrafo: Tampoco podrán variarse las condiciones de trabajo convenidas entre empleadores y trabajadores, a partir de la presente ley.

Artículo 2.— Queda a cargo de la Secretaría de Estado de Trabajo, de los dirigentes de los sindicatos y confederaciones de trabajadores, así como de los directivos de las empresas de la industria azucarera, de las industrias derivadas o de las que elaboren subproductos de la caña, el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 3.– La violación de la presente ley en que incurran los empleadores será castigada con multa de treinta a quinientos pesos oro, o con prisión de quince días a seis meses, o con ambas penas a la vez. En los casos en que el empleador sea una persona moral la pena de prisión se impondrá al administrador o gerente de la empresa en falta.

En la misma pena incurrirá el trabajador o cualquiera otra persona que por medios fraudulentos, por coacción, violencias, intimidación, amenazas o de cualquier otro modo induzca o lleve a los empleadores a incurrir en la violación de la presente ley.

Párrafo: En caso de que el trabajador incurra en el delito antes indicado, su contrato de trabajo termina sin responsabilidad para el empleador.

Artículo 4.– Serán competentes para conocer de las violaciones a la presente Ley los Juzgados de Primera Instancia correspondientes.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras,
Miembro.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en periódico de amplia circulación en el territorio nacional para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Rest uración.

RAFAEL F BONNELLY

Ley No.5953, que denomina "Enriquillo" y "Juana Núñez" las Fortalezas de Pedernales y Salcedo respectivamente.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5953

CONSIDERANDO que los héroes nacionales deben ser honrados denominando con sus nombres los edificios, vías, cosas públicas, etc.;

VISTA la Ley No. 2439, de fecha 8 de julio de 1950;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Las Fortalezas del Ejército Nacional "Mayor General Fernando A. Sánchez" de Pedernales, y "Coronel Andrés Julio Monclús" de Salcedo, se denominarán en lo adelante "Enriquillo" y "Juana Nuñez", respectivamente.

Artículo 2.- Queda modificada, en cuanto sea necesario, la Ley No. 4891, de fecha 25 de abril de 1958.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5954, que modifica los Arts. 2, 3 y 4 de la Ley No.2006, del 22 de mayo de 1949 (Derechos a pagar por los Maestros Constructores de Obras).

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5954

CONSIDERANDO que los derechos que actualmente deben pagar los Maestros Constructores de Obras deben ser reducidos a fin de ponerlos en relación con las posibilidades de esta clase trabajadora;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Quedan modificados los artículos 2, 3 y 4 de la Ley No. 2006, de fecha 22 de mayo de 1949, para que rijan de la manera siguiente:

"Artículo 2.– El diploma a que se refiere el artículo anterior será expedido por el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones mediante el pago de un derecho de RD$2.00 pagaderos en sellos de Rentas Internas, que serán adheridos al citado diploma"

"Artículo 3.– En conjunto los tres funcionarios de la Comisión indicada tendrán derecho a la suma de RD$2.00 por concepto de honorarios, a cargo del solicitante de examen.

"Artículo 4.– La licencia para el ejercicio del oficio de Maestro Constructor o Maestro de Obras será expedida por el Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, mediante el pago de un derecho de RD$2.00 en la forma prevista en el artículo 2, a toda persona que posea un diploma obtenido por una de las dos vías de requisitos prescritos anteriormente"

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5955, que concede pensión del Estado al señor Yolando Alfredo López.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5955

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede una pensión del Estado de cien pesos oro (RD$100.00) mensuales, al señor Yolando Alfredo López.

Artículo 2.— Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su cono imiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,

Ley No.5956, que modifica el párrafo del Art. 1ro. de la Ley No.5673 del 14 de noviembre de 1961.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5956

CONSIDERANDO que las disposiciones limitativas del párrafo único del Artículo 1 de la Ley No. 5673, de fecha 14 de noviembre de 1961, excluyen una serie de equipos o utensilios que pueden estimarse útiles a los fines perseguidos por dicha ley;

CONSIDERANDO que la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Estado de Agricultura, cuenta con el personal capacitado, para determinar los animales y equipos especializados que se ajusten a los términos del indicado artículo;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

UNICO.– Se modifica el párrafo del artículo 1ro. de la Ley No. 5673, de fecha 14 de noviembre de 1961, para que en lo adelante rija del siguiente modo:

"Párrafo.– Estarán comprendidos entre los animales y el equipo mencionado en el presente artículo, todos los que a juicio y consideración de la Dirección General de Ganadería, de la Secretaría de Estado de Agricultura, sean compatibles con

los fines de la presente Ley, debiendo en cada caso dicha Dirección General expedir la Certificación correspondiente, la cual deberá ser presentada por el importador a la Dirección General de Aduanas para los fines de lugar"

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5957, que declara día conmemorativo de la gesta heróica de Constanza, Maimón y Estero Hondo, el 14 de junio de cada año, no laborable.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5957

CONSIDERANDO que durante los días 14 y 20 de junio de 1959 grupos de esforzados patriotas que se encontraban en el exilio irrumpieron en expediciones armadas por Constanza, Maimón y Estero Hondo, en una santa cruzada de liberación nacional;

CONSIDERANDO que esa pléyade de valientes, en su gran mayoría jóvenes ajenos a las prácticas de la guerra, por el amor a la patria sojuzgada a los caprichos y atropellos del tirano armaron el brazo reivindicador, para rubricar con su hazaña memorable su voluntad de ser libres en el suelo que los vió nacer, aún ofrendaran así sus vidas, como la ofrendaron, en holocausto de abnegación y sacrificio frente al poderío del déspota ensoberbecido y cruel;

CONSIDERANDO que el glorioso hecho del 14 de junio de 1959, sirvió para robustecer la unidad nacional en su decisión de liberarse de la funesta y larga tiranía y encendió la fé que produjo dos años más tarde la caída estrepitosa del tirano;

CONSIDERANDO que la fecha del 14 de junio, por cuanto significa como síntesis de patriotismo acrisolado, de abnegación

sin límites y de sacrificio heróico,, merece el tributo de una perenne recordación, como ofrenda amorosa a los que cayeron al servicio de la patria y como estímulo alentador para las generaciones presentes y futuras;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se declara día conmemorativo de la gesta heróica de Constanza, Maimón y Estero Hondo, el 14 de junio de cada año.

Párrafo.– Este día será no laborable.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5958, que declara día conmemorativo de la gesta heróica de Luperón, el 19 de junio de cada año, no laborable.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5958

CONSIDERANDO que el 19 de junio de 1949 un grupo de valientes dominicanos, en unión de compañeros de otras nacionalidades que en estrecha solidaridad y comunidad de ideas luchaban por aniquilar los regímenes tiránicos que existían en el Nuevo Continente, trajeron a nuestro territorio por playas de Luperón, en férvido mensaje de redención y esperanza a los que en la Patria sufrían en carne propia los zarpazos de una despiadada tiranía;

CONSIDERANDO que ese gesto singular, que costó la vida a tantos adalides de la libertad constituye, sin lugar a dudas, el primer reto al sátrapa, lanzado por hombres libres en el propio territorio en el cual ejercía su poder omnímodo, y es acción

heróica de imperecedero recuerdo, digna de ser acogida en nuestra historia como ejemplo de audacia, patriotismo y sacrificio;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

UNICO.– Se declara día conmemorativo de la gesta heróica de Luperón, el 19 de junio de cada año.

Párrafo.– Este día será no laborable.

DADA Por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5959, que denomina la calle "Libertad", de la población de Monte Plata, con el nombre "Ramón Arcadio Peguero Reyes".

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5959

CONSIDERANDO: Que el Ayuntamiento del Municipio de Monte Plata ha solicitado que la actual calle "Libertad" de aquella población, sea denominada con el nombre de "Ramón Arcadio Peguero Reyes".

CONSIDERANDO: Que es de justicia honrar la memoria de este valiente soldado, hijo del municipio monteplantense, que ofrendó su vida en aras de la libertad;

VISTO el párrafo del artículo 3 de la Ley No. 2439, sobre asignación de nombres a las divisiones políticas, poblaciones, edificios, obras, vías, cosas y servicios públicos, de fecha 22 de diciembre de 1961;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.– La calle "Libertad" de la población de Monte Plata, se denominará en lo adelante "Ramón Arcadio Peguero Reyes".

DADA Por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barreras,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los trece días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5960, que declara Día de las Fuerzas Armadas el 25 de febrero de cada año.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5960

CONSIDERANDO: que la fecha fijada actualmente para la celebración del día destinado a enaltecer nuestras Fuerzas Armadas, está estrechamente vinculada a un acontecimiento de carácter personal en la vida del tirano ajusticiado el 30 de mayo último, de acuerdo con el texto del mismo Decreto que lo instituye;

CONSIDERANDO: que la significación de este día, como estímulo y reconocimiento a la conducta del militar, debe estar asociada a la persona de aquéllos qué a más de ser soldados ejemplares gocen de la aureola de la proceridad, como la figura de Ramón Matías Mella, que unió a su condición de Padre de la Patria y de Fundador de la República la de bizarro soldado de la Independencia y de la Restauración;

CONSIDERANDO: que, consecuentemente, ninguna fecha más indicada que la del natalicio de tan ilustre adalid de nuestras guerras emancipadoras para dedicarlo a conmemorar el día de las Fuerzas Armadas;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se declara Día de las Fuerzas Armadas el 25 de febrero de cada año.

Artículo 2.– Dicho día se celebrará en la forma señalada en el Artículo 2 de la Ley No. 3933, sobre días festivos, conmemorativos y de duelo, del 20 de septiembre de 1954.

Artículo 3.– La presente Ley modifica el mismo artículo de la ley ya mencionada en el sentido de sustituir el 22 de junio por el 25 de febrero como Día de las Fuerzas Armadas.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota: La presente Ley fue publicada en el diario "El Caribe", de Santo Domingo, edición del 16 de Junio de 1962.

Ley No.5961, que crea el Instituto del Tabaco de la República Dominicana.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5961

CONSIDERANDO: Que el sector tabacalero de la República Dominicana se encuentra en condiciones de abandono y subdesarrollo;

CONSIDERANDO: Que resulta útil y necesario desarrollar una política oficial, tendiente a elevar a niveles altos, por medio de la tecnificación, el cultivo del tabaco, empobrecido por la aplicación actual de métodos primitivos;

CONSIDERANDO: Que los campesinos dedicados al cultivo del tabaco no están recibiendo la adecuada protección oficial en cuanto a estabilización de precios y crédito agrícola tabacalero;

CONSIDERANDO: Que existen enormes posibilidades de expansión de los mercados exteriores del tabaco dominicano

tradicional y que es además, de urgente necesidad incrementar el consumo interno de los productos manufacturados.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

CAPITULO I

DE LA CREACION DEL INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Artículo 1.– Por la presente Ley se crea el INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA con sede en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, cuya duración será ilimitada.

Artículo 2.– EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA queda por la presente Ley investido como entidad autónoma, con personalidad jurídica propia, con facultades para contratar, demandar y ser demando en su propio nombre y derecho, pudiendo además tener su patrimonio propio, emitir sus propias obligaciones , con la autorización expresa del Poder Ejecutivo, las cuales, en tales casos, gozarán de la garantía ilimitada del Estado.

Artículo 3.– EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, queda además investido de las facultades que en esta Ley le son concedidas. En consecuencia, dotado de los atributos de la personalidad jurídica y creado con facultades para adoptar y ejecutar todas aquellas medidas que fueren necesarias para mejorar la producción del tabaco dominicano y proteger los intereses de los agricultores que se dedican a ese cultivo, son atribuciones de dicho INSTITUTO las que se expresan a continuación:

a) Reunir, coordinar y conservar informes, datos estadísticos, publicaciones y, en general, cuantos elementos de información sean necesarios o útiles para el conocimiento o estimación de los mejores métodos de cultivo y preparación del tabaco, de la producción nacional y extranjera, del consumo nacional y mundial y de las condiciones del comercio internacional del tabaco;

b) Solicitar de las Oficinas Públicas así como de los cultivadores, preparadores, almacenistas y exportadores del

tabaco del país, todos aquellos datos, que de la competencia de los mismos, se refieran al cultivo, producción, preparación, beneficio y venta del tabaco, principalmente con fines de mejorar la producción nacional y de encaminar las gestiones necesarias para que los agricultores que se dedican al cultivo del tabaco, lo mismo que los que intervienen en su preparación obtengan los mejores precios posibles y mercados seguros para sus cosechas. Asimismo, pondrá en práctica cuantas medidas considera pertinente para el mejoramiento de los sistemas de cultivo del tabaco y de su preparación, clasificación y empaque, tanto para consumo interno como para exportación, a fin de propender al fomento y mantenimiento de su crédito en los mercados nacionales e internacionales;

c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas al tabaco, en todos sus aspectos y colaborar estrechamente con los organismos correspondientes de la Secretaría de Estado de Agricultura, Corporación de Fomento Industrial y Banco Agrícola, con los siguientes propósitos esenciales:

1.– Mejorar los sistemas de cultivo del tabaco, con miras a uniformar el procedimiento usual para su preparación y clasificación;

2.– Luchar contra las enfermedades y plagas del tabaco;

3.– Organizar concursos, conferencias y exposiciones nacionales encaminadas a estimular el mejoramiento del producto y de los sistemas empleados en su cultivo, producción y preparación;

4.– Concurrir a congresos, conferencias y exposiciones internacionales;

5.– Estimular a estudiantes graduados dominicanos en la especialización tabacalera mediante estudios intensivos en Estaciones Experimentales del país o instituciones extranjeras;

6.– Realizar todas las gestiones necesarias encaminadas a lograr crédito agrícola tabacalero para los productores sin recursos;

7.— Confeccionar memorias anuales de estadísticas y labores del Instituto del Tabaco para conocimiento público en general.

Artículo 4.— Corresponderá también a este organismo, el estudio de todo lo relativo a la industrialización del tabaco, para mantener un nivel justo y equitativo de precios que sea razonable y remunerativo para la economía tabacalera dominicana.

Artículo 5.— EL INSTITUTO podrá, por tanto, adoptar mediante reglamento, que deberán ser aprobados por el Poder Ejecutivo, las medidas que considere convenientes para la preparación e industrialización del tabaco, así como para regular, cuando fuere necesario, los tipos y precios y cualquier otra condición y modalidad de los artículos manufacturados por dicha industria. A este efecto, podrá hacer intervenir dicho INSTITUTO, siempre bajo su vigilancia y cuidado, acuerdos reguladores entre los industriales.

Artículo 6.— EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA operará con fondos propios provenientes de los impuestos que se señalan en esta Ley.

Artículo 7.— EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, tendrá franquicia postal y telegráfica dentro del territorio nacional.

Artículo 8.— EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA queda expresamente exento del pago de impuesto aduanales y de todo tipo de gravámen por concepto de importación de bienes, para fines agrícolas e industriales, que el INSTITUTO DEL TABACO considere necesario adquirir de procedencia extranjera. A estos fines, el Banco Central de la República Dominiaana dará todas las facilidades para las operaciones monetarias de pago al exterior.

CAPITULO II

DE LA ORGANIZACION DEL INSTITUTO DEL TABACO

Artículo 9.— EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA estará formado por un Presidente, un Vice—Presidente y cuatro Directores, los cuales integrarán

una Junta de Directores. En la estructura del INSTITUTO se organizarán cuatro Direcciones:

a) Dirección Agrícola

b) Dirección Industrial

c) Dirección Comercial

d) Dirección Administrativa y Legal

Artículo 10.– El Presidente y el Vice–Presidente del INSTITUTO deberán ser de nacionalidad dominicana y serán designados libremente y por acuerdo mutuo entre el Secretario de Estado de Agricultura y el Administrador del Banco Agrícola. Estos cargos serán desempeñados por un período de cuatro años prorrogables. Una vez designados el Presidente y el Vice–Presidente, estos no podrán ser removidos de sus cargos, a no ser por causa de negligencia, fraude, incapacidad, actos inmorales y por cualquier causa que señalen las leyes vigentes. En estos casos la Junta de Directores conocerá de los cargos y resolverá soberanamente por mayoría de votos.

Artículo 11.– Una vez vigente esta Ley y designados el Presidente y el Vice–presidente del Instituto, éstos convocarán, en un plazo no mayor de 30 días, a concurso–oposición para la elección de los cargos de los cuatro Directores.

Artículo 12.– Como requisitos previos para aspirar a estos cargos será necesario reunir las siguientes cualidades:

a) Director de la Dirección Agrícola

1.– Natural o ciudadano dominicano.

2.– Agrónomo y con suficiente experiencia en el cultivo, investigaciones y producción tabacalera.

b) Director de la Dirección Industrial

1.– Natural o ciudadano dominicano.

2.– Con experiencia industrial suficiente en el sector tabacalero.

c) Director de la Dirección Comercial

1.– Natural o ciudadano dominicano.

2.– Con suficiente experiencia en el campo del comercio de importación y exportación.

d) Director de la Dirección Administrativa y Legal

1.– Natural o ciudadano dominicano.

2.– Deberá ser abogado y con experiencia en organización legal y tributaria del sector tabacalero.

Artículo 13.– Para desempeñar los cargos de Presidente y Vicepresidente y Director del INSTITUTO DEL TABACO es condición indispensable no tener intereses ni funciones relacionadas con la explotación agrícola, mercantil o industrial del sector tabacalero en general.

Artículo 14.– La Junta de Directores celebrará sesiones periódicas y tomará los acuerdos por mayoría de votos. En caso de empate el voto del Presidente será decisivo. El Secretario de Estado de Agricultura designará libremente un delegado personal a las sesiones de la Junta de Directores a fin de observar el funcionamiento del INSTITUTO y mantener informada a la Secretaría de Estado de Agricultura de las operaciones técnicas y administrativas del organismo.

Artículo 15.– Los acuerdos de la Junta de Directores en política tabacalera serán publicados en la Gaceta Oficial de la República Dominicana. Cuando estos acuerdos afecten, en alguna forma, el sector tabacalero del país, los mismos tendrán carácter de resoluciones oficiales y serán de obligatorio cumplimiento.

Artículo 16.– Una vez integrada la Junta de Directores, esta confeccionará los Estatutos, el Reglamento y los Presupuestos Anuales del INSTITUTO, los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial de la República. Asimismo, convocará a concurso–oposición todos los cargos o posiciones del organismo en el menor plazo de tiempo posible.

Artículo 17.– El Presidente será la máxima autoridad del INSTITUTO y su representante legal con plenas facultades para actuar en el ejercicio de dicha representación. El Vice–Presidente sustituirá al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva. En este último caso se designará un nuevo Presidente en la misma forma que señala el Artículo 10 de la presente Ley y a petición de la Junta de Directores del Organismo.

CAPITULO III

DE LAS FUNCIONES Y FACULTADES DEL INSTITUTO DEL TABACO

Artículo 18.– EL INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, será regulador del sector tabacalero de la República Dominicana. Se considerará la libre empresa fundamental en todas las operaciones tabacaleras del país y solamente el INSTITUTO intervendrá como organismo estabilizador, regulador y en la solución de problemas de emergencia.

Artículo 19.– EL INSTITUTO DEL TABACO podrá contratar libremente técnicos extranjeros y personal con carácter temporal de acuerdo con las necesidades del Organismo. Para posiciones técnicas permanente del INSTITUTO será requisito indispensable ser dominicano y ocupar el cargo mediante exámenes de capacidad de acuerdo con el Artículo 40 de esta Ley.

Artículo 20.– Una vez integrada la Junta de Directores, el INSTITUTO estará obligado a realizar las compras de materiales y las construcciones mediante el sistema de concurso público.

Artículo 21.– La Junta de Directores del INSTITUTO tendrá facultades para confeccionar los presupuestos anuales ordinarios y extraordinarios de acuerdo con las recaudaciones fiscales obtenidas. En los presupuestos del INSTITUTO exitirá un fondo de reserva para estabilización de precios del tabaco en rama y crédito agrícola tabacalero, que será utilizado, en caso necesario, para estos fines.

Artículo 22.– El sistema de pagos y contabilidad se realizará por el método de cheques comprobantes, generalmente

conocido como sistema "Vouchers" con la firma de dos funcionarios responsables, designados por la Junta de Directores, y con la aprobación del Director a que corresponda cada pago.

Artículo 23.– EL INSTITUTO señalará cada año los precios mínimos del tabaco de acuerdo con la zona de producción y al tipo de tabaco. Asimismo podrá pignorar o comprar tabaco a los cosecheros productores cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 24.– EL INSTITUTO promoverá la fundación de la "Asociación Nacional de Cosecheros de Tabaco de la República Dominicana". Asimismo podrá incitar la formación de cooperativas de consumo, producción y venta entre los cultivadores de tabaco.

Artículo 25.– EL INSTITUTO acometerá, en el menor plazo de tiempo posible, el catastro de fincas tabacaleras y el censo tabacalero del país.

Artículo 26.– EL INSTITUTO planificará la producción tabacalera del país, cuando existan posibilidades de excedentes del producto, señalando cuotas de producción por zonas y consecheros a fin de evitar la caída del precio en los mercados exteriores. Asimismo, el INSTITUTO establecerá el área mínima económica de explotación agrícola tabacalera en el país, de acuerdo con la zona y el tipo de tabaco, a los fines de regular el crédito agrícola.

CAPITULO IV

DE LA REFORMA IMPOSITIVA DE LA INDUSTRIA CIGARRERA Y DE LOS INGRESOS DEL INSTITUTO

Artículo 27.– A partir del 1ro. de septiembre de 1962 se derogan todos los impuestos consignados para los cigarrillos, en las leyes Nos. 858 del 13 de marzo de 1935, No. 794 del 19 de enero de 1945, Ley No. 5054 de fecha 18 de diciembre de 1958, así como el impuesto del 12 por ciento consignado en la Ley del Presupuesto Nacional y de Gastos Públicos.

Artículo 28.— A partir de la misma fecha 1ro. de septiembre de 1962, se crea un importe de RD$3.50 por cada millar de cigarrillos elaborados en el país, entre 70 y 85 mm. de longitud, con o sin filtro, en los cuales se utilice exclusivamente materia prima (tabaco) producida en la República Dominicana.

El pago de este impuesto se realizará en forma de estampillas que serán fijadas a las cajetillas de cigarrillos elaborados y podrán ser adquiridas en las Colecturías de Rentas Internas.

Artículo 29.— Las estampillas para cigarrillos a que se refiere el artículo anterior, serán emitidas en los siguientes valores:

a) Para cajetillas de 10 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de longitud, cada una por un valor de RD$0.035;

b) Para cajetillas de 16 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de longitud, cada una por un valor de RD$0.056;

c) Para cajetillas de 20 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de longitud, cada una por un valor de RD$0.07.

Artículo 30.— A partir del día 1ro. de septiembre de 1962, se crea un impuesto de RD$11.00 por millar de cigarrillos elaborados en el país, entre 70 y 85 mm. de longitud con o sin filtro, en los cuales se utilice exclusivamente materia prima (tabaco) importada de otros países.

El pago de este impuesto se realizará en forma de estampillas que serán fijadas a las cajetillas de cigarrillos elaboradas y podrán ser adquiridas en las Colecturías de Rentas Internas.

Artículo 31.— Cuando en el país exista una producción total o parcial del tipo de materia prima (tabaco) que actualmente se importa y sea posible iniciar las mezclas de ambos tabacos, el INSTITUTO DEL TABACO, a petición de los industriales interesados, formulará las recomendaciones técnicas correspondientes, al objeto de realizar los ajustes impositivos necesarios ante la nueva situación. En todos los casos de rebaja del impuesto, la misma será aplicada al precio de venta al público consumidor.

Artículo 32.— Las estampillas para cigarrillos a que se refiere el artículo 30, serán emitidas en los siguientes valores:

a) Para cajetillas de 10 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de longitud, cada una por un valor de RD$0.11.

b) Para cajetillas de 16 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de longitud, cada una por un valor de RD$0.176;

c) Para cajetillas de 20 cigarrillos entre 70 y 85 mm. de longitud, cada una por un valor de RD$0.22.

Artículo 33.– De los impuestos anteriormente establecidos, la Dirección General de Rentas Internas entregará al INSTITUTO DEL TABACO la cantidad de RD$1.00 oro por cada millar de cigarrillos de las cantidades cobradas en la venta de las estampillas correspondientes, debiendo hacer ingresar el resto de dichos impuestos al Fondo General de la Nación.

Artículo 34.– Como consecuencia de la rebaja del impuesto a cigarrillos de elaboración nacional que utilicen materia prima (tabaco) producida en el país (Art. 28), a partir de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones tributarias consignadas en la presente Ley, la venta al público consumidor de esos tipos de cigarrillos será rebajada en RD$0.05 por cada cajetilla.

Artículo 35.– No obstante el aumento impositivo que significa para cigarrillos de elaboración nacional que emplean materia prima (tabaco) importada (Artículo 30), el precio al público consumidor de las actuales marcas que se encuentran a la venta, no será aumentado ni alterado en forma alguna.

Artículo 36.– A partir de la creación del INSTITUTO DEL TABACO, los precios de venta de los cigarrillos de manufactura nacional serán objeto de un análisis realizado por el INSTITUTO de acuerdo con los fabricantes estableciendo, en consecuencia, el precio máximo de la venta al público consumidor de cada tipo elaborado.

Artículo 37.– Al objeto de proteger la industria nacional, a partir de la publicación de la presente Ley quedará terminantemente prohibida toda exoneración parcial o total de impuestos arancelarios, y de cualquier otro tipo, establecidos en la legislación vigente a los productos y manufacturas tabacaleras que se importen al país, incluyendo cigarrillos extranjeros.

CAPITULO V

DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 38.– Una vez designado el Presidente y Vice–Presidente del INSTITUTO, estos asumirán las funciones y responsabilidades conferidas por esta Ley a la Junta de Directores para organizar las Oficinas y operaciones del Organismo. A estos efectos, el Presidente y el Vice–Presidente, de mutuo acuerdo, podrán contratar personal técnico y administrativo con carácter temporal hasta que queden cumplimentadas las disposiciones de esta Ley en lo referente al requisito indispensable del sistema de concurso–oposición del INSTITUTO DEL TABACO.

Artículo 39.– El Presidente y Vice–Presidente del INSTITUTO estarán facultados para manejar los capítulos y partidas del presupuesto que se asigna para el "Proyecto Tabacalero de Emergencia" hasta tanto queden organizadas las oficinas del Organismo. En este caso, la Junta de Directores asumirá las responsabilidades que le correspondan por la presente ley.

Artículo 40.– Para realizar las oposiciones de los distintos cargos del Organismo, el INSTITUTO convocará públicamente a todos los aspirantes, por medio de los principales diarios del país. especificando fechas de inscripción, requisitos y condiciones que se exijan en cada caso. Los Jurados examinadores serán designados por la Junta de Directores y estarán integrados por ciudadanos competentes en cada especialidad y actuarán con absoluta imparcialidad e independencia de criterio.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 41.– EL INSTITUTO DEL TABACO podrá fiscalizar en todo momento la confección de sellos destinados a la comprobación del pago del impuesto creado a la Industria Cigarrera, y a tal fin de común acuerdo con la Dirección General de Rentas Internas, determinará la forma y valores de las estampillas a imprimir, reglamentando todo lo concerniente

a su impresión para evitar los fraudes a que puedan dar motivó la emisión de dichas estampillas.

Artículo 42.— Para los fines de garantía en la emisión de las estampillas, el INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, podrá importar un papel especial a fin de suministrarlo a la casa impresora, de manera que las estampillas no puedan ser fraudulentamente hechas en perjuicio de los intereses fiscales y del INSTITUTO señalará distintos colores y diseños a las estampillas, para evitar confusiones, de acuerdo con el valor de cada una.

Artículo 43.— A los efectos de organizar el sector tabacalero de la República Dominicana, el Estado aporta la cantidad de DOS CIENTOS MIL PESOS ORO (RD$200,000.00), por una sola vez, para ser aplicado en un Proyecto Tabacalero de Emergencia cuyo presupuesto ha sido estudiado y aceptado por el Consejo de Estado.

Artículo 44.— Igualmente se asigna por la presente Ley al INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, el edificio radicado en la Feria de la Paz, enmarcado por las calles Avenida Cardenal Spellman, Avenida George Washington y Calle B, a fin de que instalen en el mismo sus Oficinas principales y demás organizaciones inherente a dicho INSTITUTO. Este edificio será donado por el Estado Dominicano con todas sus dependencias y accesorios de conformidad con Poder que al efecto se otorgará al Administrador General de Bienes Nacionels para los fines procedentes.

Artículo 45.— Las violaciones a las disposiciones de los artículos 28, 29, 30, 32, 34 y 35 de la presente Ley, así como a las disposiciones reglamentarias que el INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA pueda dictar, con la aprobación del Poder Ejecutivo, serán castigadas con las penas establecidas en el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Rentas Internas.

Artículo 46.— La presente Ley deroga y sustituye la Ley No. 4211 del 22 de julio de 1955; la Ley No. 3860 del 25 de junio de 1954; la Ley No. 3900 del 20 de agosto de 1954; la Ley No. 858 del 13 de marzo de 1935; la Ley No. 794 del 19 de

enero de 1945 y la Ley No. 2568 del 4 de diciembre de 1950, así como cualquier otra disposición que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República y
del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince, días del mes de junio de mil

novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota: La presente ley fué publicada en el diario "El Caribe", de Santo Domingo, edición del 16 de junio de 1962.

Ley No.5962, que deroga la Ley No.5929, del 29 de mayo de 1962, que restablece el monto total del impuesto de Patentes establecido en el capítulo 8vo. de la Ley No. 4456, del 24 de mayo de 1956.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5962

CONSIDERANDO que la adopción de nuevas medidas de carácter impositivo, las cuales permitirán no sólo atender los aumentos de sueldos de los Maestros de Escuela al servicio del Estado sino ser destinadas a otras necesidades de la Administración Pública, ha hecho innecesaria la reposición del impuesto de patentes en su monto total, dispuesta para esos mismos fines, por la Ley No. 5929, de fecha 29 de mayo del año en curso;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Queda derogada la Ley No. 5920, de fecha 29 de mayo del año en curso, que restablece el monto total del impuesto de Patentes que figura en la tarifa contenida en las Secciones I, II, III, IV y V del Capítulo 8vo. de la Ley No. 4456, de fecha 24 de mayo de 1956.

Artículo 2.— En consecuencia, regirá nuevamente, en todas sus partes, la Ley No. 5690 de fecha 1ro. de diciembre de 1961, la cual reduce a un 50 por ciento la cuantía del Impuesto de Patentes indicado en la tarifa precedentemente señalada.

Artículo 3.— Asimismo, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley hasta el 31 de diciembre del presente año de

1962, se aumentará en un 1 por ciento, es decir del 23 por ciento al 24 por ciento, (24 o/o) los derechos y cargos sobre importación de mercancía a que se refiere a la Ley No.3580 de fecha 14 de junio de 1953.

Artículo 4.— Esta ley deroga cualquier ley o parte de ley que sea contraria a la misma.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los quince días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota: Publicación Oficial "El Caribe", Junio 16/62.

Ley No.5963, que especifica los artículos considerados de primera necesidad.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5963

CONSIDERANDO: Que es un hecho evidente el actual encarecimiento de los artículos de primera necesidad, debido en gran parte al acaparamiento u ocultamiento que de éstos realizan los comerciantes con fines especulativos;

CONSIDERANDO: Que es necesario velar porque los habitantes del país, y singularmente las clases necesitadas, no se vean expuestos a los rigores de la escasez y a injustificadas privaciones de los mencionados artículos, por lo cual se declara de utilidad pública la adopción por el Estado de medidas que tengan por finalidad evitar la falta, ocultamiento o encarecimiento de los mismos;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Para los fines de esta ley se reputan artículos de primera necesidad;

a) el para, la carne, el pescado, la leche, la mantequilla, el queso, el café, el chocolate, los huevos, las grasas y aceites comestibles, el azúcar, la sal, el carbón, los cereales las raíces y legumbres, y de modo general todos aquellos artículos cuyo uso o consumo se considere razonablemente imprescindibles para el sostenimiento de la vida humana;

b) los productos farmacéuticos necesarios para la conservación y restablecimiento de la salud;

c) los materiales de construcción, los efectos del vestuarios en general que no sean de carácter suntuario.

Artículo 2.- El Poder Ejecutivo expedirá los decretos, reglamentos e instrucciones que sean necesarios para regular la importación, exportación, venta, suministro y distribución, en las diversas localidades del país, de los artículos reputados de primera necesidad.

Artículo 3.- Al Comité Nacional de Control de Precios Máximos de Artículos de Primera Necesidad, creado por la Ley No. 4451, del 9 de mayo de 1956, a cuyo cargo está la adopción de ordenanzas periódicas fijado el precio máximo a que podrán ser vendidos, tanto por los mayoristas como por los detallistas, los artículos alimenticios, queda encomendado, asimismo, la fijación de los precios máximos a que podrán ser vendidos, tanto por los mayoristas como por los detallistas, los materiales de construcción, los efectos del vestuario y de todo cuanto tienda a evitar la falta, ocultamiento o encarecimiento de los mismos.

Artículo 4.- La fijación de los precios máximos a que podrán ser vendidos los productos farmacéuticos estará a cargo de la Secretaría de Estado de Salud y Previsión Social.

Artículo 5.- Queda terminantemente prohibido el acaparamiento para fines especulativos, de los artículos de primera necesidad.

Párrafo.- Acaparamiento, para los fines de esta Ley, es el hecho de adquirir y retener artículos de primera necesidad, en cantidad suficiente para alterar el precio normal de ellos.

Párrafo II.- El acaparamiento realizado por comerciantes, se presume hecho con fines especulativos.

Artículo 6.– La violación a la disposición contenida en el artículo anterior de la presente Ley se castiará con multa de RD$25.00 a RD$1,000.00 o prisión correccional de seis días o dos años, o con ambas penas a la vez, y la confiscación de los productos objeto del acaparamiento.

Párrafo.– La reincidencia se castigará de conformidad con las reglas del derecho penal común.

Artículo 7.– La presente Ley modifica en cuanto fuere necesario la No. 4451, del 9 de mayo de 1956, así como cualesquiera otra ley o parte de ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota: La presente Ley fue publicada en el diario "El Caribe" de Santo Domingo, edición del 17 de Junio de 1962.

Ley No.5964, que modifica el inciso d) del Art. 2 de la Ley No.3578, del 12 de junio de 1953 (Fondos Provinientes de Sellos Semipostales para la campaña antituberculosa).

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5964

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el inciso d) del artículo 2 de la Ley No. 3578, de fecha 12 de junio de 1953, los fondos provenientes de la venta de la impresión de sellos ordenada por dicha ley pasan al Fondo General de la Nación;

CONSIDERANDO: Que para lograrse un éxito más eficaz en la campaña contra la tuberculosis en conveniente que dichos fondos sean usados única y exclusivamente para tales fines;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

ARTICULO UNICO.– Se modifica el inciso d) del artículo 2 de la Ley No. 3578, del 12 de junio de 1953, para que el mismo rija de la siguiente forma:

"d) Ordenar la impresión anual de una emisión especial de un sello semi—postal de la denominación de un centavo de valor facial, sello que se expedirá desde el 1ro. al 30 de abril de cada año, el cual se aplicará a toda pieza de correspondencia, incluyendo los bultos postales, fardos postales, bultos aéreos, fardos aéreos, telegramas, cablegramas, libramientos de pago, cheques, giros, facturas, así como a todo documento que requiera sellos de Rentas Internas o de correos, y comunicación telefónica; y el producto de la venta de este sello será usado única y exclusivamente en la campaña contra la tuberculosis. El diseño del sello será aprobado, en cada caso, por el Poder Ejecutivo.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5965, que concede pensión del Estado al señor Rafael Emilio Almonte.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5965

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Concede una pensión del Estado de cien pesos oro (RD$100.00) mensuales, al señor Rafael Emilio Almonte.

Artículo 2.–Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley; y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5966, que concede pensión del Estado al señor Amado García Peravia.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5966

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede una pensión del Estado de trescientos pesos oro (RD$300.00) mensuales al señor Amado H. García Pereyra.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELY

Ley No.5967, que agrega el Art.13 a la Ley No.5891, del 8 de mayo de 1962, (Juntas Electorales, Departamentales, Provinciales y Municipales).

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5967

CONSIDERANDO que la Ley No.5891, de fecha 8 de mayo de 1962, establece que habrán Juntas Electorales Departamentales, Provinciales y Municipales, determinando los miembros que integrarán las mismas, así como sus jurisdicciones territoriales respectivas, no así en cuanto a una Junta Electoral del Distrito Nacional, cuyo funcionamiento, se hace también necesario para el desenvolvimiento del proceso electoral,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.— Se agrega un artículo 13 a la Ley No. 5891, de fecha 8 de mayo de 1962, con el siguiente texto:

"Artículo 13.— Habrá una Junta Electoral del Distrito Nacional, con su asiento en la ciudad de Santo Domingo, cuyas atribuciones están determinadas por la Ley Electoral.

Se compondrá de un Presidente y cuatro Vocales, con dos suplentes cada uno, que serán elegidos por mayoría y en votación secreta por la Junta Central Electoral, la cual podrá también aceptarles sus renuncias y removerlos. Permanecerán en sus funciones cuatro años y podrán ser reelegidos. Para ser

miembro, titular o suplente, de la Junta Electoral del Distrito Nacional, se requieren las mismas condiciones que para ser Senador.

Párrafo.— (Transitorio).— Los miembros de la Junta Electoral del Distrito Nacional, elegidos para dirigir, organizar y vigilar en el Distrito las elecciones para miembros de la Asamblea Revisora de la Constitución de la República, previstas por el artículo 123 (transitorio) de la Constitución de la República y las elecciones generales a que se refiere el artículo 124 (transitorio) de la misma, durarán en sus funciones hasta la instalación del Congreso que surja de estas elecciones generales ordinarias".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Re stauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos. años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota: La presente Ley fue publicada oficialmente en el diario "La Nación", de Santo Domingo, edición del 19 de junio de 1962.

Ley No.5968, que ordena una completa revisión de la Constitución de la República Dominicana, y dicta otras disposiciones.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5968

VISTOS los artículos 87, 89, 90 y 123 (transitorio) de la Constitución de la República, el artículo 111 de la Ley Electoral, No. 5884 del 5 de mayo de 1962, y el Decreto No. 6916 del 15 de julio de 1961:

CONSIDERANDO que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 123 (transitorio) de la Constitución de la República, el Consejo de Estado, una vez hechas las reformas procedentes en materia electoral, deberá convocar a elecciones de representantes a una Asamblea Revisora de la Constitución, para una fecha que no será posterior al 16 de agosto del año en curso;

CONSIDERANDO que se han efectuado ya las reformas que se han considerado convenientes para que las elecciones se realicen dentro de un marco de pureza y libertad que permita a todos los partidos políticos reconocidos e inscritos seleccionar, sin cortapisas ni discriminaciones, sus representantes a la Asamblea que tendrá por misión revisar la Carta Fundamental de la Nación, para dar cumplimiento al voto constitucional a que se ha hecho referencia;

CONSIDERANDO que la Asamblea Revisora deberá estar integrada por el número de representantes por provincias y por el Distrito Nacional que determina la Constitución de 1955;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se ordena una completa revisión de la Constitución de la República, para lo cual deberá reunirse una Asamblea Revisora en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República.

Artículo 2.– Quedan convocadas las Asambleas Electorales para reunirse en el Distrito Nacional y en cada una de las provincias de la República, el día quince de agosto del año en curso, a fin de que procedan a la elección de representantes a la Asamblea Revisora de la Constitución, a razón de uno por cada sesenta mil habitantes o fracción de más de treinta mil y nunca menos de dos representantes, o sea:

Distrito Nacional, 8; Azua, 2; Baoruco, 2; Barahona, 2; Dajabón, 2; Duarte, 3; Espaillat, 2; Independencia 2; La Romana, 2; La Vega, 4; María Trinidad Sánchez, 2; Montecristi, 2; Pedernales, 2; Peravia; 2; Puerto Plata, 3; Salcedo 2; Samaná, 2; San Cristóbal, 4; San Juan, 2; Sánchez Ramírez, 2; San Pedro de Macorís, 2; Elías Piña, 2; Santiago, 5; Santiago Rodríguez, 2; El Seibo, 2; Valverde, 2.

Artículo 3.– La Asamblea Revisora podrá reunirse e iniciar sus labores cinco días después de la fecha en que la Junta Central Electoral haya formulado la relación general prescrita por el artículo 166 de la Ley Electoral.

Artículo 4.– Los cargos de miembros de la Asamblea Revisora no serán remunerados.

Artículo 5.— Los representantes a la Asamblea gozarán de las mismas inmunidades que los miembros de las Cámaras Legislativas durante el ejercicio de sus funciones.

Artículo 6.— El día de las elecciones será no laborable.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

a los veinte días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Re stauración.

RAFAEL F. BONNELLY,

Ley No.5969, que fija el impuesto de la Cédula Personal de Identidad, tanto para los contribuyentes del sexo masculino como para los del sexo femenino.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5969

CONSIDERANDO: que una gran cantidad de contribuyentes no ha podido ponerse al día en el pago impuesto de la Cédula Personal de Identidad;

CONSIDERANDO: que a fin de facilitar a todos los contribuyentes el pago del impuesto de la Cédula personal de Identidad, se hace necesario, no solo reducir sustancialmente dicho impuesto sino también poner en condiciones a esas personas de quedar liberadas de toda deuda, por tal concepto, con el pago de la suma que al respecto se fije.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.— El impuesto de la Cédula Personal de identidad queda fijado en RD$0.50 tanto para los contribuyentes del sexo masculino como para los del sexo femenino.

Párrafo.— Las personas residentes en el país que no se hayan provisto de su Cédula Personal de Identidad, o que no lo hayan renovado con el pago del impuesto del presente año o de años anteriores, podrán poner su Cédula al día con el pago de la suma indicada en el presente artículo.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota: La presente Ley fué publicada oficialmente en "El Caribe", de Santo Domingo, edición del 20 de junio de 1962.

Ley No.5970, que deroga la Ley No.5922 del 23 de mayo de 1962, que prohibe la importación de toda clase de substancias explosivas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5970

CONSIDERANDO: Que en la práctica se ha comprobado que el sistema establecido por la Ley No. 262, sobre Substancias Explosivas, de fecha 17 de abril de 1943, es más conveniente que el previsto por la Ley No. 5922, de fecha 23 de mayo de 1962;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Queda derogada la Ley No. 5922, de fecha 23 de mayo de 1962, que prohibe la importación de toda clase de substancias explosivas puedan utilizarse en la fabricación de explosivos.

Artículo 2.– En consecuencia, las disposiciones de la Ley No. 262, sobre Substancias Explosivas, de fecha 17 de abril de 1943, quedan restablecidas para que rijan en toda su plenitud.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 22 días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos; años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 22 días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota: La presente Ley fue publicada en el diario "La Nación", de Santo Domingo, edición del 22 de junio de 1962.

Ley No.5971, que deroga la Ley No.5522, del 12 de abril de 1961. (Sellos Semipostales para Protección de los Desemparados).

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5971

CONSIDERANDO que en virtud de la Ley No. 5522, del 12 de abril de 1961, fue dispuesta la emisión anual de un sello semipostal de un centavo para aplicar el producto de su venta a la protección de los desamparados, y que dicha humanitaria idea no

pasó de ser una mera propaganda demagógica por el uso que para otros fines dió la tiranía a esos fondos;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se deroga la Ley No. 5522, del 12 de abril de 1961.

Artículo 2.— Se ordena la incineración de los sobrantes de estos sellos, actualmente bajo custodia de la Tesorería Nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 22 días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 22 días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5972, que modifica el Art. 9 de la Ley No.1683 sobre Naturalización.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5972

CONSIDERANDO: que al ser suprimida la Gobernación Civil del Distrito Nacional, por la Ley No. 5930 del 2 de junio del corriente año, procede designar el funcionario que deberá tomar el juramento a los naturalizados residentes en el Distrito Nacional, la cual fué una de las atribuciones que quedaron a cargo de dicho Gobernador, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley No.5383, del 4 de agosto de 1960;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.— Se modifica el artículo 9 de la Ley No. 1683, sobre Naturalización, de fecha 21 de abril de 1948, para que en lo adelante rija de la siguiente manera:

"Artículo 9.— Una vez publicado el Decreto en la Gaceta Oficial, el Secretario de Estado de Interior y Policía, asistido del Oficial Mayor de dicho Departamento, quien actuará para estos fines como Secretario, si el interesado reside en el Distrito Nacional, o el Gobernador Civil, asistido del Secretario de la Gobernación, si el interesado reside en una Provincia, tomará juramento al naturalizado de ser fiel a la República, y le entregará una copia certificada por el funcionario actuante y el Secretario,

copia que deberá llevar adherido y sellado un retrato del naturalizado y de los miembros de su familia que se hayan naturalizado con él, según fuere el caso".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidos días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,

Ley No.5973, sobre especialización de los fondos obtenidos como consecuencia del impuesto a que se refiere el Art. 3 de la Ley No.5962, del 15 de junio de 1962.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5973

CONSIDERANDo que es necesario especializar los fondos que se obtengan como consecuencia del impuesto a que se refiere el artículo 3 de la Ley No. 5962, del 15 de junio de 1962, a fin de que se destinen exclusivamente a determinadas necesidades de la Administración Pública.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— El producto del impuesto a que se refiere el artículo 3ro. de la Ley No. 5962, de fecha 15 de junio de 1962, se especializará en la Tesorería Nacional en la forma siguiente:

El 75 por ciento para el Fondo 100.

El 20 por ciento para el Fondo 1557.

El 5 por ciento para el Fondo 6011.

Artículo 2.— La presente Ley deroga y sustituye cualquier otra ley o parte de ley que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 25 días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana,

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio Nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA Por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 25 días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Indpendencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota: La presente Ley fué publicada en los diarios de Santo Domingo, "El Caribe" y "La Nación", ediciones del 26 de junio de 1962.

Ley No.5974, que deroga la Ley No.5240, del 24 de octubre de 1959, que prohibía a los Notarios Públicos recibir determinados actos.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 5974

CONSIDERANDO: que la Ley No. 5240, de fecha 24 de octubre de 1959, establece una disposición que coarta

indebidamente el pleno ejercicio de las funciones de los Notarios Públicos;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

ARTICULO UNICO.- Queda derogada la Ley No.5240, de fecha 24 de octubre de 1959, que prohibe a los Notarios Públicos recibir los actos en los cuales sean parte las personas particulares o privadas, físicas o morales, a quienes presten servicios remunerados como empleados, o como abogados, asesores, o consultores retribuídos mediante el sistema de iguales o de cualquier otro modo, o que contengan alguna disposición en relación con las mencionadas personas física o morales.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Dimingo, Distrito Nacional, Capital de la Pepública Dominicana, a los 26 días del mes de junio de mil noveciento sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sanchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio Nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 25 días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Ley No.5975, que determina la distribución de las entradas percibidas por concepto del Impuesto Sobre la Renta, Ley No.5911, de mayo 22 del 1962.

EL CONSEJO DEL ESTADO
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

NUMERO: 5975

CONSIDERANDO: que es necesario especializar los fondos que se obtengan como consecuencia del Impuesto sobre la Renta creado por la Ley No. 5911, de fecha 22 de mayo de 1962, a fin de que se destinen exclusivamente a determinadas necesidades de la Administración Pública;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.—Las entrada que hasta el 31 de diciembre del presente año perciba el fisico por concepto del Impuesto sobre la Renta creado por la Ley No. 5911 del 22 de mayo de 1962, se distribuirá en la Resorería Nacional

El 70 por ciento para el Fondo 100 General;

El 15 por ciento para el Fondo Especial 1557; y

El 15 por ciento para el Fondo Municipal 6007.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Pepública Dominicana, a los veintisiete días del mes de junio delmil moveciento sesenta y dos años 119no de la Independencia y 99no e la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José José Fernández Caminero,
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En Ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118(transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 25 días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5976, que declara como organismo autónomo al Comité Nacional Olímpico.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5976

CONSIDERANDO que para un mejor desenvolvimiento de sus actividades conviene conferir al Comité Nacional Olímpico la más amplia libertad de acción, lo cual, por otra parte, colocará a dicha institución en el mismo plano que los demás organismos internacionales similares;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se declara al Comité Nacional Olímpico como un organismo autónomo.

Artículo 2.– La presente Ley deroga en cuanto sea necesario cualquiera otra disposición legal que le sea contraria.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO
Primer Vicepresidente

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO
Miembro

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro

JOSE FERNANDEZ CAMINERO
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5977, que modifica el Art. 21 de la Ley No.5220, sobre División Territorial de la República.

EL CONSEJO DE ESTADO
En nombre de la República

NUMERO 5977

CONSIDERANDO: Que unos 1,670 distinguidos miembros del Municipio de Peña, Provincia de Santiago, han solicitado que se restablezca el nombre de Tamboril a dicho Municipio;

CONSIDERANDO: Que no obstante haber sido llamada oficialmente Peña, desde el año 1900, en homenaje a uno de los héroes de la batalla de "Sabana Larga", la generalidad de sus habitantes y de los del país ha seguido denominando a dicha comunidad con el histórico y tradicional nombre de Tamboril;

CONSIDERANDO: Que la solicitud a que se ha hecho referencia y la circunstancia señalada, justifican la restitucon de su antiguo nombre a aquella comunidad:

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se modifica la parte capital del artículo 21 de la Ley No. 5220, sobre división territorial de la República Dominicana, de fecha 21 de septiembre de 1959, para que rija del siguiente modo;

Artículo 21.– La Provincia de SANTIAGO está constituida por los Municipios de Santiago, Jánico, Tamboril y San José de las Matas, con la ciudad de Santiago de los Caballeros como capital".

Artículo 2.– Asimismo, queda modificado el Párrafo III del citado artículo 21 de la Ley No. 5220, sobre división territorial de la República Dominicana, para que se lea así:

Artículo 4.– El paraje comunmente denominado "Colonia (Las cabecera y las secciones pendiente).

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los veintisiete días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el arículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.-

Ley No.5978, que cambia varios nombres de Secciones y Parajes en la Ley sobre División Territorial de la República.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5978

CONSIDERANDO: que los moradores de las secciones Trujillo del Yuna, del Municipio de Villa Riva, Provincia Duarte; Juan Lorenza, del Municipio de Los Llanos, Provincia de San Pedro de Macorís; y Trujillo, del Municipio y Provincia de San Cristóbal, han solicitado que les sean cambiados dichos nombres por los de "Agua Santa del Yuna", "Los Jíbaros" y "Los Manantiales", respectivamente;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– La Sección de Trujillo del Yuna, del Municipio de Villa, Riva, Provincia Duarte, se denominará en lo adelante "Agua Santa del Yuna".

Artículo 2.– La Sección Juana Lorenza, del Municipio de Los Llanos, Provincia de San Pedro de Macorís, se denominará en lo adelante "Los Jíbaros".

Artículo 3.– La Sección Trujillo, del Municipio y Provincia de San Cristóbal, se denominará en lo adelante "Los Manantiales".

Artículo 4.– El paraje comunmente denominado "Colonia Ramfis", Sección de Cambita Garabitos, del Municipio y Provincia de San Cristóbal, ostentará, en lo adelante, el nombre de "La Cabirma de la Loma".

Artículo 5.– El consecuencia, quedan modificados en cuanto sea necesario, el Párrafo IV del artículo 8, el Párrafo II del artículo 18, y el Párrafo I del artículo 24 de la Ley No. 5220, sobre división territorial de la República Dominicana, de fecha 21 de septiembre de 1959.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de junio del mil,

novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Retauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de EStado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiocho días del mes de junio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5979, que restablece el Art. 12 de la Ley del Notariado.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5979

CONSIDERANDO: que resulta inconveniente la existencia de la disposición legal según la cual el ejercicio concomitante de las funciones de Notario Público es incompatible con las de todo cargo o empleo público remunerado;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se restablece el artículo 12 de la Ley del Notariado No. 770, del 8 de noviembre de 1927, para que rija nuevamente tal como regía antes de ser modificado por la Ley No. 5261, del 9 de diciembre de 1959, o sea en la siguiente forma:

Artículo 12.– Las funciones de Notario son incompatibeles con las de cualquier cargo o empleo del orden judicial.

Párrafo. Sin embargo, cuando las funciones de Notario sean ejercidas por un abogado, éste podrá desempeñar concurrentemente con aquellas las que son inherentes al cargo de abogado de oficio y las indicadas en el inciso a) del artículo 78 de la Ley de Organización Judicial, reformado por la Ley No. 97, de fecha 20 de marzo de 1931".

Artículo 2.– En consecuencia, queda derogada en todas sus partes, la Ley No. 5261, de fecha 9 de diciembre de 1959, que modifica el texto del citado artículo 12 transcrito precedentemente, a fin de disponer que las funciones de Notario Público son incompatibles con las de cualquier cargo o empleo público remunerado, ya sean éstos electivos o de nombramientos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de julio de mil novecientos

sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL
Segundo Vice-Presidente

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE A. FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5980, que agrega un párrafo al Art. 10 de la Ley No.3483, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5980

CONSIDERANDO: que la Ley No. 3883, que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, de fecha 13 de febrero de 1953, y sus modificaciones, establece que los Comandantes de Departamentos de la Policía Nacional tienen facultad para consignar los Consejos de Guerra de Primer Grado de la Policía Nacional.

CONSIDERANDO: que en el Distrito Nacional funcionan varios Departamentos de la Policía Nacional;

CONSIDERANDO: que no debe haber un Tribunal de Primer Grado para cada uno de cada Departamentos, ya que ello crearía confusión y dificultades en la administración de la Justicia en los asuntos de la competencia de dichos Consejos;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.– Se agrega un párrafo III al artículo 10 de la Ley que crea el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas No. 3483, de fecha 13 de febrero de 1953, modificado por la Ley No. 5868, del 24 de abril de 1962, con el siguiente texto:

"Párrafo III.– En el Distrito Nacional, funcionarán dos Consejos de Guerra de primer Grado de la Policía Nacional, cuyos asientos y jurisdicciones serán determinados por el Secretario de Estado de Interior y Policía".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, ymando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5981, que especializa los fondos pagados por concepto del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de las Empresas de la Corporación de Fomento Industrial.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5981

CONSIDERANDO: que para logarar los propósitos que se persiguen con la creación de la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana, es imprescindible que ésta reciba la aportación del Gobierno Dominicano mediante una asignación presupuestal;

CONSIDERADNO: Que las recaudaciones de impuestos sobre la Renta que se efectúen sobre las empresas pertenecientes al patrimonio de dicha corporación pueden realizar esa finalidad y propender a su desarrollo;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.– Los pagos que por concepto del Impuesto sobre la Renta efectúen las empresas que forman parte del patrimonio de la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana, serán especializados en la Tesorería Nacional para ser puestos a disposición de dicha Corporación de Fomento con el propósito de que esos valores sean ingresados en un fondo de fideicomiso a cargo de esa institución destinado a financiar programas que se estime no sean autoliquidables, como inversiones riesgosas, prétamos blandos, estudios e investigaciones de proyectos, etc.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repúblca Dominicana, a los nueve días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONAL J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un diario de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5982, que pospone la fecha para la ejecución de la Ley No.5997, que constituye la Provincia de La Altagracia.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5982

CONSIDERANDO: que cualquier cambio realizado en los actuales momentos en la división política del territorio

nacional, podría entorpecer los trabajos preparatorios de las próximas elecciones, los cuales se encuentran ya en una etapa muy avanzada;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.– Se pospone para una fecha que se indicará oportunamente, la ejecución de la Ley No. 5597, de fecha 11 de agosto de 1961, que constituye, a partir del 16 de agosto de 1962, la Provincia de la Altagracia, con la ciudad de Salvaleón de Higüey como capital.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República,
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO.
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las a ribuciones quyme confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PRLMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial pra su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Resolución No.5983, del Consejo de Estado que autoriza la erección de un busto del líder obrero Mauricio Báez en la ciudad de San Pedro de Macorís.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5983

VISTA la solicitud que por medio de la Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos ha hecho la Asociación de Obreros Portuarios Autónomos, de la ciudad de San Pedro de Macorís, para que se le autorice la erección de un busto del líder obrero Mauricio Báez, caído durante la pasada tiranía;

VISTA la ley sobre erección de Estatuas y Monumentos Públicos No. 638 del 23 de junio del 1944, y sus modificaciones;

RESUELVE:

ARTICULO UNICO.— Autorizar a la Asociación de Obreros Portuarios Autónomos de San Pedro de Macorís, a la erección de un busto del líder obrero caído durante la pasada tiranía, Mauricio Báez, en el parque de aquella ciudad que ostenta su nombre.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicna, a los doce días del mes de julio del mil novecientos sesenta ydos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones qe me confieren el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5984, que modifica el artículo 30 de la Ley No.4809, sobre Tránsito de vehículos.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5984

CONSIDERANDO que la Comisión destinada al exámen de los aspirantes a manejar vehículos de motor no tiene en sus labores ninguna relación con los asuntos militares; que, por consiguiente, no se justifica que en el seno de la Comisión figure un miembro del Ejército Nacional,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO: Queda modificada la parte capital del Artículo 30, de la Ley No. 4809, de fecha 29 de noviembre de 1957, sobre Tránsito de Vehículos, para que rija de la siguiente manera:

"Artículo 30.– Una comisión integrada por un representante de la Secretaría de Estado de Obras Públicas, quien la presidirá en cada caso; un miembro de la Policía Nacional, que sepa mecánica automovilística; un perito mecánico designado por la Dirección General de Rentas Internas; y un Dr. en Medicina designado por el Poder Ejecutivo, que hará el exámen médico y expedirá el certificado correspondiente, examinará a los aspirantes a manejar vehículos de motor.

En caso de enfermedad, licencia, vacaciones o cualquier otra causa de ausencia en sus funciones, del Médico de la Comisión Examinadora de Aspirante a Manejar Vehículos de Motor, el Secretario de Estado de Finanzas, previa gestión del Director General de Rentas Internas, indicará al Director del Hospital del Estado que procederá al exámen de los aspirantes."

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capita, de la RepúblicaDominicana, a los doce días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5985, que modifica el artículo 43 de la Ley No.5924, sobre Confiscación General de Bienes.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5985

CONSIDERANDO que el Tribunal de Confiscaciones no pudo constituirse en la fecha señalada para entrar en vigor la Ley No. 5924, sobre Confiscación General de Bienes, del 26 de mayo de 1962; que, procede, pues, fijar un nuevo punto de partida para el inicio de los plazos subordinados a la entrada en vigencia de la citada ley;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se declara que los plazos señalados en la Ley No. 5924, sobre Confiscación General de Bienes, del 26 de mayo de 1962, que estaban subordinados a la entrada en vigor de dicha ley, fijada para el 15 de junio del año en curso, tendrán como punto de partida el día 15 de julio del presente año.

Artículo 2.— En consecuencia, queda modificado, en este sentido el Artículo 43 de la indicada Ley No. 5924, sobre Confiscación General de Bienes, de fecha 26 de mayo de 1962.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confieren el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5986, que modifica el artículo 23 de la Ley No.392, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5986

CONSIDERANDO: que entre los funcionarios que deben otorgar Certificados de Vida y Costumbre para fines de

expedición de licencias particulares para poseer armas de fuego municiones y fulminantes, figuran tanto el Jefe de Puesto Correspondiente de la Policía Nacional, como el del Ejército Nacional;

CONSIDERANDO: que tal duplicidad es innecesaria y resulta más propio de las funciones de la Policía Nacional la expedición de esta clase de Certificados;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.– Queda modificada la parte capital del artículo 23 de la Ley No. 392, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, de fecha 20 de septiembre de 1943, para que rija de la siguiente manera:

"Artículo 23.– La solicitud de licencia particular para poseer armas de fuego, municiones y fulminantes hecha en los formularios que para ello disponga el Secretario de Estado de Interior y Policía, será dirigida en cuadruplicado a la Jefatura de la Policía Nacional o al Gobernador Civil de la jurisdicción, según que el solicitante tenga su residencia habitual en el Distrito Nacional o en provincias, respectivamente, acompañado de cuatro fotografías de su persona, recientes, de sendas certificaciones de vida y costumbre, expedidas por el Juez de Paz, por el Jefe de la Policía de la jurisdicción, y por el Procurador General de la Corte de Apelación de su Departamento o del Procurador Fiscal de su Distrito, que evidencie que esa persona no ha sido condenada por crimen o delito contra las personas o las propiedades, ni está sometida a procedimiento represivo alguno.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Ncional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la REstauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vecepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANOTNIO IMBERT BARRERA
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atriguciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Resolución No.5987, del Consejo de Estado, que aprueba un acto de donación de terreno propiedad del Estado a la señorita Minetta Roques Martínez, Directora del Colegio Santa Teresita.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 5987

VISTO el inciso 20 del artículo 38 de la Constitución de la República;

VISTO el acto de donación suscrito el día 21 de mayo del año 1962, por medio del cual el Estado Dominicano, representado por el Dr. J. Oscar Julia, Administrador General de Bienes Nacionales, dona a la señorita Minetta Roques Martínez, Directora del Colegio Santa Teresita, de esta ciudad, una extensión de terreno de una hectáreas, 56 áreas y, 74 centiáreas, dentro de la parcela No. 65, provisional, del Distrito Catastral No. 2 del Distrito Nacional, inmueble que está valorado en la cantidad de RD$47,022.00;

RESUELVE:

UNICO: Aprobar el acto de donación suscrito el día 21 de mayo del año 1962, por medio del cual el Estado Dominicano, representado por el Dr. J. Oscar Julia, Administrador General de Bienes Nacionales, dona a la señorita Minetta Roques Martínez, Directora del Colegio Santa Teresita, de esta ciudad, una extensión de terreno de una hectárea, 56 áreas y, 74 centiáreas, dentro de la parcela No. 65, provisional, del Distrito Catastral No. 2 del Distrito Nacional, inmueble que está valorado en la cantidad de RD$47,022.00, que copiado a la letra dice así:

"DONACION:

EL ESTADO DOMINICANO, representado por el Doctor J. OSCAR JULIA, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, y funcionario público, domiciliado y residente en esta Ciudad, portador de la Cédula de Identidad Personal Núm. 19782, serie 31, con sello hábil Núm. 4470909, en su calidad de Administrador de Bienes Nacionales, quien actúa en virtud de PODER otorgádole en fecha 3 del mes de abril del año 1962, por el Excelentísimo Señor Presidente de la República y del Consejo de Estado, que le faculta para el otorgamiento de este acto, DONA pura y simplemente a la señorita MINETTA ROQUES MARTINEZ, dominicana, mayor de edad, soltera, de quehaceres domésticos, portadora de la Cédula de Identidad Personal Núm. 10086, serie 1ra., con sello hábil Núm. 15665, domiciliada y residente en la casa No. 12 altos de la calle "José Joaquín Pérez" de esta ciudad, Directora del Colegio "Santa Teresita" de esta Ciudad, quien presente acepta, dicha donación, el siguiente inmueble:

"Una porción de terreno con una extensión superficial de 1 Ha., 56 As., y 74 Cas., (Una hectárea, cincuenta y seis áreas, y

setenta y cuatro centiareas), dentro de la Parcela No. 65 (sesenta y cinco), Provicional, del Distrito Catastral No. 2 (dos), del Distrito Nacional, amparada dicha parcela por el cetificado de Títulos No.61—1287, expedido por el Registrador de Títulos en fecha 16 de octubre del año 1961, porción de terreno que ha sido valorada por la Dirección General del Catastro Nacional. en la suma de RD$47,022.00 (CUARENTA Y SIETE MIL VEINTIDOS PESOS ORO) MONEDA DE CURSO LEGAL, y cuyas colindancias son las siguientes: Al Norte, Calle Modesto Díaz; Al Este; Parcela No.49; Al Sur: Avenida Dr. B. Correa y Cidrón; y al Oeste: Calle sin nNombre:

La presente Donación. la hace el ESTADO DOMINICANO, a la señorita MINETTA ROQUES MARTINEZ, en su condición de Directora del Colegio "Santa Teresita" de esta Ciudad, con el fin de que construya en tal porción de terreno un edificio destinado al alojamientos del Colegio Santa Teresita, similar al edificio que ocupa dicho Colegio actualmente, y en compensación de quince (15) becas que por el término de cinco (5) años serán puestas a disposición de la Secretaría de Estado Educación, Bellas Artes y Cultos, las cuales serán distribuidas entre estudiantes de escasos recursos económicos seleccionados por la referida Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos, para cursar estudios en el referido Colegio "Santa Teresita" tan pronto quede inaugurado en su nuevo edificio, el cual deberá inciar su construcción a más tardar en un plazo de dieciocho (18) meses a contar de la fecha del presenta contrato.

Queda convenido entre las partes que de conformidad con el artículo 54 de la Constitución de la República, (inciso 9), el presente contrato será sometido a la aprobación del Consejo de Estado.

El presente acto ha sido pactado y redactado, y firmado, en dos originales de un mismo tenor, uno para cada una de las partes, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 21 días del mes de mayo del año mil novecientos sesenta y dos (1962).

Dr. J. OSCAR JULIA MINETTA ROQUES MARTINEZ.

CERTIFICO: Que las firmas que aparecen más arriba fueron puestas en mi presencia por los señores Doctor J. OSCAR

JULIA Y MINETTA ROQUES MARTINEZ, personas a quienes doy fé conocer y cuyas generales constan en el presente acto, en la fecha ut-supra.

Doctor Salvador Cornielle Segura.
Notario Público".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PORMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5988, que autoriza transferencias de fondos en la Ley de Gastos Públicos vigente.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 5988

ARTICULO PRIMERO: Del Balance no Apropiado correspondiente al Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962, se destina la suma de RD$1,661,967.11 (UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS), para efectuar las siguientes apropiaciones:

AL CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20153	MARINA DE GUERRA		RD$209,842.21
G20153B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 17,049.08	
G20153C	Adquisición de Propiedades	RD$ 4,000.00	
G20153Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	RD$163,617.01	

G20153	Atenciones Varias	RD$ 25,176.12	
		RD$ 209,842.21	

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

30220	POLICIA NACIONAL		RD$149,087.50
G30220A	Servicios Personales	RD$ 7,087.50	
G30220B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 6,000.00	
G30220C	Adquisición de Propiedades	RD$ 85,000.00	
G30220Z	Para pagar Deudas de años Anteriores	RD$ 1,000.00	
G30220	Atenciones Varias	RD$ 50,000.00	
		RD$ 149,087.50	

30225	BANDA DE MUSICA DE LA POLICIA NACIONAL		RD$ 4,750.00
G30225B	Servicios Personales	RD$ 4,750.00	

CAPITULO VI

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

30101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$100,000.00
G30401B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 75,000.00	
G30101	Atenciones Varias	RD$ 25,000.00	
		RD$ 100,000.00	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 380,00.00
G10415	Atenciones Varias	RD$ 380,000.00	

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y CULTOS

31514	DIVERSOS GASTOS ESCOLARES		RD$ 50,000.00
G31514A	Servicios Personales	RD$ 50,000.00	

CAPITULO IX

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$142,643.90
G10497A	Servicios Personales	RD$ 3,900.00	
G10497C	Adquisición de Propiedades	RD$ 119,678.90	
G10497	Atenciones Varias	RD$ 19,065.00	
		RD$ 142,643.90	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10498	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 80,000.00
G10498	Atenciones Varias	RD$ 80,000.00	

31802	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS		RD$520,000.00
G31802	Atenciones Varias	RD$ 520,000.00	
10494	DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES		RD$ 25,643.50
G10494C	Adquisición de Propiedades	RD$ 25,643.50	
			RD$ 1,661,967.11

ARTICULO SEGUNDO:– Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962:.

DEL:

CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10310	PODER EJECUTIVO		RD$ 64,270.39
G10310	Asociación de Cooperativas de Choferes	RD$ 64,270.39	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 50,000.00
G20101	Atenciones Varias	RD$ 50,000.00	
20124	PERSONAL MILICIANO, E. N.		RD$ 6,360.00
G20124A	Servicios Personales	RD$ 6,360.00	

20143	ATENCIONES VARIAS DEL EJERCITO		RD$188,294.09
G20143E	Construcciones y Mejoras Permanentes	RD$ 56,006.09	
G20143	Atenciones Varias	RD$ 132,288.00	
		RD$188,294.09	
20153	MARINA DE GUERRA		RD$3,000.00
G20153A	Servicios Personales	RD$ 3,000.00	

CAPITULO IV
SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

32510	GOBIERNO PROVINCIAL		RD$ 9,345.00
G35510A	Servicios Personales	RD$ 9,345.00	

CAPITULO VIII
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y CULTOS

10493	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$140,797.01
G10493A	Servicios Personales	RD$ 90.00	
G10493	Atenciones Varias	RD$ 140,707.01	
		RD$ 140,797.01	
31522	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL		RD$ 1,200.00
G31522A	Servicios Personales	RD$ 1,200.00	
31501	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA URBANA		RD$ 3,097.50

G31504A	Servicios Personales	RD$ 3,097.50	
31513	SERVICIO MEDICO ESCOLAR		RD$ 1,500.00
G31513A	Servicios Personales	RD$ 1,500.00	

CAPITULO IX

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

30460	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRAULICOS		RD$ 420.00
G30460A	Servicios Personales	RD$ 420.00	

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 80,000.00
G10499	Atenciones Varias	RD$ 80,000.00	
31401	HOSPITALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO		RD$ 10,270.00
G31401A	Servicios Personales	RD$ 570.00	
G31401	Mantenimiento y Atenciones	RD$ 9,700.00	
		RD$ 10,270.00	
31372	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		RD$ 1,260.00
G31372A	Servicios Personales	RD$ 1,260.00	

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 80,000.00
G10499	Atenciones Varias	RD$ 80,000.00	
31401	HOSPOTIALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO		RD$ 10,270.00
G31401A	Servicios Personales	RD$ 570.00	
G31401	Mantenimiento y Atenciones	RD$ 9,700.00	
		RD$ 10,270.00	
31372	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		RD$ 1,260.00
G31372A	Servicios Personales	RD$ 1,260.00	

CAPITULO XII

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA

30410	MENSURAS Y SANEAMIENTOS DE PROPIEDADES DEL ESTADO		RD$ 35,000.00
G30410	Atenciones Varias	RD$35,000.00	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10498	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$	8,967.30
G10498	Atenciones Varias	RD$ 8,967.30		
10494	DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES		RD$	45,810.69
G10494	Atenciones Varias	RD$ 45,810.69		
32120	ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS		RD$	18,855.13
G32120	Atenciones Varias	RD$ 18,855.13		
30802	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		RD$	4,021.77
G30802A	Servicios Personales	RD$ 2,400.00		
G30802	Atencions Varias	RD$ 1,621.77		
		RD$ 4,021.77		

CAPITULO XIV

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

31471	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$	1,575.00
G31471C	Adquisición de Propiedades	RD$ 1,575.00		
31600	DIRECCION GENERAL DE TURISMO		RD$	37,500.00
G31600F	Subvenciones	RD$ 37,500.00		

CAPITULO XIV–I

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION CONTROL Y RECUPERACION DE BIENES

10421	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO			RD$ 1,269.00
G10421B	Otros Gastos Corrientes	RD$	440.02	
G10421C	Adquisición de Propiedades	RD$	819.98	
		RD$	1,269.00	

RD$762,812.88

AL: CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10310	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			RD$ 4,800.00
G10310A	Servicios Personales	RD$	4,800.00	
30536	COOPERATIVA DE INDUSTRIAS ARTESANALES			RD$ 3,475.00
G30536A	Servicios Personales	RD$	3,475.00	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20401	FUERZA AEREA DOMINICANA			RD$ 16,811.13
G20401E	Construcciones y Mejoras Permanentes	RD$	7,935.12	
G20401	Atenciones Varias	RD$	8,876.01	
		RD$	16,811.13	
20120	PERSONAL ALISTADO DEL EJERCITO			RD$ 6,360.00
G20120A	Servicios Personales	RD$	6,360.00	

20143	ATENCIONES VARIAS DEL EJERCITO			RD$110,651.79
G20143B	Otros Gastos Corrientes	RD$	53,161.70	
G20143C	Adquisición de Propiedades: RD$56,006.09			
G20143E	Construcciones y Mejoras Permanentes	RD$	1,484.00	
		RD$	110,651.79	
10443	GARAGE DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS DEL EJERCITO NACIONAL			RD$ 1,561.15
G10443C	Adquisición de Propiedades	RD$	1561.15	
20152	CUERPO MEDICO DEL EJERCITO NACIONAL			RD$121,264.00
G-20152-B	Otros Gastos Corrientes	RD$	121,264.00	
20156	GASTOS DE VIAJES DE LA MARINA DE GUERRA			RD$3,000.00
G-20156-B	Otros Gastos Corrientes	RD$	3,000.00	

CAPITULO VI
SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

10491	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO			RD$ 19,895.00
G10491A	Servicios Personales	RD$	9,345.00	
G10491C	Adquisición de Propiedades	RD$	3,050.00	
G10491Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	RD$	7,500.00	
		RD$	19,895.00	

31210	DIRECCION GENERAL DE MIGRACION		RD$	2,937.00
G31210A	Servicios Personales	RD$ 2,937.00		
10492	DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD		RD$	46,500.00
G10492C	Adquisición de Propiedades	RD$ 28,000.00		
G10492	Atenciones Varias	RD$ 18,500.00		
		RD$ 46,500.00		
32510	GOBIERNO PROVINCIAL		RD$	3,000.00
G32510B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 3,000.00		

CAPITULO V

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10506	CONSULTORIA JURIDICA		RD$	2,624.34
G10506A	Servicios Personales	RD$ 2624.34		

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10416	TESORERIA NACIONAL		RD$	5,100.00
G10416A	Servicios Personales	RD$ 5,100.00		
10420	DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS		RD$	3,624.83
G10420A	Servicios Personales	RD$ 3,624.83		
10423	ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES		RD$	1,200.00
G10423A	Servicios Personales	RD$ 1,200.00		

10424	DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL		RD$	4,000.00
G10424	Atenciones Varias	RD$ 4,000.00		
10426	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS		RD$	7,590.00
G10426A	Servicios Personales	RD$ 7,590.00		

CAPITULO VII–I

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

10418	PROCURADURIA GENERAL ADMINISTRATIVA		RD$	50.00
G10418C	Adquisición de Propiedades	RD$ 50.00		

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION BELLAS ARTES Y CULTOS

10493	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$161,907.01
G10493B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 76,907.01	
G10493C	Adquisición de Propiedades	RD$ 61,000.00	
G10493Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 4,000.00	
G10493	Atenciones Varias	RD$ 20,000.00	
		RD$ 161,907.01	

31510	DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.		RD$.	90.00
G31510A	Servicios Personales	RD$ 90.00		

31503	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y NORMALISTA		RD$	1,530.00
G31503A	Servicios Personales	RD$ 1,530.00		
31508	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION VOCACIONAL		RD$	360.00
G31508A	Servicios Personales	RD$ 360.00		
31511	INSPECCIONES DE EDUCACION		RD$	360.00
G31511A	Servicios Personales	RD$ 360.00		
31513	SERVICIO MEDICO ESCOLAR		RD$	1,500.00
G31513	Atenciones Varias	RD$ 1,500.00		
31520	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES		RD$	847.50
G31520A	Servicios Personales	RD$ 847.50		

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$	1,740.00
G10499A	Servicios Personales	RD$ 1,740.00		
31372	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		RD$	6,590.00
G31372A	Servicios Personales	RD$ 4,980.00		
G31372	Mantenimiento y Atenciones	RD$ 1,610.00		
		RD$ 6,590.00		

31401	HOSPITALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO		RD$ 2,000.00
G31401	Mantenimiento y Atenciones	RD$ 2,000.00	
10412	SUPERVISION GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES		RD$ 1,200.00
G10412A	Servicios Personales	RD$ 1,200.00	

CAPITULO XII

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA

10210	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 32,000.00
G10210C	Adquisición de Propiedades	RD$ 32,000.00	
10290	TRIBUNAL DE CONFISCACIONES		RD$ 30,647.50
G10290A	Servicios Personales	RD$ 30,647.50	
30290	FISCALIA DEL TRIBUNAL DE CONFISCACIONES		RD$ 19,760.00
G30290A	Servicios Personales	RD$ 19,760.00	
10401	CARCELES PUBLICAS		RD$ 14,042.74
G10401	Atenciones Varias	RD$ 14,042.74	
30209	OFICINA DEL ABOGADO DEL ESTADO		RD$ 1,050.00
G30209A	Servicios Personales	RD$ 1,050.00	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10498	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$5,525.00
G10498A	Servicios Personales	RD$ 5,525.00	
G10498B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 8,967.30	
		RD$ 14,492.30	
10494	DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES		RD$ 45,810.69
G10494B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 45,810.69	
32120	ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS		RD$ 18,855.13
G32120A	Servicios Personales	RD$ 72,00.00	
G32120B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 11,655.13	
		RD$ 18,855.13	
30802	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		RD$ 1,621.77
G30802B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 1,621.77	

CAPITULO XIV

SECRETARIA DE ESTADO DE INSUSTRIA Y COMERCIO

31471	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO			RD$ 1,575.00
G31471A	Servicios Personales	RD$	1,575.00	
31600	DIRECCION GENERAL DE TURISMO			RD$ 38,700.00
G31600A	Servicios Personales	RD$	1,200.00	
G31600	Atenciones Varias	RD$	37,500.00	
		RD$	38,700.00	

CAPITULO XIV–I

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION, CONTROL Y RECUPERACION DE BIENES

10421	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO			RD$ 1,689.00
G10421A	Servicios Personales	RD$	420.00	
G10421Z	Para pagar Deudas de Años Anteriores	RD$	1,269.00	
		RD$	1,689.00	

RD$762,812.88

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No.5989, que designa al Lic. Julio Hoepelman S., Miembro de la Junta Central Electoral y a los señoras Lic. José Joaquín Pérez Páez y Dr. J. Gabriel Hernández Mota, Primer y Segundo Sustitutos respectivamente.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Funciones de Asamblea Nacional

NUMERO: 5989

CONSIDERANDO: que el Lic. Julio A. Cuello, Miembro de la Junta Central Electoral, ha sido designado Fiscal del Tribunal

de Confiscaciones, cargo éste que es incompatible con el desempeño de aquellas funciones;

VISTO el Párrafo transitorio del Artículo 4 de la Ley No. 5891, de fecha 8 de mayo de 1962;

RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al Lic. Julio Hoepelman S., Miembro de la Junta Central Electoral, en sustitución del Lic. Julio A. Cuello.

Artículo 2.- Designar al Lic. José Joaquín Pérez Páez, y a Dr. J. Gabriel Hernández Mota, Primer y Segundo sustitutos, respectivamente, del Lic. Julio Hospelman S., en su indicada calidad de Miembro de la mencionada Junta.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5990, que modifica el Art. 64 de la Ley 5911, del Impuesto Sobre la Renta.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 5990

CONSIDERANDO que el Impuesto sobre la Renta debe incidir de un modo proporcionado sobre los contribuyentes, de manera que aquellos que perciban menos ingresos y que son los que constituyen la gran mayoría, sean gravados equitativa y adecuadamente,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se modifica el Artículo 64 de la Ley No. 5911, de Impuesto sobre la Renta, de fecha 22 de mayo de 1962, para que rija del modo siguiente:

"Artículo 64.- El impuesto de esta Categoría se liquidará y pagará con una tarifa de 1 por ciento, para los contribuyentes que tengan rentas hasta RD$2,400.00 anuales y de un 2 o/o (dos por ciento) para los que obtengan rentas por encima de RD$2,500.00 anuales".

Artículo 2.—Esta disposición tendrá vigencia a partir del 1ro. de agosto de 1962.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintitres días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la Repúbica;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República dominicana, a los veintitres días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No.5991, del Consejo de Estado que autoriza a los señores Dr. Nicolás Pichardo Primer Vicepresidente del Consejo de Estado y al Dr. Donald J. Reid Cabral Segundo Vicepresidente del mismo Consejo, a ausentarse del país durante ocho días.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5991

VISTO el artículo 120 (transitorio) de la Constitución de la República;

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:

ARTICULO UNICO.- Se autoriza al Doctor Nicolás Pichardo, primer Vicepresidente del Consejo de Estado y al Doctor Donald J. Reid Cabral, Segundo Vicepresidente del Consejo de Estado, a ausentarse del país durante ocho días, a partir de la fecha de la presente Resolución.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Indepedencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José A. Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capita de la República Dominicana, a los 24 días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5992, que concede franquicia postal y telegráfica al Instituto del Tabaco de la Rep. Dom.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 5992

CONSIDERANDO que mediante Ley No. 5961, del 15 de junio de 1962, fue creado el Instituto del Tabaco de la República Dominicana;

CONSIDERANDO que dada la importancia de la labor a desarrolllar por ese instituto en beneficio de la economía nacional, es deber del Gobierno dictar medidas que faciliten el mejor y más eficiente funcionamiento del mismo.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO: Se concede franquicia postal y telegráfica al Instituto del Tabaco de la República Dominicana.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 25 días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 25 días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99n0. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5993, que pone a cargo de la Dirección General del Impuesto Sobre la Renta, todo lo relativo a la depuración, investigación y liquidación del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 5993

CONSIDERANDO: que por efecto de la Ley No. 5911, de fecha 22 de mayo de 1962, que instuye la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, quedó suprimida la Dirección General del Impuesto sobre Beneficio, que tenía a su cargo la depuración, investigación y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.- Todo lo relativo a la depuración, investigación y liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, estará a cargo de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION BIBLIOTECA

Ley No.5994, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcanterillado.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5994

CONSIDERANDO: que las obras de ingeniería sanitaria en lo que se refiere a la planificación, estudio, construcción, administración y operación de los abastecimientos de aguas potables y disposición de aguas residuales, es de suma importancia para la salud del pueblo dominicano, por lo cual debe merecer la atención de preferente y urgente del Gobierno Dominicano;

que el Gobierno Dominicano debe recurrir a todos los medios a su alcance para la realización cabal de dichas obras, dadas la magnitud, importancia y urgencia de esa empresa, que el abastecimiento de aguas potables y disposición de aguas residuales se traduce en un servicio público que debe ser operado y administrado mediante un organismo adecuado;

que es una preocupación fundamental del Gobierno Dominicano el dotar de sistemas adecuados de abastecimentos de aguas potables y disposición de aguas residuales y pluviales a las poblaciones urbanos y rurales del país;

que el abastecimiento de aguas potables para el consumo doméstico debe gozar de prioridad sobre los demás usos de las aguas;

que un organismo autónomo, de nivel nacional, especialmente constituído, con capacidad técnica, administrativa y financiera suficente, es la vía más adecuada para movilizar, en el más breve plazo y en las más favorables condiciones, la porción de recursos nacionales disponibles para la solución del grave problema que afecta el Pueblo Dominicano;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), con carácter autónomo, sujeto a las

prescripciones de esta ley y a las de los reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo.

Artículo 2.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) queda investido de personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes a tal calidad y su domicilio queda fijado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional que considere pertinente a sus fines.

Artículo 3.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) tendrá por objeto la realización de los fines expuestos en los motivos contenidos en el preámbulo de esta ley, con absoluta sujeción a las normas y determinaciones de la Junta Nacional de Planificación, organismo que tiene a su cargo la programación integral del desarrollo del país, para lo cual:

a) Formulará el plan general de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo doméstico, industrial y comercial, y de los sistemas de disposición de aguas residuales y pluviales, en sus aspectos rural y urbano;

b) tendrá a su cargo la ejecución de dichos planos, dentro del marco de sus actividades;

c) señalará al Poder Ejecutivo los casos en los cuales deberá proceder a expropiaciones por causa de utilidad pública, necesarias para la ejecución de sus programas. en conformidad con las leyes de expropiación; y

d) coordinará las demás actividades relacionadas con sus fines.

Artículo 4.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) podrá realizar todas aquellas operaciones o negocios jurídicos necesarios para la consecución de sus fines.

Artículo 5.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) tendrá como recursos de

financiamientos, las contribuciones que al mismo hará el Estado Dominicano a través del Presupuesto Nacional, las asignaciones especiales que fijen las lejes, cualesquiera otras que le sean señaladas por las leyes o por los partículares , y las provenientes de la administración,, operación, explotación u otra forma de negociación jurídica , de los sistemas de abastecimientos de aguas potables y disposición de aguas residuales y pluviales del país que haya adquirido por cualquier forma.

Artículo 6.– El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) será dirigido y adminstrado; a) por un Director Ejecutivo y b) por un Consejo de Administración.

Artículo 7.- El Dirctor Ejecutivo, cuya remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo, será el representante legal y órgano ejecutivo del Consejo de Administración y deberá ser ingeniero civil especializado en la materia.

Artículo 8.- El Director Ejecutivo nombrará el personal del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA). Sin embargo, para el nombramiento y remoción de los jefes de departamentos y secciones, deberá obtener la aprobación del Consejo de Administración.

Artículo 9.–El Consejo de Administración trasará la política a seguir por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), para el logro de los objetivos y propósitos del mismo; deberá aprobar el presupuesto anual del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado(INAPA) y sus modificaciones; fijará las remuneraciones de sus empleados y funcionarios, excepto la del Director Ejecutivo. Asimismo deberá autorizar todos y cada uno de los actos, operaciones o negocios que deba realizar el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) a través de su Director Ejecutivo.

Artículo 10.- El consejo de Administración deberá dictar el reglamento interno del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA).

Artículo 11.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), a través de su Consejo de

Administración, deberá formular a los organismos correspondientes las recomendaciones de legislación y financieras necesarias a fin de que: a) todos los sistemas de abastecimiento de aguas potables y de disposición de aguas residuales y pluviales del país pasen a ser propiedad del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), y b) de que se concentren en sus manos la planificación, estudio, construcción, administración, operación, y explotación de los mismos y de que se liberen de tales funciones y atribuciones, a los organismos que actualmente las desempeñan y ejercen.

Artículo 12.- El Consejo de Administración se compondrá de cinco miembros, según se indica a continuación; a) el Secretario de Estado de Salud y Previsión Social, quien lo presidirá; b) el Síndico del Distrito Nacional; c) el Gobernador del Banco Central de la República Dominicana; d) un representante de la Liga Municipal Dominicana; y e) el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) quien actuará como Secretario del Consejo de Administración. El Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez al mes, a solicitud del Director Ejecutivo o por iniciativa de por lo menos dos de sus miembros. Para que el Consejo de Administración pueda deliberar validamente se requerirá un quorum de tres de sus miembros. En caso de que la votación resulte empate, decidirá el voto de su presidente.

Artículo 13.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), podrá emitir bonos para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con sus programas de inversiones y en conformidad con las leyes sobre la materia.

Artículo 14.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) contratará, por el sistema de concurso, la ejecución de las obras que deba realizar, de acuerdo con las normas que dicte el reglamento de la presente ley. Excepcionalmente, por disposición del Consejo de Administración, podrá ejecutarlas directamente.

Artículo 15.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) reglamentará las condiciones de prestación de su servicio y fijará las tarifas y cargos que deben cubrirse por servicio o facilidades rendidas por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), sujetas a la aprobación de los organismos competentes.

Artículo 16.- Cualquier funcionario o empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), en el ejercicio de sus funciones, podrá penetrar, previo aviso a sus dueños u ocupantes, en aquellos terrenos, ríos, manantiales o cuerpos de aguas en general, con la finalidad de hacer mensuras, sondeos y estudios necesarios para sus proyectos. Asi mismo, tendrán acceso a cualquier edificación o lugar, para la investigación de las violaciones de sus reglamentos y de las leyes sobre la materia.

Artículo 17.- El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) estará exonerado del pago de todo inpuesto, gravámen, tasa o arbitrio que recaiga o pudiere recaer sobre sus operaciones, negocios, explotaciones, obras, y, en general, sobre todos los actos o negocios jurídicos que realice, así como los documentos relativos a los mismos.

Artículo 18.- (Transitorio) El Poder Ejecutivo dictará, dentro de los noventa días que sigan al nombramiento del Director Ejecutivo, el reglamento de aplicación de esta ley.

Mientras el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) no haya adquirido la propiedad de los sistemas de abastecimiento de aguas potables y disposición de aguas residuales y pluviales, deberá adquirir por contratación con cualquier organismo público o persona, la administración, operación y explotación de dichos sistemas.

Una vez dictado el reglamento de esta ley, ningún organismo público o persona podrá realizar alteraciones o reparaciones a sus sistemas de abastecimiento de aguas potables y disposición de aguas residuales y pluviales, sin la autorización del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA).

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118(transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sca publicada en la Gaceta Oficial, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los treinta días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5995, que agrega un párrafo al Art. 1ro. de la Ley No.5557, del 23 de junio de 1961.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5995

CONSIDERANDO que es propósito del Gobierno que la distribución de las obras públicas alcance al mayor número de ingenieros, arquitectos y empresas constructoras calificadas;

CONSIDERANDO que no es procedente someter a concurso de construcción aquellas obras sujetas a patrón básico con planos tipos, teniendo en cuenta que ya se conocen sus especificaciones y costos reales;

CONSIDERANDO que, además, es necesario adoptar medidas que permitan acelerar el inicio de las construcciones de determinadas obras tanto en beneficio de la clase obrera como de los fines sociales que se persiguen con la ejeción de dichas obras.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se agrega el siguiente Párrafo al artículo 1ro. de la Ley No. 5557 de fecha 23 de junio de 1961;

"Párrafo. Las obras de construcción sujetas a un patrón básico, y cualesquiera otras que a juicio de la Comisión de Concurso, por sus condiciones puedan ser fraccionadas, serán no obstante adjudicadas mediante sorteo entre los Ingenieros, Arquitectos y empresas constructoras calificadas, debidamente registradas. Este sorteo se hará de acuerdo con las previsiones de los Reglamentos que se dicten al efecto".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primer día del mes de agosto de minovecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la Rep-ublica
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE A. FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

Enejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primer día del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Retauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5996, que modifica el Art.2 de la Ley No.5893, del 10 de mayo de 1962, sobre el Consejo Nacional de Educación.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5996

CONSIDERANDO: que el Consejo Nacional de Educación debe estar compuesto, además de los miembros que figuran actualmente en la Ley No. 5893 del 10 de mayo de 1962, por representantes de las Sociedades de Padres y Amigos de la Escuela, de los Colegios privados y de las Asociaciones Estudiantiles;

CONSIDERANDO: que con esta medida se completaría el cuadro de los sectores que deben estar representandos en dicho organismo para mejor cumplimiento de sus funciones;

VISTA la Ley No. 5893 del 10 de mayo de 1962;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO: Se modifica el artículo 2 de la Ley 5893 del 10 de mayo de 1962, para que en lo adelante rija así:

Artículo 2.- El Consejo de Nacional de Educación estará integrado por los siguientes miembros, todos con voz y voto:

a) El Secretario de Estado, quien lo presidirá;

b) El Subsecretario de Estado, como Vicepresidente;

c) Los Directores General de Educación : Primaria Urbana; Rural, Secundaria y Normalista; Vocacional Instituto Técnico Pedagógico; Plan de Capacitación y Perfeccionamiento del Magisterio; Bellas Artes, Educación Física y Deportes;; Campaña Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos, y Servicio Médico Escolar;

d) Tres representantes de la Federación de Asociaciones de Maestros;

e) Un representantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de la Iglesia Católica, que representará a los Colegios dependientes de la Autoridad Eclesiástica;

f) Un representante de las Sociedades de Padres y Amigos de la Escuela

g) Un representante de los Colegios privados;

h) Un representante de las Asociaciones Estudiantiles;

Párrafo: el Oficial Mayor de la Secretaría de Estado actuará como Secretario del Consejo, con voz pero sin voto.

DADA por el Consejo de Estado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresdiente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5997, que concede sendas Pensiones del Estado a las señoras Juana García Reyes, Clementina Smester y María Slacedo Vda. Cruz.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5997

VISTO el Artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959, y la ley No. 5701, del 8 de diciembre de 1961,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se conceden sendas pensiones del Estado de cien pesos oro (RD$100.00) mensuales, cada una, a las señoras Juana García Reyes, Clementina Smester y María Salcedo Vda. Cruz.

Artículo 2.– Dichas pensiones serán pagadas con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE A. FERNANDEZ CAMINERO'
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.5998, que modifica el Art. 1ro. de la Ley No.5961, del 15 de junio de 1962, sobre el Instituto del Tabaco de la República Dominicana.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5998

CONSIDERANDO que la provincia de Santiago es el centro de la región tabacalera de la República, por lo cual conviene que la sede del Instituto del Tabaco de la República Dominicana para su mejor desenvolvimiento, esté situada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, capital de dicha provincia;

CONSIDERANDO, por otra parte, que para los fines de la unificación de los impuestos que gravan el tabaco, los cigarros

y cigarrillos, se hace necesario incluir otras leyes entre las que deben ser derogadas;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Art. 1.–Queda modificado el Art. 1ro. de la Ley No.5961 de fecha 15 de junio de 1962, para que rija con el siguiente texto:

"Art. 1.– Por la presente Ley se crea el Instituto del Tabaco de la República Dominicana con sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Capital de la provincia de Santiago, el cual tendrá una duración limitada".

Art. 2.– Queda derogado el Art.44 de la misma ley.

Art. 3.– Queda modificado el Art.46 de la misma ley para que rija así:

"Art. 46.– La presente Ley deroga y sustituye la Ley No. 4211 del 22 de julio de 1955; la Ley No.3860 del 25 de junio de 1954; la Ley No.3900 del 20 de agosto de 1954; la Ley No.858 del 13 de marzo de 1935; la Ley No.5679 del 25 de noviembre de 1961 que modifica el Art. 9 de la Ley No.858; la Ley No. 794 del 19 de enero de 1945; la Ley No.2568 del 4 de diciembre de 1950; la Ley No.3580 del 14 de junio de 1953; la Ley No. 1253, la Ley No.1255 del 23 de septiembre de 1946 y la Ley No.5124 del 4 de mayo de 1959 que modifica los artículos 2, 3 y 5 de la Ley No.1255, así como cualquier otra disposición que le sea contraria."

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabr[illegible]
Segundo Vicepresidente.

Mons. Fliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.5999, que concede pensión del Estado a la Profesora María Antonia F. del Roques.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 5999

VISTO: El artículo 8 de la Ley No.5185, sobre Pensiones Civiles del Estado de fecha 31 de julio de 1959.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede una pensión del Estado de cincuenta pesos oro (RD$50.00) mensuales a la Profesora María Antonia F. de Roques.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargos al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Naional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de EStado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6000, que concede sendas pensiones del Estado a las señoras Hilina Balbuena Vda. Torres y Nazarena Vda. de Idelfonso.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6000

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se conceden sendas pensiones del Estado de cien pesos oro (RD$100.00) mensuales cada una, a las señoras Hilina Balbuena Vda. Torres y Nazarena Vda. de Idelfonso.

Artículo 2.– Dichas pensiones serán pagadas con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Dingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto de mil

novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo mde Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para la conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6000-bis-, que autoriza al Secretario de Estado de Finanzas a suscribir en en nombre del Estado Dominicano un pagaré a presentación en favor del Banco de Reservas de la República Dominicana.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6000–bis

CONSIDERANDO: que en fecha 22 de octubre de 1956 el Banco de Reservas de la República Dominicana fué autorizado por el Presidente de la República a abrir en favor del Gobierno Dominicano una línea de crédito especial de hasta RD$5,000.000.00 (cinco millones de pesos oro), para dar cumplimiento a obligaciones vencidas derivadas de contratos de diversas obras públicas;

CONSIDERANDO: que con base a esta autorización, el Banco de Reservas estableció dicha línea de crédito por RD$5,000.0000.00 (cinco millones de pesos oro) con la denominación de "Estado Dominicano–Sobregiro en cuenta corriente", de la cual fueron utilizados solamente RD$4,933.630.39 (cuatro millones novecientos treinta y tres mil seiscientos treinta pesos oro con treinta y nueve centavos);

CONSIDERANDO: que, posteriormente, en marzo de 1960, el Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana propuso un plan para eliminar dicho sobregiro en los libros de ese banco, el cual fué estudiado y discutido por el Gobernador del Banco Central, el Secretario de Estado de Finanzas y el propio Administrador General de dicho banco, y luego sometido a la consideración superior;

CONSIDERNADO: Que dicho plan, aprobado por el Presidente de la República en fecha 6 de junio de 1960, consistió en traspasar de la cuenta "Tesorero Nacional–Cuenta República Dominicana" a la cuenta "Estado Dominicano–Sobre Giro en cuenta corriente" a la suma de RD$4,933.630.39 para dejar saldado así el sobregiro;

CONSIDERANDO: Que, como parte de ese plan y con el propósito de que en Memoria y en los Estados de Tesorería no se diera la sensación de que el Gobierno Dominicano habría sufrido una merma apreciable en sus disponibilidades, esta

operación fue realizada mediante transferencia unilateral de parte del Banco de Reservas de la República Dominicana solamente, sin que se efectuaran iguales asientos en los libros de la contabilidad gubernamental, y sin que prepararan y tramitaran conforme a las leyes que regulan la materia, la asignación correspondiente de la Dirección del Presupuesto, y el libramiento de pago donde la Contraloría y Auditoría General de la República autorizará a la Tesorería Nacional a expedir un cheque en favor de dicho Banco, para cancelar esa deuda;

CONSIDERANDO: Que la forma en que fue realizada esta operación originó una diferencia entre los balances, de los fondos de la cuenta Tesorero Nacional–Cuenta República Dominicana, –que representan las disponibilidades del Gobierno Dominicano para la ejecución del Presupuesto Nacional y otras obigaciones– y el balance de esa misma cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicna, y que dicha diferencia significa un faltante en tales disponibilidades, ascendente a la suma de RD$4,933.630.39;

CONSIDERANDO: Que es criterio del Gobierno actual que esa situación anómala, heredada, no debe ser mantenida por tiempo indefinido en perjuicio de la claridad que deben reflejar en todo momento los libros de contabilidad del Estado Dominicano;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se autoriza al Secretario de Estado de Finanzas a suscribir en nombre del EStado Dominicano un pagaré a presentación en favor del banco de Reservas de la República Dominicana, hasta la concurrencia de RD$4,933.630.39 (cuatro millones novecientos treinta y tres mil seiscientos treinta pesos oro con treinta y nueve centavos), con el propósito de corregir la anomalía señalada en los considerandos de esta ley. Por tanto, el Gobierno Dominicano no hará uso del crédito que representa este pagaré, sino a medida y hasta el límite del balance que se determine en las subsiguientes fechas, después de ser aplicadas las correspondientes amortizaciones.

Artículo 2.– A partir del mes de agosto del año en curso, se apropiará en la Ley de Gastos Públicos la suma suficiente para cubrir mensualmente el pago de la amortización de dicho pagaré, más los intereses devengados, hasta su total liquidación.

Artículo 3.— Queda autorizado el Secretario de Estado de Finanzas para que, a nombre y en representación del Estado Dominicano, acuerde con el Administrador General del Banco de Reservas de la República Dominicana, todo lo relativo al monto de las amortizaciones e intereses de este crédito.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico, de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la república Dominicana, a los dos días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Resolución No.6001, del Consejo de Estado, que autoriza al Dr. José Fernández Caminero, Miembro del Consejo de Estado, al ausentarse del país durente diez días.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6001

VISTO el artículo 120 (transitorio) de la Constitución de la República;

HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

ARTICULO UNICO.– Se autoriza al Dr. José A. Fernández Caminero, Miembro del Consejo de Estado a ausentarse del país durante diez días, a partir de la fecha de la presente Resolución.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio naiconal, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional,Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6002, que deroga el Art. 2 de la Ley No.5943 del 8 de junio de 1962, y restablece los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley No.5671, del 8 de noviembre de 1961.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6002

CONSIDERANDO: que es necesario proteger la agricultura, facilitando los medios para que esta, se incremente utilizando métodos modernos de mecanización agrícola.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Queda derogado el artículo 2, de la Ley No. 5943, de fecha 8 de junio de 1962.

Artículo 2.– En consecuencia quedan restablecidas las disposiciones de los artículos 1, 2, 3 y 4, de la Ley No. 5671, de fecha 8 de noviembre de 1961, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 1.– Queda exonerado de todo impuesto, contribución, derechos fiscales o municipales, o recargos el combustible denominado Gas Oil (Diesel Oil) que se destina exclusivamente para el uso de los tractores empleados con fines de explotación agrícola, o en los Motores utilizados en el bombeo de aguas para fines de riego".

Artículo 2.– Las exoneraciones serán otorgadas por la Secretaría de Estado de Finanzas de acuerdo con las regulaciones contenidas en la Ley No. 4027, del 14 de enero de 1955, sobre exoneraciones, previa constancia que al efecto expedirá la Secretaría de Estado de Agricultura, la cual contendrá los datos relativos al propósito a que será destinado el combustible, y demás detalles que juzgue conveniente dicha Secretaría".

Artículo 3.– El Poder Ejecutivo queda facultado para dictar todas las medidas encaminadas a reglamentar la forma de distribución y el control que se debe establecer para asegurar que el combustible exonerado será destinado exclusivamente al uso indicado por la ley".

Artículo 4.– Cualquier violación a la presente ley o a los Reglamentos que dictare el Poder Ejecutivo para su ejecución, será sancionada con multa de RD$100.00 a RD$500.00 o con prisión de 6 días a 2 meses o con ambas penas a la vez, sin perjuicio de la revocación de la orden de exoneración que hubiere sido acordada".

Artículo 3.– Queda modificada la Ley No. 5599, de fecha 11 de agosto de 1961, en tanto se refiere al Diese Oil.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República

Dominicana, a los tres días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. NONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de EStado en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6003, que jubila con pensión del Estado al señor Francisco R. Mejía.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6003

VISTA la Ley No. 5183, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede el beneficio de la jubilación y se asigna una pensión del Estado de trescientos pesos oro (RD$300.00) mensuales, al señor Francisco R. Mejía.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, , años 119no. de la Indépendencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, ymando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de julio del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6004 que pone bajo la dependencia de la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana, la Dirección General de Turismo y dicta otras disposiciones.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6004

CONSIDERANDO que como consecuencia de haberse dispuesto que la Dirección General de Turismo dependa de la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana deben tomarse las medidas legales relativas al traspaso de los fondos, y a la atención de los servicios personales bajo la nueva dependencia;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Los servicios de la Dirección General de Turismo que actualmente son pagados por el Presupuesto

Nacional, serán atendidos por la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana y para tal efecto se harán los arreglos presupuestarios que sean de lugar para que el Estado provea los fondos a dicha institución.

Artículo 2.– Se traspasarán igualmente a la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana el producto de los ingresos derivados de la Ley No. 1224, del 1946 (venta de tarjetas de turismo), para propaganda y fomento del turismo, el cual está especializado en la Tesorería Nacional bajo el fondo especial No. 1388, a fin de que los mismos sean destinados al fondo no autoliquidable de dicha Corporación.

Artículo 3.– La presente Ley deroga toda otra ley o decreto que le sea contrario.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Sugundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO.
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital dela República Dominicana, a los siete días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la REstauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6005, que prorroga nuevamente por 60 días más las previsiones de la Ley No. 5830, del 28 de febrero de 1962, que declara indisponibles durante 60 días los beneficios de las Compañías Controladas por el Estado.

EL CONSEJO DE ESTADO
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 6005

ARTICULO UNICO.– Quedan nuevamente prorrogadas por 60 días más las previsiones de la Ley No.5830, de fecha 28 de febrero del 1962, que declara indisponibles durante 60 días a partir de la fecha de la publicación de la misma, los beneficios de la Compañía que se encuentra bajo el control y fiscalización del Gobierno Dominicano, de acuerdo con las disposiciones legales dictadas al efecto, y establece que no podrá hacerse ninguna repartición de dividendos durante dicho período entre los accionistas de esas Compañías.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los nueve días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo del Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicipresidente,

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicipresidente.

Mons. Elisio Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periodico de amplia circualación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consijo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, a los nueve días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no de la Independencia y 99no de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6006, que concede pensión del Estado a la señora Ana Grecia Féliz Vda. Varona.

EL CONSEJO DE ESTADO
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

NUMERO:6006

VISTO el Artículo 8 de la Ley No.5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO 1.– Se concede una pensión del Estado de cien pesos oro (RD$100.00) mensuales, a la señora Ana Grecia Feliz Vda. Varona.

ARTICULO 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, a los nueve días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo del Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, a los nueve días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 99o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6007, que deroga la Ley No.5968, del 20 de junio de 1962, que convoca las Asambleas Electorales para reunirse el 15 de agosto del año en curso.

EL CONSEJO DE ESTADO
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

NUMERO: 6007

CONSIDERANDO que en cumplimiento del Artículo 123 (transitorio) de la Constitución de la República el Consejo de Estado después de haber votado la nueva Ley Electoral No. 5884, de fecha 5 de mayo de 1962 y la Ley No. 5891, sobre el Ejercicio del Sufragio y otras disposiciones electorales, de fecha 8 de mayo de 1962, convocó a la Constitución, las cuales debían celebrarse el día 15 de agosto del año en curso de acuerdo con la Ley No. 5968, de fecha 20 de junio de 1962;

CONSIDERANDO que en fecha 21 de julio del año en curso la Junta Central Electoral, publicó en la prensa diaria local un comunicado dirigido al País en el cual entre otras consideraciones, hacía del conocimiento general "que las elecciones extraordinarias para Miembros de la Asamblea Revisora de la Constitución de la República que están fijadas para el día quince de agosto del presente año conforme a la Ley de Convocatoria número 5968 y a la Proclama de esta Junta de fecha 20 del mes de junio pasado no podrán verificarse en la indicada fecha";

CONSIDERANDO que la referida Junta Central Electoral fundamenta su declaracion en la imposibilidad material de dar cumplimiento a las disposiciones de la vigente Ley electoral, muy especialmente las que se refieren a la formación del registro electoral, a la constitución de Juntas Electorales en tiempo oportuno y a la creación de las mesas electorales en el término señalado por la Ley;

CONSIDERANDO que en presencia de la imposibilidad material de celebrar en la fecha señalada por la Ley de convocatoria, elecciones para representantes a una Asamblea Revisora de la Constitución, proclamada por la Junta Central Electoral que es el organismo constitucional y legalmente facultado para dirigir las elecciones, procede dejar sin efecto la aplicación de la referida ley.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.—Queda derogada la Ley No.5968 de fecha veinte de junio de mil novecientos sesentidos, que convoca las Asambleas Electorales, par reunirse el día quince de Agosto del año en curso, a fín de proceder a las elecciones de representantes a la Asmblea Revisora de la Contitución.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de agosto de mil noveciento sesenta y dos, años 119no de la Independencia y 99no de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral.
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José A. Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea Publicada en la Gaceta Oficial y en un periodico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional. Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de agosto de mil noveciento sesenta y dos, años 119no de la Independencia y 99no de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6008, que modifica el párrafo I del Art.43 de la Ley No.821 de Organización Judicial y dicta otras disposiciones.

EL CONSEJO DEL ESTADO
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA

NUMERO: 6008

CONSIDERANDO que se hace necesaria la creación de una nueva Cámara penal en el Distrito Judicial de Duarte en vista de

que han aumentado en formas notable las labores encomendadas a dicho Tribunal;

CONSIDERANDO por otra parte, que actualmente no se justifica la existencia de una Segunda Circunscripción del juzgado de Paz del Municipio de San Francisco de Macorís, en razón de que han disminuido los asuntos de la competencia de dicho Juzgado.

VISTO el artículo 38, inciso 10 de la Constitución de la República;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO 1.— Se modifica el párrafo I del Artículo 43 de la Ley No.821, de Organización Judicial del 21 de noviembre de 1927, modificado últimamente por la Ley No.5055, del 19 de diciembre de 1958, para que en elo sucesivo rija del siguiente modo:

PARRAFO I.— En los Distritos Judiciales del lDistrito Nacional y Santiago habrá cinco Camara una Civil y Comercial, una de Trabajo y tres Penales; en el de la Vega habrá dos Cámaras, una Civil Comercial y de Trabajo y una Penal; y en el de Duarte tres Cámara, una Civil, Comercial y de trabajo y dos Penales.

ARTICULO 2.— A partir de la publicación de la presente Ley, queda suprimida la Segunda Circunscripción del Juzgado de Paz de San Francisco de Macorís, creada por la Ley No.5310 del 21 de febrero de 1960, fijandosele Jurisdicción total al Juzgado de Paz de aquel Municipio para los asuntos de su competencia.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de agosto de mil noveciento sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 119o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tio,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José A. Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY

Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de la atribuciones que me concede el artículo 118(transitorio) de la Constitución de de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mandó que sea publicada en las Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento u cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Danto Domingo, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de agosto de mil noveciento sesenta y do, años 119no de la Independencia y 100no de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6009, que modifica los apartados f) y g) y agrega una 2da. nota al párrafo 1084 del artículo 9 de la Ley No.1488 del 26 de julio de 1947 sobre Arancel de Importación y Exportación.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 6009

Artículo 1.— Se modifican los apartados f) y g) y se agrega una 2da. Nota al párrafo 1084 del artículo 9 de la Ley que establece

el Arancel de Importación y Exportación No. 1488, de fecha 26 de julio de 1947, para que rijan del siguiente modo:

"f) en cigarrillos de hasta 7 cm. de longitud: Millar RD$15.00

"g) en cigarrillos de más de 7 cm., pero que no excedan de 10 cm. de longitud: Millar RD$15.50

Nota 2da. Cuando los cigarrillos excedan de 10 cm. de longitud pagarán, además de los derechos señalados en el apartado g), RD$15.50 adicionales por millar, por cada 7 cm. o fracción en exceso.

Artículo 2.– Se suprimen los ordinales 33 y 34 del artículo 1ro. de la Ley No. 2397, Impuestos Unificados de Importación de fecha 27 de mayo de 1950, que gravan los cigarrillos importados.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donal J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciocho días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No. 6010, que restablece la Ley No. 3580, del 14 de junio de 1953

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 6010

Artículo 1.– Se deroga el artículo 3 de la Ley No. 5998, del 2 de agosto de 1962.

Artículo 2.– Se restablece en toda su fuerza y vigor la Ley No. 3580, del 14 de junio de 1953, la cual copiada textualmente dice así:

"Artículo 1.– Los derechos y cargas actualmente en vigor sobre la importación de mercancías establecidos por las leyes que más adelante se indican, serán refundidos a partir de la fecha de la presente ley y calculados a base de un 23 por ciento ad–valorem. En consecuencia, no habrá que hacer un cálculo

especial individual para la aplicación de cada una de las leyes siguientes:

No. 965, del 11 de agosto de 1945
No. 2568, del 4 de diciembre de 1950
No. 3433, del 20 de noviembre de 1952
No. 3569, del 5 de junio de 1953, que sustituyó
a la Ley No. 273, del 16 de noviembre de 1925".

"Artículo 2.– El sistema establecido por esta Ley no alcanza a las mercancías amparadas de modo particular por disposiciones especiales que las excluyen de la aplicación de una o varias de las leyes mencionadas en el artículo 1, y en los casos de tales mercancías las liquidaciones se harán conforme a las disposiciones de sus respectivas leyes vigentes".

"Artículo 3.– El producto del impuesto a que se refiere el artículo 1, será distribuido por la Tesorería de la República, de la manera siguiente:

75 por ciento para el Fondo General
25 por ciento para el plan de mejoramiento social y económico, obras públicas y otros fines de interés nacional, según lo dispone el Poder Ejecutivo".

Artículo 3.– Se modifica el artículo 46 de la Ley No. 5961, del 15 de junio de 1962, por la cual se crea el Instituto del Tabaco de la República Dominicana, para que rija así:

"Artículo 46.– La presente ley deroga las siguientes leyes: No. 4211, del 22 de julio de 1955; No. 3860, del 25 de junio de 1954; No. 3900, del 20 de agosto de 1954; No. 858, del 13 de marzo de 1935; No. 5679, del 25 de noviembre de 1961, que modificó el artículo 9 de la No. 858; y No. 794, del 19 de enero de 1945. Igualmente se derogan, en lo que concierne únicamente al tabaco, las siguientes leyes: No. 2568, del 4 de diciembre de 1950; No. 1255, del 23 de septiembre de 1946, y No. 5124, del 4 de mayo de 1959, que modificó los artículos 2, 3 y 5 de la No. 1255. Esta Ley deroga toda ley o parte de Ley en lo que le sea contraria".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de agosto del mil novecientos setenta y

dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de agosto del año mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 110mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6011, que modifica el artículo 1ro. de la Ley No.6008, de fecha 18 de agosto de 1962.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6011

CONSIDERANDO que en el Distrito Judicial de La Vega, desde el año 1960, hay dos Cámaras Penales, una que figura en el artículo 43, párrafo II de la Ley de Organización Judicial y la otra en la Ley de Gastos Públicos;

CONSIDERANDO que las cámaras que componen un Juzgado deben figurar, en su totalidad, en la Ley de Organización Judicial. que es la ley básica en esta materia, como su nombre lo indica;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO: Se modifica el artículo 1 de la Ley No. 6008, de fecha 18 de agosto de 1962, para que rija así:

Artículo 1.– Se modifica el párrafo I del artículo 43 de la Ley No. 821, de Organización Judicial del 21 de noviembre de 1927, modificado últimamente por la Ley No. 6008 del 18 de agosto de 1962, para que en lo sucesivo rija del siguiente modo:

"PARRAFO I.– En los Distritos Judiciales del Distrito Nacional y Santiago habrá cinco Cámras, una Civil y Comercial, una de Trabajo y tres Penales; y en el de La Vega habrá tres Cámaras, una Civil, Comercial y de Trabajo y dos Penales; y en el de Duarte tres Cámaras, una Civil, Comercial y de Trabajo y dos Penales.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 110o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente

DONALD J. REID CABRAL
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE A. FERNANDEZ CAMINERO
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veinte días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,

Ley No.6012, que dicta disposiciones acerca del restablecimiento de la Ley No.3580, del 14 de junio de 1953, efectuado por la Ley No.6010, del 20 de agosto de 1962.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6012

ARTICULO UNICO.— Queda entendido que el restablecimiento de la Ley No.5580, del 14 de junio de 1953, hecho por la Ley No. 6010, de fecha 20 de agosto del 1962, abarca las modificaciones que a la misma fueron introducidas por las Leyes Nos. 5962, del 15 de junio de 1962, y 5973, del 25 de junio de 1962.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

NICOLAS PICHARDO,
Primer Vicepresidente.

DONALD J. REID CABRAL,
Segundo Vicepresidente.

MONS. ELISEO PEREZ SANCHEZ,
Miembro.

LUIS AMIAMA TIO,
Miembro.

ANTONIO IMBERT BARRERA,
Miembro.

JOSE FERNANDEZ CAMINERO,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiun días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6013, que concede pensión del Estado al Lic. Manuel A. Amiama.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6013

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se concede una pensión del Estado de mil pesos oro (RD$1,000.00) mensuales, al Lic. Manuel A. Amiama.

Artículo 2.— Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

a los veintiún días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José A. Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiún días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6014, que concede pensión del Estado al Dr. Héctor León Sturla.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6014

VISTO el Artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede una Pensión del Estado de cuatrocientos ochenta pesos oro (RD$480.00) mensuales, al Dr. Héctor León Sturla.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República.

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintidós días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6015, que autoriza apropiación y transferencias en la Ley de Gastos Públicos vigente.

EL CONSEJO DE ESTADO

En Nombre de la República

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

NUMERO 6015

ARTICULO PRIMERO.– Del Balance no Apropiado correspondiente al Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962, se destina la suma de RD$3,013,559.13 (TRES MILLONES TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS) para efectuar las siguientes apropiaciones:

AL:

CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10411	DIRECCION DEL PRESUPUESTO	RD$ 34,000.00
G10411F	Subvenciones	RD$ 34,000.00
10461	ADMINISTRACION DE PENSIONES Y JUBILACIONES CIVILES	RD$220,000.00
G10461F	Subvenciones	RD$220,000.00

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20153	MARINA DE GUERRA	RD$140,780.00
G20153B	Otros Gastos Corrientes	RD$140,780.00
20154	VESTUARIO DE LA MARINA DE GUERRA	RD$161,264.18
G20154B	Otros Gastos Corrientes	RD$161,264.18

CAPITULO IV

SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA

10491	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO	RD$ 5,000.00
G10491B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 5,000.00

30220	POLICIA NACIONAL		RD$567,858.00
G30220A	Servicios Personales	RD$319,665.00	
G30220B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 30,000.00	
G30220C	Adquisición de Propiedades	RD$ 32,000.00	
G30220E	Construcciones y Mejoras Permanentes	RD$ 25,000.00	
G30220	Atenciones Varias	RD$161,193.00	
		RD$567,858.00	

CAPITULO VI

SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES

30101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$110,000.00
G30101A	Servicios Personales	RD$ 25,000.00	
G30101B	Otros Gastos Corrientes	RD$45,000.00	
G30101	Atenciones Varias	RD$ 40,000.00	
		RD$110,000.00	

30105	EMBAJADAS Y LEGACIONES		RD$100,000.00
G30105A	Servicios Personales	RD$ 30,000.00	
G30105	Atenciones Varias	RD$ 70,000.00	
		RD$100,000.00	

30106	CONSULADOS		RD$ 65,000.00
G30106A	Servicios Personales	RD$ 35,000.00	
G30106	Atenciones Varias	RD$ 30,000.00	
		RD$ 65,000.00	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$267,386.63
G10415C	Adquisición de Propiedades	RD$ 50,000.00	
G10415Z	Para Pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 10,898.13	
G10415	Atenciones Varias	RD$206,488.50	
		RD$267,386.63	
10425	DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		RD$160,000.00
G10425A	Servicios Personales	RD$160,000.00	
10426	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS Y PUERTOS		RD$ 30,925.00
G10426A	Servicios Personales	RD$ 30,925.00	

CAPITULO IX

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 95,000.00
G10497	Atenciones Varias	RD$ 95,000.00	
30460	DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HIDRAULICOS		RD$ 75,000.00
G30460	Atenciones Varias	RD$ 75,000.00	

CAPITULO XIII

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

10498	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$160,000.00
G10498	Atenciones Varias	RD$160,000.00	
31802	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS		RD$800,000.00
G31802	Atenciones Varias	RD$800,000.00	
30802	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL		RD$ 285.32
G30802A	Servicios Personales	RD$ 285.32	
32120	ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS		RD$ 3,060.00
G32120A	Servicios Personales	RD$ 3,060.00	

CAPITULO XIV

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION, CONTROL Y RECUPERACION DE BIENES

10421	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 18,000.00
G10421A	Servicios Personales	RD$ 18,000.00	
			RD$3,013,559.13

ARTICULO SEGUNDO:— Se ordenan las siguientes transferencias dentro del Fondo General de la Ley de Gastos Públicos para el año 1962.

DEL: CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 50,000.00
G20101	Atenciones Varias	RD$ 50,000.00	
20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS		RD$125,824.61
G20159A	Servicios Personales	RD$113,960.00	
G20159	Otros Gastos Corrientes	RD$ 420.00	
G20159C	Adquisición de Propiedades	RD$ 1,805.61	
G20159	Atenciones Varias	RD$ 9,639.00	
		RD$125,824.61	
20120	PERSONAL ALISTADO DEL EJERCITO		RD$ 2,454.67
G20120A	Servicios Personales	RD$ 2,454.67	
10443	GARAGE DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 1,561.15
G10443C	Adquisición de Propiedades	RD$ 1,561.15	
20153	MARINA DE GUERRA		RD$ 25,383.30
G20153A	Servicios Personales	RD$ 25,383.30	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10423	ADMINISTRACION GENERAL DE BIENES NACIONALES	RD$ 14,649.00
G10423A	Servicios Personales	RD$ 14,649.00
10495	DIRECCION GENERAL DE LA CEDULA PERSONAL DE IDENTIDAD	RD$ 5,275.00
G10495A	Servicios Personales	RD$ 5,275.00

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y CULTOS

31507	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION RURAL	RD$ 1,592.50
G31507A	Servicios Personales	RD$ 1,592.50
31513	SERVICIO MEDICO-ESCOLAR	RD$ 1,275.00
G31513A	Servicios Personales	RD$ 1,275.00

CAPITULO IX

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10322	DIRECCION GENERAL DE LA REFORMA AGRARIA	RD$ 74,831.85
G10322A	Servicios Personales	RD$74,831.85

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 8,475.58
G10499A	Servicios Personles	RD$ 1,725.00	
G10499	Atenciones Varias	RD$ 6,750.58	
		RD$ 8,475.58	
31401	HOSPITALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO		RD$ 2,300.00
G31401	Mantenimiento y Atenciones	RD$ 2,300.00	

CAPITULO XIV

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

31471	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 3,115.07
G31471	Atenciones Varias	RD$ 3,115.07	
31600	DIRECCION GENERAL DE TURISMO		RD$123,292.90
G31600A	Servicios Personales	RD$ 12,384.68	
G31600B	Otros Gastos Corrientes	RD$15,547.92	
G31600C	Adquisición de Propiedades	RD$ 1,000.00	
G31600	Atenciones Varias	RD$94,360.30	
		RD$123,292.90	

10417	DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS		RD$ 5,500.00
G10417	Atenciones Varias	RD$ 5,500.00	
			RD$445,530.63

AL: CAPITULO II

PODER EJECUTIVO

10411	DIRECCION DEL PRESUPUESTO		RD$ 11,806.80
G10411B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 6,000.00	
G10411C	Adquisición de Propiedades	RD$ 5,806.80	
		RD$ 11,806.80	
30536	COOPERATIVAS DE INDUSTRIAS ARTESANALES		RD$ 35,000.00
G30536	Atenciones Varias	RD$ 35,000.00	

CAPITULO III

SECRETARIA DE ESTADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

20101	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 1,905.29
G20401Z	Para Pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 1,905.29	
20143	ATENCIONES VARIAS DEL EJERCITO		RD$ 5,900.67

G20143B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 1,132.17	
G20143C	Adquisición de Propiedades	RD$ 1,332.50	
G20143	Atenciones Varias	RD$ 3,446.00	
		RD$ 5,900.67	
10443	GARAGE DE TRANSPORTE Y SUMINISTROS DEL EJERCITO NACIONAL		RD$ 1,561.15
G10443	Atenciones Varias	RD$ 1,561.15	
20159	CENTRO DE ENSEÑANZA DE LAS FUERZAS ARMADAS		RD$ 1,805.61
G20159B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 1,805.61	
20401	FUERZA AEREA DOMINICANA		RD$198,731.60
G20401A	Servicios Personales	RD$106,206.95	
G20401B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 3,186.80	
G20401E	Construcciones y Mejoras Permanentes	RD$ 10,314.29	
G20401Z	Para Pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 74,457.31	
G20401	Atenciones Varias	RD$ 4,566.25	
		RD$198,731.60	
20403	SUBSISTENCIA DE LA FUERZA AEREA DOMINICANA		RD$ 9,639.00

G20403B	Otros Gastos Corrientes	RD$ 9,639.00	
20153	MARINA DE GUERRA		RD$ 25,467.09
G20153Z	Para Pagar Deudas de Años Anteriores	RD$ 83.79	
G20153	Aten. iones Varias	RD$25,383.30	
		RD$25,467.09	
30622	COMANDANCIAS DE PUERTOS, SERVICIOS DE PRACTICOS Y VIGIAS		RD$ 7,782.50
G30622A	Servicios Personalaes	RD$ 2.450.00	
G30622C	Adquisición de Propiedades:	RD$ 5,332.50	
		RD$ 7,782.50	

CAPITULO V

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

10506	CONSULTORIA JURIDICA		RD$ 1,159.81
G10506A	Servicios Personales Tarjeta F1 -- Para completar apropiación	RD$ 1,159.81	

CAPITULO VII

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS

10415	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 5,275.00
G10415A	Servicios Personales	RD$ 5,275.00	

10423	DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS		RD$ 14,649.00
G10423A	Servicios Personales	RD$ 14,649.00	

CAPITULO VIII

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION, BELLAS ARTES Y CULTOS

10493	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 742.50
G10493A	Servicios Personales	RD$ 742.50	
31503	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA Y NORMALISTA		RD$ 225.00
G31503A	Servicios Personales	RD$ 225.00	
31504	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA URBANA		RD$ 350.00
G3154A	Servicios Personales	RD$ 350.00	
31508	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION VOCACIONAL		RD$ 650.00
G31508A	Servicios Personales	RD$ 650.00	
31520	DIRECCION GENERAL DE DEPORTES Y EDUCACION FISICA		RD$ 900.00
G31520A	Servicios Personales	RD$ 900.00	

CAPITULO IX

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA

10497	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 31,804.03
G10497A	Servicios Personales	RD$ 9,804.03	
G10497Z	Para Pagar Deudas de años anteriores	RD$22,000.00	
		RD$ 31,804.03	

CAPITULO X

SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD Y PREVISION SOCIAL

10499	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 6,750.58
G10499B	Otros Gastos corrientes	RD$ 6,750.58	
31372	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		RD$ 4,025.00
G31372A	Servicios Personales	RD$ 4,025.00	
31401	HOSPITALES, SANATORIOS Y MATERNIDADES DEL ESTADO		RD$ 70,000.00
G31401	Mantenimiento y Atenciones	RD$ 70,000.00	

CAPITULO XIV

SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

31471	OFICINA DEL SECRETARIO DE ESTADO		RD$ 3,900.00
G31471A	Servicios Personales	RD$ 900.00	
G31471C	Adquisición de Propiedades	RD$ 3,000.00	
		RD$ 3,900.00	
10417	DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS		RD$ 5,500.00
G10417A	Servicios Personales	RD$ 5,500.00	
			RD$445,530.63

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 100o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Joseé Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 100o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6016, que agrega al apartado c) del Párrafo No.273 de la Ley No.1488, que establece el Arancel de Importación y Exportación.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6016

CONSIDERANDO: que actualmente se elaboran ciertos productos farmacéuticos cuyos envases de metales o sus aleaciones requieren ser importados, porque no se fabrican en el país;

CONSIDERANDO que la importación de dichos envases está gravada además con derechos e impuestos muy elevados y que es deber del Gobierno dictar medidas que tiendan a favorecer el auge de la industria nacional.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se agrega el siguiente apartado c), al párrafo 273 de la Ley No. 1488, que establece el Arancel de Importación y Exportación.

"c) Cajas, botes y otros envases análogos, de metales o sus aleaciones, incluso hojalata (excepto oro, plata o dorados y plateados), que se utilizan para envasar pomadas, unguentos, cremas y desodorantes.... 5 por ciento ad valorem".

Artículo 2.– Queda modificada la Nota 1ra. del mismo párrafo 273 de la indicada Ley, para que rija del siguiente modo:

"Nota 1ra.– Los artículos clasificados en el párrafo 273, exceptuando los del apartado c), pagarán un derecho no menor del 25 por ciento ad-valorem.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mos. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

José A. Fernández Caminero
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6017, que agrega un Párrafo al Art. 15 de la Ley No.5892, que crea el Instituto de la Vivienda.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6017

CONSIDERANDO que el Instituto Nacional de la Vivienda debe gozar, por igual motivo que otras instituciones autónomas del Estado, del beneficio de la exención de derechos e impuestos;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.— Se agrega el siguiente párrafo al artículo 15 de la Ley que crea el Instituto Nacional de la Vivienda No. 5892, de fecha 10 de mayo de 1962:

"Párrafo.– El Instituto Nacional de la Vivienda estará exento del pago de todos los impuestos, derechos y tasas o contribuciones nacionales o municipales. Todos los actos, contratos y documentos que suscriba, estarán también exentos de impuestos y derechos".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la GAceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No.6018, del Consejo de Estado, que aprueba el Contrato suscrito entre el Estado y la Compañía Refinadora Petrolera Santo Domingo.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6018

VISTOS los artículos 38, inciso 20 y 116 (transitorio) de la Constitución de la República;

VISTO el contrato firmado en Santo Domingo el 9 de agosto de 1962, por el Estado Dominicano y la Cía Refinadora Petrolera Santo Domingo.

RESUELVE:

UNICO.– Aprobar el contrato firmado en Santo Domingo el 9 de agosto de 1962 por el Estado Dominicano y la Cía Refinadora Petrolera Santo Domingo, sobre la explotación en el territorio nacional de una refinería petrolera, que copiado a la letra dice así:

"ENTRE, EL ESTADO DOMINICANO, representado por el Dr. Ramón Cáceres Troncoso, identificado por la cédula Personal de Identifidad No. 55348, Serie 1ra. con sello renovado Núm. 016488, quien actúa en virtu de poder otorgado por el Honorable Señor Presidente de la República, el Lic. Rafael F. Bonnelly, y quien en lo adelante se denominará el "ESTADO", de una parte; y Cía Refinadora Petrolera Santo Domingo, sociedad constituida y existente de acuerdo con las leyes del Estado de Massachusette

de los Estados Unidos de América quien actúa por órgano de su apoderado señor Lawrence Joseph Brewer, norteamericano, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Miami, Florida Estados Unidos de América, accidentalmente en esta ciudad, quien en lo adelante se denominará "COMPAÑIA REFINADORA" de la otra parte, se ha convenido y pactado el siguiente

CONTRATO

PRIMERO.– Propósitos

Compañía Refinadora, directamente o por medio de una corporación que será constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana o con las leyes de cualquier país extranjero mutuamente aceptable a ambas partes, en cuyo caso será habilitada para operar en el país, construirá, financiera con su propio capital y operará en el territorio nacional una refinería petrolera que al comenzar producción comercial tendrá capacidad suficiente para suministrar plenamente todas las necesidades que tenga la República Dominicana de los principales productos combustibles de una calidad conveniente para el Mercado Nacional y equivalente a la de los productos que actualmente importan. Estos productos principales consistirán en dos clases de gasolina para motor, combustible para aviones de turborreacción, kerosene, gasoil, combustible para motores diesel, combustible pesado y propano, butano o mezclas de los mismos conocidas en la industria petrolera como gases de petróleo en forma líquida o LPC.

SEGUNDO. Estipulaciones para el financiamiento.

El Estado concede a la Compañía Refinadora plena libertad para cambiar por dólares de los Estados Unidos de América el exceso de los ingresos brutos en divisa local, ya provengan del Mercado Nacional o de los productos exportados, sobre todos los gastos locales, así como para hacer uso y disponer, en el exterior, de esos fondos en dólares de los Estados Unidos de América libremente y en la forma que desee, inclusive sin limitación, en la compra de petróleo crudo y otras mezclas de petróleo y en suministrar reservas suficiente para las adecuadas necesidades de la refinería, reparaciones de materiales y equipos, catalizadores, productos químicos, plomotetrastilo, beneficios, amortización de la inversión, intereses, y servicios técnicos o administrativos prestados en el exterior. Podrá también emplear igual moneda en

el pago de los servicios del personal temporal contratado en el extranjero para la construcción, mantenimiento y operaciones de la planta refinadora.

Queda convenido entre las partes, sin embargo, que el total de los fondos a que se refiere este artículo, incluyendo amortización y beneficios, no excederá el total que habría sido necesario utilizar en divisas dólares, en caso de que los productos ya vendidos por la Compañía Refinadora para el consumo nacional desde el comienzo de producción comercial de la refinería hubieran sido importados. No obstante, las partes podrán aumentar mediantes negociaciones el total de esas divisas en dólares para cubrir operaciones que no sean la normales del negocio de refinamiento. De todos modos los ingresos provenientes de los productos exportados no estarán incluidos en el total de los fondos a que se refiere este párrafo.

TERCERO.– Personal.

La Compañía Refinadora velará que se utilice, en la medida de lo posible, personal dominicano en la construcción de la refinería, y utilizará y entrenará personal dominicano también en la medida de lo posible, en las subsiguientes operacionés de refinamiento después de terminada la refinería. Sin embargo,Compañía Refinadera o sus contratistas o subcontratistas tendrán derecho a traer a la República Dominicana personal técnico y administrativo, incluyendo los artesanos requeridos para la construcción, operación, reparación o expansión de la refinería, siempre que dicho personal no se encuentre disponible en la República Dominicana.

Compañía Refinadora estará en todo momento libre de todo control y reglamentación por parte del Estado en la preparación y ejecución de los programas, planes, organización y asignaciones de trabajo para sus empleados y obreros en la forma que mejor lo juzgue; sujeta, sin embargo, a las estipulaciones comprendidas en el Código de Trabajo y demás leyes laborables, en las del Seguro Social y de Accidentes del Trabajo, en las Leyes Sanitarias y en otras disposiciones legales relativas a dichas actividades.

CUARTO.– Importaciones Libros de Derecho, Productos Petroleros, Materias Primas y Equipo.

Durante la vigencia de este contrato, la Compañía Refinadora tendrá derecho a importar exento del pago de todos y

cada uno de los derechos, impuestos, patentes, recargos, tasas y contribuciones de cualquier naturaleza, ya sean nacionales, provinciales, municipales o de otros organismos oficiales cualesquiera que incidan, recaigan o que tenga que ver directa o indirectamente o que se imponga o gravite o afecte el costo del petróleo crudo, crudos mezclados, petróleo reconstituido, catalizadores, productos químicos, y aditivos y otros materiales para mezcla acabados y no acabados, requeridos por la refinería para atender a las demandas en la República Dominicana así como los materiales para la operación de embalaje. Dichas exoneraciones y exenciones se aplicarán también a materiales, maquinarias, equipo, remolcadores y barcasas, accesorios y piezas de reparación necesarios para la construcción, operación, expansión, reparación y renovación de la refinería, y cualesquiera facilidades de transportación, inclusive tubería. A solicitud de la Compañía Refinadora, el Estado extenderá las ya mencionadas exoneraciones y exenciones a sus contratistas y subcontratistas o a sus abastecedores de materia prima o de los otros materiales antes mencionados para los mismos fines.

El Estado hará sus mejores esfuerzos por asegurar la más pronta inspección aduanera de los materiales y equipos asignados a la Compañía Refinadora y a sus contratistas, o a estos últimos.

QUINTO.– Exportación Libre de Derecho, Exportación de equipo y productos desde la República Dominicana.

El Estado concede el derecho de exportar del país, exento del pago de todos y cada uno de los derechos, impuestos, patentes, recargos, tasas y contribuciones de cualquier naturaleza ya sean nacionales, provinciales, municipales, o de cualquier organismo oficial, que incidan, recaigan o que tengan que ver directa o indirectamente o que se imponga o gravite sobre los mismos, lo siguiente; a) Todo producto petrolero manufacturado en la refinería; b) Todo el material, maquinarias, equipo, accesorios y demás efectos que puedan quedar sobrantes después de terminada la construcción de la refinería o pueda haberse importado para fines de su construcción, expansión u operación de dicha refinería.

El Estado conviene en que no estará sujetos a ningún derecho, impuesto, recargo ni cargos similares de exportación, los productos petroleros importados o manufacturados en la refinería para uso de los barcos o aviones que viajan entre la República Dominicana y cualquier país extranjero.

SEXTO.– Fijación del precio de los productos.

Los precios de los productos vendidos de la refinería, en la fecha de entrega, no serán mayores que el promedio de las cotizaciones bajas publicadas en el Platt's Oilgram para los cargamentos de productos similares procedentes de Aruba, Curazao, Anuay y Cardón, más el flete calculado según transporte usual que normalmente hubieran pagado los importadores de esos lugares hata la República Dominicana, y los gastos de puerto y otro gasto de importación, incluyendo los derechos consulares. Además el Estado permitirá un exceso en la fijación de esos precios por concepto de los costos adicionales cuando por motivos que no dependan de la Compañía Refinadora el suministro de crudos, mezclas o productos cemiacabados, tenga necesariamente que obtenerse de una fuente no tributaria,esto es, de un lugar distinto a aquel de donde toma normalmente la Compañía Refinadora los productos para ser refinados. No se aplicará ningún derecho de importación (ni ningún otro impuesto) a los crudos, mezclas, para la refinación o materiales de aprovisionamiento utilizados por la refinería. Queda convenido, sin embargo, que el precio de los productos calculados en la forma que se indica más arriba y vendidos a las compañías vendedoras de productos de petróleo no será en ningún caso mayor que los precios que pagarían dichas compañías por productos análogos importados, todo ello sujeto a que el Gobierno no aumente el nivel de los impuestos que recaigan o incidan sobre los productos; y la Compañía Refinadora investigará las medidas de lugar a fin de tratar de reducir estos precios en beneficios del consumidor final. Para no afectar los arreglos comerciales que tienen en la actualidad en la República Dominicana otras compañías vendedoras de productos de Petróleo, la Compañía Refinadora hará las negociaciones pertinentes con dichas compañías, para el abastecimiento del petróleo crudo o mezclas que requiera la refinería, y/o para el suministro de los productos elaborados en la refinería que ellas necesitan, o si dichas compañía lo pidieran, la Compañía Refinadora hará los arreglos necesarios para procesar petróleo crudo y mezclas pertenecientes a dichas empresas en su refinería sobre bases competitivas por los servicios prestados sin en estos casos fijar precios de los productos manufacturados.

El Estado podrá establecer un impuesto de consumo, u otro similar, sobre los productos derivados del petróleo, equivalente al total de los que actualmente gravan la importación de esos

productos. Sin embargo, es entendido que se agregará cualquier impuesto de consumo u otro similar, que el Estado estableciera y que la Compañía Refinadora tuviera que cobrar, al precio de los productos que se venden en refinería.

Además se es entendido que a partir de la fecha en que la refinería comience producción comercial, el Estado, para proteger la industria nacional, velará que los derechos u otros impuestos vigentes que recaigan o incidan sobre productos de petróleo que se importen o introduzcan, no sean menores del equivalente a seis (6) centavos por galón, en moneda de los Estados Unidos de América, sobre cada producto de petróleo, que se importe los importadores de dichos productos pagarían tanto esos derechos de importación como el impuesto de consumo a que se hace referencia en el párrafo anterior. Sin embargo en caso de que la Compañía Refinadora no pudiera abastecer de la refinería los requerimientos del mercado nacional, debido total o parcialmente a caso fortuito o fuerza mayor, la Compañía Refinadora tendrá derecho de importar durante dicha anormalidad los productos necesarios para satisfacer la deficiencia, libres de derechos e impuestos de importación.

SEPTIMO.— Ubicación de los Terrenos y Servidumbres.

A solicitud de la Compañía Refinadora el Estado le prestará su cooperación para que esta adquiera a un precio razonable las porciones de terreno necesarias, y que fueren adecuadas para montar su refinería y demás instalaciones relacionadas con la misma, incluyendo las instalaciones portuarias que fueren necesarias, Las mejoras que se realicen en dichas instalaciones estarán exentas de todo impuesto y derecho o recargo durante la vigencia de este contrato. El Estado acuerda a la Compañía Refinadora todas las concesiones, licencias, servidumbres y otras necesidades para la instalación y el funcionamiento de la refinería y demás instalaciones relacionadas con la misma, si ésta las solicitare, incluyendo instalaciones portuarias y los oleoductos que se extiendan sobre la tierra o debajo del mar, instalación para eliminar los desperdicios de la refinería, o para el agua y la luz, desaguez, vías de acceso, apartaderos y demás instalaciones similares, teniendo en cuenta para el otorgamiento de tales concesiones, la naturaleza de los sitios y demás detalles que serán fijados de común acuerdo por las Partes, entendiendose que cuando se trate de terrenos o derechos perteneciente a particulares, la acción del Estado se limitará a prestar sus buenos

oficios a fin de que las concesiones sean acordadas por ésto a la Compañía Refinadora, en las condiciones más equitativas posibles. El Estado asegurará también a la Compañía Refinadora un suministro adecuado de electricidad y agua potable a un costo razonable y que no excederá de las tarifas vigentes actualmente. Para el caso en que fuere necesario realizar operaciones de dragado en el sitio seleccionado para la instalación de la refinería, el Estado prestará a la Compañía Refinadora su cooperación en tales dragados, brindándole las facilidades necesarias para que las obras de dragado o perforación se llevan a cabo con la mayor facilidad posible.

OCTAVO.- Impuesto Sobre la Rentas o Beneficios.

Durante la vigencia de este contrato, las utilidades anuales derivadas por la Compañía Refinadora en las actividades y negocios de la refinería estarán sujetas al impuesto sobre beneficios o de otros tributos basados en las utilidades, capital, patrimonio, franquicia y demás operaciones, ya sean nacionales, municipales o locales, hasta un porcentaje máximo sobre los beneficios netos que no excederá en total del 20 por ciento .

Si la Compañía Refinadora, para financiar la construcción y operación de la refinería, obtuviera préstamos o anticipos financieros sin interés en forma expresa, se entiende que no se presumirá interés, y por consiguiente dichas operaciones de préstamos no estarán sujetas al pago del impuesto sobre beneficios de préstamos.

En la determinación de los beneficios la Compañía Refinadora se compromete a adoptar las prácticas de contabilidad internacionalmente aceptadas para este género de industria.

NOVENO.- Libertad de Navegación.

a Compañía Refinadora queda exenta y exonerada del pago de todos y cada uno de los derechos, impuestos, patentes, recargos, tasas, tributos, así como de cualesquiera otros cobros de cualquier naturaleza denominación, ya sean nacionales, provinciales, municipales o de otros organismos oficiales que estén en vigor actualmente o que vengan a establecerse en el futuro, que incidan, recaigan directa o indirectamente o se imponga o gavite o afecte el costo de los crudos importados, productos de petróleo,

productos químicos, catalizadores u otros suministros que se hagan a la refinería o que salgan de ésta por sus instalaciones.

El Estado conviene en que no se aplicará restricción de ninguna especie, ni aún en forma de impuestos especiales, que tengan como fanalidad limitar, directa o indirectamente, la selección de los barcos y banderas que salgan de la República Dominicana o que entren a este país, usados en el transporte de crudos mezclas, productos de petróleo, productos químicos o suministros de cualquier clase que se importen para la refinería de la Compañía Refinadora o en la exportación de productos de petróleo elaborados en ella, todo ello sujeto a las circunstancias de que dichos barcos cumplen con lo dispuesto por las leyes y reglamentos portuarios de la República y que se ajusten a los que dispongan o puedan disponer los tratados y convenciones internacionales celebrados por la República, así como a las medidas que se dicten en beneficio de la seguridad nacional.

DECIMO.- Fuente de Suministros.

La Compañía Refinadora tendrá completa libertad para importar de cualquier fuente petróleo o material de aprovisionamiento que será elaborado o mezclado en su refinería, también tendrá libertad para escoger las mezclas, aditivos, productos químicos, catalizadores y otros materiales o productos usados en las operaciones de refinamiento, manufactura, elaboración, mezcla o embalaje. El material de aprovisionamiento puede incluir crudos integrales, crudos mezclados, crudos reconstruidos y cualquier material de aprovisionamiento de petróleo acabado o semiacabado que pueda necesitarse para atender a las necesidades de la refinería, en cuanto a productos se refiere.

Si hubiera petróleo en explotación en el país, la Compañía Refinadora refinará de preferencia, hasta satisfacer el consumo interno, el petróleo crudo nacional y colaborará con los propietarios de dicho petróleo siempre que la cantidad y calidad del mismo sean aptas para refinarse dentro de las facilidades de la refinería entonces existentes sobre una base económica, teniendo en cuenta el precio y las fuentes competitivas.

La Compañía Refinadora y sus contratistas o subcontratistas tendrán libertad completa para seleccionar las fuentes de

abastecimiento de los materiales, equipo, remolcadores, barcos, accesorios y repuestos necesarios para la construcción funcionamiento, ampliación reparación o renovación de la refinería y cualesquiera instalaciones para el transporte, incluyendo los oleoductos.

DECIMOPRIMERO.– Administración.

La Compañía Refinadora gozará de completa libertad en el ejercicio de su libre albedrío en los asuntos relacionados con las normas, la administración y el funcionamiento de la planta, sujeta a las disposiciones legales sobre la materia.

DECIMOSEGUNDO.– Concesión de Privilegio.

El período de este contrato de doce (12) años, más el plazo necesario para la construcción de la refinería; y él es prorrogable por un período de cinco (5) años adicionales, salvo que el contrato sea denunciado por una de las partes con un año de anticipación. Sin embargo, este contrato no confiere ningún derecho de exclusividad, y, en consecuencia, el Estado podrá otorgar iguales beneficios a otras empresas. Se hará extensivo a la Compañía Refinadora, si ésta lo pidiera, cualquier beneficio, franquicia, ventaja o privilegio que sean distintos o más favorables, concedidos o que se concedan a otra refinería o entidad petrolera o industria competidora en virtud de disposiciones legales o contractuales.

DECIMOTERCERO.– Libertad de Acción.

La Compañía Refinadora tendrá la obligación de mejorar la calidad de sus productos, de conformidad con los progresos técnicos alcanzados en ese campo durante el período a que se refiere el presente contrato, así como la de modificar o ampliar sus instalaciones para atender a las necesidades en cuanto a la cantidad o calidad que a sus productos se refiere, o de crear productos nuevos o especiales, si el volumen del Mercado Nacional así lo justifica.

DECIMOCUARTO. Adiciones o Modificaciones.

Cualesquiera adiciones o modificaciones realizadas en la refinería de la Compañía Refinadora gozará mientras se

encuentre en vigor el presente contrato, de todas las provisiones y beneficios concedidos en el presente contrato.

DECIMOQUINTO.– Efecto de Futuras Legislaciones.

Los derechos concedidos en el presente contrato no serán menoscabados, durante la vigencia, incluyendo cualquier prórroga, del mismo, por legislaciones o reglamentaciones posteriores.

DECIMOSEXTO.– Arbitraje.

Si surgiere cualquier disputa o desacuerdo como consecuencia de la ejecución del presente contrato o a causa de la interpretación de algunas de sus cláusulas, entre el Estado y la Compañía Refinadora, que no pueda resolverse de otro modo a satisfacción de ambas partes, dicha disputa o desacuerdo será sometido a tres árbitros designados uno por cada una de las partes y un tercero escogido por los dos árbitros seleccionados, los cuales resolverán de acuerdo con las estipulacones aplicables, para el arbitraje, promulgadas por la Cámara Internacional de Comercio. La decisión o resolución que recayere será definitiva y obligatoria para las partes en disputa.

DECIMOSEPTIMO.– Cooperación Técnica.

La Compañía Refinadora someterá periódicamente al Estado informes detallados referentes a posibles soluciones junto con su recomendación con vistas a emplear en todo cuanto sea posible las facilidades locales al igual que la mano de obra y a mantener los gastos en divisas extranjeras al nivel más abajo posible.

También se obliga a prestar su más estrecha cooperación al Gobierno para la preparación de expertos dominicanos en la industria del petróleo y en las investigaciones tecnológicas relacionadas con los productos del petróleo. Además la Compañía Refinadora se compromete a dar preferencias en emplear en la operación de la refinería a los técnicos dominicanos en cuanto estén debidamente capacitados.

DECIMOOCTAVO.– Fuerza Mayor.

La inejecución del presente contrato no dará lugar a reclamaciones de una de las partes contra la otra, ni conducirá a

la anulación de este contrato si tal inejecución se debe o se ha originado en circunstancias fortuitas o de fuerza mayor. Cada una de las partes se obliga, sin embargo, a informar por escrito a la otra de cualquier demora que resultare, dentro de los 30 días en que se hubiese producido esa demora, y esa información constituirá una justificación para una extensión de los plazos a que se refiere el artículo decimonoveno de este contrato.

DECIMONOVENO. Construcción.

La Compañía Refinadora comenzará la producción comercial, en la refinería, ya terminada la construcción y total erección sobre el terreno de sus unidades y de los accesorios, dentro de un plazo de veinticuatro (24) meses a partir de la aprobación por el Consejo de Estado de estas modificaciones al contrato agrobado por Resolución No.5647 publicada en la Gaceta Oficial No.8612 del 28 de octubre de 1961, salvo los casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente comprobados.

VIGESIMO. Referencia de este Contrato.

Queda formalmente convenido entre las partes que el presente contrato no podrá ser transferido ni total ni parcialmente si no con la autorización expresa del Estado, salvo lo que se consagra en la cláusula primera del mismo, la cual autoriza la formación de una entidad social que podrá sustituir a la Compañia Refinadora en el presente contrato.

VIGESIMO PRIMERO. Expansión de la Refinería para la Manufactura de Nuevos Productos.

Cuando el desarrollo industrial y agrícola del país requiera un volumen suficiente de productos de petróleo no incluidos en la relación del artículo primero de este contrato, la Compañia hará los estudios tecnológicos y económicos necesarios para la manufactura local de tales productos. Cuando el consumo y los cálculos financieros lo justifiquen, la Compañia discutirá con el Gobierno la base para la manufactura de estos productos en la refinería.

VIGESIMO SEGUNDO.

Queda especialmente convenido entre las partes que si la Compañía Refinadora constituye una corporación de acuerdo

con la cláusula primera de este contrato, esta será causahabiente un versal de todos los derechos y obligaciones de la Compañía Refinadora en el presente contrato, y ejercerá todas las acciones y obligaciones que se deriven del presente contrato, para lo cual bastará que así lo notifique dicha entidad al Gobierno Dominicano, ya sea por acto de Alguacil o por cualquier otro acto que acredite la existencia y notificacioón de dicho acto.

Queda además convenido que la Compañía Refinadora o la Corporación que ésta constituya de acuerdo con la Cláusula Primera de este contrato ofrecerá lo antes posible y durante un plazo que vencerá el 31 de diciembre del año en curso a inversionistas privados dominicanos, participación consistente en la venta de unidades compuestas por acciones y bonos con valores equivalente entre sí, hasta el 25% del capital total requerido para el financiamiento de aproximadamente $10,000,000 (diez millones de pesos), moneda nacional, de cualquiera de dichas compañías, que se encargará de la construcción y operación de la refinería, a que este contrato se refiere.

HECHO Y FIRMADO en tres originales, uno para cada una de las partes y otro para ser sometido a la aprobación del Consejo de Estado, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana a los 9 dias del mes de agosto del año mil novecientos sesenta y dos.

POR EL ESTADO DOMINICANO

Dr. Ramón Cáceres Troncoso

POR CIA. REFINADORA PETROLERA SANTO DOMINGO.

Lawrence Joseph Brewer

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 27 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no de la Independencia y 100mo de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Luis Amiama Tió.
Miembro

Antonio Imbert Barrera,.
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la república Dominicana.

En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 54 inciso 2do., de la Constitución de la República .

PROMULGO la presente Resolución, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periodico de amplia curculación en el territorio Nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio , Nacional , Santo Domingo, Dsitrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 27 días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no de la Independencia y 100mo de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Resolución No.6019, del Consejo de Estado, que aprueba un contrato intervenido entre el Instituto Agrario Dominicano y la International Development Services, Inc.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6019

VISTOS los artículos 38, inciso 20, y 116 (transitorio) de la Constitución de la República;

VISTO el acto bajo firma privada de fecha 23 de julio de 1962, intervenido entre el Instituto Agrario Dominicano, y la International Development Services, Inc.,., mediante el cual el último se compromete a prestar en favor del primero servicios ténicos en varias ramas relacionadas con el plan de reforma agraria que se está ejecutando en la República,

RESUELVE:

UNICO Aprobar el acto bajo firma privada de fecha 23 de julio de 1962, intervenido entre el Instituto Agrario Dominicano y la International Development Services, Inc., el cual copiado a la letra dice así:

"En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Capital de la República Dominicana, a los veintitrés días del mes de julio del año mil novecientos sesenta y dos (1962). ENTRE EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, debidamente representado en este acto por el Agrón. MANUEL DE JESUS VIÑAS CACERES, dominicano, mayor de edad, casado, de este domicilio y residente provisto de la cédula personal de identidad serie 54, No. 22311, con sello debidamente renovado, que en lo que sigue de este contrato, se denominará el INSTITUTO, de una parte; e INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES, INC., Fundación de Desarrollo no lucrativa incorporada bajo las leyes del Estado de Nueva York, con su oficina principal en el 1270 Avenida de las Américas, Nueva York 20, N. Y.., debidamente representada en este acto por su presidente, Señor ROBERT W. HUDGENS, de nacionalidad norteamericana y accidentalmente en el país, que en lo que sigue de este contrato se denominará IDS; INTRODUCCION. POR CUANTO; EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO desea recibir asistencia técnica para la planificación, organización y administración, de un programa de REFORMA AGRARIA; y POR CUANTO: IDS desea y está capactiado para suministrar asesoramiento técnico y asistencia al INSTITUTO en la planificación, organización y administración de un programa de REFORMA AGRARIA; POR TANTO: Las partes contratantes han convenido con entera libertad y buena fe en el siguiente CONTRATO: SECCION1; FINES Y OBJETIVOS. a) EL INSTITUTO desea obtener los servicios de IDS para asesorar y asistir a dicho INSTITUTO, en la organización, administración y operación de un programa nacional de REFORMA AGRARIA, para después de así organizado y

operado dar su un programa nacional de REFORMA AGRARIA, para después de así organizado y operado dar su contribución máxima al desarrollo agrícola de la República Dominicana; b) IDS asistirá y trabajará con el INSTITUTO en todas las fases del programa de REFORMA AGRARIA, prestándole atención especial a: (1) El establecimiento de una organización administrativa adecuada, tanto en las oficinas principales como en las oficinas de operaciones locales, las cuales deberán ser establecidas en sitios apropiados en el territorio de la República Dominicana; (2) El establecimiento de sistemas de operaciones y procedimientos adecuados así como controles de administración para el programa; (3) Es establecimiento de criterio apropiado para la concesión de préstamos; (4) La preparación de programas de adiestramientos para la organización de Cooperativas Agrícolas y la concesión de préstamos crediticios supervisados a dichas Cooperativas; (6) El establecimiento de relaciones apropiadas entre el programa de REFORMA AGRARIA, el programa de Crédito Agrícola Supervisado, y otros servicios públicos y facilidades relacionadas con el fomento del desarrollo agrícola en la República Dominicana.SECCION 2: ESFERA DE ACCION DEL TRABAJO: PERSONAL; DURACION DEL SERVICIO. a) IDS asistirá al INSTITUTO en el desarrollo de un programa de trabajo para alcanzar los fines y objetivos indicados en la Sección 1, cuyo programa de trabajo estará sujeto a revisión de tiempo en tiempo, según se desee o sea necesario; b) Para llevar a cabo esos servicios, IDS pondrá a disposición el personal siguiente: (1) Un jefe Técnico encargado del Personal de IDS quien será experto en organización y administración de colonización y en rehabilitación rural;

(2) Un experto en planificación a largo alcance de utilización de la tierra y su ajuste, según se relaciona a estos la distribución y colonización de tierras; (3) Un experto en educación con experiencia en la operación de programas de REFORMA AGRARIA; (4) Un experto en Cooperativas, con experiencia en los elementos básicos de sus operaciones mercantiles y de sus promociones como vehículos de educación; (5) El equivalente de medio año hombre de especialistas para asignaciones de corta duración en la República Dominicana según sea requerido por el Director General del INSTITUTO; (c) IDS también conviene en suministrar ayuda técnica al INSTITUTO mediante su personal superior, según sea necesario, y la supervisión de sus propios técnicos en la extensión que sea necesaria para asegurar el

AGN

satisfactorio desenvolvimiento del INSTITUTO. d) Los servicios del personal de IDS descritos en la Sección 2-b se pondrán a su disposición tan pronto como sea posible después de la ejecución del presente Contrato y continuarán hasta la terminación de 2 años a partir de la fecha de efectividad de la carta de crédito descrita en la Sección 4.- SECCION 3: PAGO DE SERVICIOS.- IDS conviene en llevar a cabo los servicios indicados en este Contrato por un suma global que en ingún caso excederá de $240,000.00. La suma que finalmente resulte bajo comprobación de ella, constituirá el pago total de todos los servicios y gastos descritos en el apéndice adjunto, que sean llevados a cabo en este Contrato. Los honorarios fijos del IDS convenidos ascienden a la cantidad de $10,000.00 que pagará el INSTITUTO independientemente de los gastos efectuados.- SECCION 4: METODO DE PAGO.- Todos los pagos que sean hechos por el INSTITUTO al IDS, según se establece en la Sección 3, serán en dólares de los Estados Unidos de América. El INSTITUTO instruirá el CHASE MANHATTAN BANK, de la ciudad de New York, Estados Unidos de América, para que expida una carta de crédito irrevocable, confirmada, por la suma especificada en la Sección 3, contra la cual la IDS podrá girar fondos por adelantado de conformidad con el siguiente programa: 1.- $70,000.00 para ser avanzados en la fecha en que sea establecida dicha carta de crédito; 2.- $60,000.00, que podrán ser retirados seis meses después de la fecha del primer avance. 3.- 60,000.00 que serán retirados doce meses después de la fecha del establecimiento de la carta de crédito. 4.-$60,000.00 que serán retirados diez y ocho menses después de la fecha del establecimiento de la carta de crédito. A la conclusión del presente Contrato, la IDS liquidará los gastos finales del presente contrato, quedando entendido que las sumas que no sean consumidas o utilizadas por la IDS, serán reembolsadas en favor del INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO.- SECCION 5.- SERVICIOS Y FACILIDADES LOCALES.- El INSTITUTO suministrará, o hará los arreglos necesarios para que se suministren libres de costo, lo siguiente: a) Facilidades de oficina y otros servicios de oficina necesarios para el personal de IDS asignados para trabajar en la República Dominicana según lo requiera el desenvolvimiento de sus funciones; b) Transportación motriz dentro de la República Dominicana según se requiera para llevar a cabo los trabajos indicados en este Contrato; SECCION 6: EXONERACION.- Todos los pagos de sueldos que haga a sus empleados el IDS, exceptuando al personal nativo de la República Dominicana o de cualquiera de sus organismos

políticos. Los técnicos que envíe el IDS estarán exentos del pago de derecho de aduana y de importación sobre sus efectos personales. Queda entendido que únicamente en lo que refiere al pago de los derechos de aduana e importación referidas, los técnicos gozarán de privilegios iguales a los concedidos a los primeros secretarios en el servicio diplomático. SECCION 7: DOCUMENTACION.- a) Para el avance inicial: Una factura por la cual se solicita dicho avance de acuerdo con las condiciones del Contrato; b) Para los avances subsiguientes: 1.- Certificación de IDS de que se han llevado a cabo los servicios que le han sido requeridos en el curso del período de 6 meses precedentes; 2.- Una factura por la cual se solicite dicho avance conforme a las condiciones de este Contrato. . SECCION 8: RESCISION DEL CONTRATO.- En el caso en que ambas partes contratantes convengan en dar término al presente Contrato antes de su terminación, ambas partes de común acuerdo liquidarán a ese momento los gastos en que hubiere incurrido la IDS, cuya suma será el pago total de las obligaciones del INSTITUTO frente a la IDS. Queda entendido que en cuanto a los honorarios el INSTITUTO abonará a la IDS si la rescisión se efectúa en el curso del primer año, la suma de $5,000.00 abonados como primer aporte de los mismos y para el caso en que la rescisión se opere en el curso del segundo año, deberá abonar la totalidad de los honorarios convenidos. SECCION 9: TRAMITACION LEGAL.- Una vez firmado el presente Contrato el INSTITUTO someterá el mismo al Consejo de Estado para su aprobación legislativa en virtud de las disposiciones de la Constitución del Estado, por contener dicho Contrato exenciones de impuestos y derechos arancelarios. Una vez aceptado por el Consejo de Estado en sus funciones legislativas, el presente Contrato deberá ser publicado en la Gaceta Oficial para los fines correspondientes. EN FE DE LO CUAL, las partes firman este Contrato en la fecha y año indicados arriba, en 5 originales del mismo tener y efecto para ser distribuidos entre organismos y autoridades de la República Dominicana y organismos de INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES, INC.

FIRMADOS: POR EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, AGRON. MANUEL DE JS. VIÑAS CACERES, Director General del Instituto Agrario Dominicano y POR LA INTERNATIONAL DEVOLOPMENT SERVICES INC., ROBERT W. HUDGENS, Presidente.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barreras
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacioanl, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6020, que concede pensión del Estado a la señora Fredesvinda Liz Vda. Estrella.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6020

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se concede una pensión del Estado de cien pesos oro (RD$100.00) mensuales, a la señora Fredesvinda Liz Vda. Estrella.

Artículo 2.- Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José A. Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6021, que concede pensión del Estado a la señora Zaida R. León Vda. García.

El Consejo de Estado
En Nombre de la República

NUMERO 6021

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se concede una pensión del Estado de cincuenta pesos oro (RD$50.00) mensuales, a la señora Zaida R. León Vda. García.

Artículo 2.- Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles del Estado de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6022, que concede sendas pensiones a las señoras Estela Matínez E. y Flor María Castillo.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 6022

VISTO el artículo 8 de la Ley No.5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY

Artículo 1.- Se conceden sendas pensiones del Estado de cien pesos oro (RD$100.00) y ciento veinticinco pesos oro (RD$125.00) mensuales, respectivamente, a las señoras Estela Martínez E., y Flor María Castillo.

Artículo 2.- Dichas pensiones serán pagadas con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilacones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Sarito Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José A. Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6023, que concede franquicia postal y telegráfica al Banco Nacional de la Vivienda.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 6023

CONSIDERANDO que mediante la Ley No. 5894, del 12 de mayo de 1962, fue creado el Banco Nacional de la Vivienda;

CONSIDERANDO que dada la importancia de la labor a desarrollar por esa institución en beneficio de las clases necesitadas del país, es deber del Gobierno dictar medidas que faciliten el mejor y más eficiente funcionamiento de la misma.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.-Se concede franquicia postal y telegráfica al Banco Nacional de la Vivienda.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Resolución No.6024, del Consejo de Estado, que efectúa un acto de donación de un inmueble propiedad del Estedo a la Custodia Provincial de la Orden de Menores Franciscanos Capuchinos de la República Dominicana.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 6024

VISTOS los artículos 38, inciso 20, y 116 (transitorios) de la Constitución de la República;

VISTO el acto No. 13, de fecha 28 de diciembre de 1961, instrumentado por el Notario Público Luis E. Pou Henríquez, por medio del cual el Estado Dominicano dona a la Custodia Provincial de la Orden de Menores Franciscanos Capuchinos de la República Dominicana, un edificio construído para la Iglesia de San Francisco y Casa de Formación Franciscana, en el Ensanche Ozama, de estad ciudad.

RESUELVE:

UNICO.- Aprobar el acto No. 13, de fecha 28 de diciembre de 1961, instrumentado por el Notario Público Luis E. Pou Henríquez, por medio del cual el Estado Dominicano dona a la Custodia Provinial de la Orden de Menores Franciscanos Capuchinos de la República Dominicana, un edificio construido para la Iglesia de San Francisco y Casa de Formación Franciscana, que copiado a la letra dice así;

"YO, LUIS E. POU HENRIQUEZ, NOTARIO PUBLICO DEL DISTRITO NACIONAL, CERTIFCO Y DOY FE DE QUE POR QNTE MI PASO EL ACTO SIGUIENTE:.- "Acto número trece.- En la Ciudad de Santo Domingo, Capital del Distrito Nacional y de la República Dominicna; hoy, día veintidos del mes de diciembre del año mil novecientos sesenta y uno; ante mí, Luis E. Pou Henriquez, Notario Público de los de esta jurisdicción; con mi oficina abierta en la planta baja de la casa número treinta y dos de la calle "Duarte", esquina a "General Luperón": han comparecido: de una parte, el doctor José A. Quesada T., mayor de edad, dominicano, casado, de este domicilio y residencia, portador de la cédula personal de indentidad número catorce mil trescientos ochenta y uno (14381), serie veintiseis (26), renovada válidamente con el sello número cincuenta y seis (56), a quien

conozco, de lo cual doy fé; quien ha declarado que concurre a este acto en su calidad de Director General de Rentas Internas y Bienes Nacionales y de apoderado especial del Excelentísimo señor Presidente de la República, que lo ha facultado para representar válidamente al ESTADO DOMINICANO, en virtud de mandato que se dirá a continuación;- de otra parte comparece el muy Reverendo Presbítero fray Pedro María de Málaga, en el siglo don Emilio Rico Gomez, mayor de edad, de nacionalidad española, de este domicilio y residencia, soltero, sacerdote católico, provisto de la cédula personal de identidad número ciento once mil setecientos sesenta y dos (111762), série primera, renovada válidamente con el sello número cuatrocientos setenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro (478974), para el año que discurre; quien me ha declarado que comparece en su calidad de Custodio Provincial de los Religiosos Franciscanos Capuchinos de la Custodia Provincial de Santo Domingo (Orden Franciscana de Menores), representando válidamente a dicha institución.- Enseguida el doctor Quezada, expuso: Que en cumplimiento y ejecución de un mandato especial otorgádole por el Poder Ejecutivo, en fecha veintiocho de septiembre del año en curso, cuyo texto dice: "PODER AL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS INTERNAS Y BIENES NACIONALES.- En ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 54, inciso 9 de la Constitución de la República, y en virtud de las disposiciones del artículo 17 de la Ley No. 1832, de fecha 3 de Noviembre de 1948, por el presente confiero poder especial al Director General de Rentas Internas y Bienes Nacionales, para que a nombre y en representación del Estado Dominicano, done a la Custodia Provincial de la Orden de Menores Franciscanos Capuchinos de la República Dominicana, el edificio construído para la Iglesia de San Francisco y Casa de Formación Franciscana, en el Ensanche Benefactor, de esta ciudad, a un costo de RD$189,696.00, edificaciones que serán dedicadas enteramente al culto religioso y al desenvolvimiento de la cultura moral y espiritual de la colectividad, siempre dentro de las normas y disposiciones del Arzobispado de Santo Domingo.- El Contrato que intervenga al efecto, deberá ser sometido a la aprobación del Congreso Nacional.- Dado en Ciudad Trujillo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana; a los veintiocho días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y uno.- Dios, Patria y Libertad;- Joaquín Balaguer, Presidente de la República".- POR EL PRESENTE instrumento público cumple el mandato, haciendo la donación ordenada, en las condiciones indicadas en el mismo.- Por su parte, el Muy Reverendo Presbítero fray Pedro

María de Málaga, representando legalmente a la donataria, en su dicha calidad y en virtud de sus credenciales libradas en Roma por el Ministro o Superior General, fray Clemens a Milwakes, en fecha nueve de julio del año mil novecientos cincuenta y nueve, que le inviste de los más amplios poderes, -que el Notario ha tenido a la vista y de ello da fe,- declara aceptar esta donación y haber tomado posesión del mencionado edificio, testimoniando su gratitud al Excelentísimo señor Presidente de la República y al Gobierno Dominicano, por este generoso donativo, en su propio nombre y en el de la Custodia Provincial de la Misión Franciscana Capuchina que representa.-Ambos comparecientes declaran dejar cumplida esta donación, en cuanto a la parte que a ellos concierna; y ordenan al Notario actuante, expedir de este acto las copias que el fueren requeridas, a fin de cumplir el requisito legal de la aprobación por el Congreso Nacional.- Hecho y otorgado en presencia de los señores Luis Arvelo y Vidal Arias, mayores de edad, dominicanos, de este domicilio y residencia, a quienes conozco, de lo cual doy fé, provistos de las cédulas personales de identidad, números 4351 y 16930, series 1 y 23, respectivamente, renovadas con los sellos números 75626 y 3,968798; testigos instrumentales requeridos al efecto, libres de excepciones; aptos por derecho, que no son parientes ni aliados de las partes en grado prohibido; los cuales, después de leído y aprobado, firman junto con los comparecientes, ante mí y conmigo, Notario, que certifico y doy fé.- Al suscribirse este instrumento, el Director General de Rentas Internas y Bienes Nacionales da la debida constancia de que las edificacaciones a que se refiere esta donación, fueron construidas por el Estado Dominicano, con fondos provenientes del erario público, en terreno ocupado por la donataria.- Doy fé.- (Fdos.) Fr. Pedro M. de Málaga, O.F.M.Cap., Custodio (Emilio Rico).- Dr. José A. Quezada T.- Luis Arvelo.- Vidal Arias.- L.E.Pou H., Notario".–ES COPIA fiel y conforme de su original, que reposa en mi protocolo de este año, al cual me remito; la que, para los fines legales de la necesaria aprobación legislativa expido, firmo y sello en Santo Domingo, capital del Distrito Nacional y de la República Dominicana; hoy, día veintiocho del mes de diciembre del año mil novecientos sesenta y uno.

Luis E. Pou Henríquez
Notario Público.
Ced. 3327, serie 1, sello 3351.-

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

a los 28 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 28 días del mes de agosto del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6025, que concede pensión del Estado a la señora Amada Polanco Aybar Vda. Rey.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6025

VISTA la Ley No. 5701, de fecha 8 de diciembre de 1961;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se concede una pensión del Estado de cien pesos oro(RD$100.00) mensuales, a la señora Amada Polanco Aybar Vda. Rey.

Artículo 2.– Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnely
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los tres días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y dos años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Ley No.6026, que dispone que el Instituto del Tabaco de la República Dominicana funcione como un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6026

Artículo 1.- A partir de la publicación de la presente Ley, el Instituto del Tabaco de la República Dominicana funcionará como un organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Agricultura.

Artículo 2.- Quedan modificadas, en cuanto sea necesario, la Ley No.5961, de fecha quince de junio, de 1952, y sus modificaciones.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y dos; años 119o. de la Independencia y 100o. de la Restauración. Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la Repúnlica
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral.
Segundo Vicepresidente.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la Presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia curculación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento .

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de septiembre de mil

novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY

Nota : La presente Ley fue publicada oficialmente en los diarios "El Caribe, "La Nacion", de Santo Domingo, edicion de 11 de septiembre de 1962

Ley No.6027, que declara la necesidad de Reformar la Constitución de la República.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6027

CONSIDERANDO que, como consecuencia de la imposibilidad material de celebrar elecciones para representantes a una Asamblea Revisora de la Constitución de la República, en la fecha señalada por el artículo 123(transitorio) de la misma Constitución, ni en una fecha precedente a la que debiera fijarse para la celebración de elecciónes generales, o sea antes del 20 de diciembre de 1962, tal como ha sido publicamente proclamado por la Junta Central Electoral, se hace necesario que el Consejo de Estado, haciendo uso de las atribuciones de Asamblea Nacional, que le confiere el artículo 116 (transitorio) de la Constitución de la República, de conformidad con los artículos 37 y 113 de la misma, se reuna en la calidad señalada, en el término constitucional, con el fin de resolver acerca de las reformas propuestas a determinados textos de la constitución vigente, que se estiman imprescindibles para que las próximas elecciones generales a cargos electivos se realicen con el máximo de eficiencia, garantía y pureza posibles, protegiendo del modo más amplio el libre ejercicio de los derechos políticos, con el propósito de dar asi vida a una efectiva democracia representativa en nuestro país;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.– Se declara la necesidad de reformar la Constitución de la República, con el fin de:

a) Modificar los artículos 12, inciso 4; 14, inciso 2; 20, 22, 23, 25, 26, 35, 37, 49, 50, 53, 54, incisos 10 y 22; 56, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90 y sus párrafos, 100, 105, 123 y 124;

b) Suprimir los párrafos I y II del Artículo 58, y 125;

c) Agregar un artículo entre los actuales artículos 50 y 51 con el fin de instituir la Vicepresidencia de la República y otro en las Disposiciones Transitorias con el propósito de hacer compatible con la función de Diputado la de Representante a la Asamblea Revisora de la Constitución.

Artículo 2.– Las referidas modificaciones, supresiones y adiciones tienen por objeto:

a) Suprimir la parte final del inciso 4) del Artículo 12, a fin de que rija así: "Los naturalizados. La ley dispondrá las condiciones y formalidades requeridas para la naturalización";

b) Eliminar del párrafo del mismo inciso las sanciones para los que, siendo dominicanos, aleguen la posesión de una nacionalidad extranjera;

c) Convertir este mismo párrafo en dos párrafos para que rijan así:

Párrafo I.– A ningún dominicano se le reconocerá otra nacionalidad sino la dominicana mientras resida en el territorio de la República;

Párrafo II.– La dominicana casada con extranjero podrá adquirir la nacionalidad de su marido;

d) Suprimir del inciso 2) del Artículo 14 la frase: "con las restricciones que indica esta Constitución," para que rija así: "El de ser elegibles para las funciones electivas";

e) Modificar los artículos 20 y 21 a fin de disponer que las vacantes de Senadores y Diputados se cubran por medio de suplentes y a falta de éstos por elecciones parciales;

f) Para agregar un Párrafo al Artículo 22 que diga: "Cada Senador tendrá un Suplente elegido en la misma forma que éste";

g) Para expresar, en el Artículo 23, que para ser Suplente de Senador se requieren las mismas condiciones que para ser Senador;

h) Reducir, en el Artículo 25, de sesenta mil habitantes, a cincuenta mil y de treinta mil a veinticinco mil la fracción para determinar el número de Diputados por cada provincia y agregar un párrafo que diga: "Cada Diputado tendrá un Suplente elegido en la misma forma que éste;

i) Con el objeto de expresar, en el Artículo 26 que para ser Suplente de Diputado se requieren las mismas condiciones que para ser Diputado;

j) Cambiar en el artículo 35 la fecha 16 de agosto por 27 de febrero;

k) Agregar en el Artículo 37 al Vicepresidente de la República y variar la frase final por ésta: "las demás facultades que le confiere la presente Constitución";

l) Agregar al artículo 49 la frase "y quien no podrá ser reelecto en el periodo subsiguiente", a fin de prohibir la reelección inmediata de la persona que ejerza la Presidencia de la República;

m) Modificar el Artículo 50 con los fines siguientes:

1.– Requerir para ser Presidente de la República la condición de dominicano de nacimiento u orígen;

2.– Exigir la edad de 35 años para los mismos fines,

3.– Suprimir la obligación de haber residido en el país durante los cinco años inmediatos a su elección;

n) Modificar el actual Artículo 51 para que rija con el siguiente texto:

"El Presidente y el Vicepresidente de la República electos en los comicios generales, prestarán juramento de sus cargos el 27 de febrero siguiente a su elección, fecha en que deberá terminar el período de los salientes. Cuando el presidente de la República electo no pudiere hacerlo por encontrarse fuera del país o por enfermedad o por cualquiera otra causa de fuerza mayor, ejercerá las funciones de Presidente interino el Vicepresidebte de la República electo, y a falta de éste la persona que elija el Senado en su primera reunión, que deberá efectuarse el 27 de febrero, para ejercer las funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia;

ñ)Agrega un nuevo artículo para que rija con el siguiente texto: "Habrá un Vicepresidente de la República, que será elegido en la misma forma y por igual período que el Presidente y conjuntamente con este. Para ser Vicepresidente de la República se repuiere las misma condiciones que para ser Presidente".

o) Modificar el Artículo 52 para que rija así: "Si el Presidente de la República electo faltare are definitivamente sin prestar juramento de su cargo el Vicepresidente electo lo sustituirá";

p) Modificar el Artículo 53 para que el Vicepresidente de la República preste tambien juramento constitucional, conjuntamente con el Presidente;

q) Suprimir del texto del inciso 10) del Artículo 54 a los Gobernante Civiles de Provincias, en razón de que estos funcionarios no setán electivos, sino nombrado por el Poder Ejecutivo.

r) Sustituir el texto del inciso 22) del mismo Artículo con el siguiente: "Someter al Congreso, durante la segunda legislatura ordinaria el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente al año siguiente;

s) Para establecer, en el Artículo 56, que el Vicepresidente de la República no puede renunciar sino ante la Asamblea Nacional;

t) Cambiar el texto del Artículo 57 de la siguiente manera: "En caso de falta temporal del Presidente de la República, después de haber prestado juramento, ejercerá el Poder Ejecutivo. mientras dure esa falta, el Vicepresidente de la República, y a

falta de éste el Presidente de la Suprema Corte de Justicia";

u) Cambiar el texto del actual Artículo 58 por el siguiente: "En caso de falta definitiva del Presidente de la República, después de haber prestado juramento, desempeñará la Presidencia de la República por el tiempo que falte para la terminación del período, el Vicepresidente de la República";

v)Reformar el Artículo 59 para que rija así: "En caso que faltare el Vicepresidente de la República, asumirá el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los 30 días que sigan a la fecha de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reuna dentro de los 15 días siguientes y elija el sustituto definitivo en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso hasta haber realizado la elección. En el caso de que tal convocaroria no fuere hecha dentro de esos 30 días, la Asamblea Nacional se reunirá de pleno derecho para llevar a cabo la elección en la forma arriba prevista;

w) Suprimir del Artículo 60 las frases: "que instituye la presente Constitución" y "salvo lo dispuesto en el Artículo 58, Párrafo II", como consecuencia de la eliminación de la vocación sucesoral para la presidencia de la República, de los Secretarios de Estado de lo Interior y de la Presidencia;

x) Sustituir el inciso 1) del Artículo 64 por éste: "1) " Ser dominicano por nacimiento u orígen y haber cumplido 35 años de edad". En razón de que al tener vocación sucesoral presidencial el Presidente de la Suprema Corte de Justicia debe reunir los mismos requisitos que el Presidente de la República;

y) Incluir en el inciso 1) del Artículo 66 al Vicepresidente de la República entre los funcionarios que deben ser juzgados en primera y última instancia por la Suprema Corte de justicia;

z) Modificar el Artículo 83 en el sentido de aumentar a 5 años la residencia que se exige a los extranjeros mayores de edad para desimpeñar los cargos de Síndicos y Regidores del Distrito Nacional y de los Municipios;

a') Modificar el Artículo 84 con el fin de que los Gobernadores Civiles no sean electivos sino designados por el Poder Ejecutivo;

b') Cambiar el texto del Artículo 86 con el fin de consagrar constitucionalmente la obligatoriedad del voto;

c') A fin de aumentar en el Artículo 87 a noventa días el plazo en que las Asambleas Electorales se reunirán, a más tardar, después de la fecha de la ley de convocatoria;

d') Sustituir el texto del actual Artículo 88 por el siguiente: "Artículo 88. Corresponde a las Asambleas Electorales elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República, los Senadores y los Diputados, y sus Suplentes, los Regidores de los Ayuntamientos y sus Suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus Suplentes, así como cualquier otro funcionario que se determine por la ley", con el objeto de incluir al Vicepresidente de la República y a los Suplentes de Senadores y Diputados entre los funcionarios cuya elección corresponde a las Asambleas Electorales, y, asimismo, suprimir a los Gobernadores Civiles de las provincias por no ser estos ya funcionarios electivos.

e') Para establecer en el Artículo 89, las normas de la votación y de la elección de candidatos;

f') Sustituir en el Artículo 90 y en su párrafo la denominación "Junta Central Electoral" por la de "Corte Superior Electoral", que se ha juzgado más apropiada.

g') Suprimir en el Artículo 100 de los días de fiesta constitucionales el 24 de septiembre, aniversario de la supuesta restauración financiera.

h') Sustituir el texto del Artículo 105 por el siguiente: "El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea cualfuere la fecha de su elección, termina uniformente el 27 de febrero de cada cuatro años, fecha en que se inicia el período constitucional. Sin embargo, los Regidores de los Ayuntamientos y sus Suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus Suplentes, serán elegidos por períodos de dos años".

Párrafo.– Cuando un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destitución, enhabilitación u otra causa, el que lo sustituya, permanecerá en el ejercicio hasta completar el período". Esta modificación tiene

por objeto sustituir la fecha del 16 de agosto por la del 27 de febrero y, además, suprimir los Gobernadores Civiles de las Provincias de entre los funcionarios electivos que enumera este texto.

i') Modificar el Artículo 123 para que rija del siguiente modo: "El Consejo de Estado, después de haber hecho las reformas pertinentes en materia electoral, convocará a elecciones de representantes a una Asamblea Revisora de la Constitución y a elecciones generales de los cargos electivos que establece la presente Constitución. Estas elecciones tendrán lugar a más tardar el 20 de diciembre de 1962.

Los funcionarios electos tomarán posesión de sus cargos el 27 de febrero de 1963, fecha en la cual cesará en sus funciones el Consejo de Estado.

Los candidatos a Diputados al Congreso Nacional que resulten electos lo serán a la vez como miembros de la Asamblea Revisora de la Constitución. En caso de que la Constitución no haya sido proclamada antes del 27 de febrero de 1963, la Cámara de Diputados será constituida con los Suplentes de los referidos Diputados que hayan sido elegidos conjuntamente con los titulares. Los suplentes de Diputados estarán en funciones hasta tanto los titulares terminen su misión en la Asamblea Revisora, ocurrido lo cual los titulares ocuparán sus curules respectivas".

j') Reformar el Artículo 124,para que rija así: "La Asamblea Revisora de la Constitución se reunirá en la ciudad de Santo Domingo, en la Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a las diez de la mañana del tercer dia siguiente a la fecha en que la Corte Superior Electoral formule la relación general de los Diputados al Congreso. La Asamblea Revisora, no podrá reunirse válidamente sino con una mayoría de más de la mitad de sus miembros".

k') Suprimir el actual Artículo 125 por haberse ejecutado ya sus disposiciones y, en su lugar, incluir otro con el texto siguiente:

"Artículo 125.– la incompatibilidad a que se refiere el Artículo 19 de la presente Constitución, no será aplicable a los Diputados, en cuanto a las funciones de Miembro a la Asamblea Revisora".

1') Suprimir los Párrafos I y II del Artículo 58, por no tener vocación presidencial, los Secretarios de Estado de lo Interior de la Presidencia y de las Fuerzas Armadas.

Artículo 3.– El Consejo de Estado deberá reunirse, en funciones de Asamblea Nacional, dentro de los quince días que sigan a la publicación de la presente ley, para conocer de las reformas propuestas a la Constitución de la República.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro

Luis Amiama Tió
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimientos y sumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly.

Nota: La presente Ley fué publicada oficialmente en "El Caribe y La Nación" de Santo Domingo, ediciones del 11 y 12 de septiembre de 1962, respectivamente.

Ley No.6028, que agrega un 4to. párrafo al Art.193 del Código de Trabajo.

República Dominicana
EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6028

CONSIDERANDO que las clases trabajadoras de la República son con frecuencia víctimas de la usura;

CONSIDERANDO que es necesario que se dicten medidas tendientes a evitar esa explotación, siendo una de ellas la de dar seguridad a las empresas en el sentido de que recuperarán cualquier valor que recomienden o garanticen a sus trabajadores en una institución bancaria;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.— Se agrega el siguiente Párrafo al Art. 193 del Código de Trabajo:

"4to.– Los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del patrono. Por este concepto no podrá descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Ddomingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 100o. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral.
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República:

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento, así

como en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diez días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, años 119o. de la Independencia y 100o. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6029, que traspasa a la Corporación de Fomento Industriel de la República Dominicana, como aporte del Estado, varios Hoteles de su propiedad, así como los derechos y obligaciones del Estado derivadas de los contratos.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6029

CONSIDERANDO: que la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana ha solicitado que los Hoteles del Estado pasen a ser de su dependencia;

CONSIDERANDO: que es conveniente para el desarrollo de la industria del turismo que los Hoteles del Estado sean transferidos a la Corporación de Fomento Industrial de la República, ya que tal disposición está acorde con los fines y propósitos para los cuales fué creada esa institución autónoma, máxime cuando la Dirección General de Turismo ha pasado a depender de ella;

VISTA la Ley Orgánica de la Corporación de Fomento Industrial de la República, No. 5909, del 19 de mayo de 1962;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Quedan traspasados a la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana, como aporte del Estado al capital de esa institución autómoma, creada por la ley No. 5909, del 19 de mayo de 1962, los hoteles Jaragua, Paz y Comercial, en Santo Domingo; Hamaca, en Boca Chica; Matúm, en Santiago; Marién en Santiago Rodríguez; y San Rafael, en Elías Piña.

Artículo 2.– Igualmente se traspasan a la Corporación de Fomento Industrial de la República Dominicana los derechos y las obligaciones del Estado derviados de los contratos celebrados con la Intercontinental Hotels Corporation en fecha 22 de Julio de 1957, 5 de febrero de 1960, y 11 de diciembre de 1961, para la venta del Hotel "El Embajador"; y con la Compañía Dominicana de Fomento, C. por A., en fecha 17 de abril de 1962, para el arrendamiento del Hotel "Jaragua".

Artículo 3.- La Secretaría de Estado de Finanzas hará la entrega a la Corporación de Fomento Industrial mediante acta que contendrá los inventarios de los bienes muebles de cada hotel, y el avalúo de los edificios en que están ubicados los mismos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los once días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6030, que concede pensión del Estado al señor Manuel Calderón.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 6030

VISTO el artículo 8 de la Ley No. 5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959,

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se concede una pensión del Estado de doscientos cincuenta pesos oro (RD$250.00) mensuales, al señor Manuel Calderón.

Artículo 2.- Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta

y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly,
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sñachez,
Miembro.

Luis Amiama Tió.
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José A. Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY,
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce días del mes de Septiembre de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6031, que modifica el párrafo II del Art.2 y el Art.30 de la Ley No.392, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO: 6031

CONSIDERANDO, que la Ley sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego contiene disposiciones que permiten a los importadores de dichas armas venderlas al público, mediante las formalidades señaladas en la misma Ley.

CONSIDERANDO: que en vista de esa circunstancia, y para una mejor reglamentación, conviene prohibir a los particulares la introducción de armas de fuego en el país, sin excepción alguna.

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.- Se modifican el párrafo II del artículo 2 y el artículo 30 de la Ley No.392, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, de fecha 20 de septiembre de 1943, para que rijan de la siguiente manera:

"Párrafo II.- De estas armas se consideran armas de guerra las pistolas de calibre 38 y 45, los fusiles, ametralladoras, carabinas, rifles y las piezas de artillería, las que sólo pueden ser importadas y poseídas por el Gobierno de la Nación".

"Artículo 30.- Ninguna persona procedente del extranjero podrá introducir en el país armas de fuego para su uso personal o para traspasarlas a terceras personas,, sin excepción. Quedan excluídos de la presente disposición, los extranjeros que transitoriamente lleguen al país, con armas de fuego para fines de caza, siempre que se acojan a las disposiciones legales vigente".

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió,
Miembro.

Antonio Imbert Barrera,
Miembro.

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial . y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional para su conomcimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los trece días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Resolución No.6032, del Consejo de Estado que aprueba una donación de inmueble propiedad del Estado, a las Hermanas Carmelitas de la Caridad.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6032

VISTOS los artículos 38, inciso 20, y 116 (transitorio) de la Constitución de la República;

VISTO el Acto No. 7, de fecha 8 de junio de 1962, instrumentado por el Notario Público Luis E. Pou Henríquez, por medio del cual el Estado Dominicano dona a las Hermanas Carmelitas de la Caridad, el solar No. 2-C de la Manzana No. 500, del D.C. No. 1, del Distrito Nacional;

RESUELVE:

UNICO.- Aprobar el Acto No. 7, de fecha 8 de junio de 1962, instrumentado por el Notario Público Luis E. Pou Henríquez, por

medio del cual el Estado Dominicano dona a las Hermanas Carmelitas de la Caridad, el solar No. 2-C de la Manzana No. 500, del D. C. No. 1, del Distrito Nacional, que copiado a la letra dice así:

YO, LUIS E. POU HENRIQUEZ, NOTARIO PUBLICO DEL DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA, CERTIFICO Y DOY FE DE QUE POR ANTE MI PASO EL ACTO SIGUIENTE:- "Acto número siete.- En la ciudad de Santo Domingo, capital del Distrito Nacional y de la República Dominicana; hoy, día ocho del mes de junio del año mil novecientos sesenta y dos; ante mí, Luis E. Pou Henriquez, Notario Público de los de esta jurisdicción; con mí oficina abierta en la planta baja de la casa número treinta y dos de la callle "Duarte", esquina a "General Luperón"; ha comparecido el señor Administrador General de Bienes Nacionales, que lo es el doctor J. OSCAR JULIA, mayor de edad, dominicano, casado, abogado y funcionario público, de este domicilio y residencia, portador de la cédula personal de identidad número 19782, serie 31, renovada con el sello No. 4470909, a quien conozco, de lo cual doy fé; y expuso: Que concurre a este otorgamiento en nombre y

representación del ESTADO DOMINICANO, en virtud y ejercicio de un poder especial que le otorgó el Excelentísimo señor Presidente de la República y del Consejo de Estado, fechado el día siete del mes de mayo retropróximo, que lo inviste de la calidad necesaria para consentirlo.- Al efecto, declara el compareciente; que cumpliendo y ejecutando el mencionado mandato, que textualmente dice así: "en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 54, inciso 9, y 116 (transitorio) de la Constitución de la República y en virtud de las disposiciones de la Ley Número 1486 de fecha 20 de marzo de 1938, y del artículo 17 de la Ley Número 1832, de fecha 3 de noviembre de 1948, por el presente confiero poder especial al Administrador General de Bienes Nacionales, para que a nombre y en representación del Estado Dominicano, done a las Hermanas Carmelitas de la Caridad, el solar número 2-C de la manzana número 500 del D. C. No. 1, del Distrito Nacional, y sus mejoras.- Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los siete días del mes de mayo del año mil novecientos sesenta y dos. Dios, Patria y Liberta. Por el Estado Dominicano, Rafael F. Bonnellly, Presidente de la República y del Consejo de Estado",- por el presente instrumento público, hace formal donación a la Congregación de religiosas "Hermanas Carmelitas de la Caridaad", una institución religiosa, educativa y de bien público, dependiente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con asiento en este República; y, por tanto; con suficiente personalidad jurídica para obligarse a adquirir a cualquier título, de acuerdo con las leyes que rijen la materia y con el Concordtao intervenido entre el Estado Dominicano y la Santa Sede.- El mencionado inmueble es el siguiente:- EL SOLAR NUMERO 2-C, MANZANA NUMERO 500, DISTRITO CATASTRAL NUMERO 1 DEL DISTRITO NACIONAL, con área de un mil seiscientos cincuenta metros cuadrados; lindante por el Norte, con el solar número 2-B; por el Este, la calle "Wenceslao Alvarez"; por el Sur, la Avenida "Juan Sánchez Ramírez"; y por el Oeste, los solares números 3-reformado A y 3-reformado C-1; y se incluyen en esta donación todas las mejoras ubicadas en el mismo, consistentes en una casa de bloques de concreto, de una planta, techada de concreto, pisos de mosaicos, con sus anexidades y dependencias; cuyo inmueble está amparado por el certificado de título número 26713, expedido en favor del Estado Dominicano, el diecisiete de junio del año mil novecientos cincuenta, en virtud de compra a Elena Moralines.- Comparece a este acto, , para aceptar formalmente la presente donación, la Muy Reverenda Madre Ana

Gonzalez-Quevedo Monfort de las Mercedes, mayor de edad, soltera, religiosa, de nacionalidad española, provista de la tarjeta de turismo número 208284, expedida el día siete de junio en curso, domiciliada y residente en Río Piedras, Puerto Rico, ocasionalmente en esta ciudad, a quien conozco, de lo cual doy fé; la cual declara: Que actúa en nombre y legítima represetación de la Congregación o Instituto de Hermanas Carmelitas de la Caridad, en virtud de un poder que el otorgó la Reverendísima Madre Superiora de dicha Congregación, residente en Madrid, España, M. R. Madre Ramona Castany Anglada, de San José, mediante el acto número 971, de nueve de octubre del año mil novecientos sesenta y uno, instrumentado por el abogado y Notario del Ilustre Colegio Notarial de Barcelona, don José Vall Serrano, con asiento en Vich, Barcelona, que yo, Notario infrascrito, he tenido a la vista, de lo cual doy fé: el cual poder es amplio e incluye el derecho de adquirir bienes muebles e inmuebles, a cualquier título, en provecho de la preindicada Congregación; y la compareciente expresa la gratitud del Instituto o Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad, al Estado Dominicano, por este generoso acto.- El valor atribuído a este inmueble donado, por la Dirección General del Catastro Nacional, es el de la suma de NOVENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS Y SETENTA Y DOS CENTAVOS ORO (RD$91,092.72), de acuerdo con el oficio número 1019, de dicha oficina, en el cual se expresa que está registrado bajo el Número 16790– A – Declara el Señor Administrador General de Bienes Nacionales, que con este acto deja cumplido el mandato del Excelentísimo señor Presidente de la República y del Consejo de Estado; y por su parte, la Reverenda Madre Ana Gonzalez-Quevedo Monfort, da constancia de cumplir el requisito de la aceptación formal de esta donación, en nombre y representación de su representada; y ambos, por último, requieren del Registrador de Títulos del Distrito Nacional, que haga la transferencia del caso.- Se da la debida constancia de que conforme con las disposiciones del Concordato y de las leyes derivadas del mismo, este acto y su ejecución están exentos de todo impuesto.- Hecho y otorgado en presencia de los señores Vidal Arias y Luis Arvelo, mayores de edad, dominicanos, de este domicilio y residencia, a quienes conozco, de lo cual doy fé, con sus cédulas números 16930 y 4351, series 23 y 1, debidamente renovadas con los sellos números 126328 y , testigos instrumentales requeridos al efecto, libres de excepciones, aptos por derecho; los cuales, después de leído y aprobado, firman junto con los comparecientes, ante mí y conmigo, notario, que

certifico y doy fé. Se expedirán las copias necesarias.- Doy fé.- Se someterá este acto a las formalidades constitucionales, antes de ser sometido al Registrador de Títulos para fines de la transferencia ordenada.- Doy fé.- (Fdos.) J.O. Julia.- Anita Gz.-Quevedo, C.a Ch.- Vidal Arias.- Luis Arvelo.- L.E. Pou E., Notario".

ES COPIA FIEL Y CONFORME DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN MI PROTOCOLO DE ESTE AÑO, AL CUAL ME REMITO; LA QUE, A PEDIMENTO DE PARTE LEGITIMA INTERESADA, EXPIDO, FIRMO Y SELLO EN SANTO DOMINGO, CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, HOY, DIA OCHO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS.

Luis E. Pou Henríquez
Notario Público
Céd. 3327, serie 1, sello 4477038.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre de mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Resolución y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repúbica Dominicana, a los catorce días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos; años 119no. de la Independencia y 99no. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6033, que concede jubilación del Estado al Lic. Hipólito Herrera Billini.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6033

VISTO el artículo 8 de la Ley No.5185, sobre Pensiones Civiles del Estado, de fecha 31 de julio de 1959;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

Artículo 1.- Se concede el beneficio de la jubilación y se le asigna una pensión de quinientos sesenta pesos oro (RD$560.00) mensuales, al Lic. Hipólito Herrera Billini.

Artículo 2.- Dicha pensión será pagada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones Civiles de la Ley de Gastos Públicos.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 14 días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República
y del Consejo de Estado.

Nicolás Pichardo
Primer Vicepresidente.

Donald J. Reid Cabral
Segundo Vicepresidente.

Mons. Eliseo Pérez Sánchez
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro.

Antonio Imbert Barrera
Miembro.

José Fernández Caminero
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO la presente Ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 14 días del mes septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

Ley No.6034, que exonera del cargo del Impuesto correspondiente a la renovación de la Cédula Personal de Identidad, por operaciones de cambios, hasta la fecha de las elecciones próximas.

EL CONSEJO DE ESTADO
En Nombre de la República

NUMERO 6034

CONSIDERANDO: que la Cédula Personal de Identidad tiene actualmente un carácter de documento de identidad y no el de un gravamen impositivo;

CONSIDERANDO: que en vista de que dicho documento de identificación será utilizado en tal condición, con motivo del próximo período electoral, se hace necesario facilitar su posesión con los datos que en ella deben constar debidamente actualizados;

HA DADO LA SIGUIENTE LEY:

ARTICULO UNICO.- La renovación de la Cédula Personal de Identidad por cambio de nacionalidad, nombre, estado civil, profesión u oficio, o las enmiendas de la misma por cambio de domicilio o residencia, estarán exentas del pago de la tasa correspondiente, hasta la fecha de las elecciones, que se celebrarán próximamente.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presidente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembro.

Luis Amiama Tió
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero,
Miembro.

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 118 (transitorio) de la Constitución de la República;

PROMULGO, la presente ley, y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial y en un periódico de amplia circulación en el territorio nacional, para su conocimiento y cumplimiento.

DADA por el Consejo de Estado, en el Palacio Nacional, Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciseis días del mes de septiembre del mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY.

CONSTITUCION

DE LA

REPUBLICA DOMINICANA

EL CONSEJO DE ESTADO
En Funciones de Asamblea Nacional
En Nombre de la República

Después de haber introducido en los artículos comprendidos en la ley de su convocatoria las reformas que ha considerado procedentes, declara en vigor el sigiente texto de la

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TITULO I

SECCION I

De la Nación y de su Gobierno

Artículo 1.- El pueblo de Santo Domingo constituye una nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana.

Artículo 2.- Su Gobierno es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo.

Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes.

Artículo 3.- La soberanía de la Nación dominicana como Estado libre e independiente es inviolable. Por Consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución, podrá realizar o permitir o aceptar la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una ingerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención, consagrado en el presente artículo, constituye una norma de la política internacional dominicana.

Artículo 4.- La República Dominicana no favorecerá ninguna condenación internacional, que, a juicio de su Gobierno, resulte en perjuicio de un pueblo hermano de América.

SECCION II

Del Territorio

Artículo 5.- El territorio de la República Dominicana es y será inalienable. Está integrado por la parte oriental de la isal de Santo Domingo y sus islas adyacentes. Sus límites terrestres definitivos e inmutables están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Se divide políticamente en un distrito que es el Distrito Nacional, en el cual estará comprendida la Capital de la República, y en las provincias que determine la ley. Las provincias a su vez se dividen en municipios. Son

También partes del territorio nacional el mar territorial y la plataforma submarina correspondientes. La extensión del mar territorial y de la plataforma submarina será definida por la ley.

Párrafo: La ley fijará el número de las provincias y los límites de éstas y del Distrito Nacional, así como los de los municipios en que aquellas se dividen, y podrá crear también con otras denominaciones, nuevas divisiones políticas del territorio.

Artículo 6.- Santo Domingo es la capital de la República y el asiento del Gobienro nacional.

SECCION III

Régimen Económico y Social Fronterizo

Artículo 7.- Se declara de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza, así como la difusión de la cultura y la tradición religiosa del pueblo dominicano. El aprovechamiento agrícola e industrial de los ríos fronterizos se continuará regulando por los principios consagrados en el artículo 6 del Protocolo de Revisión de 1936 del Tratado de Fronteras de 1929, y en el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929.

TITULO II

De los Derechos Humanos

Artículo 8.- Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona humana y la creación y mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos. Para garantizar la realización de esos fines se fijan las siguientes normas:

1.- La inviolabilidad de la vida. No podrá establecerse la pena de muerte ni otra cualquiera que implique pérdida de la integridad física del individuo. La ley podrá, sin embargo, establecer la pena de muerte para los que, en caso de acción de legítima defensa contra Estado extranjero, se hagan culpables de delitos contra-

rios a la suerte de las armas nacionales, o de traición o espionaje en favor del enemigo.

2.- La seguridad individual. Por tanto:

a) No se establecerá el apremio corporal por deuda que no proviniere de infracción a las leyes penales;

b) Nadie podrá ser reducido a prisión ni cohibido en su libertad sin orden motivada y escrita de funionario judicial competente, salvo el caso de flagrante delito;

c) Toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta inmediatamente en libertad a requerimiento suyo o de caulquier persona. La ley de Habeas Corpes determinará la manera de proceder sumariamente en estos casos;

d) Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las cuarenta y ocho horas de su detención, o puesta en libertad;

e) Todo arresto se dejará sin efecto o se elevará a prisión dentro de las cuarenta y ocho horas de haber sido sometido el arrestado a la autoridad judicial competente, debiendo notificarse al interesado, dentro del mismo plazo, la providencia que al efecto se dictare;

f) Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa;

g) Nadie podrá ser obligado a declarar contra si mismo;

h) Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Las audiencias serán públicas; salvas las excepciones que establezca la ley, en los casos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o a las buenas costumbres.

3.- La libertad del trabajo. La ley podrá, según lo requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas de pago, los seguros sociales, la participación de los nacionales en todo trabajo, y en general todas las providencias de protección y asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores.

4.- La libertad de empresa. Sólo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales. La creación y organización de esos monopolios se harán por decreto-ley del Poder Ejecutivo.

5.- La libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al respeto del orden público y a las buenas costumbres.

6.- La libertad de enseñanza. La educación primaria será obligatoria tanto para el menor de edad escolar como para todos los que por razones diversas no hayan podido gozar con anterioridad de este derecho. Queda instituido como un deber del Estado proporcionar la educación fundamental a todos los habitantes del territorio nacional y tomar las providencias necesarias para eliminar o evitar la reaparición del analfabetismo. Tanto la educación primaria como la que se ofrezca en las escuelas vocacionales, artísticas, comerciales, de artes manuales y de economía doméstica, serán gratuitas. Estos deberes del Estado suponen de parte de las personas que habitan el territorio de la República la obligación correlativa de asistir a los establecimientos educativos de la nación, a fin de adquirir, por lo menos la instrucción elemental. El Estado procurará la más amplia difusión de la ciencia y la cultura facilitando de manera adecuada que todas las personas se beneficien con los resultados del progreso científico.

7.- El derecho de expresar el pensamiento sin sujeción a censura previa. La ley establecerá las sanciones aplicables a los que atenten contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública.

8.- La libertad de asociación y de reuniones para fines pacíficos.

9.- El derecho de propiedad. Esta, sin embargo, podrá ser tomada por causa debidamente justificada de utilidad pública o interés social, y previa justa indemnización. En casos de calamidad pública, la indemnización podrá no ser previa. Queda prohibida la confiscación general de bienes, salvo como pena a las personas culpables de traición o espionaje en favor del enemigo en caso de acción de legítima defensa contra Estado extranjero, o en el de abuso o usurpación del Poder o de cualquiera función pública para enriquecerse o enriquecer a otros, casos estos últimos en los cuales los bienes que el Estado adquiera mediante la confiscación que podrá ser ordenada por una ley, podrán

quedar afectados en primer término a reparar los daños morales y materiales causados por la usurpación o el abuso del Poder o de la función pública. Las leyes podrán establecer procedimientos especiales para la adquisición por el Estado de las áreas o porciones de terrenos rurales que fueren necesaras a la implantación y desarrollo , de sistemas o reformas agrarias adecuados, casos en los cuales la misma ley reglamentará la forma en que serán acordadas las indemnizaciones o compensaciones a que hubiere lugar.

10.- La inviolobilidad de la correspondencia y demás documentos privados, los cuales no podrán ser ocupados ni registrados sino mediante procedimientos legales en la substanciación de asuntos que se ventilen en la justicia. Es igualmente inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica.

11.- La inviolabilidad del domicilio. Ninguna visita domiciliaria puede verificarse sino en los casos previstos por la ley, y con las formalidades que ella prescribe.

12.- La libertad de tránsito, salvas las restricciones que resultaren de las penas impuestas judicialmente, o de las leyes de policía de inmigración y de sanidad.

13.- La propiedad exclusiva, por el tiempo y en la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones científicos, artísticas y literarias.

14.— Con el fin de robustecer su estabilidad y bienestar, su vida moral , religiosa y cultural, la familia recibirá del Estado la más amplia protección posible. La ley proveerá las medidas necesarias para proteger la maternidad y, en particular, a las madres, durante un período razonable antes y después del parto. Se declara como uno de los objetivos principales de la política social del Estado la reducción constante de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. Se declara, asimismo, de alto interés social la institución del bien de familia. El Estado estimulará el ahorro familiar y el establecimiento de cooperativas de crédito, de producción, de distribución, de consumo o de cualesquiera otras que fueren de utilidad.

15.– El Estado continuará el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegue a gozar de adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incacpacidad y la vejez.

16.– El Estado prestará su protección y asistencia a los ancianos, en la forma que determine la ley, de manera que se preserve su salud y se asegure su bienestar.

17.– El Estado prestará asistencia social a los pobres. Dicha atención consistirá en alimentos, vestimenta, y, hasta donde sea posible, vivienda adecuada.

18.– El Estado velará por el mejoramiento de la alimentación, la vivienda, los servicios sanitarios y las condiciones de higiene de los establecimientos de trabajo; procurará los medios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas y endémicas y de toda otra índole, así como también dará asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes por sus escasos recursos económicos así lo requieran.

19.– Los esposos podrán pactar libremente sus convenciones matrimoniales o elegir cualquier régimen adoptado por la ley, la que instituirá siempre el régimen de separación de bienes y dispondrá cual deberá regir en ausencia de estipulaciones especiales, entendiéndose que son inherentes a dicho régimen de separación de bienes las siguientes características: a) que cada esposo conserva la propiedad, administración, goce y libre disposición de sus bienes; b) Que será inoperante toda renuncia de la mujer a recobrar la administración de sus bienes cuando la hubiere confiado a su marido, y c) que si después de diez años de contraído el matrimonio bajo separación de bienes, fallece uno de los cónyuges, sus acreedores, herederos, legatarios o causahabientes no podrán ejercer, por ningún motivo, acción en restitución o devolución de bienes contra el cónyuge superviviente.

20.– Toda persona tiene derecho a excluir de su sucesión, previa declaratoria de indignidad, a sus descendientes que hubieren realizado actuaciones notoriamente perjudiciales que le afecten en su reputación y dignidad, o que hubieren realizado actos en pugna con la moral pública o privada que puedan producir un motivo de desdoro para el buen nombre de su familia.

Párrafo I.– La ley podrá agregar otras causas de indignidad y deberá consagrar en todos los casos, que la sentencia que dicte el Juzgado de Primera Instancia correspondiente no podrá ser apelada, y que el padre podrá, por acto auténtico posterior o por disposición testamentaria, dejar sin efecto la decisión pronunciada.

Párrafo II.– La Ley regulará el procedimiento a seguir para obtener la declaración de exclusión sucesoral por causa de indignidad.

Artículo 9.– A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda, ni impedírsele lo que la ley no prohibe.

Artículo 10.– La enumeración contenida en el artículo 8 no es limitativa y por tanto no excluye la existencia de otros derechos de igual naturaleza.

TITULO III

Régimen Concordatario

Artículo 11.– Las relaciones de la Iglesia y el Estado están reguladas por el Concordato entre la Santa Sede y la República Dominicana, en conformidad con la Ley de Dios y la tradición católica de la República Dominicana.

TITULO IV

Derechos Políticos

SECCION I

De la Nacionalidad

Artículo 12.– Son dominicanos:

1.– Las personas que al presente gozaren de esta calidad en virtud de Constituciones y leyes anteriores.

2.– Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en la República en representación diplomática o que estén de tránsito en ella.

3.— Todas las personas nacidas en el extranjero de padre o madre dominicanos, siempre que, de acuerdo con las leyes del país de su nacimiento, no hubieren adquirida una nacionalidad extraña o que, en caso de haberla adquirido, manifestaren por acto ante un oficial público remitido al Poder Ejecutivo, después de alcanzar la mayor edad política y a más tardar dentro del año de haber llegado a la mayor edad civil, fijadas en la legislación dominicana, su propósito de tener la nacionalidad dominicana.

4.— Los naturalizados. La Ley dispondrá las condiciones y formalidades requeridas para la naturalización.

Párrafo I.— A ningún dominicano se le reconocerá otra nacionalidad sino la dominicana mientras resida en el territorio de la República.

Párrafo II.— La dominicana casada con extranjero podrá adquirir la nacionalidad de su marido.

SEECION II

De la Ciudadanía

Artículo 13.— Son ciudadanos todos los dominicanos de uno u otro sexo mayores de dieciocho años, y los que sean o hubieren sido casados aunque no hayan cumplido esa edad.

Artículo 14.— Son derechos de los ciudadanos:

1) El de elegir

2) El de ser elegibles para las funciones electivas.

Artículo 15.— Los derechos de ciudadanía se pierden:

1) Por tomar las armas contra la República o prestar ayuda en cualquier atentado contra ella;

2) Por participar en actos o empresas destinados a derrocar el Gobierno legalmente constituido o por atentar contra la persona del Jefe del Estado o de los dignatrarios que, de acuerdo con la ley, gocen de las mismas prerrogativas;

3) Por condenación a pena criminal, hasta la rehabilitación;

4) Por interdicción judicial, mientras ésta dure;

5) Por admitir en territorio dominicano función o empleo de algún gobierno extranjero, sin previa autorización del Poder Ejecutivo;

6) Por haber adoptado otra nacionalidad.

Párrafo: En los dos últimos casos la ciudadanía podrá ser readquirida si así lo determina la ley y en la forma que ella indique.

TITULO V

De la Soberanía

Artículo 16.— La soberanía reside inmanentemente en el pueblo y se ejerce por intermedio de los poderes reconocidos por la presente Constitución.

TITULO VI

SECCION I

Del Poder Legislativo

Artículo 17.— Todos los poderes legislativos conferidos por la presente Constitución están confiados a un Congreso de la República compuesto de un Senado y una Cámara de Diputados.

Artículo 18.— La elección de Senadores, así como la de Diputados se hará por voto directo.

Artículo 19.— El cargo de Senador y el de Diputado son incompatibles con cualquier otro cargo o empleo público.

Artículo 20.— En caso de falta temporal de un Senador o de un Diputado, será llamado a ejercer sus funciones, mientras dure esa falta, su suplente. Si la falta es definitiva el suplente durará en sus funciones hasta la terminación del período.

Artículo 21.– Si faltaren definitivamente tanto un Senador o Diputado y su Suplente, se convocará a elecciones parciales en la jurisdicción correspondiente para cubrir la vacante, de acuerdo con la Ley Electoral. Dichas elecciones deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta días contados a partir de la fecha de la vacante.

SECCION II

Del Senado

Artículo 22.– El Senado se compondrá de miembros elegidos a razón de uno por cada provincia y uno por el Distrito Nacional, cuyo ejercicio durará un período de cuatro años.

Cada Senador tendrá un Suplente elegido en la misma forma que éste.

Artículo 23.– Para ser Senador o Suplente de Senador se requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber cumplido veinticinco años de edad.

Párrafo: Los naturalizados no podrán ser elegidos Senadores sino cinco años después de haber adquirido la nacionalidad y siempre que hubieren residido en el país durante los dos años que precedan a su elección.

Artículo 24.– Son atribuciones exclusivas del Senado:

1.– Elegir los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, del Tribunal Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus Suplentes y los Jueces de cualesquiera otros tribunales del orden judicial creados por la Ley.

2.– Elegir los miembros de la Cámara de Cuentas.

3.– Aprobar o no los nombramientos de carácter diplomático que expida el Poder Ejecutivo.

4.– Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra los funcionarios públicos elegidos para un período determinado, por mala conducta o falta en el ejercicio

de sus funciones. El senado, en materia de acusación, no podrá imponer otras penas que las de destitución del cargo o de la inhabilitación para todos los cargos retribuídos y de honor o confianza de la República. La persona convicata quedará sin embargo sujeta, si hubiere lugar, a ser acusada y juzgada con arreglo a la Ley.

El Senado no podrá pronunciar sentencia condenatoria sino cuando lo acordare por lo menos el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros.

Las disposiciones contenidas en este artículo no excluyen, respecto de los miembros del Poder Judicial, la autoridad disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia.

SECCION III

De la Cámara de Diputados

Artículo 25.– La Cámara de Diputados se compondrá de miembros elegidos cada cuatro años por el pueblo de las provincias y del Distrito Nacional, a razón de uno por cada cincuenta mil habitantes o fracción de más de veinte y cinco mil, sin que en ningún caso sean menos de dos.

Cada Diputado tendrá un Suplente, elegido en la misma forma que éste.

Artículo 26.– Para ser Diputado o Suplente de Diputado, se requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber cumplido veinticinco años de edad.

Párrafo: Los naturalizados no podrá ser elegidos diputados sino cinco años después de haber adquirido la nacionalidad y siempre que hubieren residido en el país durante los dos años que precedan a su elección.

Artículo 27.– Es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados ejercer el derecho de acusar ante el Senado a los funcionarios públicos en los casos determinados por el Acápite 4 del Artículo 24. La acusación no podrá formularse sino con el voto de las tres cuartas partes de la totalidad de los miembros de la Cámara.

SECCION IV

Disposiciones Comunes a Ambas Cámaras

Artículo 28.– Las Cámaras se reunirán en Asamblea Nacional en los casos indicados por la Constitución, debiendo para el efecto estar presente más de la mitad de los miembros de cada una de ellas.

Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos.

Artículo 29.– Cada Cámara reglamentará lo concerniente a su servicio interior y al despacho de los asuntos que le son peculiares; pudiendo en el régimen disciplinario establecer castigos para sus miembros en la proporción a las faltas que cometan.

Artículo 30.– El Senado y la Cámara de Diputados celebrarán sus sesiones separadamente, excepto cuando se reunan en Asamblea Nacional.

Párrafo: Podrán también reunirse conjuntamente para recibir el mensaje del Presidente de la República y las memorias de los Secretarios de Estado, a que se refiere el Artículo 55, Inciso 21, y para la celebración de actos conmemorativos o de otra naturaleza, que no se relacionen con el ejercicio de las atribuciones legislativas de cada Cámara ni de las que están señaladas por esta Constitución como exclusiva de cada una de ellas.

Artículo 31.– En cada Cámara se hará necesaria la presencia de más de la mitad de sus miembros, por lo menos, para la validez de las deliberaciones. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos, salvo los asuntos declarados previamente de urgencia, que decidirán las dos terceras partes de los votos.

Artículo 32.– Los miembros de una y otra Cámara gozarán de la más completa inmunidad penal por las opiniones que expresen en las sesiones.

Artículo 33.– Ningún Senador o Diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la Cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido

en el momento de la comisión de un crímen. En todos los casos el Senado o la Cámara de Diputados, o si éstas no están en sesión o no constituyen quorum, cualquier miembro podrá exigir que sea puesto en libertad por el tiempo que dure la legislatura o una parte de ella, cualquiera de sus miembros que hubiere sido detenido, arrestado, preso o privado en cualquiera otra forma de su libertad. A este efecto se hará un requerimiento por el Presidente del Senado o el de la Cámara o por el Senador o Diputado, según el caso, el Procurador General de la República; y si fuere necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado, por todo depositario de la fuerza pública, el apoyo de ésta.

Artículo 34.– Las Cámaras se reunirán ordinariamente el 27 de febrero y el 16 de agosto de cada año y cada legislatura durará noventa días, la cual podrá prorrogarse hasta por sesenta días más.

Párrafo: Se reunirán extraordinariamente por convocatoria del Poder Ejecutivo.

Artículo 35.– El 27 de Febrero de cada año cada Cámara nombrará de su seno un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios por el término de un año.

Párrafo I.– Cada Cámara designará sus empleados auxiliares, los cuales permanecerán en sus puestos mientras no sean expresamente removidos.

Párrafo II.– El Presidente del Senado y el de la Cámara de Diputados tendrán durante las sesiones poderes disciplinarios; y representarán a su respectiva Cámara en todos los actos legales.

Artículo 36.– Cuando las Cámaras se reunan en Asamblea Nacional o en reunión conjunta, asumirá la Presidencia el Presidente del Senado; la Vicepresidencia la ocupará la persona a quien corresponda en ese momento presidir la Cámara de Diputados, y la Secretaría las personas a quienes corresponda en ese momento las funciones de Secretarios de ambas Cámaras.

Párrafo I.– En caso de falta temporal o definitiva del Presidente del Senado, y en este último caso, mientras no sea

elegido el nuevo Presidente de dicha Cámara legislativa, presidirá la Asamblea Nacional o la reunión conjunta el Presidente de la Cámara de Diputados.

Párrafo II.– En caso de falta temporal o definitiva del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de Diputados, presidirá la Asmablea o la reunión conjunta el Vicepresidente del Senado y en su defecto el Vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Artículo 37.– Corresponde a la Asamblea Nacional examinar las actas de elección del Presidente y del Vicepresidente de la República, proclamarlos y en su caso, recibirles juramento, aceptarles o rechazarles las renuncias y ejercer las facultades que le confiere la presente Constitución.

TITULO VII

Del Congreso

Artículo 38.– Son atribuciones del Congreso:

1.– Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión legal.

2.– Aprobar o desaprobar, con vista del informe de la Cámara de Cuentas, el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo.

3.– Conocer de las observaciones que a las leyes haga el Poder Ejecutivo.

4.– Determinar lo conveniente a la conservación y fructificación de los bienes nacionales, y a la enajenación de los bienes del dominio privado de la Nación, excepto lo que disponen el inciso 9 del artículo 55 y el artículo 95.

5.– Determinar todo lo concerniente a la conservación de monumentos antiguos y a la adquisición de toda clase de objetos prehistóricos e históricos que sirvan para constituir la arqueología nacional.

6.– Crear o suprimir Provincias, Municipios u otras divisiones políticas del territorio, y determinar todo lo concerniente a sus límites y organización.

7.– En caso de alteración de la paz pública o en el de calamidad pública, declarar el estado de sitio y suspender, donde aquellas existan, y por el término de su duración, los derechos humanos consagrados en el artículo 8, en sus incisos 2, letras b), c), d) y e), 7, 8, 9 y 12.

8.– En caso de que la soberanía nacional se encuentre expuesta a un peligro grave e inminente, el Congreso podrá declarar que existe un estado de emergencia nacional, suspendiendo los derechos humanos, con excepción de la inviolabilidad de la vida, tal como lo consagra el inciso I) del artículo 8 de esta Constitución. Si no estuviere reunido el Congreso, el Presidente de la República podrá dictar la misma disposición, y convocará el Congreso para informarle del estado de emergencia y de las disposiciones que ha tomado.

9.– Disponer todo lo relativo a la inmigración.

10.– Aumentar o reducir el número de las Cortes de Apelación, y crear o suprimir Tribunales ordinarios o de excepción.

11.– Crear o suprimir Tribunales para conocer y decidir los asuntos contencioso administrativos y disponer todo lo relativo a su organización y competencia.

12.– Votar los gastos públicos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo.

13.– Levantar empréstitos sobre el crédito de la República por medio del Poder Ejecutivo.

14.– Aprobar o desaprobar los tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo.

15.– Legislar cuanto concierna a la deuda nacional.

16.– Declarar por ley la necesidad de la reforma constitucional.

17.– Conceder autorización al Presidente de la República para salir al extranjero cuando sea por más de treinta días.

18.– Interpelar a los Secretarios de Estado sobre asuntos de su competencia, previa autorización del Poder Ejecutivo.

19.– Examinar anualmente todos los actos del Poder Ejecutivo y aprobarlos, si son ajustados a la Constitución y a las Leyes.

20.– Aprobar o no los contratos que le someta el Presidente de la República en conformidad con el inciso 9 del artículo 55 y con el artículo 95.

21.– Decretar el traslado de las Cámaras Legislativas fuera de la Capital de la República, por causas de fuerza mayor justificada, o mediante convocatoria del Presidente de la República.

22.– Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro Poder del Estado o contraria a la Constitución.

TITULO VIII

De la Formación de las Leyes

Artículo 39.– Tienen derecho a iniciativa en la formación de las leyes:

a) Los Senadores y los Diputados.
b) El Presidente de la República.
c) La Suprema Corte de Justicia en asuntos judiciales.

Artículo 40.– Todo proyecto de Ley admitido en una de las Cámaras se someterá a dos discusiones distintas, con un intervalo de un día por lo menos entre una y otra discusión; en caso de que fuere declarado previamente de urgencia podrá ser discutido en dos sesiones consecutivas.

Artículo 41.– Aprobado un proyecto de ley en cualquiera de las Cámaras pasará a la otra para su oportuna discusión, observándose en ella las mismas formas legales. Si esta cámara

le hiciere modificaciones, devolverá dicho proyecto con observaciones a la Cámara en que se inició; y, en caso de ser aceptadas, enviará la Ley al Poder Ejecutivo; pero si aquellas fueren rechazadas, será devuelto, el proyecto a la otra Cámara con observaciones, y si ésta las aprueba, enviará a su vez la ley al Poder Ejecutivo, si fueren rechazadas las observaciones, se considerará desechado el proyecto.

Artículo 42.– Toda ley aprobada en ambas Cámaras será enviada al Poder Ejecutivo. Si este no la observare, la promulgará dentro de los ocho días de recibida y la hará publicar, dentro de los quince días de la promulgación; si la observare, la devolverá a la Cámara de donde procedió en el preciso término de ocho días a contar de la fecha en que le fue enviada, si el asunto no fue declarado de urgencia, pues en este caso hará sus observaciones en el término de tres días. La Cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en la orden del día de la próxima Sesión y discutirá de nuevo la ley. Si después de esta discusión las dos terceras parte del número total de los miembros de dicha Cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra Cámara, y si ésta por igual mayoría la aprobare, se considerará definitivamente ley.

Párrafo I.– El Presidente de la República quedará obligado a promulgar y publicar la ley en los plazos indicados.

Párrafo II.– Los proyectos de ley que quedaren pendientes en cualquiera de las dos Cámaras al cerrarse la legislatura, deberán seguir los trámites constitucionales, hasta ser convertidos en ley, en la legislatura siguiente. Cuando esto no ocurriere así, se tendrá el proyecto como no iniciado.

Párrafo III.– Todo proyecto de ley recibido en una Cámara, después de haber sido aprobado en la otra, será fijado en la orden del día.

Artículo 43.– Cuando fuere enviada una ley al Presidente de la República para su promulgación y el tiempo que faltare para el término de la legislatura fuere inferior al que se determina en el precedente artículo para observarla, seguirá abierta la legislatura para conocer de las observaciones hasta el agotamiento de los plazos y del procedimiento establecido por el artículo 42.

Artículo 44.– Las leyes después de publicadas, son obligatorias para todos los habitantes de la República, si ha transcurrido el tiempo legal para que se reputen conocidas.

Artículo 45.– Serán nulos de pleno derecho toda ley, decreto, reglamento y actos contrarios a la presente Constitución.

Artículo 46.–Los proyectos de ley rechazados en una Cámara no podrán presentarse en la otra, ni nuevamente en ninguna de las dos, sino en la legislatura siguiente.

Artículo 47.– Las leyes no tienen efecto retroactivo, sino en el caso de que sean favorables al que esté subjudice, o cumpliendo condena.

Artículo 48.– Las leyes se encabezarán así: "El Congreso Nacional. En Nombre de la República".

TITULO IX

SECCION I

Del Poder Ejecutivo

Artículo 49.– El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República quien será elegido cada cuatro años por voto directo, sin que pueda ser reelegido en el período siguiente.

Artículo 50.– Para ser Presidente de la República se requiere: s requiere:

1.– Ser dominicano de nacimiento u origen;

2.– Haber cumplido 30 años de edad;

3.– Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Artículo 51.– Habrá un Vicepresidente de la República que será elegido en la misma forma y por igual período que el Presidente y conjuntamente con éste. Para ser Vicepresidente de la República se requieren las mismas condiciones que para ser Presidente.

Artículo 52.– El Presidente y el Vicepresidente de la República electos en los comicios generales, prestarán

juramento de sus cargos el 27 de febrero siguiente a su elección, fecha en que deberá terminar el período de los salientes. Cuando el Presidente de la República electo no pudiere hacerlo por encontrarse fuera del país o por enfermedad o por cualquiera otra causa de fuerza mayor, ejercerá las funciones de Presidente interinamente el Vicepresidente de la República electo, y a falta de éste la persona que elija el Senado en su primera reunión, que deberá efectuarse el 27 de febrero, para ejercer las funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 53.– Si el Presidente de la República electo faltare definitivamente sin prestar juramento de su cargo, el Vicepresidente electo lo sustituirá.

Artículo 54.– El Presidente y el Vicepresidente de la República, antes de entrar en funciones, prestarán ante la Asamblea Nacional o ante cualquier funcionario u oficial público, el siguiente juramento:

Juro por Dios, por la Patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, sostener y defender su independencia, respetar sus derechos y llenar fielmente los deberes de mi cargo.

Artículo 55.– El Presidente de la República es el Jefe de la Administración Pública y el Jefe Supremo de todas las fuerzas armadas de la República.

Corresponde al Presidente de la República:

1.– Nombrar los Secretarios y Subsecretarios de Estado y los demás funcionarios y empleados públicos cuyo nombramiento no se atribuye a ningún otro poder u organismo autónomo, aceptarles sus renuncias y removerlos.

2.– Promulgar y hacer publicar las leyes y resoluciones y cuidar de su fiel ejecución. Expedir reglamentos, decretos e instrucciones cuando fuere necesario.

3.– Velar por la buena recaudación y fiel inversión de las rentas nacionales.

4.– Nombrar, con la aprobación del Senado, los miembros del Cuerpo Diplomático, aceptarles sus renuncias y removerlos.

5.– Recibir a los Jefes de Estado extranjeros y a sus representantes.

6.– Presidir todos los actos solemnes de la Nación, dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las naciones extranjeras, debiendo someterlos a la aprobación del Congreso, sin lo cual no tendrán validez ni obligarán a la República.

7.– En caso de alteración de la paz pública o de calamidad pública, y si no se hallare reunido el Congreso, decretar donde aquellas existan, el estado de sitio y suspender los derechos humanos que, según lo permite el artículo 38, inciso 7, de esta Constitución, se permite al Congreso suspender; podrá también, en caso de que la soberanía nacional se encuentre en peligro grave e inminente, declarar el estado de emergencia nacional, con los efectos y requisitos indicados en el inciso 8, del mismo artículo.

8.– Llenar interinamente las vacantes que ocurran entre los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera Instancia, entre los Jueces de Instrucción, los Jueces de Paz, los de cualesquiera otros Tribunales creados por la Ley, así como entre los miembros de la Cámara de Cuentas, cuando esté en receso el Congreso, con la obligación de informar al Senado de dichos nombramientos en la próxima legislatura para que éste provea los definitivos.

9.– Celebrar contratos sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de inmuebles cuyo valor sea mayor de diez mil pesos oro o al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general de acuerdo con el artículo 95; sin tal aprobación en los demás casos.

10.– Llenar las vacantes que ocurran en los cargos de Regidores de los Ayuntamientos, de Síndico del Distrito Nacional y Síndicos Municipales cuando se haya agotado el número de los Suplentes elegidos, en caso de que los tuvieren y los Ayuntamientos no estén en condiciones de llenar esas vacantes.

11.– Expedir o negar patentes de navegación.

12.— Reglamentar cuanto convenga al servicio de las Aduanas.

13.— Disponer, en todo tiempo, cuando concierna a las Fuerzas Armadas de la República, mandarlas, en los casos necesarios, con la asistencia de los organismos militares correspondientes, fijar el número de dichas fuerzas y disponer de las mismas para fines del servicio público.

14.— Tomar las medidas necesarias para proveer a la legítima defensa de la Nación en caso de ataque armado actual o inminente de parte de Nación extranjera, debiendo informar al Congreso sobre las disposiciones así adoptadas.

15.— En el caso del inciso anterior, hacer arrestar o expulsar a los extranjeros cuyas actividades, a su juicio, fueren o pudieren ser perjudiciales, al interés nacional.

16.— Aprobar o no el nombramiento y la revocación de los miembros de los Consejos de Guerra que de acuerdo con la ley haga el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.

17.— Disponer todo lo relativo a zonas marítimas, fluviales y militares.

18.— Determinar todo lo relativo a la habilitación de puertos y costas marítimas.

19.— Prohibir, cuando lo estime conveniente, la entrada de extranjeros en el territorio nacional y expusarlos, cuando lo juzgue conveniente al interés público.

20.— Cambiar el lugar de su residencia oficial cuando lo juzgue necesario.

21.— Depositar ante el Congreso Nacional, al iniciarse la Legislatura Ordinaria el 27 de Febrero de cada año, un mensaje acompañado de las memorias de los Secretarios de Estado, en el cual dará cuenta de su administración del año anterior.

22.— Someter al Congreso, durante la segunda legislatura ordinaria el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente al año siguiente.

23.— Conceder o no autorización a los ciudadanos dominicanos para que puedan ejercer cargos públicos extranjeros y para que puedan aceptar y usar condecoraciones y títulos otorgados por Gobiernos extranjeros.

24.— Anular por Decreto motivado los arbitrios establecidos por los Ayuntamientos.

25.— Autorizar o no a los Ayuntamientos a enajenar inmuebles, y aprobar o no los contratos que hagan cuando constituyan en garantía inmuebles o rentas municipales.

26.— Conceder indulto, total o parcial, puro y simple o condicional en los días 27 de Febrero, 16 de Agosto y 23 de Diciembre de cada año. En casos especiales, podrá ejercer esta facultad en otras fechas que las que en este inciso se señalan.

Artículo 56.— El Presidente de la República no podrá salir al extranjero por más de treinta días sin autorización del Congreso.

Artículo 57.— El Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán renunciar sino ante la Asamblea Nacional.

Artículo 58.— En caso de falta temporal del Presidente de la República, después de haber prestado juramento, ejercerá el Poder Ejecutivo, mientras dure esa falta el Vicepresidente de la República, y a falta de éste el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 59.— En caso de falta definitiva del Presidente de la República, después de haber prestado juramento, desempeñará la Presidencia de la República por el tiempo que falte para la terminación del período, el Vicepresidente de la República.

Artículo 60.— En caso de que el Vicepresidente de la República, después de asumir la Presidencia de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, faltare definitivamente, asumirá el Poder Ejecutivo interinamente el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, dentro de los 30 días que sigan a la fecha de haber asumido estas funciones, convocará a la Asamblea Nacional para que se reúna dentro de los 15 días siguientes y elija el sustituto definitivo en una sesión que no podrá clausurarse ni declararse en receso, hasta haber realizado la elección. En el caso de que tal

convocatoria no fuere hecha dentro de esos 30 días, la Asamblea Nacional, se reunirá de pleno derecho para llevar a cabo la elección en la forma arriba prevista.

SECCION II

De los Secretarios de Estado

Artículo 61.– Para el despacho de los asuntos de la Administración Pública habrá las Secretarías de Estado que sean creadas por la Ley. También podrán crearse por la Ley las Subsecretarías de Estado que se consideren necesarias y que actuarán bajo la subordinación y dependencia del Secretario de Estado correspondiente. Para ser Secretario y Subsecretario de Estado se requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber cumplido la edad de 25 años.

Párrafo.– Los naturalizados no podrán ser Secretarios ni Subsecretarios de Estado sino cinco años después de haber adquirido la nacionalidad.

Artículo 62.– La Ley determinará las atribuciones de los Secretarios de Estado.

TITULO X

SECCION I

Del Poder Judicial

Artículo 63.– El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del Orden Judicial creados por esta Constitución y las leyes.

Párrafo.– Los funcionarios judiciales no podrán ejercer otro empleo público, salvo lo que se dispone en el artículo 104.

SECCION II

De la Suprema Corte de Justicia

Artículo 64.– La Suprema Corte de Justicia se compondrá de siete Jueces, por lo menos; pero podrá reunirse, deliberar y

fallar válidamente con el quorum que determine la ley, la cual reglamentará su organización.

Párrafo I.– Al elegir los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Senado dispondrá cual de ellos deberá ocupar la Presidencia y designará un primero y un segundo sustituto para reemplazar al Presidente en caso de falta o impedimento.

Párrafo II.– En caso de cesación de un Juez investido con una de las cualidades arriba expresadas, el Senado elegirá un nuevo Juez con la misma calidad o atribuirá ésta a otro de los Jueces.

Artículo 65.– Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia se requiere:

1) Ser dominicano por nacimiento u origen y tener más de 30 años;

2) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos;

3) Ser licenciado o doctor en Derecho;

4) Haber ejercido durante ocho años la profesión de abogado; o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de Juez de una Corte de Apelación, Juez de Primera Instancia o Juez del Tribunal de Tierras, o representante del Ministerio Público ante dichos tribunales. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse.

Artículo 66.– El Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia estará representado por el Procurador General de la República, personalmente o por medio de los sustitutos que la ley pueda crearle, tendrá la misma categoría que el Presidente de dicha Corte y las atribuciones que le confieren las leyes.

Para ser Procurador General de la República se requiere ser dominicano y reunir las otras condiciones requeridas para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 67.– Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la Ley:

1.– Conocer en primera y última instancia de las causas seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República, a los Senadores, Diputados, Secretarios de Estado, Subsecretarios de Estado, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador General de la República, Jueces y Procuradores Generales de las Cortes de Apelación, Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, Jueces del Tribunal Superior de Tierras y a los miembros del Cuerpo Diplomático.

2.– Conocer de los recursos de casación de conformidad con la Ley.

3.– Conocer en último recurso de las causas cuyo conocimiento en primera instancia competa a las Cortes de Apelación.

4.– Ejercer la más alta autoridad disciplinaria sobre todos los miembros del Poder Judicial, pudiendo imponer hasta la suspensión o destitución, en la forma que determine la ley.

5.– Trasladar provisional o definitivamente de una jurisdicción a otra, cuando lo juzgue útil, los Jueces de Primera Instancia, los Jueces de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, las Jueces de Instrucción y los Jueces de Paz.

SECCION III

De las Cortes de Apelación

Artículo 68.– Habrá, por lo menos, tres Cortes de Apelación para toda la República; el número de jueces que deben componerlas, así como los distritos judiciales que a cada Corte corresponda, se determinará por la ley.

Artículo 69.– Para ser Juez de una Corte de Apelación se requiere:

1) Ser dominicano; 2) Hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; 3) Ser licenciado o doctor en derecho; 4) Haber ejercido durante cuatro años la profesión de abogado, o haber desempeñado por igual tiempo, las funciones de Juez de Primera Instancia. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones de representante del

Ministerio Público ante los Juzgados de Primera Instancia. Los períodos en que se hubiesen ejercido la abogacía y las funciones judiciales podrán acumularse.

Artículo 70.– El Ministerio Público estará representado en cada Corte de Apelación por un Procurador General, o por los sustitutos que la ley pueda crearle, todos los cuales deberán reunir las mismas condiciones que los jueces de esas Cortes.

Artículo 71.– Son atribuciones de las Cortes de Apelación:

1.– Conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por los Juzgados de Primera Instancia.

2.– Conocer en primera Instancia de las causas seguidas a los Jueces de Primera Instancia, Jueces de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras, Jueces de Instrucción, Procuradores Fiscales y Gobernadores Provinciales.

3.– Conocer de los demás asuntos que determinen las leyes.

SECCION IV

Del Tribunal de Tierras

Artículo 72.– Las atribuciones del Tribunal de Tierras estarán determinadas por la Ley.

Párrafo.– Para ser Presidente o Juez del Tribunal Superior de Tierras se requieren las mismas condiciones que para ser Juez de una Corte de Apelación y para desempeñar el cargo de Juez de Jurisdicción Original,las mismas condiciones que para ser Juez de Primera Instancia.

SECCION V

De los Juzgados de Primera Instancia

Artículo 73.– En cada distrito Judicial habrá un juzgado de Primera Instancia, con las atribuciones que le confiere la ley.

Párrafo.– La Ley determinará el número de los distritos judiciales, el número de los jueces de que deban componerse

los juzgados de Primera Instancia, así como el número de Cámaras en que éstos puedan dividirse.

Artículo 74.– Para ser Juez de Primera Instancia se requiere ser dominicano, hallarse en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y ser licenciado o doctor en Derecho.

Artículo 75.– Para ser Procurador Fiscal o Juez de Instrucción se requieren las mismas condiciones exigidas para ser juez de Primera Instancia.

SECCION VI
De los Juzgados de Paz

Artículo 76.– En el Distrito Nacional y en cada Municipio habrá los Juzgados de Paz que fueren necesarios de acuerdo con la Ley.

Artículo 77.– Para ser Juez de Paz o Suplente se requiere ser dominicano y estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. Tendrán las atribuciones que determine la ley y estarán sometidos a los requisitos de capacidad que ella prescriba.

TITULO XI

De la Cámara de Cuentas

Artículo 78.– Habrá una Cámara de Cuenta permanente, compuesta de cinco miembros por lo menos,elegidos por el Senado de las ternas que le presente el Poder Ejecutivo.

Artículo 79.– Sus atribuciones serán, además de las que comfiere la Ley:

1.– Examinar las cuentas generales y particulares de la República.

2.– Presentar al Congreso en la primera legislatura ordinaria el informe respecto de las cuentas del año anterior.

Artículo 80.– Los miembros de la Cámara de Cuentas durarán cuatro años en sus funciones.

Artículo 81.– Para ser miembro de la Cámara de Cuenta se requiere ser dominicano en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y haber cumplido la edad de veinticinco años.

TITULO XII

Del Distrito Nacional y de los Municipios

Artículo 82.– El Gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios estarán cada uno a cargo de un Ayuntamiento, cuyos Regidores, así como sus suplentes, en el número que será determinado por la ley proporcionalmente al de habitantes, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco, serán elegidos, al igual que el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales, y sus suplentes, por el pueblo de dicho Distrito y de los Municipios, respectivamente, cada dos años, en la forma que determinen la Constitución y las leyes, mediante candidaturas que podrán ser propuestas por partidos políticos o por agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales.

Artículo 83.– Los Ayuntamientos así como los Síndicos, son independientes en el ejercicio de sus funciones, salvas las restricciones y limitaciones que establezcan la Constitución y las leyes, las cuales determinarán sus atribuciones, facultades y deberes. Los Ayuntamientos podrán establecer arbitrios con la aprobación requerida por la ley.

Artículo 84.– La ley determinará las condiciones para ejercer los cargos indicados en los artículos 82 y 83. Los extranjeros mayores de edad podrán desempeñar dichos cargos, en las condiciones que prescriba la ley, siempre que tengan residencia de más de 5 años en la Jurisdicción correspondiente.

TITULO XIII

Del Régimen de las Provincias

Artículo 85.– Habrá en cada Provincia un Gobernador Civil, designado por el Poder Ejecutivo.

Párrafo.– Para ser Gobernador se requiere ser dominicano, mayor de veinticinco años de edad y estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Artículo 86.- La organización y régimen de las Provincias, así como las atribuciones y deberes de los Gobernadores Civiles, serán determinados por la Ley.

TITULO XIV

De las Asambleas Electorales

Artículo 87.- Es obligatorio para todos los ciudadanos ejercer el sufragio con las siguientes excepciones:

1.- Los que hayan perdido los drechos de ciudadano por virtud del Artículo 15 de esta Constitución.

2.- Los pertenecientes a las Fuerzas Armadas y cuerpos de policía .

Artículo 88.- Las Asambleas Electorales se reunirán de pleno derecho tres meses antes de la expiración del período constitucional y procederán a ejercer las funciones que la Constitución y la ley determinen. En los casos de convocatoria extraordinaria se reunirán noventa días a más tardar después de la fecha de la ley de convocatoria.

Artículo 89.- Corresponde a las Asambleas Electorales elegir al Presidente y al Vicepresidente de la República, los Senadores y los Diputados, y sus Suplentes, los Regidores de los Ayuntamientos y sus Suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus Suplentes, así como cualquier otro funcionario que se determine por la ley.

Artículo 90.- Las elecciones se harán, según las normas que señale la ley, por voto directo y secreto y con representación de las minorías cuando haya de elegirse más de un candidato.

Artículo 91.- Las elecciones serán dirigidas por una Junta Central Electoral y por Juntas dependientes de ésta, las cuales tienen facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley.

Párrafo.- La Junta Central Electoral asumirá la dirección y el mando de la Fuerza Pública en los lugares en donde dichas votaciones se verifiquen.

TITULO XV

De la Fuerza Armada

Artículo 93.- La Fuerza Armada se rige por su Ley Orgnánica, y sus miembros no podrán ser separados de sus cargos ni privados de suss rangos, sin causa justificada. Gozarán, asimismo, del derecho de retiro con su correspondiente pensión y de las demás indemnizaciones que le acuerde la referida Ley.

En dicha Ley se instituirá una Junta de Administración Militar presidida por el Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.

TITIULO XVI

Disposiciones Generales

Artículo 94.-Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Toda decisión acordada por la requisición de la fuerza armada, es nula.

Artículo 95.- No se reconocerá ninguna exención, ni se otorgará ninguna exoneración, reducción o limitación de impuestos, contribuciones o derechos fiscales o municipales, en beneficio de particulares, sino por virtud de la ley. Sin embargo, los particulares pueden adquirir, mediante concesiones que autorice la ley, o mediante contratos que apruebe el Congreso Nacional, el derecho irrevocable de beneficiarse, por todo el tiempo que estipule la concesión del contrato, cumpliendo con las obligaciones o derechos fiscales o municipales incidentes en determinadas obras o empresas de utilidad pública, o en determinadas obras o empresas hacia las que convenga atraer, para el fomento de la economía nacional, o para cualquiera otro objeto de interés social, la inversión de nuevos capitales.

Artículo 96.- Ningúna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente.

Artículo 97.- Anualmente, en el mes de abril, se publicará la cuenta general de los ingresos y egresos de la República hechos en el año anterior.

Artículo 98.- La unidad monetaria nacional es el peso oro.

Párrafo I.- Sólo tendrán circulación legal y fuerza liberatoria los billetes emitidos por una entidad emisora única y autónoma, cuyo capital sea de la propiedad del Estado, siempre que estén totalmente respaldados por reservas en oro y por otros valores reales y efectivos, en las proporciones y condiciones que señale la ley y bajo la garantía ilimitada del Estado. Sin embargo, la ley podrá mantener en vigencia las disposiciones que ahora regulan la circulación de billetes extranjeros así como restringir, suspender o restablecer los términos de las mismas.

Párrafo II.- Las monedas metálicas serán emitidas a nombre del Estado por mediación de la misma entidad emisora y se pondrán en circulación sólo en reemplazo de un valor equivalente de billetes. La fuerza liberatoria de las monedas metálicas en curso y de las que se emitieren en lo adelante será determinada por la ley.

Párrafo III.- La regulación del sistema monetario y bancario de la Nación corresponderá a la entidad emisora, cuyo órgano superior será una Junta Monetaria, compuesta de miembros que serán designados y sólo podrán ser removidos de acuerdo con la ley y responderán del fiel cumplimiento de sus funciones de conformidad con las normas establecidas en la misma.

Párrafo IV.- Queda prohibida la emisión o la circulación de papel moneda, así como de cualquier otro signo monetario no autorizado por esta Constitución, ya sea por el Estado o por cualquier otra persona o entidad pública o privada.

Artículo 99.- Toda modificación en el régimen legal de la moneda o de la banca requerirá el apoyo de los dos tercios de la totalidad de los miembros de una y otra Cámara, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de ésta.

Artículo 100.- Los yacimientos mineros pertenecen al Estado y sólo podrán ser explotados por particulares en virtud

de las concesiones o los contratos que se otorguen en las condiciones que determine la ley. El Estado podrá traspasar o ceder la propiedad de determinados yacimientos.

Artículo 101.– Los días 27 de Febrero, aniversario de la Independenica y 16 de Agosto, aniversario de la Restauración, son de fiesta nacional.

Artículo 102.– La bandera nacional, se compone de los colores azul ultramar y rojo bermellón, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel y que lleve en el centro, el escudo de armas de la República. La bandera mercante es la misma que la nacional sin escudo.

Artículo 103.– El escudo de armas de la República tendrá los mismos colores de la bandera nacional dispuestos en igual forma; llevará en el centro el libro de los Evangelios, abierto, abierto, con una cruz encima, surgiendo ambos de entre un trofeo integrado por dos lanzas y cuatro banderas nacionales sin escudo, dispuestas a ambos lados; llevará un ramo de laurel del lado izquierdo y uno de palma del derecho: estará coronado por una cinta azul ultramar en la cual se leerá el lema: Dios, Patria y Libertad, y en la base habrá otra cinta de color rojo bermellón con las palabras: República Dominicana. La forma del escudo nacional será la de un cuadrilongo, con los ángulos superiores salientes y los inferiores redondeados, el centro de cuya base terminará en punta, y estará dispuesto en forma tal que si se traza una línea horizontal que una las dos verticales del cuadrilongo desde donde comienza los ángulos inferiores, resulte un cuadrado perfecto.

Párrafo.– La ley reglamentará el uso y dimensiones de la bandera y del escudo nacionales.

Artículo 104.– La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente su cometido. Este juramento se prestará ante cualquier funcionario u oficial público.

Artículo 105.– Ninguna función o cargo público serán incompatibles con los cargos honoríficos y los docentes.

Artículo 106.– El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea cual fuere la fecha de su elección, terminará uniformemente el 27 de febrero de cada cuatro años, fecha en que se inicia el período constitucional. Sin embargo, los Regidores de los Ayuntamientos y sus Suplentes, el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus Suplentes, serán elegidos por períodos de dos años.

Párrafo.– Cuando un funcionario electivo cualquiera cese en el ejercicio del cargo por muerte, renuncia, destitución, inhabilitación u otra causa, el que lo sustituya, permanecerá en el ejercicio hasta completar el período.

Artículo 107.– Es libre la organización de partidos y asociaciones políticas de acuerdo con la ley siempre que sus tendencias se conformen a los principios establecidos en el Artículo 2 de esta Constitución.

Artículo 108.– Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 24, inciso 4, de esta Constitución, el Presidente de la República electo o en funciones no podrá ser privado de su libertad antes o durante el periodo de su ejercicio.

Artículo 109.– La Ley de Gastos Públicos se dividirá en Capítulos que correspondan a los diferentes ramos de la Administración y no podrán trasladarse sumas de un capítulo a otro, ni de una partida presupuestal a otra, sino en virtud de una ley. Esta ley, cuando no sea iniciada por el Poder Ejecutivo, deberá tener el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara.

Párrafo I.– No tendrá efecto ni validez ninguna ley que ordene o autorice un pago o engendre una obligación pecuniaria a cargo del Estado, sino cuando esa misma ley cree fondos especiales para su ejecución o disponga que el pago se haga de las entradas calculadas del año y de éstas quede en el momento de la publicación de la ley, una proporción disponible suficiente para hacerlo.

Párrafo II.– El Congreso no podrá votar válidamente ninguna erogación, a menos que esté incluída en el proyecto de la ley de Gastos Públicos sometido por el Poder Ejecutivo, en virtud del Artículo 55 de esta Constitución, o que sea solicitada por el Poder Ejecutivo después de haber enviado dicho proyecto, sino

en el caso de que la ley que ordene esa erogación haya sido apoyada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara; y todo sin derogación de la regla general establecida en el párrafo primero del presente Artículo.

Párrafo III.— El Congreso no podrá modificar las partidas que figuren en los proyectos de ley que eroguen fondos o en la Ley de Gastos Públicos sometidos por el Poder Ejecutivo, sino con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara; y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el párrafo primero de este Artículo.

Párrafo IV.— Cuando por cualquier circunstancia el Congreso cierre la legislatura sin haber votado el Presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Públicos, continuará rigiendo la Ley de Gastos Públicos del año anterior.

Párrafo V.— Cuando el Congreso esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá disponer por medio de decreto-Ley los traslados o transferencias de sumas dentro de la ley de Gastos Públicos que exijan las necesidades urgentes del servicio administrativo, así como las creaciones o supresiones de cargos administrativos o servicios públicos que afecten aquella ley, con la obligación de someter al Congreso en la próxima legislatura, para su aprobación, las referidas disposiciones. Podrá, asimismo, en el caso previsto por este párrafo, del mismo modo, erogar los fondos necesarios para atender gastos de la Administración Pública, dando cuenta al Congreso cuando éste se reuna.

Párrafo VI.— El Estado garantiza, sin límite alguno, todos los compromisos pecuniarios que legalmente contraigan tanto la Administración Pública como sus organismos autónomos. En consecuencia, las acciones, cédulas, bonos y otras obligaciones que emitan o contraigan los Bancos propidad del Estado gozarán en todo momento, de la garantía ilimitada de éste y no podrán ser cancelados sin el previo pago del valor íntegro de los mismos.

Artículo 110.— La Justicia se administrará gratuitamente en todo el territorio de la República.

Artículo 111.— El desarrollo y embellecimiento de las ciudades del país se declaran obra de alto interés nacional. En concecuencia, el Estado destinará sumas en efectivo y dispondrá las obras que sean necesarias y útiles a la comunidad.

TITULO XVII
De las Reformas Constitucionales

Artículo 112.– Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.

Artículo 113.– La necesidad de la reforma se declarará por una ley, que sólo podrá ser votada por la mayoría de las dos terceras partes de los miembros de una y otra Cámara. Esta ley que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional, determinará el objeto de la reforma e indicará los Artículos de la Constitución sobre los cuales versará.

Artículo 114.– Para resolver acerca de las reformas propuestas, la Asamblea Nacional se reunirá dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley que declare la necesidad de reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las Cámaras. Por excepción a lo dispuesto en el Artículo 28, las decisiones se tomarán, en este caso, por la mayoría de las dos terceras partes de los votos. Una vez votadas y proclamadas las reformas por la Asamblea Nacional, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados.

Artículo 115.– Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de Gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo.

Artículo 116.– La reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma, y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones populares.

Disposiciones Transitorias

Artículo 117.– Una vez proclamadas las presentes reformas constitucionales, las atribuciones que esta Constitución confiera al Poder Legislativo, y por tanto, al Senado, a la Cámara de Diputados, a ambas Cámaras y a la Asamblea Nacional, así como las que confiera al Poder Ejecutivo, serán ejercidas por un Consejo de Estado que durará en sus funciones hasta el día 27 de febrero de 1963.

Artículo 118.– El Consejo de Estado estará integrado por el Presidente de la República y seis miembros más, entre los cuales se designarán un primero y un segundo Vicepresidentes del Consejo.

Tanto el primero y segundo Vicepresidentes como los demás miembros del Consejo serán designados por el Presidente de la República. El Presidente de la República presidirá el Consejo de Estado.

En caso de renuncia, muerte o incapacidad del Presidente de la República lo sustituirá, de pleno derecho, el Primer Vicepresidente del Consejo de Estado, el Segundo Vicepresidente pasará a ser Primer Vicepresidente del Consejo, y dicho Consejo designará un nuevo Segundo Vicepresidente.

Las otras sustituciones del Presidente de la República se harán en la misma forma que la de los otros miembros del Consejo de Estado.

Artículo.– Son privativas del Presidente de la República las siguientes atribuciones:

a) Promulgará y hará publicar las Leyes, Resoluciones, Reglamentos, Decretos e Instrucciones que dicte el Consejo de Estado, sin facultad para vetarlos;

b) Como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, tendrá las atribuciones que le confieren los incisos 13, 14, 16, y 17 del Artículo 55 de la Constitución. Designará además al Secretario y al Subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas.

Artículo 120.– El Consejo de Estado se constituirá válidamente con la presencia de Cinco Miembros por lo menos, y, sus resoluciones se tomarán por una mayoría de Cuatro Votos.

En caso de renuncia, muerte o incapacidad, los miembros del Consejo de Estado serán sustituidos por acuerdo que cuente con la misma mayoría.

Sin embargo, si el número de vacantes no permite la constitución válida. con la presencia de miembros aquí requerida, el Presidente de la República procederá a las nuevas designaciones.

TITULO XVII
De las Reformas Constitucionales

Artículo 112.– Esta Constitución podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra Cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.

Artículo 113.– La necesidad de la reforma se declarará por una ley, que sólo podrá ser votada por la mayoría de las dos terceras partes de los miembros de una y otra Cámara. Esta ley que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional, determinará el objeto de la reforma e indicará los Artículos de la Constitución sobre los cuales versará.

Artículo 114.– Para resolver acerca de las reformas propuestas, la Asamblea Nacional se reunirá dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley que declare la necesidad de reforma, con la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las Cámaras. Por excepción a lo dispuesto en el Artículo 28, las decisiones se tomarán, en este caso, por la mayoría de las dos terceras partes de los votos. Una vez votadas y proclamadas las reformas por la Asamblea Nacional, la Constitución será publicada íntegramente con los textos reformados.

Artículo 115.– Ninguna reforma podrá versar sobre la forma de Gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo.

Artículo 116.– La reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma, y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones populares.

Disposiciones Transitorias

Artículo 117.– Una vez proclamadas las presentes reformas constitucionales, las atribuciones que esta Constitución confiera al Poder Legislativo, y por tanto, al Senado, a la Cámara de Diputados, a ambas Cámaras y a la Asamblea Nacional, así como las que confiera al Poder Ejecutivo, serán ejercidas por un Consejo de Estado que durará en sus funciones hasta el día 27 de febrero de 1963.

Artículo 118.— El Consejo de Estado estará integrado por el Presidente de la República y seis miembros más, entre los cuales se designarán un primero y un segundo Vicepresidentes del Consejo.

Tanto el primero y segundo Vicepresidentes como los demás miembros del Consejo serán designados por el Presidente de la República. El Presidente de la República presidirá el Consejo de Estado.

En caso de renuncia, muerte o incapacdad del Presidente de la República lo sustituirá, de pleno derecho, el Primer Vicepresidente del Consejo de Estado, el Segundo Vicepresidente pasará a ser Primer Vicepresidente del Consejo, y dicho Consejo designará un nuevo Segundo Vicepresidente.

Las otras sustituciones del Presidente de la República se harán en la misma forma que la de los otros miembros del Consejo de Estado.

Artículo.— Son privativas del Presidente de la República las siguientes atribuciones:

a) Promulgará y hará publicar las Leyes, Resoluciones, Reglamentos, Decretos e Instrucciones que dicte el Consejo de Estado, sin facultad para vetarlos;

b) Como jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de la República, tendrá las atribuciones que le confieren los incisos 13, 14, 16, y 17 del Artículo 55 de la Constitución. Designará además al Secretario y al Subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas.

Artículo 120.— El Consejo de Estado se constituirá válidamente con la presencia de Cinco Miembros por lo menos, y, sus resoluciones se tomarán por una mayoría de Cuatro Votos.

En caso de renuncia, muerte o incapacidad, los miembros del Consejo de Estado serán sustituidos por acuerdo que cuente con la misma mayoría.

Sin embargo, si el número de vacantes no permite la constitución válida, con la presencia de miembros aquí requerida, el Presidente de la República procederá a las nuevas designaciones.

Artículo 121.– Nungún miembro del Consejo de Estado podrá ausentarse del país sin la autorización de dicho Consejo.

Artículo 122.– El Consejo de Estado tiene facultad para sustituir los actuales miembros de la Judicatura, a excepción de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las Cortes de Apelación y así mismo podrá sustituir los actuales gobernadores, síndicos y regidores de los Ayuntamientos y sus Suplentes, así como a los miembros de la Cámara de Cuentas.

Artículo 123.– El Consejo de Estado podrá modificar el número de las actuales provincias así como la extensión de éstas y la del Distrito Nacional.

Artículo 124.– El Consejo de Estado, después de haber hecho las reformas pertinentes en materia electoral, convocará a elección y a elecciones generales de los cargos electivos que establece la presente Constitución. Estas elecciones tendrán lugar a más tardar el 20 de diciembre de 1962.

Los funcionarios electos tomarán posesión de sus cargos el 27 de febrero de 1963, fecha en la cual cesará en sus funciones el Consejo de Estado.

Los Candidatos a Diputados al Congreso Nacional que resulten electos lo serán a la vez como miembros de la Asamblea Revisora de la Constitución. En caso de que la Constitución no haya sido proclamada antes del 27 de febrero de 1963, la Cámara de Diputados será constituida con los Suplentes de los referidos Diputados que hayan sido elegidos conjuntamente con los titulares. Los Suplentes de Diputados estarán en funciones hasta tanto los titulares terminen sus misión en la Asamblea Revisora, ocurrido lo cual los titulares ocuparán sus curules respectivas.

Artículo 125.– La Asamblea Revisora de la Constitución se reunirá en la ciudad de Santo Domingo, en la Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a las diez de la mañana del tercer día siguiente a la fecha en que la Junta Central Electoral formule la relación general de los Diputados al Congreso. La Asamblea Revisora, no podrá reunirse válidamente sino con una mayoría de más de la mitad de sus miembros.

Los Síndicos y Regidores en funciones actualmente cesarán en sus cargos el 27 de febrero de 1963.

Artículo 126.– La incompatibilidad a que se refiere el artículo 19, de la presente Constitución, no será aplicable a los Diputados, en cuanto a las funciones de miembros a la Asamblea Revisora.

DADA y proclamada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día dieciseis del mes de septiembre del año mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

Rafael F. Bonnelly
Presdente de la República
y del Consejo de Estado

Nicolás Pichardo,
Primer Vicepresidente

Donald J. Reid Cabral,
Segundo Vicepresidente

Mons. Eliseo Pérez Sánchez,
Miembros

Luis Amiama Tió,
Miembro

Antonio Imbert Barrera,
Miembro

José Fernández Caminero
Miembro

RAFAEL F. BONNELLY
Presidente de la República Dominicana

PROCLAMACION de la reforma de la Constitución de la República Dominicana, votada por el Consejo de Estado, en funciones de Asamblea Nacional.

El Consejo de Estado en funciones de Asamblea Nacional, actuando de conformidad con el mandato que le fué conferido por la Ley No. 6027, de fecha 10 de septiembre de 1962, promulgada en esa misma fecha, y de los artículos 113 y 116 (transitorio) de la Constitución, formalmente proclama la vigencia de la Constitución de la República según consta en el instrumento que se acaba de leer, y declara solemnemente que la Constitución así revisada es la ley suprema de la República Dominicana.

DADA en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día dieciseis del mes de septiembre del año mil novecientos sesenta y dos, años 119no. de la Independencia y 100mo. de la Restauración.

RAFAEL F. BONNELLY